



Estado de la Región



SINOPSIS DEL INFORME

Y RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

OBRAS COMPLETAS
VOLUMEN III

Séptimo Estado de la Región 2024

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
www.conare.ac.cr

PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN
APDO. 1174-1200 PAVAS, COSTA RICA
www.estadonacion.or.cr

303.44
C755s

Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica). Programa Estado de la Nación
Séptimo informe estado de la región: sinopsis del informe: retos y oportunidades de la
adaptación al cambio climático / Programa Estado de la Nación. -- San José, C.R. :
CONARE - PEN, 2025.

1 recurso en línea (3 volúmenes): archivos de texto PDF, 15 MB volumen III. --
(Informe Estado de la Región ; 7 – 2024)

Contenido: volumen I (Perfil educativo y competencias para impulsar el desarrollo
en Centroamérica), volumen II (Implicaciones de vivir en democracia: regímenes y cultura
política en Centroamérica y República Dominicana), volumen III (Sinopsis del informe y
retos y oportunidades de la adaptación al cambio climático)

ISBN 978-9930-636-83-1

1. DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 2. MEDIO AMBIENTE. 3. CAMBIOS
CLIMÁTICOS. 4. CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 5. HUELLA DE CARBONO. 6. HUELLA
ECOLÓGICA. 7. POBLACIÓN. 8. DENSIDAD DE POBLACIÓN. 9. DESARROLLO ECONÓMICO.
10. MERCADO LABORAL. 11. POBREZA. 12. EDUCACIÓN. 13. DEMOCRACIA. 14. GESTIÓN
ELECTORAL. 15. INTEGRACIÓN REGIONAL. 16. POLÍTICAS PÚBLICAS. 17. AMÉRICA
CENTRAL. 18. REPÚBLICA DOMINICANA. I. Título.

Primera edición: Abril, 2025.

Diseño y diagramación: Erick Valdelomar/ Insignia | ng.

Ilustración de cubierta: Erick Valdelomar.

Litografía e imprenta: Maquilado y Servicios Gráficos A.C.S.A.

Equipo responsable

Consejo Consultivo

Jorge Arosemena, Néstor Avendaño, Matías Bosh, Harry Brown, Angel Cal, Leonor Calderón, Rolando Cocom, Carlos Fernando Chamorro, José Alvaro Cáliz, Luis Fernando Carrera, Arturo Condo, Félix Cristiá, Héctor Dada Hirezi, Edipcia Dubón, Mario García, Rafael Jerez, Carmen Aida Lazo, Alejandra Liriano, Otilia Lux de Cotí, Angélica Maytin, Harley Mitchel, Alvaro Montenegro, Sonia Picado, Hugo Noé Pino, Adriana Prado, Ana Quirós, Reina Rivera Joya, Alex Segovia, Ricardo Sol, Alida Spadafora, Víctor Umaña, Guadalupe Valdéz, Lucía Vijil, Elaine White, Ana Evelyn Yacir de Lovo.

Director del Programa

Jorge Vargas Culléll.

Coordinador general de investigación

Alberto Mora Román

Investigadores a cargo

José Mario Achoy Sánchez, Aaron Barquero Salas, Marisol Guzmán Benavides, Marco Hidalgo Ramírez.

Asistentes de investigación

Katherine Araya, Javier Bogantes y Sebastián González.

Consejo editorial

Jorge Vargas Culléll, Alberto Mora, Leonardo Merino, Evelyn Villarreal.

Equipo técnico del Programa

José Mario Achoy, Ronald Alfaro, Katherine Araya, Aaron Barquero, Karlissa Calderón, Karen Chacón, Alejandro Chavarría, Esteban Durán, Steffan Gómez, Vladimir González, Marisol Guzmán, Mario Herrera, Marco Hidalgo, Jennyfer León, Leonardo Merino, Alberto Mora, Natalia Morales, Dagoberto Murillo, Susan Rodríguez, Isabel Román, Rafael Segura, Jorge Vargas Culléll y Evelyn Villarreal.

Mesa de Ciencia de datos y visualización

Steffan Gómez, Camila Aguilar.

Área de Estadística

Natalia Morales y Rafael Segura.

Área de Difusión

Vera Brenes, Manuel Alfaro, Guido Barrientos, Arlene Méndez y Gabriela Monge.

Área Administrativa

Susan Rodríguez, Karol Arroyo, Ileana Jiménez, Suyen Miranda, José Montero, Giselle Rojas.

Editor

Programa Estado de la Nación.

Edición de textos y corrección

Gabriela Fonseca Argüello.

Diseño y diagramación

Erick Valdelomar / Insignia | ng.

Índices

EQUIPO RESPONSABLE	3
ÍNDICES	5
PRESENTACIÓN	13
PRÓLOGO AL INFORME ESTADO DE LA REGIÓN 2025	15
Un instrumento para la deliberación ciudadana	15
Una iniciativa que se consolida y renueva	15
Una estrategia participativa de investigación y deliberación	16
PARTE I SINOPSIS	21
CAPÍTULO 0	
SINOPSIS	23
Resumen ejecutivo	23
Mensaje 1. En las últimas tres décadas se profundizaron las brechas de desarrollo dentro de la región	25
Pacificación de Centroamérica abrió una época de profundas transformaciones	25
Diferencias económicas entre los países se multiplicaron casi cuatro veces	28
Un lento y desigual progreso social caracteriza la historia regional reciente	29
Mensaje 2. El manejo de la pospandemia está erosionando capacidades para el desarrollo humano sostenible y la integración regional	31
La región vuelve a los patrones prepandémicos de crecimiento económico excluyente	31
Países reducen la inversión social pese a los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad	32
Mejoría en la sostenibilidad ambiental fue un artificio del shock económico de la pandemia	33
La integración regional experimenta una grave y prolongada crisis político-institucional	33
Mensaje 3. La región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares	35
Diversidad de sistemas políticos en la región CARD propicia tensiones entre los países	35
Autocratización política cuenta con respaldo o la aquiescencia de importantes segmentos de la ciudadanía	36
Mensaje 4. Intensificación de los conflictos geopolíticos globales agravan tensiones dentro de la región	39
Desarticulación regional reduce márgenes de maniobra frente a las potencias	39
Interrupción reciente de flujos de cooperación internacional estadounidense crea fuerte incertidumbre	40

Mensaje 5. La “diáspora interna” reduce aún más la capacidad para atender desafíos estratégicos	42
Envejecimiento de la población es un desafío crucial que no está siendo visualizado	42
Archivada la política de seguridad democrática regional cuando actores del crimen organizado profundizan su huella	43
Cierre	45
PARTE 2 PANORAMA REGIONAL	47
Reconocimientos	48
Resumen	49
CAPÍTULO 1	
PANORAMA REGIONAL	51
Introducción	51
Fuentes y limitaciones de la información	52
Panorama ambiental	52
Persistencia de patrones ambientalmente insostenibles perpetúa el déficit ecológico	53
<i>Reducción de la huella ecológica por persona es insuficiente para alcanzar el balance ambiental</i>	53
<i>La región CARD presenta un balance ambiental similar al de Norteamérica y el mundo</i>	54
<i>Emisiones de carbono, cultivos y deforestación son los principales disparadores de la huella ecológica</i>	54
<i>Rica biodiversidad en peligro</i>	55
Pocos avances en la transformación de la matriz energética	56
<i>Mejora generación de energía renovable pero falta de inversión impide aprovechar su potencial</i>	56
<i>Consumo energético continúa dependiendo mayoritariamente de hidrocarburos importados</i>	58
<i>Uso poco eficiente de la energía</i>	58
Sistemas de movilidad en territorios urbanos degradados agudizan riesgo y vulnerabilidad	60
<i>Crecen emisiones de gases generados por el sector transporte</i>	60
<i>Patrón de crecimiento urbano profundiza rezago de sistemas de transporte público</i>	60
<i>Acelerado crecimiento del parque automotor</i>	61
Panorama demográfico	62
La población regional es cada vez más urbana y su crecimiento se desaceleró	62
<i>Población continúa concentrada en tres países y en zonas urbanas</i>	62
<i>Menores tasas de fecundidad desaceleran el crecimiento poblacional</i>	63
La transición demográfica avanza, con importantes diferencias entre países	64
<i>Dos subgrupos de países en la región con estructuras poblacionales distintas</i>	64
<i>Aumento en la esperanza de vida profundiza envejecimiento poblacional</i>	66
<i>Insuficientes pensiones llegan a menos de la mitad de la población adulta mayor</i>	66
<i>Personas adultas mayores viven mayoritariamente con otros familiares</i>	68
Centroamérica: el gran conector migratorio del hemisferio	68
<i>Estados Unidos continúa siendo el principal destino</i>	70
<i>Viraje en las políticas y gestión migratoria como respuesta a los flujos migratorios desde fuera de la región</i>	70
<i>Aumenta expulsión de población por razones políticas e inseguridad</i>	71
Panorama económico	71
Recuperación económica tras el shock de la pandemia se desacelera	72
<i>Crecimiento económico de la región CARD fue mayor al de América Latina y el Caribe</i>	72
<i>Turismo impulsó la reactivación y los precios crecientes, la reciente desaceleración</i>	72
<i>Asimetrías en el tamaño y la estructura de las economías inciden en su desempeño</i>	74
Sector externo fue factor importante en la recuperación pospandémica	75
<i>Distintas apuestas productivas determinan el desempeño del sector exportador</i>	75
<i>Importantes diferencias nacionales en la atracción de inversión extranjera directa</i>	75

Persisten fuertes debilidades en el mercado de trabajo	77
<i>Mejoras en la productividad laboral superan el ritmo de crecimiento económico</i>	77
<i>Personas jóvenes y las mujeres continúan experimentando los niveles más altos de exclusión laboral</i>	79
<i>Bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo impide mejoras en la productividad laboral</i>	79
Situación fiscal agudiza riesgos para la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo humano	81
<i>Una región con altos niveles de endeudamiento público, pero menores al promedio latinoamericano</i>	81
<i>Países de CARD siguieron con bajas cargas tributarias</i>	81
<i>Evasión y estructuras regresivas continúan limitando el mejoramiento en las finanzas públicas y una mayor equidad</i>	81
Panorama social	82
Rezago o claro deterioro en la generación de capacidades	83
<i>Aumenta proporción de muertes prematuras prevenibles</i>	83
<i>Deterioros en coberturas coinciden con problemas de calidad educativa en la mayor parte de los países</i>	83
<i>Prueba PISA 2022 evidencia graves problemas de la calidad educativa en cinco de los ocho países</i>	84
<i>La región mantiene altos porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan</i>	86
Pobreza se redujo, pero los niveles siguen siendo elevados	86
<i>Mejorar los ingresos laborales es clave para reducir la pobreza</i>	87
Alta y persistente desigualdad de ingresos	87
Gasto social es insuficiente e inferior al del resto de América Latina	89
Panorama político	90
Solo una democracia plena subsiste en los ocho países de CARD	90
Limitaciones a la competencia electoral coinciden con problemas en la gestión electoral	91
Concentración del poder presidencial y corrupción limitan el ejercicio democrático del poder político	94
<i>Continuados ataques a poderes judiciales erosionan los sistemas de pesos y contrapesos</i>	95
<i>Continúa el fortalecimiento de las fuerzas armadas</i>	97
<i>Escándalos y denuncias de corrupción pública de alto perfil con debilitamiento de controles</i>	98
Malos resultados de bienestar social coinciden con mayor desafección ciudadana con la democracia	99
Crimen organizado: riesgo vital para la democracia e institucionalidad	101
Panorama de integración regional	102
Capacidad del SICA para promover la integración regional cae al punto más bajo desde su creación	103
<i>Se acentuó el vacío en la conducción política del proceso de integración regional</i>	103
<i>La secretaría general del SICA estuvo mayormente acéfala entre el 2021 y el 2024</i>	104
<i>Menor disponibilidad de información reduce la transparencia del sistema a mínimos</i>	104
<i>Operación del SICA sigue dependiendo de la cooperación internacional</i>	105
<i>Participación institucional asimétrica de los Estados miembros debilita la acción regional</i>	107
SICA continua con funcionamiento inercial en ausencia de conducción política	108
<i>Entidades del sistema promulgaron centenares de nuevos instrumentos regionales</i>	108
<i>Reglamento para la adopción de decisiones del SICA procura reducir la cantidad de nuevos mandatos</i>	108
Divergencias impiden posicionar intereses regionales en la agenda internacional	109
<i>Pocos temas concentran los intereses de potencias hegemónicas en la región</i>	110
<i>La región CARD ocupa un lugar secundario en la agenda mediática de las grandes potencias</i>	110
<i>Estados Unidos es el principal origen de la cooperación hacia CARD</i>	111
<i>Fuertes divisiones en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas</i>	112
PARTE 3 DILEMA ESTRATÉGICO	117
CAPITULO 2	
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	119
Hallazgos relevantes	119
Importancia del tema	119
Reconocimientos	120

Resumen	121
Introducción: ¿por qué la adaptación al cambio climático es clave en el mundo y prioritaria en la región?	123
Un punto de partida: el fuerte vínculo entre desarrollo humano y clima	124
Fuertes cambios en el clima implican retos de adaptación territorialmente diferenciados	126
Un vistazo global: la región se vuelve más calurosa y propensa a eventos extremos	126
Patrones climáticos con fuerte alteración en el Corredor Seco Centroamericano y la República Dominicana	129
Grandes áreas de impacto vistas con el lente territorial	135
Zonas costeras verán sus dinámicas territoriales distorsionadas	136
El Corredor Seco Centroamericano en expansión	137
Se alteran las condiciones en ecosistemas de montaña	138
Avanzar en adaptación requiere identificar sectores y territorios prioritarios	138
Política pública y prioridades de adaptación al cambio climático en CARD	144
Fortalecimiento de capacidades es la mayor prioridad en la política pública regional	145
Falta integrar más las prioridades con los escenarios climáticos y sus posibles consecuencias	149
Financiamiento y evaluación: retos pendientes para las políticas de adaptación	151
Iniciativas de adaptación implementadas en CARD tienen un abordaje incipiente y diverso	152
Sistematización de acciones de adaptación al cambio climático en la región	153
<i>Iniciativas construyen alianzas, con fuerte participación estatal</i>	154
<i>Domina enfoque en bosques, biodiversidad y producción agropecuaria, en especial para el fortalecimiento de capacidades</i>	158
<i>Fuerte dependencia de recursos internacionales para financiar las iniciativas</i>	161
¿Coinciden las iniciativas, programas y acciones con lo que indica la evidencia científica?	164
<i>La adaptación penetra las agendas nacionales propias de la región</i>	164
<i>Las acciones se enfocan en territorios prioritarios, pero omiten sectores clave como la infraestructura y la salud</i>	166
Adaptación al cambio climático requiere de acciones articuladas de todos los actores sociales, económicos y políticos de la región	168
Desafíos y oportunidades para la acción	170
Tres enfoques clave: gobernanza, financiamiento y priorización estratégica	170
Buenas prácticas internacionales en adaptación relevantes para CARD	172
<i>Diecisiete buenas prácticas internacionales</i>	172
<i>Síntesis comparativa</i>	174
Reflexión final: ¿dónde poner el énfasis de las políticas de adaptación?	176
<i>Grandes áreas de prioridad identificadas</i>	176
<i>Recomendaciones para la acción colaborativa</i>	177
SIGLAS	179
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	193

Índice de cuadros

P.1	<i>Séptimo Informe Estado de la Región: red de investigadores e investigadoras</i>	20
0.1	Región CARD: Indicadores demográficos y económicos de largo plazo	25
0.2	Región CARD: Situaciones estratégicas prototípicas de la inserción en la economía internacional	28
0.3	Región CARD: Indicadores sociales de largo plazo	29
0.4	Región CARD: Porcentaje de concordancia de votación en resoluciones sobre el conflicto en Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2014-2023	40
1.1	Región CARD: Flota vehicular en la región, según país. 2015 y 2022	62
1.2	Región CARD y América Latina Población de 60 años y más según país (total y porcentaje) destino, sexenio 2018-2023	67
1.3	Región CARD: Distribución de la población emigrante por países de origen según regiones de destino. 2020	70
1.4	Región CARD: Cantidad de personas solicitantes de refugio por país de origen	71
1.5	Región CARD y regiones comparativas PIB real per cápita y cambio porcentual	75
1.6	Región CARD y regiones comparativas Producto por trabajador, según país y región. 2018-2023	78
1.7	Región CARD: Tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes, según causa de muerte por país. 2021	84
1.8	Región CARD: Cantidad de Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. 2000-2023	103
1.9	Región CARD: Cantidad de participantes en las reuniones ordinarias y extraordinarias del SICA, según cargo. 2020-2023	104
1.10	Región CARD: Auditorías presentadas por CFR-SICA entre 2020-2023	105
1.11	Región CARD: Instancias regionales en las que cada Estado miembro del SICA no participa, por pilar de la integración	107
1.12	Región CARD: Instrumentos aprobados y publicados en <i>La Gaceta Digital Oficial</i> del SICA	108
1.13	Región CARD: Temática abordada en visitas de alto nivel de EEUU a Centroamérica. 2020-2023	110
1.14	Región CARD: Noticias vinculadas a países centroamericanos y República Dominicana. 2019-2023	111
1.15	Región CARD: Total de flujos de cooperación netos por cooperante según país receptor. 2013-2022	112
1.16	Región CARD: Votos contra las acciones de la Federación Rusa en Ucrania, según país que condena. 2014-2023	113
1.17	Región CARD: Concordancia de votación en resoluciones sobre el conflicto en Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2014-2023	113
2.1	Región CARD: Documentos de política pública sobre adaptación al cambio climático, por país. 2000-2023	145
2.2	Región CARD: Distribución de las acciones tipo clasificadas según sectores por país. 2000-2023	147
2.3	Región CARD: Distribución de las acciones tipo clasificadas según sectores por país. 2000-2023	148
2.4	Región CARD: Instituciones de gobierno presentes en la implementación de iniciativas de adaptación al cambio climático, según país. 2007-2024	156
2.5	Región CARD: Distribución de las iniciativas de adaptación al cambio climático, según sectores. 2007-2024	159
2.6	Región CARD: Iniciativas de adaptación al cambio climático, según tipología y país. 2007-2024	160
2.7	Región CARD: Acciones de adaptación al cambio climático, según sectores, por período	166
2.8	Región CARD: Limitaciones identificadas por los actores para avanzar en adaptación al cambio climático	169
2.9	Región CARD: Alianzas para avanzar en adaptación al cambio climático, según actor	170
2.10	Documentos oficiales de los países del SICA analizados	173
2.11	Mundo Temas claves de adaptación al cambio climático según NAP-GN por estudio de caso y cumplimiento	175

Índice de recuadros

P.1	Auspiciadores y red de cooperantes del <i>Séptimo Informe Estado de la Región</i>	16
2.1	Exposición y vulnerabilidad climática: una construcción social	125
2.2	Movilidad climática: conceptos, datos y retos para la política pública	144
2.3	Movilidad climática: conceptos, datos y retos para la política pública	150
2.4	Metodología para identificar y caracterizar las iniciativas de adaptación en CARD	153
2.5	Un proyecto de alianzas regionales: “Aumento de capacidades para la reducción de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia en Centroamérica”	157
2.6	Implicaciones macroeconómicas del cambio climático y el potencial de un impuesto al carbono para financiar la inversión climática	163
2.7	Seguimiento, evaluación y sostenibilidad de las acciones de adaptación	167
2.8	Territorios y características de la implementación de acciones de adaptación	168
2.9	Metodología de recopilación y análisis de buenas prácticas	172

Índice de gráficos

0.1	Región CARD: Relación entre el PIB por habitante de cada país y el de Nicaragua	29
0.2	Pobreza y desigualdad de ingreso en la región CARD	30
0.3	Región CARD: Brechas entre la tasa de participación en el mercado laboral promedio a nivel nacional y las desagregadas por sexo y grupo étnico. 2022	32
0.4	Región CARD: Cambio en el porcentaje de hogares en condición de pobreza total según país pre y postpandemia	32
0.5	Región CARD: Tasas de cobertura netas de educación	34
0.7	Región CARD: Índice de concentración de poder en la presidencia	37
0.8	CARD y regiones seleccionadas: Índice Multidimensional de Democracia	38
0.9	Región CARD: Distribución porcentual de la población según su grado de apoyo al autoritarismo y respaldo a la democracia. 2021	38
0.10	Región CARD: Apoyo de la población a que el presidente limite la voz de los partidos políticos de oposición	39
0.11	Región CARD: Participación del BID y los Estados Unidos en el monto total de la cooperación internacional neta, por país. 2013-2022	42
0.12	Región CARD y América Latina y el Caribe. Porcentaje de población por grupos de edad	43
0.13	Región CARD: Porcentaje de municipios por país, según condición en el índice de aridez	44
1.1	Región CARD: Evolución de la huella ecológica y la biocapacidad. 1961-2022	53
1.2	Región CARD: Evolución del balance ambiental, por país. 1961-2022	54
1.3	Región CARD y regiones seleccionadas Evolución del balance ambiental por regiones. 1961-2022	55
1.4	Región CARD: Distribución de la huella ecológica, por país, según tipo de uso de los recursos. 1961-2022	55
1.5	Región CARD: Distribución de especies de flora y fauna en peligro de extinción, por país. 2024	56
1.6	Región CARD: Condición de las especies en peligro, por país según tipo. 2024	57
1.7	Región CARD: Evolución de la generación de electricidad, por país según fuente de energía	57
1.8	Región CARD: Consumo final de energía por sector y fuente, según país. 2022	59
1.9	Región CARD: Intensidad energética por país y región. 2015-2021	60
1.10	Región CARD de dióxido de carbono en el sector transporte, por país	61
1.11	Región CARD: Puntaje por país en el índice de movilidad sostenible. 2022	61
1.12	Región CARD: Tendencia y distribución de la población total, según país	63
1.13	Región CARD: Población residente en zonas urbanas, por país	63
1.14	Región CARD: Tasa global de fecundidad, por país (cantidad promedio de hijos por mujer en edades reproductivas)	64
1.15	Región CARD y países de ingresos altos y bajos/a Estructura de la población por grupos de edad. 2025	65
1.16	Región CARD: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Estructura poblacional por sexo y edad	65
1.17	Región CARD: Costa Rica, Panamá y República Dominicana Estructura poblacional por sexo y edad	66

1.18	Región CARD y América Latina Esperanza de vida al nacer, por país según sexo	67
1.19	Región CARD y América Latina Evolución de la población en edad legal de jubilación con pensión, por país, según cobertura	68
1.20	Región CARD y América Latina Distribución de adultos mayores con pensiones insuficientes, por país, según género	69
1.21	Región CARD Porcentaje de hogares con jefatura femenina, según área geográfica. Circa 2023	69
1.22	Región CARD: Distribución de hogares, según tipología. Circa 2023	69
1.23	Región CARD y América Latina Tasa de crecimiento del PIB real, según país	72
1.24	Región CARD: Tasa de crecimiento de la cantidad recibida de turistas, según país	73
1.25	Región CARD: Distribución de las remesas familiares, según país, por año	73
1.26	Región CARD de la tasa de inflación interanual, según país, por año	74
1.27	Región CARD y América Latina Tendencia en importaciones y exportaciones, según país	76
1.28	Centroamérica Distribución de las exportaciones según país de origen	76
1.29	Región CARD: Evolución de la inversión extranjera directa (IED), según país	77
1.30	Región CARD: Distribución de la IED por país receptor según región de origen, 2018-2023	78
1.31	Región CARD: Tasa de ocupación laboral, por país y según grupo etario. 2022	79
1.32	Región CARD: Participación laboral y tasa de desempleo total y por sexo, según país	80
1.33	Región CARD: Distribución de la población ocupada, por país y según nivel educativo. 2022	80
1.34	Región CARD: Deuda pública total como porcentaje del PIB según país	81
1.35	Región CARD: Ingresos tributarios del gobierno central por país. 2022	82
1.36	Región CARD: Distribución de muertes prematuras prevenibles, según país por año	84
1.37	Región CARD: Tasa neta de matrícula por nivel educativo, según país por nivel educativo	85
1.38	Región CARD, América Latina y OECD Puntaje en pruebas PISA 2022, según modalidad educativa y región, por nivel educativo	85
1.39	Región CARD: Porcentaje de jóvenes ninis entre 19 y 24 años, según país	86
1.40	Región CARD, América Latina y OECD Hogares en pobreza, según etapa de pandemia covid-19 por nivel de pobreza	87
1.41	Región CARD Composición porcentual del ingreso total de los hogares según país y quintil de ingreso <i>per cápita</i> del hogar, por fuentes de ingreso. Circa 2023	88
1.42	Región CARD: Coeficiente de Gini, según país	88
1.43	Región CARD: Distribución del ingreso total de los hogares, según país por quintiles de ingreso <i>per cápita</i> . 2023	89
1.44	Región CARD: Evolución de la inversión social <i>per cápita</i> total, por país, según área social	89
1.45	Región CARD: Evolución del índice multidimensional de democracia según país	90
1.46	Región CARD: Evolución de la inversión social <i>per cápita</i> total, por país, según área social	92
1.47	Región CARD y países seleccionados Evolución del índice de libertad de asociación según país	93
1.48	Región CARD: Evolución del índice de libertad de prensa según país	94
1.49	Región CARD: Región CARD y países seleccionados Evolución del índice de pesos y contrapesos según país	96
1.50	Región CARD: Evolución del gasto judicial <i>per cápita</i> según país	97
1.51	Región CARD: Evolución del gasto militar <i>per cápita</i> según país	98
1.52	Región CARD y países seleccionados Evolución del índice de corrupción política según país	99
1.53	Región CARD: Apoyo de la población a líderes autoritarios. 2021	100
1.54	Región CARD: Apoyo de la población a que el presidente limite la voz de los partidos políticos de oposición	101
1.55	Región CARD: Evolución en la tasa de homicidios según país	102
1.56	Región CARD: Distribución de presupuestos de proyectos de cooperación regional en ejecución por pilar de integración. 2013-2024	106
1.57	Región CARD: Distribución de mandatos de las reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno en ejecución por pilar de integración regional. 2009-2023	109
2.1	Región CARD: Variación de la temperatura media anual para los países SICA	127
2.2	Región CARD: Acciones propuestas en los documentos de política pública sobre adaptación al cambio climático, por sectores. 2000–2023	145
2.3	Región CARD: Distribución de las acciones de política según sectores principales. 2000–2023	147
2.4	Región CARD: Cantidad de iniciativas de adaptación al cambio climático, por país, según estado de implementación. 2007-2024	154
2.5	Región CARD: Distribución de las iniciativas de adaptación al cambio climático según tipo de actor. 2007-2024	155
2.6	Región CARD: Distribución de las iniciativas de adaptación al cambio climático, según escala geográfica. 2007-2024	158

2.7	Región CARD: Cantidad de iniciativas de adaptación al cambio climático según fuente de financiamiento, por país. 2007-2024	162
2.8	Región CARD: Acciones de adaptación al cambio climático finalizadas, según su origen, por país. 2007-2024	165
2.9	Región CARD: Acciones de adaptación al cambio climático en ejecución según su origen, por país. 2007-2024	165

Índice de mapas

0.1	Centroamérica. Mancha metropolitana por país. 1975, 1995, 2014	26
0.2	Región CARD: Regímenes políticos	36
2.1	Región CARD: Zonas que se han tornado más lluviosas. 1901-2012	128
2.2	Región CARD: Evolución del porcentaje de cambio de escenario SSP en relación con la precipitación histórica. 1979-2014	130
2.3	Región CARD: Proyección del porcentaje de cambio en la temperatura respecto al promedio histórico del período 1979-2014, según escenarios de cambio climático	131
2.4	Región CARD: Proyección de nivel de aridez por municipio/cantón en el escenario SSP5-8.5	133
2.5	Región CARD: Proyección de zonas de aridez y usos del suelo, en el escenario SSP5-8.5. 2079-2099	134
2.6	Región CARD: Proyección de nivel de aridez y ubicación de las centrales hidroeléctricas. 2079-2099	135
2.7	Región CARD: Principales aglomeraciones urbanas con respecto al Corredor Seco Centroamericano	137
2.8	Región CARD: Puntos calientes de aridez a partir de las proyecciones en el escenario SSP5-8.5	138

Índice de diagramas

1.1	Dificultades en los procesos electorales recientes de algunos de los países	91
1.2	Fuentes de amenaza a la libertad de prensa	95

Presentación

El *Séptimo Informe Estado de la Región* es un nuevo aporte de la investigación académica al conocimiento y deliberación sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana. Su publicación es el resultado de un esfuerzo colectivo de cerca de cuatro años, en el que colaboraron alrededor de setecientas personas de múltiples y diversos sectores del Istmo.

El Informe fue elaborado a partir de una estrategia participativa. Involucró amplias y sucesivas consultas a lo largo de las distintas fases del proceso de preparación, desde la definición del enfoque, la elaboración del temario, el suministro de información y la deliberación sobre los insumos temáticos de investigación, hasta la revisión y discusión de los avances e informes finales de investigación y los borradores de los capítulos del Informe, lo que contribuyó mejorar la calidad y pertinencia del Informe y a hacer de esta iniciativa un esfuerzo *desde y para* la región.

El Informe dota a las sociedades de Centroamérica y República Dominicana un instrumento para (re) conocer su realidad, mediante la identificación y estudio de las dinámicas compartidas del desarrollo humano sostenible entre los ocho países de la región y que actualmente implican desafíos y también oportunidades para sus sociedades. Además, el Informe busca contribuir al debate público y a la formulación de políticas y acciones regionales.

En una época de profundos y acelerados cambios y de proliferación de la desinformación, en diferentes campos de la vida social, política, económica, cultural, el conocimiento basado en evidencia científica es una poderosa herramienta para analizar la realidad y fundamentar posiciones. Provee, también, un valioso insumo para facilitar la participación efectiva de distintos actores sociales en la definición de rumbos y la construcción de propuestas compartidas.

El desempeño reciente de Centroamérica y República Dominicana muestra un panorama sumamente difícil. A lo largo del presente siglo, la región logró ciertas mejoras en desarrollo humano, pero fueron muy puntuales e insuficientes para revertir los rezagos históricos. A estos rezagos, debe agregarse el deterioro, en años recientes, en diversos ámbitos relevantes, especialmente en materia político – institucional y la integración regional. Como resultado al finalizar el primer cuarto del siglo XXI la región está sumida en la peor crisis de las últimas tres décadas.

Para encarar esa situación, el presente Informe insta a trascender la inmediatez pues los márgenes de maniobra que tienen los países para enfrentar dinámicas regionales y globales son cada vez más estrechos. Esas dinámicas definirán el perfil de su población, los mercados laborales, sus posibilidades de crecimiento y su biodiversidades y la disponibilidad de recursos naturales en las próximas décadas. Sugestión implica la búsqueda de

acuerdos entre diversos sectores sociales, económicos y políticos, conscientes de que no alcanzarlos puede convertir en pérdidas lo que hoy son desafíos y en frustración las oportunidades.

El *Estado de la Región* es una invitación académica para el diálogo social y político. El Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas de Costa Rica (CONARE) encuentra en el Informe un idóneo espacio para fortalecer sus vínculos e intercambios con el resto de Centroamérica. Este consejo reconoce el valioso aporte financiero de la Unión Europea mediante el Programa EureCA (European Union-Central American

Partnership Facility por sus siglas en inglés) y el Rockefeller Brothers Fund.

Además, agradece el apoyo de auspiciadores de investigaciones específicas y contrapartes de investigación y aprovecha la presentación de este Informe, para instar a organismos e instituciones nacionales, regionales e internacionales, a contribuir en la consolidación del *Estado de la Región* como un sistema de seguimiento del desarrollo humano en Centroamérica y República Dominicana y una base fundamentada para el debate político y la formación de opinión pública en favor del bienestar de sus pueblos.



María Estrada Sánchez

RECTORA

Instituto Tecnológico de Costa Rica
PRESIDENTA DEL CONARE



Carlos Araya Leandro

RECTOR

Universidad de Costa Rica



Francisco González Alvarado

RECTOR

Universidad Nacional



Rodrigo Arias Camacho

RECTOR

Universidad Estatal a Distancia



William Rojas Meléndez

RECTOR

Universidad Técnica Nacional



Gastón Baudrit Ruiz

DIRECTOR A.I.

Oficina de Planificación de la
Educación Superior (OPES)

Prólogo

Un instrumento para la deliberación ciudadana

Los *Informes Estado de la Región* constituyen un sistema de seguimiento sobre el desempeño de Centroamérica en desarrollo humano sostenible y los cursos de evolución de su integración regional. A partir de sexta edición (2021) incorporan a República Dominicana pues este país es, desde la década anterior, miembro pleno del Sistema de Integración Centroamericana.

La publicación de siete informes regionales, el primero de ellos en 1999, ha permitido consolidar una plataforma de información, observación, seguimiento y promoción del desarrollo humano sostenible. Esta ha trascendido la preparación del Informe y comprende hoy la elaboración periódica de diversos productos, que son también ampliamente difundidos. Asimismo, ha logrado impulsar una visión regional mediante la creación de redes conformadas por centros académicos, universidades y especialistas, fuentes de información y líderes sociales y políticos, que participan en la confección de cada entrega.

Los Informes no son una fotografía de la realidad, sino una documentación selectiva de procesos, basada en decenas de estudios e investigaciones que procura identificar desafíos y posibilidades de acción conjunta entre las sociedades y gobiernos del área.

Sus procesos de preparación y difusión son conscientes y respetuosos de la

pluralidad social, económica, política, étnica y cultural del Istmo. En esta edición se reafirma ese pluralismo en el análisis de los cambios ocurridos entre 2020 y 2024, tiempos particularmente difíciles para la región.

Pluralismo no significa neutralidad. Frente a los procesos de autocratización política que han llevado, en al menos dos países, a la instauración de dictaduras y a mayores tensiones internas, los Informes reivindican la democracia y el desarrollo humano sostenible. Al ser instrumentos preparados desde y para Centroamérica y República Dominicana, procuran fortalecer el diálogo y la cooperación regional, la participación ciudadana informada y la libre deliberación sobre los asuntos públicos.

El valor agregado del *Estado de la Región* es el análisis de las tendencias que atraviesan Centroamérica y República Dominicana sin distinguir fronteras y nacionalidades. Aunque se hacen comparaciones país por país para enfatizar algún punto, en la mayoría de los casos se privilegian los hallazgos y tendencias comunes.

El Informe no es un documento gubernamental u oficial, pero tampoco antigubernamental. No se especializa en la crítica a la acción pública, pero tampoco en su defensa en un país o gobierno en particular.

El resultado de esta dinámica es un balance creativo de diferentes puntos de vista, un Informe que no es elaborado

por un solo país u organismo internacional para la región. Tampoco es la suma de documentos nacionales preparados en cada uno de los países para su propio uso o un texto elaborado por un pequeño grupo de expertos con una única visión.

Una iniciativa que se consolida y renueva

Los Informes *Estado de la Región* se preparan mediante una metodología basada en tres principios: rigor académico, legitimidad social y amplitud en la difusión. Se utiliza una estrategia de investigación descentralizada, con el fin de propiciar la participación de centros académicos, universidades y fuentes de información en cada una de las naciones centroamericanas. No obstante, las difíciles circunstancias políticas en varios países de la región hicieron que la red de investigación de la presente edición tuviera, como en ninguna edición anterior, poca o nula participación de varios de ellos.

En esta ocasión el proceso tomó cerca de 48 meses, desde el inicio de la consulta para la definición del temario en el 2022 hasta la publicación del Informe. No obstante, el tiempo transcurrido entre las ediciones sexta y séptima no fue de inactividad. Durante ese período se actualizaron y difundieron anualmente las series estadísticas que permiten dar seguimiento a cerca de 180 indicadores relevantes para medir el desarrollo humano sostenible y se articularon diversas redes

académicas para la producción de información e investigaciones que sirvieron de insumo para esta edición. Asimismo, se difundieron anticipadamente varias de las investigaciones que sirven de base para este Informe.

La preparación de este trabajo se llevó a cabo en el marco institucional provisto por el Programa Estado de la Nación. Esta es una iniciativa auspiciada por las universidades estatales costarricenses; a saber, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El Conare es el principal patrocinador del Estado de la Región. El Programa cuenta también con la participación de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Este séptimo Informe ha sido posible, además, gracias al apoyo financiero de la Unión Europea mediante el Programa EureCA (European Union-Central American Partnership Facility, por sus siglas en inglés) y el Rockefeller Brothers Fund, junto con otras contribuciones específicas de organismos internacionales y regionales (recuadro P.1). El Equipo Técnico del Programa Estado de la Nación se localiza en San José, Costa Rica.

Una estrategia participativa de investigación y deliberación

La preparación de los Informes se basa en la premisa de que un estudio regional debe ser más que la suma de informes nacionales. Subyace a este enfoque un concepto distinto de *región*, la cual se entiende como un entramado de relaciones que enlaza sociedades, economías y sistemas políticos, por encima y por debajo de sus fronteras. Por eso, el Informe es más que una recopilación comparativa de la evolución de los países y genera un valor agregado regional mediante la combinación de cuatro medidas:

- La construcción regional del temario a partir de un proceso de consulta que involucró a cerca de 500 personas de todos los países durante los meses de septiembre del 2022 a enero del 2023.

Recuadro P.1

Auspiciadores y red de cooperantes del Séptimo Informe Estado de la Región

El *Informe Estado de la Región 2025* fue coauspiciado por la Unión Europea mediante el Programa EureCA (European Union-Central American Partnership Facility por sus siglas en inglés) y el Rockefeller Brothers Fund.

En la fase inicial del ciclo de preparación se contó con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude). En el primer caso, el aporte permitió durante el año 2023 e inicios del 2024 realizar el proceso de consulta, actualizar series estadísticas y bases de datos e iniciar con el proceso de investigación. En el segundo, la ejecución del proyecto de investigación “Educación y formación técnica profesional, futuro del trabajo y prioridades para la acción” durante el año 2023.

Otras entidades hicieron valiosos aportes, en temas en los que confluyen sus intereses con la perspectiva regional de esta publicación. Esas iniciativas fueron las siguientes:

- La NAP Global Network del International Institute for Sustainable Development (IISD) apoyó técnica y financieramente la investigación sobre experiencias internacionales de adaptación al cambio climático.
- La Oficina Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elaboró el panorama

energético de Centroamérica y República Dominicana, como insumo para el capítulo de Panorama regional de este Informe.

- La Red Centroamericana de Ciencias sobre Cambio Climático (RC4) apoyó técnicamente el diseño e implementación de la estrategia de investigación del capítulo sobre adaptación al cambio climático.

Finalmente, la actualización de las bases de datos propias del *Estado de la Región* (acciones colectivas, instituciones públicas y estadísticas judiciales) fue realizada en el marco de un programa regional de pasantías, en el cual participaron:

- Instituto Nacional de Cultura e Historia y de la Universidad de Belice.
- Universidad de Costa Rica.
- Universidad José Simeón Cañas de El Salvador.
- Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
- Universidad Autónoma de Santo Domingo.

- El análisis de la información se hizo desde la perspectiva regional. Aunque el señalamiento de contrastes entre países es inevitable para señalar tendencias relevantes, no es la única comparación, ni la más frecuente.
- La participación de fuentes de información y contrapartes de investigación en la mayor parte de los países, para el desarrollo de los estudios.
- La realización de reuniones y las lecturas críticas de avances e informes finales de investigación, así como de los borradores de los capítulos. Los comentarios y sugerencias permitieron mejorar la calidad y pertinencia de los textos.

En las distintas fases del proceso de elaboración de este Informe estuvieron involucradas directamente cerca de

700 personas de todos los países de la región, España y Estados Unidos. De éstas, 108 participaron en la discusión de los estudios.

El órgano de acompañamiento técnico y social de todo el proceso de investigación es, por excelencia, el Consejo Consultivo del Informe. Se conformó antes de iniciar el proceso y estuvo integrado por 36 destacadas personas de todos los países de la región. Su función fue conducir sustantivamente la iniciativa: seleccionar y definir temas y abordajes, participar en los talleres de consulta y hacer comentarios y recomendaciones sobre los resultados de las investigaciones y los capítulos finales.

En esta ocasión, el Informe ha sido publicado en varios volúmenes, de los cuales este es el tercero y último. El primero titulado “Perfil educativo y competencias para impulsar el desarrollo” fue publicado en agosto del 2024 y analizó el tema de educación y formación técnica profesional. El segundo, presentado en marzo del 2025, se dedicó al tema de “Implicaciones de vivir en democracia: regímenes y sistemas políticos” y abordó desde una perspectiva de largo plazo el autoritarismo y la democracia en la región. Este tercer volumen además de la sinopsis y el panorama regional de las tendencias sociales, económicas, ambientales, políticas y del proceso de integración regional desde la publicación del anterior Informe en el 2021, incluye un capítulo especial sobre adaptación al cambio climático.

Para la realización de los estudios y la recolección de información se establecieron acuerdos de colaboración interinstitucional y se crearon redes *ad hoc* de investigación. En total, 27 investigadores e investigadoras elaboraron 24 ponencias y notas técnicas especializadas. Adicionalmente, en el proceso de recolección de información estuvieron vinculadas 73 personas, tanto docentes como estudiantes y personal de apoyo, pertenecientes a institutos de investigación y unidades académicas de universidades, así como consultores independientes.

En el cuadro P.1 se consignan los nombres de las personas expertas que participaron en la preparación de las investigaciones ejecutadas para este Informe.

Cabe señalar que en todos los casos se trabajó con otras colaboraciones o se integraron equipos de varios asistentes alrededor de quien se encargaba de un solo estudio, en virtud de la complejidad de la tarea emprendida. A estas personas se les reconocen con gratitud sus aportes, lo mismo que a aquellas que proporcionaron información o que hicieron lecturas críticas, todas las cuales se mencionan en la sección de agradecimientos de cada capítulo.

La difusión: componente clave del proceso

El reto de una publicación de esta naturaleza es la difusión de un panorama regional, que contrarreste la cultura de poca transparencia y rendición de cuentas sobre lo que Centroamérica es y aspira a ser. Algunos de los países producen muchos datos que no son comparables, difíciles de obtener, sin controles de calidad y desactualizados, que además no suelen estar disponibles de manera oportuna, abierta y pública.

La difusión de resultados del *Estado de la Región* es el mecanismo que permite promover el análisis y discusión sobre los contenidos del Informe con aquellos sectores que pueden apropiarse de ellos y utilizarlos como insumo para sus procesos de toma de decisiones y diseño de estrategias o políticas públicas. La estrategia comprende el diseño y publicación de nuevos productos (vídeos, animaciones digitales y documentos electrónicos) y otros recursos como las conferencias virtuales, el *email marketing* y las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para divulgar contenidos en formatos atractivos y adecuados a las necesidades de las distintas audiencias.

Los públicos meta para la difusión son diversos, incluye a tomadores de decisiones en los ámbitos público y privado, la institucionalidad regional, los medios de comunicación, la sociedad civil y la academia. Para ello se diseñaron distintas modalidades de intervención, que permitan satisfacer los requerimientos de información de cada uno de estos sectores.

Una estrategia así fue aplicada en la difusión de la edición 2021 del Informe.

Se imprimieron 3.000 ejemplares de ese documento y 6.000 adicionales de su resumen. Para su distribución se conformó una red de puntos depositarios integrada por universidades, centros de investigación y ONG en cada país. Además se realizó la entrega de ejemplares *puerta a puerta* a autoridades gubernamentales, instituciones regionales, cuerpo diplomático, líderes de la sociedad civil, organismos internacionales y centros académicos en universidades de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Entre julio del 2021 y marzo del 2025, cerca de 5.900 personas participaron en 102 eventos virtuales, presenciales e híbridos sobre los contenidos del Informe.

La divulgación en medios de comunicación se realizó a partir de una carpeta de prensa y numerosos comunicados, así como la gestión de entrevistas y sesiones de trabajo con periodistas de todos los países de la región, lo que permitió que integrantes del equipo técnico y de la red de investigación del Informe participaran en numerosos programas televisivos y radiofónicos.

Como resultado de esta labor, en el mes posterior al lanzamiento del Informe (21 julio – 24 de agosto del 2021) se contabilizaron 412 notas y reportajes sobre los hallazgos del Informe, cobertura que, estimada en términos de valor económico o *Publicity*, ascendió a 1.335.724 dólares. Después de esa fecha y hasta marzo del 2025 se han contabilizado cerca de 180 notas adicionales.

Limitaciones y comentario final

Este Informe es un esfuerzo consciente de sus limitaciones. La primera de ellas es que el análisis de la región, como unidad, es disparejo en diversas áreas, debido a que la información es relativamente escasa, especialmente en Belice, El Salvador y, sobre todo, en Nicaragua. En los dos últimos casos, las barreras para acceder a los datos fueron un efecto de los procesos de autocratización de sus sistemas políticos.

En segundo lugar, la mayoría de las investigaciones se basa en el procesamiento de fuentes secundarias, es decir, en la compilación, verificación y contraste

de estadísticas o estudios académicos y técnicos existentes de previo. No fue posible, dadas las restricciones de tiempo y recursos, apoyarse en investigación primaria en todos los temas, salvo en algunos casos.

En tercer lugar, la pandemia por covid-2019 en 2021-2022 obligó a modificar la estrategia de consulta. Se realizaron pocos talleres y reuniones presenciales para la discusión de documentos de

trabajo, lo cual se subsanó con la lectura crítica de los documentos y algunas sesiones virtuales.

Finalmente, no todos los asuntos de interés fueron analizados con la misma profundidad, debido a la escasez o ausencia de información, las limitaciones de recursos y en razón de que algunos de ellos ya habían sido abordados con detalle en ediciones previas.

El Equipo Técnico fue el encargado

de coordinar las estrategias de investigación y acompañamiento social en la preparación del Informe. Pese a toda la colaboración recibida, que se reconoce de manera pormenorizada en las secciones respectivas, los errores en esta publicación son de entera responsabilidad de ese Equipo. Las apreciaciones expuestas en el Informe no necesariamente reflejan los puntos de vista de las instituciones auspiciadoras.



Jorge Vargas Cullell
DIRECTOR
Programa Estado de la Nación



Alberto Mora Román
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN
Informe Estado de la Región (2025)

Cuadro P.1

Séptimo Informe Estado de la Región: red de investigadores e investigadoras

Nombre del investigador/a	País	Nombre de la investigación/tipo de aporte
INVESTIGACION		
Knut Walter Franklin	El Salvador	Fuerzas armadas y democracia en Centroamérica y República Dominicana
Andreas Feldmann Pietsch y Anthony James Sturino	Estados Unidos	Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y respuesta de las políticas públicas
Carlos Humberto Cascante Segura	Costa Rica	Equilibrios y diversidades: Centroamérica y República Dominicana frente a los actores globales (2020-2024)
Mario Cortés Vásquez	Costa Rica	Análisis del estado de la democracia en Centroamérica y República Dominicana
Rocío Echeverría Vargas y Diego Fernández Montero	Costa Rica	Nota técnica: Huella ecológica. Sostenibilidad ambiental en Centroamérica y República Dominicana
Rocío Echeverría Vargas y Diego Fernández Montero	Costa Rica	Nota técnica: Biodiversidad amenazada en Centroamérica y República Dominicana. Lista roja de especies en peligro
Rocío Echeverría Vargas y Diego Fernández Montero	Costa Rica	Nota técnica: Estructura y composición de los hogares en Centroamérica y República Dominicana
Rocío Echeverría Vargas y Diego Fernández Montero	Costa Rica	Nota técnica: Pobreza y distribución de los ingresos en Centroamérica y República Dominicana
Mónica Castillo Gonzalo	Costa Rica	Acciones de adaptación al cambio climático implementadas en los países de Centroamérica y República Dominicana
Alonso Brenes Torres	Costa Rica	Mapeo de posiciones de actores clave de la región de Centroamérica y República Dominicana en relación con la adaptación al cambio climático
Alonso Brenes Torres	Costa Rica	Principales factores de riesgo asociados al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana
Alonso Brenes Torres	Costa Rica	Prioridades de política pública y acción regional para la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP de la UCR)	Costa Rica	Prioridades de adaptación al cambio climático para Centroamérica y República Dominicana. Un acercamiento a partir de la evidencia científica, información geográfica y los escenarios disponibles para la región.
Paula M. Pérez-Briceño, Adolfo Quesada y Pascal Giro, Escuela de Geografía, UCR	Costa Rica	Indicadores de cambio climático a nivel territorial para los países de Centroamérica y República Dominicana
Marco Hidalgo y Ronald Alfaro Redondo	Costa Rica	Test de identidades ¿Cuál es la posición de las personas de Centroamérica y República Dominicana sobre la democracia?
Javier Johanning Solís, Sophia Roldán, Sergio Guzmán Hernández y Alexa Guzmán Hernández	Costa Rica	Integración regional en Centroamérica y República Dominicana: evolución reciente y su dimensión no institucional
Carmen Rosa de León y Leonardo Martínez	Guatemala	Inseguridad y políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana
Andrés Fernández Araúz	Costa Rica	Tendencias y perspectivas de los mercados laborales globales y su relevancia en Centroamérica y República Dominicana
Andrés Fernández Araúz	Costa Rica	Caracterización de la Población Económicamente Activa, la creación de empleo y la demanda laboral en Centroamérica y República Dominicana
Eugenio Torijano, Santa Paola Centeno y José Manuel Arroyo, Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Sede Subregional en México de la Cepal	México	Panorama energético de Centroamérica y República Dominicana
Álvaro Ramírez Bogantes	Costa Rica	Oportunidades y desafíos de los sistemas de educación y formación técnica profesional de la región para responder a las tendencias del mercado laboral
Álvaro Ramírez Bogantes	Costa Rica	Características de la oferta de educación y formación técnica profesional y prioridades de corto y mediano plazo para la actualización y pertinencia de esa oferta

Cuadro P.1

Séptimo Informe Estado de la Región: red de investigadores e investigadoras

Andrés Fernández Araúz	Costa Rica	Percepción sobre la educación y formación técnica profesional en el imaginario de la región Centroamericana
Andrés Fernández Araúz	Costa Rica	Los resultados de la educación y formación técnica profesional en la prueba PISA 2022
BASES DE DATOS Y RECOLECCION DE INFORMACIÓN		
Flacso	El Salvador	Construcción de la base de datos de instituciones públicas del Estado salvadoreño 1821-2000
Mary Clara Galán Hirujo	República Dominicana	Recolección de información georreferenciada sobre infraestructura pública y sobre casos de adaptación al cambio climático en cada país
Jorge Eduardo Rodríguez Campos	Costa Rica	
Carlos Escudero Nuñez	Panamá	
Lucía Irene Vijil Saybe	Honduras	
Joaquín Castro Montoya	El Salvador	
Jackeline Darlene Brincker Palomo	Guatemala	
Anantonia Reyes Prado	Guatemala	
Universidad José Simeón Cañas¹	El Salvador	
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas)		Actualización de bases de datos sobre entidades públicas, acciones colectivas y estadísticas judiciales de cada país
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)²	Honduras	
Pasantes y asistente de investigación del Programa Estado de la Nación³	Costa Rica y Panamá	
Universidad Autónoma de Santo Domingo⁴	República Dominicana	
Instituto Nacional de Cultura e Historia y Universidad de Belice⁵	Belice	

Notas

1 Coordinadores: Gabriel Ernesto Escolán Romero y Dulcinea Flores. Estudiantes: Tatiana Nicolle Cruz Maldonado, Diana Maricel Meléndez Vásquez, Yuri Alejandro Machado Hernández, Edgard Abraham Sánchez Rubio, Elena del Carmen Alfaro Rivas, Oscar Adilson Martínez Ayala, Leslie Edith Herrera Callejas, Angel Salvador Montiel Barahona, Lorena Leticia Hernández Gutiérrez, Grecia María Ramírez Rivas, Josseline Nicole Paredes Palacios, Wilmer Vladimir Estaban Sandoval, Giovanni Edenilson Fabián Domínguez, Consuelo Gabriela Villacorta Ramos, Evelin Raquel García López, Mónica Gabriela Saravia Chávez, Diana Vanessa Alfaro Santos, Juan Francisco Oseguera, Giovanni Alexander Fernández Olano y María José Sanchez Álvarez.

2 Apoyo técnico y administrativo: Diosana Lagos, Bessy Vásquez Montoya, Coordinadores bases de datos: Yajaira Lizeth Padilla Mejía, Óscar Omar Larios Álvarez y Pablo David Yup de León. Estudiantes: Andrea Nájera, Kimberly Sánchez, Ester Oliva, Oscar Gómez, Rocío Santos, Irma Lemus, David Antonio Vivar Reyes, Wuendy Vindel, Daniela Cruz, Carolina Zepeda, Escarleth Nelson, Daniela Ortega, Keilyn Gonzáles y Tesla Berrios.

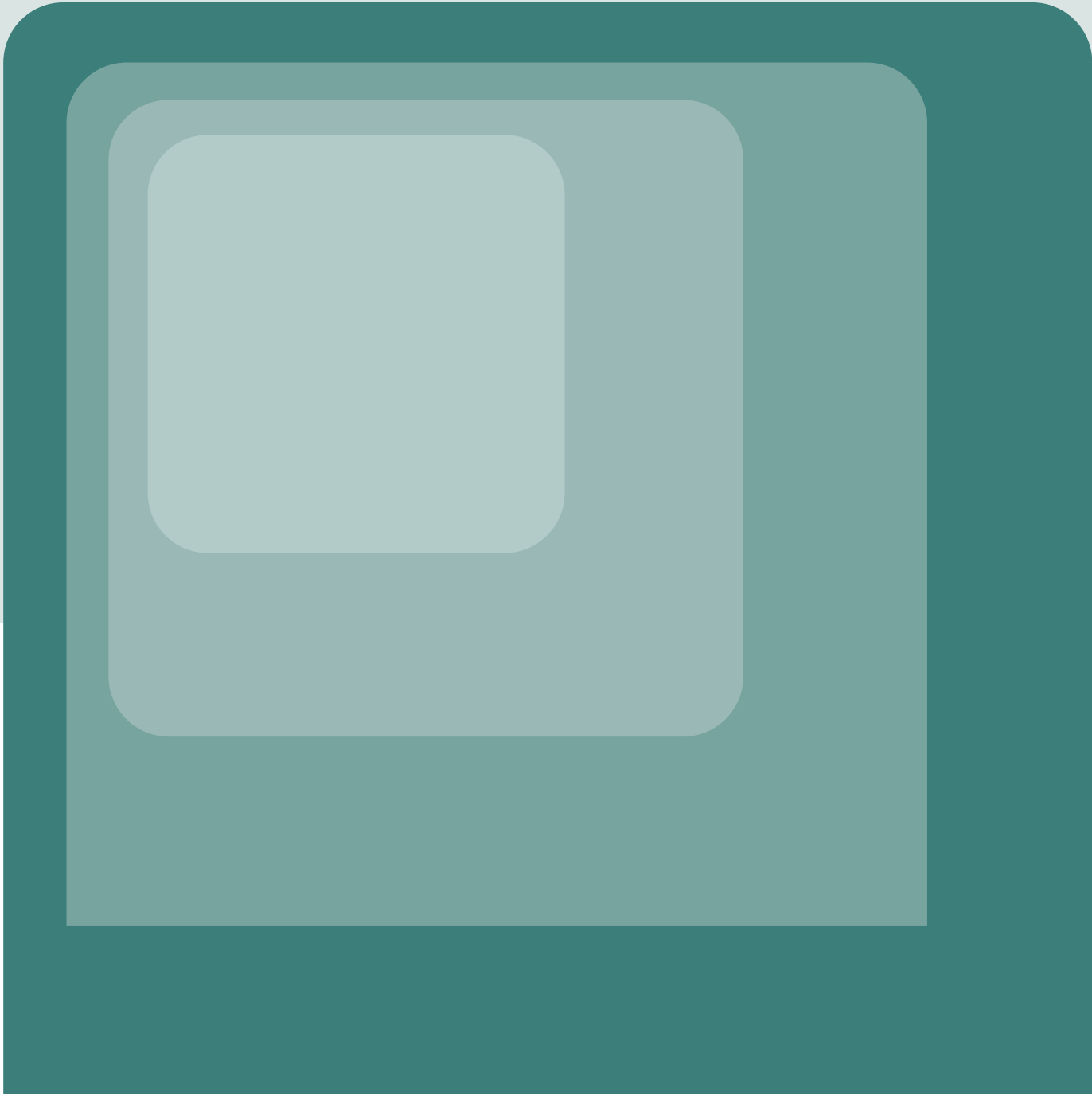
3 Pasantes: Erica Rojas, Steffany Varela, Alessandro Camacho, Kevin Alonso Avendaño, Marisol Chinchilla, Erickson Molina, Stephanie Castro, María Elena Jiménez y Roberto Montero. Asistente: Sebastián Aguilar.

4 Estudiantes: Nataly Nicole Peña Astacio, Juan Alfonso Baldayaque Peña, María Altagracia Ozuna de la Cruz, Huáscar Rodríguez Deñó, Rushaner Minaya Camacho, Luz Marcela Fernández González, Julio Andrickson Herrera Peña

5 Rolando Cocom del Instituto Nacional de Cultura e Historia y de la Universidad de Belice: Angel Cal, Joyanne De Four-Babb, Delmer Tzib, Jair Valladarez, Reynaldo Cus, Eric Mendez y Kelsey Robinson.

I
SECCIÓN

Sinopsis



Sinopsis

INDICE	Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo 23	<p>Desde hace 29 años, siete ediciones del <i>Informe del Estado de la Región</i> del Programa Estado de la Nación han analizado las tendencias y el desempeño de los siete países de Centroamérica y, recientemente, de la República Dominicana también, en materia de desarrollo humano sostenible.</p> <p>La presente edición ofrece un agudo contraste con el optimismo del primer Informe, publicado en 1999. En aquella ocasión, se señaló que la región había experimentado una década positiva por primera vez en treinta años, en la que dejó atrás décadas de autoritarismo y conflictos armados, y recuperó la estabilidad política, social y económica. Esta edición, que analiza el período 2018-2023, reporta, en cambio, retrocesos regionales de gran magnitud y profundidad, especialmente en materia institucional y política.</p> <p>Al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, la región CARD se encuentra en la peor y más peligrosa situación desde que dejó atrás los conflictos político-militares a finales de los años ochenta. Visto en perspectiva histórica, el proceso de democratización de la región fue incompleto. Ciertamente amplió, en magnitudes desconocidas en la historia centroamericana y dominicana previa, un conjunto de libertades y derechos y permitió la consolidación de las elecciones como el mecanismo de acceso y relevo del poder.</p> <p>Esta ampliación no se vio acompañada por el fortalecimiento de las instituciones del Estado democrático de derecho, ni de sus capacidades para atender los rezagos históricos en desarrollo humano. Esta democratización parcial tampoco logró responder a las necesidades y expectativas de sociedades que experimentaron, en las décadas recientes, profundas transformaciones. Hoy, vastos segmentos de las ciudadanías de la región, descontentos con los resultados del desarrollo, tienen actitudes ambivalentes con la democracia y favorables a liderazgos autoritarios. En varios países de la región, las élites de poder dominantes utilizan este malestar ciudadano para concitar apoyo para estrategias populistas o autoritarias en la conducción de sus sociedades. Como consecuencia, la región vive, en su conjunto, una tendencia a la autocratización de sus sistemas políticos.</p> <p>La autocratización política no ocurre en una época de estancamiento económico y social. En los últimos treinta años, la mayoría de los países de la región CARD han diversificado sus aparatos productivos y fortalecido sus vínculos con los mercados internacionales a través del dinamismo del comercio exterior y la atracción de flujos crecientes de turismo, remesas e inversión externa directa. Esto permitió niveles de crecimiento económico moderados pero claramente superiores al promedio de América Latina y el Caribe.</p> <p>El crecimiento económico, impulsado por estrategias de desarrollo que variaron de país en país, tuvo dos limitaciones importantes. Por una parte, es ambientalmente insostenible; por otra, es</p>
Mensaje 1. En las últimas tres décadas se profundizaron las brechas de desarrollo dentro de la región 25	
Mensaje 2. El manejo de la pospandemia está erosionando capacidades para el desarrollo humano sostenible y la integración regional 31	
Mensaje 3. La región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares 35	
Mensaje 4. Intensificación de los conflictos geopolíticos globales agravan tensiones dentro de la región 39	
Mensaje 5. La “diáspora interna” reduce aún más la capacidad para atender desafíos estratégicos 42	
Cierre 45	

socialmente excluyente. En relación con el primer punto, este *Informe* documenta que los países de la región CARD consumieron cada vez más recursos naturales y aumentaron sus emisiones contaminantes. En general, se observó un incremento en la huella ecológica y un deterioro del patrimonio natural de la región, base material del desarrollo humano sostenible. En relación con el segundo punto, la distribución de los beneficios y oportunidades de ese desempeño económico fueron claramente desiguales. La persistencia de altos niveles de concentración de los ingresos y bajas cargas tributarias, junto con los rezagos históricos en educación, impidieron que amplios sectores de población tuvieran acceso a empleos de buena calidad y remuneración. Aunque la incidencia de la pobreza disminuyó, más de la mitad de los hogares en Honduras, Guatemala y Nicaragua continúan viviendo en esa condición.

Al difícil tránsito que la región atraviesa se agrega su amplia exposición a un contexto internacional convulso, incierto y volátil, caracterizado por la competencia geopolítica y la guerra comercial. Esta convergencia de factores ha reducido los márgenes de maniobra de los países centroamericanos para emprender acciones que permitan aprovechar oportunidades y mitigar riesgos.

Frente a estos desafíos, las sociedades centroamericanas y la dominicana se encuentran en una doble encrucijada. La primera es la disyuntiva entre fortalecer la democracia para la búsqueda de los acuerdos necesarios que mejoren el bienestar de las personas, o profundizar la autocratización de los sistemas políticos y concentrar el poder en líderes fuertes, aunque ello pudiera socavar los cimientos del Estado de derecho y la tutela de libertades y derechos ciudadanos.

La segunda disyuntiva es relanzar el proceso de integración regional con el fin de fortalecer la voz de esta pequeña región dentro del concierto internacional y crear oportunidades a mayor escala para impulsar el desarrollo humano sostenible, o crear una “diáspora interna” que desarticule por completo la región y exponga a los países a relacionarse de forma bilateral con las potencias, en un mundo en donde la competencia geopolítica se ha intensificado exponencialmente.

A partir de estas consideraciones, la presente edición del *Informe* plantea cinco mensajes clave, cada uno se desarrolla en una sección de este capítulo. Resulta importante advertir que estos mensajes hilvanan conclusiones centrales de los más de 20 estudios e investigaciones realizadas. Sin embargo, no procuran sintetizar los hallazgos y análisis específicos de los capítulos temáticos que comprende esta entrega.

- En las últimas tres décadas se profundizaron las brechas de desarrollo dentro de la región.
- El manejo de la postpandemia está erosionando capacidades para impulsar el desarrollo humano sostenible y la integración regional.
- La región atraviesa por la peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares.
- La intensificación de los conflictos geopolíticos globales agrava tensiones dentro de la región.
- La “diáspora interna” reduce aún más la capacidad para atender desafíos estratégicos

Mensaje 1

En las últimas tres décadas se profundizaron las brechas de desarrollo dentro de la región

El *Primer Informe Estado de la Región* (1999) reportó que, por primera vez en treinta años, Centroamérica había experimentado una década positiva, en la que dejó atrás décadas de autoritarismo y conflictos armados, y recuperó la estabilidad política, social y económica.

Casi tres décadas después, la región muestra logros económicos y sociales en áreas clave del desarrollo humano sostenible, pero a partir de niveles de rezago profundos y un ritmo de progreso desigual entre los países. La insuficiencia de las oportunidades generadas por este desempeño ha hecho de la región una expulsora neta de población, especialmente hacia los Estados Unidos.

Esta situación ha generado una cre-

ciente asimetría entre Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, los más dinámicos económicamente y más estables en términos políticos, y el centro norte de la región, el más rezagado y con mayor inestabilidad.

Pacificación de Centroamérica abrió una época de profundas transformaciones

Durante las últimas tres décadas, los países de CARD experimentaron profundas transformaciones que les dan características distintas a sus sociedades, economías, patrimonio natural y sistemas políticos. De acuerdo con el Informe Estado de la Región (2008), la región atravesó por múltiples transicio-

nes, además de la propiamente política: transiciones demográficas, económicas y acelerada urbanización.

En la actualidad, la región cuenta con cerca de 65 millones de habitantes, 28 millones más que en 1990. Debido al proceso de transición demográfica vivido en los países, aumentó la proporción de población en edad laboral (de 15 a 64 años) y disminuyó el porcentaje de menores de 14 años. Mientras en 1990 el primer grupo representaba, en promedio, cerca de la mitad de la población en la región, en el 2025 aumentó a cerca de dos terceras partes del total. En contraste, la proporción de personas menores de 14 años de edad pasó del 41% al 26% (cuadro 0.1).

Cuadro 0.1

Región CARD
Indicadores demográficos y económicos según año, por país

Indicador/año	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	República Dominicana
Población total (miles de personas)								
1990	183	3.122	5.400	9.025	4.981	4.163	2.456	7.151
2000	241	3.938	5.943	11.698	6.578	5.023	3.010	8.584
2025	423	5.153	6.366	18.688	11.006	7.008	4.571	11.521
Porcentaje de población rural								
1990	53,0	50,0	51,0	66,0	60,0	47,0	46,0	45,0
2000	55,0	41,0	43,0	57,0	55,0	45,0	38,0	38,0
2025	53,0	16,0	25,0	37,0	41,0	41,0	31,0	15,0
Porcentaje de población menor de 14 años								
1990	44,0	36,0	42,0	45,0	46,0	46,0	36,0	39,0
2000	40,0	31,0	37,0	44,0	43,0	40,0	32,0	35,0
2025	26,0	18,0	24,0	31,0	30,0	28,0	25,0	26,0
Porcentaje de población entre 15 y 64 años								
1990	52,0	60,0	55,0	51,0	51,0	51,0	60,0	57,0
2000	56,0	63,0	58,0	52,0	54,0	56,0	63,0	60,0
2025	69,0	69,0	67,0	64,0	65,0	66,0	66,0	66,0

Continúa >>

Cuadro 1 (continuación)

Región CARD

Indicadores demográficos y económicos según año, por país

Indicador/año	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	República Dominicana
Producto interno bruto (PIB) total a precios constantes (millones de dólares)								
1990	792	18.719	13.110	26.474	8.637	5.087	13.931	19.391
2000	1.435	30.220	18.220	39.627	11.935	7.100	22.827	34.947
2023	2.786	72.613	29.235	87.302	27.279	14.876	79.027	101.003
Sector agropecuario como porcentaje del PIB								
1990	14,9	15,8	17,0	25,9	24,2		8,3	14,7
2000	11,7	10,2	7,7	22,8	15,2	20,3	6,6	7,4
2023	9,6	4,1	5,2	10,5	12,6	17,2	2,5	6,8
Sector servicios como porcentaje del PIB								
1990	58,9	58,5	58,2	54,3	44,3		71,6	52,2
2000	63,1	61,7	63,2	57,4	53,7	56,7	74,4	57,6
2023	73,6	73,7	66,9	65,7	60,1	52,1	69	59,9

Fuente: Elaboración propia con datos de CepalStat.

El cambio de sociedades rurales a urbanas fue otra de las transiciones que experimentó la región. En 1990, cerca de la mitad de la población (52%) vivía en zonas rurales. Para el 2025, se prevé que la mayoría la población (68%) resida en las ciudades capitales y otros centros urbanos. Además, durante el período 1975-2014, el crecimiento de las áreas metropolitanas configuradas por las ciudades capitales y sus periferias creció de manera acelerada y desordenada.

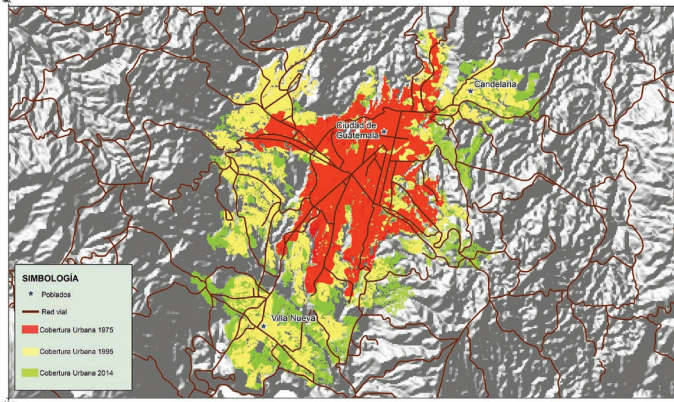
De acuerdo con una investigación del Quinto Informe Estado de la Región con base en el análisis de imágenes Landsat, las ciudades capitales de Belice y Panamá fueron las que más crecieron. Entre 1975 y el 2014, el área metropolitana de Belmopán aumentó 3,2 veces, en coincidencia con el traslado de la capital de este país de Belice City en la costa, a Belmopán. En el caso de la Ciudad de Panamá, el incremento del área fue de 2,4 veces en ese mismo período (mapa 0.1). En El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua la expansión de las manchas metropolitanas fue menor, pero siempre en una magnitud importante: osciló entre 1,5 y 2 veces. Tegucigalpa fue la capital con el menor crecimiento en el período (su área aumentó 0,9 veces entre 1975 y 2014) (PEN, 2016).

Mapa 0.1

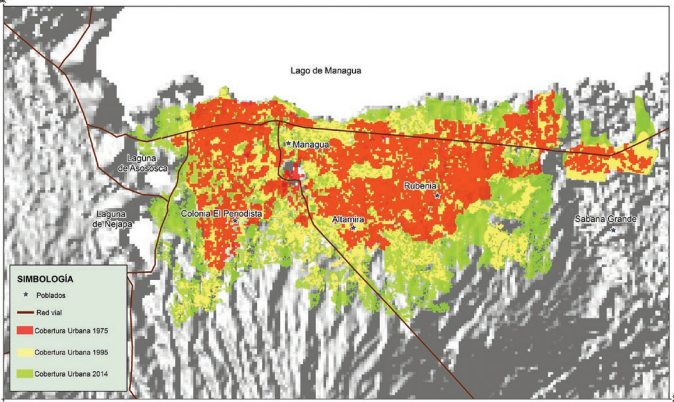
Región CARD

Mancha metropolitana por país. 1975, 1995, 2014

a) Ciudad de Guatemala, Guatemala



b) Managua, Nicaragua



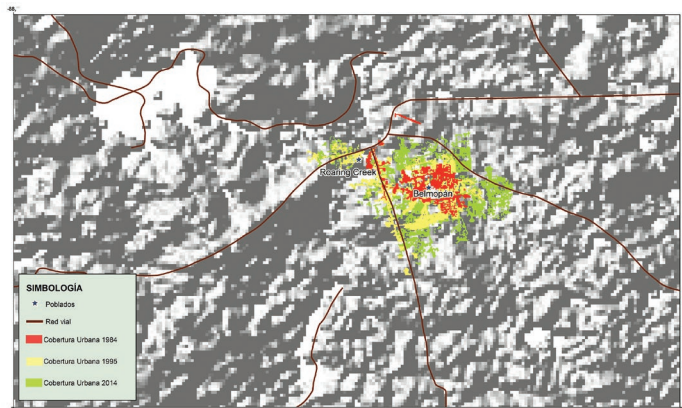
Continúa >>

Mapa 0.1 (continuación)

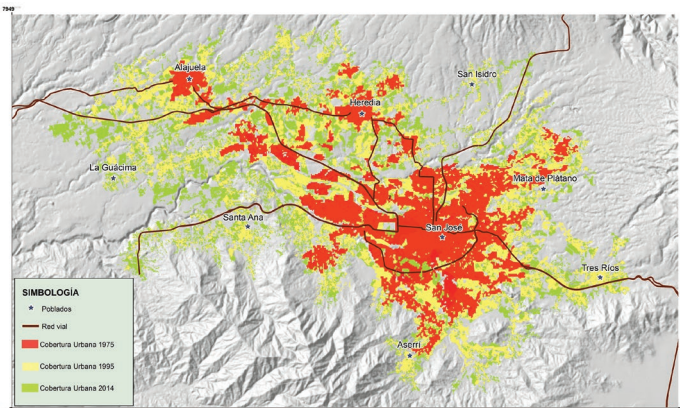
Región CARD

Mancha metropolitana por país. 1975, 1995, 2014

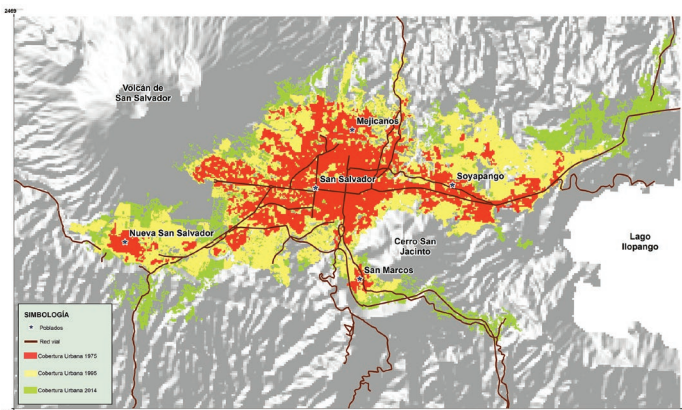
c) Belmopán, Belice



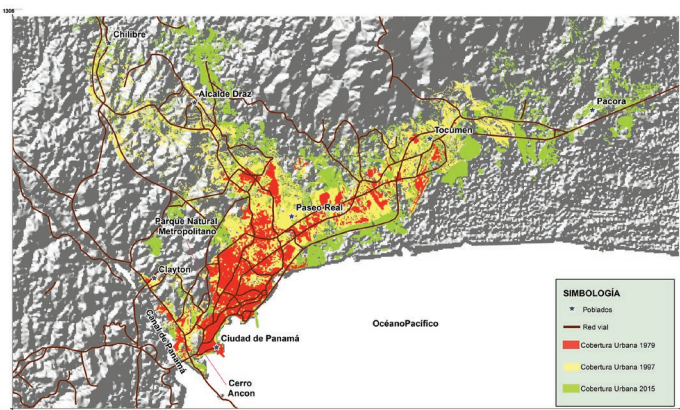
d) San José, Costa Rica



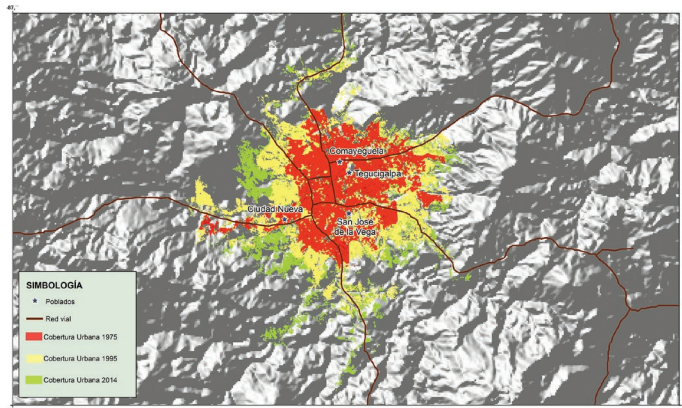
e) San Salvador, El Salvador



f) Ciudad de Panamá, Panamá



g) Tegucigalpa, Honduras



- Red vial
- Cobertura urbana 1975
- Cobertura urbana 1995
- Cobertura urbana 2014

Fuente: Orozco et al., 2015.

Finalmente, las economías de CARD experimentaron profundas transformaciones como consecuencia del reemplazo de la estrategia de sustitución de importaciones, que predominó durante el tercer cuarto del siglo XX, a una estrategia de promoción de exportaciones y atracción de flujos de inversión extranjera directa, turismo y remesas.

Durante tres décadas y media, el sector de servicios y, en menor medida, la industria desplazaron gradualmente al sector agrícola. En el año 2023 casi dos terceras partes del PIB de los países de la región estuvieron asociadas a actividades de servicios y en el período 1990-2023 este sector aumentó su peso relativo en la economía de la mayor parte de los países de la región entre 7,7 y 15,8 puntos porcentuales (cuadro 0.1).

Diferencias económicas entre los países se multiplicaron casi cuatro veces

Todos los países de la región CARD impulsaron la apertura de sus economías al comercio y las finanzas internacionales para generar crecimiento económico y progreso social desde finales del siglo pasado. Como resultado, en el 2025 las economías son mucho más diversificadas que en 1990 y tienen fuertes vínculos con los mercados internacionales.

Uno de los principales logros de la región es que, en las últimas décadas, su crecimiento económico ha sido alto cuando se le compara con los niveles promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ese desempeño ha estado asociado a la incorporación de una cantidad cada vez mayor de personas al mercado de trabajo, no a mejoras en la productividad laboral. Así, en el 2023 el producto por trabajador promedio de la región CARD (36.688 dólares) fue un 16% más bajo que el promedio latinoamericano. Representó, además, apenas un 33% del nivel promedio de este indicador en los países de la Unión Europea y un 24% del de Estados Unidos.

Cuando la región no disponga de la población en edad productiva (de 15 a 64 años) que tiene actualmente, sus posibilidades de crecimiento dependerán de que

Cuadro 0.2

Región CARD

Situaciones estratégicas prototípicas de la inserción en la economía internacional

Estilo de inserción	Resultados económicos y sociales	
	Bajos	Intermedios
Agroexportación con maquila industrial liviana y migración ^{a/}	Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador	
Maquila industrial liviana y turismo		República Dominicana
Agroexportación con manufactura de media y alta tecnología, servicios especializados y turismo		Costa Rica
Centro logístico internacional y turismo		Panamá

a/ Estos países son expulsores.
Fuente: Elaboración propia con base en PEN, 2008.

quienes se encuentren en ese grupo de edad sean altamente productivos. El bajo nivel educativo imperante en la región CARD limita la competitividad y productividad de esta población.

Las estrategias productivas adoptadas por los países para la apertura y su inserción en la economía internacional fueron distintas. Mientras que Panamá y Costa Rica y, se debería agregar, la República Dominicana, ampliaron considerablemente la oferta exportable, así como la complejidad de los bienes y servicios de esas ofertas, en los demás países los productos se comercian dentro de la región y suelen ser más intensivos en el uso de mano de obra y materias primas. Además, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala se convirtieron en expulsores de población en edad laboral.

En términos generales, pueden reconstruirse cuatro apuestas productivas en las que los países encajan. La más frecuente fue la adoptada por los países del norte de istmo centroamericano, la cual combinó una apertura basada en la agroexportación, la maquila industrial liviana y la exportación de personas (migración), con distintos niveles de importancia del sector turismo. La segunda apuesta es la de la República Dominicana que fue especialmente exitosa en el desarrollo de la maquila industrial y el turismo. Costa Rica adoptó una estrategia distinta en

la que un sector agroexportador modernizado se combinó con el desarrollo de una manufactura de media y alta tecnología, el desarrollo de servicios especializados de alto valor agregado y el turismo. Panamá adoptó un camino muy distinto, al consolidarse como un centro logístico internacional (cuadro 0.2).

Los resultados de estas estrategias productivas fueron muy distintos y, a lo largo de las décadas, crearon mayores asimetrías intrarregionales. Hoy, la diferencia en el tamaño de las economías de los países más dinámicos (Costa Rica, Panamá y la República Dominicana) y los más rezagados es mucho mayor que treinta años atrás. Mientras los del primer grupo lograron aumentar su PIB per cápita entre 2,4 y 3,3 veces durante el período 1990-2023, el incremento de los segundos osciló entre 1,5 y 1,9 veces.

La diferencia en el PIB promedio por habitante entre ambos grupos de países pasó de 2.601 dólares en 1990 a 8.302 dólares en el 2023. Esa brecha se ve con claridad cuando se compara el indicador de Nicaragua con el de los demás países para esos años. En los países del primer grupo, excepto en Belice, la diferencia en 1990 se amplió debido a su mayor ritmo de crecimiento económico durante las siguientes décadas. En contraste, la diferencia entre Nicaragua y los demás países se mantuvo relativamente similar

(gráfico 0.1). De ahí la calificación que se hace de los resultados económicos y sociales en el cuadro 0.2.

Un lento y desigual progreso social caracteriza la historia regional reciente

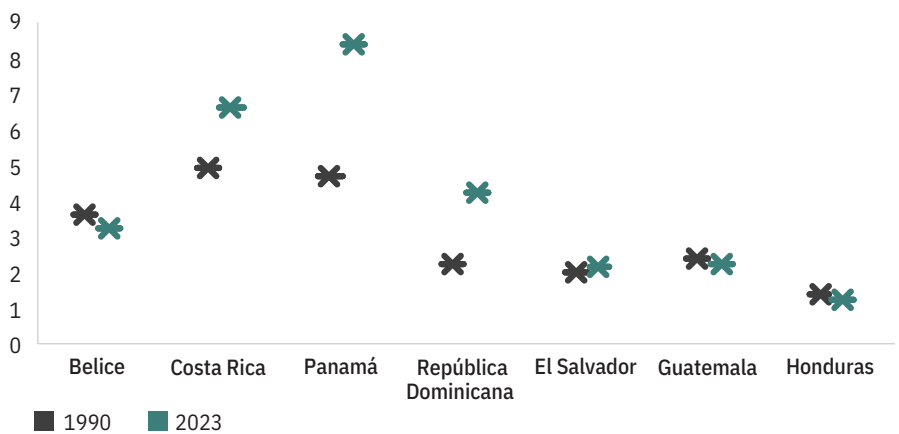
El crecimiento económico en la región CARD permitió una mejora de largo plazo en las condiciones sociales de la población. En el 2024, la esperanza de vida al nacer osciló entre 72 y 81 años, lo cual representa una ganancia de 4 a 13 años en relación con 1990. La tasa de mortalidad infantil se redujo significativamente en todos los países, un indicador clave de esta mejora social. Por último, el porcentaje de población alfabetizada aumentó a poco más del 80% en Nicaragua y Guatemala, y es cercana o mayor al 90% en el resto de la región, una mejora de entre 20 y 30 puntos en relación con 1990 (cuadro 0.3).

Dos de los logros relevantes durante el período 1990-2023 son cierta reducción de la pobreza y de la concentración de los ingresos. En el 2023, en casi todos los países, el porcentaje de hogares en condición de pobreza fue entre 2 (Costa Rica) y 32 (República Dominicana) puntos

porcentuales menor al de 1990. La excepción es Honduras, que al inicio de ese período era el país más pobre de la región y continúa siéndolo. En este país la proporción de hogares en esa situación aumentó de 75% a 79% (gráfico 0.2a).

Por su parte, la relación entre los ingresos promedio de la quinta parte de los hogares de mayores ingresos (quintil 5) y la quinta parte de menores ingresos (quintil 1) disminuyó en todos los países para los que existe información. Guatemala

Gráfico 0.1
Región CARD
Relación entre el PIB por habitante de cada país y el de Nicaragua^{a/}



a/ El PIB por habitante de Nicaragua a dólares constantes del 2018 fue de 1.203 en 1990 y de 2.111 en el 2023.
Fuente: Elaboración propia con datos de CepalStat.

Cuadro 0.3

Región CARD
Indicadores sociales de largo plazo

Indicador/año	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	República Dominicana
Esperanza de vida al nacer (años)								
1990	69,6	76,1	62,0	61,8	65,2	62,5	71,3	67,7
2000	68,9	77,3	67,7	67,1	68,3	66,4	73,4	70,4
2024	73,7	81,0	72,3	72,7	73,0	75,1	79,8	73,9
Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)								
1990	32,0	14,7	54,0	61,5	45,7	58,2	23,6	55,1
2000	20,5	11,2	27,1	41,3	30,2	31,3	19,7	38,2
2024	8,7	6,4	9,3	17,2	12,6	10,9	10,3	25,3
Tasa de alfabetización de la población mayor de 15 años								
1990	70,0	94,0	69,0	53,0	69,0	64,0	89,0	73,0
2000	81,0	95,0	84,0	69,0	80,0	77,0	92,0	87,0
2022	91,0	98,0	90,0	84,0	89,0	83,0	96,0	96,0

Fuente: elaboración propia con datos de CepalStat y Flacso, 2002.

fue el país en el que esa reducción fue mayor: pasó de 46 en el año 2000 a 20 en el 2023. En cambio, Costa Rica experimentó la menor disminución de la desigualdad (gráfico 0.2b).

La reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos en la mayoría de los países de la región fue insuficiente. Varios de ellos siguen estando entre los países de América Latina y el Caribe con mayor pobreza, pues más de la mitad de los hogares continúa viviendo en esa condición y persiste la concentración de los ingresos en niveles superiores a los promedios del resto del hemisferio americano. Este insuficiente progreso social denota la dificultad de traducir los beneficios del crecimiento económico en mayores oportunidades y bienestar para amplios grupos de la población. Como consecuencia de la falta de oportunidades, un gran contingente en edad laboral emigró fuera de la región, principalmente a Estados Unidos y México. En la actualidad, cerca del 11% de la población de CARD vive fuera de sus países de origen, principalmente en Estados Unidos.

Como lo documenta una de las investigaciones preparadas para este *Informe*, en años recientes Centroamérica experimentó cambios en los flujos migratorios. Además de expulsar población, la región se convirtió en el principal corredor migratorio del hemisferio por donde transitan miles de personas desde América del Sur y el Caribe, así como de otros continentes (Asia y África) en su camino hacia Estados Unidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIGRACIONES

véase sección Panorama demográfico en el Capítulo 1 de este *Informe*
Feldmann y Sturino, 2024, en
en www.estadonacion.or.cr

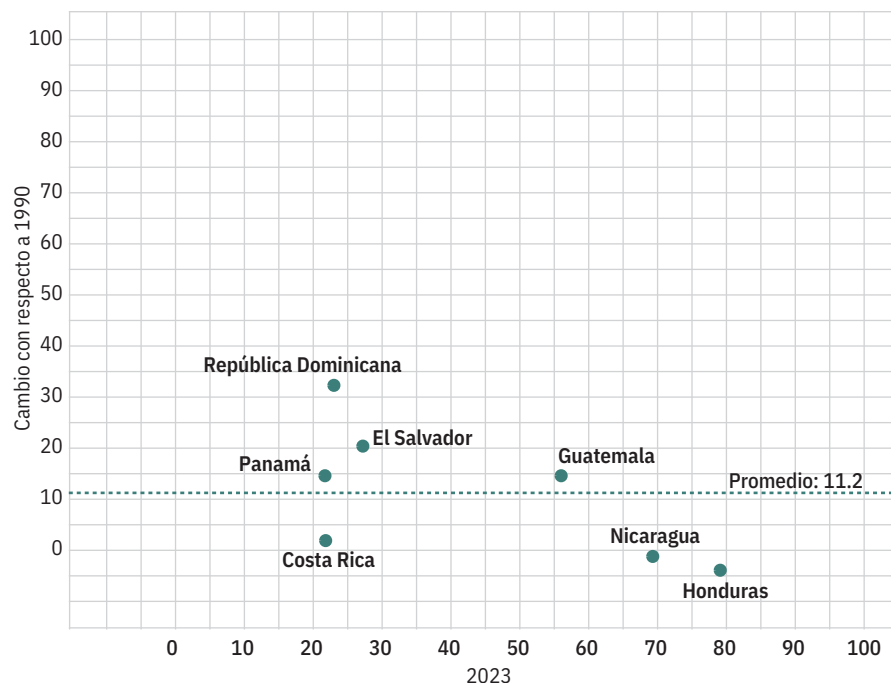
El ritmo de progreso social ha sido desigual entre los países. Coherente con el desempeño económico, los mayores rezagos se concentran en Honduras, Guatemala y Nicaragua, en donde aún más de la mitad de los hogares son pobres. El nivel educativo de la población

Gráfico 0.2

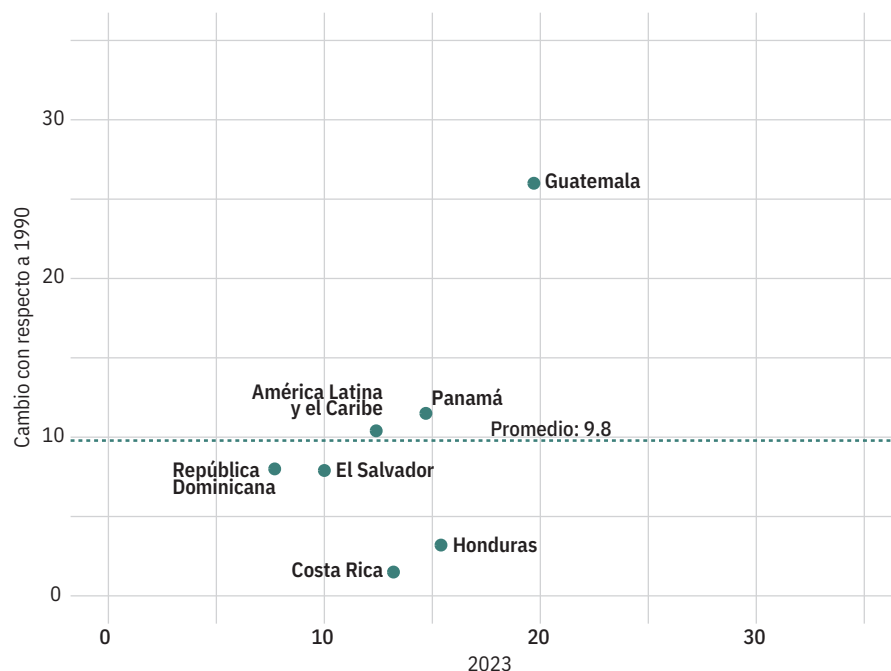
Región CARD

Pobreza y desigualdad de ingreso

a) Cambio de largo plazo en el porcentaje de hogares pobres^{a/}



b) Cambio de largo plazo en la relación entre el ingreso promedio de los hogares del quintil 5 y el quintil 1



a/ Los datos de Panamá y la República Dominicana para el último año corresponden al 2022.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Flacso, 2002 y CepalStat.

en edad laboral (de 15 a 64 años) también evidencia fuertes brechas intrarregionales. Los casos extremos son Honduras y Guatemala, en los que cerca de la mitad de la población en este grupo de edad ni siquiera completó la educación primaria (véase detalles en Panorama económico).

El rezago de Guatemala, Honduras, Nicaragua y, en menor medida, de El Salvador coincide con los bajos niveles de inversión social que han tenido estos países durante las últimas décadas.

La diferencia en los montos promedio por habitante al año invertidos en Belice, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana en relación con los demás pasó de 337 dólares en el año 2000 a 718 dólares en el 2023.

Desde una perspectiva de largo plazo, los avances sociales en la región son insuficientes, máxime a la luz del proceso de transición demográfica que actualmente experimentan los países, como se analiza con más detalle en el capítulo 2

de este *Informe* y en la edición anterior (2021). En ese contexto, la región necesita avanzar rápidamente para modernizar las economías mediante la incorporación de actividades de mayor valor agregado y productividad, transformar sus matrices energéticas para disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados y aumentar la participación de fuentes renovables y locales, así como mejorar la cobertura y calidad de los servicios sociales de salud y educación.

Mensaje 2

El manejo de la postpandemia está erosionando capacidades para el desarrollo humano sostenible y la integración regional

El anterior *Informe Estado de la Región*, publicado en julio del 2021 cuando el mundo aún se encontraba viviendo los efectos de la pandemia del Covid-19, documentó el profundo *shock* económico y social que esta provocó. Esta edición analiza los cambios en la región después de la pandemia. En términos generales, la evidencia muestra que en todos los países hubo recuperación económica y ciertas mejoras sociales en comparación con los desafíos por los que atravesaron la región CARD y el mundo en esa coyuntura.

Sin embargo, de acuerdo con los principales indicadores disponibles para el período 2018-2023, la recuperación postpandemia fue de corto aliento. Luego del “efecto rebote”, el ritmo de crecimiento económico ha sido de débil a moderado, según el país que se examine y, como consecuencia de los problemas fiscales de los Estados, la inversión social en la mayoría de las naciones se ancló en umbrales inferiores a los de la década anterior.

La región vuelve a los patrones prepanadémicos de crecimiento económico excluyente

En el año 2021, los países de la región experimentaron una fuerte recuperación económica debido a la reactivación del sector turístico y al incremento en los

flujos de remesas e inversión. El crecimiento regional promedio en ese año fue del 11%, casi el doble del de América Latina y el Caribe (6,5%). No obstante, durante los años siguientes (2022 y 2023) se desaceleró a consecuencia, entre otros factores, de la crisis mundial de contenedores. Esto provocó que, en el 2023, dos de las economías más grandes la región, Guatemala y la República Dominicana, tuvieran un crecimiento inferior al del 2019, previo a la pandemia.

El crecimiento económico postpandemia permitió que todos los países disminuyeran los niveles de desempleo y mejoraran la productividad en el mercado laboral en relación con el año 2020. Así, en el 2023 la tasa de desempleo volvió a niveles similares a los del 2018. Asimismo, el sector informal, fuertemente afectado durante la pandemia, retomó su papel protagonista como precaria fuente de empleo e ingresos para la mayoría de la población regional, en consonancia con el período prepanadémico.

En el mercado laboral persisten brechas que impiden que el crecimiento económico se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para amplios sectores de la población. En primer lugar, las mujeres tienen barreras para acceder al empleo, sus tasas de participación laboral son entre 22 y 40 puntos porcentuales menores a las de los hombres y sus niveles

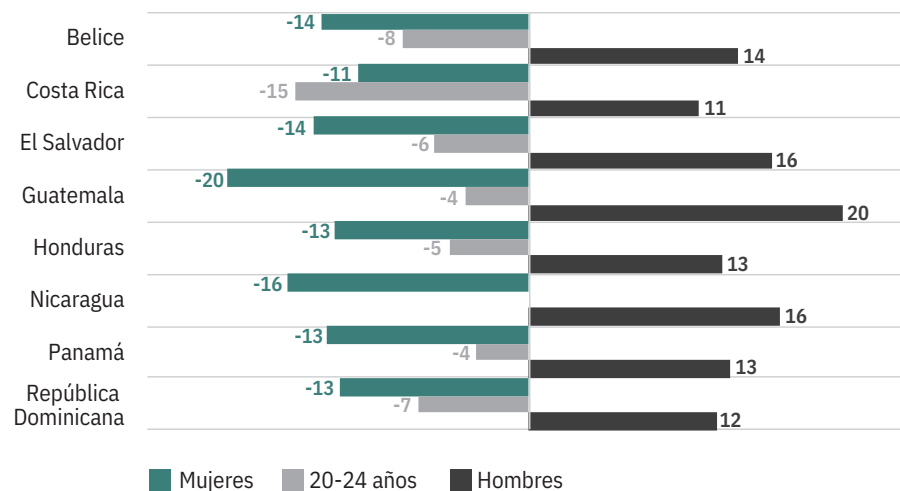
de desempleo son hasta el doble de los masculinos (gráfico 0.3). Estas barreras están asociadas a la fuerte carga de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que tienen las mujeres. Además, aquellas que logran obtener un empleo, suelen recibir salarios menores a los de los hombres (véase el Panorama económico del capítulo 1). La segunda brecha afecta a la población joven (de 20 a 24 años), pues el porcentaje de quienes logran insertarse en el mercado laboral es entre 11 y 23 puntos porcentuales menor al de las personas con edades de 30 a 49 años.

Cabe destacar que los sectores más dinámicos de las economías de la región tienen una baja participación en el PIB y el empleo, mientras que los de menor crecimiento poseen mayores encadenamientos productivos y de empleo (PEN, 2021). Esta dualidad hace que el crecimiento económico tenga dificultades en traducirse en mayores oportunidades de empleo e ingresos para la mayoría de la población en edad de trabajar, cuyas certificaciones laborales no encajan con la demanda laboral de estos sectores dinámicos.

La desaceleración económica de los últimos tres años converge con la pertinaz fragilidad de las finanzas públicas en la región CARD, situación que implica riesgos para la estabilidad y la solvencia

Gráfico 0.3

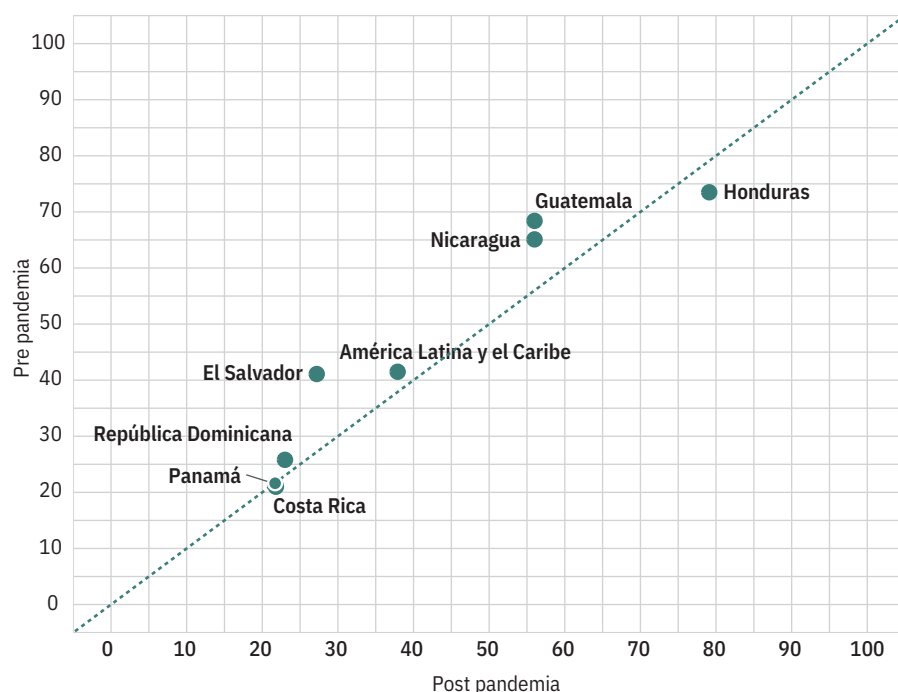
Región CARD

Brecha entre la tasa de participación en el mercado laboral nacional y según sexo y grupo etáreo, por país. 2022

Fuente: Hidalgo, 2025 con datos del Banco Mundial, 2024 y Fernández, 2023.

Gráfico 0.4

Región CARD

Porcentaje de hogares en condición de pobreza según país, pre y pospandemia^{a/}

a/ El año prepandemia corresponde al 2019, excepto en Guatemala que corresponde al año 2014. El post pandemia al 2023, excepto para Panamá y República Dominicana que corresponden año 2022. Fuente: Segura, 2025 con base en Echeverría y Fernández, 2025b y datos de las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

económicas. Los países siguen registrando fuertes déficits fiscales y alto endeudamiento público como consecuencia de sus niveles de gasto y bajas cargas tributarias. Cabe recordar que todos los países de CARD presentan cargas tributarias iguales o menores al 20% del PIB, nivel que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22%) y son aún más bajas en relación con el nivel promedio de los países de la OECD (34%).

Durante los años de la pandemia hubo aumento en los déficits como consecuencia del incremento de los gastos asociados a su atención y luego debido al alto servicio de la deuda provocado por el endeudamiento. En el 2022 y el 2023, el endeudamiento disminuyó, pero la relación deuda-PIB sigue siendo más alta que antes del 2020 en todos los países, excepto en Belice. Estas tensiones entre el nivel de gasto público, el endeudamiento y el déficit fiscal configuran un círculo vicioso perverso que limita las inversiones que la región requiere para impulsar su desarrollo humano sostenible.

Países reducen la inversión social pese a los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad

Después de la pandemia, los países lograron reducir sus niveles de pobreza con respecto al peor año de la emergencia sanitaria. Sin embargo, los bajos niveles de inversión social pública, la alta desigualdad económica y la pérdida de cobertura y calidad de servicios básicos, como la educación, han impedido que esa mejoría logre superar la situación existente antes de la pandemia. En términos generales, los indicadores sociales alcanzaron los niveles de la década anterior con varios años de retraso.

Luego de la pandemia, casi todos los países -a excepción de Honduras- disminuyeron la incidencia de la pobreza, aunque levemente. El Salvador y Guatemala tuvieron disminuciones muy significativas: 25 y 18 puntos porcentuales, respectivamente, y por eso se ubican muy por debajo de la diagonal en el gráfico 0.4, que representa una situación de

estabilidad entre el 2019 y el 2023. Estos resultados llaman la atención porque en ese período ninguno de estos dos países tuvo altas tasas de crecimiento económico ni fuerte expansión de la inversión social. Los demás países están muy cerca de esa diagonal, lo cual indica pocos cambios. Por su parte, en el 2023 el índice de Gini disminuyó en todos los países de la región, si se compara con el 2010. Sin embargo, los niveles actuales continúan siendo superiores al promedio de América Latina, una región catalogada como la segunda más desigual del mundo (PNUD, 2019)¹.

Durante la pandemia, los países elevaron sus niveles de inversión social, sobre todo en protección social y salud. Sin embargo, una vez superada la emergencia, la inversión en estas áreas disminuyó considerablemente. Además hubo caída en la inversión educativa, aunque fue menor que la reducción en salud. En términos generales, la inversión se estabilizó en niveles similares, y en algunos países menores, a los existentes previos a la pandemia.

En el año 2023, la inversión social promedio por habitante en América Latina fue 1,6 veces mayor a la de CARD, la de Uruguay fue 4,8 veces mayor, la de Argentina 2,3 veces, la de México 1,6 veces y la de Colombia 1,5 veces mayor.

En salud, contrasta el bajo nivel de inversión pública con los cambios en el perfil epidemiológico de la región, actualmente dominado por enfermedades crónico-degenerativas prevenibles como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, cuyo tratamiento es altamente costoso. En el año 2023, la inversión en salud por habitante fue menos de cien dólares al año por habitante en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, entre 125 y 173 dólares en Belice, República Dominicana y El Salvador y 378 dólares en Panamá.

Los niveles de inversión pública en educación son mayores que en salud. Sin embargo, en el 2023 varios países no habían alcanzado los niveles previos a la pandemia y en la mayoría de ellos los niveles de cobertura educativa en el 2023 eran inferiores a los registrados en el 2019, antes de la pandemia, incluso en

primaria, donde se habían alcanzado los mayores logros (gráfico 0.5). Además, los resultados de las pruebas PISA 2022 evidencian graves problemas de calidad educativa en cinco de los ocho países de la región.

Mejoría en la sostenibilidad ambiental fue un artificio del shock económico de la pandemia

En el 2020, como consecuencia de las medidas aplicadas para contener el contagio durante la pandemia del Covid-19, el consumo de recursos naturales se desaceleró y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron. Esta situación produjo una reducción de la huella ecológica en la mayoría de la región CARD y, en general, en casi todo el planeta. No obstante, la eliminación de esas restricciones sanitarias y la reactivación económica hicieron que los países continuaran profundizando los patrones ambientalmente insostenibles de años previos.

Existen avances en la generación de energía con fuentes renovables en toda CARD. Sin embargo, el consumo energético continúa concentrado en combustibles fósiles. Esto, junto con los cambios en el uso del suelo, son los principales factores que explican que la huella ecológica sea cada vez mayor. En el 2022, el déficit ecológico de la región fue alto pues se requiere de un 43% de territorio adicional para soportar los patrones de consumo de recursos naturales y la contaminación generada. De los ocho países de la región cinco se encontraban en una situación de déficit, cuatro de ellos con una magnitud especialmente alta, superior al promedio regional (gráfico 0.6).

La integración regional experimenta una grave y prolongada crisis político-institucional

La atención de la pandemia fue una oportunidad para que los Gobiernos de la región CARD aprovecharan la institucionalidad de la integración regional para desarrollar acciones conjuntas y coherentes. En retrospectiva, puede afir-

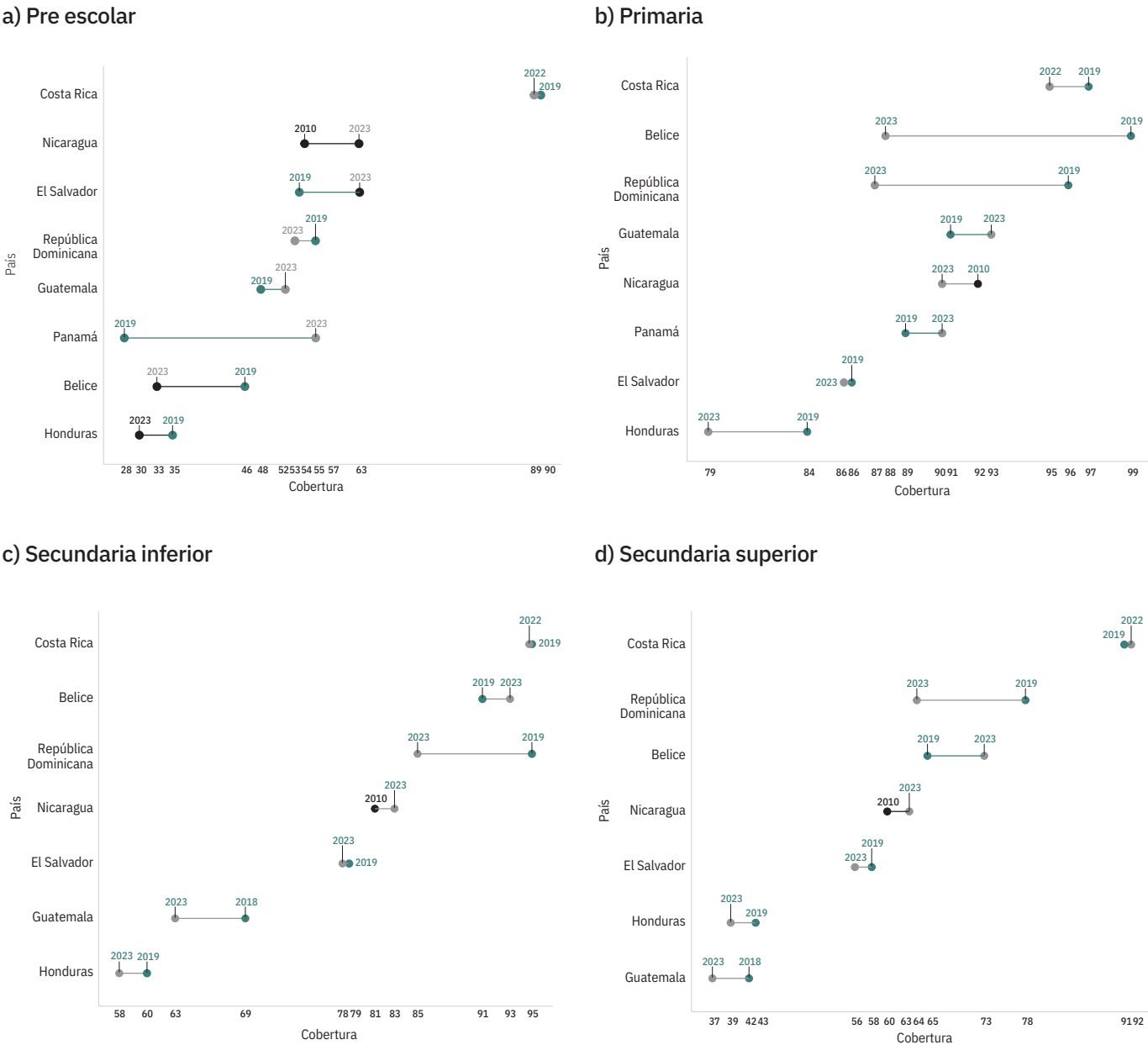
marse que, en efecto, se activaron espacios de coordinación e intercambio de esta institucionalidad, entre ellos la convocatoria a una reunión extraordinaria con los jefes de Estado y la promulgación de un Plan de Contingencia Regional en el 2020. Sin embargo, en la práctica, los Gobiernos relegaron a la institucionalidad regional a un plano secundario en la atención de la emergencia sanitaria.

Tal como fue señalado en el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021), la mayoría de las acciones de la institucionalidad regional quedaron limitadas a esfuerzos de coordinación entre instituciones regionales y el intercambio de información. En lo fundamental, los Gobiernos atendieron los efectos de la pandemia con un mínimo de coordinación y cooperación regional, pese a la existencia de espacios formales de diálogo político y mecanismos como la compra conjunta de medicamentos, el cual pudo haberse utilizado para adquirir vacunas.

En los años posteriores a la pandemia, el debilitamiento de la institucionalidad de la integración se profundizó. Un examen de lo ocurrido entre el 2021 y el 2024 permite afirmar que la falta de apoyo político de los Gobiernos al sistema se acentuó al punto que actualmente atraviesa su momento más crítico desde la creación del SICA en 1991.

La celebración de reuniones de presidentes, la instancia de mayor jerarquía en la conducción política del sistema de integración se redujo drásticamente. Estos encuentros disminuyeron de cuatro anuales en el período 2000-2010 a menos de uno en los últimos años. Además, ocurrió algo inédito: una prolongada acefalía de la Secretaría General del SICA. En 27 de los 48 meses que van desde enero del 2021 a diciembre del 2024, el puesto estuvo desocupado (56% del total del tiempo). Esta acefalía se mantiene hasta el día de hoy producto de las desavenencias entre los Estados miembros. Esta coyuntura coincidió con retrocesos en la transparencia y rendición de cuentas. Especialmente notable es la desactualización del Sistema de la Cooperación Regional (Sicor) y la falta de presentación de informes sobre el desempeño institucional.

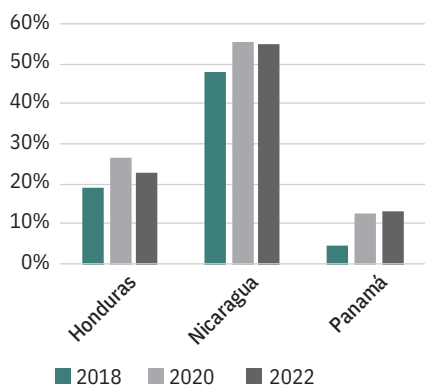
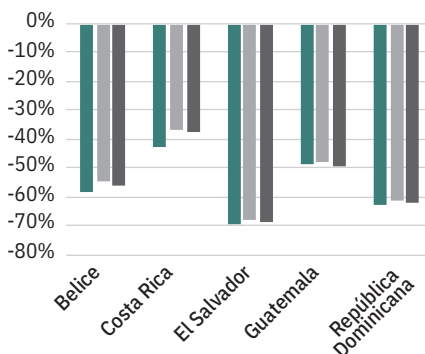
Gráfico 0.5
Región CARD
Tasas de cobertura netas de educación



a/ Déficit o superávit ambiental definido por la diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad.
Fuente: Segura, 2025 con datos de Unesco.

Gráfico 0.6

Región CARD

Balance ambiental^{a/} por país**a) Superávit****a) Déficit**

a/ Déficit o superávit ambiental definido por la diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad.
Fuente: Segura, 2025 con base en Echeverría y Fernández, 2025a con datos de Global Footprint Network.

El abandono político de los gobiernos nacionales del proceso ahondó los problemas estructurales de la integración reportados en ediciones previas de este Informe. Entre ellos cabe destacar la morosidad en el pago de cuotas de los países miembros, las asimetrías en la participación de los países en las instituciones y órganos de la integración regional, la dependencia de los recursos aportados por la cooperación internacional y los débiles mecanismos de articulación y coordinación intersectorial.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
**SECCIÓN DE PANORAMA DE
INTEGRACIÓN REGIONAL**

véase el capítulo 1 de este Informe y
Johanning et al., 2025
en www.estadonacion.or.cr

Mensaje 3

**La región atraviesa por la peor y más peligrosa
situación política desde la época de los conflictos
militares**

Al cumplirse el primer cuarto del siglo XXI, la región CARD enfrenta una situación de particular riesgo y gravedad. En los últimos años, los países han experimentado retrocesos políticos e institucionales que, en algunos casos, han erosionado o anulado por completo la posibilidad de contar con libertades, derechos y garantías para la convivencia democrática en sociedad y para la estabilidad y seguridad jurídica que requieren los negocios y el funcionamiento de la economía.

Esta situación coincide con un contexto internacional convulso e incierto que implica riesgos para sociedades con economías abiertas como las de CARD, y dinámicas ambientales y demográficas que reducen los márgenes de maniobra disponibles para la acción pública.

En este contexto, no actuar o “hacer más de lo mismo” implicará dejar de aprovechar los beneficios (y maximizar las amenazas) asociadas a procesos

que hoy son una realidad en la región como la transición demográfica, los cambios productivos asociados a la Cuarta Revolución industrial, la irrupción de la inteligencia artificial y la adaptación al cambio climático. En todos los casos, la naturaleza de estas dinámicas implica trascender visiones de corto plazo y tomar conciencia de que se necesita actuar hoy pero con la mirada puesta en el futuro y, por lo tanto, que los esfuerzos sean sostenibles y acumulativos en el tiempo.

**Diversidad de sistemas
políticos en la región CARD
propicia tensiones entre los
países**

En la actualidad, la región CARD alberga una gran diversidad de regímenes políticos, desde una democracia liberal hasta autocracias, semidemocracias y regímenes híbridos, sistemas que combinan

rasgos democráticos con otros autoritarios (Levitsky y Way, 2004). Este es un hecho llamativo para un pequeño espacio geográfico vinculado entre sí por lazos históricos, económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos (mapa 0.2).

La diversidad política puede presentar desafíos para la coordinación y la gestión de las dinámicas compartidas del desarrollo, como lo evidencia el debilitamiento del proceso de integración centroamericano. Investigaciones académicas demuestran que las democracias tienden a tener relaciones estables entre sí, mientras que las interacciones entre dictaduras y democracias suelen ser conflictivas, y los regímenes híbridos son más propensos a la inestabilidad política en comparación con los sistemas democráticos.

Esta variedad de sistemas políticos es resultado de procesos de regresión democrática o autocratización en varios países de CARD. En dos de ellos (Nicaragua

Mapa 0.2

Región CARD

Regímenes políticos



Fuente: Barquero, 2025 con datos de *The Economist* y V-Dem.

y El Salvador), las evaluaciones internacionales coinciden en señalar que hoy experimentan situaciones similares o peores a los momentos de mayor inestabilidad social y política en el siglo XX. En Guatemala y Honduras, los resultados son mixtos y, en todo caso, volátiles.

Dos indicadores de ese retroceso son la concentración del poder en la presidencia y las restricciones a la libertad de expresión. El ataque a la independencia del Poder Judicial es una de las principales manifestaciones de ese deterioro, cuyas manifestaciones han oscilado entre el atentado a la integridad física de personas funcionarias o su destitución irregular y la restricción de presupuestos para limitar el adecuado funcionamiento de las instituciones, aspectos sobre los que ha llamado la atención distintos informes de organizaciones internacionales como Cejil, FDPL y Fecajud.

El análisis comparativo del índice de concentración del poder en la presidencia permite evaluar el grado de deterioro institucional, especialmente en Nicaragua y El Salvador, los dos países que han experimentado las regresiones más significativas. En estos casos, la dominancia

del Ejecutivo ha sido notable tanto en los períodos del siglo XX en los que tuvieron mayores niveles de inestabilidad política, como en la época más reciente. Inclusive, en ambos casos, los niveles actuales de concentración del poder en el presidente son más altos que en el pasado (gráfico 0.7).

Las restricciones a la libertad de prensa en la región provienen de cuatro fuentes principales, presentes en mayor o menor medida en todos los países. La primera radica en marcos legales de protección defectuosos y débiles que propician la criminalización de las personas periodistas. La segunda se refiere a las violaciones a los derechos humanos de las personas comunicadoras, lo cual ha implicado intimidación, agresiones patrimoniales y físicas, amenazas de muerte e incluso asesinatos, seguida por los continuados ataques del Poder Ejecutivo a los medios de comunicación que son críticos de su gestión. Finalmente, la polarización política y partidaria dificulta el trabajo independiente de los medios de comunicación.

Al comparar los indicadores de democracia de la región CARD con otras regiones del mundo, es posible señalar

que las tendencias descritas son parte de un proceso global. En el siglo XXI, otras regiones del mundo han experimentado retrocesos con respecto a sus mejores niveles de desempeño democrático, pero dicho deterioro es menor y se produce a partir de niveles y logros mayores a los de CARD (gráfico 0.8). Por lo tanto, las perspectivas políticas no son prometedoras y los riesgos de empeoramiento de la situación son elevados.

Autocratización política cuenta con respaldo o la aquiescencia de importantes segmentos de la ciudadanía

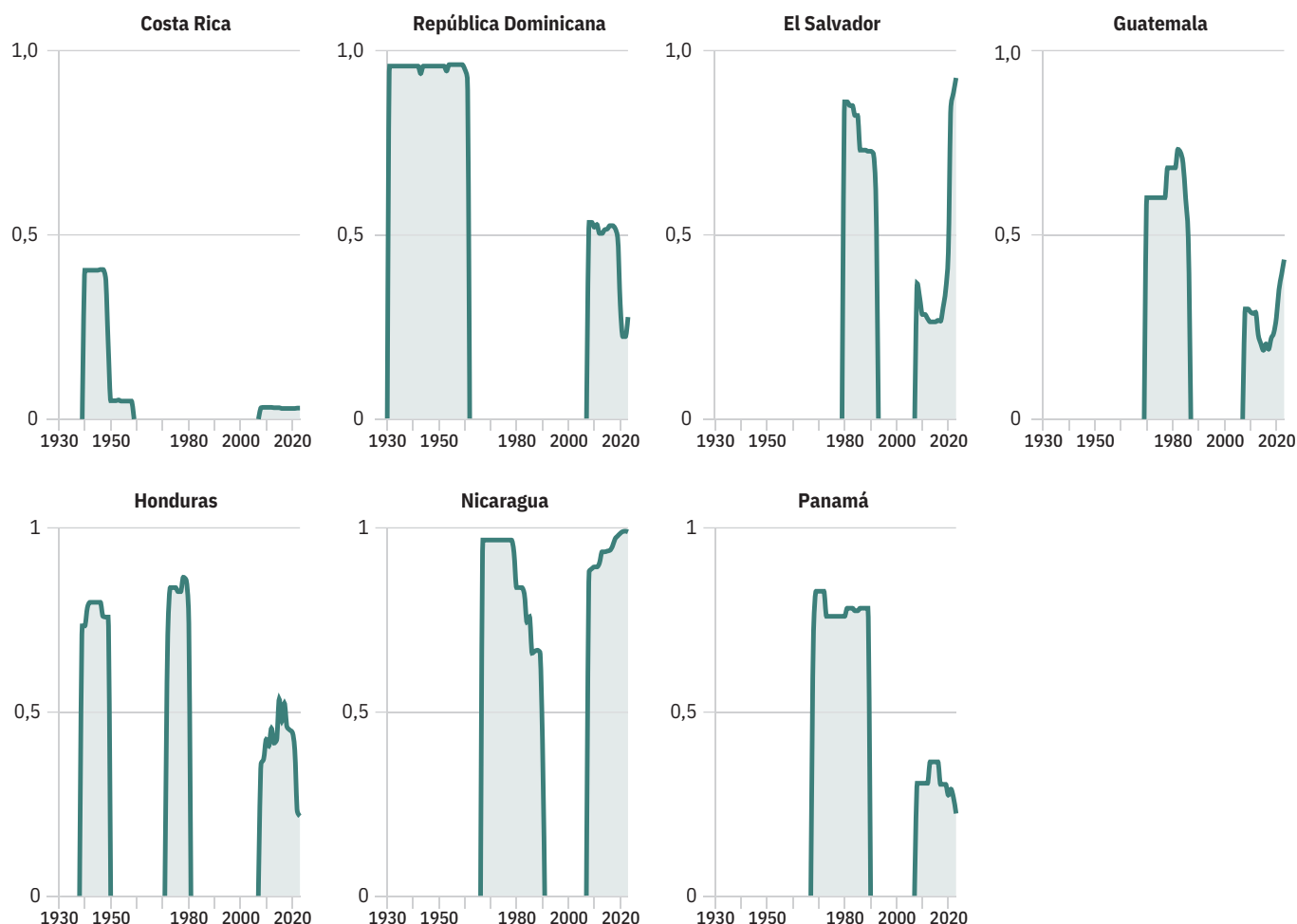
Los actuales procesos políticos de autocratización en CARD coinciden con ciudadanía que manifiestan opiniones variadas y contrapuestas sobre la democracia. Durante el presente siglo, han aumentado las actitudes de la población a favor de prácticas antidemocráticas. Incluso quienes expresan algún grado de apoyo al sistema político, bajo ciertas circunstancias estarían dispuestas a ceder ante actitudes contrarias a la democracia.

Aunque las personas que suscriben abiertamente posiciones autoritarias son todavía una proporción minoritaria, el escepticismo y la ambivalencia reinantes implican un riesgo de legitimidad para las instituciones democráticas en la región y constituyen en la actualidad un campo de batalla abierto entre las fuerzas que apoyan la democracia liberal y las que quieren acabar con ella.

Una de las premisas fundamentales de la democracia es la promesa de mejorar la calidad de vida de la población. Este tema no es trivial, dado que la democracia implica el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, de acuerdo con el dictum de Abraham Lincoln. Por lo tanto, es importante entender la medida en que la democratización de los sistemas políticos de la región logró mejoras sustanciales en las condiciones de vida para su ciudadanía. Tres décadas después de la pacificación de Centroamérica, es claro que los resultados de la democratización en términos del bienestar de las personas fueron insuficientes.

Gráfico 0.7

Región CARD

Índice de concentración de poder en la presidencia^{a/}

a/ Permite medir hasta qué punto los regímenes de la región se caracterizan por un presidencialismo dominante. Evalúa el grado en que cada presidente está libre de restricciones de otras instituciones o actores. Puntuaciones más bajas, iguales o cercanas a 0 indican una mejor situación.

Fuente: Alfaro Redondo, 2025 con datos de Varieties of Democracy.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE AUTOCRATIZACIÓN POLÍTICA EN CENTROAMÉRICA

Sección Panorama Político en capítulo 1 en este Informe y Cortés, 2025; Chacón, 2022 y PEN, 2025 (volumen II) en www.estadonacion.or.cr

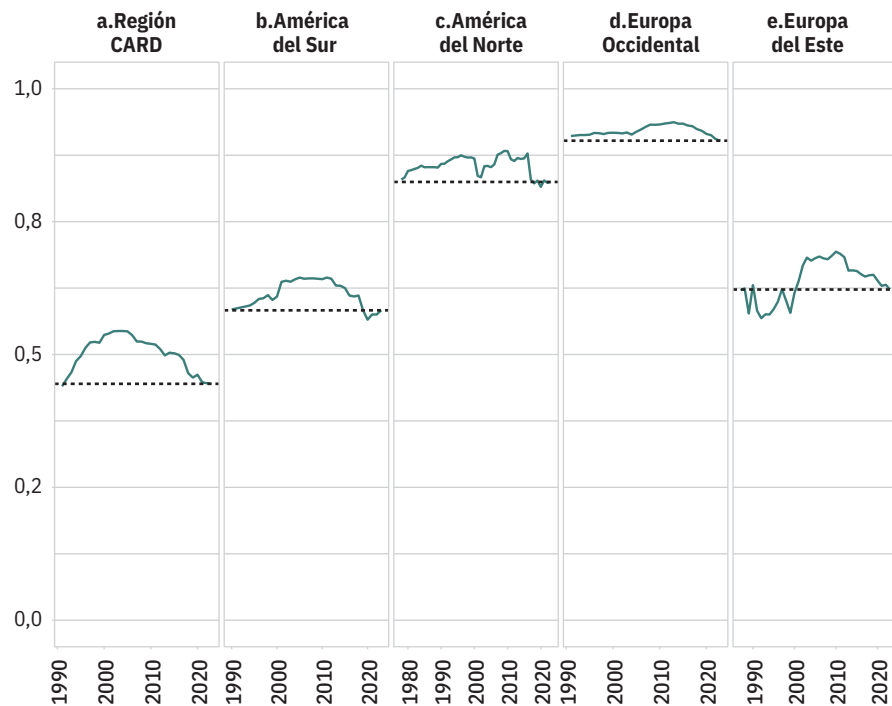
De acuerdo con el análisis de los perfiles de apoyo a la democracia y el autoritarismo elaborado para este Informe (PEN, 2025), en la mayoría de los países de la región CARD los grupos más grandes de población son los denominados “populistas”: personas que dicen apoyar la democracia como mejor régimen de gobierno, pero estarían de acuerdo en respaldar la concentración de poder en un líder fuerte que resuelva los problemas, incluso si no cumple del todo con las reglas de la democracia. En El Salvador, este grupo representa

el 60% del total de la población, en la República Dominicana y Nicaragua, es de alrededor del 42% y en Costa Rica y Panamá oscila entre el 37% y el 39%. En Guatemala y Honduras, el porcentaje es mucho menor.

En todos los países, el grupo llamado “demócratas”; es decir, las personas que manifiestan respaldo a la democracia como el mejor régimen de gobierno y que se oponen a ceder el control de la institucionalidad a un líder fuerte y sin limitaciones, es mayor al grupo de las personas abiertamente autoritarias.

Mapa 0.8

Región CARD y regiones seleccionadas
Índice Multidimensional de Democracia^{a/}



a/ Corresponde al promedio regional de estos cinco indicadores para cada país de cada región en cada año: democracia liberal, democracia electoral, democracia deliberativa, democracia participativa y democracia igualitaria. Los valores más altos implican mejor situación de la democracia. La línea punteada negra representa el valor actual del indicador.
Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

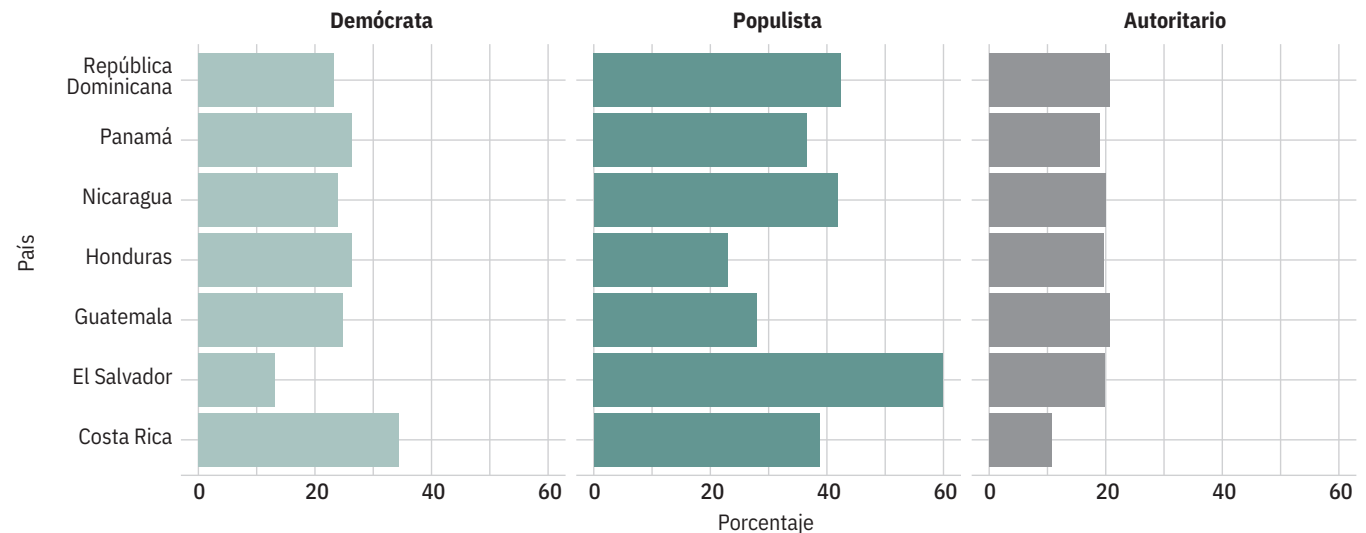
Quienes tienen posiciones autoritarias representan proporciones cercanas o menores al 20% de la población en todos los países, excepto en Costa Rica donde es del 11% (gráfico 0.9). El Salvador es el único país de la región en donde el porcentaje de población que pertenece al grupo llamado “autoritario” (20%) es mayor al de los demócratas (13%).

Durante la pandemia se aplicaron restricciones para evitar el contagio, pero en algunos países, los Gobiernos aprovecharon esas medidas para restringir derechos y libertades a la ciudadanía. El deterioro ha sido más evidente en el ámbito de la concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión del sistema de pesos y contrapesos, en particular debido ataques y medidas dirigidas a limitar la independencia judicial y los órganos de control. Con excepción de Costa Rica, de acuerdo con el índice de pesos y contrapesos de V-Dem, los países de la región de CARD experimentaron fuertes retrocesos en esta materia, especialmente El Salvador y Nicaragua.

Estas acciones han encontrado ciertos niveles de apoyo entre la ciudadanía. Una creciente proporción se manifiesta a favor de imponer restricciones al derecho de la oposición política para realizar un

Gráfico 0.9

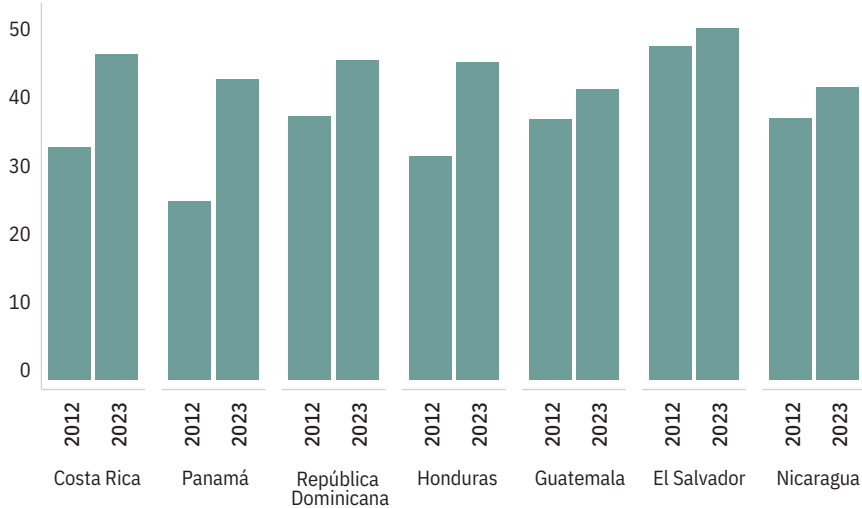
Región CARD
Distribución porcentual de la población según su grado de apoyo al autoritarismo y respaldo a la democracia. 2021



Fuente: Segura, 2025 con datos del Barómetro de la Américas, de Lapop.

Gráfico 0.10

Región CARD
Apoyo de la población a que el presidente limite la voz de los partidos políticos de oposición
(porcentaje)



Fuente: Cortés, 2025 con datos del Barómetro de las Américas, de Lapop.

escrutinio público a las acciones gubernamentales y presentar visiones alternativas de gobierno. Aunque esos grupos representan menos de la mitad del total de la población en la mayoría de los países, durante el período 2012-2023 tuvo un importante aumento, una señal clara de autocratización (gráfico 0.10).

Mensaje 4

Intensificación de los conflictos geopolíticos globales agravan tensiones dentro de la región

Durante los últimos años se han intensificado las tensiones entre China y Estados Unidos así como los conflictos armados en distintas regiones del mundo. Ello ha coincidido con cambios en las prioridades de estas potencias, ya sea debido a cambios de gobierno, como respuesta a nuevas realidades que cobran relevancia en la agenda pública o por virajes en los objetivos de su política exterior.

La presencia militar de Estados Unidos en Asia ha estado equilibrada por una creciente expansión de los intereses chinos en Europa, África y América Latina. En estas regiones, China ha incrementado de manera significativa sus inversiones en comercio de bienes y servicios, así como en la extracción de recursos naturales. Para ciertos sectores, China se ha convertido en una amenaza palpable para

la hegemonía estadounidense en lo que antes era considerado su zona de influencia (Cascante Segura, 2024).

Para países pequeños como los de CARD, este contexto incierto y volátil tiene profundas implicaciones en las dinámicas comerciales y diplomáticas y en las posibilidades de continuar atrayendo mayores flujos de inversión, cooperación y turismo de esos países y regiones.

Desarticulación regional reduce márgenes de maniobra frente a las potencias

La dificultad de los países de la región para asumir posiciones conjuntas es alimentada tanto por factores externos como internos. En el ámbito extrarregional, las agendas de las principales potencias del mundo en relación con CARD

son distintas y, además, han cambiado en las últimas décadas. Sin embargo, lo que no ha cambiado en esas relaciones ha sido, por un lado, la activación o intensificación de los vínculos cuando aumenta la rivalidad geopolítica entre las potencias, como ha sucedido recientemente entre Estados Unidos y China.

En el ámbito intrarregional, la incapacidad para definir temas de interés común y, sobre estos, diseñar una estrategia conjunta entre los países de la región, les ha impedido a los países superar la debilidad adicional que significa manejar, de manera estrictamente bilateral, las relaciones con las potencias. En ausencia de una estrategia común, el aumento de las rivalidades entre actores globales durante los últimos años ha incentivado el surgimiento de respuestas dispersas de los países de CARD, que terminan por

afectar los espacios de diálogo entre ellos, tanto bilaterales como regionales, y provocan tensiones diplomáticas, comerciales y en la gestión de asuntos relevantes como las migraciones (Cascante Segura, 2024).

Los cambios en las relaciones diplomáticas de los países de la región evidencian esta desarticulación. Belice, Guatemala, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana han decidido estrechar lazos con Estados Unidos, para lo cual han definido acciones que los alejan de los proyectos chinos. El Salvador se ha alejado de los Estados Unidos, aunque durante varios años utilizó el financiamiento chino para proyectos de interés. Recientemente, Honduras ha enfrentado dificultades con Estados Unidos y también ha procurado relacionarse con China. Por último, Nicaragua ha recurrido, sin cambiar las condiciones estructurales de inversión y comercio, a mantener su ligamen político y de seguridad con Rusia, así como a buscar soluciones económicas en algunos proyectos chinos anunciados a finales del 2023.

Los datos de votación de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas reflejan fuertes diferencias en el comportamiento de los países de la región en asuntos clave como la agresión de Rusia a Ucrania (cuadro 0.4). Por una parte, se presenta un apoyo sólido a las condenas contra Rusia por parte de Belice, Guatemala, Costa Rica y Panamá. En el caso de la República Dominicana, en un inicio (durante la

administración Medina Sánchez) se mantuvo una postura de abstención con respecto a los hechos acaecidos desde el 2014; sin embargo, después del avance ruso sobre Kiev (durante el gobierno de Abinader Corona), comenzó a votar con regularidad a favor de las resoluciones. Por el contrario, Honduras, que mantuvo una votación a favor de dichas condenas, cambió su línea de votación con el ascenso al poder de Xiomara Castro en enero del 2022. Al otro lado del espectro se encuentran Nicaragua, que ha votado en contra todas las resoluciones, y El Salvador que, pese al cambio de gobierno del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional a la administración de Nayib Bukele, ha mantenido la línea de abstenerse de condenar a Rusia en este foro (Cascante Segura, 2024).

En este marco, hace unos años, Costa Rica, Panamá y República Dominicana se unieron para conformar la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para contraponerse con los Gobiernos más autoritarios del norte de la región. Sin embargo, al cierre de esta edición, ese esfuerzo aparece relegado de la agenda de estos tres países. Uno de los factores asociados a esa situación es la pérdida de importancia que recientemente ha tenido la promoción de la democracia y los derechos humanos en la política exterior de Estados Unidos. En la práctica, el intento de crear una alianza subregional a favor de la democracia ha sido sustituido por iniciativas bilaterales de cada país centroamericano con Estados Unidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
**CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA FRENTE A LOS
ACTORES GLOBALES**

véase Cascante Segura, 2024
en www.estadonacion.or.cr

**Interrupción reciente de flujos
de cooperación internacional
estadounidense crea fuerte
incertidumbre**

A lo largo de su historia, los países de CARD han aplicado estrategias distintas para construir sus relaciones comerciales, de inversión y cooperación con los actores globales. Si bien durante gran parte del siglo XX el interés geopolítico de la región estuvo vinculado a su ubicación geográfica y a la preeminencia del Canal de Panamá, en el siglo XXI, sin perder ese atractivo, el foco de atención se ha ampliado e incluye telecomunicaciones y otras infraestructuras logísticas como puertos y aeropuertos (Cascante Segura, 2024).

La presencia estadounidense continúa siendo significativa en la región, pues abarca asuntos como la lucha contra el narcotráfico y la migración que afectan directamente la política interna y de seguridad de Estados Unidos. Durante los últimos años, se ha observado que los intereses geopolíticos estadounidenses consideran a China como una

Cuadro 0.4

Región CARD
**Porcentaje de concordancia^{a/} de votación en resoluciones sobre el conflicto en Ucrania en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. 2014-2023**

	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	R. Dominicana
Bloque Atlantista	82,4	94,1	76,5	11,8	0,0	94,1	94,1	52,9
China	0,0	0,0	0,0	64,7	70,6	0,0	0,0	0,0
Rusia	0,0	0,0	11,8	23,5	100	0,0	0,0	5,9

a/ Por concordancia se entiende cuando dos actores votan en la misma forma una resolución, sea que ambos votan a favor, en contra, se abstienen o se ausentan.
Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de la base de votación de Centroamérica y República Dominicana, del PEN.

amenaza central a su zona de influencia más cercana, especialmente debido a las inversiones en infraestructura considerada crítica como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.

Esas mismas consideraciones geopolíticas han hecho que las autoridades estadounidenses definan perfiles específicos para los países de CARD: mientras Guatemala, Honduras y El Salvador se vinculan con el tema de migración, Nicaragua es considerado un factor de riesgo para la seguridad por la presencia rusa (aunque en mucha menor intensidad que China). Costa Rica y Panamá, por su parte, constituyen socios para la producción de microprocesadores, un componente central en los conflictos tecnológicos contemporáneos. Sin embargo, acciones recientes de la nueva administración de gobierno de Estados Unidos sugieren que este país está modificando, total o parcialmente, esta estrategia hacia los países de la región.

China ha tenido una agenda mucho menos extensa y variable que la de Estados Unidos hacia CARD. Durante las últimas décadas, ha enfocado sus esfuerzos a desplazar los vínculos diplomáticos de los países de la región con la República Nacional de China (Taiwán), a generar proyectos de infraestructura pública y a ampliar la presencia de sus compañías de telecomunicaciones en Centroamérica y República Dominicana. En relación con el primer objetivo, Beijing ha tenido un éxito rotundo, solo Guatemala y Belice mantienen relaciones diplomáticas con la isla. Sin embargo, estas últimas han tenido problemas de ejecución, ya sea por inconvenientes en el manejo de la relación con los gobiernos de turno o por la presión de Estados Unidos, lo cual se ha intensificado en los últimos años para evitar la influencia china en infraestructura estratégica o de doble uso.

Los países europeos son un cooperante importante y han tenido presencia en CARD durante las últimas décadas. Cuentan aún con amplios intereses en torno a la inversión extranjera regional, pero no han logrado concretar los objetivos configurados una década atrás al negociar el Acuerdo de Asociación (ADA). Por otra parte, aunque la coope-

ración europea -bilateral y multilateral- ha sido clave para el funcionamiento del SICA, su magnitud, vista en su conjunto, es secundaria cuando se le compara con los flujos de cooperación desde Estados Unidos.

Los actores globales tienen también un rol muy importante en los flujos de cooperación, que en varios países es fundamental para la prestación de servicios sociales y para viabilizar inversiones que los Estados no están en capacidad de financiar. En este ámbito, Estados Unidos es el principal origen de la cooperación hacia CARD, en particular para Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá.

Este país representó la mitad de los flujos recibidos por esta región en el período 2013- 2022. El Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo principal cooperante es Estados Unidos, es la segunda fuente en importancia. Los países europeos constituyen la tercera, mientras que los organismos supranacionales como la Unión

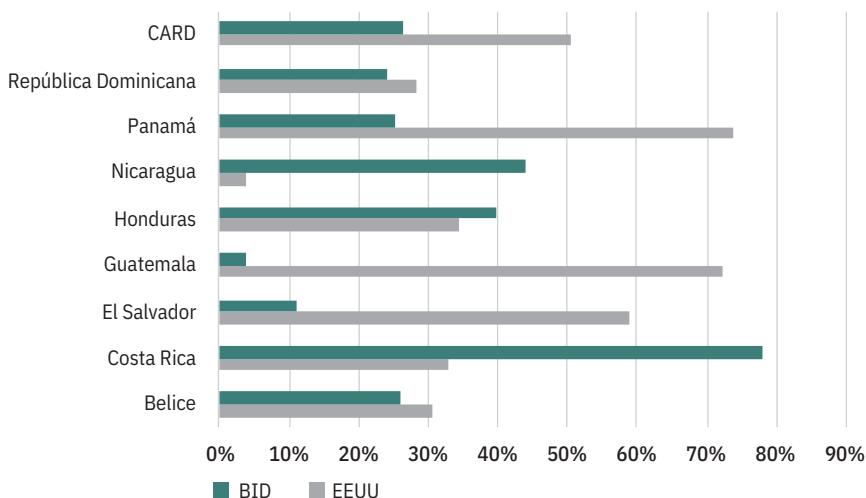
Europea y la ONU tienen una menor relevancia. En este contexto, el viraje de la nueva administración de Estados Unidos en relación con la cooperación internacional pone en grave riesgo la continuidad y sostenibilidad de las acciones apoyadas por este país en la región (gráfico 0.11).

En el próximo lustro, los actores centroamericanos tendrán el reto de seguir tomando decisiones complicadas frente a las presiones provenientes de Estados Unidos, sus aliados y China. En este difícil proceso, las debilidades institucionales en los servicios vinculados con el manejo del ámbito internacional en todos los países, como la diplomacia, inteligencia y seguridad, la corrupción endémica dentro de las instituciones públicas de los países y su poca capacidad para enfrentar los cambios geopolíticos, ciertamente reducen las perspectivas centroamericanas para anticipar o reaccionar coordinadamente (Cascante Segura, 2024).

Gráfico 0.11

Región CARD

Participación del BID y los Estados Unidos en el monto total de la cooperación internacional neta, por país. 2013-2022



Fuente: Elaboración propia con base en Cascante Segura, 2024 y datos de OCDE, 2024.

Mensaje 5

La “diáspora interna” reduce aún más la capacidad para atender desafíos estratégicos

La principal consecuencia de la adversa coyuntura por la que atraviesa la región es que los márgenes de maniobra para emprender acciones conjuntas entre las naciones y sociedades para impulsar el desarrollo humano sostenible son todavía más estrechos que antes.

CARD, una pequeña región en el concierto internacional, con fuertes asimetrías internas, siempre tuvo capacidades limitadas para utilizar sus esfuerzos integracionistas con el fin de gestionar sus debilidades nacionales y atender situaciones apremiantes o actuar preventivamente para enfrentar desafíos emergentes. Además, es una región que, por su posición geográfica estratégica, ha estado históricamente expuesta a los cambios geopolíticos globales. Las divisiones internas siempre han hecho a la región todavía más vulnerable a estos.

A estas limitaciones estructurales se agrega, hoy, una verdadera “diáspora interna” o dispersión de la voluntad política para construir lazos regionales de cooperación más robustos que permitan enfrentar, como región y no como países aislados entre sí, el reto de relanzar el desarrollo humano sostenible, la gran deuda aplazada de los procesos de paz y democratización desde hace una generación.

Hay antecedentes importantes que demuestran el valor de la cooperación intrarregional. En la década de 1970, la integración centroamericana desempeñó un papel relevante en el proceso de industrialización y fomento del comercio regional. Veinte años después, las acciones conjuntas entre Gobiernos de distinta orientación ideológica permitieron poner fin a los conflictos militares en la región.

En la actualidad, las sociedades y naciones de CARD podrían aunar los escasos recursos y capacidades nacionales para enfrentar desafíos comunes. Esta

última sección del capítulo se enfoca en tres de estos desafíos:

- El envejecimiento poblacional.
- La penetración del crimen organizado.
- La crisis climática global.

Estos desafíos obligan a emprender acciones hoy para el logro de resultados graduales y acumulativos en el mediano y largo plazo. Sin embargo, ello requiere abrir espacios para la cooperación intrarregional que, hoy por hoy, están cancelados.

Envejecimiento de la población es un desafío crucial que no está siendo visualizado

Para el 2041, la región CARD tendrá la mayor proporción de población en edad productiva de la historia (67,5%). Sin embargo, si el perfil educativo continúa siendo tan bajo como en la actualidad, la región se anclará a un sendero de baja productividad laboral en el largo plazo. A partir del 2041, la población entre 15 y 64 años tenderá a disminuir y el conjunto regional se moverá con rapidez hacia el envejecimiento, un proceso que actualmente solo afecta a Costa Rica y a Panamá (gráfico 0.12). Aunque existen diferencias entre los países, dependiendo de la fase del proceso de transición demográfica en que se encuentran, si no se adoptan políticas públicas que modifiquen la situación descrita, se pone en grave riesgo las posibilidades de crecimiento económico futuro.

Las bajas e insuficientes coberturas de los sistemas de pensiones en la región hacen que la mayoría de las personas adultas mayores no tengan independencia económica y dependan de los ingresos de sus familias para su manutención y para satisfacer sus necesidades de cuidado

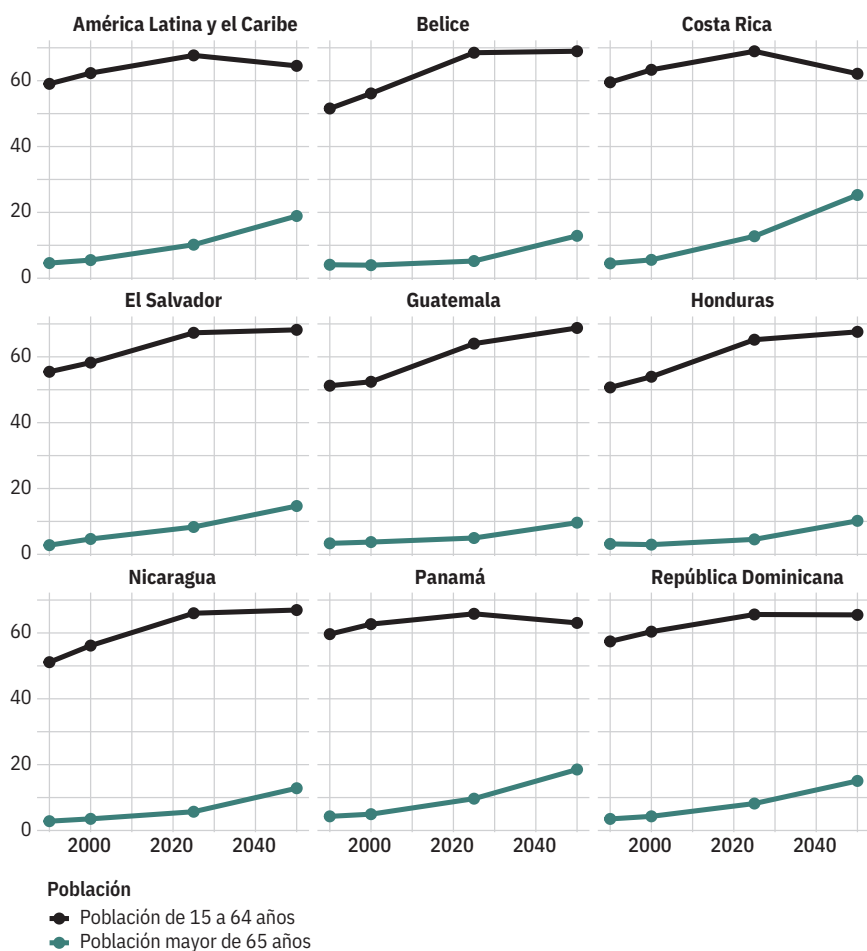
y salud. En el 2023, en cinco de los siete países con información disponible (Honduras, Guatemala, El Salvador, la República Dominicana y Nicaragua), más de tres cuartas parte de la población adulta mayor recibían pensiones insuficientes.

Esta situación tenderá a agravarse debido al aumento en la población en edad de jubilarse. En el año 2000, la proporción de personas mayores de 65 años representaba menos del 6% de la población en todos los países, pero en el 2050 se elevará al 25% en Costa Rica, al 19% en Panamá y será entre el 10% y 15% en los demás países de la región (gráfico 0.12).

Una estrategia para aumentar con rapidez el nivel educativo de la población joven e incrementar la productividad laboral es fortalecer la educación y formación técnica profesional (EFTP). Tanto el anterior Informe como en esta edición se efectuaron miradas en profundidad sobre la situación actual de esta modalidad educativa y se proponen recomendaciones concretas para ampliar su cobertura y pertinencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

véase PEN, 2024 (volumen I) y Fernández, 2025, en www.estadonacion.or.cr

Gráfico 0.12**Región CARD y América Latina y el Caribe
Porcentaje de población por grupos de edad**

Fuente: Segura, 2025 con datos de CepalStat.

Archivada la política de seguridad democrática regional cuando actores del crimen organizado profundizan su huella

El crimen organizado comprende un conjunto diverso de manifestaciones que van desde el narcotráfico, el comercio de armas y la extorsión, hasta la trata de personas, los ciberdelitos y el tráfico de flora y fauna. Todos los actores y fenómenos criminales se encuentran interconectados, son transnacionales y están presentes, en menor o mayor medida en los países de CARD.

De acuerdo con el Índice Global de

Crimen Organizado 2023, casi el 83% de la población mundial vive en países con una alta criminalidad, una proporción mayor a la del 2021 (79%). El continente americano es el tercero con mayores niveles de criminalidad (solo después de Asia y África) y dentro de él, Centroamérica es la región con el puntaje promedio de criminalidad más alto (6,28), seguido de América del Sur (5,94). Honduras y Panamá se ubican en el grupo de países con el mayor nivel de criminalidad (posiciones 5 y 6 de 35 naciones evaluadas en el continente) solo superadas por Colombia, México, Paraguay y Ecuador. Los demás países de la región

ocupan posiciones inferiores, entre los puestos 9 (Guatemala) y 20 (República Dominicana) (Giatoc, 2024).

De acuerdo con De León y Martínez (2025), la cada vez mayor presencia del crimen organizado en distintos territorios de la región CARD ha contribuido a elevar los niveles de violencia y ha implicado, en algunos casos, la pérdida de control por parte del Estado de ciertos territorios de los países en donde operan los grupos criminales. También existe evidencia de cierta penetración de estos actores en la institucionalidad pública y en el financiamiento de las campañas electorales (Carrión Mena, 2024; Mazariegos Rodas, 2024). Guatemala y Honduras muestran la mayor diversidad de actividades del crimen organizado en sus territorios: presencia de laboratorios para la producción de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero y promoción de la migración mediante grupos criminales organizados. En los demás países, las principales actividades se relacionan con la exportación de droga hacia Europa, el lavado de dinero y, en menor medida, con el tráfico de personas y de fauna y flora silvestres. Panamá destaca como centro neurálgico para el lavado de dinero y la República Dominicana por formar parte de la ruta de tráfico de personas del Caribe hacia Norteamérica.

El Índice Global de Crimen Organizado destaca la importancia de la cooperación internacional y evalúa la resiliencia de los países para enfrentar a los actores y mercados vinculados con este fenómeno. En esta área, Belice, El Salvador y Nicaragua se ubican entre las últimas seis posiciones del continente en relación con su capacidad para enfrentar este tipo de criminalidad (Giatoc, 2024).

En 1995, los países de la región CARD suscribieron el Tratado Marco de Seguridad Democrática y desde ese momento han desarrollado acciones conjuntas de intercambio de información y coordinación para la persecución del crimen organizado y otros tipos de delitos. Sin embargo, durante los últimos años los temas de seguridad han perdido prioridad en la agenda del proceso de integración regional, tanto a la luz de los mandatos emanados de las reuniones

de presidentes como de los flujos de cooperación internacional y programas regionales que ha implementado el SICA en esta materia (Johanning et al., 2025).

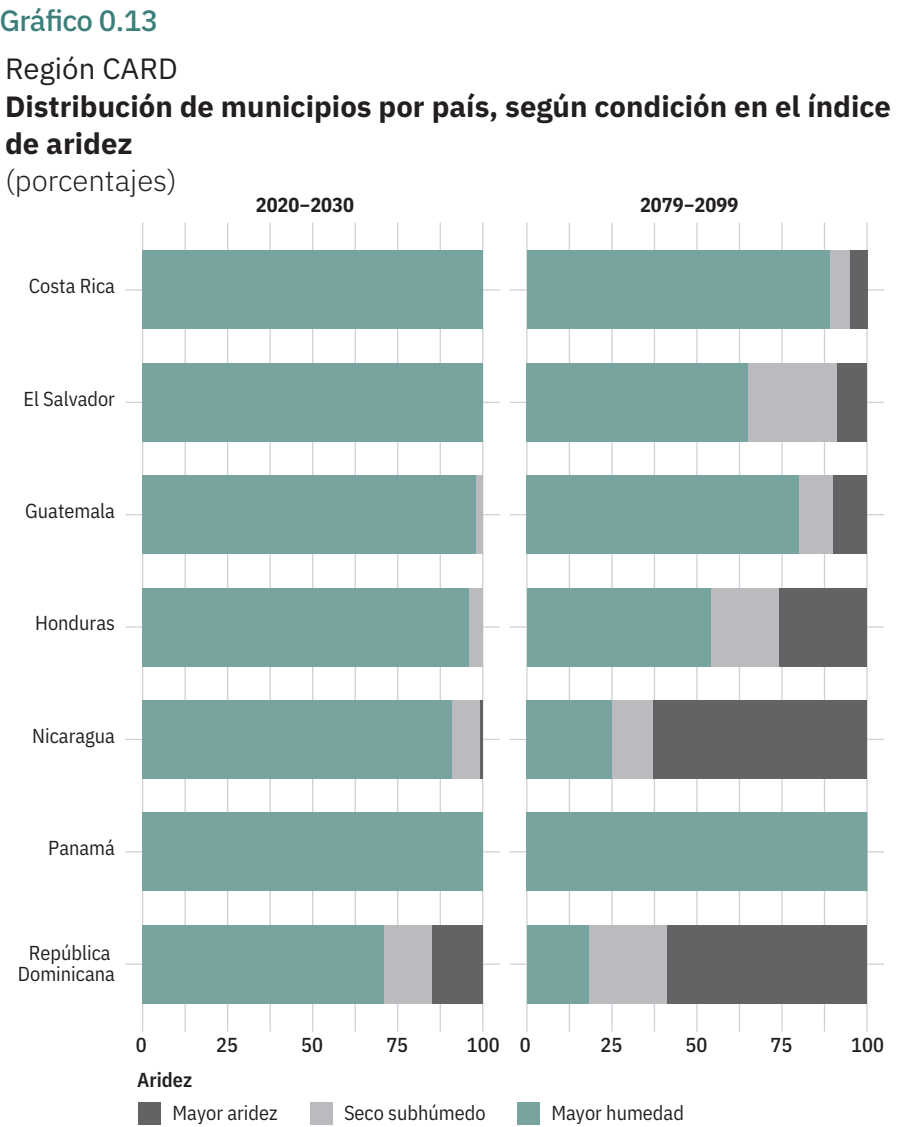
Urgen acciones conjuntas de adaptación ante el cambio climático pero prevalecen iniciativas efímeras de pequeña escala

Los grupos expertos en cambio climático están de acuerdo en señalar que la región CARD es una de las más vulnerables del mundo a sufrir los impactos de la crisis climática. De acuerdo con el escenario más pesimista (SSP5-8,5), para finales del presente siglo, el aumento de la temperatura en esta región se tornará significativo en casi todos los países, entre 2 °C y 4 °C.

Como consecuencia, la proporción de municipios hiper áridos, áridos y semiáridos pasará del 15% en la República Dominicana y 0% en los demás países durante el período 2020-2030, al 63% en Nicaragua, el 59% en la República Dominicana y el 26% en Honduras en el período 2079-2099. Sin medidas de adaptación, correrá grave riesgo, entre otras actividades sociales y económicas, la generación de energía hidroeléctrica y la producción agropecuaria en muchos de estos territorios, lo cual también impactará los ecosistemas y su rica biodiversidad. En contraste, los municipios con niveles mayores de humedad (sub húmedo, húmedo y muy húmedo) disminuirán en la mayor parte de la región, excepto en Panamá (gráfico 0.13).

Otra consecuencia del cambio climático será el aumento del nivel del mar y los ciclones en las costas en una región históricamente expuesta a estos eventos. El litoral Caribe y Belice, Honduras y Panamá son particularmente vulnerables debido a su extensa línea costera, configuración geológica y baja altitud. En algunos de estos territorios ya se han documentado desplazamientos de población.

Un inventario de las iniciativas de adaptación al cambio climático implementadas en la región permitió identificar experiencias bien concebidas, pero con defectos comunes. Entre estos, cabe



Fuente: Segura, 2025 con datos de ICAP-UCR, 2025.

mentar la falta de coordinación entre los países, la baja prioridad de las acciones en los presupuestos y las políticas públicas, la dependencia del financiamiento de la cooperación internacional y la ausencia de un enfoque multisectorial, que es requerido debido a que la adaptación al cambio climático involucra asuntos de política productiva, seguridad alimentaria, atención a desplazados internos y externos, de seguridad social y de gestión ambiental y del riesgo y vulnerabilidad a desastres. Se trata de un ámbito de interés común en el cual los países podrían encontrar en las instituciones de integración regional un espacio de coordinación y acción conjunta.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

véase el Capítulo 2 de este Informe y Castillo, 2024 en www.estadonacion.or.cr

Cierre

Centroamérica y la República Dominicana atraviesan una de las situaciones más peligrosas desde el fin de los conflictos político-militares hace treinta años. Si en aquel entonces la pacificación abrió una esperanza de desarrollo humano sostenible y democracia, hoy esa esperanza se ha difuminado en buena medida. La idea de la región como un espacio de identidad política y acción conjunta está, también, en su peor momento desde el relanzamiento de la integración regional con el Protocolo de Tegucigalpa de 1991. En esas condiciones de verdadera “diáspora interna” la región queda expuesta, y con poca capacidad de maniobra, ante las crecientes tensiones geopolíticas y la

crisis climática global. La evidencia reunida por el presente Informe así lo demuestra.

Los Estados y sociedades de la región CARD enfrentan un panorama incierto. De persistir las tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas prevalecientes en la última década, un escenario probable es el de mayores rezagos en desarrollo humano y de mayores conflictos y tensiones dentro y entre los Estados nacionales. Este no es un escenario deseable ni tampoco inevitable, por supuesto. No obstante, se debe entender que las consecuencias de la inacción, o de emprender acciones equivocadas, no solo ponen en grave riesgo los logros alcanzados durante las últimas décadas, sino que comprometen las bases materiales

del desarrollo humano sostenible de la región a futuro.

El momento para actuar es hoy. Las acciones requieren esfuerzos simultáneos de diversos sectores sociales, económicos y políticos que trascienden los Estados nacionales para buscar acciones conjuntas ante desafíos comunes. Avanzar en la senda del desarrollo humano sostenible requiere de liderazgo y de acuerdos sociales para garantizar que las capacidades institucionales sean coherentes con los objetivos y metas definidas. También son necesarios mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación. Para avanzar en un proceso de esta naturaleza es fundamental revalorar los principios sobre los que se basa la democracia y procurar su fortalecimiento para la búsqueda del bien común.

Notas

1 En el 2023, en los países de la región CARD, el 20% de hogares con mayores ingresos concentró entre el 42% y el 54% del ingreso total; en contraste, el 20% de hogares de menores ingresos representó solo entre un 2,3% y un 5,5% del ingreso total (Echeverría y Fernández, 2025b).

RECONOCIMIENTOS

Borrador del capítulo:

Alberto Mora Román.

Edición técnica:

Alberto Mora Román y Jorge Vargas Cullell.

Lectores críticos: se agradecen los comentarios y sugerencias de Ronald Alfaro, Leonardo Merino, Isabel Román y Evelyn Villarreal sobre una versión preliminar de este documento.

Revisión y corrección de cifras:

Katherine Araya, Marco Hidalgo y Aaron Barquero.

Revisión de cuadros y gráficos para diagramación:

Rafael Segura.

Corrección de estilo y edición de textos:

Gabriela Fonseca Argüello.

Diseño y diagramación:

Erick Valdelomar/Insignia | ng.

II

SECCIÓN

Panorama regional



RECONOCIMIENTOS

Investigadores principales: Alberto Mora Román, Aaron Barquero Salas, Marco Hidalgo Ramírez, Evelyn Villarreal Fernández y José Mario Achoy Sánchez.

Insumos:

“Fuerzas armadas y democracia en Centroamérica y República Dominicana” de Knut Walter Franklin, *“Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y respuesta de las políticas públicas”* de Andreas Feldmann Pietsch y Anthony James Sturino, *“Equilibrios y diversidades: Centroamérica y República Dominicana frente a los actores globales (2020-2024)”* de Carlos Humberto Cascante Segura, *“Integración regional en Centroamérica y República Dominicana: evolución reciente y su dimensión no institucional”* de Javier Johanning Solís, Sophia Roldán, Sergio Guzmán Hernández y Alexa Guzmán Hernández, *“Inseguridad y políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana”* de Carmen Rosa de León y Leonardo Martínez, y *“Panorama energético de Centroamérica y República Dominicana”* de Eugenio Torijano, Santa Paola Centeno y José Manuel Arroyo (Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Sede Subregional en México de la Cepal).

Notas técnicas: *“Huella ecológica y sostenibilidad ambiental en Centroamérica y República Dominicana”*, *“Biodiversidad amenazada en Centroamérica y República Dominicana: Lista roja de especies en peligro”*, *“Estructura y*

composición de los hogares en Centroamérica y República Dominicana” y *“Pobreza y distribución de los ingresos en Centroamérica y República Dominicana”* de Rocío Echeverría Vargas y Diego Fernández Montero

Preparación de cuadros, gráficos y actualización de información: Aaron Barquero, José Mario Achoy y Marco Hidalgo.

Actualización de la plataforma de Estadísticas de Centroamérica al año 2023 (o el último disponible): Sebastián González Rosales.

Bases de datos: Votación de países Centroamericanos y República Dominicana en la Asamblea General de Naciones Unidas del Estado de la Región (actualización para los años 2020-2023); Noticias vinculadas con los países Centroamericanos y República Dominicana en el The New York Times, BBC News, El País y ChinaToday (periodo 2019-2023); Cooperación, comercio e inversión de Estados Unidos, China y la Unión Europea en Centroamérica y República Dominicana (periodo 2013-2023), elaboradas por Monserrat Garita.

Coordinación: Alberto Mora Román.

Borradores de las secciones de Panoramas: ambiental (José Mario Achoy y Alberto Mora), demográfico (Marco Hidalgo y Aaron Barquero), económico (Marco Hidalgo), social (José Mario Achoy y Marco Hidalgo), político (Aaron Barquero, Alberto Mora y Evelyn Villarreal) e integración regional (José Mario Achoy y Alberto Mora).

Edición técnica:

Alberto Mora Román y Jorge Vargas Cullell.

Visualización de gráficos: Marco Hidalgo, Javier Bogantes y Aaron Barquero.

Lectores críticos: Se agradecen los comentarios y sugerencias de Ronald Alfaro, Karen Chacón, Esteban Durán, Vladimir González, Jennifer León, Leonardo Merino, Natalia Morales, Dagoberto Murillo, Susan Rodríguez, Isabel Román y Evelyn Villarreal sobre una versión preliminar de las secciones de este capítulo.

Revisión y corrección de cifras: Marco Hidalgo y Aaron Barquero.

Revisión de cuadros y gráficos: Rafael Segura Carmona.

Corrección de estilo y edición de textos: Gabriela Fonseca Argüello.

Diseño y diagramación: Erick Valdelomar / Insignia | ng.

Resumen

El objetivo del presente capítulo es ofrecer un panorama general de las principales tendencias del desarrollo humano sostenible de Centroamérica y República Dominicana desde la anterior publicación de este Informe en el 2021. El periodo de referencia es 2018-2023 (o el último año para el que se dispuso de información) pero en algunos casos, el análisis comprende varias décadas o incluye ejercicios prospectivos. La pregunta que orienta el análisis es: ¿cuál fue el desempeño de la región en su desarrollo humano sostenible durante esos años? ¿cuáles son los principales cambios en las tendencias demográficas, sociales, económicas, ambientales, políticas y el proceso de integración regional desde la publicación del último *Informe Estado de la Región*?

El capítulo emplea la analogía del desarrollo humano regional como un edificio de seis pisos para sintetizar las principales tendencias observadas y dedica una sección a cada nivel. En el primer piso, la base, se encuentra el ambiente, el patrimonio de recursos naturales sin el cual es imposible la actividad económica y social. En el segundo piso se encuentra la población, las personas con que la región cuenta para su desarrollo. En el tercero está la producción, la manera en que la región usa y transforma los insumos naturales, técnicos, financieros y organizativos para crear riqueza. En el cuarto piso está lo social y da cuenta de las oportunidades de bienestar y el modo y alcance con que se distribuye esa riqueza entre la población. En el quinto piso está la política, el ámbito en el cual las sociedades se organizan y adoptan las decisiones colectivas vinculantes para promover el desarrollo humano sostenible de su población. Finalmente, en el

sexto piso está el proceso de integración regional mediante el cual las sociedades de la región CARD procuran articular respuestas comunes a desafíos y oportunidades compartidas.

La valoración general sobre el desempeño de la región en desarrollo humano para el período 2018-2023 fue negativa, lo cual implica la profundización de tendencias ya señaladas en la edición anterior de este Informe en el 2021. En el plano ambiental, se agudizó el uso insostenible de los recursos naturales lo que pone en grave riesgo los ecosistemas y la rica biodiversidad de la región. En el plano demográfico, la región no está aprovechando su mejor momento: en varios países la proporción de la población en edad productiva es mayor a la inactiva (menor de 15 y mayor de 65 años), una oportunidad histórica para el desarrollo. No obstante, la estructura poblacional está cambiando e implica nuevos retos, especialmente asociados

al crecimiento de los grupos de personas adultas mayores de 65 años, los cuales son cada vez mayores. En este contexto, la recuperación económica después de la pandemia se desaceleró y los mercados laborales continúan con los problemas estructurales de generar empleo de baja calidad y productividad. Las oportunidades generadas por el desempeño económico están altamente concentradas y no han llegado a amplios sectores de población, muchos de los cuales aún están en condición de pobreza, especialmente en los países más grandes y con más habitantes. Las bajas cargas tributarias no permiten fortalecer la inversión pública, especialmente en salud, educación y protección social, e impide que la población pobre y otros grupos vulnerables reciban de los Estados servicios sociales básicos (salud, educación, protección social) y asistencia social para salir de esa situación. Estas tendencias implican que la oportunidad demográfica esté siendo mayormente desperdiciada, lo que tendrá consecuencias a largo plazo para el desarrollo humano sostenible de Centroamérica y República Dominicana e implica riesgos para su crecimiento económico futuro debido a la imposibilidad de mejorar los bajos niveles de productividad para enfrentar el envejecimiento poblacional. Finalmente, en el plano político, la profunda erosión de la democracia en varios países de la región genera riesgos inmediatos para el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. El deterioro es de tal magnitud que,

en varios países, el desempeño es similar al de las épocas en que enfrentaban crisis políticas y conflictos armados en el siglo XX. Junto a estos retrocesos, disminuyó el apoyo ciudadano a la democracia y las actitudes ciudadanas hacia ella son mayormente ambivalentes, es decir, presentan una combinación de rasgos autoritarios con democráticos. Finalmente, el proceso de integración regional atraviesa por su momento más crítico desde la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) debido al vacío en la conducción política generado por la acefalía de la Secretaría General, la falta de prioridad y apoyo político por parte de los países miembros, su alta dependencia de la cooperación internacional y las asimetrías internas y problemas estructurales señalados en anteriores ediciones de este Informe. Todo ello denota que los países no han terminado de concebir la integración como una plataforma para la implementación de políticas públicas en aquellos temas globales o transnacionales en los que actuando por separado tienen márgenes muy reducidos para lograr una acción efectiva.

En síntesis, en el período inmediatamente posterior al golpe de la pandemia del covid-19, Centroamérica y República Dominicana se encontraba en una situación compleja y frágil. En este contexto, los avances son muy puntuales e insuficientes para permitirle a la región logros significativos en su desarrollo humano sostenible.

CAPÍTULO

1

Panorama regional

INDICE	Introducción
Reconocimientos 48	<p>Desde hace casi treinta años, los informes Estado de la Región han dado seguimiento al desarrollo humano sostenible y al proceso de integración regional en Centroamérica. A partir del <i>Sexto Informe</i> (2021), esta labor se extendió para incluir a la República Dominicana. En esa ocasión se empleó la metáfora de un edificio de seis pisos como recurso para organizar el análisis del desempeño regional en ambos temas. Cada nivel proporciona soporte a los pisos superiores y, a la vez, la gestión de estos últimos puede fortalecer o debilitar los niveles inferiores. Esta analogía ayuda a sintetizar las principales tendencias observadas en el desarrollo humano sostenible de la región durante los últimos años y a dar un balance de conjunto.</p> <p>En el primer piso, la base, se encuentra el ambiente, el patrimonio de recursos naturales esencial para la actividad económica y social. En el segundo piso está la población, las personas que residen en la región que contribuyen a su desarrollo. En el tercero se ubica la producción; es decir, la manera en que la región usa y transforma los insumos naturales, técnicos, financieros y organizativos para crear riqueza. En el cuarto piso se sitúan los modos y alcances con que se distribuye esa riqueza entre la población. En el quinto piso está la política, el ámbito en el cual se analiza como las sociedades se organizan y adoptan las decisiones colectivas vinculantes para sus respectivas poblaciones. Finalmente, en el sexto piso está el proceso de integración regional</p> <p>mediante el cual las sociedades de la región CARD procuran desarrollar respuestas comunes a desafíos compartidos.</p> <p>El capítulo dedica una sección a cada uno de los seis niveles. Su período de referencia es el sexenio 2018-2023, aunque en algunos casos el periodo es distinto, en función de la disponibilidad de datos y el alcance que se considere relevante para el análisis.</p> <p>La principal fuente de información son las series estadísticas anuales que recopila el Programa Estado de la Nación de Costa Rica (PEN-CONARE). Estas incluyen indicadores clave para dar cuenta de la evolución reciente de los países de la región CARD, los cuales se actualizan anualmente y están disponibles en el sitio web del programa. Esta plataforma de datos ofrece herramientas para descargar y generar visualizaciones de la información y cubre cerca de 180 indicadores y variables para los ocho países que abarca el <i>Informe</i>¹. Además, esta información se complementa con fuentes documentales y bibliográficas.</p> <p>La elaboración y actualización periódica de las estadísticas se realiza gracias al suministro de información que realizan decenas de instituciones en los países, en especial los institutos de estadística, así como organismos regionales e internacionales. El PEN-CONARE agradece públicamente la colaboración recibida.</p> <p>El capítulo ofrece una visión general sobre las tendencias regionales con el propósito de ofrecer al público lector un</p>
Resumen 49	
Introducción 51	
Fuentes y limitaciones de la información 52	
Panorama ambiental 52	
Panorama demográfico 62	
Panorama económico 71	
Panorama social 82	
Panorama político 90	
Panorama de integración regional 102	

panorama actualizado sobre la evolución reciente y la situación actual de la región en los ámbitos clave del desarrollo humano sostenible y la integración regional. No efectúa una comparación entre casos nacionales, excepto cuando es relevante para marcar una tendencia. El análisis es descriptivo, centrándose en identificar si hubo avances, retrocesos o estancamientos en cada piso, y en valorar la intensidad de los cambios acontecidos desde la publicación del último *Informe* (2021)².

En esta edición se ha incluido en los análisis indicadores de otros países y regiones del mundo para evaluar comparativamente el desempeño de la región CARD en temas para los cuales la información es accesible y comparable. En algunos casos se incluyen análisis prospectivos que permiten dimensionar el ritmo de avance o retroceso de los países de la región desde una perspectiva comparada.

Fuentes y limitaciones de la información

La plataforma de estadísticas del PENCONARE sobre la región CARD se basa en las publicaciones más recientes y las bases de datos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Además, se consultaron publicaciones internacionales adscritas o generadas por organizaciones no gubernamentales, redes o revistas periódicas que dan seguimiento a diversos temas ambientales y políticos. Entre ellas están el Global Water Partnership, en temas de acceso a recursos hídricos; el Global Footprint Network, en temas de emisiones de

carbono; Germanwatch, en temas de riesgos climatológicos; The Economist Intelligence Unit, con su indicador sobre la democracia; el Center for International Policy (para datos sobre asistencia en seguridad a la región), así como la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, que produce el Atlas Comparativo de Defensa, o la Unión por la Conservación Internacional de la Naturaleza (UICN).

En el ámbito económico, se utilizaron datos de los bancos centrales, y en la política, los generados por los poderes judiciales y los consejos supremos electorales de los distintos países, así como aquellos disponibles en bases de datos internacionales especializadas, como Lapop y V-Dem y los informes de IDEA Internacional. La información suministrada por los institutos de estadística y la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana a través de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, las Encuestas Continuas de Empleo y las Encuestas de Condiciones de Vida, fue fundamental para viabilizar los procesamientos y análisis de temas tan relevantes como empleo, ingresos, pobreza, estructura y composición de los hogares.

La búsqueda de información presentó importantes limitaciones. Una de ellas fue la desactualización de los datos de ciertos indicadores, cuyos registros más recientes eran anteriores al 2023. Esto se observa especialmente en temas sociales como educación y salud, lo cual constituye un importante vacío.

Otra limitación particularmente relevante se refiere a las restricciones en la publicación y acceso a información en Nicaragua y, en menor medida, en El Salvador. Los vacíos son muy notables en temas sociales y políticos, en especial en áreas como la administración de justicia, la población penitenciaria, la criminalidad, la violencia y los presupuestos públicos. Además, se ha observado un importante retroceso en la calidad, disponibilidad y acceso a información sobre el proceso de integración regional, lo cual está indudablemente relacionado con la falta de conducción en las instancias superiores de la SG-SICA.

Existen indicadores internacionales que no proporcionan información para todos los países considerados en este *Informe*, lo cual impidió incluir a Belice en algunos temas. Adicionalmente, algunos datos se generan de manera agrupada para la región, sin precisar claramente cuáles países se incluyen en el dato agregado.

Este capítulo también se alimenta de varias investigaciones elaboradas como parte del proceso de preparación de este *Informe* en temas específicos como migraciones, fuerzas armadas, seguridad ciudadana, integración regional y el posicionamiento de Centroamérica y la República Dominicana en las agendas y prioridades de las potencias hegemónicas del mundo.

Indudablemente, para la toma de decisiones respecto a políticas que permitan mejorar la situación de la región en los temas abordados en este capítulo, es indispensable contar con información pertinente, veraz, periódica y actualizada. Por ello, este Informe del Estado de la Región hace un llamado a mejorar la calidad y continuidad con que se producen los indicadores, así como a acortar, de ser posible, los tiempos requeridos para producirlos y, sobre todo, a fortalecer la publicidad y acceso a la información.

Panorama ambiental

El primer piso del edificio del desarrollo humano sostenible es el patrimonio de recursos naturales y ecosistemas de la región. Este patrimonio permite las dinámicas económicas y productivas, así como la satisfacción de las necesidades de la población. Del uso racional de los recursos naturales depende la sostenibilidad de las sociedades a mediano y largo plazo, y la posibilidad de que los beneficios que generan estén disponibles para las futuras generaciones.

En ediciones previas de este *Informe*, se ha señalado que la región CARD presenta una paradoja en términos ambientales: aunque posee una gran riqueza natural, está utilizando sus recursos y territorio de manera insostenible. El *Sexto Informe Estado de la Región* (2021) destacó, además, la agudización de los patrones de riesgo y

vulnerabilidad asociados a esos patrones de uso, una situación que se ve agravada por el fenómeno del cambio climático y los conflictos entre diversos sectores sociales y económicos por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Durante el período 2015-2024, de acuerdo con la información disponible, los patrones de uso de los recursos naturales no experimentaron cambios significativos, especialmente en lo relacionado con la generación y el consumo de energía, así como las presiones y riesgos asociados a estos patrones para los ecosistemas y su biodiversidad. Como consecuencia de estas dinámicas, se ha observado un incremento en el déficit ecológico debido a la incapacidad de la naturaleza para soportar los actuales patrones de consumo y contaminación.

De acuerdo con lo planteado en la anterior edición de este *Informe*, abordar los desafíos ambientales de la región demanda un trabajo conjunto y comprometido de diversos actores sociales, económicos y políticos, con una perspectiva a largo plazo. Además de fomentar una mayor conciencia pública y voluntad política para detener el deterioro ambiental, es importante disponer de información actualizada que respalde la toma de decisiones y permita el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

Persistencia de patrones ambientalmente insostenibles perpetúa el déficit ecológico

La región CARD presenta patrones de uso insostenible del territorio y los recursos naturales que han generado crecientes presiones ambientales y han aumentado la huella ecológica (PEN, 2021). En los últimos años, esta tendencia se ha agudizado como consecuencia del aumento de la huella ecológica provocada por mayores emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio en el uso del suelo, especialmente el aumento de cultivos, y el consumo de recursos forestales. En un contexto regional vulnerable a los efectos del cambio climático (capítulo 2), este desempeño implica mayores presiones, riesgo y vulnerabilidad para los ecosistemas y el patrimonio natural de la región.

Reducción de la huella ecológica por persona es insuficiente para alcanzar el balance ambiental

Desde 1980, el ritmo de consumo de recursos naturales de la población en Centroamérica y la República Dominicana ha sido mayor a la capacidad del territorio para regenerar los recursos naturales y absorber los residuos producidos. Desde ese año y hasta el 2022 (último con información disponible), la huella ecológica en la región ha resultado mayor a su biocapacidad.

A pesar de la tendencia decreciente en el consumo de recursos naturales por persona durante el siglo XXI, la región aún tiene déficit ecológico. En ciertos años, el ritmo de consumo de los recursos naturales se desacelera. Un claro ejemplo de esta tendencia fue el año 2020, debido a las medidas implementadas para mitigar la expansión del virus covid-19 durante la pandemia.

Hay dos razones por las cuales la disminución en la huella ecológica por persona en ciertos años no ha llevado a la región a un mayor equilibrio. Primero, la biocapacidad por persona también se

ha reducido. Debido al importante crecimiento demográfico, aunque individualmente cada persona consume menos, como grupo siguen consumiendo una mayor cantidad de recursos. Segundo, las economías se han vuelto más eficientes en la utilización de los recursos naturales y han reducido algunos de los principales contaminantes.

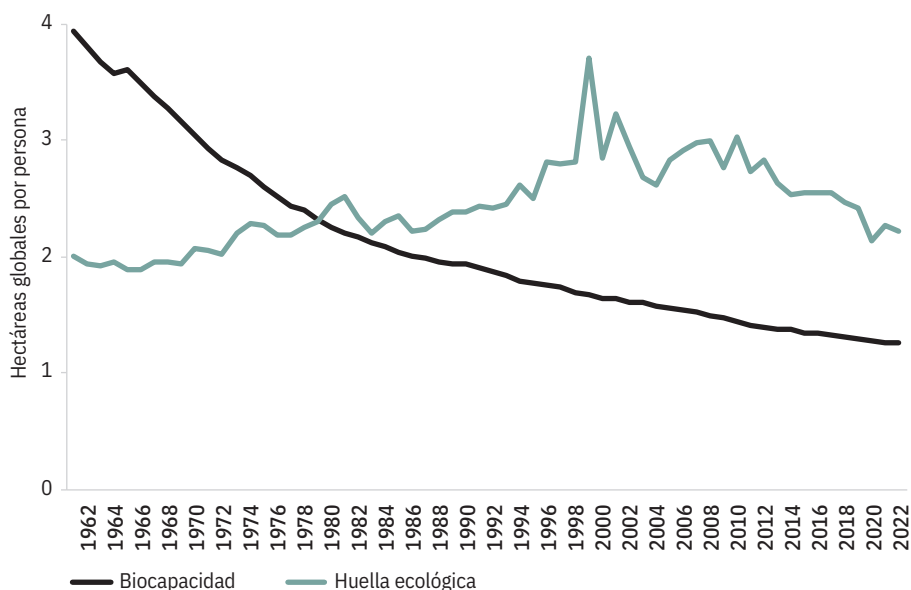
La principal consecuencia es que la región CARD está lejos de acercar su huella ecológica a su biocapacidad, por lo que el déficit se mantiene (gráfico 1.1). En el 2020 el déficit ecológico promedio fue de 41%; es decir, se requeriría un 41% de territorio adicional para soportar los patrones de consumo. Para el 2022, esa razón aumentó en 2 puntos porcentuales en la región.

La disponibilidad de recursos naturales y los patrones de consumo de estos varían entre los distintos países de CARD. En el año 2022, de los ocho países de la región cinco se encontraban en una situación de déficit ambiental, cuatro de ellos con una magnitud especialmente alta. Los patrones de consumo de los recursos naturales en estos países

Gráfico 1.1

Región CARD^{a/}

Evolución de la huella ecológica y la biocapacidad. 1961-2022
(hectáreas globales por persona)



a/ Para Belice se consideran datos de 1993 a 2022 y para Panamá de 1965 a 2022.
Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos de *Global Footprint Network*

resultan insostenibles; pues exceden la capacidad de regeneración natural y la disponibilidad territorial.

En el 2022 el país con el mayor déficit ecológico fue El Salvador, en donde la huella ecológica por persona excedió en 69% su biocapacidad. Le siguen la República Dominicana con un déficit de 62% y Belice con 56%. A esta lista de países con patrones de consumo de recursos ambientalmente insostenibles se suma Guatemala y Costa Rica, con déficits de 49% y 38%, respectivamente (gráfico 1.2).

Solo tres países de la región mantienen una reserva ambiental. En estos, los patrones de consumo de los recursos naturales por persona aún no superan los recursos disponibles en el territorio y su ritmo de regeneración natural. Sin embargo, estos casos muestran una tendencia a disminuir, lo cual indica que se está agotando esa reserva. En el 2022, el país con mayor reserva ambiental fue Nicaragua, con una biocapacidad por persona 55% mayor a su huella ecológica, seguido por Honduras y Panamá con reservas ambientales de un 23% y un 13%, respectivamente (Echeverría y Fernández, 2025c).

La región CARD presenta un balance ambiental similar al de Norteamérica y el mundo

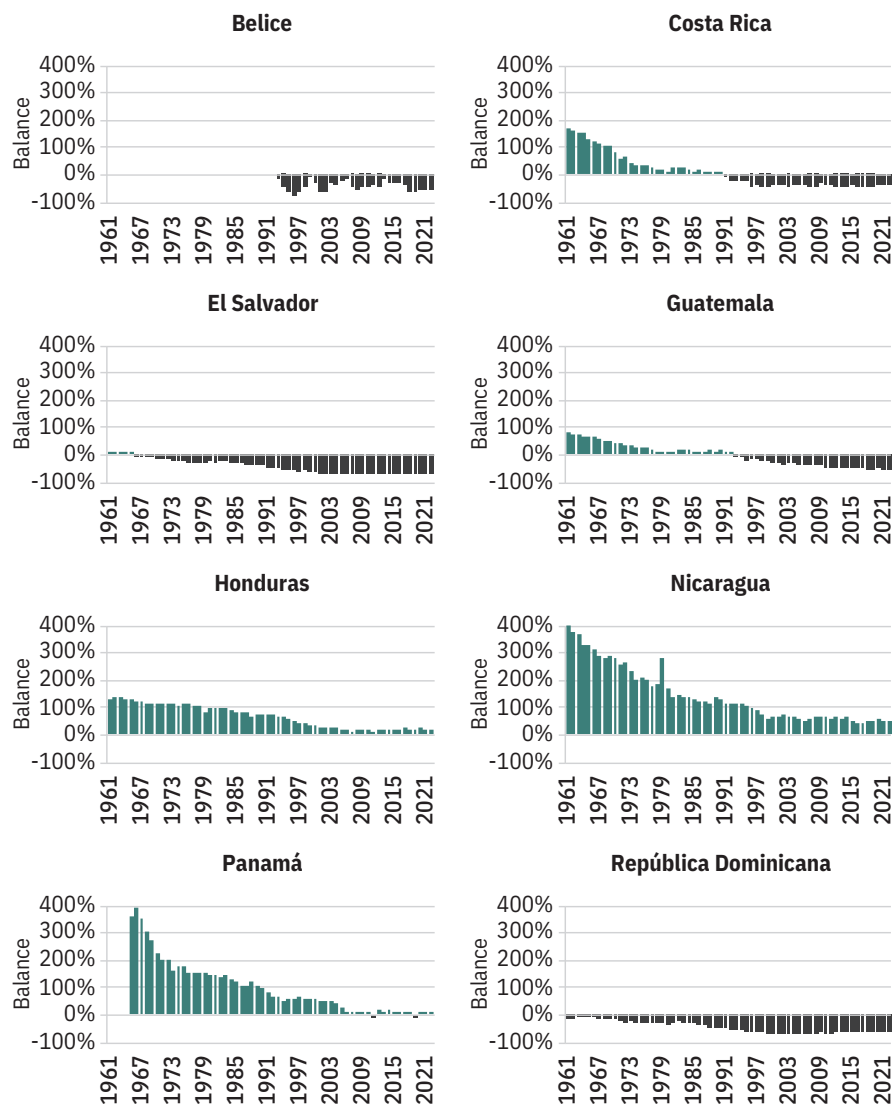
Cuando se compara el balance ambiental promedio de la región CARD con el de otras regiones del mundo, la evolución es claramente desfavorable. En la década de los años sesenta del siglo XX, la región registraba un balance ambiental en el que sus habitantes tenían cerca del doble de las reservas ecológicas promedio a nivel mundial. Sin embargo, en el 2022, el déficit ambiental de la región fue similar al promedio mundial e incluso al de Norteamérica, la cual, históricamente, ha sido una región con patrones insostenibles de uso de sus recursos naturales. En otras palabras, el crecimiento de la huella ecológica en CARD ha sido comparativamente más acelerado que en estas regiones.

Una realidad distinta se presenta en América Latina y el Caribe. En general, esta región es considerada una reserva

Gráfico 1.2

Región CARD^{b/}

Evolución del balance ambiental^{a/}, por país. 1961-2022



a/ Se estima como el porcentaje en exceso de la biocapacidad per cápita por encima de la huella ecológica per cápita. Si el resultado es positivo (negativo) indica un superávit (déficit) ambiental.

b/ Para Belice se consideran datos de 1993 a 2022 y para Panamá de 1965 a 2022.

Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos de *Global Footprint Network*.

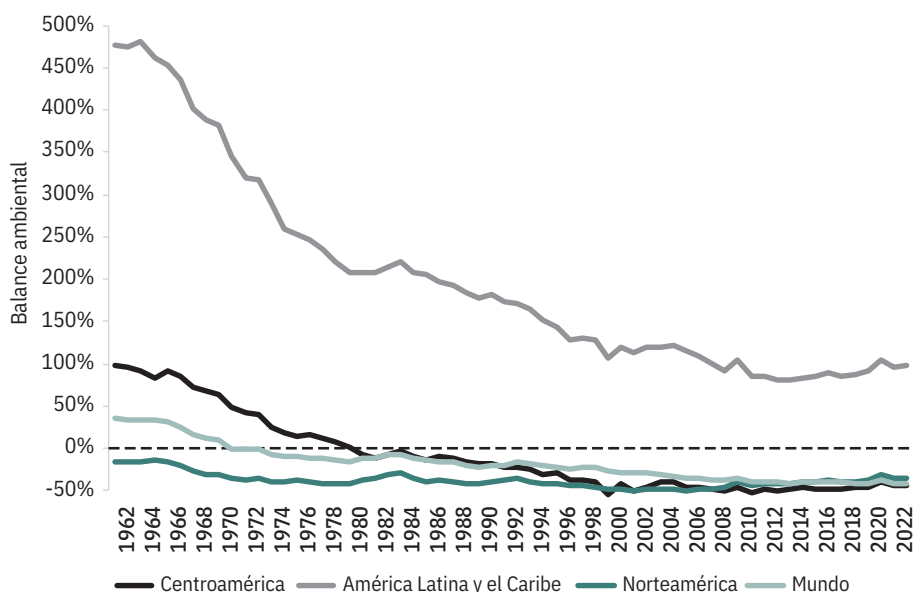
ecológica porque su biocapacidad por persona continúa siendo superior que la huella ecológica per cápita, principalmente, debido a la reserva de recursos de la Selva del Amazonas en América del Sur. Es importante señalar que, independientemente de las tendencias descritas, todas las regiones muestran, en mayor o menor medida, un mayor agotamiento de los recursos naturales (gráfico 1.3).

Emisiones de carbono, cultivos y deforestación son los principales disparadores de la huella ecológica

De acuerdo con Echeverría y Fernández (2025c), en la región CARD son tres los componentes principales de la huella ecológica: las emisiones de carbono asociadas mayoritariamente al sector transporte y energía; los cambios

Gráfico 1.3

Región CARD y regiones seleccionadas

Evolución del balance ambiental^{a/} por regiones. 1961-2022

a/ Se estima como el porcentaje en exceso de la biocapacidad per cápita por encima de la huella ecológica per cápita. Si el resultado es positivo (negativo) indica un superávit (déficit) ambiental.

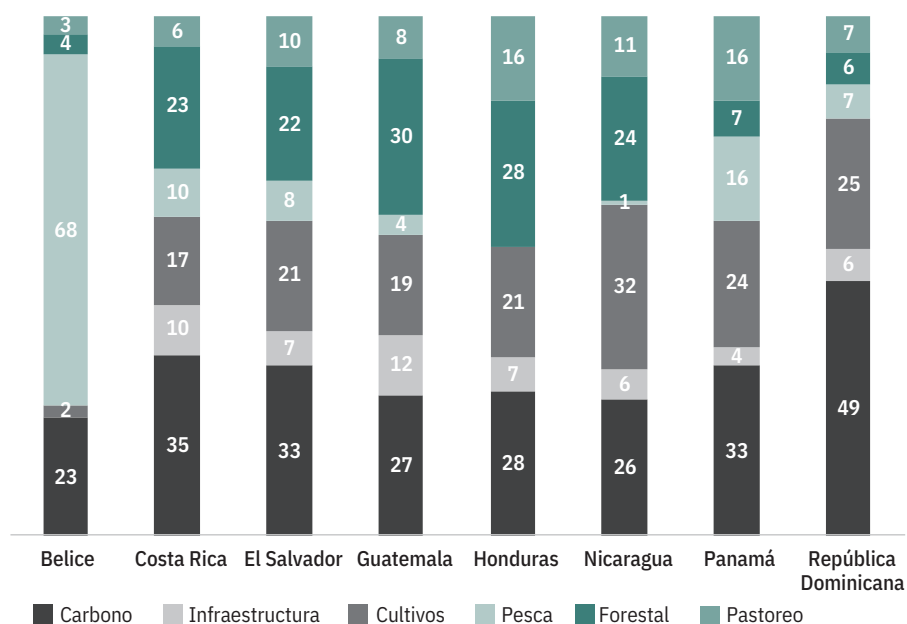
Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos de *Global Footprint Network*.

Gráfico 1.4

Región CARD

Distribución de la huella ecológica, por país, según tipo de uso de los recursos. 1961-2022

(porcentajes)



Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos de *Global Footprint Network*.

en el uso del suelo, en particular, de otros usos a cultivos; y el consumo de recursos forestales. Avanzar hacia patrones ambientales más sostenibles depende de impulsar mejoras en la gestión ambiental en estas áreas.

Aunque los factores que generan la huella ecológica son comunes, existen diferencias en la importancia relativa de cada uno de ellos entre los países de la región. En Belice, se presenta una situación excepcional debido a la importancia de la actividad pesquera, la cual representa cerca del 70% de su huella ecológica. En Guatemala y Honduras, la actividad más significativa es el consumo de recursos forestales, con cerca del 30% del total; esto podría estar relacionado con el uso de la leña como fuente de energía. En Nicaragua, los cultivos constituyen el principal componente de la huella ecológica; por su parte, en la República Dominicana la huella de carbono representa casi la mitad de su huella ecológica total (gráfico 1.4).

Rica biodiversidad en peligro

La región CARD alberga aproximadamente el 12% de la biodiversidad global en apenas el 2% del territorio mundial. Este rico patrimonio natural hace de su conservación y uso sostenible prioridades estratégicas para impulsar el desarrollo humano de la región. De acuerdo con lo señalado en el *Sexto Informe Estado de la Región*, cerca de una cuarta parte del territorio tiene alguna categoría de protección ambiental; no obstante, esto resulta insuficiente para alcanzar un balance ambiental sostenible (PEN, 2021). En los últimos años, las presiones y amenazas sobre el patrimonio natural de la región han sido cada vez más evidentes.

El análisis de las especies que se encuentran en peligro de extinción permite conocer esas amenazas para priorizar las acciones necesarias para su protección y la de los ecosistemas en donde habitan. De acuerdo con Echeverría y Fernández (2025a), con base en la “Lista Roja de Especies Amenazadas” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 2024, Guatemala es el país de la región con la mayor proporción de especies en peligro:

cerca del 20% del total de sus especies de flora y 9% de las especies de fauna en el año 2024. Le sigue la República Dominicana con 16% de especies de flora y 11% de fauna. Costa Rica tiene altos porcentajes de especies en peligro: 15% de flora y 7,2% de fauna (gráfico 1.5). Nicaragua es el país con menor proporción de especies en peligro (6,5% de flora y 5,3% de fauna). En todos los países, el porcentaje de especies de flora en peligro es mayor al de fauna.

Como cada planta o animal tiene un nivel distinto de vulnerabilidad y amenaza, la UICN clasifica las especies en tres niveles de riesgo. El primero es el de especies en “peligro crítico” que podrían estar extintas o casi extintas en su hábitat natural, aunque no se consideran oficialmente extintas debido a la falta de evidencia concluyente. El segundo nivel corresponde a las especies en “peligro”, pues enfrentan una probabilidad muy alta de extinción en un futuro cercano si no se toman medidas de protección inmediatas. Finalmente, el tercer nivel abarca a las especies “vulnerables”, aquellas que, aunque no están en riesgo inminente de extinción, viven un declive significativo y requieren atención para evitar su progresión a categorías de más gravedad.

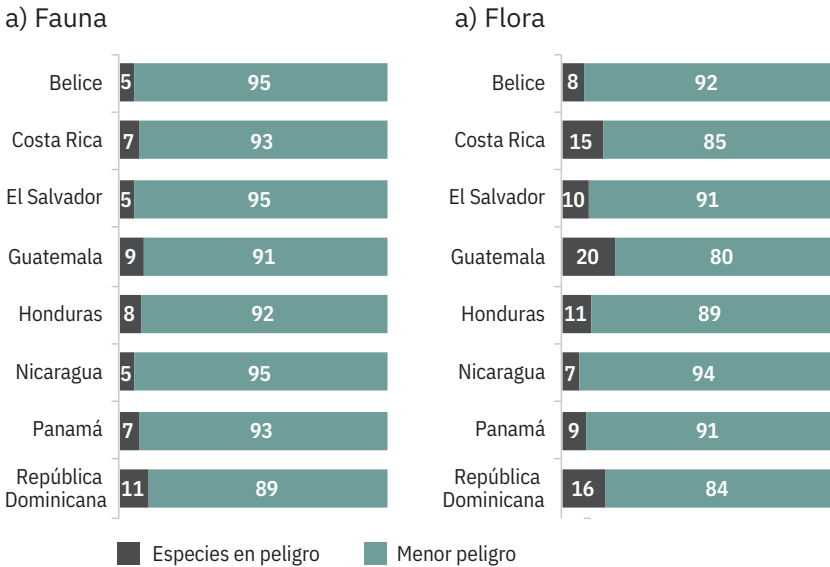
Al observar la distribución de estas categorías de riesgo para el año 2024, se identificó que la mayor parte de las especies amenazadas en los países de CARD se encontraban en la categoría de “vulnerables”. Dependiendo del país y del tipo de especie (flora o fauna), entre el 35% y el 60% del total de las especies en riesgo se agrupan en esta categoría.

Es preocupante observar la considerable proporción de especies que se encuentran en la categoría de especies en “peligro”, lo cual indica un nivel de riesgo elevado. Esta clasificación abarca aproximadamente el 50% de las especies de flora en Guatemala, la República Dominicana, Costa Rica, Belice y Nicaragua; esto sugiere que la vegetación nativa está bajo una presión considerable en estos países (Echeverría y Fernández, 2025a).

El mayor riesgo lo tienen las especies de fauna. Entre las especies amenazadas, una proporción significativa está

Gráfico 1.5

Región CARD
Distribución de especies de flora y fauna en peligro de extinción, por país. 2024
(porcentajes)



Fuente: Echeverría y Fernández, 2025a con datos de Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

en “peligro crítico”. Aproximadamente, el 30% de las especies amenazadas se encuentran en “peligro”, con variaciones entre los países. Más de un 20% de las especies de fauna está en esta condición en la mayoría de los países de CARD; excepto en El Salvador. Además, la proporción de especies de flora en peligro crítico es alta en países como Honduras y, en mayor medida, Guatemala. Por otro lado, es preocupante la gran proporción de flora que está en la categoría de peligro. Estas representan cerca del 50% en Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Belice y Nicaragua, lo que sugiere que la vegetación nativa está bajo una presión considerable en estos países (gráfico 1.6).

Pocos avances en la transformación de la matriz energética

A pesar de algunos avances recientes en energía renovable, la región continúa siendo altamente dependiente de los combustibles fósiles importados. La inversión limitada en infraestructura

para la generación de energías limpias y las dificultades para descarbonizar sectores como el de transporte son dos de los principales retos para avanzar hacia una transición energética sostenible.

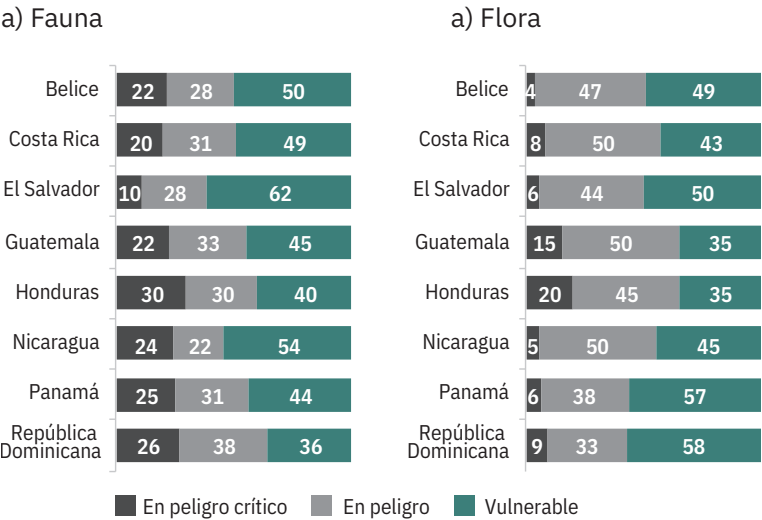
Mejora generación de energía renovable pero falta de inversión impide aprovechar su potencial

La participación de las fuentes renovables en la capacidad instalada total para la generación de electricidad en la región CARD aumentó de un 56% a un 67%, entre el 2015 y el 2022, según una investigación de la Cepal para este Informe (Torijano et al., 2025). Este crecimiento fue impulsado por la expansión de la capacidad solar fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica. Este representa un avance significativo en una región que necesita reducir su huella ecológica y adoptar patrones ambientalmente sostenibles para impulsar su crecimiento económico y desarrollo humano.

En el 2022, la hidroelectricidad representó el 40% del total de la generación regional de electricidad. Las energías

Gráfico 1.6

Región CARD
Condición de las especies en peligro, por país según tipo. 2024
(porcentajes)



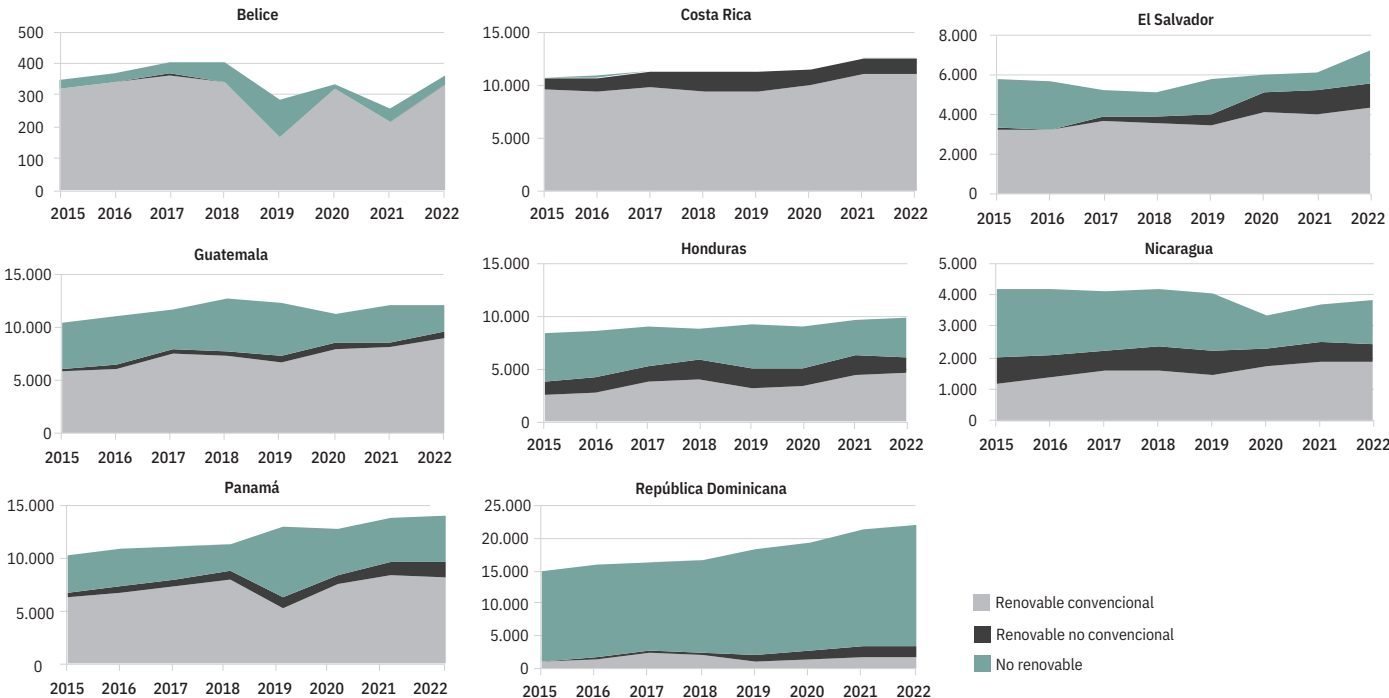
Fuente: Echeverría y Fernández, 2025a con datos de Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

renovables no convencionales (geotermia, eólica, biomasa, solar y biogás) representaron el 20% y la energía no renovable, el 40%. Si bien esta es una tendencia regional, existen importantes diferencias entre los países.

Costa Rica produce más del 99% de su electricidad con fuentes renovables en el 2022, mientras que la República Dominicana depende casi por completo de fuentes no renovables (84%). Los demás países tienen posiciones intermedias en términos de la proporción de fuentes renovables y no renovables en la generación eléctrica, con una participación importante de hidroelectricidad y una proporción menor de fuentes no convencionales (gráfico 1.7). Nicaragua, Honduras y El Salvador lideran con la mayor cantidad de electricidad generada a partir de fuentes no convencionales. Llama la atención el crecimiento de este tipo de energía en el caso salvadoreño desde el 2019.

Gráfico 1.7

Región CARD
Evolución de la generación de electricidad, por país según fuente de energía^{a/}
(miles de GWh)



a/ La energía renovable convencional se refiere a la hidroelectricidad; y la energía renovable no convencional se refiere a solar, eólica, geotérmica, biomasa y biogás.

Fuente: Torijano et al., 2025 con datos de Cepal, 2024.

En los últimos años, la hidroelectricidad se ha visto afectada por prolongadas e intensas sequías. De acuerdo con los escenarios del cambio climático para la región (véase capítulo 2), se prevé que la capacidad de generación con este tipo de fuente enfrentará riesgos y variabilidad en las próximas décadas, lo cual limitará la estabilidad de la producción de este tipo de energía.

El incremento y las altas tasas de crecimiento de otras fuentes de energía renovable no convencionales (ERNC) en la región CARD son importantes para contrarrestar esta situación. Existe una gran posibilidad de incrementar el uso de fuentes como la geotérmica, eólica y solar, especialmente debido a la reducción de los precios internacionales de las tecnologías necesarias para la generación de este tipo de energía. Esto es clave para mejorar la capacidad instalada para la generación de electricidad en la región, que aumentó de 18.936 MW en el 2015 a 24.112 MW en el 2022, a una tasa de crecimiento del 3,5% anual (Torijano et al., 2025).

Aprovechar el potencial de las fuentes renovables no convencionales requerirá de grandes inversiones en la generación y en las redes de transmisión y distribución de electricidad, así como en los sistemas de almacenamiento de energía, para mitigar los efectos de su intermitencia, la cual se reduce entre más grande sea el número de centrales.

Finalmente, es importante destacar la generación con gas natural. Aunque su aporte es aún bajo, ha aumentado sobre todo en Panamá, la República Dominicana y Honduras. Este recurso es estratégico en la transición energética, pues puede sustituir a las fuentes fósiles no renovables, que suelen ser más contaminantes, y complementar a las renovables, sin reemplazar el esfuerzo de ampliar las fuentes renovables no convencionales.

Consumo energético continúa dependiendo mayoritariamente de hidrocarburos importados

Entre el 2015 y el 2022, el consumo energético total de la región CARD aumentó un 2,4% anual, mientras que

su PIB creció un 3,4% anual. Este ritmo de crecimiento fue mayor al de América Latina y el Caribe, que incrementó el consumo de energía en un 0,8% anual y el PIB, a un 0,7% anual en ese mismo período.

Este mayor consumo energético dependió en sobre manera de combustibles fósiles importados (Olade, 2023). A nivel regional, la participación de los derivados del petróleo en el consumo final alcanzó el 54%, seguido por la leña con un 28%, constituyendo las dos principales fuentes de energía. Por su parte, la participación de la electricidad en ese consumo fue de un 15%, de cuyo porcentaje aproximadamente el 60% correspondió a fuentes renovables y el 40% a fuentes no renovables (Torijano et al., 2025).

En el 2022, el sector transporte consumió el 37% del total de la energía, principalmente combustibles fósiles derivados del petróleo. El sector residencial representó el 36% del consumo energético, mientras que la industria tuvo una participación del 17%. Este último porcentaje es el mismo que en 2015, lo que refleja el escaso crecimiento industrial de la región. Aunque esta estructura de consumo es muy similar entre los países, destaca la importancia del consumo de leña en el sector residencial en Guatemala, Nicaragua y Honduras, así como la diversificación de fuentes en el sector industrial en Belice, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana (gráfico 1.8).

Descarbonizar el sector transporte es uno de los grandes desafíos a mediano y largo plazo para la región CARD, tanto en términos de reducir la dependencia de los combustibles fósiles como de disminuir la contaminación derivada de esta. No obstante, esto requiere la implementación simultánea de diferentes estrategias, incluyendo la utilización de vehículos de cero emisiones, el aumento de las opciones de transporte público multimodal y una mejor planeación de la movilidad en los centros urbanos (Torijano et al., 2025).

Los niveles de dependencia de los combustibles fósiles varían entre los países. Existe una dependencia muy elevada en la República Dominicana, Panamá y El

Salvador (87%, 76% y 72%, respectivamente), mientras que alcanza niveles intermedios en Honduras (57%), Belice (55%) y Costa Rica (52%). En los casos de Nicaragua (43%) y Guatemala (36%), la dependencia es menor, debido a la gran participación de la leña³ en su matriz energética (Torijano et al., 2025).

Uso poco eficiente de la energía

Además de ser fuertemente dependientes del consumo de los hidrocarburos importados, las matrices energéticas de la región CARD son poco eficientes. Un indicador aproximado de esa eficiencia energética global es la intensidad energética. Mide la energía necesaria para satisfacer cierto nivel de producción en un país para un año determinado. Entre más alto sea el indicador, más baja será la eficiencia, pues se requiere de más energía para producir una misma unidad de producto.

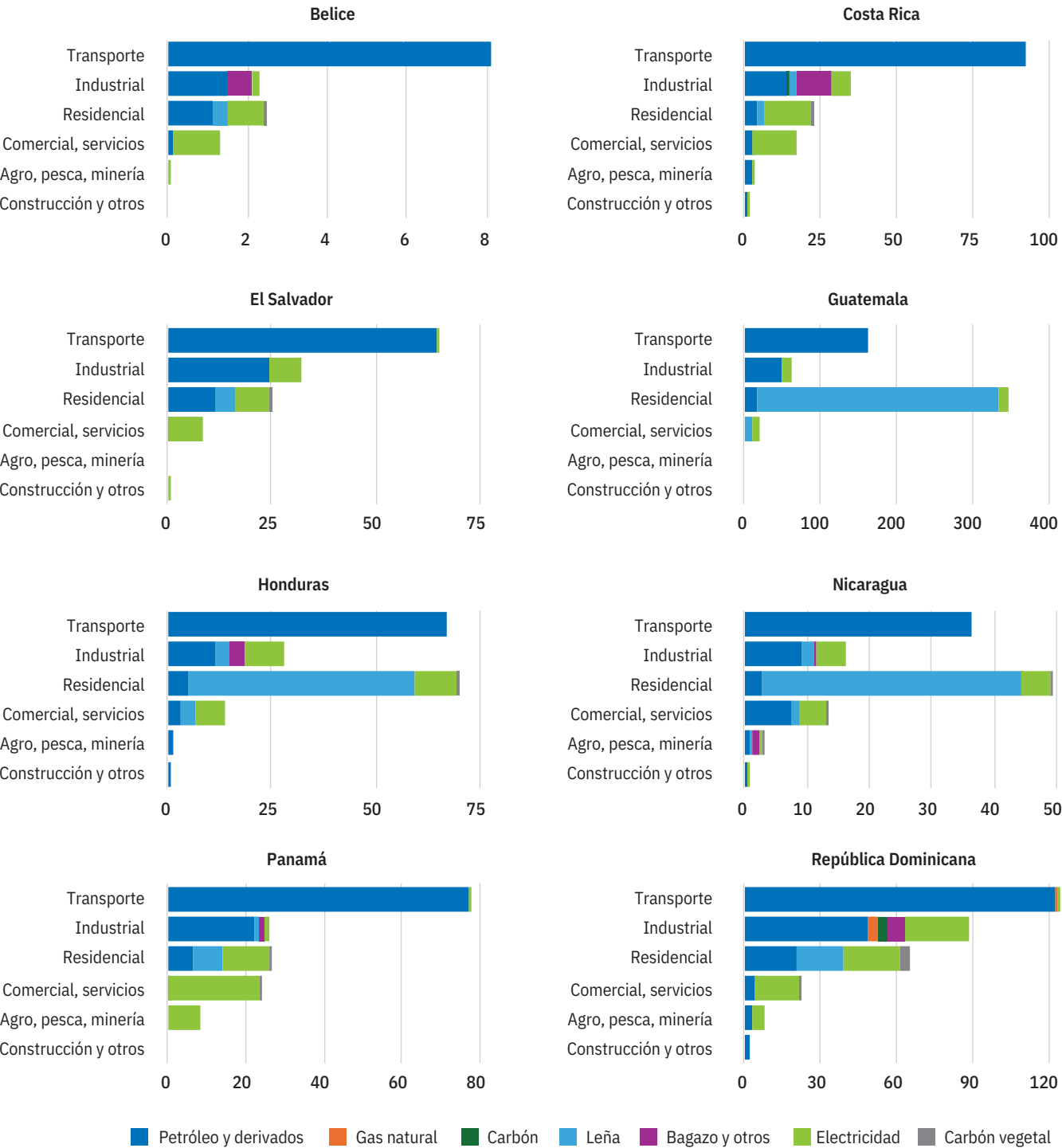
En el período 2015-2021, todos los países de la región experimentaron disminuciones en la intensidad energética de la energía primaria, a excepción de Guatemala y Belice. En el 2021 cuatro de los ocho países de CARD tuvieron una intensidad energética menor al promedio latinoamericano (3,36 megajoules por unidad del PIB) y solo Belice superó el indicador promedio global de 4,59 megajoules (Torijano et al., 2025).

En el 2021, Panamá, Costa Rica, la República Dominicana y El Salvador fueron los países con los menores niveles de intensidad energética de la región. En otras palabras, requirieron una cantidad menor de energía para producir cada unidad de PIB. Estos países son los de mayor dinamismo y desarrollo económico de la región. En contraste, Honduras, Nicaragua y Guatemala tuvieron las intensidades energéticas más altas de la región con 4,22, 4,29 y 4,42 megajoules por unidad del PIB, respectivamente. Esto puede estar relacionado con el alto consumo de leña a nivel residencial, el cual es muy poco eficiente (gráfico 1.9).

Un indicador de la eficiencia operativa y comercial de los sistemas eléctricos es las pérdidas de energía, medido como la proporción de las pérdidas técnicas⁴ y no técnicas⁵ con respecto al total de

Gráfico 1.8

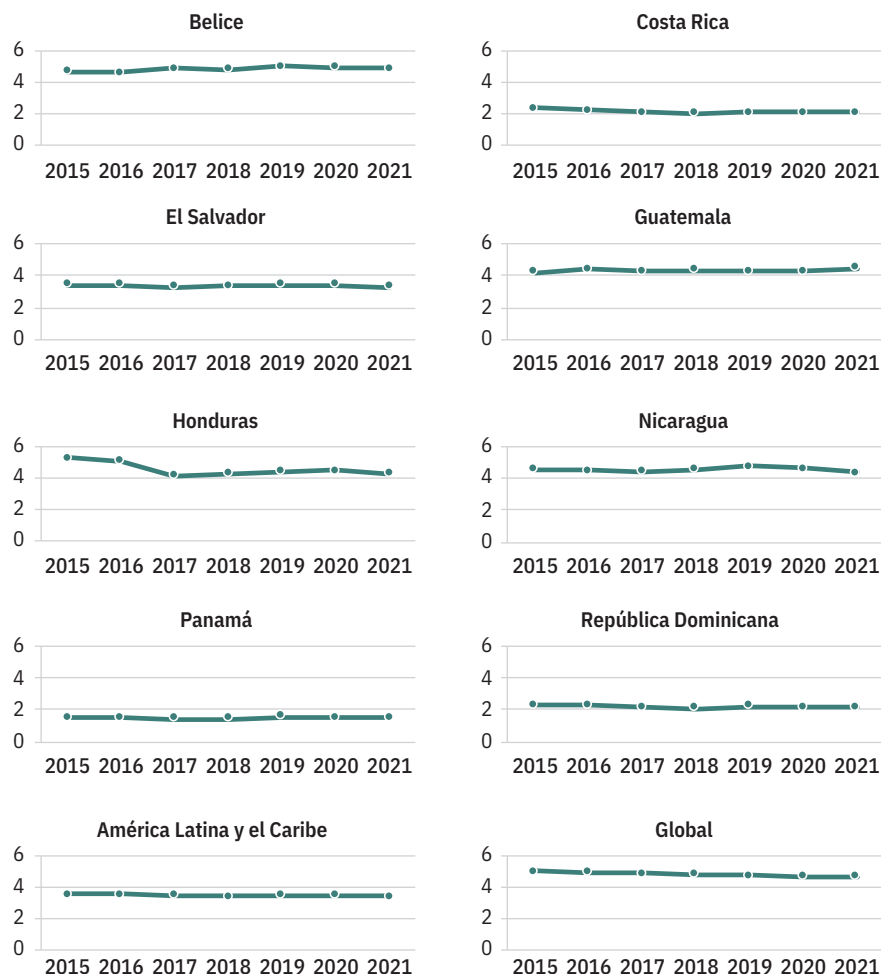
Región CARD
Consumo final de energía por sector y fuente, según país. 2022
(miles de gigajoules)



Fuente: Torijano et al., 2025 con datos de Cepal, 2024.

Gráfico 1.9

Región CARD, ALC y mundo
Intensidad energética^{a/} por país y región. 2015-2021
 (megajoules por unidad de PIB^{b/})



a/ Energía necesaria para alcanzar un cierto nivel de producción en un país y año determinado.

b/ Se utiliza el PIB a precios constantes del 2017 ajustados por paridad de poder de compra.

Fuente: Torijano et al., 2025 con datos de las Naciones Unidas.

la electricidad generada. En la región CARD las pérdidas eléctricas son mayores al límite aceptable de 10% que tienen los sistemas eficientes. Por ejemplo, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el rango promedio de pérdidas es del 6% y 8% (Torijano et al., 2025 y Yépez García y Mori, 2024).

Entre 2015 y 2022, Costa Rica, El Salvador, Belice, Guatemala y Panamá tuvieron pérdidas eléctricas de transmisión y distribución que oscilan entre un 11% y un 15%, niveles similares al promedio de América Latina y el Caribe (14%).

Por su parte, Honduras, la República Dominicana y Nicaragua presentaron pérdidas promedio de un 34%, un 33% y un 23%, respectivamente. Reducir estos números es necesario para lograr un mejor aprovechamiento de la energía (Torijano et al., 2025).

Sistemas de movilidad en territorios urbanos degradados agudizan riesgo y vulnerabilidad

Una infraestructura vial congestionada, sistemas de transporte público ineficientes y la dependencia de combustibles fósiles son factores que incrementan las

emisiones contaminantes. Además, acentúan la vulnerabilidad de las ciudades ante los riesgos ambientales y sociales del crecimiento urbano acelerado y desordenado, tendencia analizada en el *Quinto Informe Estado de la Región* (2016). Mejorar la sostenibilidad y accesibilidad del transporte es esencial para mitigar estos riesgos.

Crecen emisiones de gases generados por el sector transporte

Uno de los efectos de las matrices energéticas dependientes de los combustibles fósiles, como la de la región CARD, es la emisión de gases de efecto invernadero que inciden en el agravamiento de la crisis climática global y constituyen el principal factor determinante del incremento de la huella ecológica.

Anteriores ediciones del Informe han señalado que, desde una perspectiva global, la región CARD no es un importante emisor de estos gases debido al tamaño reducido de su economía y población. No obstante, en consonancia con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esto no exime a la región de emprender acciones para reducirlas.

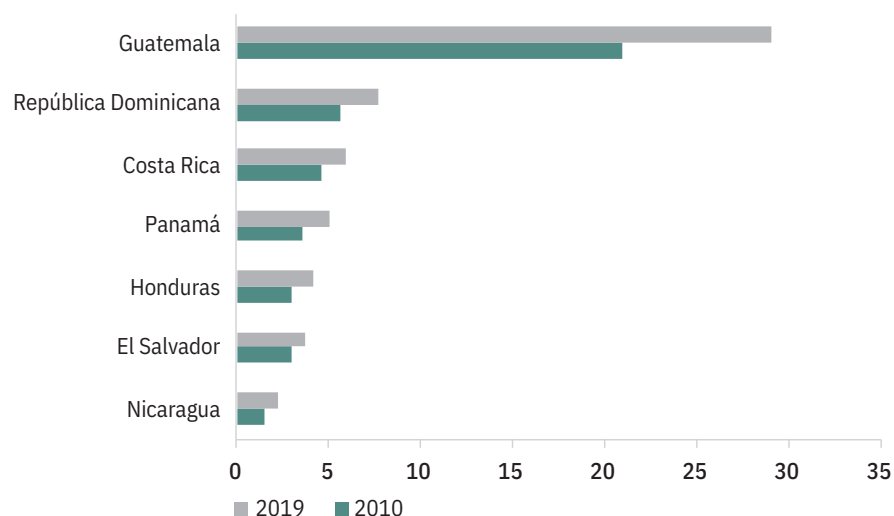
Todos los países de la región aumentaron la emisión de gases de efecto invernadero durante la segunda década del presente siglo (gráfico 1.10). En ese período, se incrementaron las emisiones de dióxido de carbono en el sector transporte; sin embargo, hay importantes diferencias en la magnitud de esos aumentos. Guatemala ha generado la mayor cantidad de emisiones, produciendo cerca de 30 megatoneladas en 2019, esta cifra es 38% mayor a la reportada en el año 2010. En los demás países, el nivel de las emisiones y los aumentos son mucho más bajos, menores a 10 megatoneladas al año.

Patrón de crecimiento urbano profundiza rezago de sistemas de transporte público

En las últimas décadas, la región CARD ha experimentado una creciente concentración poblacional en las áreas urbanas, principalmente las zonas metro-

Gráfico 1.10

Región CARD

Emisiones de dióxido de carbono en el sector transporte, por país.
(megatoneladas de CO₂)

Fuente: Elaboración propia con datos de IEA, 2024.

politanas (sección demográfica de este panorama). De acuerdo con el análisis de las imágenes satelitales realizado para el *Quinto Informe Estado de la Región* (2016), la superficie de las manchas urbanas de las ciudades capitales y su periferia casi se triplicó entre 1975 y el 2014. En todos los países, el crecimiento urbano fue del centro hacia la periferia, configurando áreas metropolitanas más extensas, pero con menor densidad de población. Ese patrón suele requerir altos niveles de inversión pública en más carreteras, tuberías, cableado y sistemas de transporte para atender las nuevas necesidades en el territorio (PEN, 2016).

Durante el presente siglo se han realizado diversos esfuerzos para mejorar la movilidad en las grandes ciudades de CARD mediante el ordenamiento vial, la modernización de las flotas de transporte público, la introducción de carriles exclusivos para autobuses⁶, la reactivación del servicio de tren urbano y la aplicación de restricciones a la circulación de vehículos. Sin embargo, las únicas apuestas que han implicado un avance significativo hacia una modalidad de transporte público moderno y eficiente han sido la inauguración del tren subterráneo (metro)

en Santo Domingo en el 2009 y la de Panamá en el 2014.

El indicador de movilidad sostenible, calculado por la iniciativa “Sustainable Mobility for All” (2022), permite dar seguimiento al desempeño del transporte público de manera comparativa con otros países del mundo y considera aspectos como el acceso, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de los sistemas.

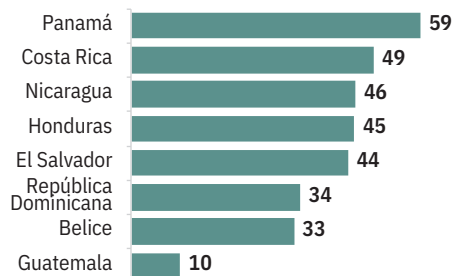
En el 2022, Panamá se ubicó en la posición 45 de un total de 183 naciones evaluadas con un resultado de 59 en una escala de 0 a 100, en la que 100 representa la mejor calificación. El resto de los países centroamericanos se encuentran por debajo de la posición 72 y tienen un valor inferior a 50 en el índice (gráfico 1.11), lo que evidencia su rezago en esta materia. La República Dominicana obtuvo un puntaje de 33 el más bajo de la región y, además, se sitúa en la posición 138 del ranking.

Acelerado crecimiento del parque automotor

Durante las últimas décadas, la región CARD ha experimentado un rápido aumento en el número de vehículos, lo

Gráfico 1.11

Región CARD

Puntaje por país en el índice de movilidad sostenible^{a/}.
2022

a/ El indicador de movilidad evalúa el desempeño del transporte público de forma comparativa y a nivel internacional, se calcula para 183 países incluidos los de CARD, considera aspectos como acceso, eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental de los sistemas.

Fuente: Elaboración propia con datos de Sustainable Mobility for All, 2022.

que indica que cada vez más personas prefieren el transporte privado para satisfacer sus necesidades de movilidad. Esta tendencia también respalda lo señalado en el *Quinto Informe Estado de la Región* (2016), en relación con el crecimiento acelerado y desordenado de las áreas metropolitanas y principales ciudades, así como al rezago de los servicios públicos, entre ellos el transporte, para responder a la demanda derivada de esa nueva configuración territorial. Como resultado, las flotas vehiculares han crecido de manera desproporcionada en relación con la extensión territorial y el número de habitantes de los países.

De acuerdo con los registros de los institutos de estadística de los países, la cantidad de vehículos en CARD (sin incluir Belice) pasó de 11,6 millones en el 2015 a 18,3 millones en el 2022; es decir, creció casi 58% en siete años. El mayor parque automotor de la región es el de la República Dominicana (5,4 millones en el 2022) seguido por el de Guatemala (4,8 millones, cuadro 1.1).

En el 2022, la República Dominicana presentó la mayor tasa de vehículos por mil habitantes (487), seguida por Costa Rica (344) y Guatemala (271). Aunque

estas cifras son menores en comparación con países como España y Portugal, resultan similares a las de otras naciones de América Latina como Brasil (400), Colombia (296) y México (370; Unece, 2024).

Panorama demográfico

Un segundo “piso” del edificio del desarrollo humano sostenible es la población. Es fundamental que las personas desarrollen sus capacidades para que puedan aprovechar las oportunidades que les permitirán alcanzar su bienestar, tener una vida digna y ejercer sus derechos y libertades. No obstante, las necesidades y expectativas de la población son variables y dependen del entorno y los ciclos de vida de las personas. Por esta razón, conocer y dar seguimiento a las características de la población es crucial para el diseño de acciones públicas diferenciadas y acordes a la situación de los distintos grupos sociales. Por ello, sucesivas ediciones del *Informe Estado de la Región* han dado seguimiento a la evolución de la población de la región CARD.

En el quinquenio 2020-2025, Centroamérica y la República Dominicana continuaron adentrándose en el proceso de transición demográfica. Este ha provocado que la estructura de su población pase de estar dominada por personas menores de 15 años a una en la que prevalece la población en edad laboral (de 15 a 65 años). Esta tendencia de largo plazo ha sido descrita en ediciones previas de este *Informe* (PEN, 2011, 2016 y 2021).

En los últimos años fueron claras las manifestaciones del envejecimiento de la población, un fenómeno especialmente notable en los países que se encuentran en una fase más avanzada de la transición como Costa Rica y Panamá. Estas naciones tienen menores márgenes de maniobra para emprender las acciones de política pública requeridas para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos de este proceso para las economías, los mercados laborales y los sistemas de protección social y de salud.

El hecho novedoso en el último lustro fueron los cambios en las dinámicas migratorias desde la región y el posicio-

Cuadro 1.1

Región CARD

Flota vehicular en la región, según país^{a/}. 2015 y 2022

País	Flota vehicular 2022	Vehículos adicionales respecto a 2015	Tasa por mil habitantes 2022
Costa Rica	1.748.935	402.591	344
El Salvador	1.602.819	677.371	255
Guatemala	4.829.864	1.859.186	271
Honduras	2.597.683	1.220.591	248
Nicaragua	1.164.300	517.365	173
Panamá	941.487	158.604	214
República Dominicana	5.463.996	1.851.032	487
Regional	18.349.084	6.686.740	296

a/ No se incluye Belice.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (Costa Rica), FONAT (El Salvador), SAT (Guatemala), INE (Honduras), INIDE (Nicaragua), INEC (Panamá) y DGII (República Dominicana).

namiento de CARD como el principal corredor migratorio del hemisferio, cuyo principal destino es los Estados Unidos. Este contexto ha generado tensiones entre los Estados y ha hecho necesaria la implementación de nuevas medidas para mejorar la forma de gestionar los flujos migratorios, especialmente de las personas en tránsito por la región.

La población regional es cada vez más urbana y su crecimiento se desaceleró

Al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, la región CARD tiene cerca de 20 millones de habitantes más que al inicio. Aunque la cantidad de población ha aumentado, su ritmo de crecimiento es cada vez menor y diferenciado entre los países. La fecundidad ha continuado disminuyendo y ello ha coincidido con una mayor concentración de población en las zonas urbanas.

Población continúa concentrada en tres países y en zonas urbanas

En el año 2000 la región CARD contaba con poco más de 45 millones de habitantes y según las estimaciones de la Cepal (2024b), en el año 2025 alcanzará los 64.734.300 habitantes, un notable incremento del 43,8%. No obstante, a lo

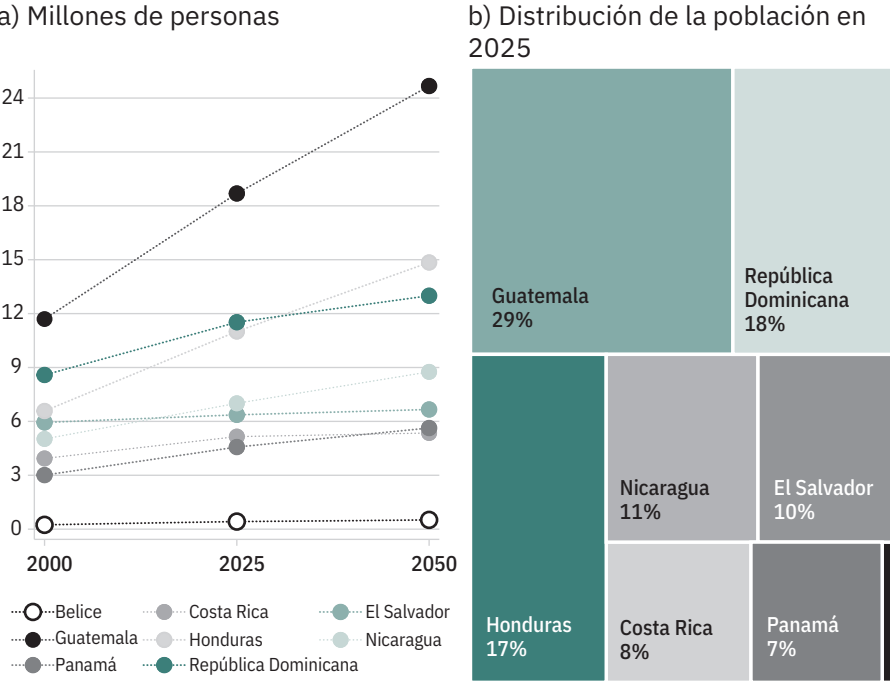
largo de este período hubo importantes cambios en el ritmo de crecimiento. En la primera década del siglo, la región aumentó su población, en promedio, en 796 mil personas por año; en la década del 2010 en 808 mil y desde el 2020 se añaden en promedio 744 mil habitantes anualmente, unos 50.000 menos que en la primera década. De mantenerse esta tendencia, para el 2050 la población de la región sería de cerca de 80 millones.

El ritmo de crecimiento varía entre los diferentes países. En el período 2000-2025, la población de Belice y Honduras aumentó un 76% y un 67%, respectivamente, es decir, cerca de un 3% anual. En cambio, en El Salvador el incremento fue diez veces menor (apenas un 7% en todo el periodo). En los demás países, el aumento osciló entre el 1% y el 2,5% anual. A pesar de estas diferencias, la concentración poblacional prácticamente no varió desde el año 2000, pues el 63,7% sigue habitando en tres países: Guatemala, la República Dominicana y Honduras (gráfico 1.12).

El crecimiento poblacional ha ido acompañado de una mayor concentración de población en las zonas urbanas. En el año 2000, solo el 53% de las personas residían en esos territorios; 25 años después esa cifra se elevó al 69%. La República Dominicana y Costa Rica

Gráfico 1.12

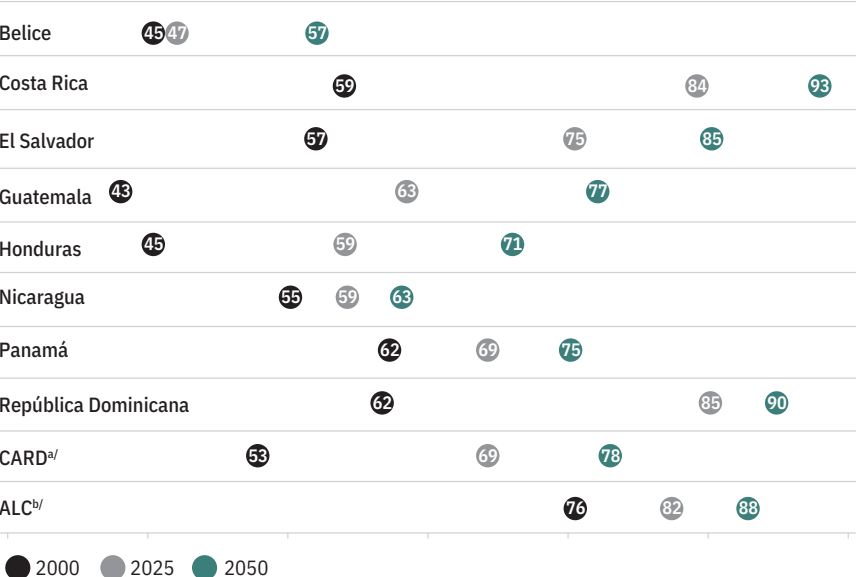
Región CARD
Tendencia y distribución de la población total, según país^{a/}



a/ La cifra que se observa en la esquina inferior derecha del panel b, corresponde a un 0,7% de Belice.
Fuente: Elaboración propia con datos y proyecciones de Cepal, 2024b.

Gráfico 1.13

Región CARD y ALC
Población residente en zonas urbanas, por país
(porcentaje)



a/ Centroamérica y República Dominicana.
b/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos y proyecciones de Cepal, 2024b.

presentan la mayor proporción de población urbana, con alrededor del 85%, un nivel superior al promedio latinoamericano. En contraste, en Belice, el 53% de la gente aún habita en las áreas rurales, cifra que ha variado muy poco en décadas. La concentración urbana de población continuará en los próximos años y se espera que para el 2050 cerca de ocho de cada diez habitantes residan en esos territorios (gráfico 1.13).

Menores tasas de fecundidad
desaceleran el crecimiento
poblacional

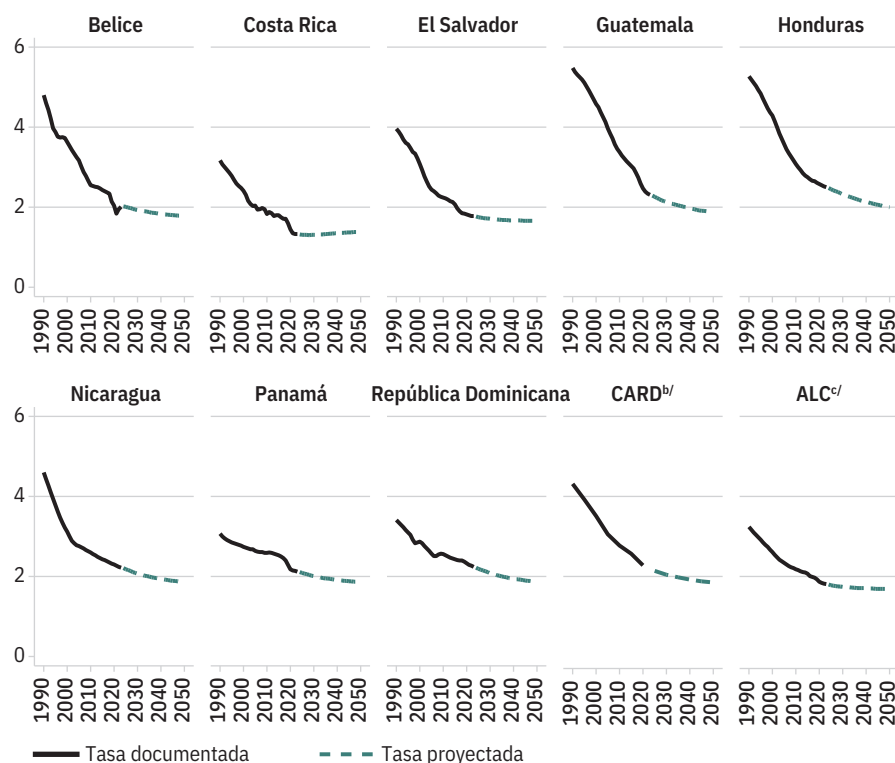
El menor crecimiento poblacional de la región CARD se asocia, en buena medida, a menores tasas de fecundidad; un factor clave en el ritmo de transición demográfica. De acuerdo con la Cepal (2024b), en el año 2000 se registraban en promedio 3.587 nacimientos y 702 defunciones diarias; en otras palabras, por cada persona muerta nacían un poco más de cinco, lo que generó crecimiento poblacional en todos los países.

En la actualidad, esta situación ha cambiado. Para el año 2024, por cada defunción hubo aproximadamente 3,4 nacimientos diarios en la región. Esto significa que, aunque en la región CARD sigue aumentando la cantidad de habitantes, lo hace cada vez a un ritmo más bajo. Según esta tendencia, hasta el año 2074 la región reportaría el mismo número de muertes y nacimientos, a partir de ahí se espera que la población empiece a disminuir.

El seguimiento de las tendencias de la tasa global de fecundidad (TGF) es clave para comprender los cambios en el crecimiento poblacional. Al inicio del siglo, una mujer de la región tenía en promedio 3,5 hijos o hijas en su etapa reproductiva, comparado con 2,6 en el resto de Latinoamérica. Las tasas variaban entre 4,6 en Guatemala y 2,4 en Costa Rica. Sin embargo, un factor común fue la disminución de la tasa. Según los datos de la Cepal (2024b), en el 2020 la TGF en los países CARD oscilaba entre 1,5 y 4,5 hijos, y se espera que siga disminuyendo (gráfico 1.14).

Gráfico 1.14

Región CARD y ALC

Tasa global de fecundidad, por país(cantidad promedio de hijos por mujer en edades reproductivas)^{a/}

a/ A partir del año 2020 los datos corresponden a proyecciones.

b/ Centroamérica y República Dominicana.

c/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos y proyecciones de Cepal, 2024b.

medidas necesarias para garantizar la cobertura y sostenibilidad de los sistemas de pensiones, así como la atención de las necesidades de cuidado y salud de esta población, asegurando su bienestar.

Dos subgrupos de países en la región con estructuras poblacionales distintas

En general, las sociedades con bajo desarrollo económico suelen presentar altas tasas de natalidad y mortalidad, lo cual genera estructuras demográficas con una amplia base de población joven y pocas personas adultas mayores. Por el contrario, en los países desarrollados, las tasas de natalidad son bajas y la esperanza de vida es mayor gracias al acceso a mejores servicios de salud, lo que se traduce en una distribución más equilibrada entre los distintos grupos etarios (Lee, 2003). Los países de Centroamérica y la República Dominicana se ubican en medio de estas dos realidades, con una pirámide poblacional en donde el grupo de personas de entre 15 y 35 años es el más grande de todos (gráfico 1.15).

En el año 2000, todos los países de la región presentaban una estructura demográfica similar a una pirámide, donde la proporción de personas disminuía conforme aumentaba el grupo de edad. En ese año, un 57% de personas en la región estaban en edades laborales, entre 15 y 64 años. En el 2024, este mismo grupo aumentó al 65% del total de la población. Este incremento se traduce en un cambio de esas estructuras, ahora con una base más angosta en los grupos de menor edad. Sin embargo, como han señalado ediciones previas del Informe, las naciones de la región han aprovechado poco esta coyuntura demográfica.

Se espera que esta transición continúe avanzando en las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones de población de la Cepal (2024b), la proporción de personas en edad productiva (de 15 a 65 años) de la región continuará creciendo hasta el año 2041, cuando alcanzará aproximadamente un 67,5% de la población, el mayor nivel de su historia.

La velocidad de transición demográfica varía entre los países. En términos generales, pueden distinguirse dos grupos.

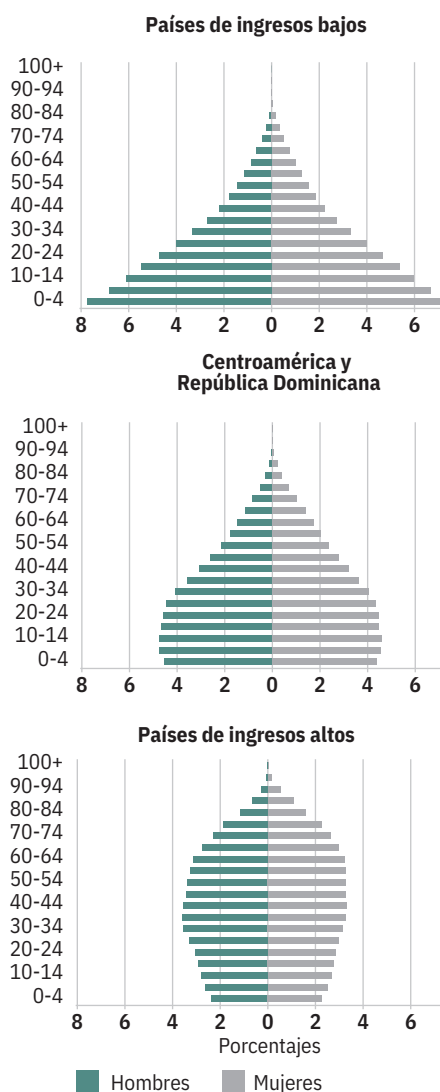
La transición demográfica avanza, con importantes diferencias entre países

El hecho de que la región CARD se encuentre en un proceso de transición demográfica implica que la estructura por grupos de edad de la población está cambiando. La estructura varía por país, pero, en cualquier caso, en las etapas iniciales de la transición se caracteriza por una fuerte expansión de las personas en edad de trabajar, lo cual se denomina técnicamente “bono demográfico”. Este período es crítico para el desarrollo de las naciones, ya que incrementos en las oportunidades laborales y empresariales, junto con mejoras en la productividad laboral, pueden conducir a un desarrollo humano más acelerado.

No obstante, la región enfrenta dificultades para aprovechar las oportunidades potenciales del bono demográfico⁷ y enfrentar los riesgos del envejecimiento poblacional. Ediciones previas de este Informe (PEN, 2011, 2016 y 2021) han señalado que esas oportunidades se asocian a políticas públicas que permiten modernizar la estructura productiva mediante la incorporación de actividades con mayor valor agregado, mejorar la cobertura y calidad de los servicios sociales para potenciar las capacidades de las personas y mejorar la estructura y productividad de los mercados laborales. Todo esto es fundamental para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible. Además, los riesgos están asociados al envejecimiento y las

Gráfico 1.15

Región CARD y países de ingresos altos y bajos^a
Estructura de la población por grupos de edad. 2025
 (porcentaje)

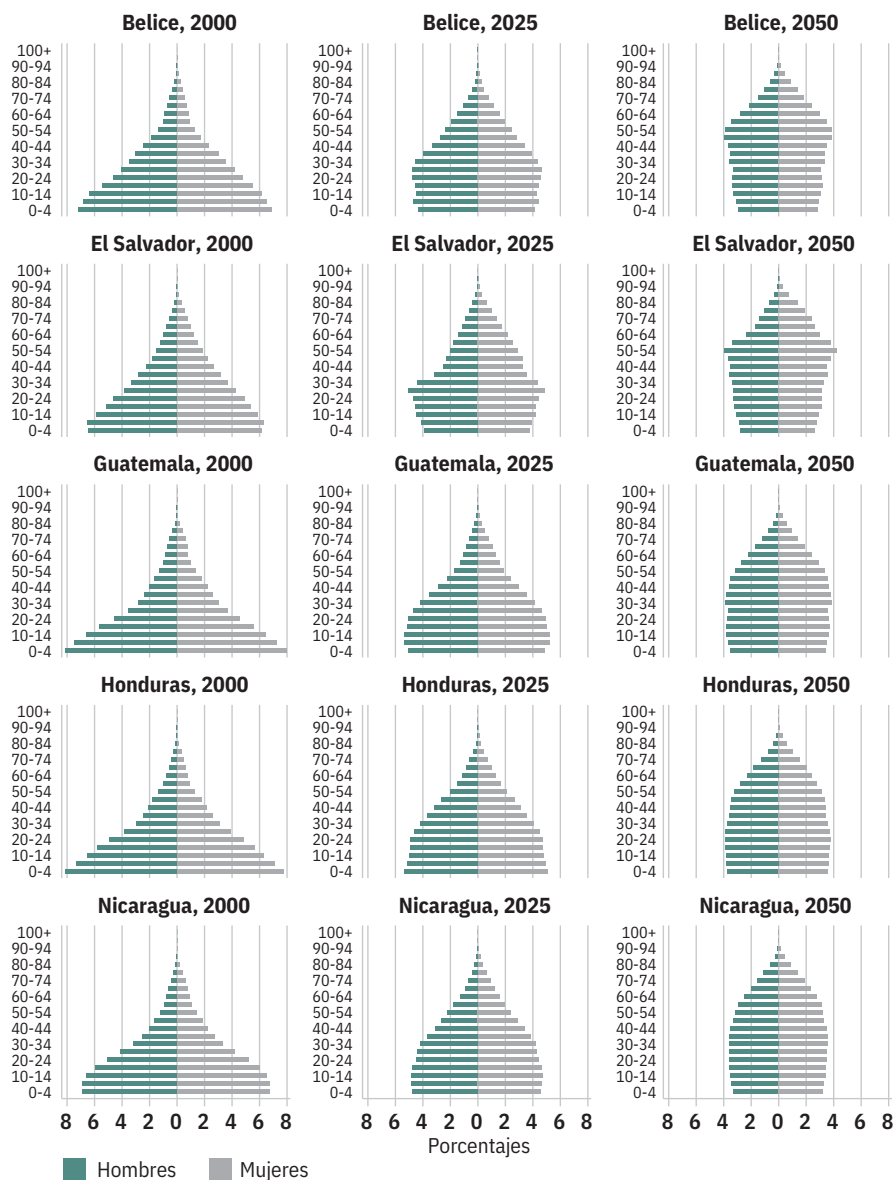


a/ La clasificación de países por niveles de ingreso se realizó con base en el ingreso nacional bruto per cápita reportado por el Banco Mundial el año 2024.
 Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones poblacionales de ONU, 2024.

El primero incluye a Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, países con menor desarrollo económico (se amplía en Panorama Económico) que tienen una demografía más cercana a la de los países de bajos ingresos en el

Gráfico 1.16

Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
Estructura^{a/} poblacional por sexo y edad
 (porcentaje)



a/ Proyecciones de población 2025 y 2050.

Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones poblacionales de ONU, 2024.

mundo (1.16). Estas naciones poseen poblaciones más jóvenes y bases etarias más amplias, con un envejecimiento más lento. Según el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021), estos países completarán su transición hacia mediados de siglo, lo cual implica más tiempo para impulsar las acciones requeridas para aprovechar el bono demográfico (gráfico 1.16).

El segundo grupo lo conforman Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. En estos países, existe una correlación entre su desempeño económico y la estructura demográfica: son las naciones con mayores ingresos de la región y sus pirámides convergen más rápidamente hacia la forma de un rectángulo, característico de los países de

ingresos medios y altos (gráfico 1.17). De acuerdo con las estimaciones del Centro Latinoamericano de y Caribeño de Demografía (Celade) de la Cepal, el período de bono demográfico de Costa Rica ya concluyó en el 2020; en Panamá eso sucederá alrededor del 2030 y en la República Dominicana aproximadamente una década después (PEN, 2021).

Aumento en la esperanza de vida profundiza envejecimiento poblacional

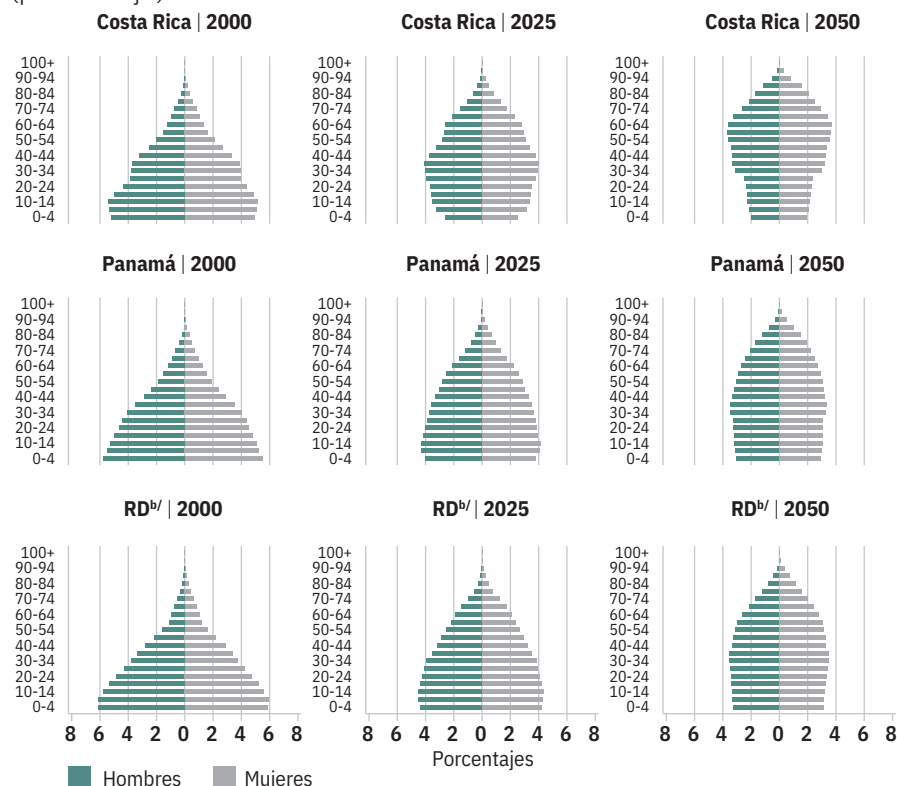
La esperanza de vida continúa en aumento, lo cual significa un resultado positivo en términos de desarrollo humano sostenible para la región. No obstante, junto con la disminución de la fecundidad, conlleva un crecimiento en la proporción de personas adultas mayores dentro de la estructura poblacional. Esta dinámica genera tensiones importantes entre los objetivos de política pública de corto plazo y aquellos necesarios para hacer frente al envejecimiento de amplios sectores de población en el mediano y largo plazo, como consecuencia del proceso de transición demográfica que experimenta la región CARD.

Según el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021), las mejoras en salud y saneamiento han aumentado la esperanza de vida, la cual ha sido mayor para las mujeres. De acuerdo con la CEPAL (2024b) y tras una leve disminución durante la pandemia, la esperanza de vida promedio de los países de CARD en el 2025 varía entre 80 y 81 años en Panamá y Costa Rica, y 72 años en El Salvador, mientras en los demás países oscila entre 73-74 años, excepto en Nicaragua donde es de 75 años (gráfico 1.18).

Las mujeres viven en promedio 5,8 años más que los hombres, una brecha similar a la observada en América Latina y el Caribe, donde es de 5,9. No obstante, dentro de la región se destaca el caso de El Salvador, donde en el 2025 las mujeres tenían una esperanza de vida de 76,7 años, superando a la de los hombres (68 años) en 8,7 años. En la República Dominicana, la diferencia es de 6,4 años. En otros países, esta brecha varía entre 4,6 años en Guatemala y 5,7 años en Panamá.

Gráfico 1.17

Costa Rica, Panamá y República Dominicana
Estructura^{a/} poblacional por sexo y edad
(porcentaje)



a/ Proyecciones de población 2025 y 2050.

b/ República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia con base en las proyecciones poblacionales de ONU, 2024.

Durante los últimos años, la proporción de personas de 60 años y más aumentó en todos los países, especialmente en Costa Rica. Hasta 1994, menos del 5% de la población de la región CARD tenía más de 60 años. En el 2020, esa proporción se incrementó al 9% y para el año 2050 se espera que ascienda a una cuarta parte de la población (25%). La consecuencia, es que la población en este grupo de edad en la región casi se triplique al pasar de 5,5 a 14,5 millones (cuadro 1.2).

En el 2020, Costa Rica tenía el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años en la región CARD (15%), superior al promedio latinoamericano (13%) y cerca del doble del porcentaje de países como Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Se espera que para el 2050, este grupo de población represente una tercera parte de la población costarricense,

pero en Guatemala y Honduras será entre 14% y 15% del total.

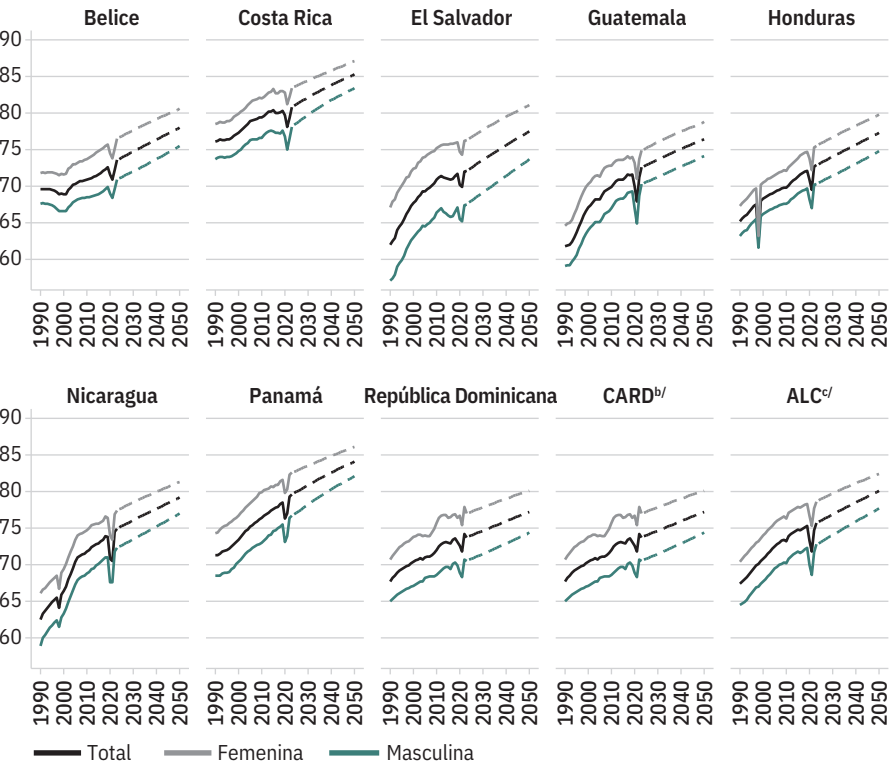
De acuerdo con la Cepal, en el año 2040 el número de economías envejecidas en América Latina y el Caribe, es decir, aquellas donde la proporción de los recursos consumidos por las personas mayores exceden los consumidos por niños, niñas y jóvenes, se triplicará, al pasar de 19 a 77. En ese grupo estarán Costa Rica y casi todas las naciones del Caribe. Para el 2070, la mayoría de las economías mundiales estarán envejecidas (Celade-Cepal, 2014).

Insuficientes pensiones llegan a menos de la mitad de la población adulta mayor

El envejecimiento demográfico supone una mayor demanda de servicios sociales y para grupos que una generación atrás pesaban muy poco dentro de la población

Gráfico 1.18

Región CARD y ALC
Esperanza de vida al nacer, por país según sexo^{a/}
(cantidad de años)



a/ A partir del año 2020 los datos corresponde a proyecciones y se representan con líneas discontinuas.
b/ Centroamérica y República Dominicana.
c/ América Latina y el Caribe.
Fuente: Elaboración propia con datos y proyecciones de Cepal, 2024b.

de la región CARD. Ello plantea la necesidad de adaptar las políticas públicas para asegurar el bienestar de la población adulta mayor, particularmente en áreas como pensiones y seguridad social.

En los países de la región, el porcentaje de personas en edad de jubilación que tienen una pensión es bajo pero va en aumento, excepto en Belice y la República Dominicana. Existen dos brechas que llaman la atención en este indicador: primero, solo en Costa Rica y Panamá esta cobertura ha superado el 50%; segundo, hay menos proporción de mujeres que reciben pensión en comparación a los hombres (gráfico 1.19).

Además de la cobertura, otro reto de los sistemas de pensiones en la región CARD es que los montos recibidos sean suficientes para tener una vida digna. El problema no acaba cuando se recibe una pensión, pues esta puede no ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Lamentablemente, desde el 2014, la proporción de personas adultas mayores cuya pensión es insuficiente se ha estancado o ha crecido, incluso por encima del promedio de América Latina. En esta situación es posible advertir una brecha de género, pues las mujeres son quienes frecuentemente reciben pensiones bajas. En cinco de los siete países con información disponible (Honduras, Guatemala, El Salvador, la República

Cuadro 1.2

Región CARD y ALC
Población de 60 años y más según país
(total y porcentaje)

País	Total de personas		Porcentaje del total de la población	
	2020	2050	2020	2050
Belice	27.600	96.500	7,1	18,7
Costa Rica	766.400	1.745.700	15,2	32,6
El Salvador	682.600	1.333.200	10,9	20,0
Guatemala	1.181.600	3.518.600	6,8	14,3
Honduras	635.600	2.208.600	6,3	14,9
Nicaragua	504.200	1.586.600	7,7	18,1
Panamá	515.500	1.349.600	12,0	24,0
República Dominicana	1.154.200	2.653.400	10,5	20,4
CARD ^{a/}	5.467.700	1.4492.200	9,0	18,2
ALC ^{b/}	83.600.500	182.669.400	12,9	25,0

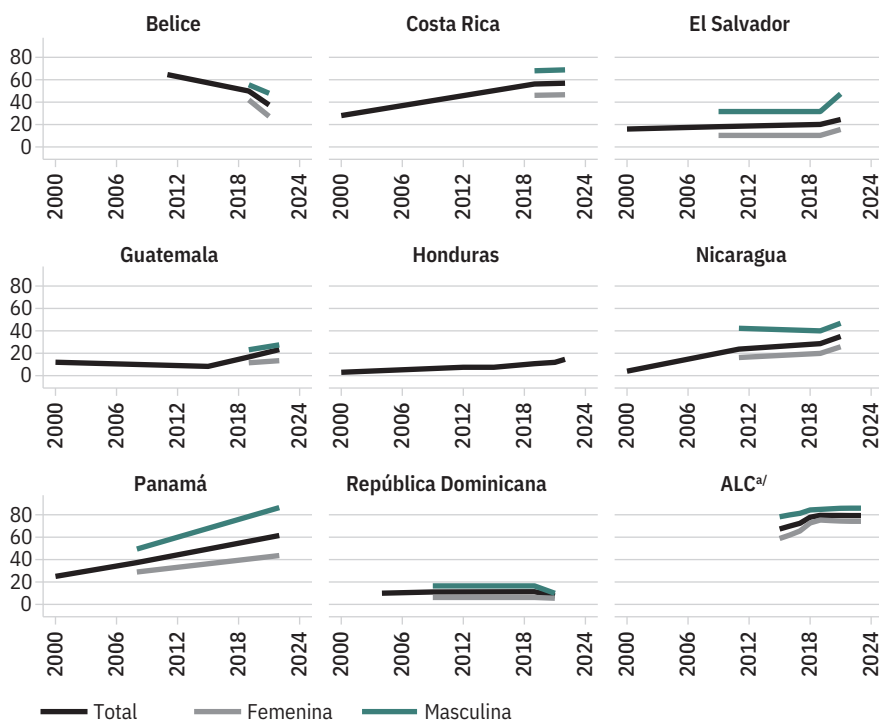
a/ Centroamérica y República Dominicana.
b/ América Latina y el Caribe.
Fuente: Elaboración propia con base en los datos y las proyecciones de Cepal, 2024b.

Gráfico 1.19

Región CARD y ALC

Evolución de la población en edad legal de jubilación con pensión, por país, según cobertura

(porcentaje)



a/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos y proyecciones de Cepal, 2024b.

Dominicana y Nicaragua), más de tres cuartas parte de la población adulta mayor reciben pensiones insuficientes (gráfico 1.20).

Personas adultas mayores viven mayoritariamente con otros familiares

La transición poblacional por la que atraviesa la región también se refleja en los cambios en la composición de los hogares. En ellos cobra más relevancia las dinámicas asociadas a la creciente población adulta mayor. En años recientes, en al menos uno de cada cuatro hogares de la región CARD vivía una persona adulta mayor. En Costa Rica y Panamá, esto sucede en más o menos uno de cada tres hogares (gráfico 1.21).

En las condiciones descritas en el apartado anterior sobre la cobertura y

suficiencia de los sistemas de pensiones, esta situación implica un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica y supone una carga financiera adicional para los hogares en aras de garantizar los servicios de cuidado y atención de la salud que estas personas requieren. Esto es particularmente complicado para los hogares de menores ingresos pues deben combinar esas tareas con el trabajo remunerado.

En el 2023, en la región CARD predominaban los hogares nucleares, aquellos compuestos por los padres (uno o ambos) y sus hijos (as) (59% del total). El segundo tipo, el más común, son los hogares extensos, que incluyen miembros del hogar nuclear más otros parientes, los cuales representan una cuarta parte del total de hogares y los hogares unipersonales, formados por una sola persona, alcanzan el 13% del total. Finalmente,

los hogares no familiares, en los cuales las personas que viven juntas no están emparentadas, constituyen el 2,4% (gráfico 1.22). En los países con mejor desempeño económico (Costa Rica, Panamá y la República Dominicana), los hogares unipersonales tienen una mayor proporción que en otros países como Guatemala y Honduras. Este último tiene la mayor proporción de hogares extensos de la región.

Echeverría y Fernández (2025b) destacan que la población adulta mayor predomina en los hogares de tipo extenso. En el 44% de los hogares extensos de la región hay al menos una persona adulta mayor. En contraste, en los hogares nucleares ese porcentaje ronda apenas el 16%. Esta situación evidencia que, ante la baja cobertura e insuficiencia de las pensiones y la ausencia de políticas públicas para atender el envejecimiento, el cuidado de personas adultas mayores se tiende a resolver a lo interno de los hogares.

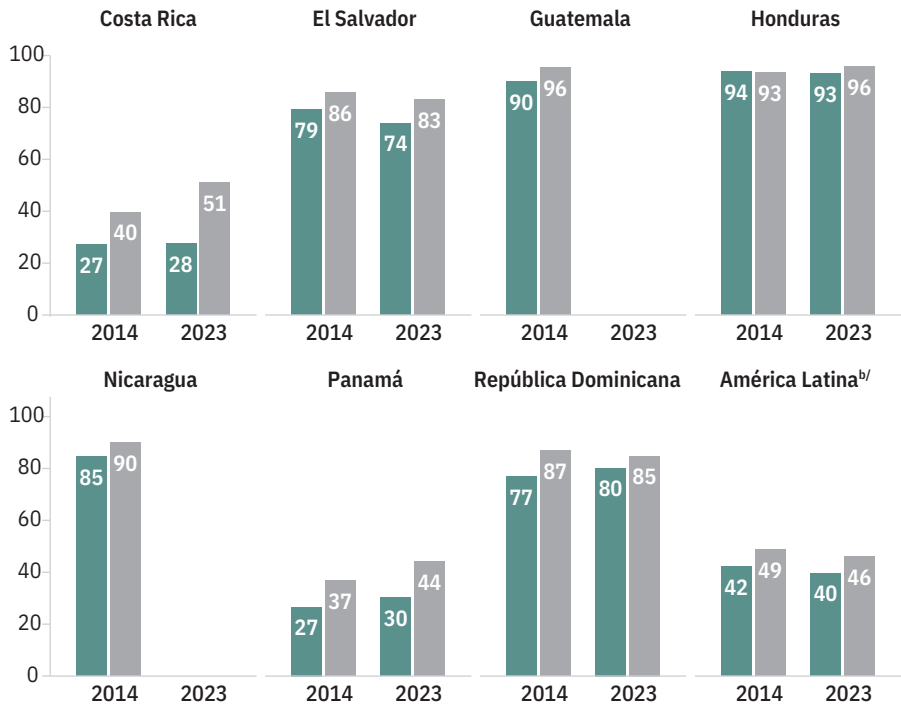
Centroamérica: el gran conector migratorio del hemisferio

Históricamente, las migraciones han formado parte de las dinámicas demográficas de la región CARD. A la luz del proceso de transición demográfica que viven los países, las migraciones provocan la pérdida de población en edad productiva y, en ocasiones, con altos niveles de instrucción, tal como ha sido destacado en anteriores ediciones de este *Informe* (PEN, 2016 y 2021). No obstante, en los últimos cinco años hubo cambios notables en los flujos migratorios en la región CARD.

Durante los últimos años, el principal cambio identificado es el posicionamiento de la región como un corredor migratorio de flujos provenientes de países de América del Sur y del Caribe, así como de otros continentes (Asia y África) en su camino hacia los Estados Unidos. Esto ha coexistido con las dinámicas tradicionales asociadas a factores socioeconómicos y la reunificación familiar, además del aumento en las solicitudes de refugio de la población de la región CARD, fenómeno reportado en la anterior edición de este *Informe*.

Gráfico 1.20

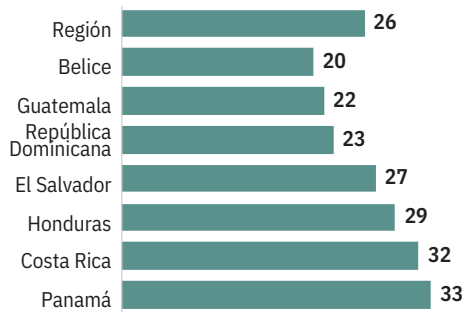
Región CARD y América Latina
Distribución de adultos mayores con pensiones insuficientes^{a/}, por país, según género
(porcentaje)



a/ Una pensión se considera insuficiente cuando no recibe una o, de recibirla, esta no alcanza para cubrir el valor de la línea de pobreza.
b/ El indicador regional se construye como un promedio ponderado por la población de adultos mayores de cada país. En 2014, se toman en cuenta Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En 2023, por falta de datos, se excluyen de esta lista a Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela.
Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2024b.

Gráfico 1.21

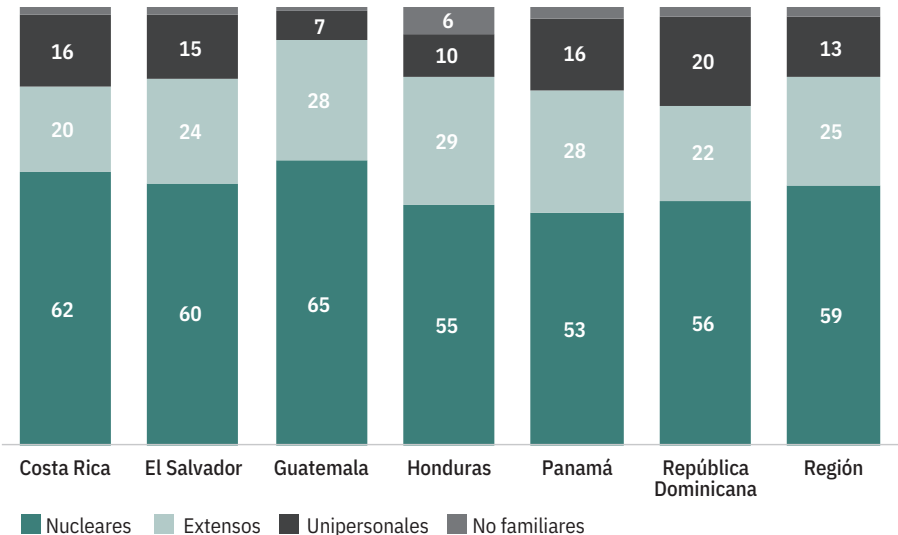
Región CARD
Distribución de hogares con al menos una persona adulta mayor. Circa 2023
(porcentaje)



Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos base en las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

Gráfico 1.22

Región CARD
Distribución de hogares, según tipología. Circa 2023
(porcentaje)



Fuente: Echeverría y Fernández, 2025b con datos base en las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino

Poco más de 6,6 millones de personas de la región CARD, siete de cada diez de ellas de la República Dominicana, El Salvador y Guatemala, viven hoy fuera de sus países de origen. ¿Hacia dónde migran? Según los datos de la ONU (2025), los Estados Unidos continúa siendo el principal destino que concentra el 77% del total de las personas que han migrado desde la región y cerca del 90% del total de las personas migrantes provenientes de Guatemala y El Salvador.

Sin embargo, los flujos hacia ese país fueron menores en el 2020 (último dato disponible) que lo reportado para el 2015 en el *Quinto Informe Estado de la Región* (PEN, 2016). Otros destinos como el resto de la región (11%) y Europa (8%) han aumentado su peso relativo como destino de las migraciones centroamericanas (cuadro 1.3).

Europa se ha convertido en un destino importante para población migrante de la República Dominicana y Honduras, y el resto de la región lo es para la población migrante de Costa Rica y Panamá, pero principalmente para la de Nicaragua. El 55% de las migraciones nicaragüenses se dirigen a otros países de Centroamérica, en particular hacia Costa Rica.

Viraje en las políticas y gestión migratoria como respuesta a los flujos migratorios desde fuera de la región

América Latina y el Caribe han experimentado un incremento importante de los flujos migratorios en los últimos cinco años. De acuerdo con la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el número de personas que migraron se duplicó al pasar de 7 a 15 millones entre el 2005 y el 2020. Esta cifra convierte a América en la región del mundo con el mayor incremento del volumen migratorio (Organización Mundial para las Migraciones 2023a).

De acuerdo con Feldmann y Sturino (2024), Centroamérica se ha convertido en el gran conector migratorio del hemisferio por donde circulan miles de personas de otros países de América Latina y el Caribe, así como migrantes y solicitantes

Cuadro 1.3

Región CARD
Distribución de la población emigrante por países de origen según regiones de destino. 2020^{a/}
(total y porcentaje)

País de origen	Total de migrantes	Porcentaje en cada región de destino					Total
		Estados Unidos	CARD ^{b/}	Europa	Resto de ALC ^{b/}	Resto del mundo	
Belice	52.756	81,5	7,8	3,6	2,9	4,2	100,0
Costa Rica	150.241	64,5	18,0	9,4	4,8	3,4	100,0
El Salvador	1.599.058	88,2	5,0	2,5	0,2	4,1	100,0
Guatemala	1.368.431	89,7	6,9	1,8	0,3	1,4	100,0
Honduras	985.077	78,5	9,0	11,0	0,6	0,9	100,0
Nicaragua	718.154	35,5	55,1	7,1	0,6	1,6	100,0
Panamá	139.520	71,5	12,2	8,1	5,9	2,3	100,0
República Dominicana	1.608.567	72,6	0,9	17,6	8,2	0,6	100,0
CARD ^{c/}	6.621.804	76,6	10,9	8,1	2,5	1,9	100,0

a/ El gradiente de color visualiza las concentraciones más altas con tonalidades más fuertes.

b/ América Latina y el Caribe.

c/ Centroamérica y la República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU, 2025.

de refugio extracontinentales (Álvarez Velasco y Cielo, 2023; Méndez Baquero, 2021). De acuerdo con el Servicio de Migración Panameño, 830.327 personas latinoamericanas y caribeñas transitaron en los primeros años de la presente década por la selva del Darién en Panamá, la mayor parte de ellas venezolanas. A ellas se suman las provenientes de otros continentes (10% del total).

Solo en el año 2023, poco más de 25.000 personas chinas ingresaron a Panamá por el Darién. La magnitud de estos flujos ha rebasado la capacidad del Estado panameño, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para brindar ayuda humanitaria y tutelar los derechos esta población.

El crecimiento de los flujos migratorios ha fortalecido a sectores nacionalistas en los países de destino, los cuales buscan restringir la entrada de las personas extranjeras y que, al aprovechar las aprehensiones que el arribo de grupos migrantes y refugiados genera en algunos

sectores de la población, han promovido un discurso de rechazo a la migración como uno de los principales temas en las campañas electorales. Ejemplos de esta visión a escala internacional son el movimiento MAGA (Make America Great Again) en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido y los diversos partidos de extrema derecha en Europa (Eslovaquia, Hungría y Polonia), que han transformado el rechazo a la migración como uno de sus principales ejes programáticos político-electorales (Youngs, 2022). El nuevo gobierno de los Estados Unidos ha generado nuevas tensiones y un viraje en las políticas migratorias que implica importantes riesgos para la tutela de derechos fundamentales para las personas migrantes y refugiadas en ese país.

En la región CARD también se han adoptado medidas restrictivas. Guatemala y Honduras han implementado controles en sus fronteras, lo que ha resultado en un elevado número de rechazos y expulsiones. Por otro lado, Panamá ha optado por una gestión más

pragmática, al reducir las regularizaciones en el 2021 y al establecer en el 2023 un permiso temporal de protección laboral por hasta dos años. Además, Panamá acordó con Costa Rica la creación de un "corredor humanitario" para trasladar migrantes a lo interno de sus territorios. Nicaragua, en cambio, ha permitido el libre tránsito de migrantes sin controles significativos. Esta diversidad de enfoques refleja las distintas estrategias y prioridades de los países ante los desafíos migratorios en la región (Feldmann y Sturino, 2024).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LOS NUEVOS FLUJOS MIGRATORIOS
Véase Feldmann y Sturino, 2024,
en www.estadonacion.or.cr

Aumenta expulsión de población por razones políticas e inseguridad

Tal como fue señalado en la anterior edición de este Informe, la expulsión o desplazamiento forzado de población por razones de inseguridad, persecución política u otras formas de violencia, incrementó la presencia de flujos mixtos (laborales y solicitantes de refugio o protección internacional), aumentó las solicitudes de refugio y la cantidad de migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad (PEN, 2021).

Como consecuencia de esta situación, en el período 2018-2022, la cantidad de personas centroamericanas y dominicanas que solicitaron refugio aumentó en 107% (cuadro 1.4). Durante estos años, más de 1.100.000 personas aplicaron para optar por ese estatus. El país con mayor número de solicitudes fue Nicaragua, con un 34% del total regional, seguido por Honduras, con un 28%.

Las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son frecuentes a lo largo del viaje, pero también en los países de tránsito y destino. Las apátridas y solicitantes de refugio son dos de los grupos más vulnerables (Gonzalez, 2021). Los Estados (por acción o por omisión) así como actores no estatales,

Cuadro 1.4

Región CARD
Cantidad de personas solicitantes de refugio por país de origen

País de origen	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Belice	86	126	75	95	225	607
Costa Rica	246	314	194	292	564	1.610
Guatemala	38.543	59.952	41.934	28.990	46.797	216.216
Honduras	43.398	80.162	54.004	60.789	80.738	319.091
Nicaragua	31.680	52.919	19.527	112.239	167.465	383.830
Panamá	88	140	150	303	791	1.472
El Salvador	49.959	57.439	35.266	26.819	42.763	212.246
República Dominicana	1.836	2.138	977	1.105	4.209	10.265
CARD ^{a/}	165.836	253.190	152.127	230.632	343.552	1.145.337

a/ Centroamérica y República Dominicana.
Fuente: Pietsch y Sturino, 2024.

suelen ser los responsables de transgredir los derechos humanos de estas poblaciones. La privación de libertad, la deportación injustificada, los malos tratos, la violencia y el irrespeto al principio de unidad familiar son los principales abusos (Feldmann y Sturino, 2024).

Panorama económico

El tercer piso del edificio del desarrollo humano regional está dedicado a la producción. Para lograr un desarrollo sostenible que mejore el bienestar de las personas y amplíe sus oportunidades, es indispensable contar con una base sólida de recursos económicos que aproveche el patrimonio natural y las capacidades de la población. Para ello es necesario un crecimiento económico estable, que integre a los distintos sectores productivos sin comprometer o sacrificar las posibilidades de crecimiento futuras y que incorpore, sin discriminación, a los diversos grupos de la población económicamente activa en el mercado laboral.

El crecimiento económico contribuye a la expansión de la disponibilidad y acceso a bienes materiales en una sociedad, lo cual, en principio, genera oportunidades y potencia las capacidades de las personas

para alcanzar mayores niveles de bienestar. Esta ha sido la dimensión en la que la región CARD ha registrado sus mayores logros durante el presente siglo.

Durante el período 2018-2023, la región sufrió una contracción económica debido a la pandemia. Sin embargo, logró recuperarse y, a partir del año 2021, ha experimentado niveles de crecimiento económico similares o superiores a los de América Latina y el Caribe. Pese a ello, en años más recientes es evidente una tendencia a la desaceleración.

El dinamismo del sector turístico, las remesas y la inversión fueron factores clave para la recuperación económica. Sin embargo, este desempeño se vio afectado por la crisis mundial de contenedores y los problemas estructurales en los mercados laborales, sobre todo las brechas en el acceso y los bajos niveles de productividad. El deterioro en las finanzas públicas, asociado fundamentalmente al incremento en los niveles de endeudamiento y las crónicas bajas cargas tributarias limitaron las posibilidades de los Estados para financiar inversiones y políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo humano sostenible en la región.

Recuperación económica tras el shock de la pandemia se desacelera

El desempeño económico postpandemia puede dividirse en dos fases: la recuperación inmediata a corto plazo y la desaceleración posterior. No obstante, en ambas etapas se presentaron diferencias entre los países. Además del ritmo de crecimiento, existen diversas estructuras y dinámicas productivas. Tal como se señaló en la edición anterior de este *Informe*, los sectores más dinámicos tienen una baja participación en el PIB y el empleo, mientras que los de menor crecimiento poseen mayores encadenamientos productivos y de empleo (PEN, 2021).

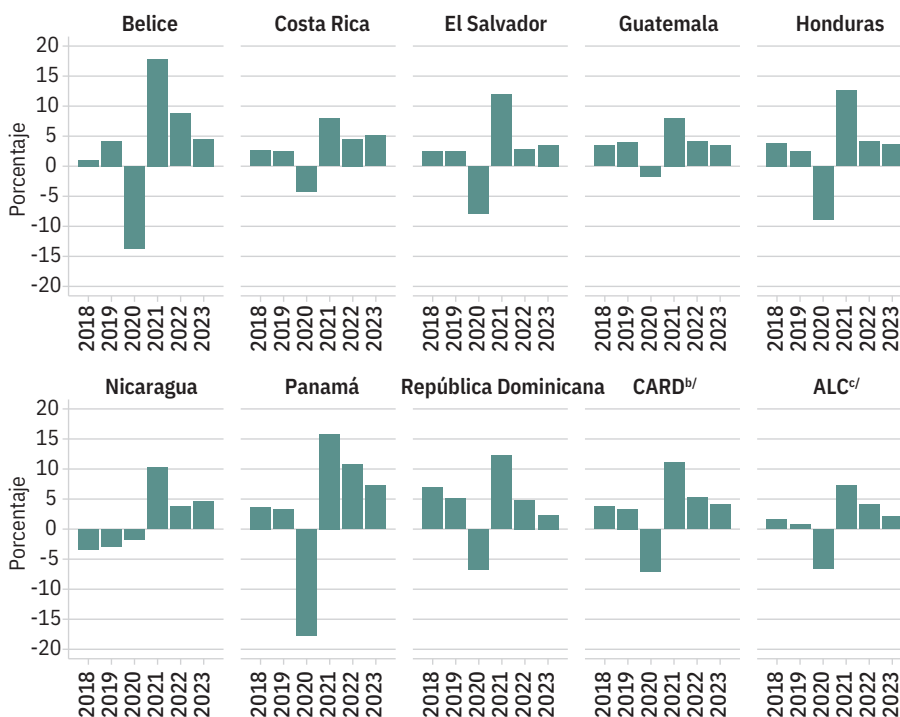
Crecimiento económico de la región CARD fue mayor al de América Latina y el Caribe

Durante la fase de recuperación en el año 2021, las economías lograron niveles de crecimiento económico elevados, superiores a los registrados antes de la pandemia. Ese año, el crecimiento regional promedio fue del 11,1%, casi el doble del de América Latina y el Caribe (6,5%). Este rasgo del desempeño económico de la región ha sido destacado en ediciones previas de este *Informe* y ha contribuido a que el valor consolidado de la producción de las ocho economías de CARD, medido por el PIB, haya pasado de representar el 5,9% del total latinoamericano en el 2013 al 7,6% en el 2023.

El crecimiento regional promedio en el año 2021 fue impulsado por el dinamismo de Belice, Panamá, El Salvador y la República Dominicana, países que superaron el crecimiento promedio de la región. Sin embargo, durante en 2022 y 2023 se observó una clara desaceleración y en el año 2023, dos de las economías más grandes la región, Guatemala y la República Dominicana, tuvieron un crecimiento inferior al del 2019, previo a la pandemia (gráfico 1.23). Regionalmente, la contracción redujo el nivel de crecimiento al 5,3% en el 2022 y al 4,1% en el 2023. De acuerdo con la Cepal (2023, 2024b), se espera que la región CARD crezca en el 2025 a una tasa cercana al 3%.

Gráfico 1.23

CARD y América Latina
Tasa de crecimiento del PIB real^{a/}, según país



a/ Centroamérica y República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

Turismo impulsó la reactivación y los precios crecientes, la reciente desaceleración

Tres factores clave contribuyeron a la recuperación económica. Primero, la reactivación del sector turístico tras la reapertura de fronteras, lo que benefició a todos los países, aunque en menor medida a Honduras y Nicaragua. Segundo, el rol dinámico de las remesas familiares enviadas por las personas trabajadoras migrantes (Icefi, 2023b; OIT, 2023a). Tercero, la inversión en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones (CAF, 2024).

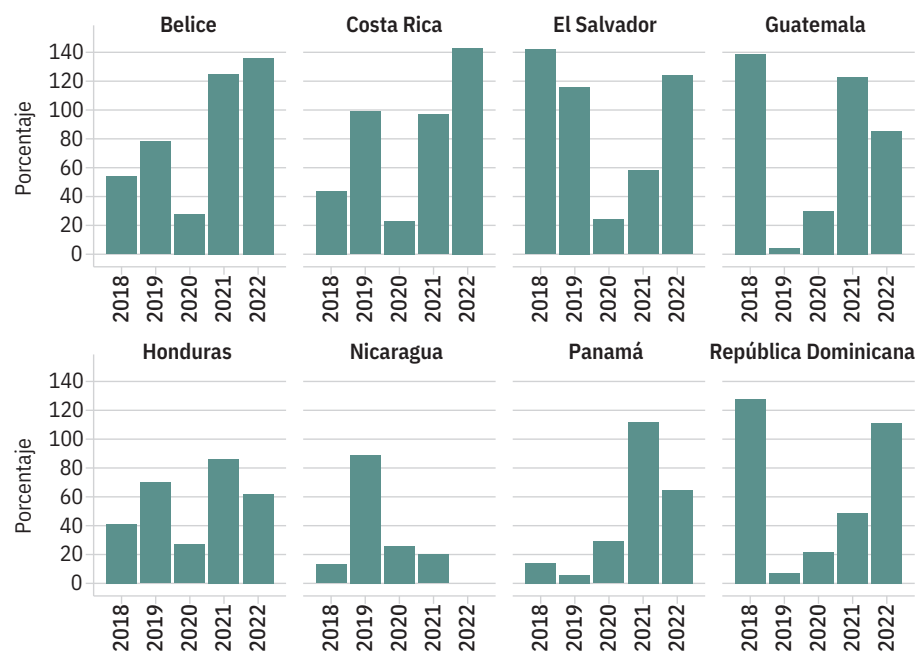
En el año 2021, la región recibió 10,2 millones de turistas y las tasas de crecimiento económico de la actividad de hoteles y restaurantes en los países fueron hasta tres veces mayores al crecimiento del PIB. Aunque ese dinamismo disminuyó en los años siguientes, en el 2023 la tasa de crecimiento de esta

actividad fue superior a la del PIB en Belice, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En estos países y en Panamá, la expansión de la actividad de hoteles y restaurante en el 2023 mantuvo niveles superiores a los del 2019, antes de la pandemia. Este comportamiento coincide con el aumento en la cantidad de turistas que han visitado la región después del 2021. No obstante, cuatro de los ocho países de la región muestran una disminución en la cantidad de visitantes en los últimos años (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, gráfico 1.24).

El segundo factor dinamizador del desempeño económico postpandemia fue las remesas. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, estas representaron una cuarta parte del PIB, y en Guatemala alcanzaron el 20% en el 2023, niveles que superan cinco veces a los de América Latina y el Caribe (gráfico 1.25). Estos países históricamente han generado mayores

Gráfico 1.24

Región CARD

Tasa de crecimiento de la cantidad recibida de turistas, según país

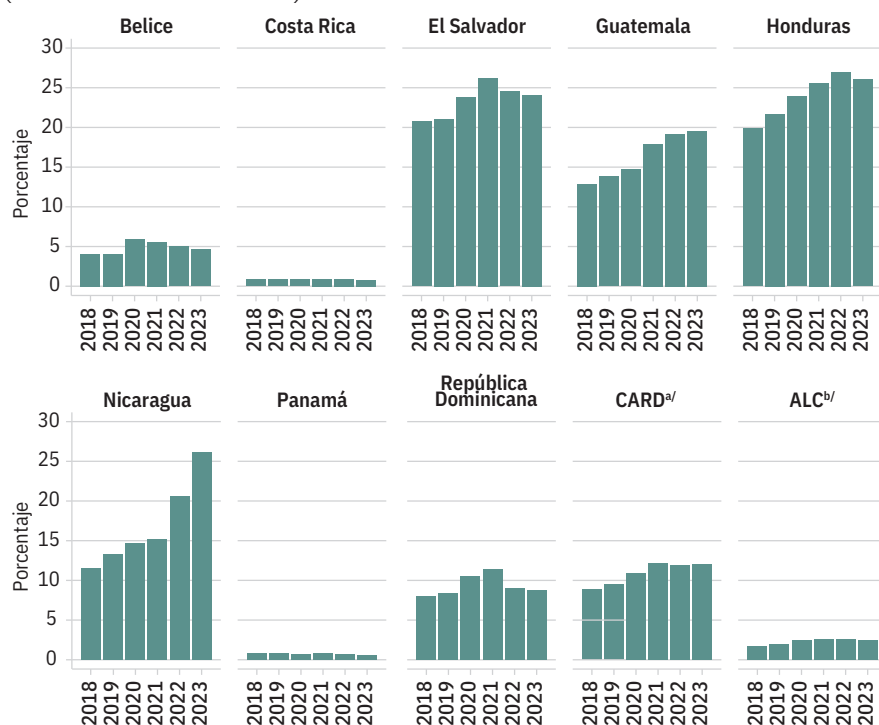
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central (Belice), ICT (Costa Rica), Corsatur (El Salvador), Inguat (Guatemala), Instituto de Turismo (Honduras), Intur (Nicaragua), ATP (Panamá) y ONE (República Dominicana).

Gráfico 1.25

Región CARD y ALC

Distribución de las remesas familiares, según país, por año

(en relación con el PIB)



a/ Centroamérica y República Dominicana.

b/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

flujos migratorios (ver apartado de panorama demográfico para más detalle). En Nicaragua, esta contribución ha crecido rápidamente desde la crisis sociopolítica del 2018. En contraste, las remesas en Costa Rica y Panamá representan una proporción mínima del PIB, mientras que en Belice y la República Dominicana tienen niveles intermedios. La República Dominicana es un caso particular, porque es la única economía que recibe simultáneamente flujos importantes del Inversión Extranjera Directa (IED) y remesas.

La desaceleración a partir del 2021 estuvo asociada, en buena medida, a la crisis mundial de contenedores. Debido a las barreras en las cadenas de transporte marítimo, la oferta de insumos productivos y mercancías resultó insuficiente para satisfacer la demanda, lo cual generó escasez en los mercados. Esto provocó un aumento generalizado del nivel de precios en todos los países de la región a partir del 2021 (gráfico 1.26). Esta presión inflacionaria desencadenó ajustes restrictivos en las políticas monetarias internas (BCIE, 2024; Cepal, 2024b; Icef, 2023b). A esto se sumó la pérdida de dinamismo de Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de los países de CARD (OIT, 2023b).

Asimetrías en el tamaño y la estructura de las economías inciden en su desempeño

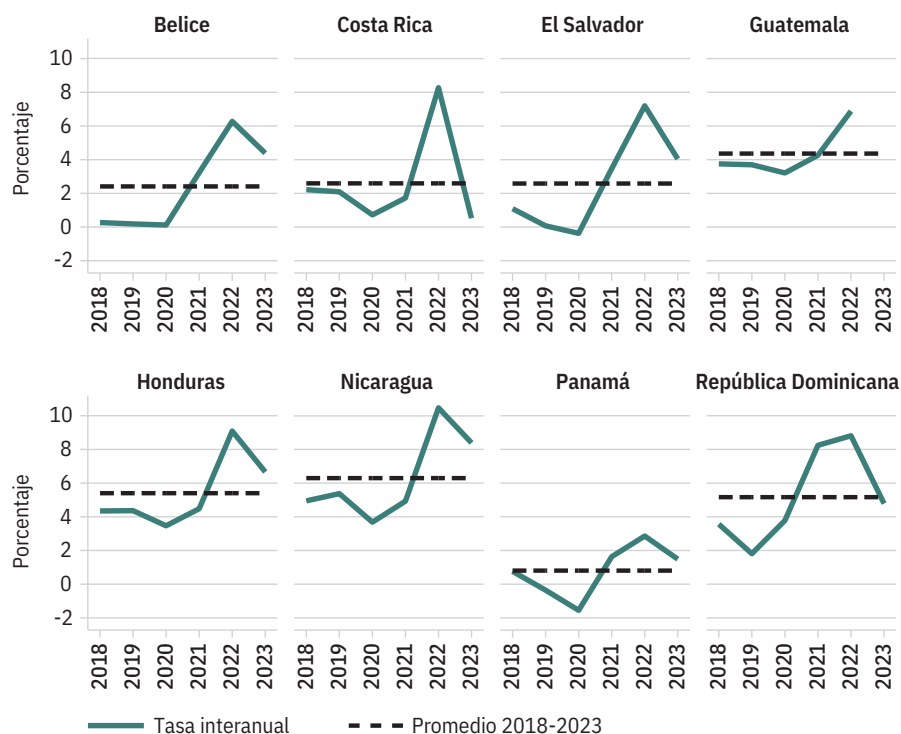
Desde una perspectiva de largo plazo, la emergencia sanitaria del covid-19 se produjo en un contexto caracterizado por un proceso de cambio estructural en las economías de la región CARD. Según el *Quinto y Sexto Informe Estado de la Región*, el cambio en la estructura productiva regional ha sido lenta, tanto en producción como en empleo. Durante casi tres décadas, el sector de servicios y, en menor medida, la industria ha desplazado gradualmente al sector agrícola.

En Centroamérica y la República Dominicana, las economías tienen diferencias significativas en términos de tamaño. La contribución de cada país a la producción regional ha permanecido inalterada casi por completo en los últimos años y persiste un patrón: el PIB

Gráfico 1.26

Región CARD

Tendencia de la tasa de inflación interanual, según país, por año
(porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos de los Banco Mundial, 2024.

tiende a ser inversamente proporcional al tamaño de la población de los países. En el 2023, las economías de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana representaron el 57% de la producción total de la región, a pesar de que estos países solo representan el 33% de las personas que habitan la región.

Las brechas intrarregionales de desarrollo económico pueden ser captadas por el indicador del PIB por persona o "per cápita". En el 2018, si la distribución fuera totalmente equitativa, en la región CARD, a cada persona le correspondería recibir 14.073 dólares, 4.753 dólares menos que el promedio de la población latinoamericana (18.826 dólares). Cinco años después, en el 2023, esa brecha se redujo a 3.974 dólares. Esta convergencia sucede porque el ingreso medio de los países CARD creció más rápido que el de Latinoamérica.

Esa perspectiva promedio no refleja, sin embargo, la marcada heterogeneidad interna. En el 2023, por ejemplo, el PIB per cápita de Panamá fue 5,5 veces mayor que el de Honduras. Además, existen diferencias importantes en el dinamismo económico que agudizan las brechas entre los países. En el período 2018-2023, Costa Rica y la República Dominicana, dos de los países con las economías más grandes de la región CARD, también registraron el mayor crecimiento. En ese momento, Honduras y Nicaragua, los países con menores niveles de PIB por persona fueron los que menos crecieron (cuadro 1.5).

Con base en estos desempeños, se realizó un ejercicio prospectivo para estimar el tiempo que tardaría cada país en alcanzar el PIB per cápita reportado por América Latina y el mundo en el 2023, si se asume únicamente que los

Cuadro 1.5

Región CARD y regiones comparativas
PIB real per cápita y cambio porcentual
(en dólares^{a/} del 2021)

País y región	2018	2023	Cambio porcentual
Belice	11.420	12.795	12,0
Costa Rica	22.900	25.755	12,5
El Salvador	10,204	11.305	10,8
Guatemala	11,485	12.679	10,4
Honduras	6,202	6.499	4,8
Nicaragua	6,808	7.250	6,5
Panamá	32,767	35.780	9,2
República Dominicana	20,579	23.084	12,2
CARD ^{b/}	14,073	15.485	10,0
América Latina y el Caribe	18,826	19.459	3,4
Mundo	19,045	20.671	8,5
Unión Europea	49,914	53.117	6,4
Miembros OCDE ^{c/}	51,235	54.445	6,3
Estados Unidos	68.070	74.578	9,6

a/ Los datos están ajustados por el tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo.

b/ Centroamérica y República Dominicana.

c/ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

países seguirán creciendo al ritmo del sexenio 2018-2023. En promedio, la región CARD alcanzaría el nivel de América Latina en el 2035 y el PIB per cápita mundial en el 2038.

Tal convergencia ocurriría en momentos distintos a lo interno de la región debido a las diferencias en los ritmos de crecimiento. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana ya superaron el promedio latinoamericano y global. En contraste, a Guatemala, Belice y El Salvador les tomaría al menos 18 años alcanzar el PIB per cápita latinoamericano del 2023. Para Nicaragua y Honduras, esta convergencia no sería posible dentro del siglo XXI.

Sector externo fue factor importante en la recuperación pospandémica

Las economías de la región CARD son pequeñas pero altamente integradas a las cadenas de consumo y producción globales, en especial a la estadounidense.

Como fue señalado, el crecimiento económico de la región después de la pandemia dependió del turismo y las remesas, así como del impulso generado por otras actividades del sector externo.

Distintas apuestas productivas determinan el desempeño el sector exportador

El impulso del comercio internacional ha sido una parte fundamental de la estrategia de inserción de la región CARD en la economía internacional que adoptaron los países durante las últimas tres décadas. Ello permitió diversificar y ampliar los mercados para la producción. Sin embargo, el estudio de Monge (2023) sobre la intensidad y características de los flujos para cada país dan cuenta de distintas apuestas comerciales entre las naciones.

En consonancia con el dinamismo económico nacional, los flujos comerciales y su aportación al PIB experimentaron un repunte importante hasta el 2022

y una desaceleración desde entonces. No obstante, cabe destacar que las exportaciones disminuyeron más que las importaciones, especialmente en el Salvador y Honduras, lo cual se tradujo en un aumento de los respectivos déficits comerciales. Esta desaceleración del comercio internacional estuvo relacionada de forma directa con la crisis mundial de contenedores del 2022, como fue señalado en líneas anteriores (gráfico 1.27).

La región ha experimentado un cambio estructural gradual en la producción y el empleo, a la par de una diversificación en su sector exportador. Este proceso ha transformado la oferta exportadora y los socios comerciales. Según, Monge (2023), Panamá y Costa Rica encabezan la diversificación exportadora regional, pues se ha ampliado considerablemente la variedad de la canasta exportable, así como su complejidad. En el resto de la región, existe un patrón: los productos se comercian dentro de la región y suelen ser más intensivos en el uso de mano de obra y materias primas. Sin embargo, en los bienes que se exportan hacia afuera de la región, hay una tendencia hacia la sofisticación productiva de bienes intensivos en investigación que son más difíciles de imitar.

La composición de los socios comerciales es distinta entre los países de la región CARD. Se pueden identificar tres perfiles principales según los principales destinos de sus intercambios comerciales. El primero es el de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, que dirigen la mayor parte de las exportaciones al mercado de los Estados Unidos, una relación que se ha fortalecido en la última década. El segundo es el de El Salvador y Guatemala, que tienen el resto de la región como su principal mercado. Por último, Panamá ha experimentado la mayor transformación en su cartera, pues la zona económica de China, Hong Kong, Taiwán y Macao se ha consolidado como la más importante para este país (gráfico 1.28).

Importantes diferencias nacionales en la atracción de inversión extranjera directa

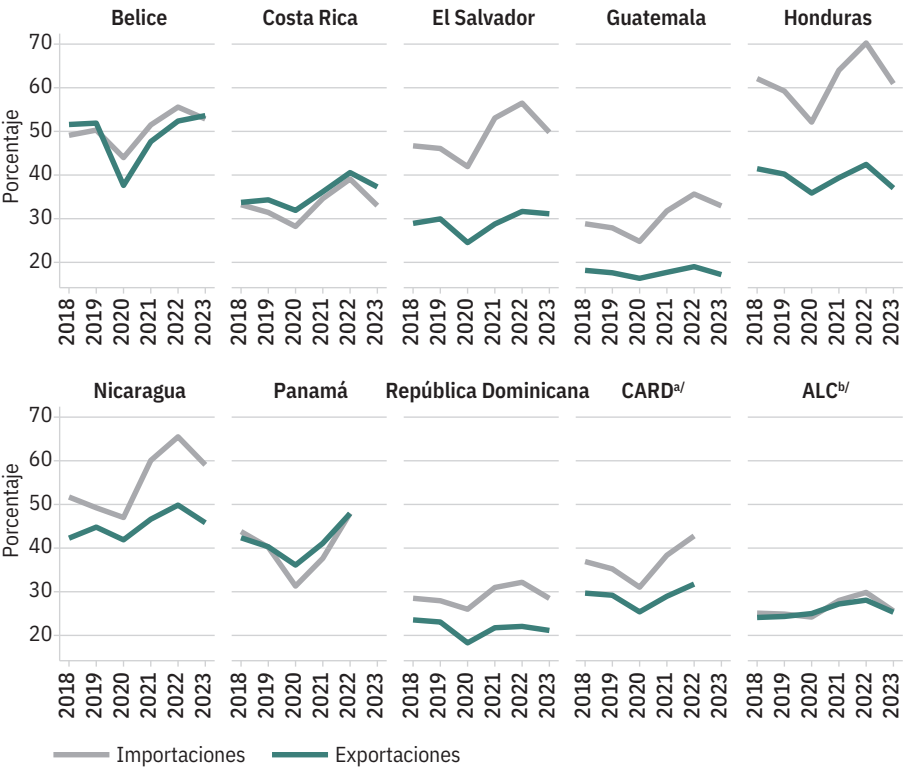
Para economías pequeñas como las de la región CARD, la atracción de flujos de

Gráfico 1.27

Región CARD y ALC

Tendencia en importaciones y exportaciones, según país

(porcentaje del PIB)



a/ Centroamérica y República Dominicana.
b/ América Latina y el Caribe.

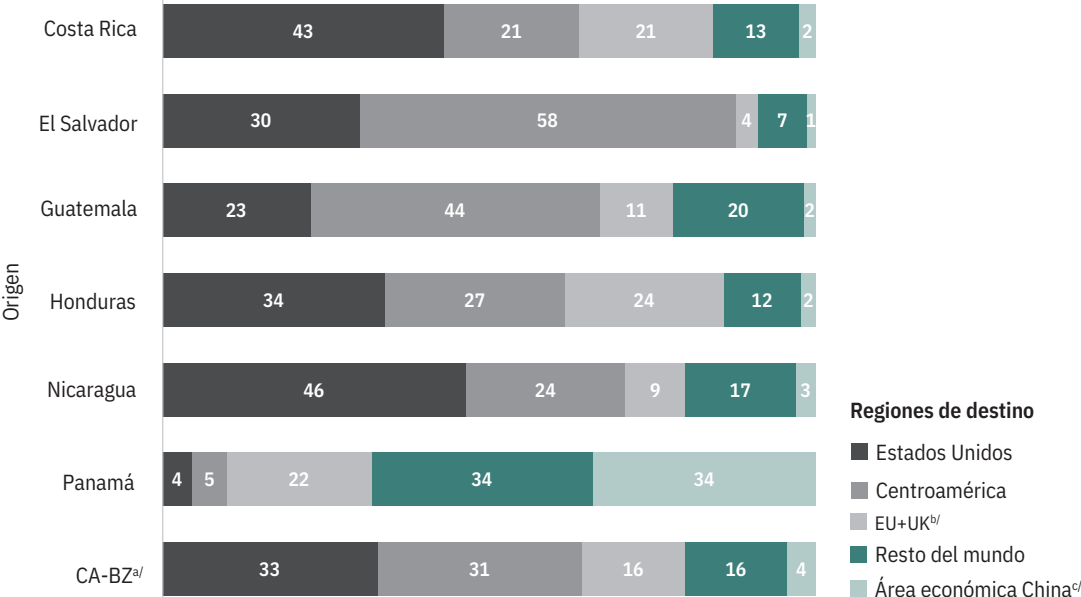
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

Gráfico 1.28

Centroamérica

Distribución de las exportaciones según país de origen por destino, sexenio 2018-2023

(porcentajes)



a/ CA-BZ: Centroamérica sin Belice, tampoco se incluye a República Dominicana.
b/ EU+UK: Unión Europea y Reino Unido.
c/ Incluye a China y a los territorios de Hong Kong, Taiwán y Macao.

Fuente: Elaboración propia con datos del Sieca, 2024.

capital externos es clave para incrementar su capacidad y diversificación productiva. En términos generales, la región se caracteriza por ser receptora neta de IED. No obstante, los países han tenido capacidades muy distintas para atraer esos flujos. En el sexenio 2018-2023, la República Dominicana, Costa Rica y Panamá capturaron alrededor del 70% del capital extranjero que ingresó a la región. En estas tres economías, el aporte de la IED al PIB aumentó tras la pandemia, situándose entre el 3% y 6%.

Durante este período, Panamá redujo gradualmente su importancia como receptor de IED. Dejó de ser el principal destino de capitales, posición que ocupó en la década del 2010, para caer a la tercera posición en el 2023. En el 2020, este país reportó una salida neta de capitales, lo cual rompe con el patrón regional. En cambio, durante el período 2021-2023, seis⁸ de los ocho países registraron el monto más alto de inversión externa en el período 2010-2023. Costa Rica y la República Dominicana fueron los principales receptores de estos flujos en la región durante los años 2022 y 2023 (gráfico 1.29).

La Cepal (2024c) tipifica a la IED en tres categorías: reinversión de utilidades, aportes de capital y préstamos entre empresas. Las dos primeras se consideran las de mayor encadenamiento productivo a lo largo del tiempo, pues corresponden a empresas extranjeras que se consolidan y reinvierten sus ganancias en la región. En el sexenio 2018-2023, ambas modalidades sumaron el 80% de la IED en la región. Durante el período, el 66% de los capitales extranjeros fueron invertidos en el sector de servicios, seguido por el de manufactura (23%), los recursos naturales (9%) y otros sectores (2%).

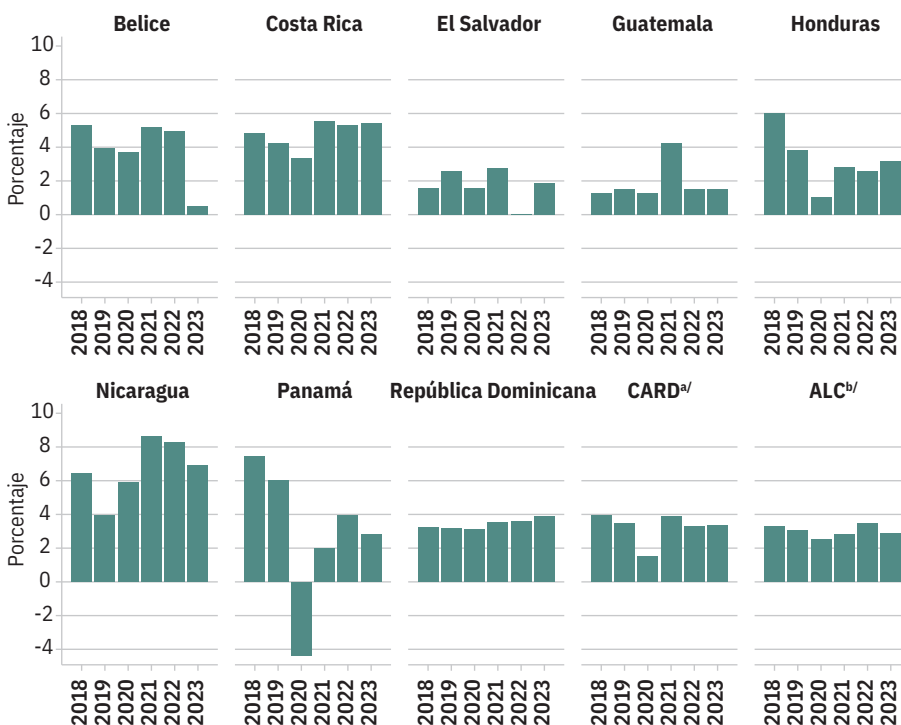
Estados Unidos no solo es el principal destino de las exportaciones, sino que además se ha convertido en el principal inversionista en la región, especialmente para Costa Rica. Entre el 2018 y el 2023 generó alrededor de la mitad de IED a nivel regional. En segundo lugar están los capitales provenientes del resto de Latinoamérica y el Caribe, que representaron cerca del 22% de la IED total de la región (gráfico 1.30).

Gráfico 1.29

Región CARD y ALC

Evolución de la inversión extranjera directa (IED), según país

(porcentaje del PIB)



a/ Centroamérica y República Dominicana.

b/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

El Salvador, Guatemala y Honduras reciben menos flujos de IED. En estos casos, los principales inversionistas provienen de la misma región CARD, con un nivel muy superior al de los Estados Unidos. Ello coincide con la importancia del mercado intrarregional como principal destino de las exportaciones de estos países (gráfico 1.28).

Persisten fuertes debilidades en el mercado de trabajo

El mercado laboral es fundamental para convertir el crecimiento económico en oportunidades para las personas. Lamentablemente, obtener un trabajo de calidad y bien remunerado que garantice los ingresos suficientes para un nivel de vida digno es una aspiración inalcanzada para amplios sectores de la población en CARD. Tal como se ha señalado en ediciones previas de este *Informe* (PEN,

2016 y 2021), las economías de esta región han mostrado una limitada capacidad para generar empleos de calidad.

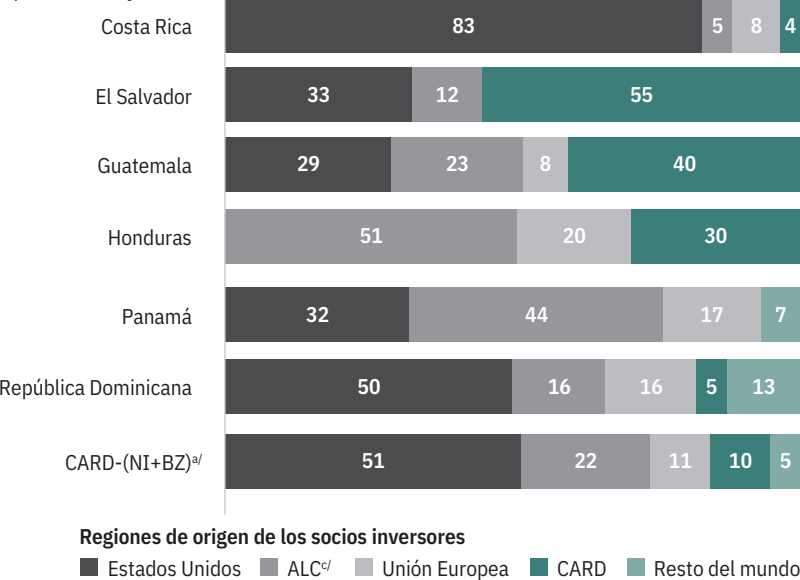
Ciertamente, después de la pandemia todos los países lograron reducir sus niveles de desempleo y mejorar la productividad en el mercado laboral, los cuales cayeron fuertemente durante la crisis sanitaria. No obstante, persisten importantes brechas entre los países y dentro de ellos en relación con la posibilidad que tienen las personas de participar en el mercado laboral y obtener un empleo.

Mejoras en la productividad laboral superan el ritmo de crecimiento económico

En el sexenio 2018-2023, pese a los desafíos de la pandemia, la región experimentó un aumento en el valor de la producción por persona trabajadora en todos los países, en mayor proporción

Gráfico 1.30

Región CARD
Distribución de la IED^{c/} por país receptor según región de origen, 2018-2023
(porcentajes)



a/ CARD-(NI+BZ): Centroamérica y República Dominicana sin Nicaragua y Belice.
b/ América Latina y el Caribe.
Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2024f.

a su crecimiento económico. Esta tendencia es particularmente positiva en vista del proceso de transición demográfica y envejecimiento poblacional que transitan los países de la región, lo cual resultará en una disminución gradual de la población en edad laboral, tal como se señaló en el apartado de Panorama Demográfico. Pese a esta mejoría, en el 2023 el producto por trabajador promedio de la región CARD fue 16% menor al promedio latinoamericano y representó apenas un 33% del nivel promedio de este indicador en los países de la Unión Europea y un 24% del de los Estados Unidos (cuadro 1.6).

En el 2023, Panamá y Costa Rica no solo registraron el mayor valor de la producción por persona trabajadora, sino que también fueron los países que más mejoraron con respecto al 2018. En contraste, El Salvador, Honduras y Nicaragua continúan teniendo los niveles más bajos de este indicador y el menor ritmo de crecimiento.

De acuerdo con la tendencia descrita, mientras Costa Rica, Panamá y la República Dominicana sobrepasaron

Cuadro 1.6

Región CARD y regiones comparativas
Producto por trabajador, según país y región. 2018-2023
(en dólares a precios de 2021 ajustados por poder de paridad adquisitivo)

País y región	2018	2023	Cambio porcentual
Belice	27,748	30,133	8,6
Costa Rica	51,575	60,947	18,2
El Salvador	24,765	25,782	4,1
Guatemala	29.684	31,752	7,0
Honduras	14.520	15,797	8,8
Nicaragua	15,977	16,432	2,8
Panamá	73,232	82,597	12,8
República Dominicana	47.720	52,277	9,6
CARD ^{a/}	33,679	36,688	8,9
ALC ^{b/}	42,663	42,569	-0,2
Mundo	45,272	47,968	6,0
Unión Europea	106,453	110,661	4,0
Miembros OCDE ^{c/}	113,696	117,238	3,1
Estados Unidos	139,834	151,847	8,6

a/ Centroamérica y República Dominicana.
b/ América Latina y el Caribe.
c/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

el desempeño por persona trabajadora reportado en el 2023 para América Latina. De acuerdo con los niveles de crecimiento del sexenio 2018-2023, a Guatemala y Belice les tomaría al menos dos décadas hacer eso, El Salvador y Honduras tardarían cerca de seis décadas y Nicaragua lo haría hasta el año 2.193.

Personas jóvenes y las mujeres continúan experimentando los niveles más altos de exclusión laboral

Anteriores ediciones de este *Informe* han llamado la atención sobre los problemas de inserción laboral de las mujeres y las personas jóvenes (PEN, 2021 y 2016). Este Informe confirma la persistencia de esta debilidad estructural de los mercados de trabajo de cuya superación depende no solo la posibilidad de mejorar sus ingresos y condiciones de vida, sino también la capacidad de los países para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.

En el 2022, la proporción de jóvenes de 20 a 24 años que logró obtener un empleo fue mucho menor al de las personas con edades de 30 a 49 años (gráfico 1.31). Además, solo cuatro de cada diez jóvenes consiguen trabajo en el sector formal. El porcentaje restante trabaja en la informalidad, expuestos a malas condiciones laborales, sin protección de sus derechos y bajos niveles de productividad (BCIE, 2022).

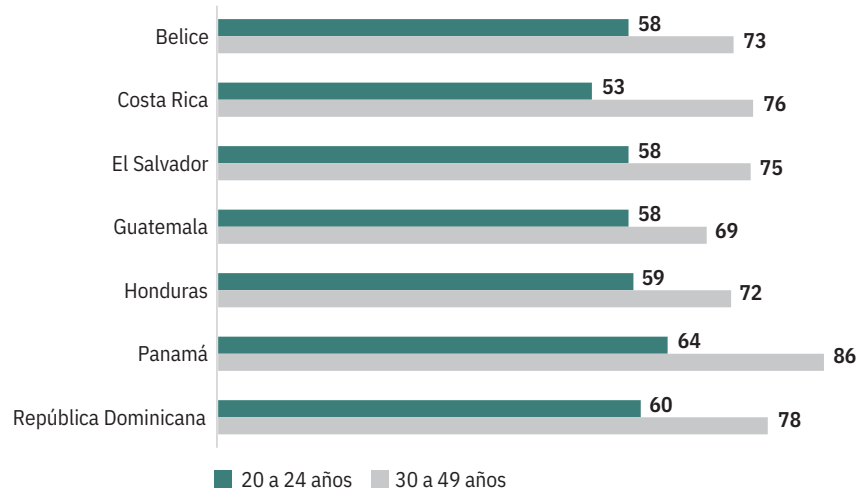
Los indicadores laborales de cada país reflejan brechas estructurales por sexo, que colocan a las mujeres en una posición de desventaja con respecto a los hombres. En la región CARD sólo la mitad de las mujeres en edades productivas forman parte de la fuerza laboral, ya sea buscando empleo o ejerciendo uno. En contraste, alrededor del 80% de los hombres entre 15 y 64 años forma parte de esa población. Además de tener una menor tasa de participación, las mujeres tienen mayores dificultades para obtener un empleo. Entre 2018 y 2023, el desempleo femenino promedio a nivel regional fue del 8%, comparado con el 5% de los hombres (gráfico 1.32).

Desde el 2018, la participación laboral

Gráfico 1.31

Región CARD

Tasa de ocupación laboral, por país y según grupo etario. 2022
(porcentajes)



Fuente: Fernández, 2024d con datos de las encuestas de empleo de cada país.

femenina en Centroamérica y República Dominicana crece más rápido que la masculina, lo cual es positivo de cara al cierre de las brechas existentes. Si esta tendencia continúa, para el 2084 las mujeres podrían alcanzar el nivel de ocupación masculina registrado en el 2023 (cerca del 80%). Este hito ocurriría en distintos momentos según el país: en la República Dominicana en el 2044, en Costa Rica en el 2048 y en Honduras en el 2053. En Belice, Panamá y Nicaragua, esto sucedería hacia finales del siglo XXI. Sin embargo, en El Salvador y Guatemala, la amplia brecha de género y el lento crecimiento de la participación femenina hacen improbable que alcancen ese nivel en este siglo.

Las mujeres que superan la barrera de entrada y consiguen un empleo se enfrentan a una tercera desventaja: un pago menor por su trabajo. De acuerdo con los datos de la Cepal (2024a), en el 2023, en términos generales, una mujer en Honduras y Guatemala ganaba alrededor del 40% del salario de un hombre. En Costa Rica devengaban cerca de la mitad; en Panamá y la República Dominicana, el 55%; y en El Salvador, aproximadamente un 59%.

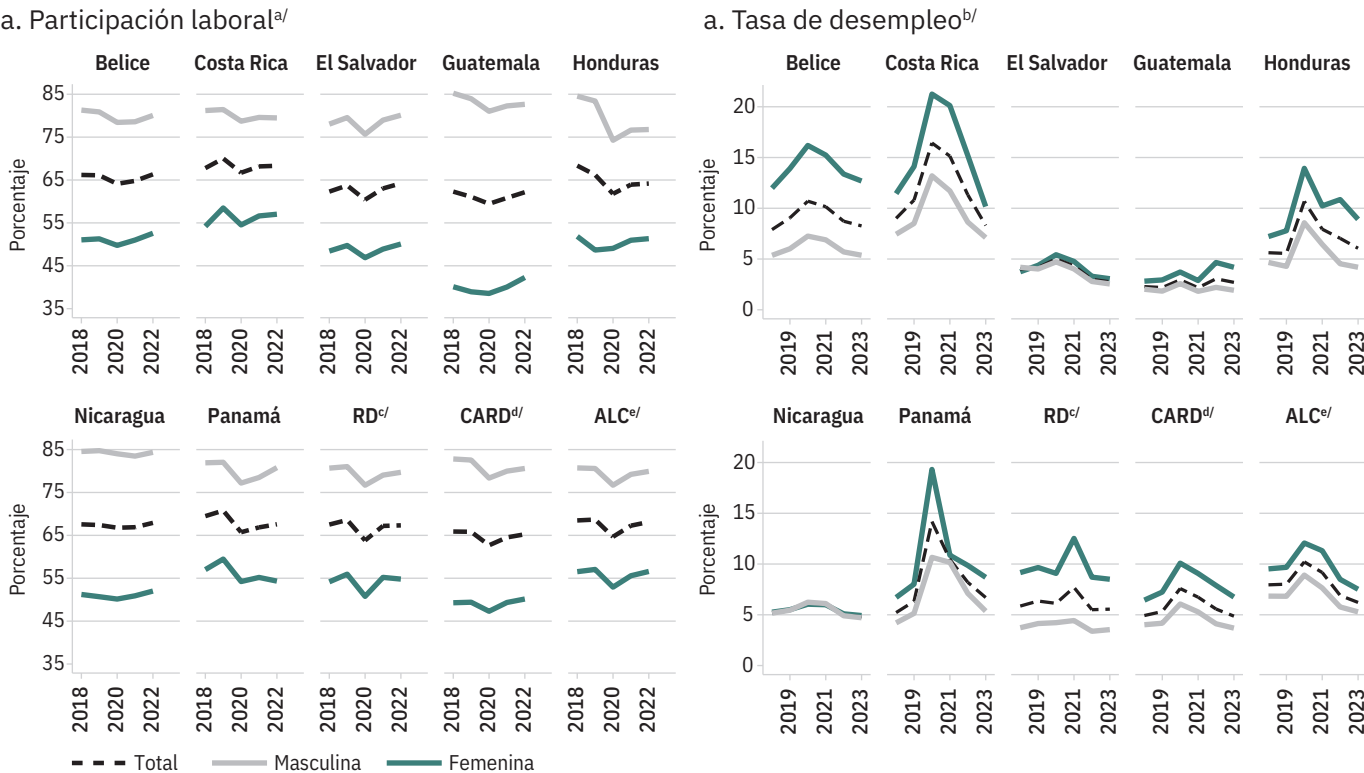
Bajo nivel educativo de la fuerza de trabajo impide mejoras en la productividad laboral

El bajo nivel educativo de la población limita la posibilidad de mejorar la productividad laboral. En el 2022, entre el 41% y el 89% de la población ocupada tenía un bajo nivel educativo (secundaria incompleta o menos). Aunque esta situación es mejor a la reportada a inicios de la década pasada, todavía es un problema bastante generalizado que le impide a amplios sectores de la población acceder a un puesto de trabajo de buena calidad y remuneración.

En la edición previa de este *Informe* (PEN, 2021) se señaló la urgente necesidad de fortalecer la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y formación técnica profesional para enfrentar el reto del bajo nivel de calificación de la fuerza laboral. Los países con mayor población y con una proporción más alta de jóvenes (El Salvador, Honduras y Guatemala) presentan un mayor rezago, pero también tienen un mayor margen de maniobra para hacer frente a esta situación, dada la fase del proceso de transición demográfica en donde se encuentran en este momento (gráfico 1.33).

Gráfico 1.32

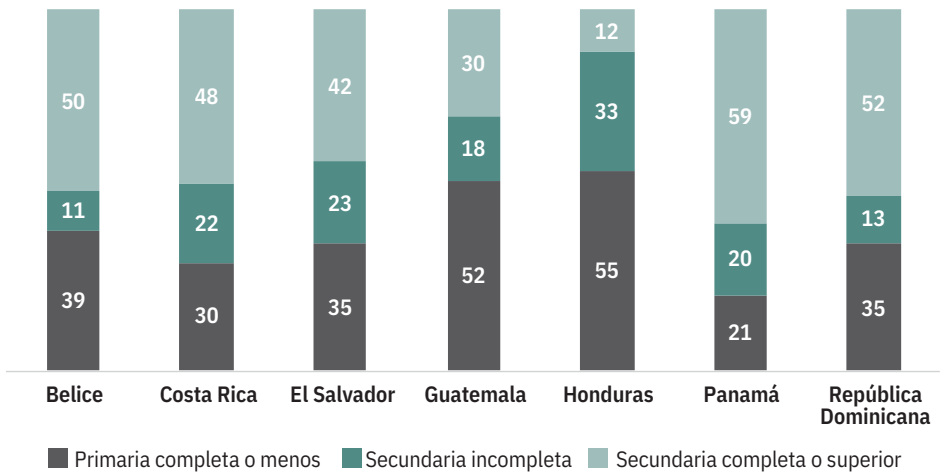
Región CARD y ALC
Participación laboral y tasa de desempleo total y por sexo, según país



a/ Porcentaje de personas entre 15 y 64 años en la fuerza laboral.
b/ Porcentaje de personas sin empleo en la fuerza laboral.
c/ República Dominicana.
d/ Centroamérica y República Dominicana.
e/ América Latina y el Caribe.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2024.

Gráfico 1.33

Región CARD
Distribución de la población ocupada, por país y según nivel educativo. 2022
(porcentajes)



Fuente: Fernández, 2024d con datos de las encuestas de empleo de cada país.

Situación fiscal agudiza riesgos para la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo humano

En el período 2018-2023, se profundizaron los problemas fiscales señalados en ediciones anteriores de este *Informe* (PEN, 2016 y 2021). Entre estos cabe destacar una baja carga tributaria, escasos niveles de recaudación y gastos crecientes y altamente inflexibles. La respuesta generalizada de las autoridades ante esta situación ha sido recurrir al endeudamiento público.

El elevado nivel de deuda pública y el incremento de las tasas de interés han puesto en evidencia las restricciones al desarrollo que suponen el endeudamiento y los altos pagos de intereses que genera (Cepal, 2024d). Esto limita la capacidad de los Estados para responder a las necesidades de la población y compromete el crecimiento económico a mediano plazo.

Una región con altos niveles de endeudamiento público, pero menores al promedio latinoamericano

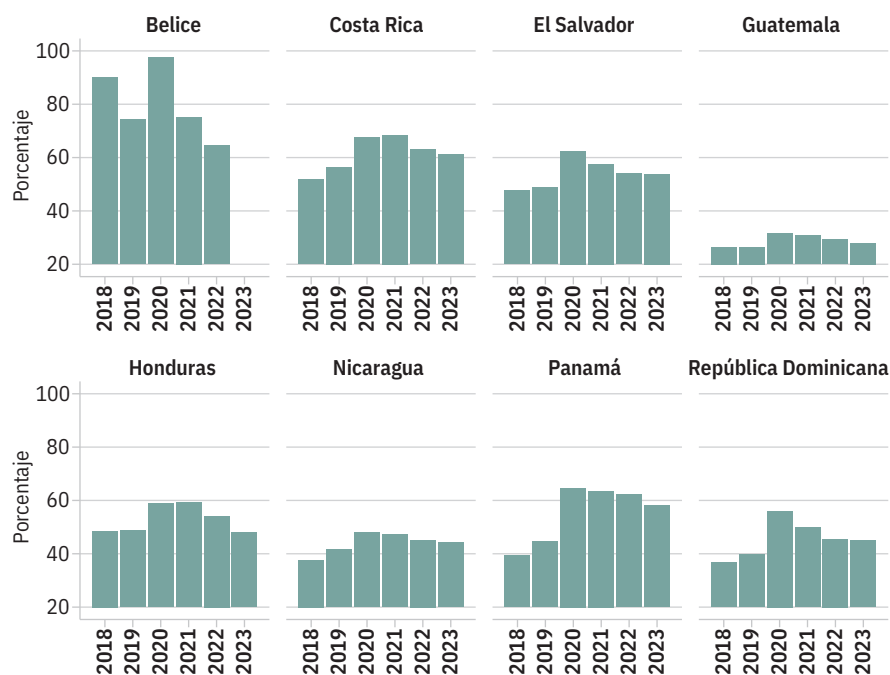
En diciembre del 2023, la deuda pública promedio en América Latina fue del 55% del PIB y aumentó 3,3 puntos con respecto al 2022. En Centroamérica, este indicador fue menor (47%), significativamente inferior al promedio de América del Sur (63%) (Cepal, 2024d). Sin embargo, los países de CARD aumentaron su deuda en el 2020 y el 2021 debido a los gastos incurridos para la atención de la pandemia. Aunque, en el 2022 y el 2023, el endeudamiento disminuyó, la relación deuda-PIB sigue siendo más alta que antes del 2020 en todos los países, excepto en Belice. En cinco de ellos (Belice, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras), supera el 50% del PIB (gráfico 1.34).

Todos los países de la región CARD recurren al endeudamiento (interno y externo) para atender gran parte sus necesidades de inversión y gasto, incluidos los asociados a coyunturas extraordinarias como la pandemia. El nivel de endeudamiento interno de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras se incrementó en el 2023. En Costa Rica,

Gráfico 1.34

Región CARD

Deuda pública total como porcentaje del PIB según país



Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2024b.

además, fue de un 45,1% del PIB en ese año, más del doble del de los demás países de la región.

Países de CARD siguieron con bajas cargas tributarias

Para hacer frente a las crecientes presiones de gasto e inversión pública, los países de CARD incrementaron de forma gradual sus cargas tributarias en el período 2000-2022, aunque a un ritmo distinto. Estos bajos niveles impiden financiar adecuadamente las inversiones y las políticas públicas que requieren los países para impulsar su desarrollo humano sostenible. En el 2022, en Nicaragua, El Salvador y Belice, la recaudación creció en al menos siete puntos porcentuales con respecto al año 2000. En Costa Rica, la República Dominicana, Honduras y Guatemala, ese crecimiento fue bastante más modesto. La única excepción a esta tendencia fue Panamá, donde la carga tributaria disminuyó durante el mismo periodo.

Pese los esfuerzos realizados, todas las economías de la región CARD tienen cargas tributarias por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22%) y aún más bajas en relación con el nivel promedio de los países de la OECD (34%). Panamá, Guatemala y la República Dominicana, junto con Paraguay, Argentina y México, están entre los países con menor carga en América Latina y el Caribe (gráfico 1.35).

Evasión y estructuras regresivas continúan limitando el mejoramiento en las finanzas públicas y una mayor equidad

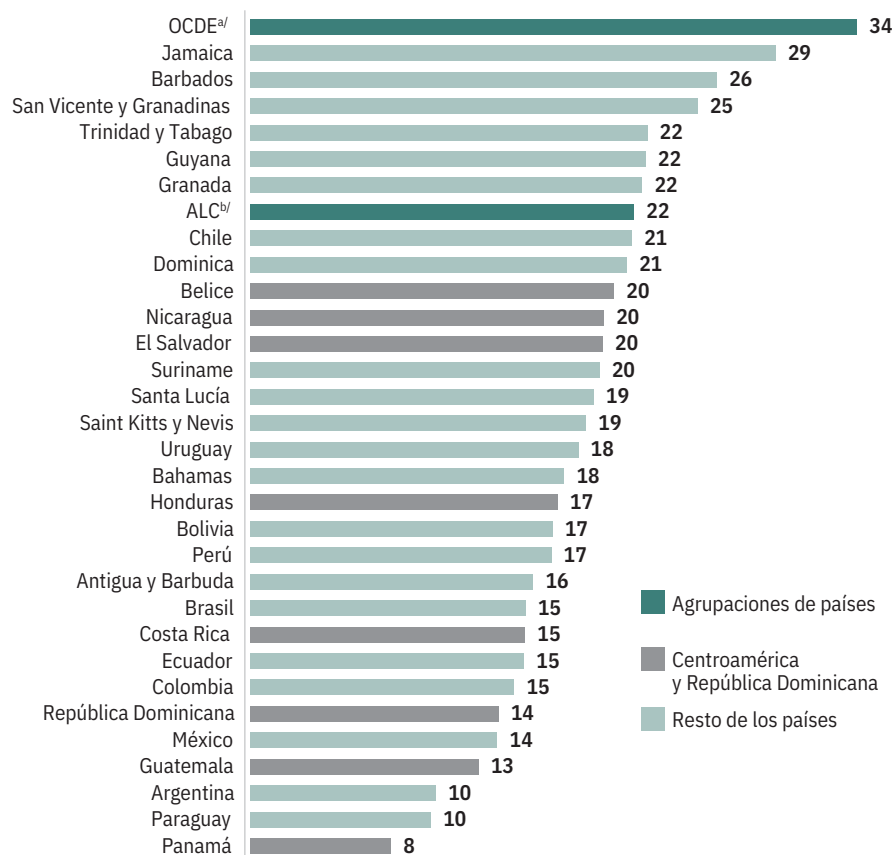
De acuerdo con Rivas Valdivia et al. (2024), al cierre del año 2023, cuatro países de la región CARD reportaron una disminución significativa del déficit fiscal del Gobierno central como porcentaje del PIB. En contraste, en la República Dominicana, Costa Rica y El Salvador se observó un deterioro del balance fiscal. La República Dominicana alcanzó

Gráfico 1.35

Región CARD, OCDE y ALC

Ingresos tributarios del gobierno central por país. 2022

(porcentaje del PIB)



a/ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

b/ América Latina y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2024c.

el mayor déficit fiscal (-4,6% del PIB), mientras que Honduras tuvo el menor (-1,1% del PIB). En tanto, Nicaragua reportó un superávit fiscal (3,1% del PIB).

Las estructuras tributarias en América Latina siguen siendo regresivas, con una alta dependencia a los impuestos indirectos. En este subcontinente, los impuestos sobre bienes y servicios generaron prácticamente la mitad de los ingresos fiscales totales en el 2022. El impuesto al valor agregado (IVA) constituyó la principal fuente de esta recaudación, al representar un 28% de los ingresos tributarios totales (Cepal, 2024c).

En el año 2022, entre el 50% y el 68% de los ingresos tributarios de los paí-

ses de la región CARD correspondió a impuestos indirectos. No obstante, en la mayoría de los países (excepto en Belice y Guatemala) la proporción de impuestos directos aumentó entre uno y siete puntos porcentuales durante el período 2015-2022.

Ante esta situación, surge la pregunta: ¿cómo hacer frente a las crecientes presiones de políticas públicas en contextos fiscales restrictivos? El Icefi (2023a) ha llamado la atención sobre la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales, uno de los principales incentivos aplicados por los países para promover la instalación de empresas, principalmente extranjeras, en sus territorios.

Finalmente, es necesario destacar la necesidad de mejorar las acciones para reducir la evasión fiscal. Según las últimas estimaciones de la Cepal (2024d), el incumplimiento tributario en América Latina representó en el 2023 una proporción equivalentes al 6,7% del PIB, la mayor parte corresponde a la evasión del impuesto sobre la renta corporativa y personal (4,6% del PIB), lo cual no solo debilita la recaudación de este impuesto, sino que también limita su capacidad redistributiva y la equidad.

Panorama social

El cuarto “piso” del edificio del desarrollo humano sostenible regional es la distribución de los beneficios de las oportunidades laborales, empresariales y de la producción de la riqueza. Si existe una adecuada distribución, estos beneficios conllevan mejoras en las condiciones de vida de las mayorías y, paralelamente, en el acceso a las capacidades para tener vidas dignas, saludables y con acceso a ingresos que impidan las privaciones sociales.

Persistentemente, los altos niveles de pobreza y correlativos altos niveles de concentración de los ingresos en varios países de la región CARD evidencian que las correas de transmisión de las oportunidades económicas al bienestar social no han funcionado bien. Las respuestas de los Estados, mediante las políticas sociales, han generado resultados positivos, pero claramente insuficientes a la luz del rezago histórico y los márgenes de maniobra que brinda el proceso de transición demográfica a los países. En particular, los bajos niveles de inversión social no permiten mejorar la cobertura y la calidad de la salud, la educación, la protección social, entre otros servicios sociales básicos. Además, en la mayoría de los países, esta inversión disminuyó a partir del 2021, lo cual deja a amplios sectores de la población en condiciones de alta vulnerabilidad. Estas dinámicas configuran un ciclo vicioso entre generación de capacidades, bienestar social y desarrollo humano sostenible.

La Cepal (2024) ha calificado a varios de los factores que componen este ciclo vicioso como “trampas del desarrollo” y

los identifica como las principales causas de la desigualdad y la baja movilidad social en América Latina y el Caribe. El primero de ellos se refiere al bajo crecimiento económico y la alta informalidad laboral, que provoca mercados laborales poco dinámicos, con grandes disparidades de productividad y segmentación, lo cual da como resultado desigualdades significativas en las remuneraciones. El segundo se refiere a los sistemas fiscales regresivos. Estos dos asuntos fueron analizados en el apartado de panorama económico. Tercero, políticas sociales y de protección social débiles. Cuarto, sistemas educativos con altas tasas de abandono y deficientes resultados de aprendizaje, que no responden a las necesidades tecnológicas y del mercado laboral. Quinto, desigualdad de género. Y, el último y sexto factor, desigualdad y segregación espacial en las zonas urbanas, donde reside el 80% de la población. En esta sección se aporta información y análisis de las tendencias para dimensionar estos últimos cuatro temas.

Los países de la región CARD lograron superar en buena medida el retroceso provocado por la pandemia. Sin embargo, persisten los problemas estructurales señalados en el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021). Sus manifestaciones más visibles y dramáticas son la alta incidencia de la pobreza, la caída de la cobertura y la calidad de la educación en la mayoría de los países que constituye un retroceso que revierte avances; los cuales aunque lentos, habían venido alcanzándose durante las últimas dos décadas.

En su conjunto, esto refuerza un mensaje previamente advertido por este Informe: el desarrollo futuro de los ocho Estados de la región CARD depende de la implementación de mejoras significativas en la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones, en especial de aquellas marginadas, que en la actualidad carecen de oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Rezago o claro deterioro en la generación de capacidades

El rezago o deterioro en la generación de capacidades de las personas para participar activamente en la vida social,

es el rasgo más relevante de la evolución reciente en materia social. En contraste con lo reportado en los últimos *Informe Estado de la Región* (2015, 2021), al inicio de la tercera década de este siglo se observa una reducción en la cobertura y la calidad de la educación en la mayoría de los países, así como un incremento de las tasas de mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas asociadas a estilos de vida poco saludables.

Estas son noticias preocupantes en el marco del proceso de transición demográfica que enfrentan los países de la región CARD (véase apartado de panorama demográfico). Por un lado, una población joven con un nivel de educación formal bajo tiene reducidas oportunidades de acceder a empleos de buena calidad y remuneración. Por el otro, una ampliación de la expectativa de vida implica una demanda creciente de servicios de salud por padecimientos que aquejan a poblaciones envejecidas, cuyo tratamiento resulta muy costoso. Dada la baja cobertura de la atención sanitaria que proporcionan los Estados, esto representa un riesgo considerable para los hogares, pues serán quienes deberán asumir esos costos.

Aumenta proporción de muertes prematuras prevenibles

En los países de CARD, como se señaló en el apartado demográfico, ha aumentado la esperanza de vida al nacer debido a los esfuerzos realizados en los años ochenta para mejorar la calidad del agua, ampliar la cobertura de la vacunación y reducir las enfermedades infectocontagiosas. No obstante, durante las últimas décadas han emergido nuevos retos: la obesidad y el sobrepeso, generados por hábitos alimenticios inadecuados, junto con el sedentarismo y otros comportamientos asociados a estilos de vida poco saludables, están generando incrementos en las muertes causadas por enfermedades crónico-degenerativas, la mayor parte de ellas prevenibles.

En el 2021 (último año del que existe información), las enfermedades prevenibles eran la principal causa de muerte y, además, muestran una tendencia creciente en todos los países desde el año 2010,

excepto en Honduras (gráfico 1.36).

En la región CARD, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte con tasas que van desde 179 por 100 mil habitantes en la República Dominicana hasta 66 en Guatemala. Las neoplasias malignas ocupan el segundo lugar en mortalidad. En la tercera posición se encuentran diversas enfermedades, según el país: respiratorias, digestivas y diabetes mellitus (cuadro 1.7).

Deterioros en coberturas coinciden con problemas de calidad educativa en la mayor parte de los países

La mayoría de los países de la región CARD no han alcanzado los niveles de cobertura educativa registrados en el año 2019, antes de la pandemia, e incluso muestran un deterioro en los últimos años. Esta tendencia, unida a las bajas calificaciones obtenidas por los países en las pruebas PISA (asunto que se analizará más adelante), confirma que la región CARD se encuentra en una de las “trampas del desarrollo” que señala la CEPAL (2024): sistemas educativos con altas tasas de abandono y resultados de aprendizaje deficientes, que no responden a las necesidades tecnológicas y del mercado laboral.

Además, persisten las brechas mencionadas en el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021) entre la educación primaria, que tiene mayor cobertura y la preescolar y secundaria. Esto representa un desafío para una región que necesita fortalecer las capacidades de las personas para mejorar la productividad en los mercados laborales y fortalecer su crecimiento económico futuro para impulsar el desarrollo humano (véanse apartados de panorama demográfico y económico).

En el nivel de educación primaria, las tasas de cobertura superan el 90% en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Guatemala. En los demás países, la proporción de niños y niñas que asisten a los niveles correspondientes a su edad varía entre un 79% en Honduras y un 88% en Belice (gráfico 1.37).

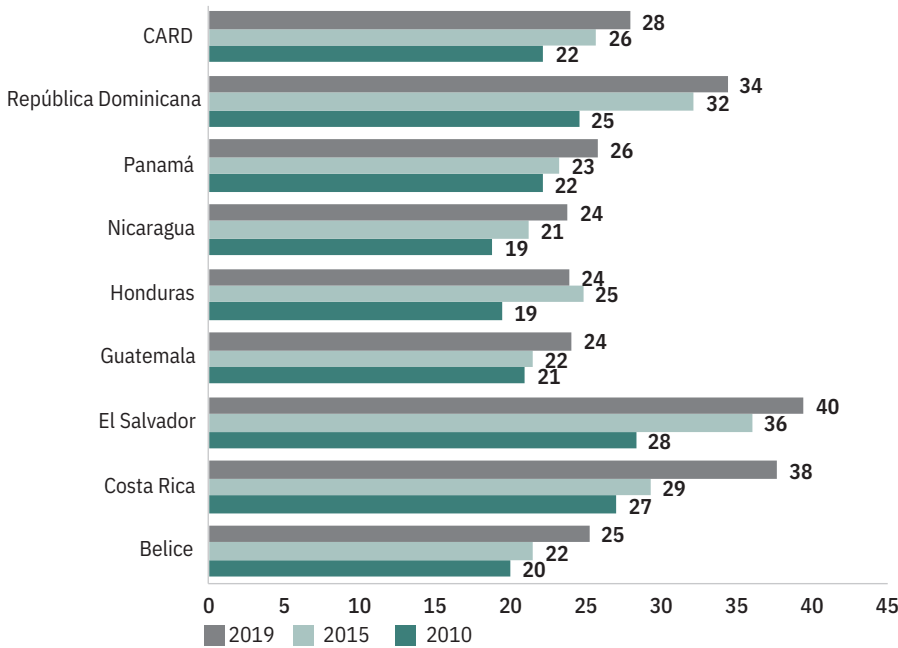
En los niveles de preescolar y secundaria, las coberturas son inferiores en comparación con primaria. En

Gráfico 1.36

Región CARD

Distribución^{a/} de muertes prematuras prevenibles^{b/}, según país por año

(porcentajes)



a/ Se calcula como porcentaje de las muertes totales.

b/ Se incluyen los datos de muertes por condiciones transmisibles, maternas, perinatales, nutricionales, enfermedades no transmisibles y lesiones.

Fuente: Elaboración propia con datos de OPS, 2021.

Honduras y Belice, solo cerca de un tercio de los niños y las niñas asisten a preescolar; mientras que en los demás países de la región (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana) la cobertura varía entre el 52% y el 63%. Costa Rica es el único país con una alta cobertura en este nivel educativo, pues alcanzó el 89% en el 2022, superior al promedio de América Latina y el Caribe (58%) e incluso mayor que la de los países de la OCDE (88%).

En la secundaria inferior la cobertura es mayor que en preescolar, pues oscila entre 77% y 84% en la mayoría de los países, excepto en Honduras (58%) y Guatemala (63%). Sin embargo, en la secundaria alta (últimos tres niveles), la asistencia disminuye a entre cuatro y seis de cada diez personas jóvenes. Las excepciones son Costa Rica y Belice, donde la cobertura alcanza el 92% y el 72%, respectivamente, del total de jóvenes en edad de asistir.

Prueba PISA 2022 evidencia graves problemas de la calidad educativa en cinco de los ocho países

Además del reto de ampliar la cobertura educativa en la región, también existe la necesidad de mejorar su calidad. Para abordar este tema, se tomaron como referencia los resultados de las pruebas internacionales estandarizadas “PISA”

Cuadro 1.7

Región CARD

Tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes, según causa de muerte por país. 2021

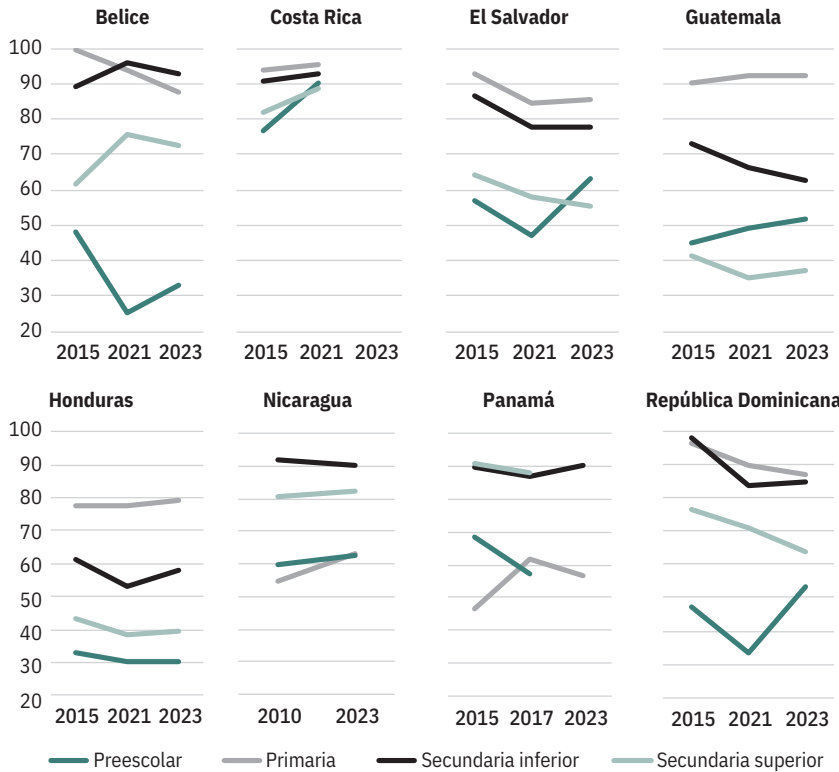
Causa	Belice	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	República Dominicana
Neoplasias malignas	48,4	112,2	71,5	49,3	57,4	39,8	79,6	99,5
Diabetes mellitus	33,0	21,3	35,8	36,7	12,0	19,6	30,3	21,6
Condiciones neurológicas	11,2	28,1	22,3	10,3	11,2	3,0	16,0	14,9
Enfermedades cardiovasculares	88,0	131,9	125,7	66,6	117,7	83,9	144,0	179,6
Enfermedades respiratorias	14,6	30,6	19,5	10,5	22,8	10,4	20,3	12,5
Enfermedades digestivas	21,0	34,9	35,6	39,4	31,9	15,6	21,2	26,6
Enfermedades genitourinarias	32,1	30,5	65,1	31,0	13,8	26,3	28,6	18,2

Fuente: Elaboración propia con datos de OPS, 2024.

Gráfico 1.37

Región CARD

Tasa neta de matrícula^{a/} por nivel educativo, según país por nivel educativo



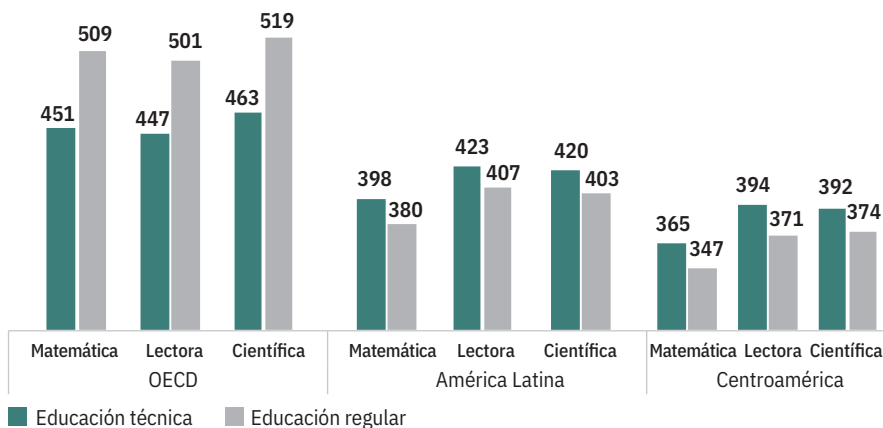
a/ Porcentaje del total de la población en edad oficial de asistir que está matriculada en el nivel educativo que le corresponde.

Fuente: Elaboración propia con datos de Unesco, 2025.

Gráfico 1.38

Región CARD, América Latina y OECD

Puntaje en pruebas PISA 2022, según modalidad educativa y región, por nivel educativo



Fuente: Elaboración propia con datos de PISA-OCDE.

del año 2022. Estas evaluaron las habilidades y los conocimientos de la población estudiantil de 15 años en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas. Debido a la baja participación de los países en estas pruebas, solo existen datos para cinco de los ocho países de la región (Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y la República Dominicana). Además de medir las diferencias entre naciones, se evaluaron las diferencias entre los centros con educación académica regular y aquellos que también incluyen formación técnica profesional.

Los países de la región CARD obtuvieron las calificaciones más bajas entre los países evaluados. La excepción fue Costa Rica, que logró las segundas mejores puntuaciones en América Latina después de Brasil. Sin embargo, estos resultados fueron muy inferiores al promedio de las naciones de la OECD, pues en ninguna de las tres áreas evaluadas la región CARD superó el promedio latinoamericano, el cual está por debajo de los países de la OECD (para más detalles sobre los resultados de PISA, véase Fernández, 2024).

En CARD, los resultados de los centros educativos de educación técnica superaron a los de la educación regular (gráfico 1.38). Este patrón contrasta con el observado en los países la OECD, donde las puntuaciones más altas se obtienen en modalidades regulares. Dentro de la región se identificaron tres grupos de países. De acuerdo con Fernández (2025b), el primero está conformado por Costa Rica, El Salvador y la República Dominicana, donde el desempeño del estudiantado con formación técnica es superior al de las personas estudiantes matriculadas en educación regular. En Costa Rica, esta diferencia llega hasta 24 puntos, mientras que en El Salvador y la República Dominicana alcanza los 45 puntos. El segundo y tercer grupo se componen de países individuales. En Panamá, quienes asisten a educación regular obtuvieron calificaciones que fueron entre 20 y 30 puntos más que sus pares con formación técnica. Por último, en Guatemala, no se encontraron diferencias significativas entre las dos modalidades de estudio.

La región mantiene altos porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan

Una vulnerabilidad adicional que afecta a la población joven es la exclusión simultánea del sistema educativo y del mercado laboral. En América Latina, estudios del Banco Mundial señalan que el 20% de las personas entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja; por esta razón se les conoce como “ninis”. Entre 1992 y el 2010, aunque la proporción de “ninis” apenas disminuyó, su número absoluto se incrementó en dos millones (Hoyos et al., 2016).

No todos los países de la región CARD disponen de información sobre las personas jóvenes que no estudian ni trabajan. En el 2023, en Costa Rica y Panamá, el 8% de la población entre 15 y 18 años no estudiaba ni trabajaba, mientras que en El Salvador era el 12%, pero en la República Dominicana y en Honduras eran más del doble: 25% y 28%, respectivamente.

No obstante, en el grupo de edad comprendido entre 19 y 24 años, se registra

el mayor porcentaje de población que no estudia ni trabaja. En Honduras y la República Dominicana, los países con la mayor proporción de personas jóvenes en esta condición, se observó un incremento en el número de “ninis” entre el 2018 y el 2023. El Salvador y, en menor medida, Panamá muestran una tendencia a la baja. En Costa Rica, la proporción se ha mantenido en torno al 21% (gráfico 1.39). Cabe destacar que en todos los países, el porcentaje de mujeres que no estudia y ni trabaja es mayor al de los hombres. En el año 2023, esa brecha de género osciló entre ocho puntos porcentuales en Costa Rica y 30 en Honduras.

Pobreza se redujo, pero los niveles siguen siendo elevados

El avance en el desarrollo humano sostenible implica que más personas tengan acceso a condiciones de vida digna y bienestar. Por esta razón, es importante dar seguimiento al indicador de la incidencia de la pobreza, que permite medir y caracterizar las carencias básicas de los hogares.

Para este *Informe*, la medición se realizó a partir de la metodología de línea de pobreza⁹ (para conocer más sobre la metodología y las fuentes de información utilizadas véase Echeverría y Fernández, 2025b; en www.estadonacion.or.cr). Nicaragua y Belice no fueron incluidos en el análisis. En el caso de Nicaragua, no se tuvo acceso a los datos necesarios. Por su parte, Belice no se consideró ya que, desde el 2018, dejó de medir la pobreza por ingresos y solamente se calcula la pobreza multidimensional (Fernández y Echeverría, 2025d).

Después de la pandemia por covid-19, todos los países lograron reducir sus niveles de pobreza. No obstante, solo El Salvador y Guatemala tuvieron disminuciones significativas: 25 y 18 puntos porcentuales, respectivamente. Ambos datos son llamativos porque en ese período ninguno de los dos países experimentó altas tasas de crecimiento económico ni fuerte expansión de la inversión social.

Honduras continúa siendo el país con el mayor nivel de pobreza en la región: ocho de cada diez hogares viven en esa condición, de los cuales dos están en

situación de pobreza extrema. Guatemala es el segundo país de la región con mayor incidencia, aunque ha registrado una disminución significativa en los últimos años. En este país, la pobreza alcanzó un 68,4% de los hogares previo al impacto de la pandemia y aumentó hasta un 74,3% durante la pandemia. Sin embargo, los datos del 2023 evidencian una reducción a un 56% de hogares. Este resultado es incluso menor al que tenía este país previo a la pandemia. En la región CARD, solo Guatemala y Honduras presentan niveles de pobreza superiores al promedio de América Latina (gráfico 1.40).

Uno de los factores asociados con la pobreza es el bajo nivel educativo. De acuerdo con lo mencionado previamente, la educación mejora las posibilidades de acceder a empleos de calidad y buena remuneración, lo cual reduce así el riesgo de pobreza. Esto se confirman con los análisis realizados para este *Informe*.

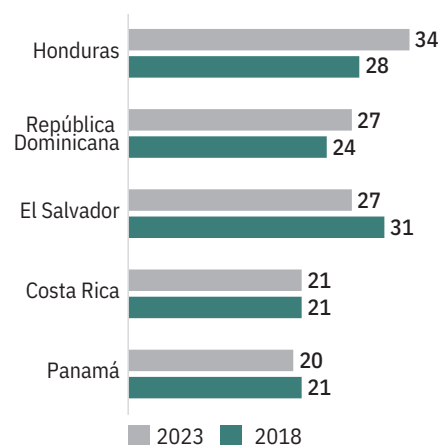
Según Echeverría y Fernández (2025d), en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, la incidencia de la pobreza entre los hogares donde la persona a cargo tiene un nivel educativo de secundaria incompleta o menos varía entre el 30% y el 70%. Esa proporción se reduce a entre un 16% y un 47% cuando esa persona cuenta con secundaria completa y disminuye a entre un 5% y un 25% si la persona jefa del hogar ha alcanzado un nivel educativo superior a la secundaria completa.

A la luz del proceso de transición demográfica que experimenta la región, es relevante prestar atención a las condiciones socioeconómicas de la población adulta mayor. Por esta razón, se analizó la incidencia de la pobreza en los hogares con personas adultas mayores de 65 años. En cuatro de los países en donde fue posible hacer este análisis, se determinó que la incidencia de la pobreza es mayor en aquellos hogares que cuentan con al menos una persona adulta mayor.

En Costa Rica y El Salvador, la proporción de hogares con adultos mayores que están en pobreza fue del 26% y el 29%, respectivamente. Sin embargo, este indicador asciende a 38% en Guatemala. Finalmente, en Honduras esta situación es más grave, pues un 62,5% de los hogares

Gráfico 1.39

Región CARD
Porcentaje de jóvenes ninis^{a/}
entre 19 y 24 años, según país



a/ Acrónimo de ni estudia ni trabaja, se utiliza para definir a personas en esta condición.

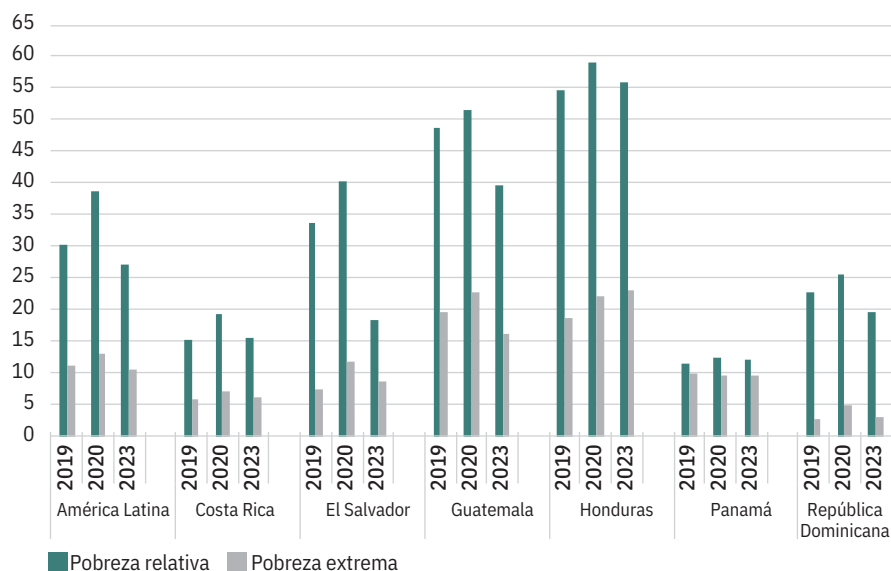
Fuente: Barquero, 2025 a partir de Mercados de Trabajo-Estado de la Juventud (Ninis), Banco Mundial, 2024.

Gráfico 1.40

Región CARD y América Latina

Hogares en pobreza, según etapa^{a/} de pandemia covid-19 por nivel de pobreza

(porcentaje)



a/ Prepandemia (2019), Pandemia (2020), Postpandemia (2023). En el caso de Guatemala el dato prepandemia corresponde a 2014. Para Panamá y República Dominicana los datos post-pandemia son del año 2022.

Fuente: Echeverría y Fernández, 2025d con datos de las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

con presencia de adultos mayores viven en pobreza. Por su condición de mayor vulnerabilidad, estos son hogares prioritarios para la atención mediante programas de política social de cada país.

Mejorar los ingresos laborales es clave para reducir la pobreza

La pobreza es una condición compleja en la que intervienen factores sociales, económicos, institucionales, culturales y territoriales, que conlleva a un rezago en el desarrollo de capacidades y a un acceso limitado a oportunidades. Uno de los factores más relevantes es la capacidad de los hogares de obtener ingresos dignos para satisfacer sus necesidades. Por tal razón, se analiza la estructura de los ingresos en los hogares en la región CARD.

La principal fuente de ingreso de los hogares en CARD es el trabajo remunerado. En el año 2023, la proporción de estos ingresos dentro del total de los ingresos de los hogares varió entre un

76% y un 84%, según el país. Sin embargo, el porcentaje varía según el nivel socioeconómico de los hogares. En todos los países de la región, la participación de los ingresos laborales es menor en el caso del 20% de los hogares con menores ingresos (primer quintil), lo cual refleja sus dificultades para acceder al mercado laboral. Este segmento tiene una composición de ingresos más diversa, pues recibe otros ingresos adicionales a los laborales, particularmente transferencias del Estado.

Hay importantes diferencias intraregionales. En los países con menor incidencia de la pobreza (Costa Rica, Panamá y la República Dominicana), la proporción de ingresos laborales en el primer quintil oscila entre el 47% y el 60%. En cambio, en Guatemala, país con considerables rezagos sociales, el ingreso laboral representa el 87% del total de ingresos en el 20% de los hogares con menores ingresos.

El peso de las transferencias del Estado vía programas sociales y de otra naturaleza dentro de los hogares del primer quintil también es mayor en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, pues oscila entre el 18% del total en el primer país y el 11% en Panamá. En los demás países, estos hogares también reciben transferencias, pero los niveles son mucho menores, lo cual guarda relación con sus bajos niveles de inversión social y que, como se verá más adelante, resultan muy insuficientes para financiar las necesidades que la política pública social atiende.

Cerca de una quinta parte de los ingresos de los hogares de la región CARD proviene de otras fuentes que no son ni los ingresos laborales ni las transferencias del Estado. Estos ingresos pueden ser de muy diversa naturaleza, tales como pensiones, rentas o alquileres, remesas o ayudas de otras personas sean o no familiares. Este tipo de ingresos tiene un mayor peso en la participación de los ingresos en los hogares del primer quintil. La excepción es Guatemala, país donde el rubro de “otros ingresos” tiende a aumentar entre el 20% de los hogares de mayores ingresos (Echeverría y Fernández, 2025d; gráfico 1.41).

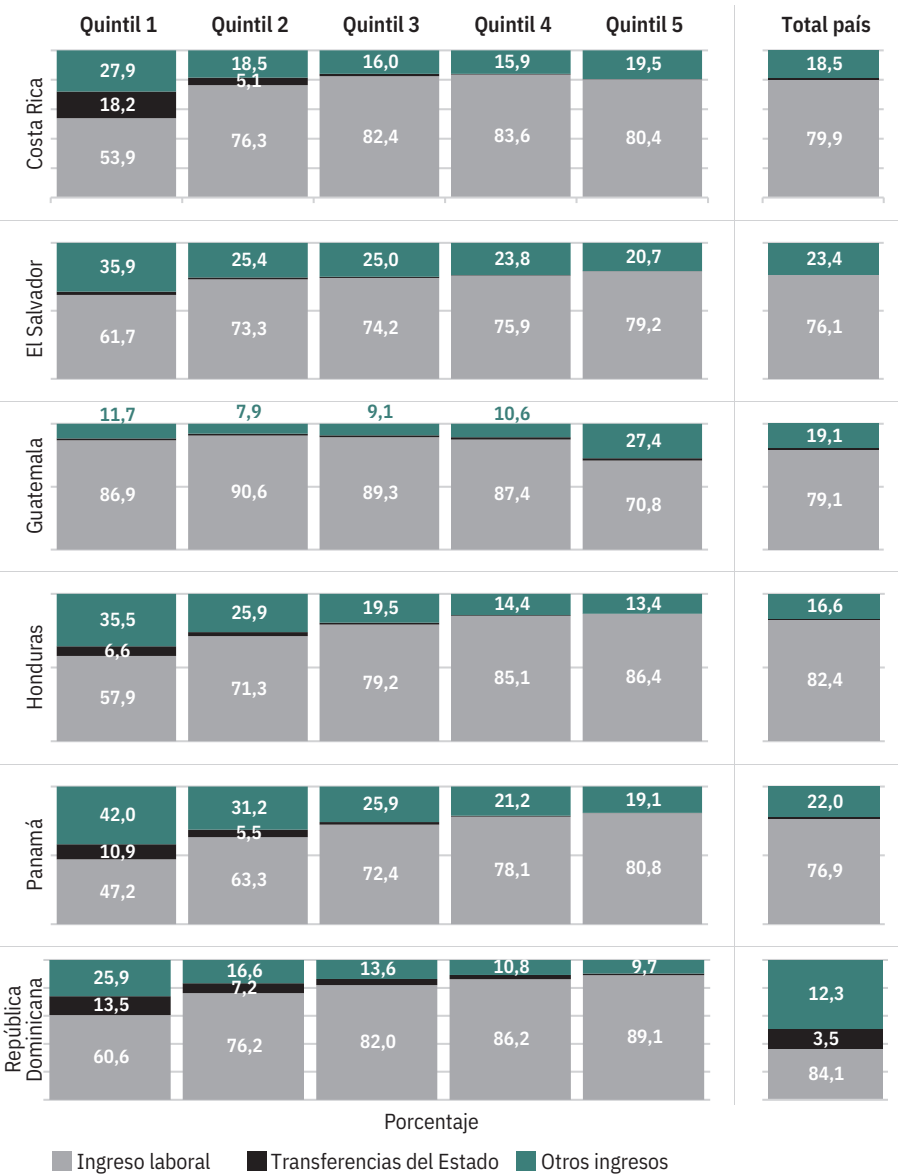
Alta y persistente desigualdad de ingresos

Ediciones previas de este *Informe* (PEN, 2016 y 2021) han resaltado los altos niveles de desigualdad y concentración de ingresos en los países de la región CARD. Esta edición confirma que dicha condición persiste y constituye un factor limitante para que las oportunidades generadas por el crecimiento económico se traduzcan en mejores ingresos y condiciones de vida para amplios sectores de población.

De acuerdo con la Cepal (2014b), “los principales determinantes de tal desigualdad residen en la estructura de la producción y distribución de las economías de Centroamérica y la República Dominicana, el funcionamiento de sus sistemas financieros, la dinámica de sus mercados laborales y la fragilidad y limitaciones de las políticas fiscales y sociales allí prevalecientes”. Mejorar estos factores

Gráfico 1.41

Región CARD
Composición porcentual del ingreso total de los hogares según país y quintil de ingreso^{a/} per cápita del hogar, por fuentes de ingreso. Circa 2023



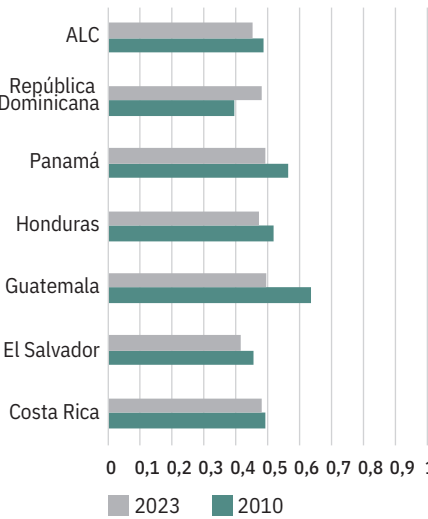
a/ El Quintil 1 representa al 20% de menores ingresos, mientras que el Quintil 5 representa al 20% de mayores ingresos. Para Panamá y República Dominicana los datos son de 2022.
Fuente: Echeverría y Fernández, 2025d con datos de las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

impone desafíos importantes a los mercados y a la institucionalidad de los países, y es una de las “trampas” sobre las que la CEPAL (2024) indica que América Latina y el Caribe debe enfrentar para avanzar hacia niveles mayores de desarrollo.

El coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad en la distribución del ingreso entre los individuos u hogares de una sociedad. Cuanto más cercano a cero sea su valor, más igualitaria será la

Gráfico 1.42

Región CARD y ALC
Coeficiente de Gini, según país



Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2023.

distribución y, a la inversa, un valor cercano a uno indicará una distribución altamente inequitativa. En el 2023, este indicador fue menor en comparación con el 2010, lo cual muestra una tendencia hacia una mejor distribución de los ingresos (gráfico 1.42). No obstante, en todos los países es superior al promedio de América Latina, una región catalogada como la más desigual del mundo (PNUD, 2019).

Una segunda metodología para medir la desigualdad implica examinar la distribución de los ingresos entre distintos segmentos de la población. Con ese fin, Echeverría y Fernández (2025d) clasificaron a los hogares en quintiles, es decir, en cinco grupos según su nivel de ingreso per cápita, con 20% de los hogares en cada grupo. Para determinar los niveles de concentración de ingresos, se analizó la proporción de los ingresos totales que representa cada quintil, entendiendo que una distribución equitativa resultaría en que cada grupo representara el 20% del total de los ingresos.

Para el 2023, en los países de la región CARD, el 20% de hogares con mayores ingresos concentró entre el 42% y el 54% del ingreso total (gráfico 1.43). En contraste, el 20% de hogares de

menores ingresos representó solo entre un 2,3% y un 5,5% del total. Los dos países con mayor desigualdad en la concentración de ingresos según quintiles son Guatemala y Panamá. En estos, el 20% de hogares de mayores ingresos concentra más de la mitad de los ingresos, mientras que el 20% de hogares de menores ingresos representa menos del 3% del total. En contraste, los países con una distribución más equitativa de los ingresos son El Salvador, Honduras y, sobre todo, la República Dominicana.

Gasto social es insuficiente e inferior al del resto de América Latina

Históricamente, la región CARD ha tenido bajos niveles de inversión social. En el año 2023, para el cual está disponible información comparada, la inversión social per cápita en América Latina fue 1,6 veces mayor que en el istmo, mientras que la de Uruguay fue 4,8 veces mayor, la de Argentina 2,3 veces, la de México 1,6 veces y la de Colombia 1,5 veces mayor.

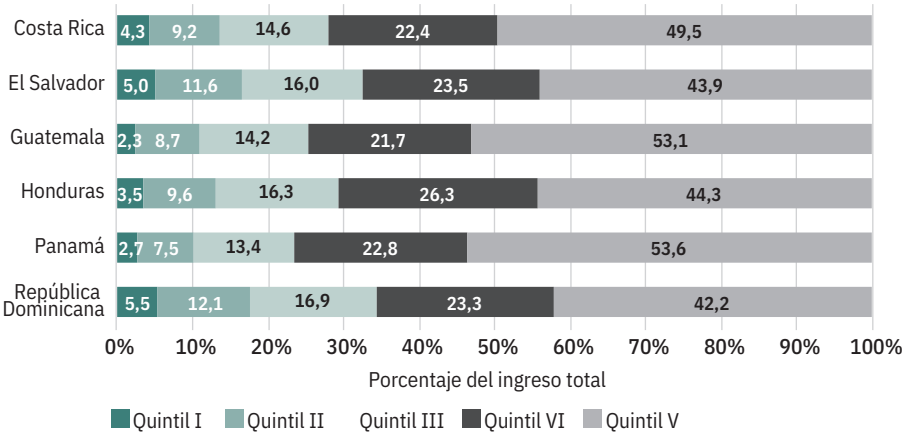
No obstante, la región incrementó su gasto social por habitante a lo largo del siglo XXI. Incluso los países más rezagados (Nicaragua y Honduras) pasaron de niveles de entre 90 y 136 dólares por habitante al año en el 2000 a 228 dólares en el 2023. Por su parte, aquellos que más invirtieron a inicios de siglo (Costa Rica y Panamá) aumentaron la asignación de fondos, al pasar de 682 y 617 dólares por persona al año a 1.391 y 1.250, respectivamente. Esta tendencia es similar a la de América Latina, la cual aumentó en 117% su gasto social per cápita en ese período.

De acuerdo con lo indicado en el *Sexto Informe Estado de la Región (2021)*, el período de expansión de la inversión social ocurrió principalmente a partir del 2005. Durante los años de la pandemia, además, se observaron niveles más elevados, impulsados sobre todo por los rubros de protección social y salud. No obstante, después del 2021, los países experimentaron una contracción en la inversión por habitante (gráfico 1.44). El sector de educación ha sido el más afectado, pues la disminución interanual en la región entre los años 2021 y 2023 fue del 1% en promedio.

Gráfico 1.43

Región CARD

Distribución del ingreso total de los hogares, según país por quintiles de ingreso per cápita. 2023^{a/}



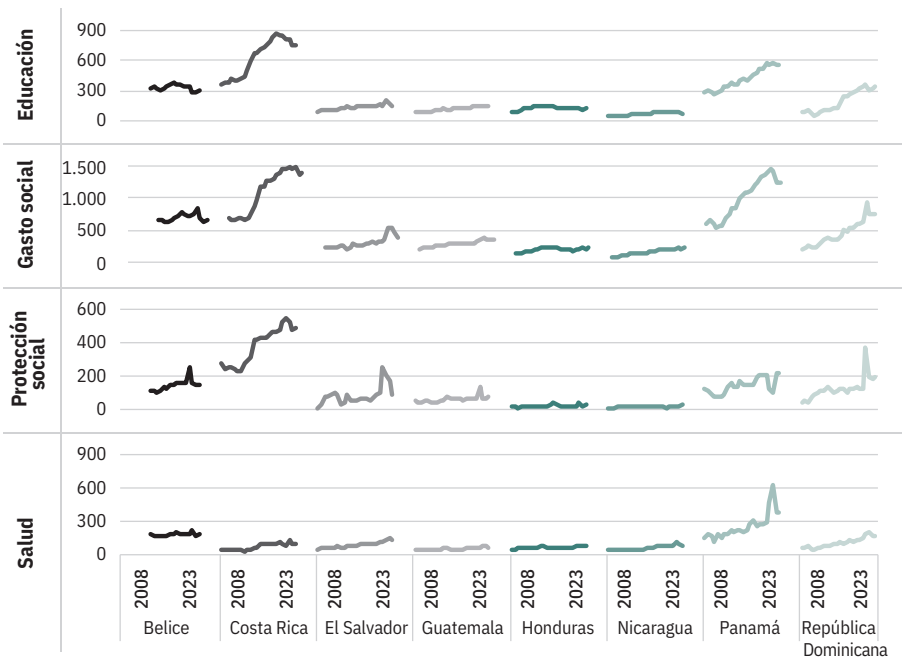
a/ A excepción de Panamá y República Dominicana que presentan datos de 2022.

Fuente: Echeverría y Fernández, 2025d con datos base en las encuestas de hogares, de empleo e ingresos y de nivel de vida de cada uno de los países.

Gráfico 1.44

Región CARD

Evolución de la inversión social per cápita total, por país, según área social (dólares)



Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal, 2024b.

Esta tendencia se torna especialmente preocupante dados los amplios rezagos sociales y las urgentes necesidades de la región por mejorar la productividad de su población para favorecer su crecimiento y desarrollo humano.

Panorama político

El quinto “piso” del edificio del desarrollo humano sostenible comprende los procesos de toma de decisiones colectivas por parte de los Estados, regímenes políticos y las ciudadanías, que determinan cómo las políticas públicas influyen en los niveles anteriores.

La región de Centroamérica y República Dominicana enfrenta un deterioro democrático de sus sistemas políticos, como lo muestran los índices e informes internacionales correspondientes al período 2018-2023. Al examinar los retrocesos democráticos desde una perspectiva de largo plazo, esos indicadores evidencian que varios países se acercan, o ya están en niveles similares, a los de ciertos momentos del siglo XX, cuando experimentaron gran inestabilidad y conflicto político. Esas tensiones políticas encienden las alarmas para tomar medidas para proteger la libertad, el sufragio, la paz y los derechos humanos; aspectos que no hace mucho tiempo eran violentados en la mayoría de los países de la región.

Actualmente, Centroamérica y la República Dominicana es un laboratorio político en donde coexisten desde una democracia liberal hasta autocracias, junto a regímenes híbridos que combinan rasgos democráticos con otros autoritarios. El retroceso democrático es más severo y marcado en al menos dos países (Nicaragua y El Salvador), mientras que en Guatemala y Honduras los resultados son mixtos y, en todo caso, volátiles. En cambio, se presenta mucha mayor estabilidad en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana.

Esta sección del capítulo de Panorama Regional examina la evolución comparada de tres aspectos básicos de la democracia en los países centroamericanos y la República Dominicana. La primera sección analiza las elecciones como

mecanismo de acceso al poder y sus características en las rondas electorales más recientes. La segunda se enfoca en cómo se ejerce el poder después de las elecciones, sobre todo en el funcionamiento de los pesos y contrapesos a lo interno de los Estados. Y, finalmente, en el último apartado se presentan las percepciones sobre los niveles de apoyo a las reglas democráticas. Este repaso se realiza a partir de los indicadores internacionales más utilizados y confiables en la materia.

Solo una democracia plena subsiste en los ocho países de CARD

El índice de democracia de The Economist (2023) señala que América Latina y el Caribe ha experimentado retrocesos sistemáticos durante los últimos ocho años. Dentro de esta región, Centroamérica es la subregión con la mayor regresión, impulsada por el deterioro de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países ubicados en las posiciones 95, 96, 100 y 143, respectivamente, de las 167 naciones evaluadas. De los siete países de la región, Nicaragua fue calificada como régimen

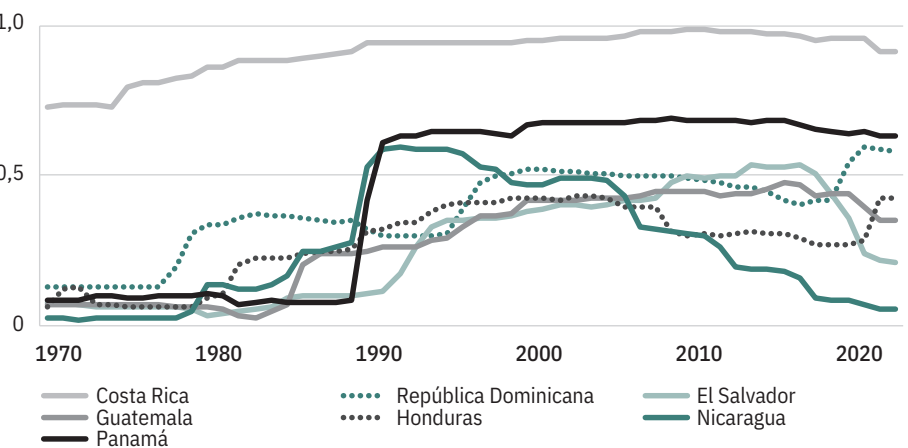
autoritario, mientras que Honduras, El Salvador y Guatemala se ubican en la categoría de regímenes híbridos, Panamá y la República Dominicana, como democracias defectuosas y Costa Rica como democracia plena (The Economist, 2024).

De manera similar, el Índice Multidimensional de Democracia¹⁰ del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem), evidencia que los países de la región están en situaciones y enfrentan desafíos distintos en sus sistemas políticos. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana son las naciones mejor evaluadas en términos de la situación de la democracia (con valores del índice más cercanos a 1), aunque con distancias entre ellos (gráfico 1.45)

Costa Rica, aun con puntajes significativamente altos, ha experimentado disminuciones lentas y sostenidas en su calificación democrática, que deben ser tomadas como una alerta. Panamá se posiciona como el segundo sistema político más democrático de la región, pero sin mejoras recientes. En la República Dominicana se experimentó una importante recuperación a partir del 2020.

Dos países muestran resultados mixtos en el índice multidimensional de

Gráfico 1.45
Región CARD
Evolución del índice multidimensional de democracia^{a/} según país (escala)



a/ Corresponde al promedio de estos cinco indicadores por país y por año: democracia liberal, democracia electoral, democracia deliberativa, democracia participativa y democracia igualitaria. Los valores más altos implican mejor situación de la democracia.
Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

democracia de V-DEM. Desde el 2022, Honduras ha cumplido los requisitos mínimos para ser considerada una democracia electoral, pero este logro puede catalogarse de frágil y vulnerable (Nord et al., 2024). Luego del golpe de Estado del 2009, llegaron a la Presidencia de la República líderes políticos que generaron dudas legítimas acerca de su compromiso con los principios de la democracia, lo que dificultó el camino hacia la recuperación política. Esto fue especialmente cierto durante los mandatos del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

La situación política en Guatemala es compleja e incierta, caracterizada por un proceso democratizador errático. Los dos mandatos presidenciales más recientes (Jimmy Morales y Alejandro Giammattei) produjeron retrocesos en

libertades y derechos políticos; lo cual impactó la capacidad para asegurar un panorama electoral libre y justo. Esto se ve reflejado en la caída en los indicadores de democracia liberal y democracia electoral. Sin embargo, el sorpresivo triunfo electoral del presidente Bernardo Arévalo en los últimos comicios ha generado expectativas positivas para el sistema político guatemalteco.

Por último, El Salvador y Nicaragua son los países con el mayor retroceso democrático. El Salvador ha venido gestando deterioros desde el 2017 y a partir del 2023, cumple con los requisitos para ser considerado como una autocracia electoral (Nord et al., 2024).

Un fenómeno de autocratización política mucho más profundo y extenso ha ocurrido en Nicaragua. Desde el 2008, con el regreso del presidente Daniel Ortega, se han arreciado las persecu-

ciones políticas y las restricciones a las libertades y los derechos de su población, especialmente luego de las protestas cívicas del 2018.

Limitaciones a la competencia electoral coinciden con problemas en la gestión electoral

Durante el primer lustro de esta década, la mayoría de los países de la región CARD continuaron experimentando problemas en la gestión electoral, la calidad de los padrones electorales, irregularidades en los resultados de las votaciones y limitaciones al derecho de elegir y ser electo, en consonancia con lo reportado en la edición anterior de este Informe (PEN, 2021).

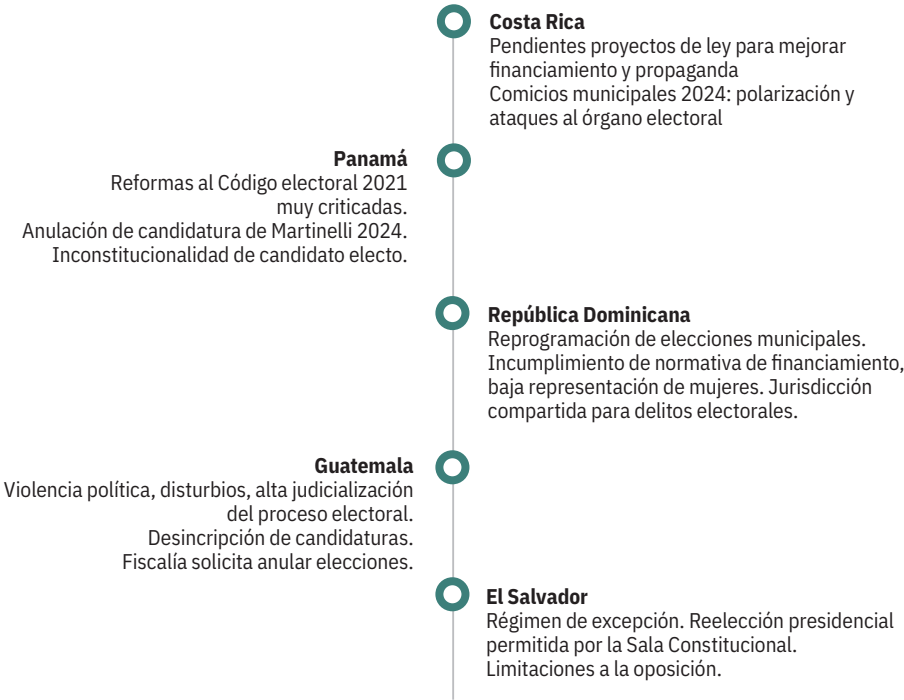
Al 2025 se confirma la tendencia de debilitamiento de los partidos y liderazgos históricos, en un contexto en el cual la ciudadanía no tiene afiliaciones partidarias o preferencias robustas y estables. Además de estas tendencias, se agravan las restricciones para la oposición política y los retrocesos en la gestión electoral.

En tales circunstancias, la calidad de las campañas electorales adquiere un relieve particular, pues en ellas se configuran nuevas ofertas y liderazgos para ocupar el poder político. De acuerdo con el Índice de elecciones libres y justas, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana (este último en menor medida) son los países que reflejan elecciones transparentes y justas (Alfaro et al., 2021; Chacón, 2022; gráfico 1.46). Este indicador toma en cuenta la ausencia de fraude en el registro, irregularidades sistemáticas, intimidación gubernamental a la oposición, compra de votos, violencia electoral y autonomía del cuerpo electoral.

Tanto los tres países mejor evaluados, como el resto en más bajas calificaciones, han enfrentado dinámicas desafiantes para mantener la credibilidad de las elecciones. Una síntesis ilustrativa de estos problemas se presenta en el diagrama 1.1.

En la mayoría de los países de la región, las debilidades del sistema electoral se combinan con la interposición de obstáculos que dificultan la participación de la oposición política en la contienda electoral. Uno de los factores que ha limitado

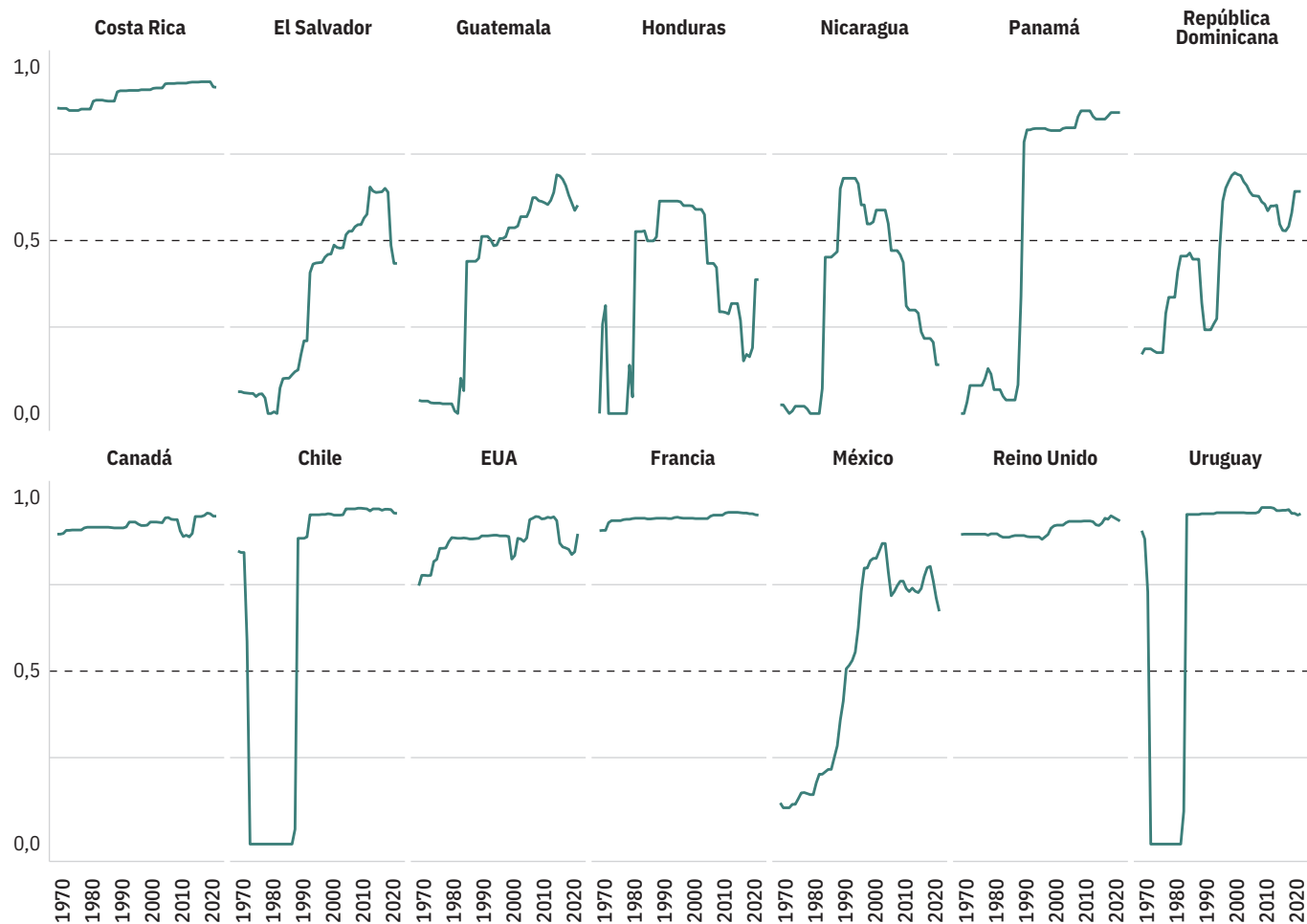
Diagrama 1.1
Región CARD
Dificultades en los procesos electorales recientes de algunos de los países



Fuentes: Elaboración propia con base en France24, 2024; Almanza, 2021; MOE/OEA, 2020; Cuevas, 2023; García et al., 2022; Delcid, 2023; BBC, 2023; Schwartz y Isaacs, 2023.

Gráfico 1.46

Región CARD y países seleccionados
Evolución del índice de elecciones limpias^{a/} según país



a/ Considera diez indicadores relacionados con la ausencia de fraude en el registro, irregularidades sistemáticas, intimidación gubernamental a la oposición, compra de votos, violencia electoral y autonomía del cuerpo electoral. Valores cercanos a uno significan una mejor situación.
Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

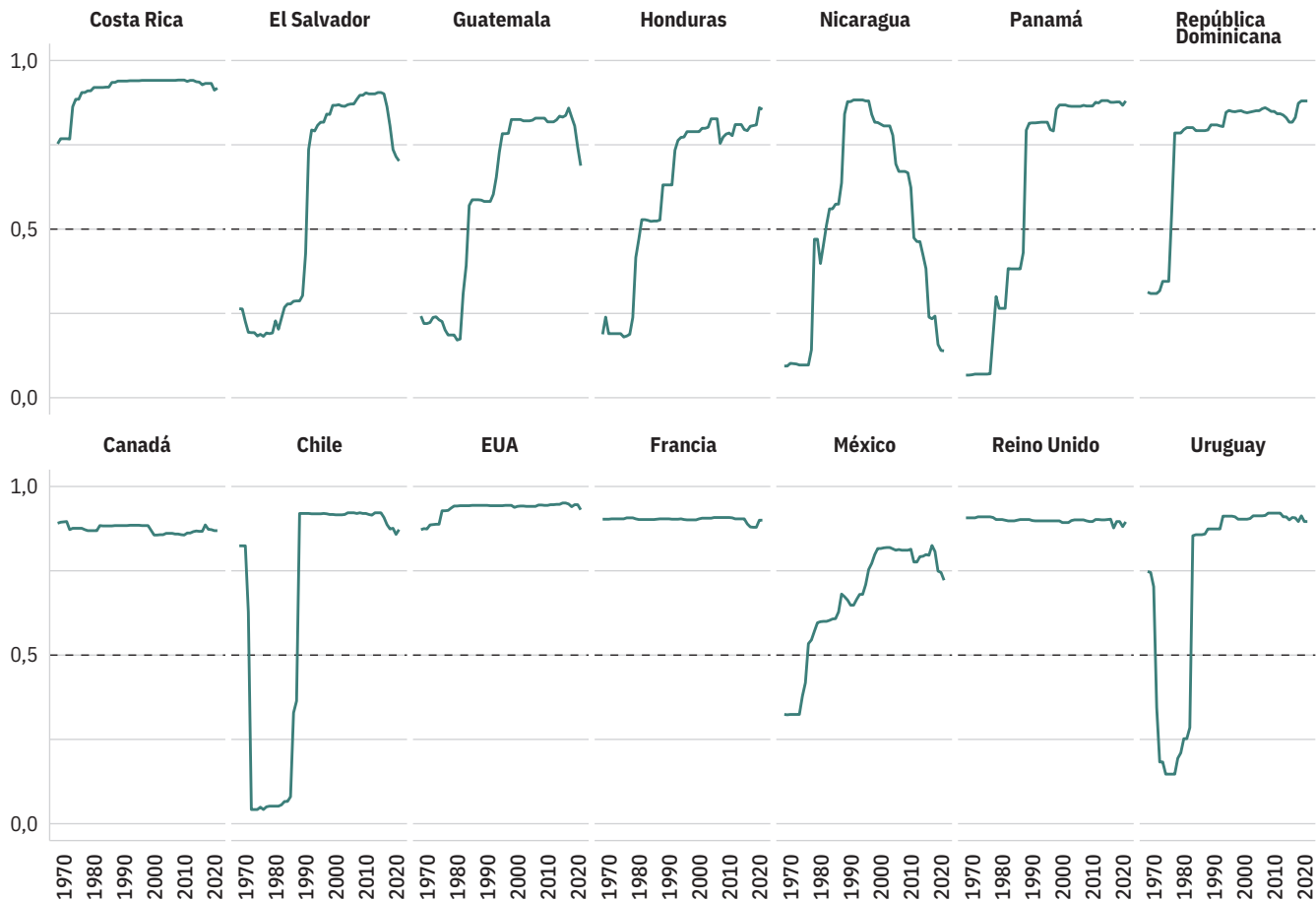
la competencia electoral son las crecientes restricciones a la organización política y la libertad de expresión que han tenido varios países durante los últimos años. Tres países muestran disminuciones del indicador de libertad de asociación, que abarca las posibilidades o limitaciones de la ciudadanía para organizarse en partidos políticos, organizaciones de sociedad civil (OSC) y sindicatos (gráfico 1.47). Los dos casos más preocupantes son Nicaragua y El Salvador. A pesar de que las constituciones de estos países protegen explícitamente el

derecho a la libre de asociación, en la práctica, la élite política ha implementado diversas estrategias para obstaculizar y desarticular a la sociedad civil. El régimen Ortega Murillo ha liderado las detenciones y anulación de la personería jurídica como estrategias para alcanzar ese propósito y perpetuarse en el poder. Entre el año 2018 y el 2021, la Asamblea Nacional prohibió poco más de 34 ONG (Tristán, 2021). De acuerdo con Human Rights Watch, desde el 2018, el Gobierno nicaragüense ha cancelado la personería jurídica y el registro de más

de 950 organizaciones (Human Rights Watch, 2022). El recuento periodístico de la BBC en agosto del 2024 contabiliza más de 5.000 ONG clausuradas (BBC Mundo, 2024). En varios de los países de la región han empeorado las condiciones para las personas defensoras de derechos humanos y las ONG por la persecución judicial y procesos de criminalización (OMCT, 2024). Reporteros sin Fronteras (2024) manifiesta preocupaciones sobre las debilidades de los Estados de derecho para asegurar un entorno propicio para un

Gráfico 1.47

Región CARD y países seleccionados
Evolución del índice de libertad de asociación^{a/} según país



a/ Evalúa las posibilidades o limitaciones de la ciudadanía para organizarse en partidos políticos, organizaciones de sociedad civil (OSC) y sindicatos. Cuanto más cercano a uno es el valor, existe mayor libertad.

Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

periodismo plural, seguro e independiente; una condición indispensable para la democracia. El índice de libertad de prensa que evalúa dicha organización mide el contexto para el ejercicio periodístico según siete indicadores: pluralismo, independencia de los medios, entorno y autocensura, marco legal, transparencia, calidad de la infraestructura y agresiones. En términos generales, este índice muestra retrocesos en todos los países durante el período 2019-2024, aunque con niveles y magnitudes muy distintas, excepto en la República

Dominicana, en donde se registra una situación estable (gráfico 1.48).

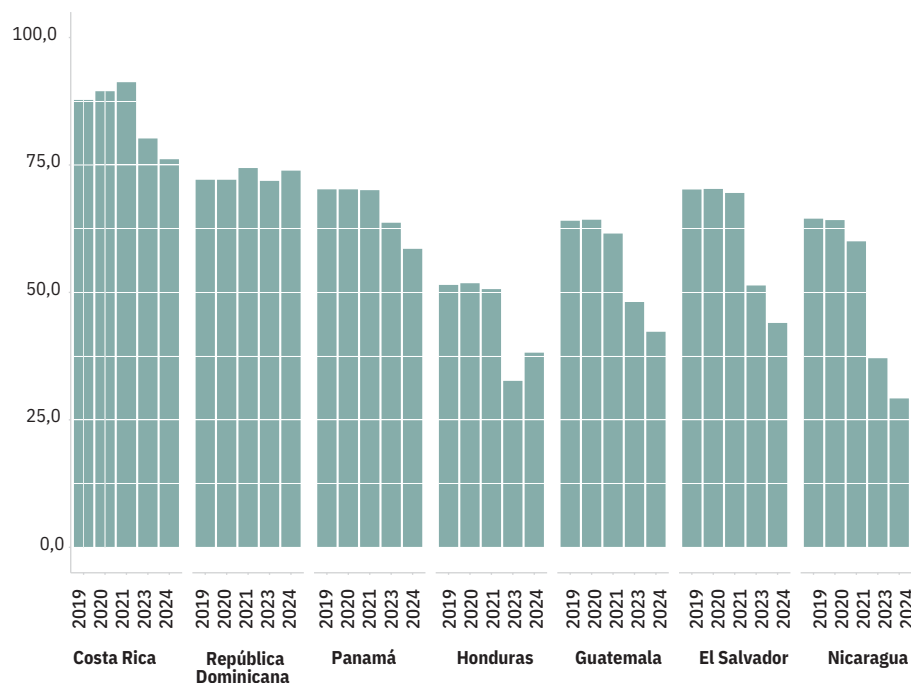
Las restricciones a la libertad de prensa en la región CARD provienen de cuatro fuentes principales, presentes en mayor o menor medida en todos los países (diagrama 1.2). La primera radica en marcos legales de protección defectuosos y débiles, desde una perspectiva democrática, lo que contribuye a la criminalización de los comunicadores y a la falta de regulaciones de protección patrimonial y física. Un ejemplo destacado es el caso del fundador de El Periódico,

Rubén Zamora, quien fue sentenciado a seis años de prisión tras un proceso judicial poco transparente y con irregularidades (Amerise, 2023). Además, varios códigos penales contienen artículos contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos y representan una amenaza a la libertad de expresión (RSF, 2024; Rodríguez, 2024).

Una segunda fuente de limitaciones a la prensa son las violaciones a los derechos humanos de las personas comunicadoras, que se traduce en intimidación, agresiones patrimoniales y físicas,

Gráfico 1.48

Región CARD

Evolución del índice de libertad de prensa^{a/} según país
(porcentaje)

a/ Evalúa el contexto para el ejercicio periodístico según siete indicadores: pluralismo, independencia de los medios, entorno y autocensura, marco legal, transparencia, calidad de la infraestructura y agresiones. Valores cercanos a cien significan una mejor situación.

Fuente: Cortés, 2024 con datos de Reporteros sin fronteras, varios años.

amenazas de muerte e incluso asesinatos. Según reporta la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en el 2021 ocurrieron aproximadamente 135 casos de agresiones a periodistas, mientras que el 2022 cerró con 117 (Álvarez, 2023). Para el 2023, esta organización contabilizó un total de 20 periodistas en el exilio (García, 2024). Mientras que en Honduras, el Comité por la Libre Expresión ha denunciado que en los últimos 20 años se han dado al menos 97 asesinatos de periodistas en el cumplimiento de su trabajo.

En tercer lugar, el deterioro de la libertad de expresión y de prensa se debe a los continuados ataques del Poder Ejecutivo a los medios de comunicación críticos de su gestión. Dos países ejemplifican esta situación: Costa Rica y El Salvador. En el caso costarricense, desde el 2022 el Gobierno ha sometido a los medios de

comunicación y a sus periodistas a ataques verbales intimidatorios. También ha llegado a ataques patrimoniales. Por ejemplo, en octubre del 2022, la Sala Constitucional costarricense anuló un orden sanitario del Gobierno que impedía el uso del “Parque Viva”, un terreno destinado a eventos y que representa una de las principales actividades económicas del medio *La Nación* (Madrigal, 2022). En el caso de El Salvador, la estrategia del presidente Bukele consiste en acusar a los medios críticos de su gestión como “enemigos” del pueblo y afines a las élites tradicionales. El 25 de septiembre del 2020, mediante cadena nacional, la administración Bukele anunció de forma pública la investigación al periódico digital *El Faro* por supuesto lavado de dinero y evasión de impuestos (Wallace, 2020). La diferencia entre los dos países es que, en Costa Rica la fortaleza de las

instituciones del Estado de derecho ha protegido tanto a medios como a periodistas de los ataques del Ejecutivo.

Finalmente, en una línea similar, la polarización política y partidaria dificulta el trabajo independiente de los medios de comunicación. En Belice, el Gobierno ha acusado a los medios de comunicación de “sensacionalismo” y las personas periodistas ocasionalmente enfrentan intimidaciones o acosos. En este país, las fuentes de financiamiento provienen, en gran medida, de la publicidad estatal, lo cual ha creado un escenario de alta polarización en donde los medios han debido mostrar su lealtad a uno de los dos partidos políticos dominantes (RSF, 2024).

Concentración del poder presidencial y corrupción limitan el ejercicio democrático del poder político

La presencia de poderes del Estado independientes, con capacidad para poner en marcha un sistema de controles recíprocos, instancias judiciales y legislativas que establecen restricciones y previenen el abuso de poder, es una característica cada vez más lejana en la mayoría de los Estados en los países de Centroamérica y la República Dominicana. La concentración de poder en el Ejecutivo, específicamente en la figura presidencial, debilita el sistema de pesos y contrapesos, también conocido como *checks and balances* en inglés, un principio fundamental en un sistema democrático.

Según este principio, el ejercicio del gobierno debe basarse en la protección de los derechos de la ciudadanía, sometido a la rendición de cuentas y a los controles ciudadanos. Esta sección se enfoca en los poderes judiciales y concluye que cada vez tienen más reducida la capacidad para mantener a los demás poderes dentro de las reglas democráticas, tanto por falta de independencia como de recursos materiales para cumplir con sus competencias.

El debilitamiento de la administración de la justicia en los países de la región ha coincidido con el fortalecimiento del poder militar mediante incrementos sistemáticos de la asignación de recursos a los ejércitos, pese a no tener ningún conflicto armado abierto. En el último quin-

Diagrama 1.2
Región CARD
Fuentes de amenaza a la libertad de prensa



Fuente: Elaboración propia con base en Cortés, 2025.

queno, las fuerzas armadas han asumido un rol activo en la protección de los poderes ejecutivos con rasgos autoritarios, lo que se manifiesta de forma más clara en la aplicación de regímenes de excepción y la contención de protestas sociales, en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Continuados ataques a poderes judiciales erosionan los sistemas de pesos y contrapesos

El *Sexto Informe Estado de la Región* señaló el deterioro de la independencia de los poderes estatales y las instituciones de control de la función pública, debido al dominio y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo durante el período 2015-2019 (PEN, 2021). Este signo de retroceso democrático continuó agudizándose durante los últimos años.

Los Estados de los países CARD carecen de sistemas fuertes de pesos y contrapesos según el índice de pesos y contrapesos de V-Dem (gráfico 1.49)¹¹. Con excepción de Costa Rica, el resto de los países enfrenta debilidades sistémicas para asegurar un balance de control en

sus instituciones políticas. Destaca el caso de Panamá, país que muestra una tendencia positiva en la serie de tiempo analizada.

De acuerdo con el índice de justicia criminal del Rule of Law Index 2024 (WJP, 2024), que evalúa aspectos como la efectividad de la investigación criminal, la imparcialidad del sistema judicial y el cumplimiento del debido proceso de las personas acusadas, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador se encuentran en las últimas posiciones (126, 132, 137 y 140, respectivamente) de los 142 países evaluados. Únicamente Costa Rica se ubica entre los 50 países mejor evaluados, mientras que la República Dominicana y Panamá obtuvieron calificaciones intermedias (lugar 93 y 105 en el ranking).

El ataque a la independencia del Poder Judicial constituye una de las principales causas de la regresión democrática en la región. Sin un órgano judicial autónomo se elimina la división de poderes y con ella la garantía para proteger los derechos y el acceso a una justicia imparcial.

Además, constituye una violación a

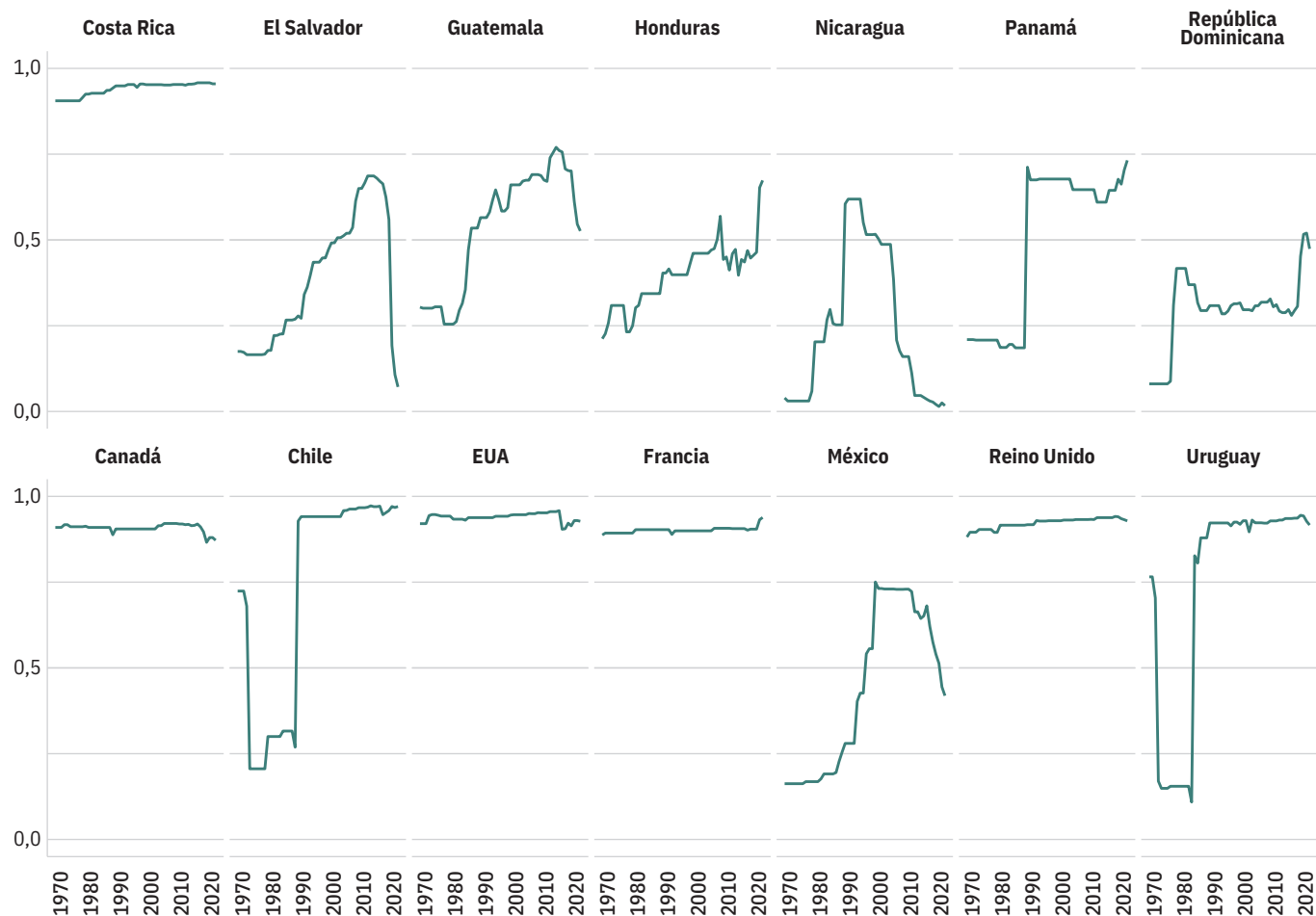
sendos instrumentos de derecho internacional; por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos que salvaguarda el principio de independencia judicial (artículo 8.1).

Organizaciones especializadas a nivel internacional han documentado el deterioro de la independencia judicial en la región (Cejil, 2021; Fecajud, 2024; Satterthwaite, 2023). Los organismos judiciales de El Salvador y Nicaragua son los que presentan una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en sus decisiones. Las cortes supremas de estos países han sido nombradas por congresos completamente controlados por los presidentes de la República.

En El Salvador, el control del Poder Judicial fue determinante para levantar la restricción constitucional a la reelección presidencial y dio cabida a un segundo mandato consecutivo del presidente Bukele (Fundación para el Debido Proceso, 2024). En Nicaragua, el control del órgano judicial por parte del Ejecutivo ya estaba presente, pero se profundizó en el 2023 con la destitución irregular de la presidenta de la Corte

Gráfico 1.49

Región CARD y países seleccionados

Evolución del índice de pesos y contrapesos^{a/} según país

a/ Es el promedio entre los índices de limitaciones al Poder Ejecutivo desde el Legislativo y limitaciones al Ejecutivo desde el Poder Judicial. Valores cercanos a uno significan una mejor situación.

Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

Suprema de Justicia. Este evento coincidió con la eliminación de atribuciones del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional, que transfirió varios de sus recursos y funciones a la Procuraduría General del Estado controlada por el Ejecutivo (Divergentes, 2023; Paz, 2023). Recientemente, la Asamblea Nacional tramitó una reforma constitucional comprensiva en la cual se establece que el Poder Ejecutivo coordina los otros poderes de la República, denominándolos “órganos”, lo cual denota la liquidación legal de cualquier sistema democrático de pesos y contrapesos.

Guatemala transitó por un período de

marcada politización de su sistema judicial durante la administración gubernamental del presidente Giammattei. El Ministerio Público y, en particular, la Fiscalía General han sido claves en la persecución de medios de comunicación y criminalización de figuras políticas de oposición, así como de acciones desestabilizadoras del proceso electoral.

En Costa Rica, se han registrado preocupantes ataques al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República por parte del Poder Ejecutivo, así como amenazas y atentados de grupos criminales organizados contra personas funcionarias e instalaciones judiciales. Estos

hechos han generado reiteradas reacciones de la Relatoría de Naciones Unidas para la independencia judicial (García, 2022 y Satterthwaite, 2023). Ejercicios de veeduría ciudadana en el nombramiento de magistraturas han levantado alertas sobre la influencia de criterios político-partidistas (IIDH, 2018; Solís, 2024).

Honduras, en cambio, ha mostrado recuperación en el corto plazo en el ámbito de la independencia judicial. En el 2023 se produjo la elección de una nueva Corte Suprema utilizando una nueva legislación con estándares de idoneidad, transparencia y participación

(Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora). Sin embargo, actualmente enfrenta un déficit crítico en su sistema judicial, con un solo puesto de juez por cada 12.485 habitantes, lo cual compromete la eficiencia y acceso a la justicia en el país (Flores, 2024). A esta problemática se suman las denuncias de corrupción de personas funcionarias judiciales de alto perfil (Irías, 2024) y la crítica a los cambios o rotaciones de jueces en las salas del Poder Judicial hondureño (El Heraldo, 2024).

Asegurar la idoneidad e independencia de las personas funcionarias, especialmente las magistraturas, es uno de los factores más relevantes para lograr la autonomía de los poderes judiciales. De acuerdo con análisis previos, prácticamente todos los países de la región enfrentan desafíos en términos de asegurar una carrera judicial consistente en el tiempo y basada en méritos (PEN, 2021 y Fecajud, 2024).

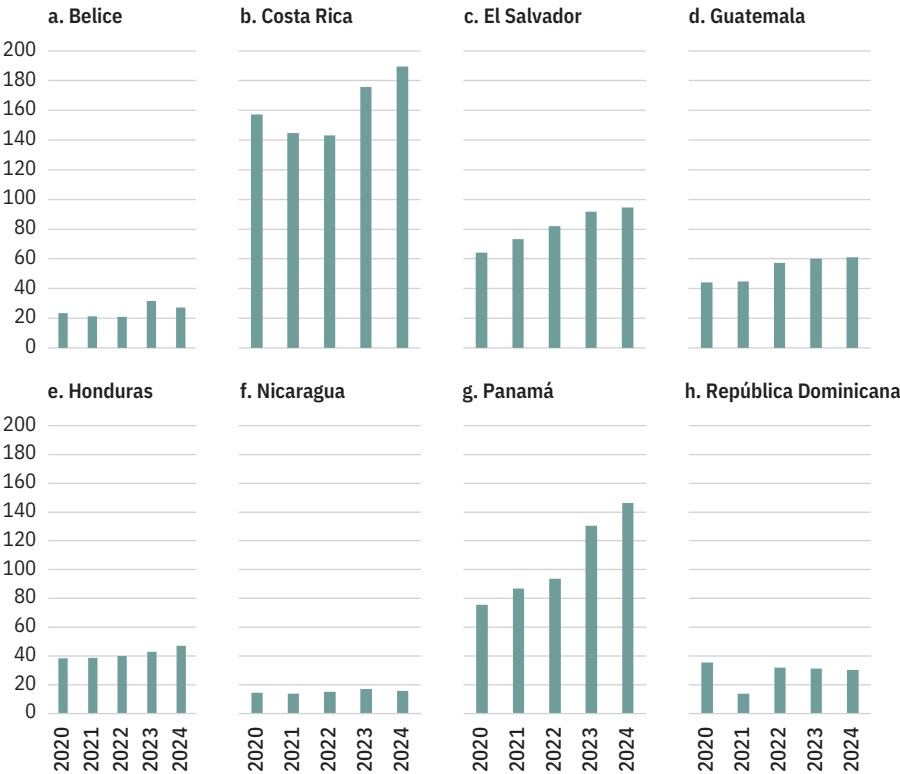
En la etapa de nombramiento de altas cortes que corresponde a los poderes legislativos, se ha observado esfuerzos de los partidos políticos para que los magistrados y las magistradas sean afines a uno u otro partido (Chacón, 2022 y Murillo, 2023).

A la limitada independencia de los poderes judiciales se suma la baja asignación de recursos para resolver los asuntos que le son sometidos a consideración. Esto dificulta cumplir con el objetivo de un Estado democrático de derecho de brindar justicia pronta, cumplida e igual para todas las personas.

Los datos más recientes revelan que los leves aumentos registrados no han cerrado una creciente brecha en el financiamiento de la justicia entre Costa Rica (190 dólares por habitante al año) y el resto de la región, cuyos niveles no superan los 95 dólares por habitante al año, a excepción de Panamá que destina 146 dólares (gráfico 1.50). De acuerdo con los datos de 2023, en Belice, República Dominicana y Honduras el gasto judicial por habitante es menor al gasto militar por persona como se verá en el siguiente acápite (gráfico 1.51). Nicaragua destaca por su bajo financiamiento del Poder Judicial: 16 dólares al año en el 2024.

Gráfico 1.50

Región CARD
Evolución del gasto judicial *per cápita* según país
(dólares)



Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas de Centroamérica y República Dominicana.

Continúa el fortalecimiento de las fuerzas armadas

En un contexto regional donde los sistemas de pesos y contrapesos al Poder Ejecutivo son débiles, se observa una tendencia al fortalecimiento de las fuerzas armadas y su planilla, la cual ha tenido un creciente involucramiento en labores de mantenimiento del orden público interno, como se ha descrito en ediciones previas de este Informe (PEN, 2016 y 2021). En ausencia de amenazas a la seguridad nacional provenientes de otros Estados de la región o fuera de ella, este fortalecimiento se convierte en un riesgo para el régimen de libertades y derechos, ya que pueden ser desplegadas en beneficio de los Ejecutivos e incluso en detrimento de las libertades y derechos de la población.

El gasto militar regional casi se duplicó de 1.129 a 2.022 millones de dólares en el período 2010-2022. Una tercera parte (33,2%) del total de recursos asignados en el año 2022 correspondió a la República Dominicana, seguido de Honduras, Guatemala y El Salvador, en proporciones que oscilan entre el 19% y el 22% cada uno.

En ausencia de guerra, ¿cuáles factores justifican el crecimiento del gasto militar en la región? De acuerdo con Walter (2024), esto se debe al creciente involucramiento de las fuerzas armadas en actividades civiles, principalmente la lucha contra la violencia de pandillas y el crimen organizado ya sea bajo la autoridad ejecutiva o en Estados de excepción (El Salvador y Honduras).

Como parte de estas funciones

también han desplegado acciones de patrullaje junto con los Estados Unidos para la interceptación de drogas y el control de flujos migratorios de personas indocumentadas. Los ejércitos también han tenido un rol importante como la primera línea de defensa ante desastres, especialmente terremotos y huracanes, fenómenos altamente frecuentes en Centroamérica, una de las regiones más vulnerables del mundo a este tipo de fenómenos.

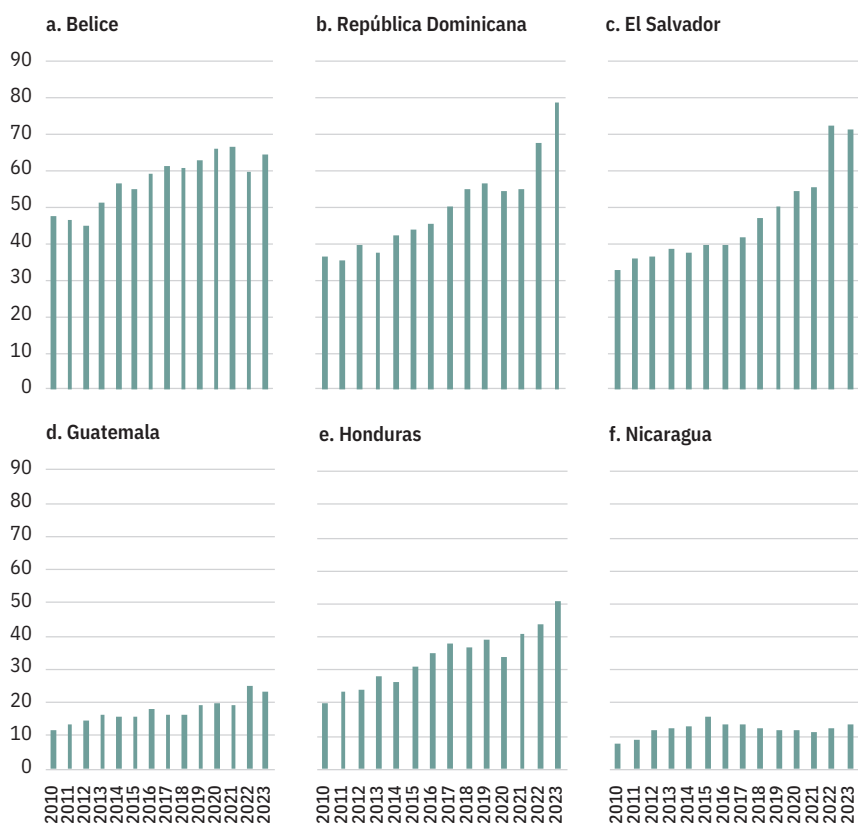
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
**LOS EJÉRCITOS Y LA DEMOCRACIA
EN LA REGIÓN**

Véase Knut, 2024
en www.estadonacion.or.cr

Disponer de mayor presupuesto les ha permitido a las fuerzas armadas aumentar su dotación de recursos humanos y equipamiento. En la región CARD, el personal militar pasó de 104.630 a 124.500 personas en el período 2015-2022. La República Dominicana concentra casi la mitad de esos recursos humanos (45%), seguido por El Salvador (20%). La creciente asignación de presupuesto en estos países es coherente con la militarización de la frontera con Haití, en el primer caso, y con la denominada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, lo cual ha implicado un involucramiento creciente de efectivos.

Cuatro de los seis países con ejército en la región (la República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala) duplicaron el gasto militar por habitante durante el período 2010-2023 (gráfico 1.51). En el 2023, la República Dominicana fue el país con mayor gasto (USD 78,8), seguido por El Salvador (USD 71,1). Sin embargo, con una perspectiva de mediano plazo, Honduras fue el país con el mayor incremento en el gasto militar (153%), al pasar de USD 20 en el 2010 a USD 51 por habitante en el 2023.

Gráfico 1.51
Región CARD
Evolución del gasto militar *per cápita*^{a/} según país
(dólares)



a/Los datos excluyen a Costa Rica y Panamá por no destinar presupuesto a gasto militar.
Fuente: Elaboración propia a partir de Walter, 2024; con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

**Escándalos y denuncias de
corrupción pública de alto perfil
con debilitamiento de controles**

La corrupción no solo debilita a la democracia sino también al desarrollo humano sostenible, ya que desvía recursos públicos hacia intereses particulares. Esto deteriora aún más los servicios, aumenta la inestabilidad política y la crisis de confianza en el sistema de gobierno democrático y sus instituciones. Lamentablemente en América Latina y el Caribe hay escasa mejoría según el reporte sobre el estado de la democracia (Chacón, 2022).

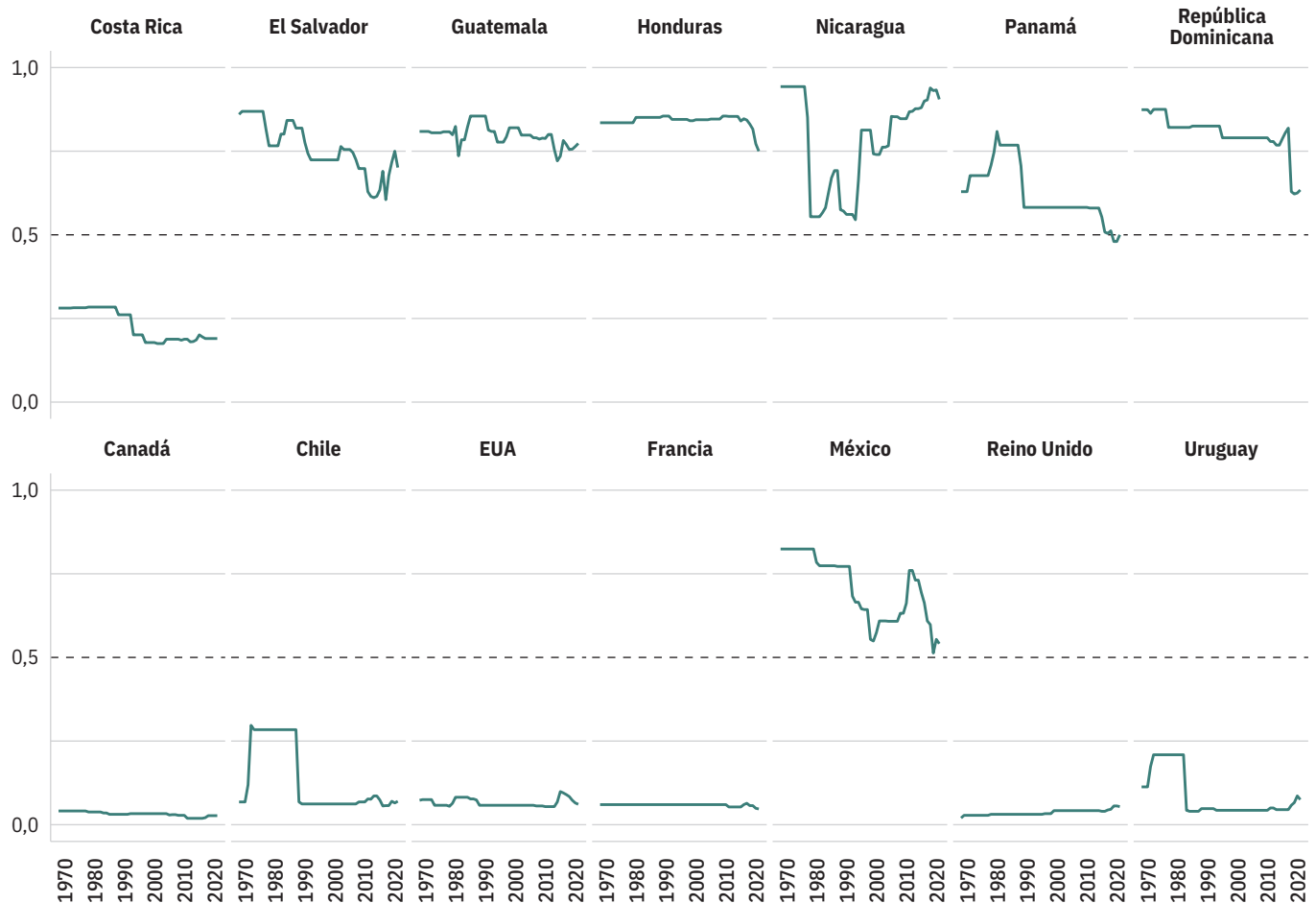
Una manera de aproximar la materialización (o no) de este riesgo es mediante el índice que evalúa este tema en la base de datos de V-Dem. En términos generales,

los países con menor desarrollo de su sistema institucional de pesos y contrapesos también enfrentan mayores niveles de corrupción (gráfico 1.52). Del mismo modo, los casos en los cuales se ha visto mayor calidad de las elecciones, libertades políticas y, en general, un ambiente más favorable para la democracia, existen menores niveles de corrupción¹².

El análisis de largo plazo de este indicador sugiere persistencias en la corrupción política. Los indicadores actuales en varios de los países de la región CARD exhiben niveles similares a los de la década de 1970. Con excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de los países centroamericanos y la República Dominicana reportan un alto nivel de corrupción en este período. Las diferencias se hacen

Gráfico 1.52

Región CARD y países seleccionados

Evolución del índice de corrupción política^{a/} según país

a/ El índice de corrupción incluye medidas de seis tipos distintos de corrupción que cubren diferentes áreas y niveles del ámbito político, distinguiendo entre corrupción ejecutiva, legislativa y judicial. Dentro del ámbito ejecutivo, las medidas también distinguen entre la corrupción relacionada principalmente con el soborno y la corrupción debida a la malversación (McMann et al., 2016). Valores cercanos a cero significan una mejor situación.

Fuente: Cortés, 2025 a partir de Coppedge et al., 2024 con datos de V-Dem.

más notorias al contrastar los resultados con naciones seleccionadas fuera de la región.

En los años recientes, todos los países han enfrentado escándalos de corrupción que involucran a personas funcionarias en altos cargos estatales y pérdidas millonarias. Por ejemplo, el Megacaso de Odebrecht afectó a Panamá, Guatemala y la República Dominicana. Durante la pandemia del covid-19 se produjeron numerosas alertas de compras irregulares en el marco de los decretos de emergencia en casi todos los países (Vrushy y Martínez (2021). Cuatro naciones han

condenado a expresidentes por corrupción, y presidencias en ejercicio también enfrentan denuncias. Las fiscalías de El Salvador, Nicaragua y Guatemala han sido denunciadas por su falta de independencia y deficiencias en el combate de la corrupción.

La República Dominicana es el único país de la región que ha presentado avances en esta materia, y los registros más bajos de corrupción en varias décadas. En el 2020 se presentó un Plan Nacional de Combate a la Corrupción y se creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). En

el 2022 iniciaron un proceso de Diálogos Nacionales que propuso decenas de reformas al respecto. Esto también coincidió con logros en independencia judicial y fortalecimiento de la Procuraduría General (Hasbún, 2024).

Malos resultados de bienestar social coinciden con mayor desafección ciudadana con la democracia

El *Estado de la Región* se basa en el concepto de desarrollo humano sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Amartya

Sen (1999, 2009). Según este enfoque, el desarrollo está vinculado estrechamente con la democracia y los derechos humanos (O'Donnell, 2007 y 2010), enfocándose en las condiciones de vida de los seres humanos, en el reconocimiento y la atención a las demandas y aspiraciones de la población. En este sentido, la gestión de la democracia y el sistema político deben orientarse hacia el bien común.

La sección de Panorama Social de este capítulo constató que en varios países de la región (especialmente en Guatemala y Honduras), la pobreza afecta a más de la mitad de los hogares. Además, coincide con niveles de inversión social pública muy bajos que no permiten modificar las condiciones que determinan esa condición, ni elevar la cobertura y calidad de los servicios básicos como la educación y la salud.

Aunque de acuerdo con Martínez y Sánchez Ancochea (2025), una expansión de las políticas sociales puede tener lugar tanto en democracia como bajo autoritarismos, en democracia, la política social suele ser más amplia y transparente, impulsada por elecciones y demandas de los movimientos sociales. En contraste, bajo autoritarismos la política social es más opaca, dirigida a grupos específicos y utilizada como mecanismo de control social.

En el contexto de la insatisfacción crónica de las necesidades de la población, en la región CARD se registró un creciente escepticismo ciudadano hacia la democracia. En el estudio sobre perfiles de apoyo o rechazo a la democracia liberal, amplios contingentes de personas se clasifican como “ambivalentes” o demócratas a medias en la mayoría de los países de la región CARD. Estas personas pueden apoyar la democracia pero tienen bajos niveles de tolerancia y pluralismo, o viceversa (PEN, 2019 y 2025). Esto no significa que el escepticismo necesariamente se traduzca en un apoyo ciudadano al autoritarismo político, pues depende de otras características de cada persona, tales como sus rasgos de personalidad y los prejuicios sociales¹³.

En este acápite se utilizaron las rondas de encuestas de LAPOP de la Universidad de Vanderbilt (Estados

Unidos) para varios años, con el fin de indagar sobre las concepciones y apoyos ciudadanos al ejercicio del poder político. Puntualmente, se analiza el apoyo a la democracia, la justificación a cooptaciones de Estado, el apoyo a un líder autoritario y el apoyo a que el presidente limite los partidos de oposición.

La constatada concentración gradual de poder en el Ejecutivo y la subordinación de facto o de jure de los otros poderes de la República constituye una vía hacia un régimen (semi) autoritario experimentado en América Latina. En el 2021, la encuesta Lapop preguntó: *“Tener un líder fuerte en el gobierno, incluso si no cumple del todo con las reglas para conseguir resultados, ¿usted diría que es muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo como forma de gobierno para nuestro país?”*.

El Salvador es el país de la región CARD¹⁴ con el mayor respaldo a un líder autoritario que resuelva los problemas. La proporción de personas que tienen esta posición es casi el doble que en otros países (gráfico 1.53). Este indicador está asociado, en gran medida, a la popularidad del presidente Nayib Bukele.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PERFILES DE APOYO A LA DEMOCRACIA

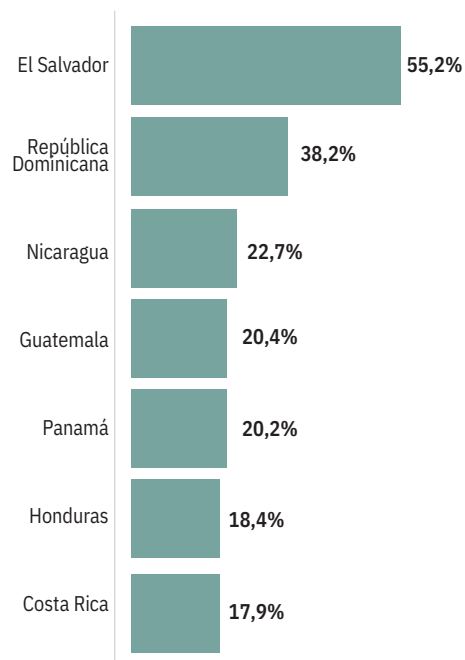
véase el *Informe Estado de la Región* (Volumen II)

www.estadonacion.or.cr

En el otro extremo, se encuentran Honduras y Costa Rica, con los porcentajes más bajos de aprobación a líderes autoritarios, inferiores al 20%. Es importante destacar que la República Dominicana presenta un nivel intermedio, pues se posiciona por debajo de El Salvador, pero claramente por encima del resto de países de la región CARD. En términos generales, a pesar del extendido escepticismo ciudadano, no parece haber un apoyo significativo a un “vaciamiento” gradual de las instituciones democráticas en la región por parte de un líder fuerte.

Gráfico 1.53

Región CARD Apoyo de la población a líderes autoritarios. 2021



Fuente: Cortés, 2025 con datos del Barómetro de las Américas, de Lapop.

Paul (2022) exploró los determinantes del apoyo ciudadano al autoritarismo para el conjunto del hemisferio americano. Factores como el nivel educativo, la percepción de las amenazas económicas y la falta de seguridad ciudadana influyen en el aumento de la probabilidad de las personas de respaldar posiciones autoritarias.

Uno de los rasgos de la autocratización de un sistema político es la imposición de restricciones al derecho de la oposición política para realizar un escrutinio público a las acciones gubernamentales y presentar visiones alternativas de gobierno. Para evaluar el apoyo de la población a la propuesta de que el presidente limite la voz de los partidos políticos de oposición, se utilizó un ítem de Lapop, que en varias rondas de encuestas ha indagado específicamente sobre este tema. El enunciado del ítem es: *“Para el progreso del país es necesario que nuestros presidentes*

limiten la voz y el voto de los partidos de la oposición. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?”. Este indicador emplea una escala del 1 al 7, en la que valores más altos representan un mayor grado de acuerdo con el enunciado.

En todos los países, con excepción de Nicaragua, se ha visto un incremento en este indicador desde las primeras mediciones registradas (gráfico 1.54). Actualmente, los porcentajes más altos de aprobación para que el presidente ejecute acciones que restrinjan a los partidos de oposición se encuentran en El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana, con 51%, 47% y 46%, respectivamente. Los demás países están también en niveles cercanos o superiores al 40% de apoyo ciudadano a la censura a la oposición por parte del presidente de la República. En resumen, vastos sectores de la ciudadanía, poco menores a la mitad del total en la mayoría de los países de la región CARD, están de acuerdo en la reducción de las libertades políticas, ciertamente un indicador muy preocupante.

Crimen organizado: riesgo vital para la democracia e institucionalidad

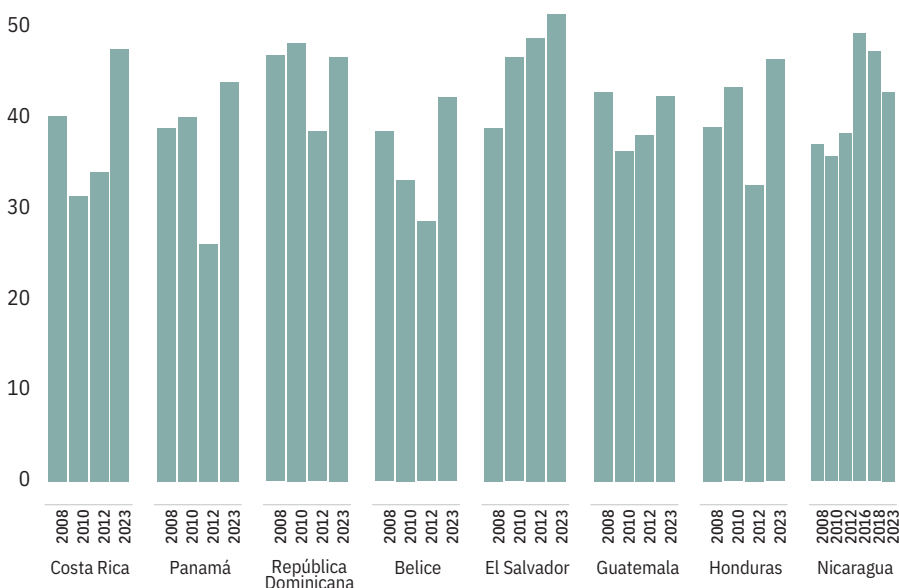
El crimen organizado representa un desafío importante para la seguridad y gobernabilidad democrática en América Latina. La región CARD no es la excepción y todos los países enfrentan esta amenaza de manera intensa. Bajo la categoría de crimen organizado se incluye el narcotráfico y otros delitos con alta presencia en la región, tales como la explotación y tráfico ilegal de bienes (deforestación, minería ilegal y contrabando), la trata de personas, los esquemas de corrupción, la extorsión, los fraudes electrónicos, entre otros.

La creciente actividad criminal da cuenta de un Estado que perdió el control de importantes áreas de la sociedad (territoriales o de sectores específicos, por ejemplo el sistema penitenciario) o, peor aún, que está cooptado por el crimen organizado. En palabras del politólogo Guillermo O'Donnell son “áreas marrones” donde las reglas del juego no son las del Estado de derecho; los actores criminales mandan a su antojo y la sociedad

Gráfico 1.54

Región CARD

Apoyo de la población a que el presidente limite la voz de los partidos políticos de oposición
(porcentaje)



Fuente: Cortés, 2025 con datos del Barómetro de la Américas, de Lapop.

pierde confianza y legitimidad en las instituciones.

Los informes especializados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUCDD, 2024) indican que la mayor parte de la cocaína que consumen los Estados Unidos, Canadá y Europa transita por el corredor geográfico Colombia-Centroamérica y México. La actividad del narcotráfico tiene ramificaciones en otros tipos de delitos de muy alto impacto para la sociedad como el lavado de dinero, el sicariato, las maras y el financiamiento ilícito de la política (De León y Martínez, 2025).

Guatemala y Honduras tienen una variedad de actividades relacionadas con el crimen organizado: producción y tránsito de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero. En un segundo nivel se encuentran Panamá, Costa Rica y la República Dominicana, como centros de reexportación de droga hacia Europa, tráfico de personas y tráfico ilegal de fauna silvestre y mercancías, así como para el lavado de dinero (Studdert

Kennedy, 2019; PEN, 2024; De León y Martínez, 2025).

El narcotráfico afecta también a Nicaragua, pues no solo forma parte de la ruta terrestre en el istmo, sino que en su costa atlántica operan bandas locales ligadas a la exportación ilegal de drogas vía marítima, sobre todo por su cercanía a la isla colombiana de San Andrés (Expediente Abierto, 2021). Así mismo trabajan estructuras que facilitan no solo el lavado de dinero en el país, sino que también han extendido negocios como los cabarés y centros nocturnos (Expediente Abierto, 2021), actividad que también facilita la trata de jóvenes dentro de la región.

Belice es parte de las rutas del tráfico de drogas y migrantes que atraviesan el istmo y van hacia México. El Salvador ha logrado estar de alguna forma más resguardado del tráfico de drogas terrestre y aéreo, pero su costa pacífica se encuentra vulnerable. Sus fuertes flujos migratorios hacia el norte y la presencia de transacciones en criptomonedas lo convierten

en un atractivo para el lavado del dinero proveniente de actividades ilícitas (De León y Martínez, 2025).

Uno de los factores que favorece la operación del crimen organizado y la violencia e implica amenazas para el monopolio de la fuerza en los Estados y la policía, es el fácil acceso, la proliferación y el mal uso de las armas de fuego. De acuerdo con *Small Arms Survey 2018* (última disponible), la posesión de armas en manos de civiles en varios de los países de Centroamérica y la República Dominicana son similares o incluso mayores a las de países como México (12,9) y Colombia (10,1), que han vivido conflictos internos por la disputa y control del territorio desde hace varias décadas. Honduras es el país con más armas por cada 100 habitantes (14,1), seguido de El Salvador y Guatemala (12 y 12,1) y Panamá, Belice y Costa Rica (10 y 10,8). La República Dominicana y Nicaragua son los países con la menor tasa de armas en manos de la población: 7,4 y 5,2, respectivamente.

En la última década, dos países han logrado reducir notablemente el nivel de violencia homicida asociado a la operación del crimen organizado. El caso más notable es el de El Salvador, que pasó de ser el país más violento del mundo en ausencia de guerra civil al menos violento (gráfico 1.55). Un factor clave fue la desarticulación de las maras a partir de 2021, debido a las medidas del gobierno del presidente Bukele, aunque la tendencia declinante de los homicidios venía desde antes. Cabe subrayar que el tipo de crimen organizado predominante en El Salvador, las maras, está ligado a la extorsión y a que el país no esté en la ruta principal del narcotráfico. El segundo caso importante es Honduras, un eslabón clave en la actividad del narcotráfico que, además, experimenta la presencia de las maras. Costa Rica, en cambio, experimenta un fuerte aumento de la violencia homicida asociada al crimen organizado ligado al narcotráfico. En menos de cinco años, se duplicó la tasa de homicidios por 100.000 habitantes (PEN, 2024).

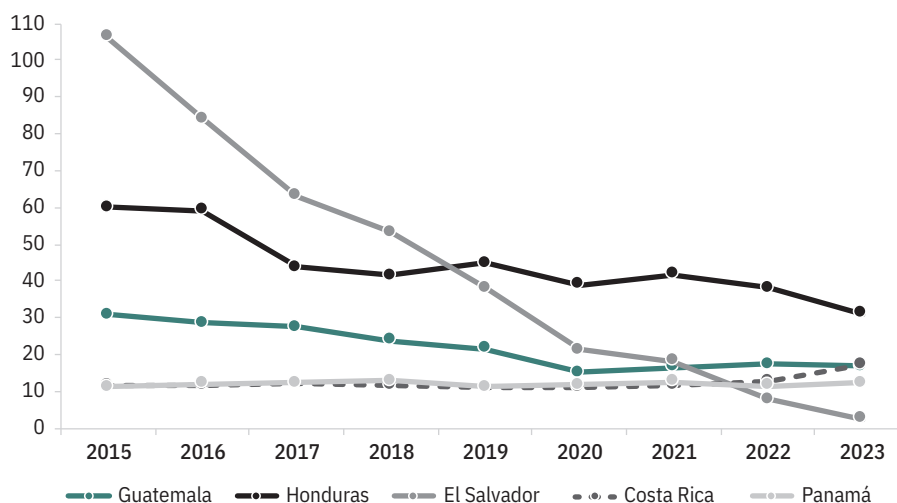
En términos generales, la región CARD, pese a representar menos del 10% de la población del continente americano, concentra el 80% de los

Gráfico 1.55

Región CARD

Evolución en la tasa de homicidios según país

(tasa por 100 mil habitantes)



Fuente: León y Martínez, 2025, con datos de Infosegura, PNUD.

homicidios por armas de fuego en el hemisferio (Infosegura, 2023).

La percepción ciudadana de inseguridad ciudadana en la región CARD sigue siendo muy alta (Lapop, 2024). Esta percepción contribuye al deterioro de la confianza en las instituciones por su incapacidad de resguardar un derecho fundamental como la vida. De hecho, en la región esto ha producido el apoyo a ejecutivos de corte autoritario que promueven las políticas de mano dura, incluso contrarias o en disenso, con las normas constitucionales, sin priorizar otros factores que explican la incidencia de violencia homicida como el desempleo, la desigualdad, la geopolítica, las capacidades policiales, entre otros.

El argumento de las políticas autoritarias represivas para el manejo de la seguridad ciudadana se basa en una falsa dicotomía entre seguridad y democracia. La experiencia internacional indica que es posible mejorar la seguridad en democracia basados en modelos que combinen la prevención social y la represión, con evidencia científica, datos para la toma de decisiones y una alta participación social.

Panorama de integración regional

Desde su primera edición, en 1999, este *Informe* ha dado seguimiento al proceso de integración regional de Centroamérica. Este es el sexto y último piso del edificio del desarrollo humano sostenible al que da seguimiento este Informe. El proceso inició en 1962 con la firma de la Carta de El Salvador que crea la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), suscrita por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Más tarde se amplió con la fundación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) mediante el Protocolo de Tegucigalpa, 29 años después, en diciembre de 1991. A este protocolo se adhiere Belice en el año 2000 y, posteriormente, la República Dominicana en el 2013.

Actualmente, este proceso atraviesa su momento más crítico desde la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) debido a la falta de apoyo político de los países miembros, sus principales socios, las asimetrías a lo interno de la región y la débil

coordinación entre países. Estas limitaciones determinan la capacidad regional de aprovechar sus fortalezas, mitigar los riesgos y amenazas compartidas, posicionar sus intereses en el ámbito internacional y avanzar de forma conjunta para alcanzar objetivos comunes.

En este apartado se brinda un panorama general sobre el proceso de integración regional desde la publicación del *Sexto Informe Estado de la Región* (2021). No es una sistematización detallada del quehacer de la institucionalidad del SICA, sino que busca actualizar, hasta donde la disponibilidad y acceso a información lo permitió, sus principales actividades durante el período 2020-2024. El análisis parte de que la integración es el entramado de políticas, estrategias y actividades cuyo fin consiste en enlazar a las sociedades mediante la creación de un espacio económico, social y político regido por un marco normativo e institucional común, el cual establece reglas y modos de operación específicos y estandarizados (Proyecto Estado de la Región, 1999).

En esta ocasión, se ha incluido una sección especial sobre el comportamiento de los países de la región CARD en la Asamblea General de las Naciones Unidas y su interacción con los principales países y regiones de la geopolítica mundial. Además, esta sección permite analizar hasta qué punto el proceso integracionista contribuye o no a la creación de un bloque regional que promueva los intereses comunes de estas naciones.

Capacidad del SICA para promover la integración regional cae al punto más bajo desde su creación

En el período 2021-2024, se presentaron tres factores que redujeron significativamente la capacidad del SICA para promover la integración regional. En primer lugar, una fuerte caída en la actividad de las instancias de conducción política del sistema de integración; en segundo lugar, la prolongada acefalía de la Secretaría General del SICA y, en tercero, se observaron retrocesos en la transparencia y rendición de cuentas. Esta triada refleja una nueva pérdida

Cuadro 1.8

Región CARD
Cantidad de Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. 2000-2023^{a/}

Período	2000-2010	2011-2020	2021-2023
Cantidad de reuniones	44,0	22,0	3,0
Años de período	11,0	10,0	4,0
Promedio anual	4,0	2,2	0,8

a/ Se excluyen de este número las cumbres de jefes de Estado y Gobierno celebradas con ocasión de la visita de otras autoridades.

Fuente: Johanning et al., 2025 con datos de PEN, 2021 y SICA, 2024a.

de prioridad política de la integración regional para los gobiernos, tendencia sobre la que llamó la atención el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021) y que se agravó durante el período en análisis.

Los factores indicados, que se agudizaron durante ese período, se unieron a dos factores de debilidad estructural: el bajo aporte financiero de los Estados miembros al funcionamiento de las instituciones del SICA y las asimetrías en la participación de los países en las instituciones de la integración regional, que debilitan la capacidad del sistema para formular y ejecutar políticas para el conjunto de la región.

Se acentuó el vacío en la conducción política del proceso de integración regional

Desde la conformación del SICA, en 1991, se instituyó la Reunión de Presidentes como su órgano supremo y, a partir de ese momento, se reúnen en cumbres ordinarias y extraordinarias para definir las prioridades y el rumbo del proceso de integración regional por medio de la aprobación e implementación de los acuerdos, protocolos y demás instrumentos comunes para el funcionamiento del sistema de integración.

Conviene señalar que debe existir coherencia entre el derecho comunitario vigente (tratados, protocolos, etc.), las agendas de los Estados miembros expresadas en los mandatos que emanan de las Reuniones de Presidentes, la agenda que

establece cada Presidencia Pro Tempore (PPT)¹⁵ que rota cada seis meses de un país a otro, y los planes estratégicos o agendas de trabajo sectoriales y de cada institución del SICA. Es parte del rol de la Secretaría General (SG-SICA) garantizar esta coherencia.

La reducción de la cantidad de cumbres presidenciales, de cuatro anuales en el período 2000-2010 a menos de una en los últimos años¹⁶, denota un bajo interés de los Estados, principales socios del proceso de integración, en generar espacios de encuentro y diálogo político entre las autoridades de mayor jerarquía del SICA y las de más alto nivel de los países (cuadro 1.8). Es importante recordar que, de acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, las presidencias se reunirán con una periodicidad de dos sesiones ordinarias anuales y las sesiones extraordinarias que se estimen convenientes.

En los últimos años, se ha observado una disminución en la asistencia de los mandatarios a los encuentros, que de por sí son cada vez menos frecuentes. Esta tendencia ya había sido señalada en ediciones anteriores del *Informe Estado de la Región* (PEN, 2016 y 2021). En su lugar, ha prevalecido la asistencia de vicepresidentes o cancilleres de los Estados miembros, y de personas con cargo de ministerio o representantes presidenciales (cuadro 1.9). El 2020, durante la pandemia, fue el último año en que la mayoría de las personas asistentes a las reuniones fueron mandatarios.

Cuadro 1.9

Región CARD
Cantidad de participantes en las reuniones ordinarias y extraordinarias del SICA, según cargo. 2020-2023

Año	2020	2021	2022	2023
Jefes de Estado	6	3	7	2
Vicepresidencias o vice primer ministros	1	1	2	1
Representante	0	4	7	5
Total de asistentes	7	8	16	8
Porcentaje de jefes	85,7	37,5	43,8	25,0

Fuente: Johanning et al., 2025 con datos de las Declaraciones de las reuniones de jefes de Estado y de gobierno del SICA.

La secretaría general del SICA estuvo mayormente acéfala entre el 2021 y el 2024

Durante la mayor parte del período 2021-2024, la Secretaría General del SICA estuvo acéfala. En 27 de los 48 meses, de enero del 2021 a diciembre del 2024, el puesto estuvo desocupado (56% del total del tiempo)¹⁷.

Las dificultades de los Estados miembros para elegir a una persona como titular de la Secretaría General del SICA y, una vez nombrada, que desempeñe su cargo, son resultado, principalmente de dos factores. Por un lado, los conflictos internos en Nicaragua y su expresión política en las dinámicas regionales; por otro, de la no aceptación (de los demás Estados miembros) de las ternas de personas candidatas que propuso Nicaragua. Esta acefalía ha generado un amplio y profundo impase en la conducción de la institucionalidad del SICA que, a la fecha de la edición de este *Informe*, no había sido resuelto.

Cabe mencionar que en estas condiciones ha sido posible continuar con el funcionamiento operativo de la SG-SICA gracias a que, desde el 2011, la Dirección Ejecutiva apoya la coordinación técnica, administrativa y financiera de la SG-SICA y puede asumir la dirección de la Secretaría en ausencia de la persona que funge como secretario general¹⁸. No obstante, su rol en la conducción político-estratégica se concibió

de apoyo y como un recurso temporal y excepcional, no prolongado en el tiempo, como ha sucedido últimamente, asunto sobre el que Nicaragua llamó la atención en noviembre del 2024¹⁹.

En los años 2013 y 2017, las personas jefas de Estado y de Gobierno acordaron aplicar un sistema de rotación para elegir el cargo de secretario general del SICA mediante un orden secuencial en el derecho de los países para proponer una terna de candidaturas a ese puesto. A Nicaragua le correspondía el turno de elegir para el período 2021-2025.

En junio del 2021 venció el período del expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo Arévalo como secretario general. El intento de prorrogar su mandato, respaldado por Nicaragua, no fue aceptado por los demás Estados miembros. Se abrió un período de intensas negociaciones durante las cuales las ternas que presentó Nicaragua no fueron aceptadas por la mayoría de los países. Finalmente, en agosto del 2022, luego de 14 meses de acefalía, la Reunión de Presidentes eligió a Werner Vargas, diplomático nicaragüense, quién había sido director ejecutivo durante la gestión de Victoria Marina Velásquez de Avilés (2014-2017).

La gestión de Vargas duró quince meses. Dimitió de manera irregular el 14 de noviembre del 2023: su carta de renuncia, que debió haber sido presentada ante los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, fue

dirigida al presidente de Nicaragua, sin mencionar las razones de su salida, y la comunicación formal la hizo la Cancillería de Nicaragua al SICA. El 21 de junio del 2024, ocho meses después, fue cuando se subsanó esta irregularidad mediante una comunicación formal a la Cumbre de Presidentes²⁰. Desde entonces, los países no han llegado a un acuerdo sobre su sucesor, pese a varios intentos de Nicaragua de presentar una nueva persona candidata.

Menor disponibilidad de información reduce la transparencia del sistema a mínimos

En el *Sexto Informe Estado de la Región (2021)*, se reportaron avances en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Sin embargo, en el período 2021-2024 hubo retrocesos importantes. Además de la falta de información básica sobre presupuesto y recursos humanos, no fue posible conocer el estado actual del pago de cuotas de los países.

Hay desactualización o problemas de funcionamiento en los sitios web de varios órganos e instituciones regionales. Ciertamente, algunos órganos e instituciones regionales como Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) y la Comisión Regional de Interconexión Electrónica (CRIE) tienen sitios web actualizados, con información detallada y de, relativamente, fácil acceso. No obstante, los portales de otras como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) estaban desactualizados o inactivos durante el período en que se realizó la recolección, sistematización y análisis de la información (de mayo a octubre del 2024). Esta situación la confirmó el personal de esas instituciones cuando se logró establecer contacto directo con ellas (Johanning et al., 2025).

Existe un fuerte retraso en la publicación de La Gaceta Digital del SICA.

En sus ediciones del año 2020, se divulgó información de las instituciones con fecha del 2018 y el 2019. Asimismo, se identificó un subregistro en la publicación de documentos en las gacetas digitales del SICA revisadas para este *Informe* (de la n° 46 a la n° 76), tal es el caso de algunas resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin) que estaban en la página web de la Sieca, pero no en La Gaceta Digital del SICA (Johanning et al., 2025).

Uno de los principales retrocesos es la desactualización del Sistema de la Cooperación Regional (Sicor), que contiene información sobre convenios suscritos hasta el año 2019. Además, el Sicor no muestra datos uniformes para todos los proyectos de cooperación. Mientras algunos proyectos tienen datos específicos sobre presupuesto, financiamiento, socio cooperante, países beneficiarios, período de vigencia, instancias ejecutoras, objetivos, visibilidad, sector y pilar de integración, otros proyectos presentan vacíos en varias de esas celdas. Asegurar la continuidad y calidad de la información de sistemas como este debería ser prioritario para la institucionalidad regional y los países socios, también para los cooperantes de cara a la visibilización de sus aportes al proceso (Johanning et al., 2025).

De los proyectos consultados en este sistema, solo unos pocos tenían una vigencia posterior al año 2021. Además, no fue posible obtener informes de seguimiento o evaluación de los proyectos de cooperación regionales, y el último ejercicio de rendición de cuentas de la cooperación regional por parte del SICA data del 2018, aunque su publicación se realizó en la página web del SICA el 29 de enero del 2020. El Informe del VI Ejercicio de Rendición de Cuentas de la Cooperación Regional del SICA al momento de su publicación presentaba dos años de desactualización (Johanning et al., 2025).

Finalmente, también hay retrasos en la realización de las auditorías. Durante el período 2020-2024 el Consejo de

Cuadro 1.10

Región CARD
Auditorías presentadas por CFR-SICA^{a/} entre 2020-2023

Estado de la auditoría	2020	2021	2022	2023
Auditorías Planificadas	15	16	13	18
Auditorías Finalizadas	7	6	12	9
Auditorías en Borrador	2	3	2	1
Auditorías en Ejecución	Sin información	4	4	7
Hallazgos Reportados	24	31	36	16

a/ Consejo de Fiscalización Regional del Sistema de Integración Centroamericano.
Fuente: Johanning et al., 2024 con datos del SICA.

Fiscalización Regional (CFR-SICA) publicó 34 informes de auditorías financieras y exámenes especiales²¹, los cuales están disponibles en sus sitios web. Sin embargo, solamente catorce de ellos fueron evaluaciones correspondientes a ese lapso; los demás se refieren a auditorías realizadas entre los años 2017 y 2020. Aunque se realizan luego de haber concluido el año al que corresponden, en los últimos cinco años la mayor parte de las instancias del SICA no fueron auditadas por el CFR-SICA.

Las dos entidades con más auditorías publicadas entre el 2020 y mayo del 2024 son la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) y SG-SICA, las evaluaciones correspondieron a los períodos 2019- 2022 y 2018-2021, respectivamente. Al contrastar los planes anuales (Plan Anual de Auditoría y Presupuesto) y las memorias de labores 2020-2023 del CFR-SICA, se logró determinar que no se logra cumplir con la totalidad de las auditorías planificadas para cada año (cuadro 1.10). Esto pudiera evidenciar la necesidad de fortalecer las capacidades y recursos del CFR-SICA para cumplir a cabalidad con sus funciones (Johanning et al., 2025).

Operación del SICA sigue dependiendo de la cooperación internacional

Los aportes de cada país a los distintos órganos e instituciones del SICA siguieron sin garantizar su operación.

Tal como ha sido señalado en informes previos del Estado de la Región, casi la mitad del financiamiento proviene de los aportes de la cooperación internacional (Johanning et al., 2025; PEN, 2016 y 2021). Transcurridos casi 35 años desde la creación del SICA, esta situación implica riesgos importantes para la continuidad y sostenibilidad de las acciones regionales y limitan su alcance y resultados.

Los fondos aprobados para proyectos de cooperación regional en el período 2016-2024, según datos del Sicor²², fueron de 405,23 millones de dólares, en promedio 45,03 millones anuales (SG-SICA, 2024c). Es importante indicar que esta información no incluye convenios suscritos después del 2019. En total, se identificaron 91 proyectos en ejecución, la mayoría con fecha de término antes del año 2024.

El pilar de cambio climático y gestión integral del riesgo es el que recibe mayor cantidad de recursos (203,3 millones de dólares). Su participación en el total de la cooperación aumentó de 40% en el período 1992-2020 a 50% en el 2013-2024. Le sigue el pilar de integración económica con 134,2 millones de dólares (monto que representa una proporción 13,9 puntos porcentuales más alta a la del período anterior), seguridad democrática con 38,7 millones de dólares, integración social con 19,9 millones de dólares y, finalmente, fortalecimiento institucional con 8,9 millones de dólares

(SICA, 2024c). Cabe destacar que, en relación con lo reportado en el Sexto Informe Estado de la Región (2021), disminuyó la proporción de los recursos captados por los pilares de integración social (de 19,9% a 4,9%) y fortalecimiento institucional (de 15,7% a 2,2%; gráfico 1.56)²³.

Aunque el pilar de seguridad democrática no parece ser una prioridad según la asignación de los recursos de cooperación, resulta más significativo que el de integración social y el fortalecimiento institucional. No obstante, uno de los cuatro proyectos en ejecución dentro de este pilar, el de “Cooperación en Investigación Criminal en Centroamérica para Combatir la Delincuencia y el Tráfico de Drogas a Nivel Internacional (ICRIME), concentra 23,7 millones de dólares (61,3% del total de los recursos de cooperación de todo el pilar) y fue ejecutado por la SG-SICA, la Unión Europea (UE) y España, bajo la modalidad de cooperación financiera (SICA, 2024b)²⁴.

La SG-SICA continúa siendo la principal instancia ejecutora de proyectos de cooperación, tiene a cargo veintiuno de los 91 proyectos identificados. Además, es la instancia regional ejecutora de todos los proyectos del pilar de fortalecimiento institucional y está a cargo de seis proyectos del pilar sobre cambio climático y gestión integral del riesgo, cuatro del de seguridad democrática y uno del de integración social. Este hecho llama la atención dado que, en principio, los proyectos de cada pilar deberían estar siendo ejecutados por instancias especializadas o las que encabezan el pilar al que corresponden (Johanning et al., 2025).

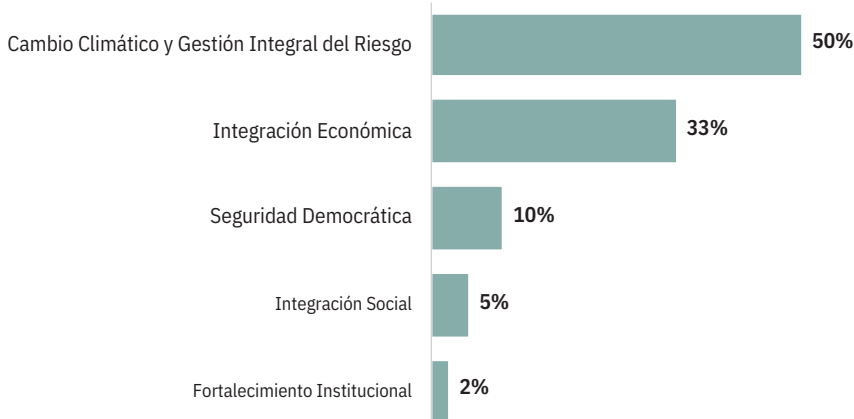
En contraste con los 45,3 millones de dólares anuales aportados por la cooperación internacional, las cuotas ordinarias de los Estados miembros a los distintos órganos e instituciones del SICA en el 2022 representaron cerca de la mitad: 22,2 millones de dólares.

En un contexto donde la región CARD recibe cada vez menores flujos internacionales de cooperación para el desarrollo²⁵, el bajo aporte financiero de los Estados miembros al funcionamiento del SICA representa riesgos significativos. En estas condiciones, además, las prioridades y

Gráfico 1.56

Región CARD

Distribución de presupuestos de proyectos de cooperación regional en ejecución por pilar de integración. 2013-2024



Fuente: Johanning et al., 2025 con base en datos del SICA.

programas del SICA podrían responder más a las agendas de los donantes que a los objetivos definidos por los Estados miembros; lo que puede generar a lo interno de los órganos e instituciones del SICA competencia y disputas en aras de acceder a fondos de cooperación cada vez más escasos.

Las cuotas que los países aportan al sistema de integración varían por dos razones²⁶. En primer lugar, algunas instancias reciben cuotas extraordinarias de los Estados, como es el caso del Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica (Comitran), la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocotram) y el Centro Regional de Promoción de las Medianas y Pequeñas Empresas (Cenpromype) (SICA, 2024c). En segundo lugar, algunos Estados no participan de todas las instancias del sistema. Belice y Costa Rica son los Estados miembros con el menor aporte presupuestario a la institucionalidad del SICA, porque no participan en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), ente que en el 2022 concentraba el 46% de los fondos aportados mediante cuotas por los Estados, el equivalente a 10,2 millones de dólares (Johanning et al., 2025)²⁷.

Los Estados frecuentemente están

morosos con el pago de las cuotas, lo cual provoca inseguridad en el balance presupuestario de la institucionalidad del sistema. En muchos casos, este es insuficiente para garantizar la operación básica de las instituciones y los órganos regionales. En el caso del Cepredenac, se encontró que de sus dieciséis personas funcionarias, dos de sus salarios se financian con los aportes de cuotas de Estados miembros y cuatro salarios los aporta directamente el Estado guatemalteco; mientras que diez son sufragados con fondos de cooperación internacional, lo cual representa el 62,5% del total del personal (Johanning et al., 2025)²⁷.

Una de las alternativas que pudiera contribuir a mejorar la situación descrita y darle estabilidad al funcionamiento del sistema es la aplicación del mecanismo de financiamiento automático con base en las cuotas ordinarias que aportan los Estados miembros, cuyo diseño fue mandatado en diciembre del 2022 a la Secretaría General con el acompañamiento del COSEFIN y el BCIE. Sin embargo, este acuerdo aún no se ha concretado pese a que se estableció un plazo de seis meses para presentar dicha propuesta a consideración del Comité Ejecutivo del SICA y del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (Comre).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
**INTEGRACIÓN REGIONAL EN
CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA**

Johanning et al., 2025
en www.estadonacion.or.cr

**Participación institucional
asimétrica de los Estados
miembros debilita la acción
regional**

La institucionalidad regional está conformada por 28 órganos, 12 secretarías, 30 instituciones regionales y solo un grupo regional (Grupo Ad Hoc para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el SICA). De las 30 instituciones regionales, la mitad fueron creadas antes del Tratado de Tegucigalpa y la otra mitad, después²⁸. Cuatro instancias no pertenecen a la institucionalidad del SICA, pero han

coadyuvado en su funcionamiento, la mayoría de ellas relacionadas con el ámbito de la seguridad: la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) y la Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Directoras de Policías de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia (Johanning et al., 2025)²⁹.

El portal web del SICA “Institucionalidad regional en cifras” muestra las instancias del sistema a las que pertenece cada Estado y los países sede de cada una de ellas (SG-SICA, 2024a). Honduras, Guatemala y El Salvador son los Estados con la mayor participación en la institucionalidad regional (56 instancias), seguidos por Panamá y Costa Rica con 52 y 51 instancias, respectivamente. Belice y la República Dominicana son los menos involucrados, pues participan en 40 y 34 instancias, respectivamente.

Es importante mencionar que durante los últimos años la República Dominicana y Costa Rica presentaron su adhesión al Cenpromype (Johanning et al., 2025).

En relación con los países que no participan en instituciones regionales, cabe destacar que Belice y la República Dominicana no forman parte de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP) del pilar de seguridad democrática (cuadro 1.11). La no participación de los Estados en el entramado institucional de la integración limita el alcance de las acciones regionales. Aunque las entidades del sistema coordinan las iniciativas que, en la práctica, abordan desafíos comunes de carácter supranacional, algunos territorios importantes quedan excluidos de esas acciones.

Cuadro 1.11

Región CARD
Instancias regionales^{a/} en las que cada Estado miembro del SICA no participa, por pilar de la integración

Pilar de la integración	Belice	Costa Rica	Nicaragua	Panamá	República Dominicana
Integración económica	Comieco CDMER CMCA Cocatram Comitran Comtelca Concadeco Cosefin CRIE EOR			CMCA Cocesna	CDMER Cocatram Cocesna Comieco Comitran CRIE EOR
Integración social	CCA Commca CTCAP CTPT Focard-APS ICAP	CTPT	CTPT	CTPT	CCA Codicader CTPT ICAP
Fortalecimiento institucional	CCJ Conplan Parlacen	CCJ Conplan Parlacen	Conplan	CCJ	CCJ
Seguridad Democrática	Ccp				CCP
Cambio Climático y Gestión de Integración del Riesgo	Cepredenac				CRRH
Instituciones que no se ubican en ningún pilar	Cricap	Icespo			CEAC Icespo

Fuente: Johanning et al., 2025 con datos del SICA.

SICA continua con funcionamiento inercial en ausencia de conducción política

Mientras el SICA atraviesa la crisis política más importante desde el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, las entidades del sistema han procurado ejecutar mandatos emanados de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de períodos anteriores, ordenando su gestión y manteniéndose como espacios de coordinación entre autoridades ministeriales y técnicas de los países.

Este divorcio entre la conducción política y una gestión institucional de carácter inercial ha reflatado la discusión sobre la necesidad de cambios significativos en la institucionalidad regional. Mientras

algunos estudios señalan que se requiere una reforma estructural del sistema, ya que la reforma funcional no ha rendido los resultados esperados, y sugieren crear un tratado único actualizado como marco jurídico de integración (Salazar, 2021a; Ulate, 2021). Otros como Sol (2023), abogan por basar la integración en la construcción de bienes públicos regionales y señalan que los desafíos y problemas están relacionados con la indefinición de mecanismos intergubernamentales y comunitarios, divergencias en los intereses de los Estados sobre el proceso de integración y tensiones entre la agenda formal de la integración y la agenda de cooperación (Johanning et al., 2025).

Entidades del sistema promulgaron centenares de nuevos instrumentos regionales

Entre el 2020 y el 2024, las entidades del sistema aprobaron cerca de 300 nuevos instrumentos regionales como resoluciones, acuerdos, planes, estrategias, entre otros, pese a la grave desarticulación de la conducción política y la acefalía en su Secretaría General. Ello da cuenta de un proceso dinámico de generación de normativa y documentos desde las distintas instancias del SICA (cuadro 1.12). Sin embargo, esto hace más compleja la gestión del sistema y, en muchos casos, genera inseguridad jurídica que limita el cumplimiento de esos instrumentos porque no se amparan en tratados vigentes o nuevos que hagan vinculante su aplicación (Salazar, 2021).

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (CMRE) aprobó el Reglamento Relativo a la Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Políticas Regionales del SICA (CMRE 02-2023), publicado en La Gaceta Digital n° 74-2023. El reglamento establece criterios, estándares y procedimientos comunes para asegurar la efectividad en el uso de los recursos financieros y técnicos, la consecución de metas y objetivos propuestos por las políticas regionales y la generación de beneficios para los Estados miembros y sus poblaciones (Johanning et al., 2025). En su artículo 12 contempla una medida que contribuye a resolver una debilidad sobre la que llamó la atención la edición previa de este Informe: la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación de los planes, políticas y estrategias regionales (PEN, 2021)³⁰.

Reglamento para la adopción de decisiones del SICA procura reducir la cantidad de nuevos mandatos

En las ediciones del 2011 y 2016 del Informe Estado de la Región se documentó la proliferación de mandatos emanados de las declaraciones de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno del SICA. Conforme la frecuencia de estas reuniones se ha reducido, también disminuyó la cantidad de mandatos que

Cuadro 1.12

Región CARD
Instrumentos aprobados y publicados en La Gaceta Digital Oficial del SICA

Instrumento	2020	2021	2022	2023	2024 ^{a/}	Total
Resoluciones	32	37	11	33	2	115
Documentos emitidos por la CCJ	1	26	-	-	18	45
Documentos emitidos por el Parlamento Centroamericano ^{b/}	7	1	11	22	-	41
Cooperación ^{c/}	5	9	5	7	3	29
Acuerdos	4		4	5	-	13
Estrategias	1	3	2	4	-	10
Recomendaciones	6	-	-	-	3	9
Declaraciones	2	1	2	1	1	7
Comunicados	1	1	-	3	-	5
Planes	-	1	2	2	-	5
Reglamentos	1	1	-	2	-	4
Protocolos	-	-	2	-	-	2
Políticas	-	-	-	1	-	1
Agendas	-	1	-	-	-	1
Hojas de Ruta	-	-	1	-	-	1
Otros ^{d/}	3	7	2	4	-	16

a/ Revisión al 09 de mayo de 2024.

b/ Entre los documentos emitidos se encuentran resoluciones, recomendaciones, declaraciones y pronunciamientos del Parlacen que poseen un carácter de recomendación.

c/ Se refiere a acuerdos de cooperación, marcos de cooperación y memorándums de entendimiento.

d/ Se refiere a instrumentos de adhesión o ratificación, incorporación de Estados u organizaciones como observadores del SICA, adendas a acuerdos de cooperación, entre otros.

Fuente: Johanning et al., 2025 con datos de la Gaceta Oficial del SICA.

emanan de estas declaraciones. Lo anterior ha creado una oportunidad para implementar un nuevo mecanismo de control: la devolución de mandatos presentados para la aprobación en las reuniones de presidentes, en aquellos casos en los cuales las propuestas no cumplen con lo establecido en el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de Mandatos para la Reunión de Presidentes.

En la LVII Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Placencia, Belice, el 27 de junio del 2023, el Comité Ejecutivo del SICA (CE-SICA) procedió a devolver los mandatos a las instancias del SICA que los presentaron y les otorgó un plazo de siete días hábiles para su corrección (*La Gaceta Oficial Digital* del SICA n° 075-2024 mediante la Resolución CE 03-2023)³¹. No se logró determinar si los errores fueron subsanados y si los mandatos corregidos fueron presentados para su aprobación (Johanning et al., 2025).

El portal del SICA posee un espacio dedicado a mostrar los mandatos por declaración de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, que indica la entidad responsable y el estado del mandato. Sin embargo, la información se encuentra desactualizada. Debido a ello, se decidió contrastar la información de esa página con las declaraciones de cada reunión. Lo anterior permitió contabilizar un total de 110 mandatos en ejecución, que datan del período 2009-2023 (Johanning et al., 2025).

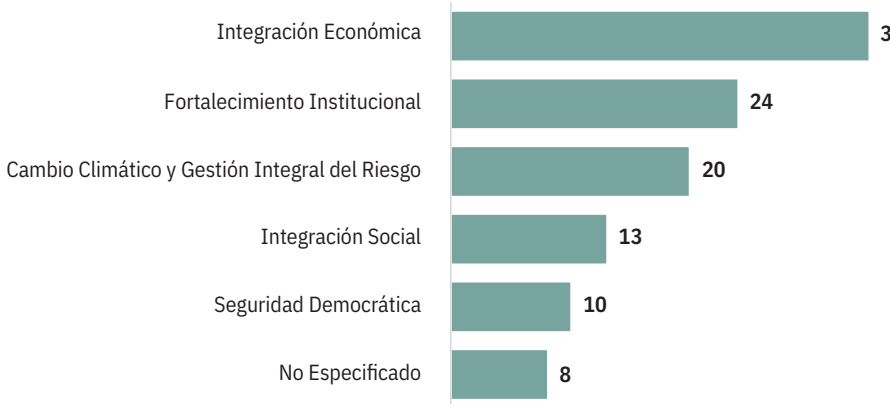
Los pilares de integración económica, fortalecimiento institucional y cambio climático y gestión integral del riesgo son los que concentran la mayor cantidad de mandatos en ejecución, con un total de 79 (gráfico 1.57). Esto podría evidenciar una pérdida de prioridad de los temas relacionados con integración social y seguridad democrática, tendencia destacada en la edición previa de este *Informe*. De los 110 mandatos en ejecución identificados, solo en ocho casos no fue posible establecer el vínculo con un pilar de integración.

En los mandatos emanados de las reuniones realizadas entre el 2020 y el

Gráfico 1.57

Región CARD

Distribución de mandatos de las reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno en ejecución por pilar de integración regional. 2009-2023



Fuente: Johanning et al., 2025 con datos del SICA.

2023 se priorizó el tema del fortalecimiento institucional del SICA. De los ocho mandatos identificados, cinco se refieren a la reforma y transformación y restructuración de la institucionalidad. Uno de los más relevantes aborda el diseño de un mecanismo de financiamiento automático del SICA con base en las cuotas ordinarias que proveen los Estados miembros. No obstante, como se indicó anteriormente, se desconoce el grado de avance de este mandato. Los otros dos se relacionan con los temas de transparencia y gestión del conocimiento (Johanning et al., 2025)³².

En el pilar de cambio climático y gestión integral del riesgo se presenta un cambio relevante en relación con lo señalado por el *Informe Estado de la Región* (2021). En esa ocasión se detectó una concentración de los mandatos en esta temática; en contraste, en el período para el cual pudo reconstruirse la información (2020-2023) solo uno de los seis mandatos aprobados se refería a esta materia³³.

Los cinco mandatos relacionados con el pilar de integración económica priorizan la promoción turística de la región mediante la conectividad aérea, terrestre y marítima regional para mejorar la competitividad turística regional y el apoyo a las Mypymes turísticas. Los

dos mandatos restantes se enfocan en la promoción de la electromovilidad en los Estados miembros del SICA y en la implementación de la Plataforma Digital de Comercio Exterior (PDCC), destinada a fortalecer y facilitar el comercio intrarregional (Johanning et al., 2025).

Divergencias impiden posicionar intereses regionales en la agenda internacional

A lo largo del presente siglo, los Estados miembros del SICA tuvieron una notable incapacidad para emplear al sistema de integración como una plataforma para el diálogo político intra y extrarregional. Esta situación se prolongó durante el período 2021-2024 y continuó bloqueando la capacidad para que la región, como conjunto, procure incidir y posicionar sus intereses en la agenda internacional frente a actores clave como Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Este apartado presenta los resultados de un estudio exploratorio realizado en el marco de este *Informe* para conocer el posicionamiento de la región de CARD en la agenda y prioridades de actores estratégicos internacionales, en particular países y regiones que determinan la geopolítica global. Para ello, se sistematizó información de diversas fuentes: medios de comunicación,

comunicados y documentos de política exterior y la base de datos de votación de los países de CARD en la AGNU.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
**CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA FRENTE A LOS
ACTORES GLOBALES**

véase de Cascante Segura, 2024 en
www.estadonacion.or.cr

Pocos temas concentran
los intereses de potencias
hegemónicas en la región

El contexto internacional se ha visto determinado durante los últimos años por las tensiones entre China y los Estados Unidos y los conflictos armados en distintas regiones del mundo. Ello ha coincidido con cambios en las prioridades de estas potencias, ya sea como respuesta a nuevas realidades que cobran relevancia en la agenda pública o por virajes en los objetivos de la política exterior. Centroamérica se ha visto sumamente afectada por estas tensiones.

La presencia militar de Estados Unidos en Asia ha sido equilibrada por una creciente expansión de los intereses chinos en Europa, África y América Latina. Esta expansión también se ha registrado en la región CARD. En estas regiones, China ha incrementado de manera significativa sus inversiones en comercio de bienes y servicios, así como en la extracción de recursos naturales. Para ciertos sectores, China se ha convertido en una amenaza palpable para la hegemonía estadounidense en lo que antes era considerado su zona de influencia (Cascante Segura, 2024).

En este contexto, la política exterior de los Estados Unidos ha mostrado una notable división interna con respecto al papel del país en el ámbito internacional, con posiciones que abarcan desde el aislacionismo hasta el intervencionismo en áreas estratégicas (Sides et al., 2022). Esta división también ha originado desacuerdos sobre cómo abordar el fenómeno migratorio y el narcotráfico, asuntos centrales en la política estadou-

Cuadro 1.13

Región CARD
Temática abordada en visitas de alto nivel de EEUU a
Centroamérica. 2020-2023

Tema	Total de menciones en las 34 visitas	Porcentaje de veces mencionado en las 34 visitas
Fortalecimiento de las relaciones bilaterales ^{a/}	21	62
Migración ^{b/}	20	59
Seguridad ^{c/}	18	53
Fortalecimiento de la democracia ^{d/}	13	38
Cooperación internacional ^{e/}	13	38
Integración comercial ^{f/}	7	21

a/ Seguimiento de las relaciones políticas, menciones a otras potencias globales.

b/ Flujos de migrantes, control de fronteras.

c/ Narcotráfico y ciberseguridad.

d/ Lucha anticorrupción, institucionalidad y derechos humanos, igualdad de género.

e/ Proyectos vinculados con la cooperación estadounidense.

f/ Inversión, reactivación económica.

Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de visitas de funcionarios de los Estados Unidos, China y la Unión Europea a Centroamérica y República Dominicana.

Fuente: Johanning et al., 2025 con datos de la *Gaceta Oficial* del SICA.

nidense hacia la región CARD. Estas tensiones se hicieron muy presentes en la campaña electoral del año 2023 en ese país y podrían esperarse virajes importantes con el nuevo gobierno.

El potencial aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China ha obligado a países pequeños, como los de la región CARD, a gestionar cuidadosamente sus relaciones con ambas potencias, un proceso de equilibrio que depende de las circunstancias particulares de cada país.

A lo largo de su historia, los países centroamericanos y la República Dominicana experimentaron, en diversos momentos e intensidad, la intervención de potencias extranjeras. En el siglo XX, Estados Unidos fue la potencia dominante pero su interés en la región resultó fluctuante, tanto por el trato diferenciado a los actores centroamericanos, como por los condicionamientos del contexto global que motivan la atención estadounidense hacia otras áreas del planeta. En otros términos, las relaciones de los países centroamericanos con los Estados Unidos no son uniformes, ni el interés por ellos ha sido constante

(Rosenberg y Solís, 2012).

Al revisar los datos de las 34 visitas registradas por altos funcionarios estadounidenses a la región durante el período 2020-2023, se determinó que los comunicados resultantes enfatizaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los países visitados y Estados Unidos, la relevancia de temas como la migración y la seguridad, así como advertencias sobre la influencia de socios externos, especialmente China (cuadro 1.13). Asuntos como el fortalecimiento de la democracia, la cooperación internacional y la integración comercial recibieron una atención secundaria.

La región CARD ocupa un
lugar secundario en la agenda
mediática de las grandes
potencias

Centroamérica y la República Dominicana no son un foco de interés global. Sin embargo, las grandes potencias siguen atentamente los acontecimientos que ocurren en esta región para identificar tanto oportunidades como riesgos para sus intereses. Un primer acercamiento a este tema involucra el

análisis de la cobertura realizada por destacados medios de comunicación de estos países sobre la región durante el período 2019-2023, con el objetivo de detectar tendencias en la forma en que es percibida en los principales centros de poder mundial. Para esto se efectuó un rastreo de noticias del *The New York Times* (versión en inglés), *BBC News* (versión en inglés), *El País* (versión en español) y *ChinaToday* (versión en español).

En los medios estudiados, las conductas autoritarias de los Gobiernos en la región generaron el mayor interés o cobertura mediática. Ello incluyó noticias relacionadas con la expulsión de adversarios políticos, amañó de procesos electorales y detenciones ilegales, así como los acontecimientos vinculados con la seguridad en la región como el narcotráfico, las pandillas y los temas económicos como los tratados comer-

ciales y la inversión extranjera (cuadro 1.14). En menor medida, también fueron objeto de noticias los conflictos internos, la migración y la protesta social.

En *ChinaToday*, periódico vinculado con el Partido Comunista de China, se encontraron menos noticias sobre la región CARD. Su cobertura se concentró en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China por varios países del istmo y el estado de las relaciones con Taiwán. Además, dio importancia a la cooperación durante la epidemia del covid-19 y las relaciones económicas que la apertura de relaciones diplomática puede provocar.

En resumen, esporádicamente la región CARD es una mala noticia en los medios de comunicación de los países que determinan la geopolítica global y con los que existen vínculos comerciales, migraciones, turismo y cooperación.

Estados Unidos es el principal origen de la cooperación hacia CARD

Estados Unidos es el principal origen de la cooperación hacia la región CARD. Este país representó la mitad de los flujos recibidos por esta región durante la década que va del 2013 al 2022. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo principal cooperante es Estados Unidos, es la segunda fuente en importancia. La cooperación bilateral de los países europeos constituye la tercera fuente, mientras que los organismos supranacionales como la Unión Europea y la ONU tienen una menor relevancia (cuadro 1.15).

La cooperación estadounidense dirigida a Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá ha superado los 2.000 millones dólares a cada uno de los países durante la década indicada, lo cual concuerda

Cuadro 1.14

Región CARD
Noticias vinculadas a países centroamericanos y República Dominicana. 2019-2023

Tema	New York Times	BBC NEWS	El País	China Today	Total	Porcentaje
Conductas autoritarias del gobierno	12	23	39	0	74	21,2
Elecciones locales	15	19	37	0	71	20,3
Seguridad interna	8	19	15	0	42	12,0
Economía	6	9	11	4	30	8,6
Conflictos políticos internos	3	6	10	0	19	5,4
Migración	6	6	5	0	17	4,9
Protesta social	1	8	6	0	15	4,3
Relaciones con China	2	2	4	6	14	4,0
Casos de corrupción	2	6	6	0	14	4,0
Canal de Panamá	1	4	7	0	11	3,2
COVID-19	2	1	2	5	10	2,8
Problemas ambientales	2	3	2	0	7	2,0
Derechos Humanos	2	1	2	0	5	1,4
Haití (migración)	2	1	2	0	5	1,4
Relaciones con Estados Unidos	2	0	1	0	3	0,9
Sanciones Internacionales	1	0	1	0	2	0,6
Relaciones con Taiwán	0	0	0	2	2	0,6
Relaciones con Irán	1	0	0	0	1	0,3
Total	68	108	156	17	349	100,0
Promedio de noticias anuales	13,6	21,6	31,2	3,4	69,8	

Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de la base de noticias vinculadas con los países centroamericanos y República Dominicana en el The New York Times, BBC News, El País y ChinaToday, del PEN.

con la importancia que en sus documentos programáticos se brinda a estos países. Este panorama puede cambiar dramáticamente con el congelamiento de la ayuda exterior que ha aprobado el nuevo presidente norteamericano en sus primeros días de gobierno. En el caso de Nicaragua, el monto es mucho menor, pero el BID sigue siendo un cooperante esencial para este país.

Los flujos de cooperación china son los más difíciles de rastrear. De acuerdo con AidData's Global Chinese Development Finance, China ha establecido flujos de cooperación hacia Centroamérica y la República Dominicana, en especial en infraestructura. Por ejemplo, en el 2019 brindó a El Salvador un préstamo de 500 millones de dólares para diversos proyectos: un nuevo estadio y una biblioteca nacional, entre otros; con Costa Rica se registra un acumulado de 86,1 millones de dólares desde el 2014 hasta el 2022. En el caso de Nicaragua aún no se cuenta con datos y en Honduras la relación todavía es muy temprana. En esta línea, aunque para algunos países centroamericanos, China pudiera ser una fuente de cooperación alternativa, la posibilidad de que desplace la importancia de los socios tradicionales resulta lejana.

Fuertes divisiones en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas

En el *Sexto Informe Estado de la Región* (2021) se reportó que en la Asamblea General de la ONU los países centroamericanos tienden a definir sus posiciones de manera individual, sin la existencia de una coordinación como bloque regional. Estas votaciones son influenciadas por factores, entre ellos la orientación del jefe de Estado de turno o situaciones particulares como la presión de los actores extrarregionales.

Para este Informe, se realizó un estudio de caso de los patrones de votación de las naciones de la región CARD en la Asamblea General en relación con el conflicto ucraniano durante la década posterior a la invasión y anexión rusa a Crimea en el 2014 y las referencias de los discursos emitidos en el Debate General. Por su importancia geopolítica,

Cuadro 1.15

Región CARD

Total de flujos de cooperación netos^{a/} por cooperante según país receptor. 2013-2022

Receptor	Fuente					Total	
	EEUU	BID	ONU	UE	Alemania/ Francia/ España	Neto	Porcentaje País
Belice	86	73	23	109	-11	280	1
Costa Rica	969	2.296	44	113	-479	2.943	6
El Salvador	3.272	615	88	222	1.353	5.550	12
Guatemala	5.999	296	137	293	1.575	8.301	17
Honduras	2.065	2.384	115	580	847	5.991	13
Nicaragua	151	1.760	104	557	1.420	3.992	8
Panamá	9.115	3.114	74	-66	134	12.372	26
República Dominicana	2.266	1.939	56	348	3.423	8.031	17
Total	23.922	12.478	642	2.157	8.262	47.460	100
Porcentaje	50	26	1	5	18	100	

a/ Netos: las cifras negativas corresponden al pago de préstamos anteriores. Cuando un país paga los préstamos brindados y ese monto es mayor al de la cooperación recibida se generan cifras negativas. Se incluyen donaciones, préstamos blandos y financiamiento de proyectos. No incluye cooperación técnica. Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de la OCDE, 2024.

este conflicto motiva a las potencias globales a movilizar votos para respaldar sus posiciones. Lo anterior permite estudiar la cercanía, al menos discursiva, de los países centroamericanos y la República Dominicana con dichos actores. Se analizaron un total de 17 resoluciones (cuadro 1.16).

Las divisiones de los países centroamericanos son claras. Por una parte, existe sólido apoyo a las condenas contra Rusia por parte de Belice, Guatemala, Costa Rica y Panamá. En el caso de la República Dominicana, inicialmente, ese apoyo no existió, en torno de los hechos acaecidos en el 2014, durante la administración de Medina Sánchez cuando había mantenido una posición de abstención. Sin embargo, a partir de las resoluciones del 2022, después del avance ruso sobre Kiev, comenzó a votar con regularidad a favor de estas resoluciones. Por el contrario, Honduras, que inicialmente mantuvo una votación a favor de la condena a Rusia, cambió su línea de votación con el

ascenso al poder de Xiomara Castro en enero del 2022. Al otro lado del espectro, se encuentran Nicaragua, que ha votado en contra todas las resoluciones, y El Salvador que, pese al cambio de partido de gobierno, se ha abstenido de condenar a Rusia en este foro.

Después del 2022, Belice, Guatemala, Costa Rica y Panamá han mantenido altos niveles de concordancia con las posiciones estadounidenses. La tendencia de El Salvador ha sido alejarse de las posiciones estadounidenses, sin que esto implique acercarse a Rusia, sino más al patrón chino, una decisión similar a la de Honduras y República Dominicana en las últimas resoluciones sobre el conflicto pero, en este caso, en concordancia con Rusia (cuadro 1.17).

Para países pequeños como los de la región CARD, con economías abiertas y fuertemente vinculadas con dinámicas transnacionales como las migraciones, el comercio exterior y turismo, el narcotráfico y el cambio climático, estar

Cuadro 1.16

Región CARD
Votos^{a/} contra las acciones de la Federación Rusa en Ucrania, según país que condena. 2014-2023

País	A favor	Abstención	En contra	Ausencia
Belice	14	3	0	0
Costa Rica	16	0	0	1
El Salvador	2	14	0	1
Guatemala	16	1	0	0
Honduras	13	3	0	0
Nicaragua	0	0	17	0
Panamá	16	0	0	1
República Dominicana	10	7	0	0

a/ Votos en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de la base de votación de Centroamérica y República Dominicana, del PEN.

Cuadro 1.17

Región CARD
Concordancia de votación en resoluciones sobre el conflicto en Ucrania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2014-2023
(en porcentaje)

País	Bloque Atlantista	China	Rusia
Belice	82,4	0,0	0,0
Costa Rica	94,1	0,0	0,0
El Salvador	11,8	64,7	23,5
Guatemala	94,1	0,0	0,0
Honduras	76,5	0,0	11,8
Nicaragua	0,0	70,6	100,0
Panamá	94,1	0,0	0,0
República Dominicana	52,9	0,0	5,9

Fuente: Cascante Segura, 2024 con datos de la base de votación de Centroamérica y República Dominicana en la Asamblea General de Naciones Unidas (1990-2023), del PEN.

atentos al contexto internacional es fundamental. Muchos de los factores que determinan su situación y márgenes de maniobra emergen más allá de sus fronteras. Por ello este Informe llama la atención sobre la importancia de identificar intereses y prioridades comunes que mejoren el posicionamiento e incidencia

de la región en la agenda internacional ante los actores más relevantes de la geopolítica mundial. El potencial de estas acciones contrasta con la desarticulación y falta de espacios de diálogo político con sentido estratégico entre los países de la región.

Notas

1 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

2 El capítulo no elabora hipótesis sobre la causalidad que explica los cambios observados en el desempeño de la región CARD en desarrollo humano sostenible y la integración regional.

3 Si se excluye la leña de la oferta de energía, la participación de combustibles fósiles en las matrices energéticas muestra una dependencia elevada en la República Dominicana, Panamá, Honduras y El Salvador (92%, 79%, 76% y 74%, respectivamente) y superior al 50% en los casos de Guatemala, Nicaragua, Belice y Costa Rica (66%, 62%, 57% y 54%, respectivamente).

4 Las pérdidas de energía que se presentan en el transporte de la corriente de electricidad a través de la infraestructura de la red de transmisión y distribución, incluyendo las líneas de transporte y los equipos utilizados en el proceso de transformación de la tensión de la corriente.

5 Las pérdidas de electricidad derivadas del robo de energía y debido a mediciones erróneas en el consumo eléctrico (deliberadas y no deliberadas).

6 En Guatemala en el 2007, en Panamá en el 2011, en San Salvador en el 2014 y en Tegucigalpa en el 2015.

7 Período durante el cual el grupo de población de 15 a 65 años de edad crece de manera sostenida y con mayor rapidez que la proporción de personas dependientes (menores de 15 años y mayores de 65).

8 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana.

9 Consiste en comparar el ingreso de los hogares con el valor de una canasta básica de productos y servicios. Los hogares con ingresos superiores a ese valor se consideran hogares no pobres, los que tienen ingresos insuficientes para adquirirla, se consideran pobres. Aquellos que ni siquiera cuentan con ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria se catalogan en condición de pobreza extrema.

10 El *Informe Estado de la Región* utilizó la base de datos de Variedades de Democracia (V-Dem) como la principal fuente para efectuar una aproximación com-

parativa y de más largo plazo sobre la evolución de los regímenes políticos en la región CARD. Para efectos analíticos y descriptivos, se calcularon los promedios de las cinco dimensiones democráticas por país y por año, de lo cual se obtuvo como resultado un índice agregado que permite resumir los patrones de tendencia democrática en las áreas claves.

11 Se emplea el Indicador de Restricción Legislativa y Restricción Judicial de V-Dem Project como un promedio simple para analizar las restricciones al poder gubernamental.

12 El indicador se evalúa en una escala de 0-1, donde los valores inferiores implican menor nivel de corrupción y más altos lo contrario.

13 Más que un régimen político o un estilo de gobierno, trabajos pioneros en materia de comportamiento psicosocial y político argumentaron que el autoritarismo se relaciona con ciertas características cognitivas de las personas (Adorno et al., 1950). Para Altemeyer (1996), el autoritarismo se expresa como un conglomerado de actitudes que se manifiestan en mayor medida en el subconsciente de la población. De acuerdo con este autor, se puede presentar desde tres aspectos centrales: obediencia hacia la autoridad considerada legítima por la sociedad, agresión hacia distintos grupos de personas que las autoridades consideran como peligrosos y un alto grado de adhesión a las convenciones sociales que se perciben como respaldadas por la sociedad y sus autoridades.

14 Belice no fue evaluado en la ronda de entrevistas del 2021.

15 Reglamento CE/1-2017, Comité Ejecutivo del SICA adoptado el 15 de noviembre del 2017, artículo 3.

16 Solo en el año 2022 se realizaron las dos reuniones de presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de la región: la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA realizada en agosto (virtual) y la 56° Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA que se llevó a cabo en diciembre en Santiago de los Caballeros en República Dominicana.

17 El primer período de acefalía correspondió a los meses transcurridos entre la salida de Vinicio Cerezo (30 de junio del 2021) y la elección de Werner Vargas como nuevo secretario general en agosto del 2022.

El segundo lapso va desde que él deja su cargo en noviembre del 2023 hasta la actualidad.

18 *Manual de Organización y Funciones de la Secretaría General del SICA*, aprobado el 31 de mayo del 2011 por el entonces secretario general, Juan Daniel Alemán y que entró en vigor el 1° de julio de ese mismo año.

19 El 7 de noviembre del 2024 el Gobierno de Nicaragua realizó una comunicación pública en la cual “denuncia y rechaza de manera categórica cualquier intento de usurpación de la figura del Secretario General del SICA por parte de la denominada Dirección Ejecutiva, que solo es una oficina administrativa interna que no tiene ninguna competencia para ejercer atribuciones que solo corresponden a los Estados miembros y a la coordinación que ejerce el secretario general del SICA” (Swissinfo.ch, 2024).

20 Carta DSG/0014/2024 suscrita por Werner Vargas Torres en su condición de secretario general del SICA, dirigida a los presidentes y la presidenta de los países de la región.

21 Los informes de auditoría evalúan principalmente tres aspectos: la situación financiera, el sistema de control interno de la instancia y el cumplimiento con la normativa legal correspondiente en las labores de la instancia.

22 Tal como se detalla más adelante el Sidor está desactualizado y contiene información de proyectos de cooperación aprobados hasta el año 2019.

23 La cooperación hacia el SICA no es la única fuente de financiamiento de acciones regionales. Johanning et al. (2025) identificó cerca de 65 organizaciones regionales (32 de la sociedad civil, 22 del sector privado y once de la academia) que durante el período 2020-2024 ejecutaron o tienen en proceso un total de 99 proyectos regionales en temas tan diversos como seguridad, migración, género, educación, investigación, democracia y paz, desarrollo, comercio y ambiente.

24 Conviene indicar que la implementación de esta iniciativa fue suspendida pero no se obtuvo información sobre la proporción de los recursos ejecutados ni sobre los resultados obtenidos.

25 De acuerdo con la base de datos de ayuda oficial para el desarrollo de la OCDE, la región disminuyó su participación en los flujos totales de un 3% en el año 2000 a un 1,3% en el 2023.

26 Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua aportan USD 3.743.789,32 al año. En un nivel intermedio están Panamá y la República Dominicana, con USD 3.022.842,71 y 2.376.509,38, respectivamente. Costa Rica y Belice son los países con las menores cuotas: USD 1.353.092,71 y USD 493.509,38 (Johanning et al., 2025).

27 En ese año, el 31% de los ingresos totales presupuestados por concepto de cuotas (USD 6,83 millones de dólares) estaban destinados al financiamiento de 18 secretarías e instituciones regionales (en promedio USD 379 mil para cada una de ellas). Aunque no fue posible tener acceso a la distribución de las cuotas por institución, ello contrasta con la proporción de las cuotas que se destina a financiar otras entidades como la SG-SICA: USD 2,3 millones de dólares al año (10% del total) y la CCJ: USD 2,88 millones de dólares (13% del total de cuotas) y, por supuesto, el Parlacen.

28 Se trata de la declaración especial relativa a las instancias que integran el Sistema de Integración Centroamericana.

29 Estas adhesiones fueron publicadas en La Gaceta Digital del SICA n° 64-2022 (11 de julio del 2022) y n° 73-2023 (27 de julio del 2023), respectivamente.

30 El artículo 12 establece que “Debe incluirse el mecanismo de seguimiento y evaluación de la política, definiendo los actores, organización, metodologías, períodos e instrumentos a aplicar, así como los indicadores. De igual forma, deberá considerarse lo anterior para la evaluación de los impactos alcanzados” (Johanning et al., 2025).

31 Entre esas instancias estaban el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype), el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y la República Dominicana (CISSCAD), el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) y el Consejo Intersectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (Comitran), Integración Económica (Comieco) y de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (COSEFIN). Entre las razones para la devolución se pueden citar la incorporación de nuevas atribuciones que requieren la reforma del tratado constitutivo (Parlacen), las discrepancias entre el mandato propuesto, el resultado esperado y la falta de información (CISSCAD) y los errores de forma (COMMCA).

32 Dos mandatos buscan fortalecer la gobernanza de la institucionalidad del SICA, uno mediante la creación de un instrumento de transparencia regional, al que todas las instancias del SICA deberán apegarse, y otro instruye a la SG-SICA y al ICAP a formular una propuesta de gestión del conocimiento dentro de la institucionalidad regional para mejorar las capacidades técnicas y gerenciales del sistema. Los dos mandatos restantes buscan promover la articulación intersectorial de la institucionalidad del SICA.

33 Entre los temas priorizados está el identificar y crear mecanismos de alerta temprana ante retos o emergencias con su respectiva respuesta en cuanto a ayuda humanitaria, el promover la investigación, innovación e intercambio de buenas prácticas con énfasis en el sector agrícola, el generar acciones para enfrentar los efectos de la pandemia del covid-19. Un mandato instruye a la Secretaría Técnica del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y a la SG-SICA a elaborar una “propuesta de mecanismo para la compra conjunta de alimentos, fertilizantes e insumos agrícolas en el SICA, que contribuya a construir y/o fortalecer las correspondientes reservas estratégicas en los Estados de la región”. Esto último resulta interesante porque replica el mecanismo de compra conjunta de medicamentos del Comisca (Johanning et al., 2025).

III

SECCIÓN

Dilema estratégico



CAPÍTULO

2

Adaptación al cambio climático: retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana

HALLAZGOS PRINCIPALES

- Centroamérica y República Dominicana comparten factores de vulnerabilidad al cambio climático para las personas, medios de vida, biodiversidad, infraestructuras y bienes económicos, bajo un crecimiento urbano desordenado y frágiles condiciones en algunos asentamientos, desigualdades sociales, asimetrías territoriales y fragilidades productivas. Todo esto hace de la adaptación una tarea clave en la región.
- Según el escenario más pesimista (SSP5-8.5), para finales del presente siglo el aumento de la temperatura en CARD se torna significativo en casi todos los municipios, entre 2 °C y 4 °C.
- Se prevé que las condiciones secas se agraven para el año 2099, tanto en la costa de República Dominicana como en el Corredor Seco Centroamericano.
- Se esperan fuertes cambios en los patrones de precipitación. Por un lado, eventos de precipitación extrema que suelen provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y erosión de suelos. No obstante, a su vez, una reducción en las lluvias en varios países (entre 5% a 31% respecto al comportamiento histórico, según el país), con aumento en sequías, en especial sobre el Corredor Seco Centroamericano.
- La mayoría de las centrales hidroeléctricas de la región se encuentran en municipios en donde se espera una disminución de las precipitaciones.
- Las zonas costeras serán afectadas por el aumento del nivel del mar y ciclones más intensos. Caribe, Belice, Honduras y Panamá son particularmente vulnerables debido a su extensa línea costera, configuración geológica y baja altitud. En el Caribe, en general, 17 de cada 100 habitantes viven en zonas costeras de baja elevación.
- Solo en el 2023, 2,1 millones de personas fueron desplazadas internamente en América Latina y el Caribe por desastres. Se estima que para el año 2050, los impactos del cambio climático y la degradación ambiental podrían desplazar hasta 17 millones de personas en toda la región y en Centroamérica y República Dominicana ya hay evidencias de movilidad climática.
- Las políticas públicas vinculadas con la adaptación se han estado enfocando en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas. El 55% de todas las acciones propuestas se refieren a biodiversidad y conservación, desarrollo e implementación de políticas climáticas integradas y promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
- Entre 269 experiencias de adaptación analizadas, los Estados se han involucrado en el 88% de estas, aunque en casi todos los países se han ejecutado a partir de importantes alianzas con el sector privado, la sociedad civil, los cooperantes, las ONG, la academia y otros actores.
- Existe una fuerte dependencia de los recursos internacionales para financiar las iniciativas de adaptación.
- El 55% de las iniciativas de adaptación completadas surgieron por la agenda de otros actores, mientras que el 65% de las vigentes responde a la política estatal.

IMPORTANCIA DEL TEMA

El cambio climático representa un desafío estratégico para Centroamérica y República Dominicana (CARD), abordado en ediciones anteriores de este Informe y en diversos estudios, actividades y herramientas de política tanto regionales como nacionales en los últimos años. Sin embargo, la particularidad geográfica y las características del desarrollo humano de la región resaltan la importancia de profundizar en el análisis y fomentar acciones específicas orientadas a la adaptación.

De acuerdo con la evidencia científica disponible, la gestión ambiental deficiente y los eventos climáticos en la región CARD han causado históricamente importantes impactos que se agravarán con el cambio climático. Ante ello, y como ha sido ya reconocido en los acuerdos internacionales desde París 2015, las responsabilidades para enfrentar el cambio climático en el planeta son compartidas pero diferenciadas. Las políticas públicas deben adaptarse a la realidad de cada territorio y a sus condiciones de desarrollo humano. En CARD coexiste una situación de bajo aporte a las emisiones mundiales (lo cual no exime de la urgencia de reducirlas) con una alta exposición a los posibles efectos del fenómeno, al ser uno de los “puntos calientes” de alto impacto global –real y predecible–. Esta exposición se suma a los problemas sociales, económicos e institucionales del desarrollo humano, ordenamiento territorial deficientes, pobreza, exclusión y otros elementos, evidenciando la urgencia regional de priorizar la adaptación.

RECONOCIMIENTOS

Investigadores principales: Alonso Brenes Torres, Mónica Castillo Gonzalo, Ricardo Orozco Montoya, Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP); Paula Marcela Pérez Briceño, Adolfo Quesada Román y Pascal Girot Pignot (Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica).

Insumos: *Principales factores de riesgo asociados al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana, Prioridades de política pública y acción regional para la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana y Mapeo de posiciones de actores clave de la región en relación con la adaptación al cambio climático* de Alonso Brenes Torres; *Acciones de adaptación al cambio climático implementadas en los países de Centroamérica y República Dominicana* de Mónica Castillo Gonzalo; *Experiencias internacionales en adaptación al cambio climático para la región Centroamericana y República Dominicana* de Ricardo Orozco Montoya; *Prioridades de adaptación para Centroamérica y República Dominicana: un acercamiento a partir de la evidencia científica, información geográfica y los escenarios disponibles para la región*, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) e *Indicadores de cambio climático a nivel territorial para los países de Centroamérica y República Dominicana*, de Marcela Pérez Briceño, Adolfo Quesada Román y Pascal Girot Pignot (Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica). Se realizó la contribución especial Movilidad

climática: conceptos, datos y retos para la política pública de Ana Isabel Aguilera y Rosa María Martínez (Banco Mundial).

La versión final de este documento estuvo a cargo de Leonardo Merino Trejos.

Asistentes de investigación: Jackeline Brincker (Guatemala), Gabriela María Fuentes (Guatemala), Jorge Eduardo Rodríguez (Costa Rica), Carlos Escudero (Panamá), Yessica Díaz (Panamá), Joaquín Castro (El Salvador), Lucía Vijil (Honduras) y Mary Clara Galán (República Dominicana).

Apoyo en la elaboración de mapas: Rudy Muñoz.

Preparación de cuadros y gráficos para diagramación: Katherine Araya Ballesterio.

Lectores críticos: Raúl Artiga, Edwin Castellanos, Karen Chacón, Alonso Brenes, Jacky Brincker, Jorge Cabrera, Lenin Corrales, Vladimir González, Hugo Hidalgo, Debora Ley, Mauricio Luna y Maximiliano Campos.

Taller de consulta: Se realizó el 30 de enero, con la asistencia de: Erick Alfaro, Raúl Artiga, Aaron Barquero, Alonso Brenes, Jackeline Brincker, Jorge Cabrera, Álvaro Cálix, Maximiliano Campos, Karen Chacón, Lenín Corrales, Félix Cristiá, Edipcia Dubón, Marco Hidalgo, Ana Evelyn Jacir, Otilia Lux de Cotí, Debora Ley, Mauricio Luna, Alberto Mora, Leonardo Merino, Jorge Vargas Culléll, Lucía Vijil y Ricardo Sol Arriaza,

Se agradecen los comentarios suministrados por: Héctor Dada Hirezi, Alida Spadafora, Melba Castillo, Arlette Pichardo, Edwin Castellanos, Iván Cerda y Vladimir González.

Para la elaboración de este capítulo fue fundamental el acompañamiento técnico de la Red Centroamericana de Ciencias sobre Cambio Climático (RC4). Esta red participó en el diseño y revisión de la estrategia de investigación de este capítulo y propició un espacio en su reunión anual realizada del 27 al 30 de agosto del 2024 en Guanacaste, Costa Rica, para la discusión de los borradores de los informes de investigación que sirvieron de insumo para este capítulo.

Se agradece el apoyo financiero y técnico de la NAP Global Network del International Institute for Sustainable Development (IISD), para la investigación sobre experiencias internacionales de adaptación al cambio climático.

Revisión de cifras: Katherine Araya Ballesterio.

Revisión de cuadros y gráficos: Rafael Segura Carmona.

Corrección de estilo: Gabriela Fonseca Argüello.

Diseño y diagramación: Insignia | ng.

Resumen

Este capítulo aborda el desafío estratégico de la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana (CARD), una región altamente vulnerable y con fuertes limitaciones para mejorar su resiliencia y reducir sus riesgos. Analiza evidencia científica sobre cambios registrados y proyectados en los patrones climáticos, la exposición y los elementos de vulnerabilidad en el territorio; esto con el fin de evaluar a detalle los objetivos (espaciales y sectoriales) que requieren las políticas en este campo. Además, elabora una sistematización inédita de más de 86 documentos de política, 269 iniciativas, acciones o programas y un conjunto amplio de buenas prácticas internacionales. En cada una de esas sistematizaciones, se analizaron de forma detallada sus características e implicaciones.

De acuerdo con los datos históricos y las proyecciones, la región enfrenta impactos climáticos diferenciados en el territorio: aumento de temperaturas, sequías, alteración de patrones de precipitación, ciclones más intensos e incremento en el nivel del mar. Estos afectan a la biodiversidad, los medios de vida, la infraestructura y la seguridad humana. En el escenario más pesimista de emisiones, el más viable según los últimos datos y tendencias (SSP5-8.5), se prevé un aumento de 2 °C a 4 °C para finales de siglo, con una reducción de las precipitaciones en algunas áreas hasta de un 31% y un aumento de la aridez, especialmente en el Corredor Seco Centroamericano y en la República Dominicana.

Las políticas de adaptación en CARD, analizadas en este capítulo, se han centrado en fortalecer capacidades institucionales, conservar la biodiversidad, promover la agricultura sostenible y

gestionar el agua. Los principales retos son la plataforma institucional, normativa y de recursos que permita abordar la adaptación, con enfoque en la población y sus riesgos. La fuerte dependencia del financiamiento internacional genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de estas iniciativas, aunque recientemente los países han comenzado a impulsar sus propias iniciativas en lugar de depender tanto de los organismos internacionales.

El estudio también destaca la necesidad de una adaptación transformacional, la cual debe reconfigurar modelos de desarrollo excluyentes y fortalecer la resiliencia territorial. Entre los principales desafíos se encuentra la integración de políticas públicas basadas en evidencia científica, el fortalecimiento de la gobernanza y el financiamiento, así como la priorización de sectores vulnerables como la infraestructura y la salud.

Una revisión de buenas prácticas internacionales muestra el papel de la

operación multisectorial, el uso de tecnología e innovación y la planificación territorial basada en el riesgo como pilares para fortalecer la adaptación en la región.

Desde una perspectiva general, el capítulo confirma que el cambio climático es una realidad en CARD y está impactando la producción, los ecosistemas, las actividades humanas y la seguridad de las personas en todos los países, aunque de manera diferenciada según los territorios y los distintos grupos poblacionales. En consecuencia, la adaptación es imperativa para evitar que se materialicen los peores escenarios y se profundice el impacto.

Avanzar en la adaptación requiere ir más allá de la inmediatez y adoptar un enfoque de políticas a mediano y largo plazo con visión territorial e intersectorial, basadas en evidencia sólida y con robustos mecanismos de seguimiento y evaluación. La adaptación también brinda a la región CARD la oportunidad de transformar dinámicas de desarrollo excluyentes, concentradoras e insostenibles para lograr el bienestar del mayor número de personas. Por ello, el capítulo también identifica desafíos concretos de forma propositiva, con base en los análisis realizados.

CAPÍTULO

2

Adaptación al cambio climático:
retos y oportunidades para
Centroamérica y República Dominicana

INDICE		Introducción
Hallazgos relevantes	119	<p>¿Por qué la adaptación al cambio climático es clave en el mundo y prioritaria en la región?</p> <p>El cambio climático es un proceso global en curso. El crecimiento económico desde la era industrial, junto con los patrones productivos de consumo, la contaminación, el uso del suelo y el deterioro ambiental han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos factores han alterado la composición de la atmósfera, cambiando los indicadores climáticos, generando eventos extremos más frecuentes e intensos y amenazando el equilibrio ecológico. Es un desafío mundial con responsabilidades claras en los grandes centros de crecimiento económico, pero con impactos -actuales y potenciales- en los medios de vida en todo el planeta, especialmente en las regiones menos desarrolladas.</p> <p>En el 2024, a pesar de los compromisos internacionales asumidos en el siglo XXI para mitigar las causas del calentamiento global mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y particularmente con el Acuerdo de París del 2015, el mundo experimentó un incremento histórico en la temperatura global. Por primera vez se superó el umbral establecido en dicho acuerdo (1,5 grados por encima de los niveles preindustriales) al alcanzar 1,6 grados Celsius, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (2025). Sin embargo, los avances han sido lentos e insuficientes, lo cual ha impedido alcanzar las metas y</p> <p>requerimientos urgentes en este ámbito. Además, numerosos países están planteando políticas regresivas, renunciando a afrontar el desafío con determinación y reconstruyendo un discurso contrario a la evidencia científica y la transformación de los patrones de desarrollo que originan el problema. Esto constituye un tema de alcance global, con significativos retos y riesgos para su abordaje, lo cual lo convierte en un asunto fundamental en cualquier discusión contemporánea. No se trata de un tema aislado, sino de una consideración imprescindible para integrar en cualquier agenda de desarrollo.</p> <p>Se han identificado dos abordajes principales para abordar el cambio climático (IPCC, 2022). Ante la fuerte evidencia científica y los intentos formales -aunque fluctuantes- para tomar medidas, las diferentes regiones del mundo enfrentan retos muy distintos entre sí. El proceso es complejo y tiene amplias implicaciones, por lo que cada zona y país requiere entenderlo y asumirlo desde distintos sectores institucionales, con acciones de diferente objetivo, dificultad, costo y alcance. Por un lado, para intentar contener el fenómeno mediante la <i>mitigación</i>, enfocada en reducir emisiones y el calentamiento global. Por otro, se prepara a las sociedades para enfrentar los impactos presentes y futuros de este proceso, reduciendo los riesgos y transformando los elementos que exponen o vulneran a la población, la infraestructura, los medios de vida y los ecosistemas (a esto se le conoce como <i>adaptación</i>).</p>
Importancia del tema	119	
Resumen	121	
Introducción: ¿por qué la adaptación al cambio climático es clave en el mundo y prioritaria en la región?	123	
Un punto de partida: el fuerte vínculo entre desarrollo humano y clima	124	
Fuertes cambios en el clima implican retos de adaptación territorialmente diferenciados	126	
Política pública y prioridades de adaptación al cambio climático en CARD	144	
Iniciativas de adaptación implementadas en CARD tienen un abordaje incipiente y diverso	152	
Desafíos y oportunidades para la acción	170	
Reflexión final: ¿dónde poner el énfasis de las políticas de adaptación?	176	

En Centroamérica y República Dominicana (CARD), en particular, los eventos climáticos propios de esta parte del mundo han sido, históricamente, fuente de importantes impactos y desafíos para la población, la infraestructura, la economía y los medios de vida. En otras palabras, la variabilidad climática existente golpea a la región de forma constante y con limitadas herramientas para reducir el riesgo. A esto se debe agregar una alteración de los patrones y normas por efecto del cambio climático global, lo cual exacerba estos impactos negativos y abre nuevos frentes de amenaza para el equilibrio natural y para el desarrollo humano sostenible.

Ante ello, y como se ha reconocido en los acuerdos internacionales desde París 2015, regiones como esta insisten en que las responsabilidades en el planeta son *compartidas pero diferenciadas*. Se debe abordar la generación de emisiones de GEI causantes del cambio climático, una responsabilidad de cada país y de la ciudadanía en la vida cotidiana. Para esto es importante que las políticas públicas se adapten a la realidad y desarrollo de cada territorio. En CARD, hay un bajo aporte a las emisiones mundiales (lo cual no exime de la urgencia de reducirlas) pero alta exposición a los posibles efectos del fenómeno, al ser unos de los “puntos calientes” de mayor impacto real y predecible a nivel global (IPCC, 2022). Esta exposición, junto con problemas sociales, económicos e institucionales, debilita el ordenamiento territorial, aumenta la pobreza, la exclusión y otros elementos que generan más vulnerabilidad. Esto resalta la urgencia de priorizar la otra dimensión de las acciones: la adaptación.

Según el *Quinto Informe Estado de la Región* (2011), en los primeros años de discusión internacional, el foco estuvo en la mitigación, área a la que se destinaron recursos internacionales, generando, entre otras cosas, un “mercado de compensación” de las emisiones de los países más desarrollados a través de medidas implementadas en aquellos menos desarrollados (PEN, 2011). Sin embargo, las condiciones propias de la región CARD hacen prioritaria la adaptación, la prepa-

ración y respuesta a estos impactos, con el objetivo de reducir el riesgo para la población, la infraestructura y el desarrollo, así como mejorar la resiliencia presente y futura. La región enfrenta un creciente impacto de desastres a lo largo del tiempo, una amplia exposición a los eventos hidrometeorológicos y limitadas capacidades de gestión del riesgo. Por lo tanto, esta prioridad requiere avances en diversos ámbitos, alineados al concepto reciente de “adaptación transformacional” del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), una adaptación que conlleva cambios de fondo en los sistemas sociales, ecológicos o económicos para afrontar los impactos del cambio climático de manera sostenible y a largo plazo, y no solamente reducir las vulnerabilidades en los sistemas existentes (IPCC, 2022).

Este capítulo aborda, de manera específica, el tema de la adaptación. Se enmarca en la búsqueda de alternativas de acción para reducir los riesgos y la vulnerabilidad asociados al cambio climático y promover el debate público en relación con las oportunidades que esta discusión ofrece para mejorar la gestión ambiental y el uso sostenible del patrimonio natural de la región. La adaptación es una prioridad estratégica crucial para Centroamérica y República Dominicana. De acuerdo con este Informe, un *dilema estratégico* es un problema cuya solución se considera decisiva, necesaria y urgente en el corto plazo para lograr una situación distinta y deseable en el mediano plazo para la región (PEN, 2003). Es un obstáculo severo que limita en mayor o menor grado el desarrollo humano en al menos tres países de la región. Avanzar en acciones nacionales y regionales efectivas para la adaptación al cambio climático, será viable solo si la ciudadanía y tomadores de decisiones del sector público y privado compartan la misma prioridad y viabilidad de estas acciones, a partir de intereses comunes, riesgos y oportunidades identificados en este tema.

El capítulo analiza los factores de riesgo y el impacto en Centroamérica y República Dominicana, a la luz de los escenarios previstos. Como se mencionó

previamente, por las tendencias observadas en el plano internacional no solo de retraso sino de posible retroceso en las metas de reducción de emisiones, se asumió principalmente el uso de los escenarios más pesimistas. Además, se identifican los territorios, poblaciones y sectores productivos más susceptibles a sufrir los impactos de este fenómeno, y se recopilan y evalúan las prioridades de política pública y su vínculo con la evidencia científica.

El documento se estructura en cuatro grandes secciones principales. La primera sintetiza algunos datos de evidencia científica sobre los escenarios de cambio climático para la región y sus implicaciones para la adaptación. La segunda estudia las políticas públicas que adoptaron los países, así como sus principales enfoques y prioridades. La tercera sección analiza las iniciativas implementadas en CARD, tanto de los Estados como de otros actores, con lo cual se destacan sus características, enfoques y desafíos. La última sección aborda los desafíos y oportunidades para gestionar esta agenda, en términos de gobernanza, normativa y prioridades de acción, con una visión propositiva.

Un punto de partida: el fuerte vínculo entre desarrollo humano y clima

Los riesgos asociados con variaciones climáticas en Centroamérica y la República Dominicana está profundamente entrelazado con las condiciones de desarrollo humano de la región, algunas de las cuales se ilustran en el primer capítulo de este Informe. La vulnerabilidad de esos países ante los impactos de eventos climáticos es histórica y recurrente, y se agrava debido a factores estructurales como la pobreza, la desigualdad social, la degradación ambiental y la inadecuada infraestructura. CARD enfrenta desafíos importantes, como la recurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos y la insuficiencia de capacidades de adaptación, que amenazan el logro de objetivos de desarrollo económico y social. Las condiciones de riesgo no son únicamente resultado de las amenazas naturales, sino

también de factores sociales, económicos y políticos que amplifican los impactos de estos fenómenos (recuadro 2.1).

Algunos sectores son altamente vulnerables debido a su dependencia de las condiciones climáticas, como la agricultura, la salud pública, la infraestructura y la seguridad de personas y viviendas expuestas. La exclusión social puede llevar a asentamientos en áreas de riesgo y con falta de acceso a servicios básicos, lo cual afecta desproporcionadamente a

poblaciones marginadas como los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.

A su vez, la desigualdad territorial aumenta las vulnerabilidades, pues las regiones periféricas con menos infraestructura y oportunidades económicas enfrentan barreras significativas para adaptarse. Por ejemplo, los servicios concentrados en áreas urbanas dejan a las comunidades rurales desprotegidas ante eventos climáticos, reduciendo su res-

iliencia. La falta de planificación territorial y la ocupación desordenada del suelo exponen más a estas comunidades e incrementan el riesgo de desastres, un problema existente.

A pesar de estos desafíos, el cambio climático también representa una oportunidad para reconfigurar los esquemas del desarrollo. Un enfoque multisectorial, capaz de integrar políticas públicas coherentes, gobernanza efectiva e inversiones en infraestructura resiliente,

Recuadro 2.1

Exposición y vulnerabilidad climática: una construcción social

En todo análisis sobre cambio climático o riesgo, es clave entender la interacción entre las amenazas naturales, en este caso, y la vulnerabilidad socialmente construida. Para diseñar acciones de adaptación, especialmente aquellas enfocadas a la protección de las personas y sus medios de vida, es relevante enfatizar en esta relación entre los patrones de exposición y las condiciones de vulnerabilidad.

La exposición de las poblaciones a los fenómenos climáticos se ha convertido en un factor crítico en la configuración de su riesgo. Según el IPCC, la exposición se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones ambientales, servicios y recursos, infraestructuras o bienes económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados de forma negativa por el cambio climático. La exposición es una función de la distancia entre el sistema de interés y el área de influencia de los fenómenos potencialmente peligrosos; la localización geográfica y la distribución demográfica desempeñan un papel fundamental para determinar los niveles de exposición y, por ende, en la susceptibilidad a los impactos del cambio climático (IPCC, 2014).

En Centroamérica y la República Dominicana, el 35,12% de las personas vivían en áreas rurales en el 2023 (PEN, 2025). Estas áreas, a menudo carentes de

infraestructura adecuada y servicios básicos, son más vulnerables a eventos como las sequías y las inundaciones. Por otro lado, las áreas urbanas enfrentan desafíos relacionados como la densidad poblacional, el desarrollo no planificado y la expansión de asentamientos informales en zonas de alto riesgo, como barrancos y laderas empinadas (Hardoy y Lankao, 2011). Centroamérica ha experimentado una expansión considerable de las capitales y sus suburbios desde los años setenta, en algunos casos con alta densidad. Este crecimiento ha resultado en la proliferación de barrios marginales en terrenos propensos a deslizamientos de tierra e inundaciones (UN-Habitat, 2012). Las condiciones de vida en estos lugares pueden ser precarias, con viviendas construidas con materiales de baja calidad y falta de acceso a servicios como agua potable y saneamiento; bajo estas condiciones, la afectación por cambio climático tiene mayor probabilidad de amplificarse.

Por su parte, la vulnerabilidad al cambio climático depende en gran medida de la calidad del modelo de desarrollo existente. Entre sus principales factores están las desigualdades y asimetrías territoriales, las cuales impactan directamente la capacidad adaptativa de las personas. La vulnerabilidad regional se ve exacerbada por altos niveles de desigualdad en términos de ingresos, etnicidad y género, manifestándose de manera interseccional. Esto significa que grupos como los pueblos

indígenas tienen menos acceso a recursos y oportunidades; esto las vuelve más susceptibles a los impactos negativos del cambio climático. Las desigualdades en el ingreso limitan la capacidad de las poblaciones más desfavorecidas para prepararse y recuperarse de desastres, pues carecen de los recursos necesarios para implementar medidas de adaptación o reconstrucción (Lastra y Grados, 2021).

También la fragilidad productiva genera vulnerabilidad. La economía de muchos países centroamericanos depende en gran medida de sectores altamente dependientes del clima, como la agricultura, el turismo y la generación hidroeléctrica. Las pérdidas en estos sectores pueden afectar de forma significativa el bienestar económico de las comunidades y la estabilidad macroeconómica de los países (Eclac, 2022). Por último, también hay una gobernanza débil. El bajo índice de cumplimiento de las normas y la corrupción estructural en Centroamérica incrementan significativamente la vulnerabilidad de las personas y los países ante el cambio climático. Al mismo tiempo, esa debilidad afecta la planificación y la ejecución de proyectos de infraestructura crítica, necesarios para la resiliencia, entre otros aspectos.

Fuente: Brenes, 2024a.

aborda varias dimensiones del riesgo asociado a variaciones del clima. Esto incluye iniciativas como sistemas de alerta temprana, prácticas agrícolas sostenibles y promoción de tecnologías resilientes. Por su parte, reducir la exclusión social y las desigualdades territoriales mediante el fortalecimiento de la conectividad y el acceso equitativo a los recursos y los servicios básicos puede potenciar la adaptación.

Sin embargo, transformar los riesgos climáticos en oportunidades requiere una acción coordinada que integre inversión estratégica, planificación inclusiva y gobernanza sólida. De esta manera, será posible no solo mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático, sino también promover un desarrollo equitativo y sostenible en la región. El clima influye directamente en las condiciones del desarrollo humano, cuyos rezagos generan vulnerabilidad y exposición: abordar esta relación es una tarea fundamental de las políticas de adaptación.

Fuertes cambios en el clima implican retos de adaptación territorialmente diferenciados

La región CARD ya muestra claras tendencias de cambio tanto histórico como futuro en el clima. Como punto de partida, es clave evaluar la evidencia científica que permite entender la exposición de la región a los efectos de eventos climáticos y el grado de riesgo asociado a los distintos escenarios futuros, como parte de una tarea pendiente de valorar de manera integrada la vulnerabilidad en su conjunto. Aunque existe un fuerte consenso entre la comunidad científica internacional sobre esta evidencia, es importante reconocer los discursos políticos e ideológicos que la cuestionan, lo cual tiene repercusiones significativas en el debate internacional, electoral y en la definición de compromisos mundiales más sólidos. Esta primera sección presenta algunas conclusiones derivadas del uso de modelos para analizar la magnitud y las características del impacto del cambio climático sobre la región, en distintas dimensiones e indicadores, que permiten enriquecer la discusión sobre los retos en materia de adaptación.

Los escenarios climáticos representan proyecciones sobre las futuras condiciones del clima, basadas en diferentes trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y patrones de desarrollo social y económico. Su estudio es clave para la planificación y la adaptación, pues identifican las posibles magnitudes y la distribución espacial de los cambios en variables climáticas importantes. Dicha información permite identificar las áreas y los sectores más vulnerables al cambio climático y diseñar estrategias de adaptación efectivas.

En términos generales, las proyecciones del IPCC y otras fuentes de modelación sugieren condiciones climáticas futuras con variaciones significativas. Como se indicó en la introducción, debido a que las metas de reducción del calentamiento global no se están cumpliendo, este capítulo enfoca el análisis en los escenarios más pesimistas, en los cuales se proyecta un clima más severo para la región CARD. Este escenario se caracteriza por un aumento en la aridez, como consecuencia de cambios en la precipitación y la temperatura, y una mayor variabilidad climática. El IPCC recomienda utilizar estos escenarios para evaluar los mayores riesgos posibles y asegurar que los sistemas sean capaces de hacer frente a las peores proyecciones (ICAP, 2025). Para este capítulo se prepararon análisis en el escenario SSP5-8.5, basado en altos niveles de emisiones sostenidos en el tiempo debido a la continua dependencia de los combustibles fósiles en el mundo, consistente con las tendencias actuales en el debate internacional. A partir de esto, se realizó una caracterización territorial de los posibles efectos en el tiempo para identificar factores clave para adaptación.

De acuerdo con la información científica, la región presenta cambios notables y proyecciones en indicadores clave como su temperatura, precipitación y aridez. Esos cambios plantean desafíos importantes para la adaptación; entre ellos: la ubicación de infraestructura crítica -como las centrales hidroeléctricas- en áreas con expectativas de disminución de precipitación; la posible saturación de los centros de salud debido a enfer-

medades relacionadas con el aumento de la temperatura; la exposición de los centros educativos y la población de las zonas urbanas a la disminución de la precipitación (especialmente en los países del norte de CARD) y al incremento de las temperaturas, lo cual podría afectar el aprendizaje; la afectación a la infraestructura de transporte por eventos hidrometeorológicos extremos o altas temperaturas en algunas vías, además de posibles impactos en aeropuertos, puertos y líneas férreas por calor o aumento en el nivel medio del mar, entre muchos otros efectos. Los cambios en las precipitaciones, según la zona, tendrán impacto en los cultivos y causarán condiciones áridas y semiáridas en algunos casos, y una mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos como inundaciones y deslizamientos. Estos riesgos, que ya afectan a la población, aumentan la vulnerabilidad de la seguridad humana y de los medios de vida, lo cual puede llevar a falta de recursos esenciales para la vida y la producción -como agua, alimento y trabajo- y generar conflictos por los recursos naturales o desplazamiento de personas por razones climáticas, como se analizará adelante.

Un vistazo global: la región se vuelve más calurosa y propensa a eventos extremos

La alteración de patrones de temperatura y precipitación son algunos de los efectos más evidentes del cambio climático en la región, observados tanto en los datos históricos como en las proyecciones. Esto tiene diversas implicaciones; por ejemplo, las temperaturas extremas cálidas y prolongadas pueden causar estrés térmico en humanos y animales, incrementar la demanda de energía para refrigeración y deteriorar la calidad del aire. Estas condiciones también pueden influir en la agricultura, reduciendo los rendimientos y aumentando la evaporación de agua. Desde los años sesenta, las condiciones promedio en los países de la región (según datos del SICA) muestran tendencias claras (gráfico 2.1): las temperaturas extremas cálidas han aumentado mientras que las temperaturas extremas frías han disminuido (Seneviratne et al., 2021).

Gráfico 2.1

Región CARD

Variación de la temperatura media anual para los países SICA

(grados Celsius)

Fuente: Brenes, 2024a con datos del *Climate Change Knowledge Portal*.

El IPCC ha proyectado un aumento en la frecuencia y severidad de las olas de calor masivas hacia finales del siglo XXI (IPCC, 2021). Este fenómeno, atribuido al calentamiento global, representa un riesgo significativo para América Central y el Caribe. En un escenario en donde el calentamiento global alcance los 2,0 °C, la duración de la ola de calor anual más larga podría extenderse por más de 60 días adicionales, en comparación con un escenario de 1,5 °C (IPCC, 2021). Esto implica una exposición prolongada e intensa a condiciones de calor extremo, con posibles consecuencias para la salud humana y que pueden agravar las condiciones de sequía preexistentes. Bajo el escenario SSP5-8.5, se proyecta que Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana podrían experimentar una transformación de varias zonas a condiciones semiáridas¹ para finales del siglo (como se deta-

llará más adelante), con implicaciones en la agricultura y la disponibilidad de agua (ICAP, 2025). Además, esto puede afectar la salud pública (insolación, deshidratación y otras enfermedades relacionadas con el calor), la calidad del aire (aumento en la concentración de GEI y partículas finas), riesgo de incendios forestales y alteración de las condiciones de la biodiversidad (IPCC, 2021 y 2023).

Las precipitaciones extremas, caracterizadas por lluvias intensas en cortos períodos, son cada vez más frecuentes e intensas, lo cual se convierte en una amenaza altamente dinámica, pues desencadenan inundaciones, deslizamientos de tierra y erosión de suelos. A diferencia de las señales heterogéneas de las sequías, con variaciones regionales y temporales significativas (Seneviratne et al., 2021), como se verá adelante. Lo anterior evidencia que no es posible implementar un enfoque unificado para toda la región,

sino que se requiere una política pública con visión territorial y sectorial específica. Los impactos del cambio climático afectan a las comunidades vulnerables, como las del Corredor Seco Centroamericano, y que enfrentan mayores riesgos.

En general, la precipitación muestra comportamientos regionales complejos. Entre ellos, cambios en el *Mid-Summer Drought* (MSD), un período seco dentro de la temporada de lluvias, también conocido como canícula o veranillo. Desde la década de 1980 se han detectado tendencias espacialmente variables en su inicio, además de la cantidad de precipitación en la temporada lluviosa, el número de días secos consecutivos y totales, así como la ocurrencia de eventos de lluvia extrema en la región. Se ha identificado también una tendencia positiva en la duración del MSD, aunque no en su magnitud (Marengo et al., 2020). Estos cambios tienen importantes implicaciones para la agricultura, la gestión del agua y la planificación de la respuesta a emergencias. En particular, los eventos de lluvia extrema pueden provocar inundaciones y deslizamientos, los cuales incrementan el riesgo para las comunidades y complican las previsiones estatales para atender contingencias en estas temporadas.

Según las estimaciones, se estima que habrá una mayor frecuencia de eventos de lluvias extremas, pero con menor intensidad. Esta se refiere a la cantidad total de lluvia que cae durante eventos extremos de precipitación, mientras que la frecuencia hace énfasis en la cantidad de veces que ocurren estos eventos. Se proyecta una disminución en la magnitud de estos acontecimientos bajo un escenario de calentamiento de 1,5 °C, lo cual significa que, aunque las lluvias extremas serán menos intensas, continuarán ocurriendo. Sin embargo, para niveles de calentamiento global de 2 °C y 4 °C, se proyecta un aumento en la frecuencia de eventos extremos; esto sugiere que las regiones afectadas enfrentarán lluvia intensa con más regularidad (IPCC, 2021; Imbach et al., 2018).

Desde la segunda década de este siglo se pueden percibir zonas más lluviosas. En el mapa 2.1 las diferentes tonalidades de azul indican la magnitud de dicho

incremento, categorizando las regiones según un aumento que varía desde valores bajos de 0 a 32 mm, hasta los que superan los 81 mm anuales. Por su parte, la disminución de la lluvia diaria promedio, un fenómeno proyectado para varias zonas, incluyendo Belice, propone retos para la sostenibilidad de los recursos hídricos, la agricultura y los ecosistemas. Esta reducción puede tener consecuencias significativas, particularmente en áreas donde la agricultura de secano y la recarga de acuíferos dependen en gran medida de las precipitaciones. En Belice, por ejemplo, la disminución de la lluvia diaria promedio se proyecta con mayor intensidad durante el mes de julio (Seneviratne et al., 2021), un período crucial para la agricultura y la recarga de acuíferos. Esto podría exacerbar las

condiciones de sequía preexistentes, lo cual afectaría la disponibilidad de agua para varios usos.

El IPCC destaca la vulnerabilidad de la región en términos de precipitaciones, especialmente en el Corredor Seco Centroamericano, donde la aridez representa una amenaza creciente. Según el escenario SSP5-8.5, se proyecta que Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana podrían experimentar transformación de varias de sus zonas en semiáridas para finales del siglo (ICAP, 2025). A su vez, se prevé una disminución de las lluvias en todas las capitales de la región, excepto Ciudad de Panamá (Seneviratne et al., 2021).

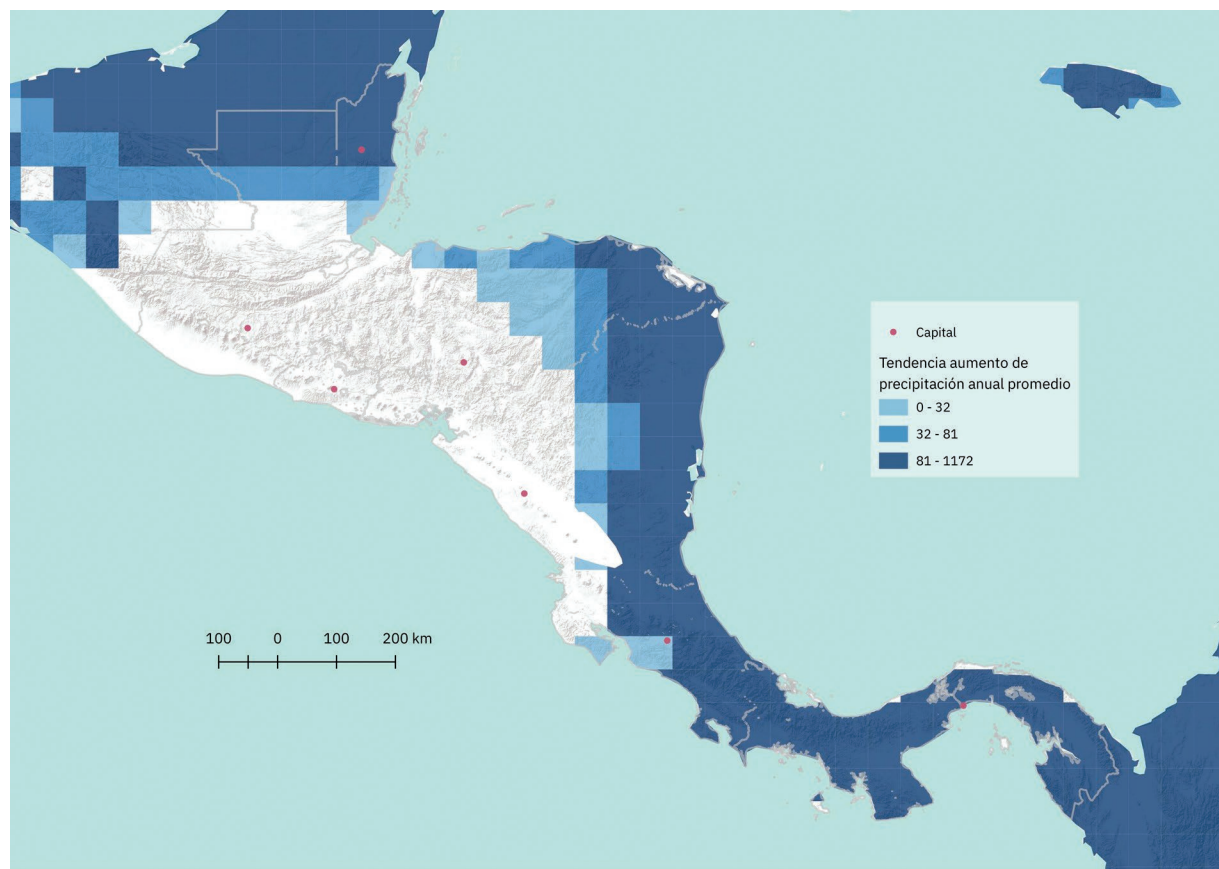
Por último, otra dimensión de los impactos se refiere a los eventos extremos vinculados a ciclones tropicales y

su intensificación, observado particularmente en el Atlántico y el Caribe. Bhatia et al. (2019) demuestran que estas tasas han aumentado en las últimas décadas. Mediante dos conjuntos de datos para calcular los cambios en la velocidad del viento a lo largo de 24 horas durante el período 1982-2009, los resultados indican que las tasas de intensificación observadas son altamente inusuales en comparación con las estimaciones basadas en modelos de variabilidad climática interna, lo cual sugiere una influencia significativa del forzamiento antropogénico; es decir, factores externos como el cambio climático podrían estar influyendo. Los ciclones tropicales no solo causan daños por vientos fuertes y marejadas ciclónicas, sino que también contribuyen a la precipitación anual (Chalise et al., 2021).

Mapa 2.1

Región CARD

Zonas que se han tornado más lluviosas. 1901-2012



Fuente: Brenes, 2024 con información de Global Climate Monitor.

Patrones climáticos con fuerte alteración en el Corredor Seco Centroamericano y la República Dominicana

Un análisis territorial más detallado permite identificar diferencias marcadas en cuanto al impacto del cambio climático en la región CARD, tanto entre países como a lo interno de ellos. Esa información permite entender que existen distintos retos para definir políticas de adaptación, a lo largo de estas unidades espaciales. Este punto es clave porque se trata de una región con pocas herramientas robustas de política pública y con visión territorial diferenciada que, además, requieren de coordinación interinstitucional y multinivel, basada en evidencia y con perspectiva de largo plazo.

En este capítulo se evaluaron algunos de los posibles cambios en indicadores climáticos a nivel municipal o cantonal, los cuales ilustran diferencias y proporcionan información útil para diseñar y ejecutar instrumentos adaptativos. Se consideraron varios grandes períodos importantes hasta finales del siglo XXI. Es importante entender una limitación de este tipo de análisis: al utilizar la división político-administrativa para mapear las proyecciones, dicha división no responde a criterios naturales sino a decisiones humanas. Por lo tanto, no es posible capturar ciertas diferencias; por ejemplo, que un país, departamento/provincia, municipio/cantón tenga características de dos regímenes de precipitación diferentes. Por tanto, se deben considerar los datos con cautela, pues las variaciones espaciales se generalizan al estar representadas en este tipo de mapas, basados en los promedios de la variable dentro de cada polígono. Para efectos de esta síntesis, se utiliza el nivel nacional y municipal. Para revisar los casos por departamento o provincia, ver Pérez et al (2025).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

véase Pérez et al., 2025, en
en www.estadonacion.or.cr

En lo referente a la precipitación, se observa una tendencia decreciente a nivel nacional en todos los escenarios hacia finales de siglo, con disminuciones entre el 5% y el 31% con respecto al comportamiento histórico (1979-2014). Esta tendencia se torna especialmente pronunciada en el escenario SSP5-8.5 considerado en este capítulo. Los escenarios del IPCC indican una tendencia general a que el área de estudio se vuelva más árida, siendo el escenario más pesimista el de las emisiones, pues se proyecta una reducción significativa, particularmente, para Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana. Por otro lado, El Salvador y Panamá experimentarían una menor disminución en las precipitaciones. Aunque esta escala especial de referencia es general a nivel nacional, resulta preferible alcanzar un nivel de mayor detalle para la toma de decisiones vinculadas con el uso del agua, la agricultura y otros aspectos, como se abordará más adelante.

El análisis a escala de municipios² permite visualizar con mayor detalle estos cambios en la disminución de la precipitación, principalmente en el Pacífico de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, en donde se da la delimitación del Corredor Seco Centroamericano (Quesada et al., 2019). En el Caribe, aunque algunos escenarios no evidencian proyecciones de cambio (como en el SSP1-2.6), con las estimaciones del SSP5-8.5 en el período de 2040-2060 en Honduras y Nicaragua se observa una disminución de la precipitación de alrededor del 10% respecto al comportamiento histórico, y ese patrón se incrementa a finales de siglo, con algunas zonas en las cuales se espera una reducción que oscila entre el 30% y 20%. El mapa 2.2 evidencia el cambio en niveles de precipitación de los municipios respecto al comportamiento histórico, para el escenario SSP5-8.5, el más pesimista en cuanto al nivel de emisiones.

Los mapas muestran uno de los principales desafíos en la adaptación al cambio climático: el comportamiento diferenciado de los patrones de precipitación en los diferentes territorios. Esto implica la necesidad de considerar esas brechas para la gestión de riesgos, la planifica-

ción hídrica y agrícola, entre otros aspectos. Generalmente, con importantes fluctuaciones en el tiempo y el espacio, se proyecta una tendencia hacia la disminución de la precipitación en la mayoría de los municipios de la región CARD para finales del siglo.

En el caso de Guatemala, en el primer período (2020-2030), se identifica que más del 50% de los municipios presentan un aumento del 10% (en promedio) en la cantidad de lluvia. Esta tendencia se mantiene en el segundo período (2040-2060). Para final de siglo (2079-2099), la precipitación destaca una disminución entre el 10% y el 30% en promedio en más del 80% de los municipios. En Honduras, durante el primer período (2020-2030), el comportamiento es muy similar a Guatemala. Sin embargo, para el segundo período se prevé que más del 60% de los municipios de este país experimentarían una reducción de hasta el 20% con respecto al histórico, y, hacia final de siglo, más del 80% de estos espacios percibirá una reducción entre el 10% y 40%.

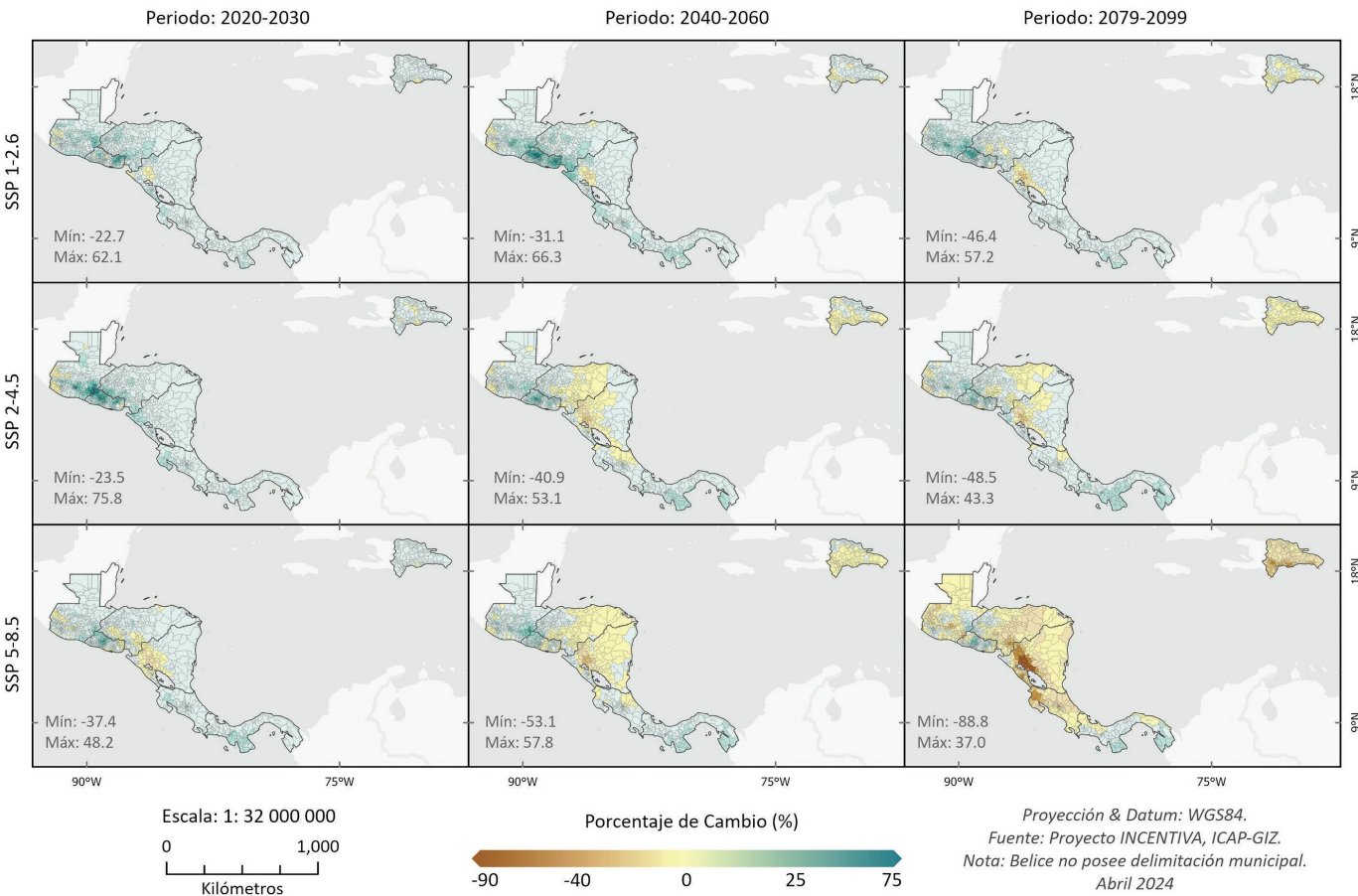
En El Salvador, más del 30% de los municipios tendrán una disminución de precipitación entre el 1 y 40% para finales de siglo. En Nicaragua, esa reducción afectará al 80% de los municipios, con caídas de hasta el 30% en el primer período y hasta el 60% en el segundo período. Para finales de siglo, algunos municipios nicaragüenses podrían enfrentar una disminución de más del 80% de precipitación con respecto al nivel histórico.

Para finales de siglo, en Costa Rica se proyecta una reducción en la precipitación de entre el 1 y el 20% en varios de los cantones. En Panamá la disminución solo se observaría en el 1% de los municipios al final del siglo. En la República Dominicana la situación es diferente, pues para el primer período no se esperaría una reducción de la lluvia; durante el segundo período alrededor del 6% de los municipios empezaría a experimentar una leve disminución. Sin embargo, para finales de siglo, más del 90% de los municipios podrían registrar una reducción de la precipitación que oscilaría entre el 10% y el 30%, con aproximadamente un 1% de los municipios con una reducción de hasta el 50%.

Mapa 2.2

Región CARD

Proyección del porcentaje de cambio en la precipitación respecto al promedio histórico del período 1979-2014, según escenarios de cambio climático
(Promedio por municipio/cantón)



Fuente: Pérez et al., 2025 con datos de ICAP, 2023.

En el caso de la temperatura, la variabilidad territorial cambia. Mientras a nivel municipal el patrón de precipitación muestra aumentos y caídas según el período y zona, en temperatura la tendencia es sostenida y en la misma dirección, con algunas diferencias territoriales de magnitud, pero no de tendencia. En general, los escenarios de cambio climático indican que se percibirá un incremento de la temperatura, empezando en el orden de los 0,5 °C para el primer período (2020-2030); es decir, un proceso en marcha, tal como se está registrando internacionalmente: el año 2023 fue el más caliente registrado según

seis modelos diferentes (OMM, 2024) y fue superado en el 2024, como se mencionó en párrafos anteriores. En CARD, con base en el escenario SSP5-8.5 (el más pesimista en cuanto a emisiones), se proyecta un aumento de temperatura promedio de 0,5 °C para el período 2020-2030 en todos los países. Entre el 2040 y el 2060 se espera que la temperatura aumente entre 1 °C y 2 °C, y para finales de siglo (2079-2099) Costa Rica y El Salvador podrían experimentar aumentos de hasta 3,5 °C, mientras que en el resto de los países se espera un aumento de 3 °C. En otras palabras, para toda la región se prevén cambios

significativos en la temperatura promedio que, junto con el comportamiento de las precipitaciones (a la baja hacia el mismo período), generan cambios de fondo en las condiciones climáticas, por lo que se requieren medidas de adaptación. La temperatura no se comporta de la misma forma que la precipitación, pues está condicionada por la altitud, pero la tendencia de alza se generaliza en el análisis territorial en la escala de municipios/cantones. De acuerdo con las proyecciones, en algunos puntos se puede esperar un cambio más marcado, por encima del promedio de cada período.

Con el escenario SSP5-8.5 (mapa 2.3) para el período 2020-2030, la mayoría de los municipios en CARD experimentará un aumento de temperatura de 0,5 °C. Un grupo de 551 de estos superan los 0,6°C. Por ejemplo, en la República Dominicana, algunos lugares situados al norte de la isla La Española en su vertiente del Océano Atlántico. En Panamá, en once municipios de la provincia Chiriquí -entre ellos Alanje, Barú, Boquerón y Remedios- aumentará la temperatura más allá de los 0,6 °C. En Costa Rica, prácticamente todos los cantones colindantes con el Océano Pacífico, a excepción de Nandayure y La Cruz (Guanacaste), tendrán ese mismo nivel de cambio.

En el período 2040-2060, se prevé un aumento de la temperatura en la costa pacífica de CARD, con alguna variación entre municipios, pero con tendencia al alza de más de 2 °C; esto afectará significativamente al Corredor Seco Centroamericano. En Nicaragua, por ejemplo, se verán perjudicados municipios como Villanueva, Somotillo, Chinandega y Telica, así como La Paz Centro en León. En Honduras, los municipios cercanos al Golfo de Fonseca, como Choluteca, Pespire (Choluteca) y Nacaome (Nacaome), experimentarán un aumento de temperatura. En El Salvador, varias localidades hacia el interior del país, como Quetzapelque y San Juan Opino (La Libertad) también

experimentarán incrementos de este tipo. En Guatemala solo cuatro municipios esperan el mayor aumento en la temperatura en ese período: Chajul, Cunén, San Andrés Sajcabajá (Quiché) y Aytla (San Marcos). En Costa Rica, se espera que Carrillo (Guanacaste), Garabito, Parrita (Puntarenas), Acosta, Turrubares y Puriscal (San José) registren aumentos de temperatura. En Panamá, los municipios Remedios y Tolé (Chiriquí), y finalmente en la República Dominicana 15 municipios, entre ellos Villa Vásquez, Guayabín (Montecristi) y Luperón, Villa Isabela (Puerto Plata), vivirán el mismo efecto.

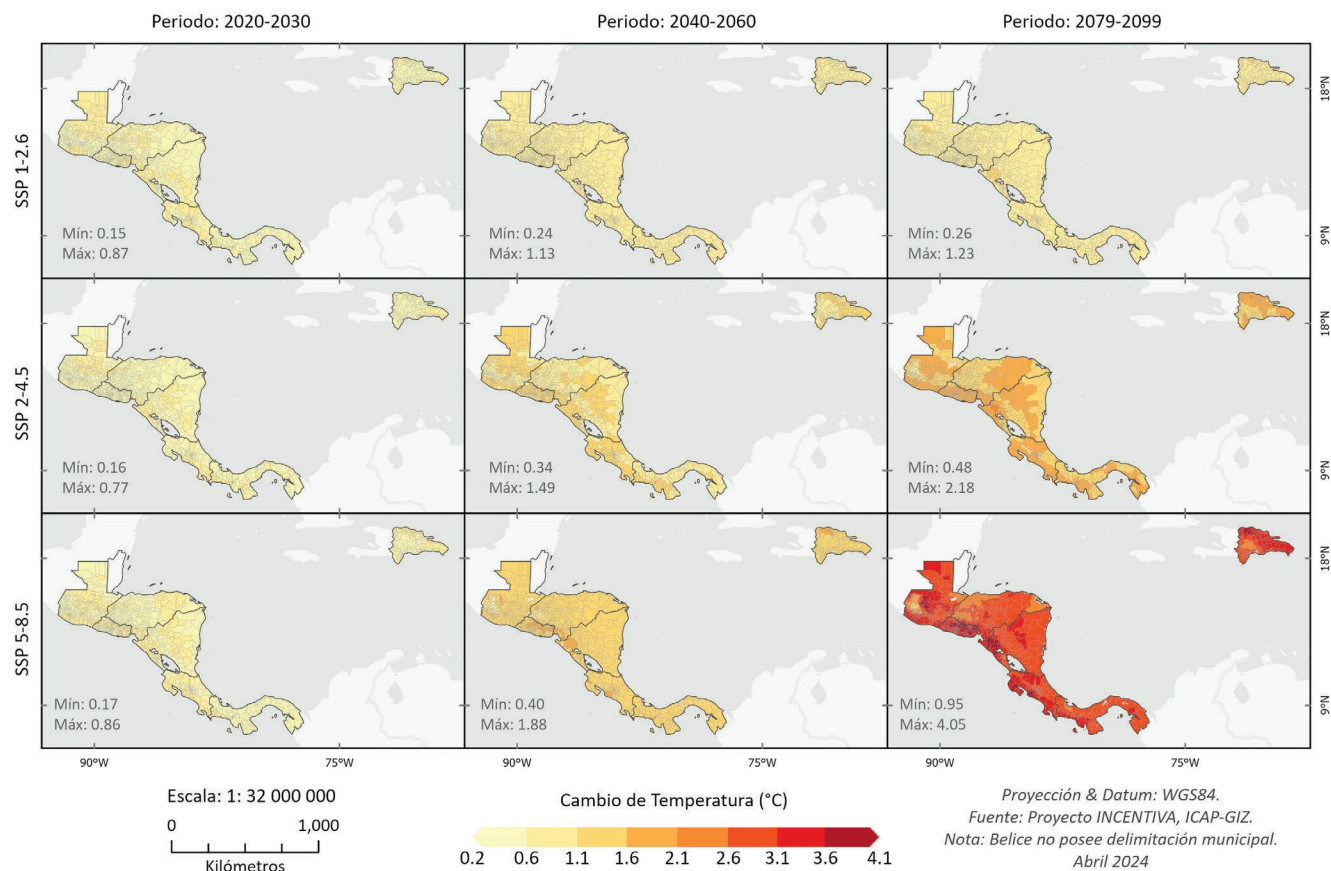
Ahora bien, para el período 2079-2099, el aumento de temperatura es significativo

Mapa 2.3

Región CARD

Proyección del porcentaje de cambio en la temperatura respecto al promedio histórico del período 1979-2014, según escenarios de cambio climático

(Promedio por municipio/cantón)



Fuente: Pérez et al., 2025 con datos de ICAP, 2023.

en casi todos los territorios en esta escala, entre 2 °C y 4 °C. Sin embargo, algunos municipios experimentarán incrementos mayores a los 3,6 °C (aproximadamente 130); por ejemplo, en Guatemala, en el departamento Chiché, se destacan Chajul, Chiniquel, Sacapulas, San Andrés Sajcabajá, entre otros. En Honduras, algunos municipios limítrofes con El Salvador como Mapulaca y Virginia (Lempira), Aramecina, Caridad y Langue (Valle). En El Salvador, 80 municipios registran este aumento de temperatura, todos en el interior del país, como Alegría, El Triunfo y Nueva Granada (Usulután). Por su parte, en Nicaragua, 12 municipios de los departamentos León (El Jicaral, La Paz Centro, Larreynaga, Telica, Quezalaguaque, El sauce y Nagarote) y Chinandega (Somotillo, Posoltega, Chichigalpa, Villanueva y Chinandega). En Costa Rica, Carrillo y Nicoya, en Guanacaste; Garabito y Parrita, en Puntarenas, y Puriscal y Turrubares, en San José. En la República Dominicana, nueve municipios superarán ese umbral: Guayabín (Montecristi), Guanico, Villa Isabela, Los Hidalgos (Puerto Plata), Bisonó, Villa González (Santiago), Esperanza, Laguna Salada y Mao (Valverde).

En términos generales, como se observa en el mapa anterior, la evolución de la temperatura en los periodos 2040-2060 y 2079-2099 es más pronunciada que el cambio entre la década actual y 2040-2060. Por ejemplo, en Guatemala, para el periodo 2020-2030, el 99% de los municipios experimentará un aumento de entre 0,5 °C y 1 °C. Entre 2040-2060, el 76% verá un incremento de 1,5 °C, pero para el periodo 2079-2099, el 85% de los municipios vivirá aumentos de entre los 2,5 °C y 4 °C. De manera similar, esta tendencia se observará en los demás países, a excepción de Panamá, donde se esperaba que el mayor incremento sea de hasta 3,5 °C.

La aridez surge como uno de los grandes desafíos adaptativos, efecto conjunto de diversos indicadores. La situación es crítica, en especial debido a su peso para el mantenimiento de condiciones necesarias para los medios de vida en la región. Zonas con previsible reducción de las

precipitaciones, aumento de temperatura y mayor aridez, constituyen objetivos territoriales claros para la política pública de adaptación al cambio climático.

La aridez indica la relación entre la lluvia que humedece el suelo y la necesidad de agua de la atmósfera. De acuerdo con la clasificación de la aridez de la FAO (1990) y según el escenario SSP5-8.5, la región experimentará cambios significativos. Para el periodo 2020-2030, Guatemala se cataloga como muy húmedo, mientras que la República Dominicana se categoriza como húmedo. Sin embargo, para el periodo 2040-2060, Guatemala pasa a húmedo y la República Dominicana a subhúmedo. Por su parte, para finales del siglo (2079-2099), se evidencian transformaciones significativas en todos los países: Guatemala se mantiene como húmedo, pero Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua cambian de húmedo a subhúmedo; Costa Rica y Panamá pasan de muy húmedo a húmedo y República Dominicana, de subhúmedo a semiárido.

Este comportamiento se puede observar con mayor detalle en la menor escala territorial aquí utilizada (municipio/cantón), con el mismo escenario de emisiones de referencia, evidenciando, nuevamente, alteraciones importantes para el Corredor Seco Centroamericano (CSC) y la República Dominicana. En el mapa 2.4 se puede observar en esa zona la evolución de las condiciones más áridas en este territorio.

Para el periodo 2020-2030, 31 municipios dentro del CSC se clasifican como seco-subhúmedo; por ejemplo, Choluteca, Apacilagua, Marcovia, Morolica, Santa Ana de Yusguare en Choluteca, Honduras y Tititapa, Ciudad Sandino, San Francisco Libre en Managua, y El Jicaral y La Paz Centro en León, Nicaragua. En la República Dominicana son 22 seco-subhúmedo (entre ellos Luperón y Villa Isabela Puerto Plata), Consuelo, Guayacanes y San Pedro de Macorís (San Pedro de Macorís). Como semi-árido en Nicaragua se puede mencionar a Corn Island y en Guatemala a Estanzuela. El país con más municipios en esta condición es la República Dominicana con 24; a saber: Villa Vásquez, Las Matas de

Santa Cruz, Castañuelas, Pepillo Salcedo, Montecristi y Guayabín (Montecristi).

En el periodo 2040-2060, en el CSC se aprecian claramente cambios en el Pacífico de Nicaragua. La costa de la República Dominicana presenta condiciones bastante secas, situación que se agrava desde el 2079 hasta el 2099. En América Central, en el CSC esta situación se acentúa más en el mismo periodo. Llama la atención el norte de Guatemala, con los municipios Flores, Melchor de Mencos, San Andrés y San José en Petén, que serán semiáridos. Para finales de siglo se incrementa el número de municipios en condiciones más secas aparece la categoría hiper-árido para Nicaragua y en la República Dominicana y un 48% de estos serán semi-áridos.

Todos estos cambios tienen implicaciones en múltiples niveles, que requieren acciones de política pública en adaptación como los medios de vida, la producción agrícola, la gestión hídrica, el riesgo de desastre y, en general, las condiciones de vida de la población, su desarrollo humano y el equilibrio ambiental, que pueden ser influenciadas por el clima. Esto se comentará más adelante en el capítulo. Sin embargo, como insumo para este tema y derivado de las proyecciones analizadas, el estudio de Pérez et al (2025) identificó un vínculo problemático entre la evolución de estos indicadores y varios elementos: uso del suelo e infraestructura. En lo primero, las estimaciones de aridez se traslapan de manera importante con dos tipos de uso: bosques y terrenos agrícolas (mapa 2.5). Este hallazgo es relevante por dos aspectos: a) como se verá adelante, las políticas e iniciativas de la región en materia de adaptación tienen un importante componente de protección de ecosistemas y biodiversidad; y b) el sector agrícola es de suma importancia en CARD y es crítico identificar los posibles cambios futuros en las condiciones climáticas para la producción.

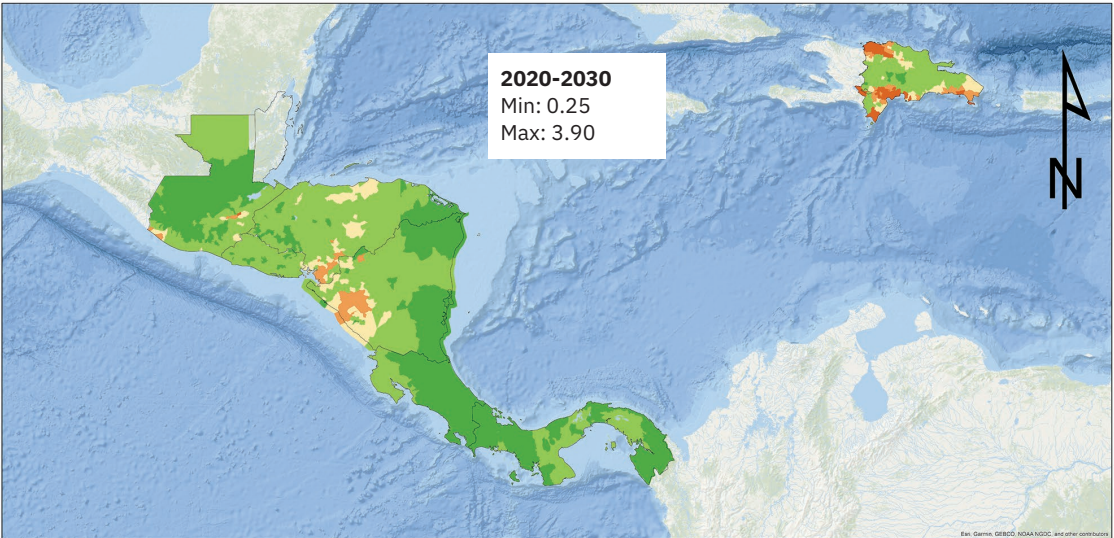
Así mismo, también hay traslapes con la presencia de alguna infraestructura crítica en la región CARD. De acuerdo con el escenario SSP5-8.5, se prevé que las centrales hidroeléctricas estarán ubicadas en municipios en donde

Mapa 2.4

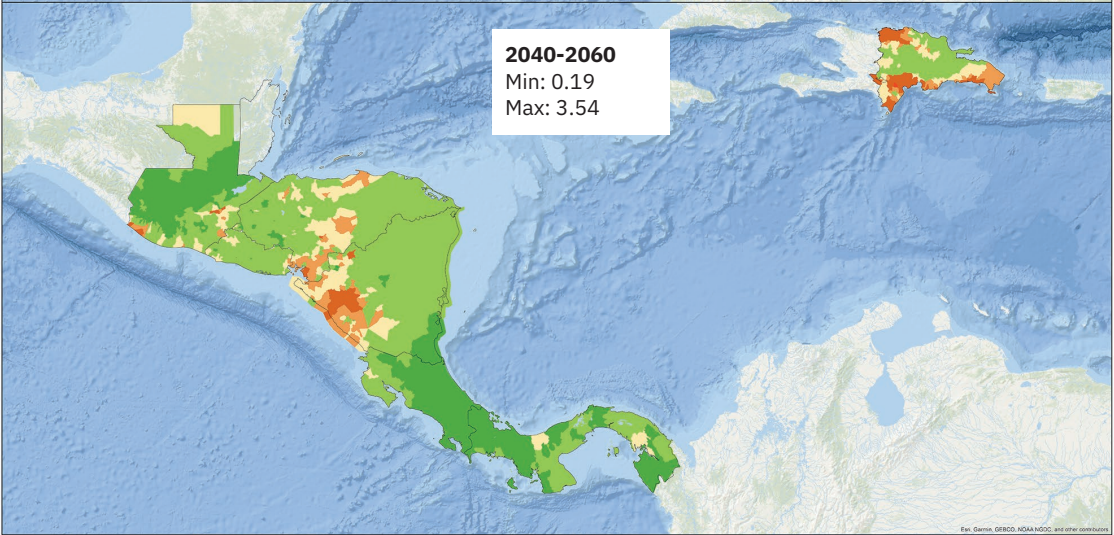
Región CARD

Proyección de nivel de aridez por municipio/cantón en el escenario SSP5-8.5, según periodo

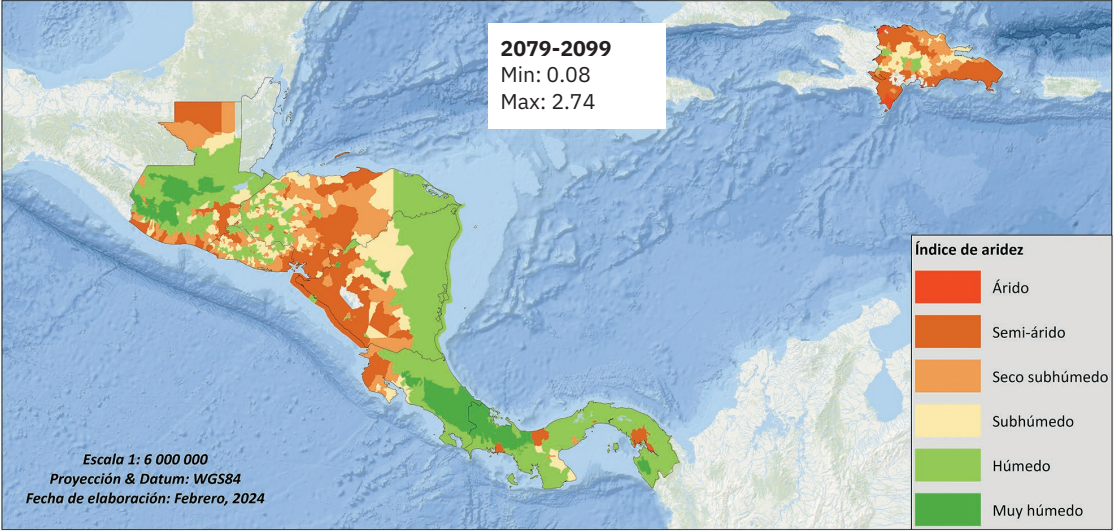
a. 2030



a. 2060



a. 2099



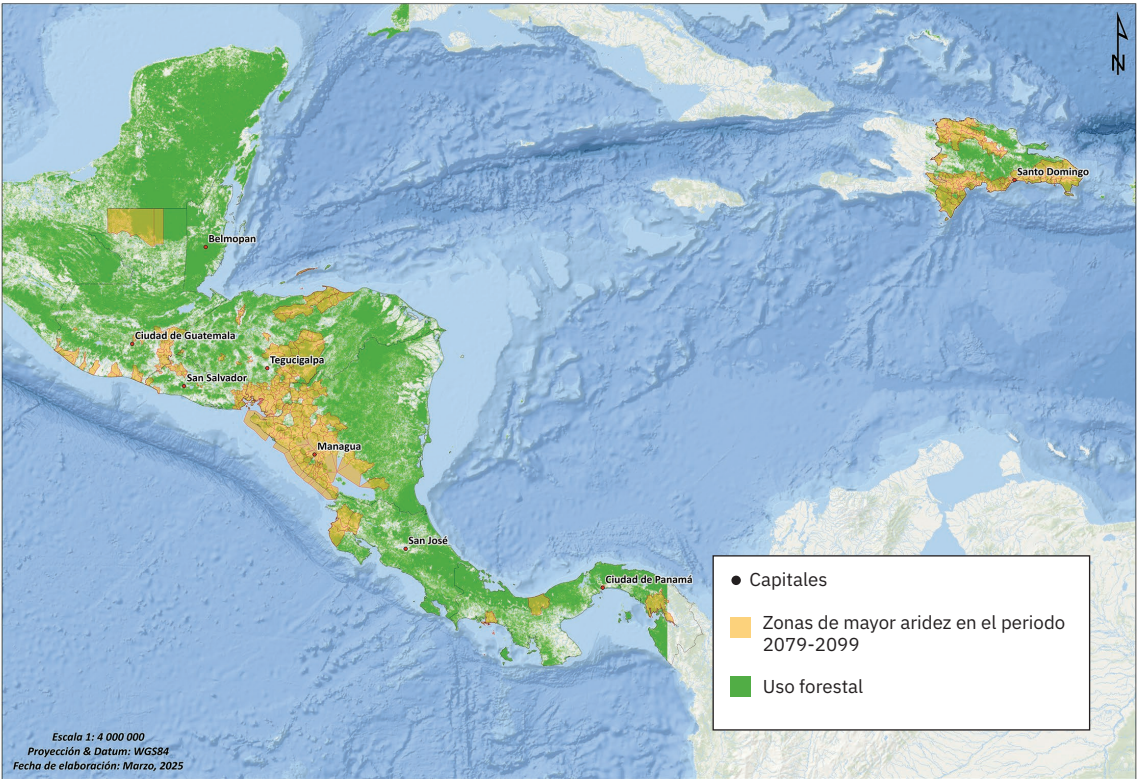
Fuente: Muñoz, 2025 con base en Pérez et al., 2025 y datos del ICAP, 2023.

Mapas 2.5

Región CARD

Proyección de zonas de aridez^{a/} y usos del suelo, en el escenario SSP5-8.5. 2079-2099

a) Bosques



b) Cultivos



a/ Incluye las tres categorías de mayor aridez: hiper-árido, árido y semi-árido. Fuente: Muñoz, 2025 con base en Pérez et al., 2025 y datos del ICAP, 2023.

se espera una disminución de la precipitación (mapa 2.6). Esto podría afectar la producción de energía eléctrica a partir de agua en Costa Rica, Honduras y Guatemala para el período de finales de siglo. Además, algunos centros de salud podrían enfrentar una mayor demanda debido saturados debido a enfermedades por el aumento de la temperatura, como choques de calor, deshidratación, enfermedad crónica renal e inclusive a enfermedades vectoriales, lo cual supone una presión sobre el sistema de salud de los países. En cuanto a los centros educativos, en algunas zonas se verán expuestos a la disminución de la precipitación, en especial en los países del norte, así como al incremento de las temperaturas. Esto requerirá de políticas de adaptación que incluyan tecnologías para maximizar el uso del agua y la climatización, con el fin de hacer frente a las olas de calor y su impacto en el aprendizaje.

La infraestructura de transporte puede verse afectada por factores climáticos, como ha sucedido históricamente, pero con mayor intensidad debido a even-

tos hidrometeorológicos extremos como deslizamientos, inundaciones y sequías. Además, las altas temperaturas pueden afectar la calzada según el tipo de material utilizado en su construcción; especialmente, las carreteras del Pacífico en Guatemala, El Salvador y Nicaragua podrían enfrentar más problemas hacia finales de siglo. A su vez, los aeropuertos, puertos y líneas férreas pueden verse afectados tanto por las temperaturas, en la durabilidad de los materiales, como por el aumento del nivel del mar en los puertos. Por último, la población situada en los centros más poblados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana a finales de siglo experimentarán condiciones áridas y semiáridas. Esto podría ocasionar presiones y conflictos por el uso de los recursos naturales y desplazamientos por movilidad climática, como se verá adelante (ICAP, 2025).

En resumen, a nivel territorial, el comportamiento de la precipitación y la temperatura promedio son consecuentes con las principales tendencias del cambio

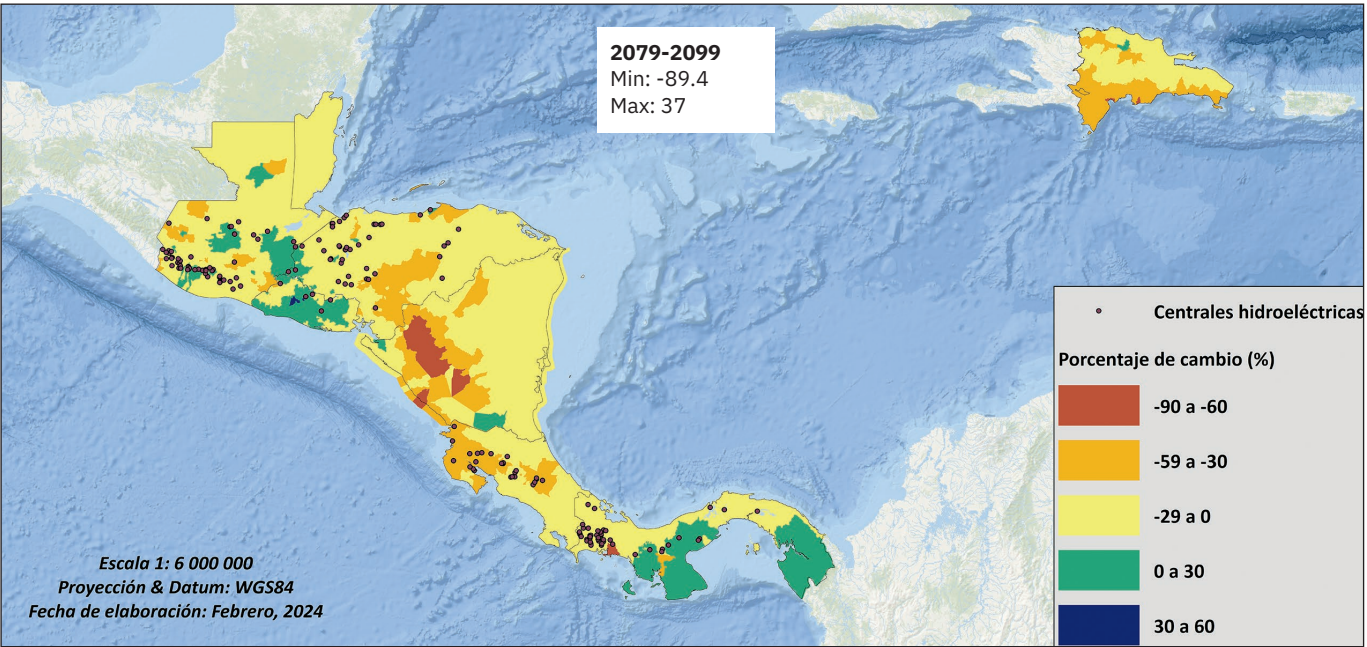
climático, al mostrar altos niveles de anomalía (el grado de cambio, en particular de temperatura, es notorio respecto a los niveles esperados a nivel global). La aridez es uno de los resultados importantes de ese cambio, y, en conjunto, estos generarán retos de adaptación diferenciados según el territorio, con particular foco en el Corredor Seco Centroamericano y en gran parte de la República Dominicana, debido a la presencia de zonas de cultivo, ciudades y ecosistemas que podrían ser afectados de manera significativa. No obstante, también habrá impactos relevantes en las zonas montañosas y costeras, como se verá adelante.

Grandes áreas de impacto vistas con el lente territorial

Adoptar un enfoque territorial frente a los retos de la adaptación al cambio climático es crucial para los países de la región CARD. Existen territorios con características únicas o estratégicas que requieren soluciones específicas para mejorar su resiliencia. La gestión integrada

Mapa 2.6

Región CARD
Proyección de nivel de aridez y ubicación de las centrales hidroeléctricas. 2079-2099



Fuente: Muñoz, 2025; con base en Pérez et al., 2025 y datos del ICAP, 2023.

de estas zonas puede optimizar el uso de recursos naturales, fortalecer las infraestructuras críticas y mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables. De manera complementaria, el enfoque territorial permite intervenir las agendas de desarrollo de forma más efectiva (Ostrom, 1990; IPCC, 2021). A continuación, se presentan algunos grandes tipos de territorios que podrían verse más afectados de acuerdo con el escenario AR6 del IPCC.

Zonas costeras verán sus dinámicas territoriales distorsionadas

Especialmente en el Caribe, las zonas costeras están expuestas al aumento del nivel del mar y a ciclones intensos. Enfrentan inundaciones, erosión de playas e intrusión salina en acuíferos, lo cual afecta la seguridad hídrica y la infraestructura costera (IPCC, 2014). La elevación del nivel del mar y los ciclones más intensos ponen en riesgo a las comunidades costeras, las cuales pueden sufrir desplazamientos forzados y pérdidas económicas significativas (IPCC, 2019).

El aumento del nivel del mar es un fenómeno global. De acuerdo con el IPCC (2021), el nivel medio aumentó 0,20 metros entre 1901 y el 2018 y, se prevé un incremento de 0,84 metros más para el 2100, debido a la expansión térmica y al derretimiento de los hielos tanto en los polos como en otros lugares del planeta. Entre sus efectos están tormentas más fuertes, erosión costera y salinización de las reservas subterráneas de agua. Esto afecta la infraestructura, el suministro del recurso hídrico, la biodiversidad, la agricultura y la pesca, lo cual resulta en la pérdida de tierras y el desplazamiento de personas (Juran et al., 2024).

En Centroamérica y la República Dominicana, cerca de 2,1 millones de personas viven en zonas costeras. La República Dominicana registra la población más grande en esa condición (511.502 personas), seguida por Honduras (417.979) y Panamá (386.105) (Juran et al., 2024). En el Caribe, en general, 17 de cada 100 habitantes viven en zonas

costeras de baja elevación. Surinam, Bahamas, Guyana y Belice son muy susceptibles a inundaciones provocadas por este fenómeno. Belice y Honduras se consideran particularmente vulnerables debido a su extensa línea costera, configuración geológica y baja altitud. Si no se adoptan medidas para reducir los efectos del aumento del nivel del mar, el costo futuro sería de aproximadamente 22.000 millones de dólares por año en la región del Caribe (Juran et al., 2024).

Además de las proyecciones a futuro, el aumento del nivel del mar ya documenta impactos. De acuerdo con Zea (2024), en Panamá 285 familias fueron trasladadas en mayo del 2024 de la Isla Cartí Sugdup, en el archipiélago de Guna Yala, a una nueva urbanización en territorio continental. Se trata de la primera reubicación masiva de una población en América Latina debido al incremento del nivel del mar; esto amenaza la integridad de las islas del archipiélago. El traslado ha implicado un cambio en los medios de vida de la comunidad indígena, que ha vivido del mar, de la pesca y del turismo, pero ahora dependerán de la actividad agropecuaria.

A su vez, la elevación del nivel del mar ha sido notable en los últimos años, especialmente en las playas de Miami y Tela, en el departamento de Atlántida, Honduras. La población ha utilizado 10.000 sacos de arena para evitar el avance, pero sin éxito (Ortez, 2024). En Guatemala, el fenómeno ha afectado la comunidad de Iztapa, incluyendo el cementerio local y viviendas, con pérdidas potenciales para las familias. El avance del mar ha perjudicado al sector productivo de la zona, especialmente el de la pesca y el turismo, que son las principales fuentes de ingresos de la comunidad; esto también provoca que más personas migren (López, 2024).

Costa Rica también es vulnerable al aumento del nivel del mar. Las simulaciones realizadas para Playas del Coco, Tamarindo y Sámara en la provincia de Guanacaste (norte del país) predicen que a partir del año 2030 las inundaciones comenzarán en los esteros. En Tamarindo, el estero y el manglar serán los más afectados, y en Sámara, los efec-

tos se concentrarán en las comunidades de Los Mangos y Cambute. A partir del 2100, las áreas circundantes a estas playas estarán inundadas, pues el nivel del mar aumentaría entre 0,60 y 0,90 metros. Esto afectaría la infraestructura, los cultivos y propiedades públicas y privadas (Lizano-Araya y Lizano-Rodríguez, 2022). Los escenarios para Moín y Cahuita, en la provincia de Limón en el Caribe, indican que para el año 2030 el nivel del mar habrá aumentado 0,36 metros y 0,51 metros, respectivamente. Para el 2070, ambas zonas experimentarán un aumento de un metro y para el 2100 será de dos metros (Lizano Araya y Lizano Rodríguez, 2023).

Junto con el aumento del nivel del mar, la combinación de mareas altas y tormentas puede causar inundaciones severas, dañando viviendas, carreteras y otras infraestructuras críticas (Woodruff et al., 2013). La erosión de las playas también es un problema grave, pues las olas fuertes y las marejadas ciclónicas desplazan grandes cantidades de arena, reduciendo la anchura y afectando el turismo, la principal fuente de ingresos para muchos países caribeños (Nurse et al., 2014). Se estima que para 2100, hasta el 50% de las playas del Caribe podrían desaparecer si no se implementan medidas efectivas (IPCC, 2014).

Los ciclones de mayor intensidad no solo generan vientos fuertes, sino que también aumentan las lluvias torrenciales y las marejadas ciclónicas, lo cual agrava las inundaciones. Las pérdidas económicas derivadas son sustanciales: la destrucción de infraestructuras, la interrupción de actividades productivas y los costos asociados a la reconstrucción imponen una carga financiera considerable para los gobiernos y las comunidades locales. La Cepal (2024a) estima que los desastres en América Latina y el Caribe ocasionaron pérdidas monetarias de más de 320.000 millones de dólares entre 1970 y 2022, con un gran impacto en el crecimiento económico y la inversión en desarrollo.

Para reducir la vulnerabilidad en estas zonas se han implementado diversas medidas de adaptación, por ejemplo, la construcción de diques y barreras

naturales para proteger las costas. En áreas de alto riesgo, la reubicación planificada de comunidades vulnerables ha sido adoptada como una estrategia para proteger vidas y medios de vida (Hart, 2024). La restauración de ecosistemas costeros, como manglares y arrecifes, también tiene un rol crucial, pues actúan como amortiguadores naturales contra tormentas y erosión. Los manglares, por ejemplo, son ecosistemas estratégicos que funcionan como barreras naturales contra la erosión costera y albergan una gran variedad de especies.

El Corredor Seco Centroamericano en expansión

Esta zona se extiende mayoritariamente por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como en parte de Costa Rica. Es una de las regiones más afecta-

das por las sequías prolongadas, dadas sus condiciones naturales relativamente secas. Esta zona alberga a una gran parte de la población centroamericana y de sus principales centros urbanos (mapa 2.7), aunque también incluye a millones de personas que dependen de la agricultura para su subsistencia y enfrentan altos niveles de pobreza (FAO, 2024). En las últimas décadas, la variabilidad climática y la reducción de las precipitaciones en esta región se han convertido en factores que aumentan la inseguridad alimentaria e impulsan el desplazamiento de la población.

La integración de las actividades productivas con los ecosistemas ha contribuido a disminuir algunos impactos del cambio climático y la variabilidad histórica del clima. La adopción de prácticas agroforestales, que combinan cultivos

agrícolas con árboles, mejora la retención de agua del suelo y proporciona sombra, lo cual reduce el estrés hídrico en las plantas. En Honduras, los programas de agroforestería han demostrado aumentar la resiliencia de las fincas pequeñas ante las sequías (Hyolmo, 2021). La reforestación y la restauración de ecosistemas son cruciales para mejorar la retención de agua y mitigar los efectos de las sequías, así como la afectación de las poblaciones que dependen de esta actividad.

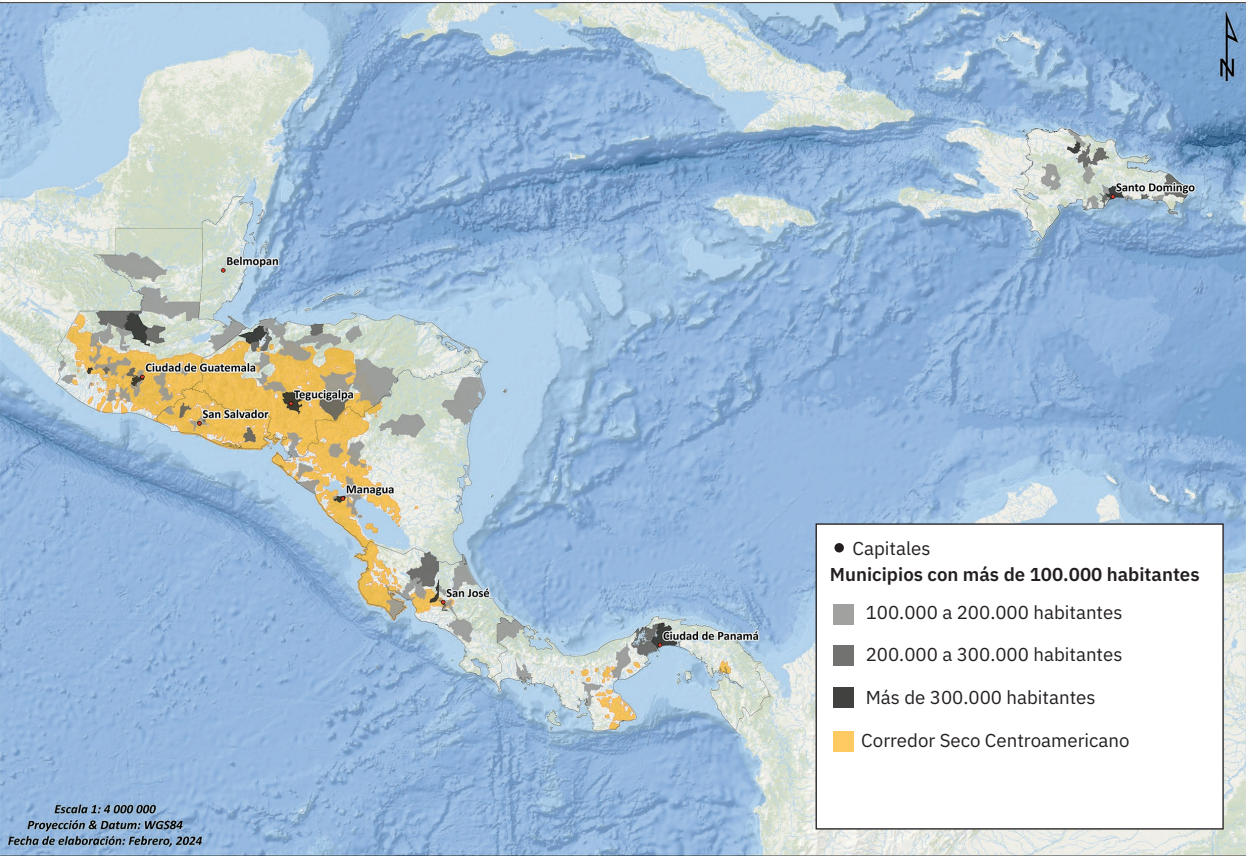
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO

véase Brenes, 2024a, en www.estadonacion.or.cr

Mapa 2.7

Región CARD

Principales aglomeraciones urbanas con respecto al Corredor Seco Centroamericano



Fuente: Muñoz, 2025 con base en Pérez et al., 2025 y Brenes, 2024a con información de Sedac.

Se alteran las condiciones en ecosistemas de montaña

Las comunidades indígenas y rurales en las zonas montañosas de Guatemala y Honduras son altamente vulnerables debido a su dependencia de los recursos naturales y la agricultura de subsistencia en ecosistemas frágiles. La reducción de la disponibilidad de agua y el aumento de la temperatura afectan de forma negativa los cultivos y el ganado, lo cual exacerba la pobreza y la inseguridad alimentaria en estas áreas (Milan y Ruano, 2014). En particular, las regiones montañosas enfrentan desafíos únicos debido a su aislamiento geográfico y a la falta de infraestructura adecuada, lo que complica la implementación de medidas efectivas.

El aumento de la temperatura también está modificando los patrones de cultivo en las regiones montañosas. Los cultivos que tradicionalmente se producían en estas áreas ahora enfrentan temperaturas que exceden su rango óptimo de crecimiento. Esto puede llevar a una disminución de los rendimientos y a una mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades. La ausencia de carreteras y sistemas de riego exacerba los problemas económicos y sociales de estas comunidades. Las dificultades para implementar medidas de adaptación efectivas, como la construcción de infraestructura resistente al clima, son significativas debido a la geografía y los elevados costos asociados (Eclac, 2015).

Avanzar en adaptación requiere identificar sectores y territorios prioritarios

Los efectos del cambio climático son diversos y están determinados por las características de los territorios y por las actividades desarrolladas en ellos. El análisis de los escenarios de precipitación, temperaturas y aridez realizado en los apartados anteriores (ICAP, 2025) así lo confirman. Por tal motivo, este Informe recolecta y sistematiza información georreferenciada de infraestructura crítica (puertos, aeropuertos, hospitales, centros educativos, carreteras), así como de infraestructura hotelera, población, incidencia de desastres y uso del suelo a

nivel municipal, para acercarse al conocimiento de los territorios en donde se prevé que habrá mayor afectación según los escenarios de cambio climático analizados.

Como aporte complementario a los datos previos, en esta sección se presenta un análisis detallado del escenario más probable (SSP5-8.5), con los mismos períodos de las modelaciones anteriores (2020-2030, 2040-2060 y 2079-2099), a una escala territorial municipal/cantonal. Para cada territorio se presenta una breve caracterización y se identifican algunas de las acciones prioritarias para impulsar la adaptación, a la luz de la información disponible para identificarlas. Se utilizan cartografías específicas para cada período, donde se analiza la evolución de la aridez y sus posibles efectos e impactos en los diversos municipios de cada uno de los países en estudio³.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRIORIDADES DE ADAPTACIÓN

véase ICAP, 2025, en www.estadonacion.or.cr

Los mapas elaborados por el ICAP y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica para este Informe permiten entender la distribución geográfica y la intensidad del fenómeno en varios indicadores, lo cual proporciona una base sólida para decisiones estratégicas en planificación urbana y rural, manejo de recursos naturales y reducción de riesgos y preparación ante desastres. Este enfoque identifica las áreas más expuestas y facilita el señalamiento de necesidades de adaptación que puedan ser implementadas tanto por el sector público como por el privado. Como insumo y, a la vez, conclusión global, es claro que los cambios en patrones de largo plazo afectarán muchos territorios, pero de manera muy notoria, el Corredor Seco Centroamericano y algunos territorios de la República Dominicana tendrán que afrontar una marcada intensificación de la aridez (mapas 2.8), para la cual

este capítulo identifica “puntos calientes” en los cuales será de mayor peso hacia finales de siglo. A continuación, se presenta una síntesis de los hallazgos del análisis por país, el cual puede ser ampliado con la consulta de los mapas, cuadros y otra información en las investigaciones elaboradas para este Informe.

Guatemala

Según los escenarios para el período 2020-2030, la mayor afectación se concentrará en las regiones en el noroeste y suroeste del país, que presentan condiciones de aridez y semiaridez. Especialmente en áreas cercanas a las fronteras con México y Honduras, donde hay presencia significativa de población, centros educativos y centros de salud expuestos a estas condiciones climáticas adversas. No obstante, en el horizonte de mediano plazo mediano (2040-2060) la aridez se extiende hacia el centro del país, lo cual afecta de manera significativa las áreas de Huehuetenango, Chiquimula y Zacapa; regiones previamente semiáridas que en este período se tornan áridas. Tal como se comentó en líneas anteriores, esto afecta a infraestructuras críticas como centrales hidroeléctricas, carreteras principales y secundarias, además de mayor población. Por último, en el período 2079-2099 la aridez podría avanzar significativamente hasta cubrir grandes extensiones, en particular las áreas del noreste y sureste. Zacapa, Chiquimula y Jalapa presentan las mayores concentraciones de áreas áridas y semiáridas. La mayoría de las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, centros educativos y centrales hidroeléctricas) en estas regiones están ubicadas dentro de zonas áridas.

Para un mayor acercamiento se seleccionaron cinco municipios en estado crítico según el indicador de aridez: Cabañas, El Júcaro, Estanzuela, La Blanca y Ocosingo, para los cuales se hizo un análisis sobre las prioridades de adaptación con base en la información sociodemográfica, de uso de suelo, de infraestructura crítica y de incidencia de desastres hidrometeorológicos.

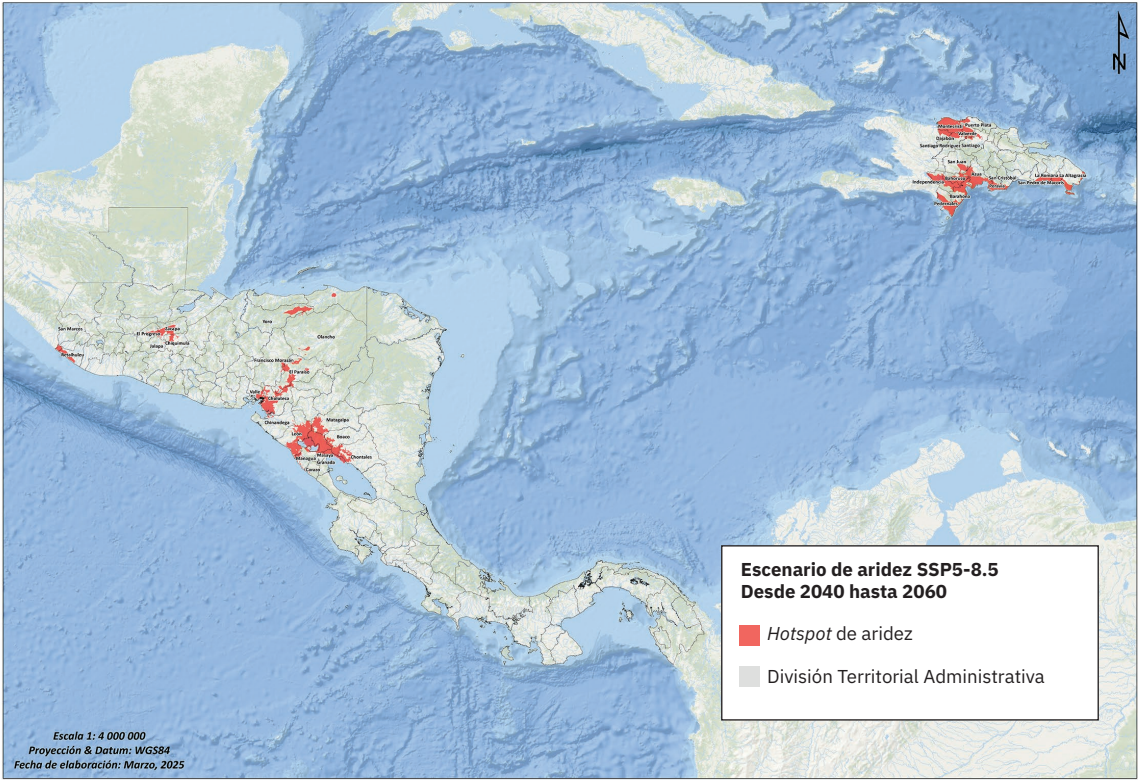
De acuerdo con la información, el municipio de Cabañas (71,22%) y

Mapas 2.8

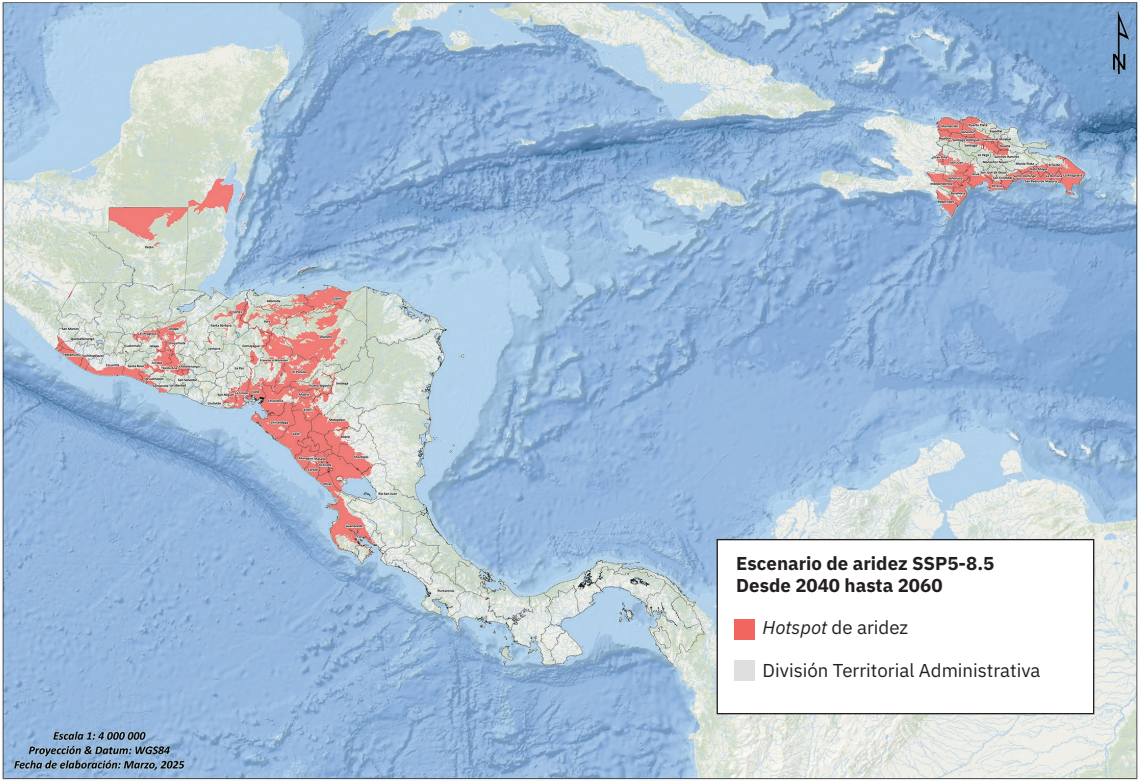
Región CARD

Puntos calientes^{a/} de aridez a partir de las proyecciones en el escenario de cambio climático SSP5-8.5

a) 2040-2060



b) 2079-2099



a/ Incluye las tres categorías de mayor aridez: hiper-árido, árido y semi-árido. Fuente: Muñoz, 2025 con base en Pérez et al., 2025 y datos del ICAP, 2023.

El Jícaro presentan una alta proporción de pastizales (66,75%). Si bien estos pueden ser más resilientes en condiciones de aridez, su predominancia sugiere una posible falta de diversificación en el uso de suelo, lo cual podría limitar la adaptabilidad económica y la resiliencia de estos municipios frente al cambio climático. En contraste, La Blanca (71,88%) y Ocós (64,47%) muestran un uso del suelo mayoritariamente agrícola. Este alto nivel de dependencia de la agricultura en áreas con creciente aridez podría plantear desafíos significativos, incluyendo la degradación de los suelos, la reducción en la productividad agrícola y mayores riesgos de inseguridad alimentaria.

La presencia de áreas boscosas es más significativa en Ocós (16,98%) y Cabañas (15,58%), lo cual podría proporcionar un cierto nivel de protección contra la erosión y mantener el microclima local. Sin embargo, el incremento de la aridez podría implicar riesgos para la supervivencia de estos ecosistemas en sus condiciones actuales.

Los municipios presentan un panorama diverso en cuanto a la incidencia de desastres hidrometeorológicos. En Ocós se registran 32 desastres, mientras que en los demás municipios se documentan entre seis (Estanzuela y Cabañas) o cero (El Jícaro). Esto indica que Ocós tiene una alta vulnerabilidad y refuerza la necesidad de priorizar medidas de adaptación. Estanzuela y Cabañas muestran menos desastres, pero son áreas críticas debido a su exposición a la aridez y porque dependen de la agricultura. Por otro lado, El Jícaro, a pesar de no registrar desastres, depende considerablemente de la agricultura y tiene antecedentes de sequías, esto la convierte en una zona altamente vulnerable, y sugiere la necesidad de implementar estrategias de adaptación proactivas en todos estos municipios.

Honduras

Para el período 2020-2030, las zonas más afectadas por la aridez se encuentran principalmente en el sur y centro del país, con algunos focos en el norte, sobre todo en áreas como Olancho y partes de Francisco Morazán. Los *puntos*

calientes de aridez comienzan a aparecer en regiones clave, la mayoría alrededor de los municipios de Morolica y San Antonio de Flores en el sur. Esto indica que dichas áreas podrían enfrentar desafíos en cuanto a la disponibilidad del agua y la viabilidad de ciertas actividades agrícolas.

En el horizonte temporal 2040-2060, se proyecta una expansión significativa de la aridez, lo cual afecta a un mayor número de municipios en el sur y se extiende hacia el norte y noreste del país. Las áreas alrededor de Olancho y Francisco Morazán se tornan más críticas. Infraestructura como carreteras y centros de salud, en las zonas afectadas, comienza a verse comprometida debido a las severas condiciones climáticas. Finalmente, para el período 2079-2099, se prevé que la aridez se generalice, cubriendo la mayor parte del territorio hondureño, con excepción de algunas zonas costeras y montañosas que permanecerán subhúmedas. Con la aridez predominante en gran parte del país, se anticipa que los municipios dependientes de la agricultura y de otras actividades sensibles al clima enfrentarán graves crisis económicas y sociales.

Para ampliar el análisis se identificaron los municipios de Choluteca, Marcovia, Amapala y San Lorenzo. El primero de estos es el más poblado y económicamente más activo; el 47,47% de su territorio está cubierto de pastizales y el 12,97% de bosque. La economía de esta región depende principalmente de la agricultura y la ganadería, lo cual la hace vulnerable a la aridez. Esto podría reducir la productividad y deteriorar la situación socioeconómica de su población, que ha experimentado episodios recurrentes de inseguridad alimentaria y nutricional. Es fundamental fortalecer la infraestructura de agua, diversificar la economía e introducir tecnologías agrícolas acordes a climas más secos. Por su parte, Marcovia, aunque es menos poblado que Choluteca, también depende en gran medida de la agricultura. Dado el tamaño reducido de su economía, las opciones para invertir en adaptación pueden ser limitadas. Para este territorio, es esencial priorizar la eficiencia en el uso del agua

y la introducción de cultivos resistentes a la sequía.

Amapala y San Lorenzo tienen poblaciones pequeñas y su dependencia de la agricultura y los recursos naturales es alta. Por tal motivo, enfocar las intervenciones en el manejo sostenible de los recursos naturales y fortalecer la infraestructura para proteger a las comunidades son asuntos relevantes en su agenda de adaptación. Amapala presenta una mezcla de terrenos dedicados a la siembra de árboles (56,41%), mantos acuíferos (3,72%) y vegetación inundada (3,01%). Aunque esto podría sugerir una cierta resiliencia, la aridez prolongada podría alterar los ecosistemas y afectar la biodiversidad. Ante esto, la protección y manejo de los bosques y áreas de agua para mantener los servicios ecosistémicos será esencial.

Finalmente, San Lorenzo, con el 47,21% de su terreno cubierto de pastizales y el 11,14% de área construida, enfrenta desafíos tanto en la agricultura como en la infraestructura urbana. La aridez podría perturbar la calidad de vida y la economía local. Reforzar la infraestructura urbana y mejorar la gestión del agua será crucial para mantener la habitabilidad.

Todos los municipios mencionados tienen una alta incidencia de desastres hidrometeorológicos: Choluteca (65 desastres), Marcovia (27 desastres), San Lorenzo (31 desastres) y Amapala (75 desastres). La recurrencia de desastres en estas áreas subraya la necesidad de estrategias de adaptación robustas para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia, pues estos territorios dependen económicamente de actividades sensibles al cambio climático, como la agricultura.

El Salvador

Durante el período 2020-2030, la aridez se manifiesta principalmente en el noroeste del país y afecta a municipios como San Antonio Pajonal y El Sauce. Estos ya presentan signos de vulnerabilidad debido a su ubicación en áreas que empiezan a experimentar condiciones más secas. La infraestructura crítica, como carreteras y centros de salud en estas áreas, podría enfrentar desafíos si

la aridez continúa en aumento. La población rural, dependiente de la agricultura y los pastizales, podría ver reducida su productividad debido a la menor disponibilidad de agua.

De acuerdo con las proyecciones, para el período 2040-2060, la aridez se extenderá hacia el este y el centro del país, por lo que afectará a una mayor cantidad de municipios, incluidos La Unión y Pasaquina. Estas áreas empezarán su vivir mayores desafíos en términos de acceso al agua y sostenibilidad agrícola. Además, la aridez en este período perjudicará a los municipios con una mayor población, como La Unión, lo que podría llevar a una mayor presión sobre los recursos hídricos y un aumento en la competencia por tierras agrícolas viables.

La aridez se amplía a casi todo el país en el período 2079-2099, con vastas áreas bajo condiciones áridas y semiáridas. Esto representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua para consumo humano y la habitabilidad en general. Municipios como San Alejo y La Unión, con grandes extensiones de tierra dedicadas a pastizales y agricultura, enfrentarán una disminución significativa en la productividad agrícola, lo cual podría provocar crisis alimentarias y económicas.

El análisis de las prioridades de adaptación se concentra en los municipios de San Antonio Pajonal, El Sauce, La Unión, Pasaquina y San Alejo. Los dos primeros tienen poblaciones y economías pequeñas, lo cual podría limitar su capacidad para enfrentar la aridez y mejorar la gestión del agua y las actividades económicas alternativas. Estos municipios dedican más del 70% de su territorio a pastizales y dependen de la ganadería y los recursos forestales. La aridez podría reducir la disponibilidad de agua, afectando la sostenibilidad de la ganadería y los servicios ecosistémicos de los bosques. Implementar prácticas sostenibles de manejo de pastizales y mejorar la gestión de los recursos hídricos serán clave para mantener la productividad en condiciones más secas.

La Unión, con 26.087 habitantes, es el municipio más poblado de los cinco en análisis, pero su economía es pequeña,

lo que podría aumentar la presión sobre los recursos y limitar su capacidad para adaptarse a la aridez. En este territorio es implementar sistemas de riego eficientes y programas de capacitación en técnicas agrícolas adaptadas a climas secos. Con casi la mitad de su territorio cubierto de bosques, hay facilidades para acciones de adaptación, aunque el cambio climático podría afectar la salud y diversidad de sus ecosistemas.

Por su parte, Pasaquina enfrenta desafíos significativos debido a su dependencia de la agricultura y la ganadería en un entorno cada vez más árido. Fomentar la diversificación de cultivos y la implementación de tecnologías de riego será crucial para mantener la productividad agrícola. Finalmente, en San Alejo, la aridez está afectando tanto la agricultura como los recursos naturales, por lo que promover la reforestación y la gestión sostenible de los recursos hídricos serán esenciales para reducir la vulnerabilidad frente a la aridez y evitar la degradación de los recursos forestales y la disminución en la productividad agrícola.

Respecto a los desastres hidrometeorológicos, de acuerdo con los registros de Desinventar al año 2023, La Unión y Pasaquina se destacan por experimentar gran cantidad de desastres (65 y 28, respectivamente), lo cual evidencia su alta exposición y refuerza la necesidad de priorizar medidas de adaptación. Aunque San Alejo y El Sauce presentan un menor número de desastres (14 y 3), siguen siendo municipios críticos debido a su exposición a la aridez y su dependencia agrícola. Por otro lado, San Antonio Pajonal no registra desastres.

Costa Rica

Durante el primer período (2020-2030), la aridez comenzó a manifestarse en la región de Guanacaste, especialmente en municipios como Liberia, Carrillo y Santa Cruz, en donde se mostraron signos de vulnerabilidad. Estas áreas son clave para la economía agrícola y ganadera del país, también en lo relacionado con el turismo, lo cual las hace especialmente sensibles a los cambios en la disponibilidad de agua.

En el segundo período de la modelación

(2040-2060), la aridez se intensificará y se expandirá a otras áreas de Guanacaste y algunos territorios de Puntarenas. Municipios como Bagaces y Nicoya han empezado a experimentar condiciones más severas, lo cual podría impactar su economía y la vida cotidiana de sus habitantes. Además, la expansión de la aridez hacia áreas con alta densidad de población y economía basada en la agricultura podría resultar en tensiones sobre los recursos hídricos y en un aumento de los costos de vida debido a la escasez de agua y la disminución de la producción agrícola.

En el último período (2079-2099), la aridez afecta de manera severa a casi toda la región de Guanacaste. Los municipios de Liberia, Bagaces y Carrillo experimentarán condiciones áridas de manera permanente, lo cual representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad de las economías locales. La reducción significativa en la productividad agrícola, junto con la posible degradación de los recursos naturales, podría llevar a crisis alimentarias y económicas, especialmente en municipios como Santa Cruz y Nicoya. Los sistemas de riego y las carreteras también podrían deteriorarse bajo estas condiciones extremas.

A diferencia de las regiones noroeste y central del país, que enfrentan un futuro caracterizado por la creciente aridez, la región del Caribe, particularmente la provincia de Limón, muestra una notable resiliencia frente a las condiciones áridas proyectadas. De acuerdo con los escenarios climáticos analizados para el período 2020-2099, dicha provincia se mantendrá en condiciones subhúmedas o húmedas a lo largo del tiempo.

Para profundizar el análisis, se seleccionaron cinco cantones: Bagaces, Carrillo, Liberia, Nicoya y Santa Cruz. El primero cuenta con un 38,12% de su terreno dedicado a pastizales y un 44,49% a árboles. La dependencia de estos recursos naturales, combinada con un 14,94% de suelos cultivados, lo hace un municipio vulnerable a la aridez. Por lo tanto, fomentar la conservación forestal y la diversificación de actividades económicas será esencial para reducir su vulnerabilidad.

Ahora bien, Carrillo presenta un alto porcentaje de suelos dedicados a cultivos (29,24%) y pastizales (40,76%), lo que indica una fuerte dependencia a la agricultura. La aridez podría afectar significativamente su economía. Implementar tecnologías de riego eficiente y promover cultivos más resistentes a la sequía serán estrategias clave para reducir los efectos de la aridez.

Con un 45,51% de suelos forestales y un 36,88% de pastizales, Liberia se vuelve una zona vulnerable a la degradación forestal y a la pérdida de productividad agrícola debido a la aridez. Este es, además, el municipio más poblado entre los analizados (88.576 habitantes). Reforzar la gestión de los recursos hídricos y promover la reforestación serán esenciales para mantener la resiliencia de este municipio frente al cambio climático.

Por su parte, Nicoya se caracteriza por un alto porcentaje de terrenos forestales (54,57%) y pastizales (37,70%), con una menor dependencia de los cultivos (3,01%). A pesar de esto, la aridez podría impactar de forma significativa a su economía ganadera. Es crucial implementar estrategias de manejo sostenible de los pastizales y diversificar la economía local.

Santa Cruz tiene una combinación importante de suelos forestales (56,13%) y pastizales (34,14%). La dependencia de estos recursos, junto con un pequeño porcentaje de cultivos (3,81%), hace que este municipio sea particularmente vulnerable a la aridez. En este municipio, así como en Carrillo, se presenta una fuerte presencia de infraestructura turística. Fomentar la reforestación y la gestión sostenible del agua, así como la diversificación de las fuentes de ingresos, será clave para mejorar la resiliencia de las actividades productivas a los impactos de la aridez. Santa Cruz, con una población de 74.969 habitantes, enfrenta desafíos similares a Nicoya, con una economía basada en recursos naturales propensa a la aridez.

Con respecto a los desastres de origen hidrometeorológico, de acuerdo con los registros de Desinventar al año 2023, los municipios de Bagaces (34 desastres), Carrillo (52 desastres) y Santa Cruz (42 desastres) destacan por su mayor inci-

dencia, lo que confirma su alta exposición y la necesidad de priorizar medidas adaptativas. Liberia (5 desastres) y Nicoya (14 desastres) tienen menores registros. Bagaces y Nicoya, aunque con un número moderado de desastres, también requieren atención urgente para implementar estrategias de adaptación, dadas sus características y riesgos inherentes. Liberia, a pesar de la baja cantidad de desastres registrados, sigue siendo un municipio clave en términos de adaptabilidad, debido a su exposición futura a la aridez y su importancia regional como centro logístico que concentra población y actividades económicas.

Panamá

Las proyecciones para el período 2020-2030 indican que la aridez afectará especialmente a la región occidental, cercana a la frontera con Costa Rica. No obstante, la mayor parte del territorio panameño permanece en condiciones subhúmedas y húmedas, con baja exposición inicial a la aridez. Las áreas afectadas son relativamente pequeñas y localizadas, por lo que el impacto en infraestructura y población será limitado durante ese período. Sin embargo, los municipios afectados deben planificar medidas de adaptación para reducir futuros riesgos.

Hacia el período 2040-2060, la aridez comenzará a expandirse, especialmente en las regiones occidentales y en algunas partes del centro del país. Municipios como David, Boquete y Bugaba comenzarán a mostrar signos de exposición, pues las condiciones climáticas cambiarán a un estado más seco. La expansión de la aridez podría empezar a afectar la agricultura y otras actividades económicas dependientes del agua en esas regiones. Es crucial que los municipios afectados implementen estrategias de manejo del agua y diversificación económica para adaptarse a las nuevas condiciones.

Para finales del siglo (2079-2099), se podría observar un aumento significativo en la extensión de las áreas áridas y semiáridas, especialmente en la región occidental y central de Panamá. Los municipios de la provincia de Chiriquí y partes de Veraguas podrían experimentar

un impacto considerable en sus actividades económicas y la calidad de vida de sus habitantes. Además, la aridez prolongada podría llevar a una disminución significativa en la productividad agrícola, afectando la seguridad alimentaria y la economía local. La infraestructura, como sistemas de riego y suministro de agua, también podría estar en riesgo, lo que requeriría inversiones significativas en su modernización y adaptación.

Sin embargo, aunque ciertas regiones de ese país, especialmente en el oeste y centro, experimentarán un aumento en la aridez, la mayor parte del territorio panameño se mantendrá bajo condiciones húmedas y subhúmedas. Incluso, a priori, no se ven amenazadas las centrales hidroeléctricas de los municipios de Tierras Altas, Dolega, Boquerón, entre otros.

Para profundizar se analizan cinco municipios: Aguadulce, Chitré, Guararé, Los Santos y Pocrí. Aguadulce presenta una economía relativamente fuerte pero dependiente de la agricultura. Guararé y Los Santos también tienen economías basadas en la agricultura, lo que podría agravar el posible impacto de la aridez. No obstante, estos dos municipios tienen entre el 53% y el 56% de su territorio dedicado a pastizales y el 31% a cultivos, mientras que Aguadulce cuenta con una menor proporción de estos usos y aproximadamente el 16% de cobertura forestal, lo cual favorece su resiliencia. En estos municipios, será necesario fortalecer la gestión del recurso hídrico mediante la implementación de sistemas de riego eficientes y promover prácticas sostenibles y cultivos resistentes a la sequía para mantener la productividad agrícola, así como diversificar la economía con actividades menos sensibles al clima.

Chitré enfrenta desafíos importantes debido a la expansión urbana y la competencia por los recursos hídricos, lo cual hace importante priorizar las inversiones en sistemas de riego eficientes y planificar un desarrollo urbano sostenible para proteger la economía local de los efectos de la aridez. Es, junto con Aguadulce (53.590 habitantes), los dos municipios más poblados de los cinco en análisis (57.909 habitantes). Chitré tiene una

combinación significativa de suelos dedicados a cultivos (21,94%) y áreas construidas (26,90%). La expansión urbana podría competir con las áreas agrícolas, exacerbando los efectos de la aridez.

Ahora bien, Pocrí cuenta con una población muy pequeña (3.745 habitantes), lo que podría limitar su disponibilidad de recursos para enfrentar los desafíos de la aridez. Su territorio está dedicado especialmente a pastizales (55,62%) y cultivos (33,94%); esto lo expone a mayores riesgos. La cooperación con otros municipios y el apoyo de organizaciones internacionales serán cruciales para implementar estrategias de adaptación y proteger a la ciudadanía.

En cuanto a los desastres de origen hidrometeorológico, según la base de datos DesInventar (2023), los municipios de Aguadulce (29 desastres) y Chitré (23 desastres) destacan como los más afectados en comparación con Guararé (5 desastres) y Pocrí (1 desastre), Los Santos (19 desastres) se ubica en una situación intermedia. Debido a la alta incidencia de desastres y su dependencia agrícola, Aguadulce y Chitré requieren intervenciones rápidas y específicas en infraestructura hídrica y agrícola. Guararé y Los Santos, aunque con menos desastres, deben enfocarse en la resiliencia agrícola y la diversificación económica para evitar riesgos futuros. Pocrí, a pesar de su baja incidencia de desastres, necesita atención para evitar que la aridez proyectada y la dependencia agrícola se conviertan en factores críticos de vulnerabilidad.

La República Dominicana

En el período 2020-2030, la aridez comienza a manifestarse principalmente en el suroeste del país, afectando zonas como Pedernales, Barahona y Azua. Estas áreas son conocidas por su dependencia en la agricultura y ganadería, lo que las hace vulnerables a condiciones climáticas más secas. La infraestructura en estas zonas podría comenzar a experimentar desafíos debido a la disminución de la disponibilidad de agua. Las personas que dependen de la agricultura podrían ver reducida su productividad, lo cual aumentaría la vulnerabilidad económica.

En el período 2040-2060, la aridez se podría expandir significativamente hacia el norte y el este del país, afectando municipios como San Juan, Neyba y Elías Piña. Esto sugiere un impacto más amplio y severo en la economía agrícola y en la disponibilidad de agua en una mayor parte del territorio. La expansión de la aridez hacia áreas más pobladas y con una alta dependencia de la agricultura podría provocar tensiones sobre los recursos hídricos, una mayor competencia por tierras fértiles y potenciales desplazamientos de la población.

Para finales del siglo (2079-2099), la aridez afectará a casi todo el sur y a gran parte del este del país, incluyendo a municipios como San Cristóbal, Santo Domingo y La Romana. Esto amenaza directamente la seguridad alimentaria, el suministro de agua potable y la estabilidad socioeconómica. La aridez extrema podría provocar una crisis agrícola y dañar la economía nacional. La infraestructura crítica, como sistemas de riego, carreteras y centros de salud, necesitará adaptarse para soportar las nuevas condiciones climáticas.

Para profundizar en el análisis territorial, se identificaron los municipios de Pueblo Viejo, El Peñón, Fundación, Cristóbal y Matanzas. Este último es el más poblado de los cinco (17.044 habitantes), tiene un 60,45% de su terreno dedicado a pastizales y un 12,78% a cultivos. La aridez podría afectar gravemente la ganadería, una actividad clave en la economía local. Fomentar prácticas de manejo sostenible de pastizales y buscar alternativas económicas serán esenciales para reducir la exposición de este municipio frente a la aridez.

Pueblo Viejo tiene una economía altamente dependiente de la agricultura, lo cual le expone mucho más a la aridez: presenta un 84,64% de su terreno dedicado a cultivos y solo un 3,16% a pastizales. Fundación también tiene un alto porcentaje del territorio dedicado a cultivos (68,58%) y pastizales (12,38%). La aridez podría reducir de forma significativa la productividad agrícola, afectando gravemente la economía local. Ello hace crucial invertir en tecnologías de riego eficiente y promover la diversificación

económica para incorporar actividades menos sensibles al clima para reducir la vulnerabilidad y riesgo asociados al clima.

El Peñón tiene 57,19% de su territorio dedicado a cultivos y un 13,94% a pastizales. Al igual que en Pueblo Viejo y Fundación, la aridez podría poner en riesgo tanto la producción agrícola como la ganadería. Fomentar el uso eficiente del agua y diversificar las actividades económicas será esencial para mantener la resiliencia en este territorio.

Cristóbal tiene una alta proporción de pastizales (48,11%) y un 30,91% de suelos cultivados, lo que la hace más vulnerable a la aridez, afectando la agricultura y la ganadería. Es esencial implementar prácticas de manejo sostenible de pastizales y mejorar el riego para enfrentar condiciones más secas.

Matanzas tiene un 60,45% de su terreno dedicado a pastizales y un 12,78% a cultivos. La aridez podría afectar gravemente la ganadería, una actividad clave en la economía local. Fomentar prácticas de manejo sostenible de pastizales y buscar alternativas económicas serán esenciales para reducir la exposición de este municipio a la aridez.

La afectación debido a los desastres en estos municipios ha sido mucho menor a los territorios analizados en otros países de la región: Pueblo Viejo (0 desastres), El Peñón (2 desastres), Fundación (6 desastres), Cristóbal (4 desastres) y Matanzas (12 desastres). Matanzas presenta mayor ocurrencia de desastres, lo cual sugiere una necesidad crítica de implementar medidas de adaptación robustas, especialmente en lo relacionado con la gestión del riesgo y vulnerabilidad (Desinventar al año 2023). Fundación y Cristóbal también presenta una mayor exposición que justifica el adoptar estrategias para gestionar el agua y fortalecer la infraestructura. Aunque Pueblo Viejo y El Peñón históricamente han registrado bajos desastres, su dependencia de la agricultura y las proyecciones climáticas indican la necesidad de prepararse para enfrentar condiciones más adversas en el futuro cercano.

Política pública y prioridades de adaptación al cambio climático en CARD

El cambio climático es un desafío central y estratégico para Centroamérica y la República Dominicana, especialmente en lo que respecta a mejorar los procesos de adaptación debido a la vulnerabilidad histórica de su población, infraestructura y ecosistemas a los eventos climáticos, en un contexto de desarrollo humano sostenible limitado que exacerba aún más el riesgo. Para abordar este desafío, es preciso responder de manera coordinada y efectiva tanto a nivel regional como nacional, y desarrollar políticas públicas que no solo sean adecuadas en contenido sino también equipadas de herramientas y capacidades para impactar en la resiliencia y la reducción de riesgos.

Como un primer acercamiento a la respuesta regional en este campo, esta sección analiza la dinámica de la formulación de políticas públicas relacionadas con la adaptación al cambio climático en los países miembros de Sistema de Integración Centroamericana (SICA) durante el período 2000-2023, según un estudio de Brenes (2024b) para este Informe. Se llevó a cabo una revisión de documentos generados tanto por los países del área como por foros multilaterales, y se identificaron las prioridades en la materia definidas por los gobiernos y las instituciones. Además, se evaluó su relación y correspondencia con los escenarios climáticos previstos para el área por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), explorando los mecanismos de financiamiento y seguimiento que sustentan estas acciones. En una sección posterior de este capítulo, se elaboró un análisis similar para iniciativas, acciones y proyectos vinculados con adaptación.

Claramente, la integración de políticas de adaptación en marcos legales multisectoriales es esencial para abordar los desafíos del cambio climático. Aunque se consideran instrumentos de adaptación en sectores clave como la agricultura, los recursos hídricos, la infraestructura y la salud, también se reconoce la importancia de una visión

transversal que abarque diferentes aspectos del desarrollo humano sostenible en contextos territoriales donde confluyen diversos desafíos sectoriales. Los países del SICA han incorporado la adaptación

en políticas de desarrollo más amplias. La metodología utilizada (recuadro 2.2) permitió identificar tanto avances como áreas que requieren mayor atención y recursos, desde dos puntos de partida: las

Recuadro 2.2

Síntesis de la metodología de análisis de políticas públicas de adaptación

La metodología empleada se centró en una revisión exhaustiva de documentos de política pública nacionales y regionales emitidos entre el 2000 y el 2023. Esta revisión incluyó leyes, planes, estrategias y otros instrumentos relacionados con la adaptación (en el cuadro 2.1 se cuantifican los 86 archivos de la muestra; el listado completo puede consultarse en Brenes, 2024b).

Además, se clasificaron las acciones identificadas “acciones tipo”. Esta noción se refiere a categorías estandarizadas de acciones políticas utilizadas para agrupar y sintetizar la variedad de medidas que se identifican en los documentos de política pública en análisis. Este concepto se desarrolló mediante un proceso de revisión y estudio comparativo de múltiples documentos nacionales y regionales. Cada uno presentaba una amplia gama de acciones específicas, desde la reforestación hasta la mejora de infraestructuras, pasando por la capacitación de personal y la implementación de sistemas de alerta temprana. Para facilitar el análisis, estas acciones se agruparon en categorías más amplias, conocidas como “acciones tipo”. El criterio de agrupación se basó en la frecuencia de aparición y la semejanza en la naturaleza.

También se incluyó la clasificación por sectores, lo cual facilitó el análisis detallado de las prioridades y la distribución de esfuerzos en diversas áreas y en distintos subperíodos, para apreciar variaciones y posibles tendencias. La clasificación permitió identificar las acciones más frecuentes y su impacto en diferentes sectores, proporcionando una comprensión clara de las prioridades de política pública en la región.

Se realizó un análisis comparativo para evaluar la coherencia entre las prioridades

de política pública nacional y regional, así como su alineación con los escenarios climáticos proyectados. Este estudio ayudó a identificar correspondencias y vacíos, evaluando cómo las políticas actuales abordan los desafíos específicos de la región. Además, se revisaron los mecanismos de financiamiento y seguimiento, examinando los instrumentos financieros disponibles y los sistemas de monitoreo y evaluación utilizados para implementar y supervisar las políticas de adaptación.

Las fuentes de información incluyeron instrumentos de política pública nacionales, planes nacionales de adaptación, estrategias climáticas y leyes sectoriales, así como documentos regionales como la Estrategia Regional de Cambio Climático. Los informes del IPCC, en particular el Informe AR6, se convirtieron en la fuente principal para contrastar las proyecciones y escenarios climáticos específicos para la región. Además, se utilizaron estudios y publicaciones científicas, que ofrecieron una base complementaria de conocimiento sobre cambio climático, gestión del riesgo y adaptación. Los datos y estadísticas recopilados de organismos internacionales y nacionales proporcionaron información cuantitativa sobre impactos climáticos, vulnerabilidades y medidas de adaptación, esenciales para un análisis detallado; en la medida de lo posible y disponible, se utilizó información estadística estandarizada y comparable en bases internacionales, como los Indicadores Globales de Desarrollo del Banco Mundial y la base sobre cambio climático del Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Brenes, 2024b.

normas e instrumentos generados desde los ámbitos nacionales y las políticas promovidas desde foros multilaterales.

Fortalecimiento de capacidades es la mayor prioridad en la política pública regional

Las normativas y herramientas de política sobre adaptación están distribuidas en diversas leyes, planes y políticas públicas relacionados con el desarrollo humano sostenible, además de los que corresponden específicamente a temas relacionados a la acción climática. Esto afecta la formulación y ejecución de estrategias de adaptación, pues la diversidad sectorial y temática tiende a superponerse en términos de mandatos, responsabilidades, ámbitos y escalas de la gestión pública.

Entre el 2000 y el 2023, los países de la región han emitido, actualizado y reformulado diferentes instrumentos de política pública dentro del ámbito de la acción climática⁴. La muestra de más de 86 documentos permite sugerir, al menos de manera aproximada, grandes narrativas y tipos acciones de política pública desde el año 2000. Se analizaron prioridades en adaptación desde los instrumentos nacionales y documentos regionales, a partir de las “acciones tipo” antes mencionadas, sintetizadas del total de políticas contenidas en los documentos revisados, cerca de 1.100 de estas acciones en total.

Los resultados muestran una combinación de tendencias y variaciones al analizar las prioridades según las acciones tipo y los sectores asociados. Esto puede indicar que, además de contar con un cuerpo temático e institucional bien consolidado (como ministerios de ambiente o entidades técnico-científicas, tales como los servicios meteorológicos), también se destacan temáticas emergentes, nuevos sectores e instituciones que se han sumado desde el año 2000 hasta la actualidad.

Los datos muestran la existencia de cuatro tipos de acción política que más se impulsan en la región: el fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas, la biodiversidad y conservación de ecosistemas, el desarrollo e implementación de políticas climáticas integradas y la

Cuadro 2.1

**Región CARD
Cantidad de instrumentos de política pública relacionados con adaptación al cambio climático**

País	Planes	Estrategias	Políticas	Agendas	Normativa y otros ^{a/}
Costa Rica	9	3	2	1	
El Salvador	7				3
Guatemala	3	2	3		1
Honduras	6	3	1		3
Nicaragua	7		2		
Panamá	8		1		2
República Dominicana	6	2	1		4
Regionales	2		2		1

a/ Leyes, reglamentos, programas, lineamientos, guías y estudios.
Fuente: Elaboración propia con base en Brenes, 2024b.

Gráfico 2.2

**Región CARD
Acciones propuestas en los documentos de política pública sobre adaptación al cambio climático, por sectores. 2000–2023 (porcentajes)**



Fuente: Elaboración propia con base en Brenes, 2024b.

promoción de prácticas agrícolas sostenibles (gráfico 2.2). Estas abarcan el 55% de todas las acciones revisadas; y dos de ellas aparecen dentro de las primeras cuatro a lo largo de todo el período, con pocas variaciones temporales.

El análisis revela la persistencia a lo largo de más de dos décadas del enfoque en el **fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas**, las cuales ha sido una prioridad constante. Esto puede reflejar la necesidad de construir una

base sólida para sustentar otras políticas de adaptación. Esta prioridad no solo demuestra que la capacidad institucional es un pilar necesario, sino también un factor crítico capaz de determinar el éxito de las políticas climáticas. Y, quizás, también refleja debilidades persistentes y el requerimiento de recursos que habiliten los procesos de adaptación para enfrentar los desafíos futuros. Entre otros aspectos, mejorar las capacidades garantiza que las políticas y medidas climáticas se implementen de manera efectiva (Virji et al., 2012). Las instituciones robustas y bien equipadas pueden coordinar acciones de mitigación y adaptación, manejar recursos y responder rápidamente a emergencias asociadas con eventos hidrometeorológicos (Pelling et al., 2008).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRIORIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN ADAPTACIÓN,

véase Brenes, 2024b, en
en www.estadonacion.or.cr

Resalta también la importancia atribuida a la **biodiversidad y la conservación de ecosistemas**. Esta prioridad denota una conciencia sobre el valor estratégico de los recursos naturales en la zona, en la cual la riqueza natural es vasta pero también vulnerable a los impactos del cambio climático, además de enfrentar múltiples presiones y degradación. La protección y restauración de los ecosistemas es una estrategia nuclear de adaptación. Pese a los desafíos de implementación, los países reconocen que la salud en los ecosistemas es esencial para la resiliencia frente a los cambios del clima. Este enfoque también sugiere una comprensión de que la pérdida de biodiversidad no solo representa una pérdida ecológica, sino que también tiene repercusiones directas en la seguridad alimentaria, la gestión del agua y la capacidad de las comunidades para adaptarse.

El **desarrollo y la implementación de políticas climáticas integradas** emergen como otro pilar fundamental en la

adaptación de los países analizados. Este enfoque holístico busca no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también integrar diferentes aspectos de la adaptación de un marco político unificado. La consistencia de esta prioridad a lo largo del tiempo sugiere que los países de la región están comprometidos con la creación de políticas efectivas y complementarias, que refuercen mutuamente sus objetivos. Este enfoque es esencial en un contexto donde los impactos del cambio climático se presentan de manera interconectada y multidimensional. La prioridad otorgada a la integración de políticas también indica una evolución a la gobernanza climática en la región, al pasar de esfuerzos aislados a estrategias más coordinadas y sistémicas. Esta evolución reconoce que la adaptación al cambio climático requiere una respuesta política que considere la complejidad e interconexión de los desafíos climáticos.

Estos elementos de la narrativa regional contrastan con el progreso de la adaptación al cambio climático en el mundo. De acuerdo con Brenes (2024b), mientras que la acción global ha expandido su enfoque para incluir una diversidad de estrategias, como el financiamiento climático y las soluciones basadas en la naturaleza, los países de CARD han mantenido una perspectiva centrada en la construcción de capacidades institucionales, la conservación de la biodiversidad y la integración de políticas climáticas. Esta diferencia representa una adaptación de la narrativa global a las realidades específicas de la región, en la cual la fortaleza institucional y la protección de los recursos naturales son vistas como prerequisites fundamentales para cualquier otra estrategia de adaptación. Aunque se comparten objetivos, como la necesidad de adaptación eficaz y la mitigación de impactos, la narrativa en esta región destaca por su enfoque en fortalecer los cimientos sobre los cuales se pueden construir y sostener otras políticas.

El análisis también revela una compleja interacción entre las prioridades nacionales y las tendencias regionales. Cada país evidencia una combinación única de enfoques, los cuales se reflejan tanto en sus políticas como en los resultados

de su implementación. Se destaca acá cómo estas políticas se alinean o desvían del promedio regional. A través de una revisión de las tendencias temporales, la coherencia interna y una comparación entre países, se exploran las similitudes y diferencias en las respuestas nacionales al desafío de implementar acciones de adaptación. La comparación entre las políticas nacionales y la tendencia regional promedio revela tanto alineaciones como desviaciones significativas (cuadro 2.2).

Parte de estas diferencias se explican por el énfasis que dan las políticas nacionales a cada tema. Por ejemplo, a pesar de la importancia crítica de preparar las áreas urbanas para enfrentar los impactos climáticos, como las inundaciones y las olas de calor, el *Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2018* de Guatemala ha dado menos prioridad a estas áreas en comparación con otros países de la CARD. Esta desviación podría significar limitaciones en la capacidad de implementación urbana o una priorización diferente de las urgencias percibidas en cada país; lo que podría afectar la integralidad de la dimensión territorial preparación de las ciudades guatemaltecas para enfrentar desafíos climáticos futuros. En el caso de Panamá, el *Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario 2018* muestra que, aunque se han adoptado algunas medidas de gestión del riesgo, estas no han sido tan prominentes o sistemáticas como en otros países de la región. El Salvador, aunque prioriza la implementación de políticas climáticas integradas y la captación de financiamiento climático, enfrenta desafíos en la coherencia interna y sigue siendo altamente dependiente del financiamiento externo. Esta dependencia subraya una vulnerabilidad que podría comprometer la sostenibilidad de sus políticas a largo plazo.

La diversidad y asimetrías se observan en el ámbito de las prioridades de política dentro de los sectores tradicionales de la agenda de desarrollo. También se pueden identificar tendencias claras de concentración sectorial, así como variaciones en esta concentración a lo largo del período analizado y particularidades entre el grupo de países de la región.

Cuadro 2.2

Región CARD
Distribución de las acciones tipo^{a/} clasificadas según sectores por país. 2000-2023
(porcentajes)

Acción tipo	Belice	Costa Rica	República Dominicana	El Salvador	Honduras	Panamá	Guatemala	Nicaragua	Promedio Regional
Biodiversidad y conservación de ecosistemas	0,0	2,5	7,4	7,8	20,0	7,8	29,2	21,2	12,0
Desarrollo de infraestructura urbana adaptativa	0,0	5,0	14,8	9,8	8,5	7,8	9,8	15,1	9,0
Desarrollo de infraestructuras agrícolas resilientes	0,0	10,1	3,7	1,9	0,0	5,2	4,8	0,0	4,6
Desarrollo e implementación de políticas climáticas integradas	18,1	5,0	18,5	21,5	5,7	15,7	9,8	6,0	11,4
Desarrollo tecnológico e investigación	0,0	1,2	7,4	0,0	8,5	18,4	0,0	3,0	4,6
Fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas	54,5	16,5	14,8	13,7	25,7	23,6	14,6	30,3	21,1
Gestión del riesgo de desastre	0,0	7,5	7,4	5,9	2,8	2,6	7,3	3,0	4,6
Gestión integrada de recursos hídricos	9,0	13,9	3,7	13,7	8,5	2,6	4,8	12,1	9,3
Mobilización de recursos internos y externos	18,1	11,3	0,0	7,8	5,2	7,8	0,0	3,0	6,3
Promoción de la educación y sensibilización climática	0,0	11,3	7,4	5,8	2,9	7,8	4,8	0,0	6,0
Promoción de prácticas agrícolas sostenibles	0,0	13,9	14,8	11,7	11,4	0,0	14,6	6,0	10,4

a/ Categorías estandarizadas utilizadas para agrupar y sintetizar acciones de naturaleza similar identificadas en los documentos de política pública analizados.
Fuente: Elaboración propia con base en Brenes, 2024b.

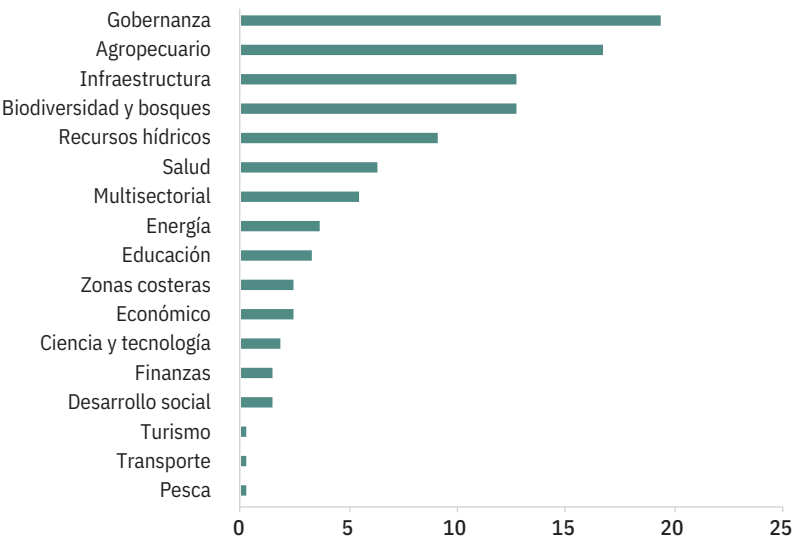
Las prioridades de acción de política pública se han distribuido y diversificado en un número creciente de sectores y subsectores, que se ven incrementalmente interpelados por la agenda de adaptación, lo que, *a priori*, podría considerarse beneficioso.

El análisis de las prioridades sectoriales revela una distribución marcada entre los sectores, con gobernanza y agropecuario como los principales en términos de asignación de esfuerzos (gráfico 2.3). Esta tendencia sugiere una estrategia que responde a las vulnerabilidades estructurales y a las oportunidades económicas presentes en la región. La alta prioridad asignada a la gobernanza, con un 19,4%, refleja la necesidad de un marco institucional sólido, capaz de coordinar y ejecutar políticas de adaptación eficaces en un contexto donde las respuestas rápidas y organizadas son cruciales para mitigar los impactos del cambio climático.

De igual manera, el enfoque en el sector agropecuario, con un 16,7%, evidencia la

Gráfico 2.3

Región CARD
Distribución de las acciones de política según sectores principales. 2000-2023
(porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con base en Brenes, 2024b.

importancia económica de la agricultura en la región y la urgencia de adaptar este sector clave a las nuevas realidades climáticas. Una posible explicación para la preeminencia de la gobernanza como el sector más priorizado podría relacionarse con la fragmentación institucional característica de la región. En contextos donde las instituciones pueden ser débiles o carecer de los recursos necesarios para implementar políticas de manera efectiva, la gobernanza se convierte en un eje fundamental para la creación de capacidades. Esto es coherente con los resultados previos en torno al fortalecimiento de capacidades como prioridad. Este enfoque podría estar impulsado por la necesidad de mejorar la coordinación intersectorial y asegurar que las políticas de adaptación se implementen de manera coherente y eficiente. Además, la gobernanza sólida es esencial para atraer y gestionar fondos internacionales, lo cual resulta especialmente relevante en

una región en donde los recursos locales son a menudo limitados. Esa priorización podría estar también influenciada por la creciente presión de los organismos internacionales y las convenciones globales sobre cambio climático, que exigen marcos de gobernanza más robustos como condición para el acceso a financiamiento y apoyo técnico.

La menor asignación de recursos a sectores como ciencia y tecnología, con el 1,8%, podría relacionarse con una percepción limitada de su papel en la adaptación al cambio climático, o con la existencia de barreras estructurales y culturales que dificultan su integración en las políticas climáticas. En muchos contextos, la ciencia y la tecnología son complementarias, más que centrales, en las estrategias de adaptación; esto podría explicar su baja priorización. Asimismo, el sector financiero, aunque crítico para sostener las iniciativas de adaptación, podría estar subestimado en su capacidad para movilizar

y gestionar los recursos necesarios, especialmente en economías donde el acceso al financiamiento es limitado.

El análisis evidencia una diversidad de enfoques sectoriales adoptados por los países en materia de adaptación. Esta diversidad refleja tanto las diferencias geográficas y socioeconómicas como las prioridades nacionales específicas, surgidas en respuesta a las amenazas climáticas. En este contexto, la manera en que los países priorizan sectores como el agropecuario y la biodiversidad y bosques es indicativa de sus estrategias de resiliencia (cuadro 2.3). En Honduras, por ejemplo, la concentración de políticas en el sector agropecuario (el 19,2% de sus esfuerzos) refleja la dependencia económica del país en la agricultura y su vulnerabilidad inherente a las variaciones del clima.

El impacto de las prioridades sectoriales en la implementación de políticas se observa en los casos de El Salvador y

Cuadro 2.3

Región CARD

Distribución de las acciones tipo^{a/} clasificadas según sectores por país. 2000– 2023

(porcentajes)

Sector	República Dominicana	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Nicaragua	Panamá	Honduras	Promedio Regional
Agropecuario	20,5	15,3	13,8	17,1	21,2	14,0	19,2	16,7
Biodiversidad y bosques	18,2	7,1	13,8	24,4	9,1	9,3	11,5	12,7
Ciencia y tecnología	4,5	2,4	0,0	0,0	3,0	2,3	0,0	1,8
Desarrollo social	0,0	0,0	1,7	0,0	6,1	4,7	0,0	1,5
Económico	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,4
Educación	6,8	3,5	5,2	0,0	0,0	4,7	0,0	3,3
Energía	4,5	4,7	6,9	0,0	0,0	4,7	0,0	3,6
Finanzas	2,3	0,0	3,4	0,0	6,1	0,0	0,0	1,5
Gobernanza	13,6	25,9	25,9	17,1	6,1	18,6	15,4	19,4
Infraestructura	11,4	14,1	13,8	14,6	15,2	4,7	15,4	12,7
Multisectorial	4,5	0,0	1,7	2,4	6,1	25,6	3,8	5,5
Pesca	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Recursos hídricos	0,0	14,1	8,6	9,8	12,1	4,7	11,5	9,1
Salud	11,4	2,4	3,4	9,8	9,1	2,3	15,4	6,4
Transporte	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Turismo	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,3
Zonas costeras	2,3	1,2	0,0	4,9	3,0	2,3	7,7	2,4

a/ Categorías estandarizadas utilizadas para agrupar y sintetizar acciones de naturaleza similar identificadas en los documentos de política pública analizados.

Fuente: Brenes, 2024b con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

Panamá. En El Salvador, la concentración en el sector de gobernanza ha facilitado la coordinación interinstitucional, lo cual ha permitido avances en la ejecución de políticas climáticas, como la mejora de la infraestructura de alerta temprana. En Panamá, por otro lado, el enfoque en el sector agropecuario ha revelado desafíos en la implementación de políticas inclusivas. Aunque el país ha priorizado la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, los pequeños productores han enfrentado dificultades para adoptar estas prácticas, lo cual indica que se debe acompañar de estrategias complementarias relacionadas con las disparidades.

Las intersecciones entre sectores revelan cómo las políticas de adaptación pueden ser más efectivas cuando integran múltiples dimensiones del desarrollo. En Costa Rica, la coordinación entre los sectores de recursos hídricos y gobernanza permite una gestión más efectiva del agua, lo cual asegura que las políticas de adaptación no solo protejan el recurso, sino que también mejoren la resiliencia de las comunidades dependientes del agua. Este enfoque integrador es fundamental para garantizar que los esfuerzos de adaptación no se realicen en silos, sino que aprovechen las sinergias entre sectores para lograr resultados más sostenibles y duraderos. De manera similar, en Honduras, la integración de prácticas agrícolas sostenibles con la conservación de los ecosistemas forestales en el sector café, muestra que la intersección de sectores puede reforzar tanto la productividad agrícola como la conservación ambiental, lo cual resulta crucial para la sostenibilidad a largo plazo.

Falta integrar más las prioridades con los escenarios climáticos y sus posibles consecuencias

Otro análisis relevante expone la correspondencia entre las políticas públicas de adaptación al cambio climático y las necesidades identificadas en los escenarios climáticos para la región; algunos fueron analizados en la primera parte de este capítulo. En esa relación, el estudio de los contenidos en la política pública en materia de adaptación aquí estudiada destaca áreas de alineación y brechas.

Algunos problemas como la erosión costera y el aumento del nivel del mar son prioritarios debido a su impacto en la infraestructura, el turismo y las comunidades costeras. Se requieren esfuerzos importantes de adaptación para estos procesos que generan efectos progresivos y exponenciales, siendo crítico abordarlos para prevenir daños socioeconómicos en las personas, la infraestructura y sus medios de vida. Sin embargo, el contraste entre los escenarios climáticos que proyectan el AR6 del IPCC y las políticas en los marcos regionales y nacionales sugiere que las estrategias deben fortalecer su enfoque en infraestructura resiliente, gestión de recursos y colaboración interinstitucional.

En este sentido, las políticas de adaptación en CARD muestran avances significativos en la alineación con escenarios climáticos y sus posibles efectos negativos, pero se torna necesario fortalecer la coordinación interinstitucional, fomentar infraestructuras resilientes, promover prácticas sostenibles e integrar tecnología y ciencia en la toma de decisiones. Este accionar se vuelve crucial para reducir vulnerabilidades y potenciar la resiliencia regional frente a los efectos.

En primera instancia, como se vio en este capítulo, las temperaturas extremas afectan sectores clave como salud, agricultura, energía e infraestructura. Las políticas públicas enfocadas en la capacitación institucional y técnica son esenciales para mejorar la respuesta a estos desafíos. La estrategia ASAC-CAC⁵ promueve la capacitación continua y la cooperación interinstitucional, al fortalecer la resiliencia en la región; sin embargo, no todos los temas cuentan con políticas enfocadas en la adaptación. En salud se requiere diseñar alertas tempranas y medidas preventivas para proteger a las poblaciones vulnerables. En la agricultura, las altas temperaturas reducen rendimientos; es crucial adoptar prácticas sostenibles y tecnologías innovadoras. Para energía, el incremento en la demanda de refrigeración obliga a fomentar energías renovables y eficiencia energética. En los ámbitos urbanos, se prioriza el desarrollo de infraestructuras adaptativas como techos verdes y sistemas de drenaje

sostenible, para mitigar los riesgos de inundación y mejorar la calidad de vida.

Del mismo modo, los eventos de precipitación extrema y las sequías estarán presentes en la CARD. La gestión integrada de recursos hídricos es clave para responder a patrones erráticos de lluvia. Las políticas deben coordinar el uso y conservación del agua mediante infraestructura resiliente como sistemas de almacenamiento de agua y redes de distribución eficientes para tratar las inundaciones y las sequías. Paralelamente, se requiere cooperación transfronteriza; por ejemplo, infraestructuras compartidas, como presas y embalses, facilitan la regulación del flujo de agua y previenen conflictos. En este aspecto, la participación comunitaria es clave, pues el involucrar a las comunidades locales asegura decisiones coherentes y basadas en datos científicos.

Otro efecto asociado a los escenarios climáticos es la mayor variabilidad en la precipitación. El sector agrícola, crucial para la economía regional, depende de prácticas sostenibles para enfrentar esa variabilidad climática y los cambios en los patrones y normas, tanto de precipitación como de temperatura. Políticas que fomenten la agroforestería, el manejo integrado de plagas y la rotación de cultivos mejoran la resiliencia y la eficiencia en el uso del agua. Este es uno de los temas prioritarios en las políticas implementadas en los países de CARD, aunque con problemas de ejecución y efectividad. También se destaca el uso de tecnologías verdes, tales como el riego por goteo y las coberturas vegetales para conservar agua. El aprovechamiento de tecnologías para establecer sistemas de monitoreo remoto optimiza la toma de decisiones frente a eventos extremos.

Por último, debido a la intensificación de ciclones tropicales y la vulnerabilidad de la región a estos eventos, es necesario implementar políticas centradas en infraestructuras resilientes y sistemas de monitoreo, aunque no parecen prioritarias en el análisis. Es clave la construcción de infraestructuras resilientes, edificios preparados para enfrentar vientos fuertes e inundaciones, la protección de infraestructuras críticas y la creación

de refugios seguros. Además, se requiere con sistemas de monitoreo y alerta temprana que proporcionen información precisa sobre ciclones, y que favorezcan medidas preventivas, evacuaciones seguras y planificación a largo plazo.

Junto a todos estos potenciales objetos para la acción, existen algunos efectos

derivados de los procesos de cambio climático presentes y futuros, según diversos escenarios, de profundo calado sobre la dinámica poblacional, pero de incipiente abordaje. Uno de ellos es el impulso que los impactos de diferentes eventos climáticos generan sobre la movilidad humana⁶. En una región de altos nive-

les de migración se torna clave levantar datos y visibilizar la relevancia de construir políticas públicas vinculadas al concepto de *movilidad climática* (recuadro 2.3), que ya registra en varios estudios datos preocupantes y áreas claras para la definición de acciones de política pública.

Recuadro 2.3

Movilidad climática: conceptos, datos y retos para la política pública

Un área clave para la adaptación es el vínculo entre movilidad humana y clima. En América Latina y el Caribe (ALC) se registra un alto nivel de migración en el mundo, con 41 millones de personas desplazadas, refugiadas o migrantes (Banco Mundial, 2023a). Aunque hay múltiples factores que contribuyen a estos flujos migratorios, la *movilidad climática* está siendo cada vez más presente. Este término se refiere al movimiento de personas o comunidades atribuible en gran medida de forma directa o indirecta a los efectos del cambio climático o a cambios repentinos o progresivos del entorno natural que afectan negativamente sus medios y condiciones de vida. Puede ser temporal o permanente, voluntario (migración), forzado (desplazamiento) o como parte de una reubicación planificada, ya sea interna (dentro de los países) o internacional.

Aunque cada vez se presentan más flujos transfronterizos, la movilidad climática se evidencia mayormente en flujos internos y con patrones diferenciados. Por un lado, los desplazamientos que responden a efectos del cambio climático o degradación ambiental suelen ser graduales pero permanentes. Por ejemplo, los hogares rurales que migran tras afrontar años de sequías difícilmente regresan a sus comunidades, como sucede en el Corredor Seco Centroamericano. Por otra parte, cuando ocurren desastres como terremotos o eventos hidrometeorológicos súbitos, los desplazamientos suelen ser drásticos pero temporales y la mayoría regresa a reconstruir sus hogares y medios de vida.

Se ha calculado que, en el 2023, 2,1 millones de personas fueron desplazadas internamente en ALC por desastres; casi cuatro veces la cantidad desplazada por conflicto y violencia ese mismo año (IDMC 2024). Se estima que para 2050, los impactos del cambio climático y la degradación ambiental podrían desplazar hasta 17 millones de personas adicionales en toda la región (Clement et al., 2021).

En CARD se está ampliando la base de conocimiento en este campo. La OIM analizó 228 documentos sobre temas relacionados con movilidad climática en Centroamérica e identificó como principales amenazas los impactos del cambio climático (no específico), sequías, huracanes, desastres e inundaciones (OIM, 2021). Las comunidades del Caribe y los Estados insulares se encuentran entre los más afectados. Tienen una mayor exposición a riesgos y limitada capacidad de adaptación, además de contar con redes sociales y personales que facilitan la movilidad dentro y fuera de la región.

El Banco Mundial proyecta que entre el 15% y el 30% de la migración interna en la República Dominicana entre el 2050 y el 2100 se deberá a factores climáticos⁷. Hasta el 2050, se esperan mayores flujos del campo a las ciudades por la baja productividad agrícola y capacidad pastoril, así como la escasez de agua. Sin embargo, para el 2100, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros serán polos netos de emigración climática, especialmente en zonas periurbanas con mayor escasez hídrica. Las regiones de El Cibao e Higüey recibirán más migrantes climáticos (proporcionalmente a su población) desde Haití, aunque en

términos absolutos se mantienen las zonas urbanas como los mayores polos de atracción (World Bank, 2024).

En Honduras, la movilidad climática se proyecta mayormente en comunidades indígenas y afrodescendientes, principalmente miskitos, pech, mayanga y tawahka; quienes combinan baja capacidad de adaptación local, alta vulnerabilidad social al cambio climático y degradación ambiental. En las poblaciones garífunas se registran altos niveles de vulnerabilidad climática, aunque no se proyecta que emigren tanto, por motivos de mayor arraigo cultural y territorial (Banco Mundial, 2023b).

Existen al menos tres pilares para abordar la movilidad climática en la política pública: a) un marco **jurídico e institucional coherente**, capaz de integrar las políticas nacionales, profesionalizar el servicio civil migratorio y coordinar entidades migratorias y climáticas; b) **invertir en adaptación**, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana, fomentando la participación local en la toma de decisiones y promoviendo la diversificación de medios de vida y; c) **acción preventiva**, que garantice el acceso a los servicios básicos en polos de atracción de movilidad climática y desarrolle instrumentos integrales de planificación territorial, como se ejemplifica en iniciativa *Mi Frontera* en la República Dominicana o en los Planes de Acción Climática promovidos por la *Greater Caribbean Climate Mobility Initiative* (World Bank, 2024).

Fuente: Aguilera y Martínez, 2025.

Financiamiento y evaluación: retos pendientes para las políticas de adaptación

El financiamiento climático en la región enfrenta retos que limitan la capacidad de adaptación al cambio climático. Entre estos se encuentran la falta de capacidades técnicas y administrativas en las instituciones gubernamentales, lo cual dificulta la preparación y gestión de proyectos que cumplan con los requisitos de las entidades financieras. Además, la debilidad en la gobernanza multinivel impide la articulación de políticas coherentes y la implementación efectiva de programas climáticos.

Las desigualdades económicas y sociales también influyen en el acceso equitativo y la distribución de los fondos. La mayoría de las políticas no abordan las necesidades de los grupos más vulnerables, lo que reduce el impacto positivo de los recursos financieros asignados. Los procedimientos burocráticos complejos y los estrictos requisitos de elegibilidad representan barreras adicionales, particularmente para los países pequeños y con menos capacidades institucionales.

Algunos mecanismos internacionales han financiado iniciativas relevantes, pero su efectividad es limitada debido a la capacidad de absorción reducida en algunos países, lo que retrasa la ejecución y el impacto de los proyectos. Además, la integración de innovaciones tecnológicas enfrenta problemas de escalabilidad y falta de infraestructura adecuada, y restringe su implementación a gran escala.

Para abordar estos retos, es clave fortalecer las capacidades locales e institucionales, simplificar los procesos de acceso a los fondos y alinear los mecanismos financieros con las prioridades nacionales. Además de fomentar la participación inclusiva de las comunidades locales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos. En Brenes (2024b) se puede consultar con mayor detalle las opciones de financiamiento para la región.

Por su parte, el seguimiento, monitoreo y evaluación (SME) de los instrumentos de política climática son

importantes para la eficacia y sostenibilidad de las acciones de adaptación. En la CARD, esos mecanismos incluyen mayormente los indicadores de desempeño, las auditorías ambientales y los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV). Además, herramientas como los SIG y los modelos de simulación también se utilizan, aunque de manera menos frecuente. Estos instrumentos han sido fundamentales en países como Costa Rica y la República Dominicana, donde han permitido una gestión climática más precisa y adaptable. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático en la República Dominicana (2015-2030) y la Política Nacional de Adaptación (2018-2030), la integración de estos mecanismos ha permitido identificar áreas de mejora y ajustar las políticas en respuesta a nuevas evidencias científicas. Las auditorías ambientales se destacan en contextos donde la eficiencia en el uso de los recursos es vital, como se observa en la Ley del Medio Ambiente (2012) de El Salvador, con auditorías periódicas para asegurar el uso efectivo de los recursos destinados a las políticas climáticas (Myrick, 2013).

Por otro lado, los indicadores de desempeño brindan una base cuantitativa esencial para medir el progreso de los objetivos planteados en las políticas climáticas. Estos indicadores, presentes en el 62,5% de los documentos analizados, permiten evaluar de forma objetiva el impacto de las políticas, así como facilitar la comparación entre diferentes períodos y regiones. En la Política Nacional de Cambio Climático (2016) de la República Dominicana, estos indicadores han sido cruciales para monitorear la efectividad de las estrategias aplicadas, mientras que en el Plan Nacional de Adaptación (2022-2026) de Costa Rica, los indicadores de desempeño han sido ajustados para alinearse con los cambios en el contexto climático y político.

Aunque los sistemas MRV son menos prevalentes que los indicadores de desempeño y las auditorías ambientales, su papel es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas en términos de políticas climáticas. Adoptado en el 27% de los documentos, el MRV es especialmente

relevante en compromisos internacionales, como la NDC Actualizada (2021) de Honduras. Este mecanismo garantiza la medición y reporte transparente de emisiones y acciones climáticas, y además permite la verificación externa, fundamental para la credibilidad internacional y el acceso a financiamiento climático.

La generación de informes periódicos sobre el estado de las acciones y proyectos es un componente esencial de los mecanismos de SME, pues garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. Estos informes, como se ve en la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2018-2030) de Costa Rica y la NDC 2020 de Nicaragua, ayudan a mantener informados a los tomadores de decisiones y a las partes interesadas, así como facilita la participación pública en la evaluación de políticas.

En los documentos más recientes se observa un mayor enfoque en la transparencia y la participación ciudadana dentro de los mecanismos de SME. Este enfoque se evidencia en la Política Nacional de Cambio Climático (2016) de la República Dominicana, la cual incluye un mecanismo robusto de participación ciudadana, lo que no se observaba de manera tan prominente en documentos anteriores. Este cambio refleja una tendencia hacia políticas más inclusivas y transparentes que involucran a la sociedad civil en el monitoreo y evaluación de las políticas climáticas.

Para que los mecanismos de SME funcionen adecuadamente en la implementación de políticas climáticas, es necesario que existan ciertas condiciones habilitadoras en los Gobiernos. En primer lugar, se vuelve fundamental contar con instituciones fuertes y transparentes. La fortaleza institucional asegura la existencia de estructuras organizativas capaces de gestionar y supervisar las políticas climáticas de manera eficiente. La transparencia es importante para mantener la confianza pública y garantizar que los procesos de SME sean abiertos y accesibles. Las instituciones transparentes permiten la rendición de cuentas y la participación y verificación de la sociedad civil, lo cual facilita la implementación de las políticas (Omukuti, 2022).

Contar con personal capacitado y tecnologías adecuadas se vuelve esencial para la recopilación y análisis de datos climáticos. El personal bien capacitado cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para manejar herramientas tecnológicas avanzadas, interpretar datos complejos y tomar decisiones informadas. La tecnología adecuada permite la recopilación de datos precisos y en tiempo real, lo cual resulta crucial para el monitoreo efectivo del cambio climático y la evaluación de las políticas implementadas (Gogoi et al., 2014). Por ejemplo, el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y tecnologías de teledetección en países como Costa Rica ha permitido una mejor gestión de los recursos naturales y una respuesta más rápida a los impactos del cambio climático.

Tercero, los recursos financieros estables y suficientes son necesarios para mantener los sistemas de SME y garantizar su continuidad. El financiamiento adecuado asegura que los programas y proyectos puedan desarrollarse a largo plazo, sin interrupciones debidas a la falta de fondos. También facilita la adquisición de tecnología avanzada y la capacitación continua del personal. La falta de recursos financieros puede llevar a la discontinuidad de los programas, e incluso a reducir su efectividad y capacidad de adaptación. El Fondo Verde para el Clima es un ejemplo de cómo los recursos financieros internacionales pueden apoyar a los países en desarrollo en la implementación de políticas climáticas sostenibles (Jobst y Pazarbaşıoglu, 2019).

El análisis de los mecanismos de financiamiento en los documentos de política climática de la región revela que solo una minoría de los documentos revisados asegura la existencia de fuentes de financiamiento mediante la creación de fondos especiales o la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto nacional: de los documentos evaluados, solo un 15%. Este bajo porcentaje indica una brecha significativa en la planificación financiera, lo cual podría limitar la efectividad y sostenibilidad de las políticas climáticas en la región a largo plazo.

Involucrar a la sociedad civil y a las comunidades locales en el proceso de

monitoreo y evaluación es fundamental para asegurar que las políticas sean adecuadas y sostenibles. La participación comunitaria permite diseñar las políticas según las necesidades y realidades locales, aumentando su relevancia y efectividad. Además, la participación de la sociedad civil fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad compartida, aspectos cruciales para la implementación y sostenibilidad a largo plazo de las políticas climáticas (Omukuti, 2020).

La incorporación de mecanismos de participación ciudadana en los documentos de política climática analizados es notable, en 85 por ciento de ellos considera alguna forma de participación. Este alto porcentaje sugiere un reconocimiento generalizado de la importancia de involucrar a la ciudadanía en la implementación de las políticas, no solo como un medio para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, sino también como una estrategia para asegurar que las políticas respondan a las necesidades y expectativas de las comunidades afectadas.

Entre los mecanismos de participación ciudadana más comunes se encuentran las consultas públicas y los consejos consultivos, que aparecen en el 75 por ciento de los documentos. Las consultas públicas son un medio para recoger opiniones y retroalimentación antes de poner en marcha las políticas, lo cual asegura que se consideren las perspectivas de la ciudadanía en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la Política Nacional de Cambio Climático (2022) de Nicaragua, las consultas públicas son un componente para incorporar la voz de las personas en la formulación de políticas climáticas. Los consejos consultivos, por otro lado, son plataformas que reúnen a representantes de distintos sectores de la sociedad para guiar y supervisar la implementación de políticas, como se observa en el Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario (2018) de Panamá. Estos consejos permiten una supervisión continua y aseguran que las políticas se implementen de manera alineada con las expectativas y necesidades de la sociedad, además de fomentar un diálogo constante entre el Gobierno y los diversos actores involucrados.

Iniciativas de adaptación implementadas en CARD tienen un abordaje incipiente y diverso

Además de las políticas, planes y estrategias que los países han definido, se requieren programas, acciones, iniciativas y proyectos -a veces paralelos, en otras ocasiones complementarios- para abordar la complejidad del fenómeno climático y sus impactos. Como se observó en la primera parte de este capítulo, un conjunto de condiciones geográficas, económicas, políticas y culturales contribuyen a que la región de CARD desarrolle una alta vulnerabilidad y riesgo ante las graves amenazas climáticas previamente expuestas. Esta región, históricamente impactada por fenómenos hidrometeorológicos, es considerada una de las más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. La falta de ordenamiento territorial, prácticas agrícolas insostenibles o resilientes, pobreza, exclusión, rezagos en infraestructura y capacidades limitadas (por mencionar algunas) son algunos de los factores que destacan la relevancia y prioridad de las políticas de adaptación a este fenómeno, superando, incluso, las tareas de mitigación y reducción de emisiones (sin que esto signifique asumirlas). En esta sección se utilizan varios insumos elaborados para el presente Informe, y se profundiza en las iniciativas de adaptación recientes, sus características, congruencia con las necesidades identificadas por la evidencia científica y los retos derivados del análisis de los enfoques, prioridades, actores, fuentes de financiamiento y otros elementos pertinentes.

A grandes rasgos, las siguientes secciones evidencian que los países se han ido alineando y mostrando congruencia con los enfoques asociados a las transformaciones específicas en la acción climática mundial. Se ha pasado de una agenda de prioridades temáticas inicialmente liderada por la cooperación internacional, a una incorporación cada vez más clara del tema en las agendas nacionales, aspecto clave para que la adaptación se incorpore en la planificación del desarrollo social y económico de los países. No obstante, la observación de acciones concretas y

la consulta con actores permite ver retos importantes para garantizar la pertinencia, la sostenibilidad y el impacto de las políticas de adaptación para reducir los riesgos, la resiliencia y la protección de la biodiversidad, la salud y los medios de vida de las poblaciones, especialmente las más vulnerables.

Sistematización de acciones de adaptación al cambio climático en la región

Un aspecto clave para abordar los

retos en adaptación al cambio climático en diferentes niveles (público, privado, nacional, regional) es conocer y analizar las iniciativas en marcha en CARD. Para este Informe se realizó un estudio exploratorio de sistematización y análisis de acciones implementadas en la región en este campo (Castillo, 2024). En esta sección, se sintetizan los resultados con una caracterización en términos de enfoque, tendencias, ámbito de ejecución y lecciones aprendidas, evaluando el nivel territorial, sectores y actividades en que

se han puesto en marcha, los cambios y efectos que han tenido en el período analizado (2007-2024), los mecanismos de seguimiento y la coherencia de las acciones con las prioridades de intervención identificadas por la evidencia científica. La metodología seguida para esta investigación se sintetiza en el recuadro 2.4.

En términos generales, las acciones evaluadas revelan el papel central del Estado en la ejecución, con más del 80% de las iniciativas lideradas por las instituciones públicas. Sin embargo, se observa

Recuadro 2.4

Metodología para identificar y caracterizar las iniciativas de adaptación en CARD

Las acciones e iniciativas analizadas por el estudio de base de esta sección consisten en programas o proyectos de adaptación al cambio climático identificados en los países. Se utilizó la estadística descriptiva porque abarca la recolección, organización, presentación y análisis de los resultados observados de la población en estudio (Mesa y Caicedo, 2020), bajo un universo de 269 acciones, con la siguiente distribución: Guatemala 38%, Costa Rica 25%, Panamá 13%, Honduras 12% y El Salvador y la República Dominicana con un 6% cada uno. En Belice no se logró completar el estudio y no fue posible trabajar en Nicaragua debido a las condiciones de acceso a la información. Se abarcó el período 2007-2024.

Esta información se organizó en una base de datos para facilitar las clasificaciones simples o cruzadas, según un conjunto de variables analíticas consideradas, se realizaron distribuciones de frecuencia y se aplicó el promedio aritmético como medida de tendencia central, para realizar comparaciones entre países y con el comportamiento regional. El proceso se complementó con información secundaria, en especial datos reportados por los Gobiernos en espacios formales a nivel internacional. También a partir de consulta de informantes clave. Para mayores detalles, ver Castillo, 2024.

La primera fase fue el proceso de **recolección de información**, con el apoyo de per-

sonas investigadoras en cada país, quienes indagaron fuentes secundarias de las direcciones de cambio climático, instituciones estatales, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, representantes de la cooperación internacional, entre otros, así como informantes clave. Se utilizó una ficha de variables específicas, la cual se puede consultar en los anexos de la ponencia de base.

La segunda fase fue la organización para el **procesamiento y análisis de la información**. Ello implicó la depuración para la comparabilidad de los datos y eliminar sesgos que pudieran afectar la interpretación. El principal criterio fue determinar si las iniciativas corresponden o no a acciones de adaptación, a partir de la definición del IPCC (2022); es decir, al “proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos a fin de moderar el daño o explotar oportunidades beneficiosas”. También se valoró si existe evidencia de la implementación y relevancia, cuando las iniciativas cumplen con atributos como: recursos humanos y financieros asignados para su ejecución, planes de acción con indicadores o metas vinculadas a compromisos nacionales o responsabilidades asignadas para ejecutarlas.

Esta fase también estableció la definición del enfoque para el análisis de la información, a partir de un conjunto de variables analíticas, principalmente sobre la escala territorial y

el sector hacia el cual están dirigidas las acciones, además de otras de carácter complementario. La definición y alcance de cada una se define con detalle en los anexos de la investigación (Castillo, 2024). Las variables de escala territorial fueron: internacional, regional, nacional, subnacional y local. Los sectores considerados fueron: energía, agropecuario, biodiversidad y bosques, recursos hídricos, salud, turismo, infraestructura y transversal. Las variables complementarias fueron: prioridades a las que responde, actores involucrados, tipo de financiamiento, estado de implementación, tema y tipología. Como es usual, la información de algunas de las variables de la ficha de sistematización no pudo ser procesada, debido a datos imprecisos o del todo incompletos; por lo que fueron excluidas. Ejemplo de esto son los mecanismos de seguimiento y evaluación, indicadores de monitoreo y seguimiento de resultados, montos de financiamiento y otros.

Por último, para el **procesamiento y consolidación de la información** se utilizó una base de datos en Excel, con las variables y elementos recolectados. A partir del procesamiento se generaron diferentes cruces de datos y estadísticas visualizadas, las cuales apoyaron el análisis sintetizado en esta sección.

Fuente: Elaboración propia con base en Castillo, 2024.

una importante dependencia del financiamiento internacional, lo cual limita la capacidad de los países para asegurar la sostenibilidad de estas acciones, así como para planificar y ejecutar estrategias a largo plazo. A su vez, el desarrollo de capacidades se posiciona como el enfoque predominante en las acciones de adaptación, evidenciando la necesidad de fortalecer la resiliencia comunitaria frente a eventos climáticos. No obstante, la eficacia de estas acciones se ve limitada por la falta de sistemas robustos de monitoreo y evaluación. Asimismo, se identificó un desajuste entre las prioridades establecidas por la evidencia científica y los sectores que reciben mayor atención, lo cual resulta en la marginación de sectores altamente vulnerables como la salud pública y la infraestructura, esta última frecuentemente afectada por eventos climáticos en la región. Este desajuste indica el desafío de replantear las estrategias de intervención, al integrar de manera más equitativa los sectores identificados como críticos por la información científica, con el objetivo de garantizar una respuesta más efectiva a las necesidades de las poblaciones vulnerables (Brenes, 2024b; Castillo, 2024).

Iniciativas construyen alianzas, con fuerte participación estatal

La región CARD registra un conjunto de iniciativas de adaptación. Dada la recurrencia de los impactos climáticos en los medios de vida, la infraestructura y las poblaciones, así como los riesgos evaluados en la primera parte de este capítulo, la adaptación se presenta como el principal desafío en la política de cambio climático para esta zona. Este reto implica financiamiento adecuado, participación de diversos actores y una definición informada, participativa y clara de enfoques y prioridades. La caracterización realizada combina datos del estudio exploratorio con información secundaria, y describe las acciones -iniciativas o medidas- implementadas principalmente a través de proyectos en los países, se suma 269 registros entre el 2007 y el 2024.

Del total recopilado, solo el 62% ha finalizado, la de más temprano inicio

es del año 2007 y un 85% de estas concluyeron hacia el 2022. De las acciones en ejecución, la de inicio más temprano es del 2014 y está previsto que un 76% lo concluya en el 2025; solo tres tienen como fecha programada de culminación el 2031 y únicamente dos son de largo plazo, en el marco de estrategias o programas al 2050. El tiempo promedio de implementación es de 3,9 años. En el gráfico 2.4 se puede ver la distribución de las acciones de adaptación sistematizadas por país, según el estado de implementación.

Estas iniciativas forman parte de una agenda que impulsa la dinámica internacional, especialmente en el marco de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC). Estos procesos implican cooperación, asistencia técnica y financiamiento para las iniciativas, tanto en el contexto de la integración centroamericana como de forma directa en cada país, además de la participación de varios actores de nivel internacional, regional y nacional.

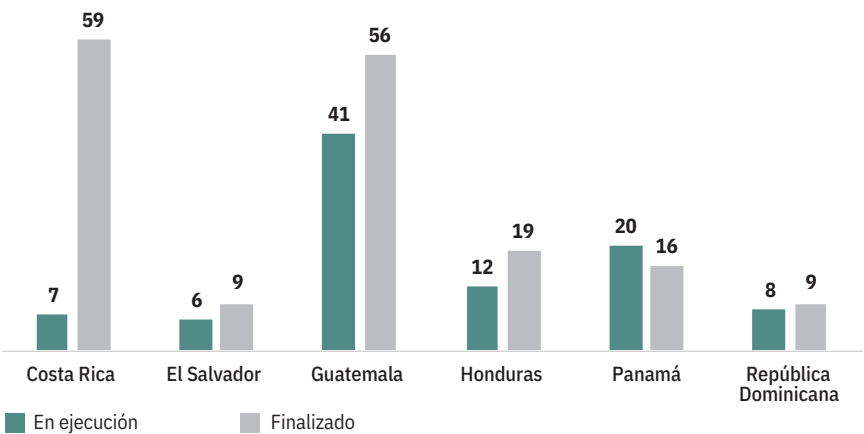
En el primer plano, sobresalen los entes de cooperación internacional que operan en la región, los cuales actúan como fuentes y mediadores de los recursos

que financian y participan en la orientación de las medidas de adaptación (Castro et al., 2016), entre ellos los organismos de regionales de la ONU tales como PNUMA, FAO, PMA, PNUD, UNDRR, CEPAL, OMM, ONU-Habitad, UNESCO, UNICEF. También participan los organismos financieros, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Por último, algunas agencias de cooperación de diversos países, entre los que destacan la Unión Europea y naciones como Alemania, España, Suiza, Japón y Estados Unidos.

En el nivel regional, diversos organismos del SICA se articulan en el tema ambiental y han sido los responsables de la agenda de adaptación y contrapartes de diversas iniciativas que responden a los acuerdos internacionales y los objetivos asignados a los fondos creados en el marco de la CMUNCC. Por ejemplo, la Secretaría Ambiental del SICA (bajo el liderazgo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD) y que actúan en concordancia con la agenda de la Estrategia Regional Ambiental 2021-2025 (CCAD, 2021), la cual contempla

Gráfico 2.4

Región CARD
Cantidad de iniciativas de adaptación al cambio climático, por país, según estado de implementación. 2007-2024



Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

entre sus líneas estratégicas la de cambio climático y gestión del riesgo. A su vez, existe un Subsistema Ambiental conformado por la CCAD, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH). Dicho subsistema “es el espacio de trabajo intersecretarial que integra agendas, estrategias e iniciativas regionales en atención a la temática del cambio climático y gestión del riesgo” (Artiga, 2019). Cabe resaltar que en el marco del SICA y con los países se formulan y validan instrumentos regionales (por ejemplo, las estrategias ERAM y ERCC), a partir de los cuales se activan iniciativas, programas y proyectos específicos de carácter regional.

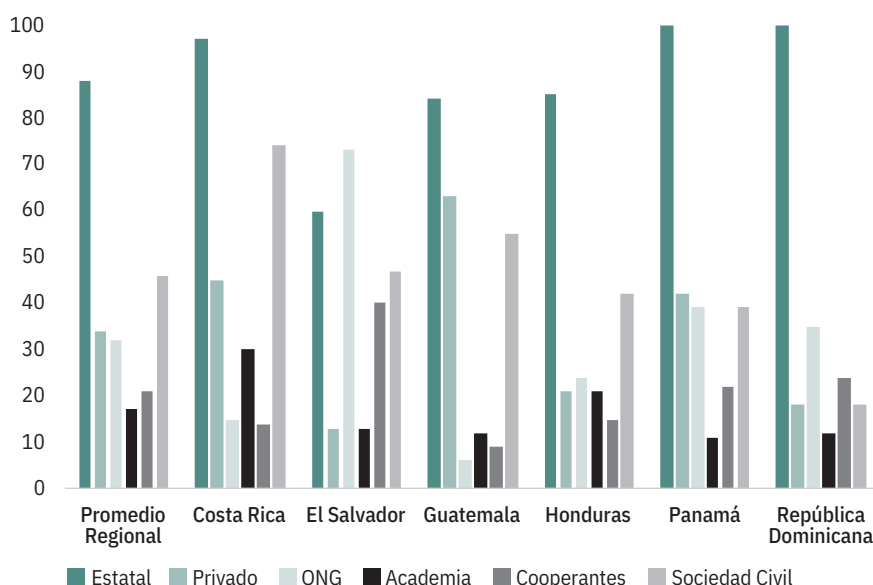
Por último, en los países, a partir del Acuerdo de París en el 2015 se promovieron los planes nacionales de adaptación que implican diversos actores internos. Entre ellos, los Gobiernos nacionales, liderados en parte por los ministerios de Relaciones Exteriores y las rectorías sectoriales (por ejemplo, agricultura, finanzas y obra pública), junto con un rol clave de los ministerios de ambiente, los cuales han creado oficinas o direcciones nacionales de cambio climático y, en algunos casos, instancias de carácter interinstitucional. Por su parte, los gobiernos locales se identifican como el actor relevante de la gestión local y sus competencias en la administración y regulación del territorio. En materia de la agenda climática, se ha dado un cambio de municipalidades receptoras de proyectos, particularmente de sensibilización y capacitación, a uno en que son responsables directas de las medidas de adaptación, de la articulación de los actores y de la planificación.

También se involucran Organizaciones no Gubernamentales (ONG) muy presentes en la región y que trabajan en temas de comunicaciones, incidencia política, manejo empresarial, cadenas de valor, finanzas, entre otros. Aunque operan con recursos de la cooperación internacional y plantean el desarrollo de alianzas con organizaciones locales, existe poca evidencia para medir y calificar el éxito de su intervención (Castillo, 2024). También se nota la participación del

Gráfico 2.5

Región CARD

Distribución de las iniciativas de adaptación al cambio climático según tipo de actor. 2007-2024
(porcentajes)



Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

sector privado, en parte en un modelo de “consorcios” e instancias asociativas estructurados bajo la premisa de interés en la cadena de valor en el mercado, donde las medidas ambientales y de adaptación pueden contribuir a la sostenibilidad empresarial. Por último, existe una participación activa de la academia, la cual toma distintas formas, como verá adelante.

Pese a esta participación de múltiples actores, entre las iniciativas analizadas se pudo identificar un rol protagónico del Estado, aunque sí con un involucramiento en forma directa y simultánea de otros. Se presenta una colaboración activa según las competencias, capacidades y recursos (no exclusivamente financieros) para asegurar la implementación de las iniciativas de adaptación. Esa participación se sistematizó en el gráfico 2.5, y en cada caso suele haber varios actores en forma simultánea, pero el Estado participa de forma directa en la ejecución del 88%, con presencia de instituciones de

Gobierno nacional y local. En casi todos los países esto supera la presencia de los demás actores, con la excepción de El Salvador, en donde las ONG supera la participación de instituciones del Estado, aunque esto podría estar afectado por dificultades para recopilar información en ese país (Castillo, 2024). Las entidades estatales involucradas en cada país se pueden consultar en Castillo, 2024.

Los roles de los actores estatales, de acuerdo con la información recolectada en los países, varían desde brindar un aval político para asegurar la correspondencia entre las iniciativas y las políticas y estrategias nacionales, ejercer como contrapartes nacionales para la coordinación con donantes y otros actores, asumir el rol de coejecutores junto con otras entidades que aportan para la implementación y brindan el apoyo de instancias desconcentradas a nivel local. En algunas iniciativas el Estado administra los recursos financieros para asegurar el alcance de los resultados previstos.

Entre los actores vinculados sobresalen los ministerios de Ambiente e institutos o consejos a cargo de la agenda específica de biodiversidad y bosques y de protección de áreas protegidas. Los primeros son responsables de la agenda de cambio climático, con un rol destacado en el desarrollo de políticas y planes nacionales de adaptación. Como se indicó anteriormente, también participan los ministerios de Agricultura, municipalidades y otras (cuadro 2.4).

Los actores de la sociedad civil participan en un 46% en la ejecución de iniciativas de adaptación en CARD a nivel regional. En las acciones sistematizadas muestran diferente origen,

destacándose grupos de campesinos, agricultores, mujeres e indígenas, asociaciones locales agroforestales, grupos ambientalistas, juntas de agua, entre otros. Generalmente, participan en la implementación de las iniciativas, como la adaptación de pequeña escala, el manejo de recursos naturales, la producción agrícola, la organización comunitaria, la aplicación de diferentes enfoques de trabajo, la defensa del reconocimiento de sus derechos, entre otros.

El sector privado tiene una presencia significativa en un 34% de las iniciativas. En los países, se ha ido involucrando al compartir intereses comunes entre la adaptación y la cadena de valor en el

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
INICIATIVAS DE ADAPTACIÓN

Véase Castillo, 2024, en
en www.estadonacion.or.cr

mercado, aprovechando su rol en la implementación de las acciones como una oportunidad para contribuir a la sostenibilidad empresarial. Las ONG, tanto internacionales como nacionales, representan el 32% y destacan en el desarrollo de alianzas con comunidades locales y otras entidades, e implementan estrategias para anticiparse a los impactos

Cuadro 2.4

Región CARD

Instituciones de gobierno presentes en la implementación de iniciativas de adaptación al cambio climático, según país. 2007-2024

País	Intituciones
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none">• Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)• Dirección de Cambio Climático del Minae• Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Ganadería• Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA)• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)• Instituto de Desarrollo Rural (Inder)• Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo)• Sistema Nacional de Áreas de Conservación-(Sinac-Minae)• Dirección de Agua -Minae
El Salvador	<ul style="list-style-type: none">• Unidad de Cambio Climático• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)• Oficina Ambiental y de Cambio Climático-OFACC del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)• Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) del MAG• Oficina Presidencial de Cambio Climático (Clima+)
Guatemala	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales• Instituto Nacional de Bosques (INAB)• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap)• Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Honduras	<ul style="list-style-type: none">• Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Estado de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minas• Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)• Secretaría de Finanzas
Panamá	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (Miambiente)• Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)• Instituto de Innovación e Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap)
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none">• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales• Oficina Nacional de Meteorología (Onamet)• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)• Ministerio de Agricultura• Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL)• Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf)

Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

del cambio climático, como la participación civil, la gestión del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales. Por último, los cooperantes ocupan la quinta posición en el promedio regional (21%), cuyo aporte acá se considera más allá del aporte financiero sino su rol en la implementación de las iniciativas, a partir de asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de alianzas (incluyendo las público-privadas), transferencia de conocimientos y seguimiento a resultados.

Por último, el sector académico participa en la implementación de un 17% de las acciones sistematizadas. Segura et al. (2022) destacan que la política pública más recientemente aprobada, en particular la plasmada en los Planes Nacionales de Adaptación, empieza a prestar atención a factores como la investigación científica. De acuerdo con la sistematización, hay presencia de institutos científicos y meteorológicos, universidades, centros de innovación y de transferencia de tecnología, también se identificaron entidades de alcance regional como El Zamorano, el CATIE y el Centro Científico Tropical.

Como un ejemplo ilustrativo, el recuadro 2.5 describe el proyecto “Aumento de capacidades para la reducción de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia en Centroamérica”, el cual evidencia la consolidación de las alianzas regionales para la implementación de acciones de adaptación.

En términos de la escala geográfica, las acciones de adaptación están presentes en todos los niveles en los países, aunque predominan en las escalas subnacional y local. Si bien existen proyectos de alcance regional, estos se aplican en los países según sus características y capacidades específicas. Los datos agregados (gráfico 2.6) indican que, del total de iniciativas implementadas, el nivel subnacional⁸ tiene la mayor participación (41%), seguido por el nivel local⁹ (33%) y, finalmente, las de alcance nacional (26%). En Guatemala, más de la mitad de las acciones se llevaron a cabo a nivel subnacional, mientras que en El Salvador y Honduras predomina la proporción a nivel local, en especial en municipios de la región oriental ubicados en el Corredor Seco, cuya

Recuadro 2.5

Un proyecto de alianzas regionales: “Aumento de capacidades para la reducción de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia en Centroamérica”

La Unión Europea, a través del Programa EUROCLIMA, financió el proyecto y estuvo liderado por la CCAD, con participación de sus entidades socias el CEPREDENAC, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana, el CRRH y Global Water Partnership (GWP) Centroamérica. Los países involucrados son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. El objetivo principal consiste en fomentar la gestión integral del riesgo de desastres en el desarrollo de los países, desde un enfoque intersectorial y mediante el aumento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Los resultados esperados son:

- Crear y mejorar instrumentos de gobernanza para la gestión del riesgo y el incremento de la resiliencia ante inundaciones y sequías.
- Ampliar las capacidades técnicas para hacer frente a emergencias causadas por fenómenos de sequía e inundaciones de manera integral e inclusiva.
- Generar nueva información y desarrollar formación para conocimiento y la gestión de riesgos de desastres antes sequías e inundaciones.

El proyecto tiene como beneficiarios directos a los Servicios Meteorológicos Nacionales, los Ministerios de Ambiente y Entidades de Gestión de Riesgo, tanto nacionales como locales. Los beneficiarios indirectos son las municipalidades seleccionadas por los países para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión del riesgo de desastres y gestión integral del recurso hídrico y para la implementación de proyectos piloto de cosecha de agua de lluvia, a fin de enfrentar problemas de sequía.

Su implementación abarcó un período de 48 meses entre enero del 2019 y enero del 2023, con un monto total de subvención no reembolsable de 2 millones de euros. Los principales productos generados por el proyecto son:

- Cuatro instrumentos de política pública para la gestión de sequías y uno de inundaciones en los países de la región.
- Actualización de seis planes municipales de gestión de riesgo de desastres /o de respuesta por inundaciones y sequías.
- Equipamiento para los sistemas de alerta temprana ante inundaciones y sequías en los países.
- Elaboración de la Guía Regional de Lineamientos sobre Comunicación para alerta temprana ante inundaciones.
- Creación del Centro Virtual del Tiempo Atmosférico Severo (CVTAS), el cual pone a disposición de los países beneficiarios información para el monitoreo del clima, con el objetivo de contribuir a la adaptación y resiliencia de la región ante los eventos climáticos extremos.
- Implementación de cinco proyectos piloto de cosecha de agua, favoreciendo a beneficiarios directos afectados por sequías.
- Sistematización de estudios de caso exitosos para enfrentar sequías que han sido socializados en más de diez espacios regionales e internacionales.

Fuente: Castillo, 2024 con base en Programa Euroclima y SICA, 2023.

vulnerabilidad fue analizada en la primera parte de este capítulo. En la República Dominicana, predominan iniciativas de implementación local y subnacional en forma dispersa, abarcando varios territorios del país. Panamá es el único país en donde las acciones de escala nacional son mayoritarias (53%).

De acuerdo con Castillo (2024), un aspecto crucial de la adaptación, similar a otros temas de política pública, es la llamada integración vertical. Esto se refiere al grado de involucramiento e interacción desde el nivel nacional hasta el local para la definición de política pública, la implementación de estrategias y planes de adaptación, así como el financiamiento de las iniciativas. Al analizar las acciones implementadas en los países de CARD, no se ha encontrado evidencia suficiente que confirme la articulación entre los diferentes niveles de gobernanza involucrados, particularmente entre el nivel nacional y los niveles subnacional y local. La NAP Global Network (Luna et al., 2023) señala que la vinculación estratégica requerida entre los niveles nacional, subnacional y local se facilita mediante el proceso de implementación del Plan Nacional de Adaptación, lo cual requiere de una planificación local respaldada por la planificación nacional e incluso regional, como la Estrategia Regional de Cambio Climático y su Plan de Acción 2018-2022. Como se indicó, los gobiernos locales han ido asumiendo mayores compromisos y responsabilidades en este ámbito. Sin embargo, para promover la integración vertical es fundamental considerar que estos aún no cuentan con los recursos o experiencia necesarios (Segura et al., 2022), por lo que es imperativo el fortalecimiento de capacidades a nivel local.

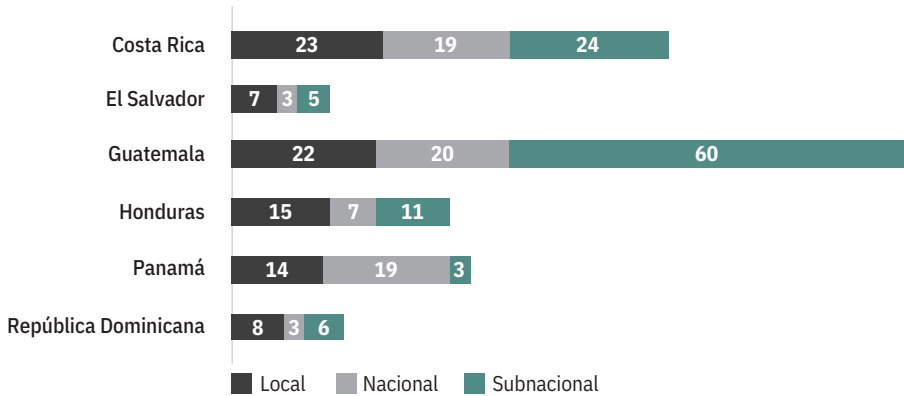
Domina enfoque en bosques, biodiversidad y producción agropecuaria, en especial para el fortalecimiento de capacidades

Desde que en 1993 se aprobó, en el marco del SICA, el Convenio Regional sobre Cambio Climático (CRCC), se planteó la necesidad de integrar las respuestas al cambio climático en la planificación del desarrollo social y económico

Gráfico 2.6

Región CARD

Acciones de adaptación al cambio climático según alcance de implementación^{a/}. 2007-2024 (absolutos)



a/Subnacional: se refiere a una región geográfica dentro del país con características particulares (por ejemplo, una región costera, varias provincias o departamentos). Local: la acción se desarrolla en un territorio específico (municipio/cantón o comunidad).
Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

de los países, llevando a la introducción de herramientas para reducir la producción de gases de efecto invernadero y brindar un abordaje sobre la adaptación (FAO, 2003). A nivel regional, las cumbres se han enfocado en adoptar medidas y negociaciones relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad, sobre conceptos de descarbonización, los cuales han quedado en la agenda de los países (Cepal, 2012). El *Cuarto Informe Estado de la Región* (PEN, 2011) planteó que las prioridades iniciales se enfocaron en la mitigación, tema en el cual circulaban recursos (especialmente de los países más desarrollados bajo la lógica de “compensación” de emisiones), y no así en la prioridad de la adaptación al fenómeno, por la alta exposición y vulnerabilidad de la región.

A partir de la suscripción del Acuerdo de París, la formulación de la ERCC y su plan de implementación 2018-2022 (CCAD, 2018), las acciones implementadas en la región se diversifican e introducen la adaptación en políticas sectoriales, planes, programas, estrategias y

actividades, especialmente enfocadas en: a) la agenda de protección de bosques, suelos y biodiversidad y recurso hídrico; b) la actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria; c) la protección de la infraestructura de servicios críticos y d) las finanzas y la inversión, que para el caso de los gobiernos se enfoca en propiciar la resiliencia fiscal, entendida como la capacidad para disponer de los recursos necesarios para la recuperación ante desastres.

El análisis de iniciativas realizado para este Informe coincide con ese enfoque temático, previamente mencionado. Según el cuadro 2.5, del total de acciones registradas, dos sectores concentran casi el 70%: biodiversidad y bosques con un 38% y agropecuario con un 31%. En tercer lugar, se ubica la categoría “transversal”, la cual abarca ámbitos como la planificación y la coordinación para la adaptación, el tema de inclusión y equidad de género en la agenda de adaptación, la formulación y ejecución de planes y programas que integran el cambio climático, así como el fortalecimiento

de capacidades para responder ante la CMNUCC, entre otros. El cuarto sector en relevancia es el de recursos hídricos, y hay un conjunto de áreas con pocas iniciativas identificadas (infraestructura, salud, turismo y energía), aunque podrían considerarse clave en términos de vulnerabilidad y requerimientos de adaptación.

El sector de biodiversidad y bosques es predominante en la implementación de acciones en Guatemala, Honduras y la República Dominicana, superando el promedio regional. Guatemala y Honduras han recibido el apoyo de donantes como la Unión Europea a través del Programa EUROCLIMA, que ejecuta iniciativas en el sector de bosques, biodiversidad y ecosistemas. En particular, Honduras y Guatemala comparten una zona transfronteriza de selva subtropical con diferentes etnias, la cual ha sido afectada por el cambio climático a pesar de su biodiversidad. Además, estos países históricamente han experimentado procesos de deforestación y degradación de los bosques. En la República Dominicana, este sector ha motivado acciones de conservación de ecosistemas en zonas transfronterizas, como la Reserva de Biosfera Transfronteriza de La Selle y Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, que forma parte del Corredor Biológico del Caribe.

Por su parte, el sector predominante de implementación en Costa Rica y El Salvador es el agropecuario, también por encima del promedio regional. Las acciones se focalizan en prácticas en terreno, relacionadas directamente con el aumento de la resiliencia del sector productivo, técnicas de gestión de la tierra, cultivos resilientes al clima, cosecha de agua lluvia, mejora de la productividad agropecuaria y seguridad alimentaria.

El sector transversal¹⁰ ha ido ganando terreno en la implementación de iniciativas de adaptación, en la búsqueda de una mejora de las capacidades para integrar la adaptación en las agendas de otros sectores, y para responder y dar seguimiento a los compromisos nacionales asumidos ante las agendas globales. Honduras y Panamá resaltan en el desarrollo de iniciativas de carácter “transversal”, en la sistematización realizada.

Costa Rica se destaca por encima de otros países y del promedio regional en la proporción de iniciativas enfocadas en los recursos hídricos. Esto es principalmente debido a los proyectos del Fondo de Adaptación implementados a través del Programa Adapta2+ en el componente de “Recurso Hídrico y Costas”; estas iniciativas apoyan la gestión y protección de las cuencas hidrográficas en zonas vulnerables, así como la recuperación y reforestación de áreas al margen de ríos y nacientes.

Complementariamente, el PNUD trabaja a nivel local en iniciativas de gestión sostenible del recurso hídrico en las comunidades, las cuales incluyen el fortalecimiento de organizaciones encargadas de la gestión y operación sistemas de agua potable, el manejo sostenible de cuencas y el impulso de incentivos locales como la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico (TPRH), que apoya la conservación y uso sostenible de los recursos hídricos del país.

Cabe mencionar que, tanto en el sector de la biodiversidad y bosques como en el agropecuario, las acciones de adaptación se ejecutan principalmente en escalas locales y subnacionales, con un 86% de las iniciativas en el primer sector y un 76% en el segundo.

Para catalogar las iniciativas se utilizó una tipología con cinco categorías, según su enfoque de implementación: desarrollo de capacidades, gobernanza para la adaptación, protección de la infraestructura, resiliencia de la producción y adaptación basada en ecosistemas. Entre estas, la primera acapara la mayoría de las iniciativas identificadas, con un 65% del total. Esto implica acciones enfocadas en la mejora de conocimientos, habilidades y recursos para aumentar la resiliencia ante los eventos del clima; proyectos orientados a la mejora de procesos del nivel institucional y territorial para

Cuadro 2.5

Región CARD

Distribución de acciones de adaptación al cambio climático por sector y según país. 2007-2024

Sector	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Panamá	República Dominicana	Porcentaje	Total
Biodiversidad y bosques	12	5	51	18	7	8	37,5	101
Agropecuario	31	7	28	4	10	4	31,2	84
Transversal	8	1	9	7	13	2	14,9	40
Recursos hídricos	15	1	8	2	3	1	11,2	30
Infraestructura		1	1	2	2	1	2,6	7
Salud			3		1		1,5	4
Turismo			1			1	0,7	2
Energía			1				0,4	1
Total	66	15	102	33	36	17	100,0	269

Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

incidir de forma positiva en diferentes estrategias de adaptación (prácticas productivas, sistemas de información y alerta, mejora de la infraestructura, gestión de recursos de la biodiversidad, entre otros).

En segundo lugar, están las acciones de la categoría de “resiliencia de la producción”, directamente destinadas a poner en práctica estrategias resilientes en el sector agropecuario, las cuales incluyeron la aplicación de técnicas de gestión

de la tierra, prácticas agropecuarias resilientes al clima, cosecha de agua lluvia, almacenamiento postcosecha, entre otras. Le sigue la categoría de “gobernanza para la adaptación”, promovida principalmente por los gobiernos y otros actores clave para organizarse, formular y dar seguimiento a políticas y planes en los niveles estratégico y operativo, e implementar iniciativas en las escalas nacional, sectorial y territorial. En cuarto lugar, están las acciones con enfoque

de adaptación basada en ecosistemas, y, por último, las destinadas a la protección de la infraestructura, con una cantidad mínima de iniciativas, pese a su importancia en materia de impactos climáticos.

Dada la gran cantidad de iniciativas sistematizadas en el ejercicio, el cuadro 2.6 presenta, de manera ilustrativa, algunos ejemplos de acciones de adaptación según las tipologías en las cuales se clasificaron por su enfoque de implementación.

Cuadro 2.6

Región CARD
Iniciativas de adaptación al cambio climático, según tipología y país. 2007-2024

Tipología / Iniciativa	País	Enfoque
Desarrollo de capacidades		
Plan A: Territorios resilientes ante el Cambio Climático	Costa Rica	<ul style="list-style-type: none">Fortalecimiento de capacidades para integrar acciones de adaptación en la planificación regional y municipal de las seis regiones socioeconómicas del país.Integración de acciones de adaptación en la planificación de 20 cantones del país.Evaluaciones de riesgo climático, elaboración de guías metodológicas y capacitación para actores de 62 cantones.Formulación y validación del Plan Nacional de Adaptación 2022-2026.Diseño de la Estrategia Financiera para la Adaptación y fortalecimiento de capacidades a instituciones en instrumentos específicos de la estrategia (Clasificador presupuestal del gasto en cambio climático y gestión del riesgo).
Fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida ante el cambio climático en las cuencas altas del Altiplano de Guatemala (Altiplano Resiliente)	Guatemala	<ul style="list-style-type: none">Mejora de conocimientos en organizaciones comunitarias para la gestión integrada de cuencas hidrográficas.Elaboración de planes de manejo de cuencas con criterios de adaptación basada en ecosistemasCapacitación a nivel local en herramientas y prácticas relacionadas con el clima.
Proyecto Manejo Integrado de la Biósfera del Río Plátano (MI BIÓSFERA)	Honduras	<ul style="list-style-type: none">Fortalecimiento de capacidades para contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en un área piloto de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano.Gestión del paisaje y gobernanza de la tierra en los municipios abarcados por la Biosfera del Río Plátano.Fomento de las cadenas de valor del ganado y café cero-deforestación para el sustento de las comunidades localesDiseño e implementación de mecanismo financiero inclusivo para el clima.Gestión del conocimiento y comprensión en los aspectos del clima, la biodiversidad y los medios de vida.
Resiliencia de la producción		
Estrategias de Resiliencia para la adaptación al cambio climático en ocho comunidades de los municipios de San Gerardo y Nuevo Edén, en el corredor seco de El Salvador	El Salvador	<ul style="list-style-type: none">Establecimiento de huertos con énfasis en especies criollas más resistentes y adaptadasImplementación de obras de conservación y cosecha de agua con la construcción y mantenimiento de reservorios.Formación en manejo de ganado y de aves.Conservación del suelo con obras de mitigación (barreras vivas y muertas).Intercambio de experiencias entre campesinos con enfoque de derechos e inclusión de género.
Manejo Sostenible y Adaptación al Cambio Climático del Riego	República Dominicana	<ul style="list-style-type: none">Diseño participativo y validación de la Estrategia Nacional de Riego Sostenible.Aplicación de pilotos para rehabilitación y adaptación al cambio climático de infraestructura de riesgoImplementación de un sistema de información sobre usuarios de agua de riego para toma de decisiones sobre inversiones en regadío.

Cuadro 2.6 (continuación)

Región CARD
Iniciativas de adaptación al cambio climático, según tipología y país. 2007-2024

Gobernanza para la adaptación		
Apoyo a la articulación intersectorial, multinivel y multiactor de la Estrategia Nacional de Gestión del Fuego 2024- 2026	Guatemala	<ul style="list-style-type: none">Creación de mecanismos y herramientas de coordinación, planificación y seguimiento para la implementación de la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego, en respuesta a la meta 2025 de la NDC en el Sector Recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas: “Para 2025, la tasa de degradación por incendios forestales se reducirá a 36 972 hectáreas anuales”. Involucrando a la Comisión Nacional de Arias Protegidas (Conap), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (Seconred) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INAB).Capacitación multinivel y buenas prácticas para la gestión integrada de fuego, con enfoque inclusivo y multicultural.
Ampliación/profundización del trabajo de aguas urbanas con enfoque de cuenca para la protección y gestión integrada y sostenible de la parte alta de la cuenca del Río Naranjo y Selegua y cuenca del Lago Atitlán.	Guatemala	<ul style="list-style-type: none">Diseño e implementación de instrumentos técnicos y normativos, capacidades institucionales y sociales desde el nivel central MARN hasta seis municipios de la parte alta de la cuenca del Río Naranjo y Selegua y la cuenca del Lago Atitlán.Fortalecimiento de marcos de gobernanza para la gestión integral y el uso eficiente de los recursos hídricos por parte de municipios y comunidades de las cuencas del río Naranjo, lago Atitlán y río Selegua.
Adaptación basada en ecosistemas		
El Seibo Resiliente: Desarrollando la resiliencia en un gradiente montañoso-costero a través de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) y la reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas (Eco-RRD) para aumentar la adaptación.	República Dominicana	<ul style="list-style-type: none">Integración de la AbE con la reducción del riesgo de desastres utilizando los ecosistemas locales en la zona de El Seibo para proteger la zona de intervención ante los impactos inmediatos del cambio climático.Restauración de bosques, manglares y humedales.Implementación de prácticas de manejo de suelos, agroforestería, conservación y restauración de las cuencas, manejo integrado de zonas costeras y conservación de la biodiversidad, con enfoque AbE.Hibridación de infraestructura verde para potenciar los beneficios ecológicos, económicos y sociales en algunas áreas de intervención.
Conservación y restauración de ecosistemas nativos para el mantenimiento de la regulación hídrica y protección de biodiversidad en cuatro municipios de Totonicapán y Sololá.	Guatemala	<ul style="list-style-type: none">Consolidación y ejecución de acciones comunitarias y municipales de conservación y restauración de ecosistemas nativos para la regulación hídrica y protección de biodiversidad, con la participación activa de actores locales en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Totonicapán y Santa María Chiquimula.
Protección de la infraestructura		
Elaboración y validación de Guía Técnica de Cambio Climático para proyectos de infraestructura de Inversión Pública.	Panamá	<ul style="list-style-type: none">Identificación de riesgos climáticos para la infraestructura.Diseño y consulta de insumos para diseño de la guía de implementación de proyectos de infraestructura resiliente al cambio climático: con desarrolladores de infraestructura, entes reguladores de fondos, inversionistas y financiadores.Integración de conceptos de resiliencia climática dentro la evaluación integral del ciclo de vida de proyectos de infraestructura con aplicaciones concretas.

Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

Fuerte dependencia de recursos internacionales para financiar las iniciativas

Para establecer una base sólida que permita impulsar políticas de adaptación al cambio climático a largo plazo, es esencial revisar y mejorar las posibilidades de

financiamiento. Hasta la fecha, la mayoría de los recursos para este fin provienen de fondos establecidos en el marco de las negociaciones de la CMNUCC, así como de otros mecanismos financieros alternativos denominados “complementarios”, que crearon los cooperantes,

junto a algunos aportes que los gobiernos de la región deben brindar a la conven- ción. A lo largo del tiempo, la agenda de adaptación en CARD ha sido altamente dependiente de la cooperación interna- cional y los países subrayan que recibir fondos de las convenciones globales es

esencial para cumplir con los propios compromisos asumidos ante ellas.

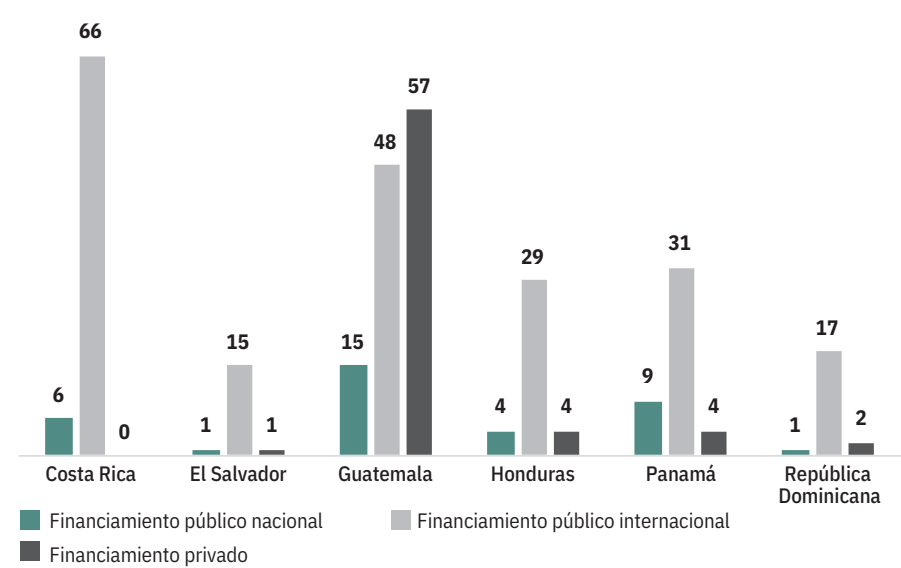
Sin embargo, recientemente se ha identificado la necesidad de analizar otras fuentes de financiamiento. Segura et al. (2022) se refiere a la estimación de costos de las acciones o medidas de adaptación contempladas en los Planes Nacionales de Adaptación de los países, lo cual permite determinar la inversión requerida y las fuentes para cubrirla, considerando que los planes elaborados a partir del 2013 les exigen a las entidades públicas dedicar recursos dentro de sus presupuestos para este fin.

El análisis de las 269 iniciativas de adaptación sistematizadas para este Informe permitió evidenciar la limitada participación del Estado en el financiamiento, así como una mayor presencia de fondos de organismos de cooperación internacional y bilateral y de otros actores del ámbito privado y de las ONG (nacionales e internacionales). Cabe mencionar que el estudio no consideró los montos de financiamiento por diversos factores que afectan la comparabilidad y pueden generar sesgos de interpretación; entre ellos, la ausencia de datos de presupuesto real de las iniciativas, las proporciones por país de los presupuestos regionales, la pertenencia de algunas acciones a programas de mayor envergadura del donante, la ausencia de documentos de marco lógico de las iniciativas, entre otras (Castillo, 2024).

Debido a lo anterior, este análisis se centró en tres tipos de fuentes, definidas según NAP Global Network (2017): a) financiamiento público nacional, derivado de los presupuestos asignados a instituciones del nivel central y municipal o departamental, así como fondos de programas estatales; b) financiamiento público internacional, aportados por agencias de cooperación multilateral y bilateral, incluyendo recursos de la CMNUCC en donaciones no reembolsables, préstamos u otros instrumentos similares; y c) financiamiento privado, del sector privado nacional, otras organizaciones privadas: ONG nacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades de investigación. El gráfico 2.7 presenta la contribución de las diferentes

Gráfico 2.7

Región CARD
Cantidad de iniciativas de adaptación al cambio climático según fuente de financiamiento, por país. 2007-2024



Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

fuentes de recursos para poner en marcha distintas iniciativas según país. Se debe tomar en cuenta que las acciones pueden contar con más de un tipo de fuente de financiamiento.

En Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, el financiamiento con recursos internacionales está presente en el 100% de las iniciativas implementadas. En Honduras, este representa el 88% del total; mientras que en Panamá alcanza el 86%. Guatemala sobresale por ser la única nación donde predominan las fuentes de recursos privadas nacionales, distintas a las gubernamentales, las cuales están presentes en más de la mitad de las iniciativas (57 de ellas). Estas fuentes provienen de fondos como el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), cámaras del sector agropecuario, empresas y fundaciones como la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y el Ambiente. A pesar de esta excepción, en todos los países existe una brecha evidente entre las acciones financiadas con recursos internacionales y aquellas que dependen de presupuestos públicos.

Algunas iniciativas han comenzado a vincular información sobre los impactos macroeconómicos del cambio climático, con la necesidad de recursos y la creación de herramientas que permitan sustentar financieramente las acciones (recuadro 2.6).

Un elemento necesario es la necesidad de monitoreo del financiamiento climático. Ciertamente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) creó el Protocolo de Kyoto y al Acuerdo de París (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima, Fondo Especial para el Cambio Climático, Fondo para los Países Menos Adelantados y Fondo de Adaptación) con el fin de evaluar los avances en la prestación, así como a la transparencia y una mayor previsibilidad del apoyo financiero; todo esto a través de las comunicaciones nacionales, acordadas en el contexto de la Convención. No obstante, los países y la región carecen de una base de datos consolidada sobre el financiamiento para la acción climática, lo cual inhibe la posibilidad de un análisis adecuado

Recuadro 2.6

Implicaciones macroeconómicas del cambio climático y el potencial de un impuesto al carbono para financiar la inversión climática

América Latina y el Caribe se enfrenta a grandes riesgos climáticos que pueden traer graves repercusiones al bienestar económico y social. Se estima que las pérdidas macroeconómicas a mediano plazo en la región serán significativas (Van der Borgh et al., 2023; Swiss Re Institute, 2021; Kahn et al., 2019; Burke et al., 2015). Además, el cambio climático exacerbará las brechas estructurales de desarrollo existentes en la región, en particular la pobreza y la desigualdad, al tiempo que aumentará la presión sobre los servicios públicos como la atención sanitaria. Los países de Centroamérica y el Caribe corren especial riesgo de sufrir catástrofes que generen pérdidas crecientes en la infraestructura pública y privada, lo cual afectaría su crecimiento económico.

Para abordar la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se requiere con urgencia un esfuerzo de inversión a gran escala, en una región con poca inversión. En América Latina y el Caribe, los niveles de inversión están entre los más bajos del mundo, muy por debajo de los observados en economías emergentes y en desarrollo de Asia.

En las economías más grandes, como las de Brasil y México, la inversión pública se sitúa por debajo del 2% del PIB, o entre el 40% y el 60% de la cifra correspondiente a

los Estados Unidos (3,3% del PIB). La realidad fiscal de la región no favorece el esfuerzo de inversión pública necesario, dados el alto nivel de deuda pública bruta del Gobierno general y los crecientes pagos de intereses, que no dejan margen suficiente.

Ante la urgente necesidad de hacer frente al cambio climático, los impuestos al carbono se proponen con mayor frecuencia como método para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y financiar la inversión pública, a fin de recurrir en menor medida a la deuda soberana adicional (FMI, 2023; Black et al., 2021). En la región, cinco países han implementado un impuesto al carbono: Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. En general, los precios del carbono son bajos, con bases imponibles relativamente estrechas, de manera que los ingresos recaudados resultan muy limitados.

En el análisis se estudia el impacto macroeconómico de la intensificación del cambio climático, que consistiría en la desaceleración progresiva del crecimiento a mediano plazo, conforme aumentan las temperaturas. El nivel del PIB bajaría sensiblemente en el 2050 en Guatemala (-12,6%), Perú (-13,4%) y la República Dominicana (-13,8%), en comparación con el escenario contrafactual que supone que no habrá una mayor intensificación en el cambio climático.

El estudio también examina el potencial de un

impuesto al carbono para generar ingresos, financiar inversiones y atender el daño macroeconómico que causa el cambio climático. Un impuesto de 50 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO₂ eq) generaría ingresos de entre el 0,9% y el 1,2% del PIB en los tres países. Suponiendo que los ingresos se reciclaran en su totalidad (un 70% en inversiones y un 30% en transferencias para compensar a los hogares), la inversión financiada con este impuesto podría contribuir a un aumento neto positivo del crecimiento económico, aunque sería una contribución modesta y a corto plazo.

Si bien un impuesto al carbono no resuelve por completo el problema del cambio climático, puede formar parte de un conjunto más amplio de medidas. Para crear resiliencia al cambio climático, financiar una agenda de adaptación –prioritaria para la región–, reducir las emisiones de GEI y promover el desarrollo, es urgente cambiar la composición y el nivel de las inversiones en la región. La inversión financiada con impuestos al carbono no alcanzaría para contrarrestar la dinámica de bajo crecimiento de la región, por lo que se requiere un marco integral de financiamiento climático, que permita movilizar recursos públicos y privados para concretar un esfuerzo de inversión a gran escala (Cepal, 2023).

Fuente: Elaboración propia con base en Cepal, 2024b; FMI, 2023 y Black et al., 2021.

para ponderar el impacto de implementar dichos recursos. Además, se desconoce la magnitud monetaria de recursos de contrapartida que invierten los países y la región en su conjunto, así como la participación de los diferentes actores interesados. Los países han comenzado procesos para consolidar información y hacer evidente la inversión interna, y a determinar las inversiones y gastos en adaptación a través del ajuste de los

clasificadores presupuestales del gasto público de los gobiernos. Sin embargo, dado lo reciente de estas iniciativas, aún no se cuenta con datos certeros procedente de los presupuestos e informes financieros respectivos. Una iniciativa particular se ha registrado en Costa Rica. Con apoyo de GIZ y en coordinación con la Dirección de Cambio Climático del Minae se diseñó la "Guía para el reporte de información sobre financiamiento cli-

mático en Entidades Financieras supervisadas por Sugef" (GIZ, 2019). Esta y otras iniciativas pueden contribuir en el desafío de ponderar la asignación de los recursos y el gasto y destino final de las inversiones en adaptación, información relevante para las negociaciones internacionales y en el marco de la formulación de programas de asistencia de los entes cooperantes.

¿Coinciden las iniciativas, programas y acciones con lo que indica la evidencia científica?

En este capítulo y en ediciones previas del Informe, se ha señalado el carácter prioritario del enfoque de adaptación al cambio climático en una región con gran vulnerabilidad a sus impactos. Una zona que históricamente ha sufrido los efectos nefastos de una limitada preparación, desorden territorial y alta exposición a riesgos por eventos del clima. Como parte del análisis, esta sección responde cuáles han sido los cambios recientes en las acciones de adaptación, su marco de referencia, sus enfoques, seguimiento y, principalmente, su coherencia con las prioridades que indica la evidencia científica. En síntesis, el estudio encuentra una mayor autonomía del tema en las políticas propias de los países, pero también grandes retos para la pertinencia, la sostenibilidad y un mayor impacto sobre las condiciones de vulnerabilidad de los territorios, poblaciones y medios de vida.

La adaptación penetra las agendas nacionales propias de la región

Las iniciativas de adaptación analizadas para este capítulo permiten observar la evolución en, al menos, dos aspectos: el contexto de la planificación de la política pública sobre adaptación y sus objetivos, por una parte, y el enfoque de la implementación y los sectores de intervención, por otra. En particular, se evaluó el período posterior al 2018, cuando se actualizó la Estrategia Regional de Cambio Climático y su Plan de Acción 2018-2022 (CCAD, 2018), que establecieron las prioridades en mitigación y adaptación. En general, se encontró que desde entonces la región empezó a mostrar cambios en el enfoque, cobertura y resultados, vinculados a la dinámica del contexto internacional de los acuerdos climáticos, el financiamiento y los compromisos asumidos en adaptación. Se debe recordar que, sin bien se analizaron las políticas formales de los países, en esta sección se ha notado cómo algunas iniciativas que consisten en programas más concretos, sectoriales o institucionales, presionan a la conformación de

instrumentos más robustos y de carácter oficial y nacional, como los analizados en la segunda sección de este capítulo.

En el contexto global, la política pública relacionada con adaptación al cambio climático se ha construido a partir del antecedente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010 (COP16), en la cual se estableció que “la adaptación se debe tratar con la misma prioridad que la mitigación, y requiere el establecimiento de disposiciones institucionales adecuadas a fin de reforzar la labor y el apoyo correspondientes” (CMNUCC, 2011). Las partes adoptaron el Marco de Adaptación de Cancún (CAF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es mejorar las medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

Posteriormente, el Acuerdo de París, suscrito en el 2015 en la COP21, planteó la Meta Global de Adaptación (artículo 7.1) para “mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y garantizar una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo de temperatura” (CMNUCC, 2016). Este acuerdo marcó un hito en el enfoque hacia transformaciones específicas en la acción climática mundial y se acompañó del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el marco regional, el tema tomó fuerza entre el año 2000 y el 2010, con instrumentos como el “Marco Estratégico para la Reducción de las Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica”, el primer “Plan Ambiental para la Región Centroamericana” (Parca) y el “Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano” (Pacadirh). En ese período, la política pública de CARD tuvo mayor orientación hacia una actividad reactiva respecto a la posibilidad de impactos del cambio climático; es decir, orientada a dar respuesta al riesgo de desastres asociados al clima (Matul, 2019). Posteriormente, se estableció la Estrategia Regional de Cambio Climático y su Plan de Acción 2018-2022, la cual involucra compromisos

concretos de los países para enfrentar el cambio climático, la creación o actualización de legislación y normativa, formulación de políticas o estrategias de adaptación y, recientemente, los planes nacionales de adaptación. El Acuerdo de París del 2015 ha generado mayores condiciones para establecer compromisos en adaptación por parte de los Estados signatarios de la CMNUCC.

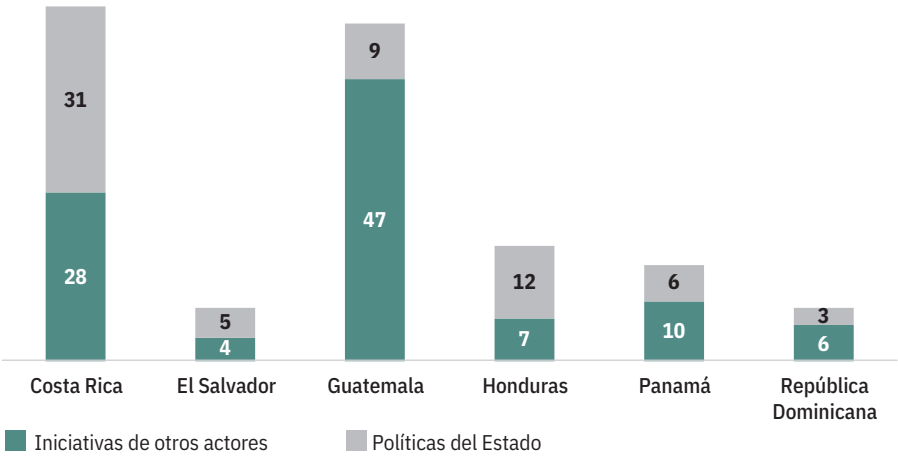
En el período reciente, los países se han esforzado por incorporar la agenda de adaptación en sus planes de desarrollo y en sus planes de acción climática, también de forma alineada con la creación de fondos internacionales. Este es el caso del Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, ambos establecidos en el marco de la CMNUCC. Con el objetivo de analizar estos cambios, así como los enfoques, se compararon las iniciativas recopiladas en función del estado de implementación y el origen de estas, para evaluar si responden a agendas propias o externas.

El cambio se nota al comparar las acciones de adaptación finalizadas o en ejecución. Más de la mitad de las finalizadas (61%) se originaron en respuesta a las iniciativas de otros actores y el complemento respondió a política pública de los Estados (39%). En otras palabras, se trata de acciones que las agendas propias de intervención de actores han impulsado, como cooperantes, ONG, representantes de asociaciones y del sector privado, que con apoyo técnico o financiero impulsaron su ejecución (gráfico 2.8).

En Guatemala, la República Dominicana y Panamá, las acciones finalizadas respondieron a la agenda o iniciativa de otros actores relacionados con la política pública de los Estados. Respondieron mayoritariamente a proyectos de cooperantes, ONG, asociaciones o cámaras empresariales, que brindaron apoyo técnico y financiero con base en sus propias agendas de intervención. Por ejemplo, en Guatemala tuvieron influencia relevante las iniciativas de actores como Rainforest Alliance, la Corporación Multi Inversiones (CMI), la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto Privado de Investigación sobre

Gráfico 2.8

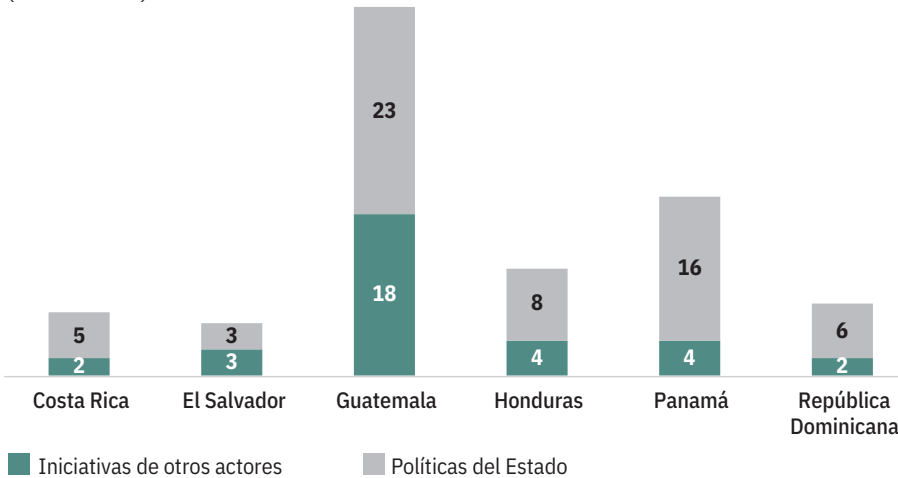
Región CARD
Acciones de adaptación al cambio climático finalizadas, según su origen, por país. 2007-2024
(absolutos)



Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

Gráfico 2.9

Región CARD
Acciones de adaptación al cambio climático en ejecución según su origen, por país. 2007-2024
(absolutos)



Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

Cambio Climático (ICC) y diferentes cámaras empresariales del sector agrícola. Ahora bien, en la República Dominicana respondieron a iniciativas puntuales de la Agencia Francesa para el Desarrollo,

del PNUMA y de JICA, ejecutadas por actores como ONG. En Panamá, destacaron iniciativas de organizaciones sin fines de lucro destinadas a conservar la biodiversidad, como la Fundación

Natura y Wetlands Internacional, el sector académico y de investigación, también se pusieron en marcha proyectos específicos de agencias como la FAO, así también, iniciativas de ONG locales, relacionados con la agricultura.

Sin embargo, esa tendencia se invirtió con las iniciativas vigentes. Aquí se nota el cambio, pues el promedio de los países refleja que una mayor proporción de las acciones en curso responde a la política de los Estados (65%), mientras que el 35% restante responde a iniciativas de otros actores (gráfico 2.9). Esto es consecuente con la revisión de la legislación, las estrategias y los planes nacionales en los países de Centroamérica al 2020, efectuada por Segura et al. (2022). Estos revelan que la región ha tenido una progresiva tendencia hacia la elaboración de políticas de adaptación, con diferentes ritmos y calidades en la formulación, apropiación e implementación.

En cinco de los seis países analizados se mantiene esta tendencia, mientras que en Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana se supera. En el caso de Panamá, el aumento puede explicarse en buena medida por el crecimiento sostenido que ha registrado este país en el financiamiento climático en la inversión pública (PNUD, 2024) y también por la mayor asignación de presupuesto gubernamental a estrategias y políticas de Estado de mediano a largo plazo. Por su parte, la República Dominicana se alinea más con la Política Nacional de Cambio Climático, con los procesos de actualización de su NDC en el 2021 y con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuyo cuarto eje estratégico se orienta a una gestión de riesgos eficaz para la reducción de pérdidas humanas, económicas y ambientales; además de una adecuada adaptación al cambio climático. En Costa Rica, las acciones en ejecución están vinculadas, principalmente, con instrumentos de política sobre adaptación del sector biodiversidad al cambio climático y a la operativización de la Política Nacional de Cambio Climático 2018-2030, a través de acciones contempladas en el PNA 2022-2026. El Salvador, por su parte, es el único país en el que la proporción

de acciones identificadas en respuesta a políticas de Estado es igual a las de la agenda de otros actores.

A su vez, resulta posible identificar cambios recientes en el enfoque de las iniciativas de adaptación, en particular en cuanto a los sectores de intervención. De acuerdo con las acciones sistematizadas, al compararlas con las fechas de inicio previas al 2018 y las que comenzaron a partir de este año, se observó que algunos sectores y actividades han ganado terreno respecto a la cantidad de iniciativas implementadas (cuadro 2.7).

Por ejemplo, el sector agropecuario es uno de los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, al punto de que las NDC de los países que se han ido actualizando en la región recientemente integran al sector agropecuario, como una prioridad para la adaptación “por su estrecha relación con la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural y el desarrollo sostenible” (IICA, 2017). También los fondos de cooperación internacional (por ejemplo, el Fondo de Adaptación o el Fondo Verde para el Clima) promueven el poner en marcha iniciativas en adaptación agrícola, sistemas agroclimáticos, resiliencia ante sequías e inundaciones, entre otras.

Otro caso representativo lo muestran las acciones de carácter transversal, debido a la relevancia que ha adquirido la adaptación en el marco de las prioridades de los países. A raíz de las cumbres internacionales, las naciones han enfocado sus esfuerzos en actualizar sus NDC, formular sus planes nacionales de adaptación, implementar mecanismos de prevención, integrar los objetivos de adaptación en procesos de planificación sectorial, enfocar los esfuerzos hacia las poblaciones más vulnerables incorporando enfoques inclusivos e incursionando en la implementación de mecanismos de comunicación y reporte ante las convenciones, particularmente la CMNUCC.

Por otra parte, aunque los sectores de infraestructura, salud y turismo no tuvieron participación representativa en la sistematización, la comparación entre los dos períodos permite identificar un aumento en las acciones en los años más recientes, lo cual debería ser

Cuadro 2.7

Región CARD
Acciones de adaptación al cambio climático, según sectores, por período

Sectores	Antes del 2018	Después del 2018
Biodiversidad y bosques	49	52
Agropecuario	33	51
Acciones transversales	5	35
Recursos hídricos	15	15
Infraestructura	1	6
Salud	1	3
Turismo	0	2
Energía	0	1

Fuente: Castillo, 2024 con base en la sistematización de acciones de adaptación realizada para este Informe.

esperable, considerando su relevancia y alta vulnerabilidad al cambio climático por diversas formas.

Un elemento clave para saber si las iniciativas se adaptan a las necesidades en esta materia y, en general, en acciones climáticas, es la capacidad de tener mecanismos de seguimiento y evaluación. Como se ve en el recuadro 2.7, la mayoría de los casos sistematizados en este estudio no muestran las condiciones para una adecuada evaluación de sus impactos, ni para dar sostenibilidad y ajuste a las políticas públicas.

Las acciones se enfocan en territorios prioritarios, pero omiten sectores clave como la infraestructura y la salud

Al comparar las prioridades temáticas de las 269 iniciativas recopiladas en el estudio exploratorio -analizadas previamente en este capítulo- con otros estudios sobre sectores vulnerables, se identifican importantes discrepancias. En esta sistematización, el 95% de las acciones se ejecutaron en cuatro sectores principales, que según su participación en orden de importancia son: biodiversidad y bosques, agropecuario, transversal y recursos hídricos. Estos resultados se contrastaron con la identificación de los sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático, conforme a los escenarios formulados por el IPCC. Esta comparación se basa en Brenes, 2024.

La evidencia científica presentada en el estudio indica que los sectores más susceptibles de ser afectados en forma significativa por el cambio climático, y que representan prioridades de intervención para la adaptación, son la agricultura, la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la salud pública, la infraestructura y la biodiversidad. De acuerdo con el análisis previo, los sectores de salud e infraestructura no tuvieron participación representativa en la sistematización de las acciones en los países; pues estos dos sectores, junto con el de turismo y el de energía apenas concentraron el 5% de las acciones identificadas. El vínculo con la salud es clave debido al riesgo que el cambio climático genera en la incidencia de enfermedades transmisibles por vectores sensibles a las temperaturas y a los patrones de precipitación, así como a la incidencia de enfermedades crónicas y la exposición a condiciones extremas. La agenda de infraestructura, especialmente la denominada crítica por su orientación al servicio público y a la producción, es relevante porque incide de forma directa en las oportunidades de desarrollo; los daños y pérdidas asociados a los eventos climáticos constituyen un pasivo contingente asociado con la infraestructura que debe ser atendida, reduce la capacidad fiscal al absorber los recursos disponibles destinados a inversión, y en reiteradas ocasiones obliga al endeudamiento y al aplazamiento de metas de desarrollo.

Recuadro 2.7

Seguimiento, evaluación y sostenibilidad de las acciones de adaptación

En el contexto de los compromisos con la CMNUCC, los países de la región están obligados a elaborar dos tipos de instrumentos: las Comunicaciones Nacionales y los Reportes Bienales de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés), el primero cada cuatro años y el segundo cada dos; Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala han elaborado cuatro comunicaciones nacionales, mientras que El Salvador, Honduras y la República Dominicana, tres. Los informes iniciales estaban particularmente inclinados a la mitigación de gases de efecto invernadero y son los más recientes los que empiezan a incorporar datos sobre acciones de adaptación, la mayoría se enfocan en las acciones que propicia la cooperación.

Después de la Cumbre de París, los países han establecido nuevas políticas, planes o estrategias relacionadas con la adaptación, especialmente los PNA: República Dominicana en el 2016, Costa Rica en el 2018, El Salvador en el 2019, Nicaragua en el 2020, Panamá en el 2023 y Honduras en el 2024. De acuerdo con Segura et al. (2022), solo dos de estos planes integraron el monitoreo y la evaluación dentro de sus enunciados. Recientemente, se generan mandatos de seguimiento y evaluación a partir de los PNA y su puesta en vigencia (con horizontes de mediano plazo) debe ser un punto de referencia en cuanto a indicadores y metas para medir avances, calificar el seguimiento y efectuar la evaluación a fin de determinar la naturaleza de

los impactos, cambios o transformaciones que se han logrado y exponen el avance en la adaptación.

Aunque las iniciativas regionales de adaptación poseen productos concretos a partir de cada intervención, no se encuentra evidencia de elementos que vinculen dichos productos específicos con propósitos de mediano y largo plazo en adaptación (consignados en los PNA). Tampoco es posible constatar que los países, a partir de los PNA, hayan avanzado en el diseño o adopción de medios de verificación, instrumentos o sistemas de monitoreo de las acciones y el seguimiento oportuno para la evaluación.

Esto se confirmó con el estudio exploratorio. El 46% del total de iniciativas sistematizadas cuenta con mecanismos de monitoreo y seguimiento, en especial aquellas con cooperación internacional. De estas, la definición de indicadores para el seguimiento se concentró en indicadores de bienes, productos o servicios que las intervenciones entregan (68%), apenas el 12% en indicadores de impacto, el 20% restante no presenta indicadores para monitorear las acciones y dar seguimiento al producto, efecto e impacto, sino más bien se refiere a medios de verificación de las actividades realizadas en el marco de implementación de las iniciativas, sin respaldo de una responsabilidad clara para el seguimiento.

Una de las principales debilidades identificadas es la falta de impulso para garantizar la

sostenibilidad de las acciones. La principal fuente de recursos para la acción climática proviene de la cooperación internacional, sin embargo, no es común asignar recursos soberanos a este propósito. En consecuencia, la gobernanza y el posicionamiento para la acción climática puede resultar débil e insuficiente, bajo la supervisión intermedia de los ministerios de ambiente, que disponen de recursos materiales y humanos limitados para la gestión.

La falta de monitoreo y seguimiento del alcance e impacto de las acciones de adaptación implementadas en los países de la región representa un desafío de investigación, para valorar sus implicaciones en el desarrollo humano en términos ambientales, socioeconómicos y culturales. Se trata no solo de seguimiento sino de incorporar la evaluación *ex ante* con enfoque de impactos y no solamente *ex post* como recuento del cumplimiento de metas. Esto puede influir en la priorización, el ajuste de las políticas públicas, el progreso de resultados e identificación de nuevas necesidades en materia de generación de resiliencia en sectores vulnerables al cambio climático. También puede provocar un desperdicio de recursos (públicos o privados), lo cual afectaría la economía, fomentaría la pobreza y la desigualdad, así como aumentaría la construcción social de riesgos.

Fuente: Elaboración propia; con base en Castillo, 2024.

Sí se encontraron elementos de coincidencia en los dos estudios comparados, en el enfoque e intervención territorial de las acciones sistematizadas, respecto a los territorios que la evidencia científica catalogó como los más afectados y vulnerables ante el cambio climático: a) zonas costeras, principalmente por el incremento del nivel del mar y los ciclones cada vez más intensos; b) Corredor Seco Centroamericano, donde predomina la

agricultura de subsistencia; y c) zonas montañosas con dependencia de los recursos naturales y la economía de subsistencia en ecosistemas frágiles.

Los resultados del estudio exploratorio arrojaron que las iniciativas se pusieron en marcha principalmente en el ámbito subnacional y local de los países, con enfoque en las zonas costeras pacífica y atlántica, el Corredor Seco Centroamericano, zonas áridas de República Dominicana y

zonas montañosas). Esto coincide con los tres tipos de territorios vulnerables identificados. De acuerdo con las iniciativas sistematizadas, las principales características del enfoque territorial se presentan en el recuadro 2.8 y son relevantes desde la perspectiva planteada.

Aunque no existe evidencia científica sistematizada al respecto para la región CARD, se deben evitar las medidas que no sean adecuadas para la adaptación o

lo que se ha venido conceptualizando como *maladaptación* al cambio climático. El IPCC (2022) la define cuando las acciones de adaptación que generan impactos negativos no intencionados, lo cual aumenta la vulnerabilidad social, afecta los ecosistemas o incrementa emisiones de gases de efecto invernadero. Este fenómeno puede agravar inequidades y generar costos difíciles de revertir (Ley, 2025).

Este tipo de medidas son evitables si se adoptan enfoques de planificación flexibles, multisectoriales y de largo plazo, considerando las interacciones entre diferentes sectores y ecosistemas. Un enfoque sistémico permite maximizar sinergias y reducir impactos negativos, lo cual evita problemas como los generados en cuencas altas que afectan a comunidades en cuencas bajas (Ley, 2025).

Los sectores más vulnerables a la maladaptación son las comunidades marginadas e indígenas, que a menudo no se incluyen en el diseño de políticas de adaptación. Ejemplos de este problema incluyen la supresión de incendios en ecosistemas que los requieren para su equilibrio natural y la construcción de diques que pueden alterar los drenajes naturales. En Fiji, por ejemplo, los muros contra el aumento del nivel del mar han provocado problemas de drenaje, mientras que los manglares han demostrado ser una solución más efectiva. En Centroamérica, aunque existe poca documentación científica al respecto, la exclusión de organizaciones comunitarias en la planificación gubernamental podría generar maladaptación, lo cual destaca la importancia de integrar a estos actores en los procesos de adaptación (Ley, 2025).

Adaptación al cambio climático requiere de acciones articuladas de todos los actores sociales, económicos y políticos de la región

Ante los retos en adaptación mencionados en esta sección, es importante centrarse en los actores clave, dado que la efectividad de las políticas adaptativas depende de la interacción y participación de las instituciones gubernamentales, las ONG, las comunidades locales y el

Recuadro 2.8

Territorios y características de la implementación de acciones de adaptación

- **Guatemala.** Acciones implementadas, en su mayoría, en el nivel subnacional y con concentración en la región central, suroccidental y en el Petén. Las dos primeras son fértiles para la producción agrícola y la tercera presenta la mayor cobertura forestal en el país, pues abarca la Reserva de la Biosfera Maya, una de las áreas protegidas más extensas de la región centroamericana.
- **El Salvador.** Iniciativas ubicadas localmente en la desembocadura de ríos en el occidente del país, en la ciudad de San Salvador (Área Metropolitana), en localidades específicas de los municipios de la región oriental ubicados en el Corredor Seco que atraviesa este país en determinadas zonas de la costa pacífica.
- **Honduras.** Acciones ejecutadas en localidades de los municipios de la región norte y nororiental, con intervenciones enfocadas en la conservación de los ecosistemas forestales degradados y el desarrollo de agricultura de granos básicos, ganadería y silvicultura.
- **Costa Rica.** Iniciativas aplicadas en varias zonas de las provincias de la Gran Área Metropolitana y en zonas costeras de la Región Chorotega y Pacífico Central. Las acciones se enfocan mayoritariamente en el desarrollo de capacidades, conservación de ecosistemas y recursos hídricos y la implementación de proyectos piloto de producción agrícola y pecuaria.
- **República Dominicana.** Predominio de iniciativas de implementación local y subnacional en forma dispersa y abarcando varios territorios del país. Por ejemplo, intervenciones en producción agrícola en regiones del oeste y suroeste, iniciativas que abarcaron municipios específicos de toda su zona costera bordeada por el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Iniciativas en la zona montañosa al este de la provincia del Seibo, se concentran en prácticas de agroforestería y restauración de cuencas. Asimismo, se identificaron acciones en las zonas áridas y semiáridas del noroeste y otras intervenciones que abarcaron áreas protegidas y zonas de importancia ecológica ubicadas en el Corredor Biológico del Caribe.

Fuente: Elaboración propia con base en Castillo, 2024.

sector privado. Esta tarea no puede llevarse a cabo de manera aislada, sino de forma articulada con metas comunes que permitan mejorar la resiliencia y gestionar el riesgo y la vulnerabilidad.

El SICA es un gran actor estratégico para abordar los retos asociados al cambio climático y fortalecer la planificación, coordinación y ejecución de políticas adaptativas, especialmente en sectores críticos como la agricultura, la gestión de recursos hídricos y la producción de energía. No obstante, esto requiere de la participación de muchos actores.

Con el propósito de identificar y conocer la posición y la disponibilidad para emprender acciones de adaptación, en el

marco del proceso de investigación asociado a la preparación de este Informe se realizó un estudio exploratorio mediante el cual se indagó sobre la importancia que representantes de instituciones públicas y del SICA, el sector privado y la sociedad civil otorgan al tema de la adaptación. Para ello se preparó y distribuyó un cuestionario a 37 personas de todos los países vinculados con los sectores agropecuario y de energía. Esto se complementó con dos sesiones de grupo a nivel regional con representantes de cada uno de esos sectores.

Este trabajo permitió identificar barreras y oportunidades para poner en marcha medidas de adaptación y acercarse al conocimiento de las capacidades

técnicas y financieras de esos sectores, así como de su disposición para realizar inversiones, articular esfuerzos y construir alianzas para la adaptación.

Según los resultados del cuestionario, existe una amplia conciencia sobre la importancia y los efectos del fenómeno en la región. De las 37 personas encuestadas, 33 valoraron su nivel de conocimiento sobre el cambio climático como intermedio o avanzado, y 35 afirmaron estar familiarizadas con los conceptos de adaptación y mitigación. Además, 30 respondieron que consideran altamente probables los escenarios de cambio climático para la región y reconocen la evidencia clara de sus efectos. Solo una persona expresó que los escenarios son “muy alarmistas y no reflejan la realidad”.

En relación con los efectos, 33 personas señalaron que el nivel de afectación en los países es muy alto. Entre los principales efectos identificados se puede mencionar la variabilidad climática durante los períodos de lluvia y sequía muy poco predecibles, el incremento en la intensidad de las lluvias y la duración de los periodos secos; esto ha reducido la productividad de los cultivos y la pérdida de las cosechas. Se mencionó en menor medida como consecuencia la proliferación de plagas y enfermedades que afectan tanto a plantas como a los animales. En el sector energético, se destacaron la disminución de los caudales en los ríos y la reducción de los niveles de los embalses, lo cual ha provocado inestabilidad y una menor generación de hidroelectricidad. En ambos sectores, se resalta cómo esta situación ha provocado pérdidas económicas e incremento en los costos de producción, especialmente en el sector agropecuario debido a la mayor aplicación de insumos (fertilizantes, plaguicidas) e inversión en sistemas de riego. Las personas consultadas prevén que esta afectación se agudizará en el futuro (particularmente en los próximos cinco años).

Cuando se les preguntó a las personas consultadas sobre el nivel de prioridad de las acciones de adaptación al cambio climático en la agenda de sus sectores (energía y agropecuario), 23 de las 37 indicaron que este tema tenía los niveles más altos de importancia (1 y 2 de 5

posibles) y 30 señalaron que sus sectores habían tomado alguna medida o definido algún plan o estrategia para enfrentar estos efectos del cambio climático.

**PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
ACTORES Y PRIORIDADES DE
ADAPTACIÓN**

véase Brenes, 2024, en www.estado-nacion.or.cr

En primer lugar, se encuentran las medidas de adaptación basadas en la naturaleza, que incluyen la conservación de ecosistemas fundamentales para la preservación del agua y la biodiversidad, la reforestación de cuencas hidrográficas, el incremento de la cobertura forestal y la contención de la deforestación.

El segundo grupo de prioridades se enfoca en mejorar prácticas productivas, tales como promover la agricultura sostenible, aumentar la eficiencia en el uso del agua y fomentar la cosecha de agua, aplicar la economía circular, invertir en nuevas tecnologías, optimizar el uso y calidad del suelo y emplear semillas mejoradas y más resilientes.

Un tercer grupo, relacionado estrechamente con el anterior, se centra en la formación de capacidades. Esto incluye la capacitación en nuevas formas de producción sostenible, la formación de profesionales especializados en adaptación al cambio climático e inversiones en investigación y desarrollo.

Finalmente, se subrayaron temas relacionados con la construcción de alianzas público-privadas y la creación de espacios multisectoriales de diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Cuando se consultó sobre las principales limitaciones para avanzar en adaptación, los únicos dos aspectos en los que la mayor parte de las personas identificaron limitaciones fueron la falta de recursos financieros (28/37) y la necesidad de conciencia de la población sobre el fenómeno del cambio climático (21/37). En contraste, no fueron señalados como factores críticos la poca información y capacitación, normativa y apoyo gubernamental (cuadro 2.8).

Aunque previamente se analizaron los actores involucrados directamente con las iniciativas de adaptación, este ejercicio de consulta también permitió identificar aspectos sobre los ellos desde

Cuadro 2.8

**Región CARD
Limitaciones identificadas por los actores para avanzar
en adaptación al cambio climático**

Limitación	Respuestas	
	Sí	No
Falta de tecnología	19	18
Falta de información y capacitación	11	26
Falta de recursos financieros	28	9
Falta de conciencia en la población sobre el fenómeno	21	16
Falta de normativa	10	27
Falta de apoyo gubernamental	15	22
Otros:		
Falta de articulación entre sectores	1	
Voluntad política	2	
Debilidad institucional	1	
Varios	7	

Fuente: Brenes, 2024b con base en la consulta realizada para este Informe.

otra perspectiva y cómo deben integrarse para impulsar nuevas y mejores acciones. La OCDE subraya que los Gobiernos nacionales y locales deben desempeñar un papel activo en la definición de políticas de resiliencia, apoyados por el sector privado y las comunidades locales (OCDE, 2023). Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales, los cuales están en la primera línea de respuesta ante fenómenos climáticos adversos (BID, 2023). Este enfoque permite movilizar recursos y coordinar respuestas estratégicas, como se observa en Honduras, donde el Fondo Verde para el Clima ha financiado la construcción de infraestructura resiliente en comunidades rurales vulnerables (Fondo Verde para el Clima, 2021). La integración de estos actores garantiza que las políticas de adaptación respondan tanto a las necesidades climáticas como a las prioridades de desarrollo económico y social de cada país, lo cual permite un enfoque más inclusivo y sostenible.

En la región CARD, la adaptación al cambio climático está siendo impulsada por un diverso conjunto de actores como fue planteado en líneas anteriores con base en la identificación y caracterización de casos (Castillo, 2024). De acuerdo con el cuestionario respondido por 37 personas vinculadas con los sectores de energía y agropecuario, las alianzas y relaciones de intercambio y cooperación se han establecido particularmente con ministerios o secretarías de Estado, gobiernos locales y otras instituciones públicas (29 mencionaron este tipo de contrapartes, cuadro 2.9). Dentro de los actores estatales, los ministerios de Ambiente y Energía se destacan por su papel en la regulación y promoción de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad ambiental. El segundo tipo de actor con mayores menciones fue el de los organismos internacionales (17 de 37 personas los citaron). En este grupo destacan las agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO, PNUMA, PNUD), organismos financieros como el BID y cooperantes como la Unión Europea y AECID. Finalmente, destacan actores de la sociedad civil como

las organizaciones ambientalistas y de pueblos indígenas y la academia. Transversalmente, el financiamiento internacional es un pilar central para impulsar la ACC en América Latina y el Caribe, sobre todo en países con recursos limitados. Mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Banco Mundial han tenido un papel clave en el financiamiento de proyectos de infraestructura resiliente, restauración de ecosistemas y fortalecimiento de capacidades locales. En Honduras, el Fondo Verde para el Clima ha respaldado proyectos de infraestructura hídrica que benefician a comunidades rurales, pues mejoran su capacidad para enfrentar sequías prolongadas (OCDE, 2023). Asimismo, el Banco Mundial ha cofinanciado programas en Nicaragua capaces de integrar soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación de cuencas hidrográficas para reducir la vulnerabilidad de las zonas agrícolas (BID, 2023). Estas experiencias también destacan la importancia de la colaboración público-privada. Por ejemplo, en Panamá, las alianzas entre gobiernos locales y empresas privadas han facilitado la implementación de proyectos de carbono-neutralidad,

Cuadro 2.9

Región CARD
Alianzas para avanzar en adaptación al cambio climático, según actor

Actor	Cantidad
Organismos internacionales ^{a/}	17
Academia	5
Ministerio; institución pública; gobierno local	29
Sociedad civil	11

a/ Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), Reclima, FAO, Agroinnova, IICA, Unión Europea, BID, PNUD, Pnuma, Olade, Aecid.
Fuente: Brenes, 2024b con base en la consulta realizada para este Informe.

combinando innovación tecnológica y conservación de ecosistemas (White, 2022). Este modelo de financiamiento colaborativo permite aprovechar al máximo los recursos internacionales y locales, lo cual asegura que las inversiones respondan a las prioridades nacionales y regionales.

Desafíos y oportunidades para la acción

Este capítulo ha explorado el desafío estratégico que significa el cambio climático para la región CARD, desde la perspectiva de su principal prioridad: la adaptación. Se ha presentado información sobre la exposición y los elementos relacionados con la vulnerabilidad. Asimismo, se han identificado focos territoriales y sectoriales clave para el abordaje del tema, y se han analizado las políticas públicas e iniciativas puestas en marcha, con criterios de análisis integral en términos de contenidos, prioridades, actores involucrados, recursos y otros elementos. Con base en esto, en los insumos de investigación realizados para este Informe y criterios expertos, esta última sección plantea un conjunto de reflexiones sobre los desafíos y oportunidades identificadas. En particular, destaca las áreas clave que requieren atención y observa las buenas prácticas internacionales que, sin ser exhaustivo, permite una paleta de alternativas importantes para la discusión regional y en cada uno de los países.

Tres enfoques clave: gobernanza, financiamiento y priorización estratégica

La región enfrenta una de las mayores amenazas climáticas en el mundo, derivada de su alta vulnerabilidad previa y su condición de riesgo ante las proyecciones futuras. Estas condiciones, junto con estructuras socioeconómicas frágiles y capacidades institucionales desiguales, exacerban los impactos del cambio climático y comprometen el desarrollo humano sostenible, los medios de vida y el bienestar de las poblaciones. En este contexto, la atención a los desafíos regionales para la adaptación no solo es urgente,

sino estratégica para garantizar la resiliencia de los ecosistemas, las economías y las comunidades de la región CARD.

El análisis de diversos estudios permite identificar patrones comunes y tensiones críticas, que se han clasificado en tres categorías fundamentales: capacidades institucionales y gobernanza, financiamiento y recursos, y conocimiento y priorización estratégica. Estas dimensiones reflejan los pilares esenciales para una adaptación climática efectiva: la necesidad de coordinar actores y políticas, movilizar recursos de manera sostenible y priorizar acciones basadas en evidencia. Se requiere concentrar esfuerzos en las problemáticas más apremiantes y políticamente viables, con un enfoque en la articulación multilateral y la acción regional coordinada.

Este enfoque ofrece no solo una comprensión clara de las barreras existentes, sino también recomendaciones concretas y adaptadas al contexto regional. Por ejemplo, iniciativas como la ERCC y los PNA muestran que, aunque hay avances, persisten brechas en la implementación de políticas coordinadas, lo cual subraya la necesidad de un liderazgo fortalecido del SICA. Este análisis no solo destaca la urgencia de la acción colectiva, sino que proporciona una hoja de ruta para convertir los retos en oportunidades, maximizando el impacto de los esfuerzos locales, nacionales y regionales.

En cuanto al primer aspecto, existe una gobernanza climática débil y fragmentación interinstitucional. El cambio climático plantea desafíos que trascienden fronteras y sectores, exigiendo sistemas de gobernanza climática robustos y coordinados. Sin embargo, en la región persiste una fragmentación significativa en la acción climática, donde la falta de articulación entre niveles de gobierno y sectores económicos limita la efectividad de las políticas de adaptación. Aunque el 80% de las acciones de adaptación las ejecutan las entidades gubernamentales, muchas de estas carecen de una integración estratégica con planes sectoriales y municipales. Esta desconexión genera duplicidades, dispersión de recursos y respuestas insuficientes ante riesgos climáticos complejos (Brenes, 2024b).

Un marco de gobernanza fortalecido debe incluir la creación de mecanismos de coordinación multinivel capaces de integrar actores nacionales, subnacionales y regionales. La promoción de plataformas de diálogo entre los sectores agrícola, hídrico y energético, como las mesas climáticas propuestas en algunos países como Costa Rica, ha demostrado ser efectiva para alinear prioridades y maximizar los recursos disponibles. Además, el SICA puede desempeñar un papel central en la armonización de normativas y la promoción de estrategias climáticas regionales, que potencien los esfuerzos nacionales y reduzcan las brechas de implementación.

Hoy en día, uno de los principales retos es la limitada integración de las comunidades locales en la planificación climática. La exclusión de estas comunidades -especialmente indígenas y rurales- del diseño de políticas climáticas limita la eficacia y sostenibilidad de las intervenciones. Estas comunidades son no solo se ven afectadas por el cambio climático, sino que también poseen conocimientos tradicionales valiosos para enriquecer las soluciones adaptativas. Sin embargo, menos del 10% de las acciones regionales documentadas en este Informe han incluido participación de estos grupos en la planificación. Para enfrentar este desafío, se requiere institucionalizar procesos participativos que incluyan a las comunidades desde la concepción hasta la implementación de políticas. Asimismo, el fortalecimiento de capacidades locales mediante talleres y transferencia de tecnologías puede empoderar a las comunidades para actuar como aliadas en la construcción de resiliencia climática (Brenes, 2024).

En cuanto al financiamiento y a los recursos, se enfrenta una alta dependencia del financiamiento internacional. Como se analizó previamente, el 70% de las acciones de adaptación las financian organismos externos, como el Fondo Verde para el Clima y el Banco Mundial. Esto genera incertidumbre para la sostenibilidad de las estrategias climáticas, pues los flujos de financiamiento están condicionados por prioridades globales que no siempre coinciden con las

necesidades locales. Además, los procedimientos complejos para acceder a estos fondos representan una barrera significativa, en especial para países con capacidades administrativas limitadas.

Para reducir esta dependencia, los países del CARD requieren explorar mecanismos innovadores de financiamiento, como bonos verdes y asociaciones público-privadas, que movilicen recursos internos y externos de manera sostenible. Casos como la Iniciativa Productiva de Inversión para la Adaptación al Cambio Climático del BCIE son ejemplos de cómo la región puede diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su autonomía económica. Sin embargo, además, se debe abordar la distribución desigual de los recursos financieros, lo cual afecta la capacidad de los países y sectores para implementar acciones climáticas. Por ejemplo, mientras sectores como la biodiversidad y los bosques concentran más del 50 por ciento de las acciones financiadas, sectores críticos como la infraestructura y la salud no tienen prioridad entre las acciones analizadas en este capítulo. Esta disparidad es aún más marcada en comunidades rurales, pues enfrentan mayores vulnerabilidades, pero menores inversiones. Adoptar un enfoque territorial que priorice las áreas más vulnerables y garantice una distribución equitativa de los recursos, se convierte en una tarea que todavía requiere mejorar su implementación. El poder crear fondos nacionales de adaptación podría ser modelo para canalizar recursos hacia sectores y regiones marginadas, asegurando que la adaptación sea inclusiva y efectiva.

Por último, se requiere crear conocimiento y ejercer una priorización estratégica, basada en evidencia. Existen brechas en información climática regionalizada, faltan datos específicos para cada país y sector, los cuales limitan la capacidad de tomar decisiones informadas. Menos del 30% de los países del SICA cuenta con sistemas robustos de monitoreo climático, que integren indicadores sectoriales y proyecten escenarios adaptativos (Brenes, 2014). Esto afecta la planificación y evaluación de políticas, y deja de lado a los gobiernos como actores reactivos ante

eventos extremos, en lugar de anticiparse a ellos. Ante esto, se torna esencial desarrollar una red regional de información climática, que homologue datos entre países y facilite su acceso a tomadores de decisiones. Iniciativas como el proyecto “Escenarios Climáticos Regionalizados para Centroamérica” han demostrado el potencial de la colaboración regional para cerrar estas brechas.

Buenas prácticas internacionales en adaptación relevantes para CARD

Un elemento clave para definir políticas de adaptación es observar el contexto internacional y evaluar si algunas buenas prácticas son viables para la discusión y aplicación en los países de la región. Este apartado se basa en el estudio de Orozco

(2025) para el presente Informe. Dicho trabajo tuvo como objetivo fortalecer y promover las iniciativas de adaptación en los países del SICA mediante la identificación de buenas prácticas en distintos países y regiones del mundo referidas a la formulación de los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y la implementación de iniciativas en este marco.

Esta identificación de buenas prácticas implicó un cuidadoso proceso de selección, sistematización y análisis de documentación internacional aplicar un conjunto de descriptores. Lo anterior permitió procesar una voluminosa literatura con gran diversidad temática y de alcances. Se incluyeron documentos oficiales de los países, artículos académicos, monografías y artículos en revistas no especializadas. Como resultado fue

posible identificar 17 casos de estudio que contienen buenas prácticas de especial relevancia para los países que forman parte del SICA (recuadro 2.9).

Diecisiete buenas prácticas internacionales

Las buenas prácticas seleccionadas son relevantes para los países del SICA porque aportan experiencias y lecciones aprendidas en otras partes del mundo e, incluso, en Centroamérica, en la atención de desafíos similares a los que ellos enfrentan. Encierran logros, fortalezas y debilidades cuyo conocimiento permitirá mejorar la calidad de futuras iniciativas de política pública. En particular, aportan ideas para resolver un problema medular de los procesos asociados a la planificación para adaptarse al cambio climático:

Recuadro 2.9

Metodología de recopilación y análisis de buenas prácticas

El estudio de Orozco (2025) efectuó una búsqueda de informes técnicos institucionales, informes nacionales oficiales, sistematizaciones de experiencias, artículos, lecciones aprendidas sobre adaptación al cambio climático en diversas plataformas bibliográficas. Utilizó palabras clave como “impactos”, “escenarios”, “proyecciones”, “adaptación”, “compromisos” en tres regiones de interés: (a) países del SICA, (b) América Latina y El Caribe, (c) países del sur global o en vías de desarrollo. En todos los casos posibles, se tomó como línea de base el reporte de progreso en los planes nacionales de adaptación que publicó la Red Global para Planes Nacionales de Adaptación (National Adaptation Plan Global Network-NAP GN por sus siglas en inglés) en el 2023 (Guerdat et al., 2023).

La sistematización documental se ordenó a partir de los temas clave que propone NAP GN: integración sectorial de las políticas públicas, financiamiento de los procesos nacionales de planificación para la adaptación climática; la presencia de soluciones basadas en la naturaleza, el involucramiento del sector privado, la

integración vertical de los diversos niveles de gobernanza pública; la existencia de sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje; la existencia de comunicaciones estratégicas a públicos diversos y el alineamiento de los planes con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

En el grupo de los países del SICA se examinaron 39 documentos oficiales (cuadro 2.10), que incluyen las Comunicaciones Nacionales (NC), las NDC y los PNA, presentados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas en inglés).

En los países de América Latina y El Caribe se efectuó una selección de los documentos disponibles basada en los siguientes criterios: (a) que tuvieran prioridades de adaptación similares a las de los países del SICA; (b) que tuvieran afectaciones futuras de impactos por el cambio climático similares a las de los países del SICA; es decir, que fueran “puntos calientes” y (c) que contaran con su plan nacional de adaptación presentado ante la UNFCCC. Ocho países cumplieron con estos criterios: Uruguay, Perú, Paraguay,

Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Haití. Adicionalmente, se revisó buenas prácticas en México, Jamaica y Venezuela, aunque no hubieran presentado sus planes.

Finalmente, se realizó un análisis general de los PNA de países en vías de desarrollo de otras regiones del mundo que han sido presentados ante la UNFCCC y que además comparten características sociales, económicas, climáticas con la región del SICA. El propósito fue identificar experiencias y buenas prácticas en adaptación al cambio climático que podrían ser replicables en Centroamérica y la República Dominicana. Con estos criterios se seleccionaron los casos de Madagascar, Camboya, Bután, Fiyi, Tailandia, Kenia y Bangladesh, siete países más. Adicionalmente, se consideraron documentos de buenas prácticas y experiencias de Senegal y Tanzania en el África Subsahariana, aunque no tienen su plan de adaptación oficialmente enviado a la UNFCCC.

Fuente: Elaboración propia con base en Orozco, 2025.

Cuadro 2.10

Región CARD
Documentos analizados sobre adaptación al cambio climático^{a/}, por país, según tipo

País	Plan Nacional de Adaptación	Comunicaciones Nacionales	Contribución Nacionalmente Determinada	Comunicación sobre Adaptación
Belice		4	1 (v2)	
Guatemala	1	3	1 (v3)	
El Salvador		3	1 (v3)	
Honduras		3	1 (v2)	
Nicaragua		4	1 (v2)	
Costa Rica	1	4	1 (v3)	1
Panamá		3	1 (v2)	1
República Dominicana		3	1 (v2)	

a/ (v2): segunda versión. (v3): tercera versión.
Fuente: Orozco, 2025 con datos de UNFCCC, 2024.

pasar de la fase de planificación a la de implementación.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES
véase Orozco, 2025, en
www.estadonacion.or.cr

En esta sección se efectúa una breve descripción de cada una de estas buenas prácticas. Su lectura permite apreciar una amplia variedad de estrategias e intervenciones con objetivos, escalas espaciales y objetivos distintos, lo cual subraya la importancia de no reducir la adaptación al cambio climático a la acción sobre pocos temas. Se les recomienda a las personas interesadas en más detalles consultar el estudio de Orozco (2025).

• **1. CityAdapt.**
[EL SALVADOR, MÉXICO Y JAMAICA]

Es una iniciativa para aumentar la resiliencia climática de los sistemas urbanos mediante la adaptación de sus ecosistemas. Es relevante para la región del SICA por su énfasis en el enfoque de cuencas hidrográficas, la inclusión del sector municipal y del privado como socios estratégicos.

• **2. Adaptación basada en los ecosistemas para el cultivo del arroz.**
[CAMBOYA Y MADAGASCAR]

Es relevante para los países del SICA porque trabaja con un producto agrícola clave para la seguridad alimentaria y nutricional, así como para la actividad económica en general, pues el arroz forma parte de la canasta básica y producto de exportación.

• **3. Adaptación con perspectiva de género de un seguro de enfermedad para mujeres agricultoras.**
[SENEGAL]

Muestra la adaptación de un servicio público existente a las necesidades locales mediante la aplicación de un enfoque de “abajo” hacia “arriba”. Evidencia la importancia de cerrar brechas de género y desigualdades estructurales para los esfuerzos la gestión de los riesgos climáticos (Resurrección 2021; IPCC 2022).

• **4. Resolución de carencias de datos meteorológicos y climáticos.**
[BUTÁN]

Subraya la importancia de los datos para reducir el riesgo de desastres, especialmente en los eventos climáticos

extremos con el fin de emitir alertas a la población que resguarden sus vida y bienes. Este tipo de iniciativas se integra con otros marcos regulatorios internacionales y compromisos adquiridos, como la Agenda 2030 y el marco de acción de Sendai.

• **5. Adaptación transformadora y movilidad humana mediante la reubicación planificada.**
[FIJI]

Subraya la importancia de los marcos políticos y de la creación de herramientas efectivas como un Fondo Fiduciario para abordar los desplazamientos y reubicaciones inducidos por la crisis climática. Se trata de una iniciativa basada en evaluaciones exhaustivas de los riesgos climáticos.

• **6. Adaptación climática con énfasis en las zonas costeras.**
[VENEZUELA Y URUGUAY]

Diagnostica el estado de la vinculación entre la formulación de políticas públicas y la implementación efectiva de la adaptación al cambio climático. Documenta la escasa aplicación y cumplimiento de la planificación para la adaptación, un reto pendiente en los países del SICA.

- **7. Modelo de desarrollo para afrontar los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres.**
[CAJAMARCA, PERÚ]

Logró unir esfuerzos y apoyos de diferentes sectores de la provincia, con un enfoque de cuencas, para crear una mesa de trabajo intersectorial, estrategias y mecanismos para planes y políticas aplicados en todos los municipios.

- **8. Adaptación climática con restauración de ecosistemas e infraestructuras de defensa contra inundaciones.**
[TANZANIA]

Así como en el caso anterior, resalta la importancia de los enlaces interinstitucionales, incluyendo sectores académicos y comunales, para implementar procesos que cuenten con el apoyo y aprobación de las poblaciones locales.

- **9. Reducción de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los impactos del cambio climático.**
[CHACO PARAGUAYO]

Es un proyecto con un enfoque de ecosistemas que involucra a diversos sectores y poblaciones, desde una perspectiva de género y de respeto a las comunidades indígenas. Un informe de evaluación de medio término es una buena práctica que permite reconocer logros y corregir debilidades en lugar de esperar a una evaluación forense.

- **10. Lecciones para la adaptación basada en los ecosistemas a lo largo de las cuencas fluviales.**
[TAILANDIA]

Muestra la importancia de tener un diseño sólido y participativo, así como del seguimiento continuo para maximizar los beneficios de las iniciativas de adaptación basada en ecosistemas (AbE). Proporciona datos sobre el impacto de las intervenciones y recomendaciones sobre la pertinencia contextual de los métodos de seguimiento y evaluación. Incluyó a la población y al sector privado en el diseño e implementación.

- **11. Proyecto Regional de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay**
[URUGUAY-ARGENTINA]

Muestra la importancia de la integración vertical y la coordinación conjunta entre países vecinos, así como del desarrollo y la adaptación en el manejo de cuencas transfronterizas y áreas de conservación o turísticas.

- **12. Movilidad climática, adaptación y resiliencia: lecciones para América Latina y el Caribe.**
[COLOMBIA]

Trata temas de interés para el SICA como lo son la movilidad climática y los refugiados climáticos. La formulación de políticas y de planes para enfrentar estos temas es de vital importancia, pues de momento no están regulados por la legislación internacional.

- **13. Medición del gasto público en cambio climático.**
[CHILE]

Este trabajo ha permitido dotar a Chile de una metodología y herramientas para medir el gasto público en esta problemática, se considera transversal al presupuesto nacional. De gran importancia para todos los países centroamericanos y la República Dominicana, que no lo presupuestan.

- **14. Adaptación al cambio climático en las tierras secas**
[KENIA]

Es relevante para la región del SICA, pues, según el IPCC, podría experimentar sequías de manera frecuente. Este caso representa una oportunidad de aprendizaje para el sector agrícola, pues permite el uso de la agricultura climáticamente inteligente y los servicios de información climática como una herramienta eficaz para la adaptación de este sector.

- **15. Construcción de capacidades de adaptación al cambio climático a través de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables afrodescendientes e indígenas en la zona fronteriza.**
[COLOMBIA-ECUADOR)]

Creó estrategias y espacios de participación para las comunidades indígenas y afrodescendientes desde la planificación del proyecto hasta su implementación. Trabaja con un enfoque de género.

- **16. Community-Based Adaptation.**
[BANGLADESH]

Actividades de gestión de los recursos naturales a nivel comunitario para reducir los riesgos del cambio climático, proteger la biodiversidad y gestionar el suelo de forma sostenible. Mejoran la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas frente a los impactos del cambio climático.

- **17. Aplicación de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo de catástrofes en las instalaciones escolares.**
[HAÍTÍ]

Es relevante para la región del SICA por la intervención para mejorar la resiliencia de infraestructuras educativas, constantemente afectadas por eventos climáticos y geológicos y utilizadas como albergues temporales sin las condiciones idóneas para ello. Uno de sus resultados será la disponibilidad de estructuras resistentes durante las catástrofes.

Síntesis comparativa

Las buenas prácticas de adaptación al cambio climático aportan ideas y experiencias concretas que les permitirá a las sociedades y a los Estados de la región aprender sobre las potencialidades y dificultades enfrentadas cuando se decide pasar de la formulación de políticas públicas a su implementación. Es importante indicar que son experiencias sugerentes, pero no perfectas. Ninguna de

ellas, por ejemplo, cumple por completo con los criterios que la NAP-GN ha destacado como deseables para una política de este tipo (cuadro 2.11).

El criterio de un enfoque sectorial en el diseño e implementación de una iniciativa de adaptación al cambio climático fue el más observado entre las buenas prácticas analizados (16 de 17 veces). De cerca le sigue el alineamiento con el Plan Nacional de Adaptación y con las comunicaciones nacionales y la integración vertical, ambos claramente identificable en 13 ocasiones. En valores intermedios se encuentran la movilización de financiamiento, la aplicación de un enfoque de género e inclusión social y el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de resultados en diez, nueve y ocho ocasiones, respectivamente. En cambio, el involucramiento del sector

privado, la implementación de comunicaciones estratégicas con actores claves y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza son poco frecuentes.

No es necesario, sin embargo, que una buena práctica cumpla con todos los criterios para ser calificada como tal. En ocasiones, aportan “piezas” útiles para los países del SICA. Por ejemplo, se pueden extraer valiosas lecciones sobre la importancia de trabajar con las poblaciones locales, con un enfoque de género e inclusión social, debido a su papel preponderante en el manejo de los recursos naturales, la agricultura, la seguridad alimentaria, los recursos marino-costeros y la gestión del conocimiento e investigación.

Un ámbito de especial importancia para el diseño e implementación de políticas y proyectos de adaptación al cambio climático es el de la gobernanza.

El examen de las experiencias sugiere la importancia de los esfuerzos de articulación de los niveles de gobernanza territorial -desde el nacional hasta el local-. Estos esfuerzos se conocen como integración vertical de la política pública. Las intervenciones desde el Gobierno central, sin la participación y acompañamiento de las estructuras locales tienen menor eficacia y sostenibilidad.

Varios casos de estudio ofrecen valiosas pistas sobre la importancia de la gobernanza con enfoque territorial de cuenca y el gran valor de la cooperación transfronteriza para una mejor gestión de recursos compartidos entre dos o más países. Este es el caso de la cuenca del Río Uruguay entre Argentina y Uruguay. Fiyi aporta un buen ejemplo del vínculo entre la planificación para el cambio climático, la creación de un instrumento financiero y

Cuadro 2.11

Mundo

Temas claves de adaptación al cambio climático según NAP-GN^{a/} por estudio de caso y cumplimiento

Estudio de caso	Temas claves								
	Alinea PAN y NDC	Financiamiento proceso PNA	Integración sectorial	Integración vertical	Monitoreo, evaluación y aprendizaje	Soluciones basadas en la naturaleza	Género e inclusión social	Involucra sector privado	Comunicación estratégica
1	✓		✓			✓		✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓			✓		
4	✓	✓		✓	✓				
5	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
6	✓		✓	✓	✓				
7		✓	✓	✓	✓		✓		
8		✓	✓	✓	✓	✓			
9	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓		✓		✓	✓		✓	
11		✓	✓	✓			✓		
12	✓		✓	✓			✓		✓
13			✓	✓	✓				✓
14	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
15	✓		✓	✓			✓	✓	✓
16	✓	✓	✓			✓			
17	✓	✓	✓	✓					
Cumple	13	10	16	13	8	6	9	5	5

a/ Red Global de Planes Nacionales de Adaptación (NAP-GN)

Fuente: Adaptado de Orozco, 2025.

el trabajo con las localidades en un tema sumamente complejo y conflictivo como lo es la relocalización de las poblaciones y los refugiados climáticos.

Finalmente, la experiencia de Chile de medición del gasto público aplicado al cambio climático puede ayudar a pensar mejores sistemas para valorar no solo los costos asociados sino también la implicación real de los Estados en el ámbito de cambio climático. Datos como esto permitiría evaluar el retorno social de inversiones públicas en infraestructura que sean climático-resilientes.

Reflexión final: ¿dónde poner el énfasis de las políticas de adaptación?

Varios análisis presentados en este capítulo han examinado las políticas públicas, las iniciativas, la evidencia científica de amenazas y los retos de la región en materia de adaptación al cambio climático. El enfoque principal ha sido evaluar la respuesta, más que solo registrar los datos ya compilados sobre los escenarios. Para ello, se llevaron a cabo esfuerzos inéditos de revisión de amplio conjunto de respuestas: más de 86 documentos de política, 269 iniciativas, acciones o programas y una variedad de buenas prácticas internacionales. En cada una de esas sistematizaciones, se analizaron en detalle sus características e implicaciones. Este capítulo resume los principales hallazgos de esos estudios, pero se invita a las personas a revisar las investigaciones de base, cargadas de más información, sobre todo de mayor nivel de detalle para los países.

Identificadas las prioridades en las cuales se ha puesto atención a la hora de construir, tanto políticas de Estado como iniciativas de variado alcances y múltiples actores, se ha podido evaluar la coherencia entre estas y los desafíos climáticos que indica la evidencia científica. Se han identificado, además, áreas críticas que requieren atención para mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación de la región, incluso en términos de financiamiento o mecanismos de seguimiento y evaluación.

Desde una perspectiva general, el

capítulo ha permitido constatar que el cambio climático es una realidad en CARD y afecta la forma de producir, los ecosistemas, las actividades humanas y la seguridad de las personas en todos los países, aunque de manera diferenciada para los territorios y los distintos grupos poblacionales. En consecuencia, la adaptación a estos cambios es urgente para evitar que se materialicen los peores escenarios y se profundice la afectación, y ellos requiere de un uso constante de la información científica, y la construcción de políticas con visión territorial, intersectorial y de largo plazo. Además, es necesario para aprovechar la oportunidad de aplicar una adaptación transformacional, que permita modificar dinámicas de desarrollo excluyentes, concentradoras e insostenibles en bienestar para la mayor cantidad de personas. Emprender esta tarea requiere la articulación de actores múltiples e implica un abordaje regional, para optimizar el uso de recursos y esfuerzos y para potenciar el impacto y resultados. Aunque los instrumentos de política analizados brindan un marco de referencia, sobre todo de nivel regional y nacional, requieren ser complementados con acciones intersectoriales en todos los niveles.

Grandes áreas de prioridad identificadas

Del estudio de las políticas e iniciativas se pueden derivar las principales áreas de enfoque y los hallazgos clave del estudio, proporcionando una base para la formulación de estrategias efectivas y la implementación de políticas integradas. Con base en los insumos previos y en el análisis de Brenes (2024b), no se sintetizan los hallazgos, sino que se enfoca en recomendaciones para mejorar la gobernanza climática, fortalecer las capacidades institucionales y promover una adaptación inclusiva y sostenible. Al abordar temas como el fortalecimiento institucional, la protección de ecosistemas, la participación comunitaria, el desarrollo de capacidades y la gestión y monitoreo, se busca ofrecer una visión integral que pueda ser implementada tanto sectorial como territorialmente. Este análisis subraya la importancia de

una acción coordinada y multisectorial, esencial para enfrentar los complejos desafíos que el cambio climático presenta a Centroamérica y la República Dominicana.

• Fortalecimiento institucional y gobernanza.

El análisis revela que el fortalecimiento institucional y la gobernanza son las principales prioridades en las políticas públicas de adaptación al cambio climático, tanto a nivel nacional como regional, así como de las iniciativas en general que se implementan. La creación de nuevas estructuras organizacionales y la mejora de capacidades institucionales son esenciales para una gestión eficaz y coordinada de los recursos naturales y las políticas climáticas. La cooperación interinstitucional y la armonización de políticas entre países se tornan fundamentales para enfrentar los desafíos climáticos de manera conjunta y armónica. Esta coordinación facilita una respuesta integrada y cohesiva ante los impactos del cambio climático, lo cual asegura que las políticas se implementen de manera eficiente y efectiva en toda la región.

• Protección y resiliencia.

La protección de ecosistemas vulnerables y la mejora de la resiliencia de las comunidades ante los impactos del cambio climático son fundamentales. El promover la reforestación, la restauración de ecosistemas y la gestión integrada de cuencas hidrográficas resulta un tema prioritario. Estas medidas no solo protegen al medio ambiente, sino que también aseguran que las comunidades dependientes de estos ecosistemas puedan adaptarse mejor a los cambios climáticos, reduciendo así los efectos negativos sobre la infraestructura, la economía y la seguridad alimentaria. La implementación de estas acciones también contribuye a conservar la biodiversidad y mitigar los efectos adversos del cambio climático.

- **Participación y compromiso social.**

La participación y el compromiso social son esenciales para la efectividad de las políticas climáticas. Involucrar a las comunidades y la sociedad civil en la planificación y ejecución de políticas climáticas aumenta la relevancia y sostenibilidad de estas políticas. Aquellas que incorporan la participación de las comunidades locales tienden a ser más efectivas, pues se diseñan según las necesidades y conocimientos locales, mejorando así su adaptabilidad y aceptación. Además, la participación de la comunidad fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad compartida, lo que es crucial para el éxito a largo plazo de las iniciativas de adaptación.

- **Desarrollo de capacidades y formación.**

El desarrollo de capacidades y la formación son centrales para aumentar las habilidades y conocimientos necesarios para la acción climática. La capacitación continua de profesionales y comunidades en técnicas y prácticas de mitigación y adaptación resulta crucial. Fortalecer las capacidades técnicas y la formación de profesionales asegura que se cuente con las herramientas y conocimientos necesarios para implementar políticas y acciones climáticas eficaces, incrementando así la resiliencia frente al cambio climático. Las instituciones educativas tienen un papel clave en este proceso, al proporcionar formación especializada y promover la investigación en adaptación climática.

Recomendaciones para la acción colaborativa.

Con base en los hallazgos previos, esta sección propone estrategias y recomendaciones concretas que puedan ser implementadas por las agencias de gobierno, las agencias de cooperación al desarrollo y las instituciones universitarias. Se aborda la necesidad de integrar las políticas de adaptación en marcos legislativos multisectoriales, la importancia de la coordinación interinstitucional y la relevancia del sector agropecuario en la

seguridad alimentaria. Además, se destaca la gestión eficiente de los recursos hídricos y la construcción de infraestructuras resilientes como pilares fundamentales para aumentar la resiliencia de las comunidades y economías locales. También se resalta la importancia de fomentar la innovación y la adopción de tecnologías verdes, así como la cooperación regional e internacional para fortalecer la respuesta colectiva ante el cambio climático. Al centrar las reflexiones en la acción colaborativa y la integración de enfoques, se espera contribuir a un enfoque más coherente y eficaz en la lucha contra los impactos del cambio climático en la región.

- **Integración de políticas de adaptación en marcos multisectoriales.**

Es crucial integrar políticas de adaptación en legislaciones ambientales, agrícolas, hídricas y energéticas. Esta transversalidad refleja cómo los países abordan el cambio climático desde múltiples frentes, reconociendo que sus impactos afectan todos los sectores económicos y sociales. El incluir políticas de adaptación en leyes de desarrollo rural, gestión hídrica y planificación urbana fortalece la resiliencia de los sistemas naturales y humanos. Esta integración multisectorial es esencial para crear respuestas holísticas y coherentes a los desafíos climáticos de manera efectiva.

- **Coordinación interinstitucional.**

La diversidad de normativas sobre la adaptación al cambio climático resalta la necesidad de una coordinación efectiva entre diferentes instituciones y niveles de gobierno. La fragmentación normativa puede causar duplicidad de esfuerzos y dispersión de recursos, pero también promover una mayor cooperación interinstitucional. En los últimos años, se han incrementado los esfuerzos por establecer estructuras de coordinación más robustas y efectivas. Fortalecer esta coordinación mejora la capacidad de respuesta y la imple-

mentación de políticas, asegurando acciones de adaptación coherentes y complementarias a través de distintos sectores y niveles de gobierno.

- **Sector agropecuario y seguridad alimentaria.**

El sector agropecuario es crucial para la seguridad alimentaria y la resiliencia agrícola, por lo que necesita ser atendido en las políticas de adaptación. Las prácticas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático son esenciales para proteger los medios de vida de millones de personas y garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Implementar buenas prácticas agropecuarias y desarrollar infraestructura productiva con enfoque de cadena son estrategias clave para garantizar la resiliencia del sector agropecuario. El adoptar tecnologías avanzadas e innovar en prácticas agrícolas mejora la eficiencia y sostenibilidad de este sector, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza.

- **Gestión de recursos hídricos.**

La gestión eficiente del agua es fundamental debido al impacto del cambio climático en la disponibilidad y calidad. El promover el uso sostenible de este recurso y la cooperación regional en la gestión de recursos hídricos transfronterizos son esenciales para mejorar la seguridad hídrica y reducir los conflictos. Implementar infraestructuras resilientes y sistemas de monitoreo avanzados puede mejorar la resiliencia de las comunidades y los sectores económicos dependientes del agua. La gestión integrada de recursos hídricos, que considera las necesidades de todas las personas usuarias y fomenta la conservación y el uso eficiente del agua, es crucial para enfrentar los desafíos climáticos.

- **Infraestructuras resilientes.**

La construcción de infraestructuras resilientes es esencial para minimizar

los daños y las interrupciones causadas por los eventos climáticos extremos. Fortalecer las infraestructuras críticas, como plantas de tratamiento de agua y redes eléctricas, garantiza la continuidad de los servicios esenciales, lo cual facilita una recuperación más

rápida y ayuda a proteger tanto a las personas como a las economías locales. La inversión en infraestructuras resilientes es una medida económica inteligente a largo plazo, pues reduce los costos de reconstrucción y atrae inversiones. Además, las infraestructuras

resilientes pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades, porque proporcionan servicios más fiables y sostenibles, y fomentan el desarrollo económico y social.

Notas

- 1 Para el análisis de aridez se utiliza la siguiente escala: $IA \leq 0,05$ =Hiper-árido; $0,05 \leq IA < 0,20$ =Árido; $0,20 \leq IA < 0,50$ =Semi-árido; $0,50 \leq IA < 0,65$ =Seco subhúmedo; $0,65 \leq IA < 0,80$ = Subhúmedo; $0,80 \leq IA < 1,50$ =Húmedo y $1,5 \leq IA$ =Muy húmedo (ICAP, 2025 modificado de FAO, 1990).
- 2 Es importante recordar que estos mapas y las escalas utilizadas pueden ocultar variaciones microclimáticas que no son capturadas en estos análisis.
- 3 Belice y Nicaragua no fueron considerados en este análisis dado que no se contó con información geográfica referente a la infraestructura crítica expuesta.
- 4 Se entiende como “acción climática” como cualquier medida o estrategia implementada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) o para ajustarse a los efectos del cambio climático (adaptación). Siguiendo los criterios del IPCC, estas acciones incluyen políticas, programas y proyectos promuevan la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de los sistemas naturales y humanos.

- 5 En el marco de esta estrategia se están ejecutando acciones como: la Iniciativa Regional AFOLU (Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra por sus siglas en inglés) y la Iniciativa Mano de la Mano - Construyendo Resiliencia en el Corredor Seco y Zonas Áridas de la Región del SICA, así como algunas herramientas que apoyan la planificación y uso de información climática en el sector agropecuario, entre ellas: el Boletín Centroamericano Agricultura y Clima, las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), el Catálogo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y la Comunidad de práctica sobre seguros agropecuarios (SE-CAC, 2025).
- 6 La movilidad humana es un término general que se refiere a todos los aspectos del movimiento de personas, independientemente del motivo por el que se desplazan y de si dicho movimiento es voluntario o forzado. Como tal, se entiende que la movilidad humana abarca el desplazamiento interno y transfronterizo involuntario de poblaciones, la migración interna y transfronteriza voluntaria y la reubicación planificada y consentida.

- 7 La variación en el estimador depende de cuál de los cuatro escenarios o Modelos de Circulación Global (MCM) se considere: inclusivo, pesimista, optimista y ambientalmente sostenible.
- 8 La acción de adaptación se implementa en una región geográfica dentro del país con características particulares (por ejemplo, una región costera, varias provincias o departamentos) (Castillo, 2024).
- 9 La implementación de la iniciativa de adaptación se desarrolla en un área específica, como un municipio/cantón o comunidades (Castillo, 2024).
- 10 Trasciende la agenda ambiental y comprende aspectos sociales y económicos, e incluye diversos niveles de intervención sectorial y territorial que involucran a diversos actores.

Siglas y acrónimos

A

Aacid	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
Aacue	Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
ACDI	Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
ACE	Asociación Comunal para la Educación (El Salvador)
Acenvi	Asociación Centroamericana para la Vivienda
Acicafoc	Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana
Acnur	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Adapcca	Proyecto “Apoyo al diseño y aplicación de políticas comunes centroamericanas” (Sieca-UE)
ADC	Alianza Democrática Campesina (El Salvador)
ADELA	Acción de Lucha Anti-petrolera
Adesco	Asociación de desarrollo comunal (El Salvador)
ADS	Asociación Demográfica Salvadoreña
AEA	Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (SICA)
AEC	Asociación de Estados del Caribe
Aecid	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AED	Asociación Empresarial para el Desarrollo (Costa Rica)
AEP	Agenda Estratégica Priorizada
AFH	Agenda Forestal Hondureña
Agexport	Asociación Guatemalteca de Exportadores
AGNU	Asamblea General de las Naciones Unidas
AHJASA	Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua
AICS	Agencia Italiana para Cooperación al Desarrollo (sigla en italiano)
Aidis	Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
AIE	Agencia Internacional de Energía
AL	Alianza Liberal
ALAI	Agencia Latinoamericana de Información
ALBA/ALBA-TCP	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)

Albanisa	ALBA Petróleos de Nicaragua S.A.
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AliaRSE	AliaRSE para el Desarrollo / Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (Costa Rica)
Alides	Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (CCAD-SICA)
ALN	Alianza Liberal Nicaragüense
Amexcid	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Amhon	Asociación de Municipios de Honduras
AMI	Autopista Mesoamericana de la Información (Proyecto Mesoamérica)
AMSS	Área Metropolitana de San Salvador
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente (Panamá)
Anati	Autoridad Nacional de Tierras (Panamá)
Ancon	Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Panamá)
ANDA	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (El Salvador)
ANDE	Asociación Nacional de Educadores (Costa Rica)
Anden	Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
AP	Áreas protegidas
APM	Áreas de patrimonio mundial
APSE	Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Costa Rica)
APU	Alianza Pueblo Unido (Panamá)
Arena	Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ARNPG	Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala
Asada	Asociación administradora de acueductos y alcantarillados comunales (Costa Rica)
ASDI	Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Asies	Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Guatemala)
Asorena	Asociación de organizaciones no gubernamentales de recursos naturales y el medio ambiente
Asvem	Asociación de Veteranos Militares de El Salvador “General Manuel José Arce”
Atepeca	Asistencia Técnica para el Planeamiento Estratégico de Centroamérica

AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Costa Rica)	CAPS	Comité de agua potable y saneamiento (Nicaragua)
B		CARD	Centroamérica y la República Dominicana
Banguat	Banco de Guatemala	Caricom	Comunidad del Caribe (sigla en inglés)
Bantrab	Banco de los Trabajadores (Guatemala)	Carsi	Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (sigla en inglés)
BCCR	Banco Central de Costa Rica	Caruna	Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural (Nicaragua)
BCH	Banco Central de Honduras	CASA	Partido Centro de Acción Social (Guatemala)
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica	Casac	Programa Centroamericano de Control de Armas Pequeñas y Ligeras (SICA y PNUD)
BCN	Banco Central de Nicaragua	Cathalac	Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
BCR	Banco Central de Reserva de El Salvador	Catie	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
BCRD	Banco Central de la República Dominicana	Cauca	Código Aduanero Uniforme Centroamericano
BEA	Oficina de Análisis Económico (Estados Unidos, sigla en inglés)	CBA	Canasta básica alimentaria
Benic	Belize National Indigenous Council	CBB	Banco Central de Belice (siglas en inglés)
Berds	Sistema de Recursos de Información en Biodiversidad y Ambiente de Belice (sigla en inglés)	CBM	Corredor Biológico Mesoamericano
BID	Banco Interamericano de Desarrollo	CBSI	Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (sigla en inglés)
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	CBT	Canasta básica total
BLM	Bowman-Lehoucq-Mahoney (índice de clasificación de los tipos de regímenes políticos existentes en Centroamérica a lo largo del siglo XX)	CCAB-AP	Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas
BM	Banco Mundial	CCAD	Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SICA)
BSIF	Fondo de Inversión Social de Belice (sigla en inglés)	CCCCC	Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe
BTI	Bertelsmann transformation index	CCHAC	Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (SICA)
BTR	Buses de tráfico rápido (Guatemala)	CCIE	Comité Consultivo de la Integración Económica (SICA)
C		CCJ	Corte Centroamericana de Justicia (SICA)
CA-4	Convenio Centroamericano de Libre Movilidad	CCM	Consejo del Comercio de Mercancías (OMC)
CA5	Cinco repúblicas centroamericanas	CCP	Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (SICA)
CAAP	Comité administrador de agua potable (Guatemala)	CCP	Centro Centroamericano de Población (UCR)
CAAR	Comité administrador de acueductos rurales (Costa Rica)	CCSBSO	Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
CAC	Consejo Agropecuario Centroamericano (SICA)	CC-SICA	Comité Consultivo del SICA
Cacif	Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Guatemala)	CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CAD	Cooperación Austriaca para el Desarrollo	CCT	Consejo Centroamericano de Turismo (SICA)
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos	CCVAH	Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (SICA)
CAF	Corporación Andina de Fomento	Cdmer	Cámara de Mercadeo de República Dominicana
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América	CDC	Centro para la Defensa del Consumidor (El Salvador)
CAIT	Climate analysis indicators tool (WRI)	CDC	Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos)
CALAS	Centro de Acción Legal, Ambiental y Social Guatemala	CDEMA	Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias y Desastres (sigla en inglés)
CAN	Comunidad Andina	CDKN	Alianza Clima y Desarrollo (sigla en inglés)
Capra	Evaluación Probabilista de Riesgo para América	CD-PNL	Coalición Cambio Democrático-Partido Nacional Liberal (El Salvador)
Capre	Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana		

CEAC	Consejo de Electrificación de América Central	CGR	Contraloría General de la República (Costa Rica)
CECC	Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SICA)	CGR	Contraloría General de la República (Panamá)
CECC/SICA	Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana/ Sistema de la Integración Centroamericana	Ciases	Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Nicaragua)
Cedaw	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (sigla en inglés)	CIAT	Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
CEE	Comunidad Económica Europea	CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical (CGIAR)
CEF	Centro de Estudios para el Futuro	CICC	Convención Interamericana contra la Corrupción
Cefemina	Centro Feminista de Información y Acción	Cicig	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
Cefof	Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el Desarrollo Industrial de Centroamérica	Cicih	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras
Ceicom	Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio	CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económicas (México)
CEJA	Centro de Estudios de Justicia de las Américas	CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Cejil	Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (sigla en inglés)	CIDHM	Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.
CEL	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (El Salvador)	Cidse	Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad
CELA	Centro de Estudios Latinoamericanos	CIEN	Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Guatemala)
Celade	Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Cepal)	CIEP	Centro de Investigación y Estudios Políticos (UCR)
Celare	Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (Universidad Pedro de Valdivia, Chile)	CIER	Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
CELE	Centro para Ambientes de Aprendizaje Efectivos (OCDE, sigla en inglés)	CIF	Cost insurance and freight
Cempromype	Centro Regional de Promoción de la MIPYME O	Cigefi	Centro de Investigaciones Geofísicas (UCR)
CEN	Centros de Educación y Nutrición (Costa Rica)	CIIU	Clasificación Internacional Industrial Uniforme
CeNAT	Centro Nacional de Alta Tecnología (Conare, Costa Rica)	CIN	Comité Intergubernamental de Negociación
Cenpromype	Centro Regional para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (SICA y Sieca)	Cinai	Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (Costa Rica)
CentraRSE	Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (Guatemala)	CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (Unesco)
Centroestad	Comisión Centroamericana de Estadística (SICA)	Cinterfor-OIT	Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional- Organización internacional del trabajo
CEOT	Comité Ejecutivo de Ordenamiento Territorial (Honduras)	CIPC	Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad
Cepal	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	CIPPDV	Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia
Cepredenac	Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (SICA)	CIS	Consejo de Integración Social Centroamericana (Sisca-SICA)
CESE	Comité Económico Social Europeo	Cites	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (sigla en inglés)
CE-SICA	Comité Ejecutivo del SICA	CIUO	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
Cespad	Centro de Estudio para la Democracia (Honduras)	Clacds	Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Incae)
CeSPI	Centro de Estudio de Política Internacional (sigla en italiano)	Clacso	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CFE	Comisión Federal de Electricidad (México)	CMC	Conferencia Mundial sobre el Clima
CFR-SICA	Consejo Fiscalizador Regional del SICA	CMCA	Consejo Monetario Centroamericano
CGC	Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala	CME-SICA	Consejo de Ministros de Energía-Sistema de la Integración Centroamericana
CGIAR	Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (sigla en inglés)	CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CM-Ospesca	Consejo de Ministros del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano	Conasa	Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Honduras)
CMRE-CA	Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica	Concadeco	Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (SICA)
CMRE-SICA	Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores-Sistema de la Integración Centroamericana	Condeca	Consejo de Defensa Centroamericano
CNBS	Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras)	Confedelca	Conferencia Centroamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo Local
CNE	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Costa Rica)	Conocer	Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (México)
CNHM	Comité Nacional de Hidrología y Meteorología (Costa Rica)	Conot	Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (Honduras)
CNM	Consejo Nacional de Migración (Costa Rica)	Conplan	Consejo de Planificación
CNOT	Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (Costa Rica)	Consuac	Consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana (SICA)
CNSCC	Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia	Coreca	Consejo Regional de Cooperación Agrícola
CNULD	Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (ONU)	Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cocatram	Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (SICA)	Cosefin	Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República Dominicana (SICA)
Cocesna	Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea	Cosep	Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua)
Cociss	Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social	Cosude	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Cocit	Comisión Centroamericana de Ciencia y Tecnología	CPJ	Committee to Protect Journalists
Codicader	Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (Sisca-SICA)	CRED	Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres
COMAR	Comisión de Ayuda a los Refugiados	CREO	Partido Compromiso, Renovación y Orden (Guatemala)
Comex	Ministerio de Comercio Exterior (Costa Rica)	Cricap	Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica
Comieco	Consejo de Ministros de Integración Económica (Sieca)	CRIE	Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Comisca	Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SICA)	CRM	Conferencia Regional sobre Migración
Comitran	Consejo Sectorial de Ministerios de Transporte de Centroamérica	CRRH	Comité Regional de Recursos Hidráulicos (SICA)
Comjib	Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos	CRV	Cadenas regionales de valor
Commca	Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (SICA)	CSC	Comisión de Seguridad de Centroamérica (SICA)
Comriedre	Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y del Desarrollo Regional	CSE	Consejo Supremo Electoral (Nicaragua)
Comtelca	Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones	CSP	Center for Systemic Peace
Conabisah	Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras	CSR	Comunidades Solidarias Rurales (El Salvador)
Conadeh	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras	CSS	Caja de Seguro Social (Panamá)
Conades	Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (El Salvador)	CSU	Comunidades Solidarias Urbanas (El Salvador)
Conagua	Comisión Nacional del Agua (México)	Csuca	Consejo Superior Universitario Centroamericano
Conama	Comisión Nacional de Medio Ambiente de Panamá	CTCAP	Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (SICA)
Conanp	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (México)	CTPT	Comisión Trinacional del Plan Trifinio (SICA)
Conap	Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Guatemala)	D	
Conare	Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica)	DACA	Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sigla en inglés)
		DAES	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (ONU)
		Danida	Asistencia Danesa para el Desarrollo Internacional

DAV	Dirección de Acuerdos de la Verdad	Enaho	Encuesta Nacional de Hogares (INEC, Costa Rica)
DCAF	Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas-Ginebra (sigla en inglés)	Enatrel	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Nicaragua)
DCG	Democracia Cristiana Guatemalteca (Guatemala)	ENCC	Estrategia Nacional de Cambio Climático (Minaet, Costa Rica)
DDI	Índice de déficit por desastre (sigla en inglés)	Encovi	Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Guatemala)
DFID	Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido, sigla en inglés)	Endesa	Empresa Nacional de Electricidad S.A. (España)
DGII	Dirección General de Impuestos Internos (República Dominicana)	ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Honduras)
DGMA	Dirección General de Medio Ambiente del SICA	ENEI	Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (INE, Guatemala)
DGOT	Dirección General de Ordenamiento Territorial (Honduras)	ENOS	El Niño-Oscilación del Sur
DGOT	Dirección General de Ordenamiento Territorial (Nicaragua)	Ensmi	Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (INE, Guatemala)
DHS	Demographic and Health Surveys	EOIR	Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (siglas en inglés)
Digestyc	Dirección General de Estadística y Censos (El Salvador)	EOR	Ente Operador Regional (SICA)
DNI	Dirección Nacional de Investigación de Honduras	EOR	Ente operador regional
DPLF	Fundación para el Debido Proceso Legal (sigla en inglés)	EOS	Earth Observing System (NASA)
DPT	Vacuna contra difteria, tos ferina y tétano	EPA	Environmental Protection Agency (Estados Unidos)
Dralc	Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD	EPHPM	Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (INE, Honduras)
DR-Cafta	Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (siglas en inglés)	EPM	Encuesta de Propósitos Múltiples (INEC, Panamá)
DSL	Laboratorio de Sistemas de Decisión (Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos; sigla en inglés)	EPR	Empresa Propietaria de la Red
DUCA	Declaración Única Centroamericana	EPT	Educación para Todos (ONU)
DUT	Documento único de tránsito	EPU	Examen Periódico Universal (Consejo de Derechos Humanos de la ONU)
E		ERAS	Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (SICA)
Ecadert	Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (CAC-SICA)	ERCA	Estado de la Región Centroamericana (PEN, Costa Rica)
Ecagirh	Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (SICA)	ERCC	Estrategia Regional de Cambio Climático (CCADSICA)
ECFCC	Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad	ERDE	Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico
ECVAH	Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH-SICA)	EROS	Earth Resources Observation and Science
Educa	Editorial Universitaria Centroamericana	ESCA	Estrategia de Seguridad de Centroamérica (SICA)
EFA	Escuelas de Formación Agrícola	ESPH	Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (Costa Rica)
EG	Partido Encuentro por Guatemala	ETEA	Escuela Superior Técnica Empresarial Agrícola (España)
EHPM	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (Digestyc, El Salvador)	Etesa	Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Panamá)
EIRD	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU)	EU 27	Europa de los Veintisiete
EJOLT	Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade	F	
ELN	Ejército de Liberación Nacional (Colombia)	FA	Frente Amplio (Costa Rica)
EM-DAT	Emergency events database (CRED)	Facedra	Farmacovigilancia Centroamericana Datos de Reacciones Adversas
EM-DAT	Emergency Events Database	FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (sigla en inglés)
EMIC	Modelos de sistemas terrestres de complejidad intermedia (sigla en inglés)	FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
EMNV	Encuesta sobre Medición de Nivel de Vida (INEC, Nicaragua)	FARO	Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades
EMS	Sistemas de administración ambiental (sigla en inglés)		

Fecaica	Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica	FundahrSE	Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Honduras)
Fecatrans	Federación Centroamericana de Transporte	Fundaungo	Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (El Salvador)
Fecou	Frente Ecologista Universitario Costa Rica	Funde	Fundación Nacional para el Desarrollo (El Salvador)
Fedecatur	Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica	Fundecooperación	Fundación de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (Costa Rica)
Fedepriacp	Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana	Fundecor	Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Costa Rica)
Felaban	Federación Latinoamericana de Bancos	Fundemas	Fundación Empresarial para la Acción Social (El Salvador)
Femica	Federación de Municipios del Istmo Centroamericano	Funpadem	Fundación para la Paz y la Democracia
Fespad	Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (El Salvador)	Fusades	Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
FETCCOP	Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Honduras)		
FETP	Formación y Educación Técnica y Profesional	G	
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola	GA	Grupo Articulador de la sociedad civil en materia migratoria
Fideg	Fundación Internacional para el Desafío Económico Global	GAM	Gran Área Metropolitana (Costa Rica)
Firms	Fire Information for Resource Management System (Universidad de Maryland, Estados Unidos)	GANa	Gran Alianza Nacional (Guatemala)
		GAR	Informe de Evaluación Global (siglas en inglés)
FISDL	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (El Salvador)	GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (OMC, sigla en inglés)
Flacso	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	GCNPE	Gran Campaña Nacional por la Educación (Guatemala)
FLAR	Fondo Latinoamericano de Reservas	GEF	Global Environment Facility
FLM	Federación Luterana Mundial	GEI	Gases de efecto invernadero
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial	GFDRR	Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (Banco Mundial, sigla en inglés)
FMI	Fondo Monetario Internacional		
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador)	GIR	Gestión integral de riesgos
FOB	Free on board	GIRH	Gestión integrada de los recursos hídricos
Focal	Fundación Canadiense para las Américas	GIZ	Agencia Alemana de Cooperación Internacional (sigla en alemán)
Focard-APS	Foro Centroamericano y de República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (SICA)	Golfonseca	Programa de Desarrollo Local Integral Transfronterizo en el Golfo de Fonseca (SICA)
Fomin	Fondo Multilateral de Inversiones (Grupo BID)	Grulac	Grupo de países Latinoamericanos y del Caribe
Fonac	Foro Nacional de Convergencia (Honduras)	GTPT	Grupo Técnico de Política Tributaria
Fonades	Fondo Nacional de Desarrollo (Guatemala)	GTZ	Agencia de Cooperación Técnica Alemana (sigla en alemán)
Fonafifo	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Costa Rica)	GWP	Global Water Partnership
Fonamih	Foro Nacional para las Migraciones en Honduras	H	
Fonat	Fondo Nacional de Alojamiento Turístico (El Salvador)	HCCPR	Hadley Centre for Climate Prediction and Research (Reino Unido)
Foprel	Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe	Hivos	Instituto Humanitario de Cooperación para el Desarrollo (sigla en holandés)
Foprیده	Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras		
Fosmih	Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño (Honduras)	I	
FPNUL	Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano	IAF	Índice de área foliar
Freac	Foro Regional Energético para América Central	IAIP	Instituto de Acceso a la Información Pública (Honduras)
FRG	Frente Republicano Guatemalteco (Guatemala)	Iarna	Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (URL, Guatemala)
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)	Icadis	Instituto Centroamericano de Documentación e Investigación Social
		Icaiti	Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial

ICAP	Instituto Centroamericano de Administración Pública	IHSS	Instituto Hondureño de Seguridad Social
ICRR	Índice de condiciones y capacidades para la reducción del riesgo	IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad	IIDH	Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Icefi	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales	IIEL	Instituto Internacional de Estudios Laborales (OIT)
ICER	Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica	IIF	Instituto de Finanzas Internacionales (sigla en inglés)
Icespo	Instituto Centroamericano de Estudios Policiales	IIPE	Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (Unesco)
ICF	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Honduras)	Iiraira	Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act
ICP	Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A.	IIRSA	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
ICT	Instituto Costarricense de Turismo	IISS	International Institute for Strategic Studies
ICTA	Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental Barcelona	Ilanud	Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
ICTJ	International Center for Transitional Justice	Ilides	Instituto Internacional de Liderazgo en Desarrollo Local
Idaeh	Instituto de Antropología e Historia (Guatemala)	Ilpes	Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Cepal)
IDD	Índice de déficit por desastre	IMN	Instituto Meteorológico Nacional (Costa Rica)
IDEA	Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (sigla en inglés)	IMSP	Instituto Mesoamericano de Salud Pública
Ideads	Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable	INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
Idelca	Instituto para el Desarrollo Local de Centroamérica	INAA	Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
IDG	Índice de desarrollo relativo al género	INAB	Instituto Nacional de Bosques (Guatemala)
IDH	Índice de desarrollo humano	Inadeh	Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano Panamá
Idhuca	Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador)	Inafor	Instituto Nacional Forestal (Nicaragua)
Idies	Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (URL, Guatemala)	Inaforp	Instituto Nacional de Formación Profesional
IDMC	Internal Displacement Monitoring Centre	INAM	Instituto Nacional de la Mujer (Honduras)
IDMC	Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno	Inatec	Instituto Nacional Tecnológico Nicaragua
IE	Índice de intensidad energética	INB	Ingreso nacional bruto
IED	Inversión extranjera directa	INBio	Instituto Nacional de Biodiversidad (Costa Rica)
IEF	Índice de Estados fallidos	Incae	Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
Iejes	Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador	Incap	Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (SICA)
Iepades	Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible	Incep	Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
Ifarhu	Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos	Incide	Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social
IFC	Corporación Financiera Internacional (sigla en inglés)	IND	Ingreso nacional disponible
IFES	Fundación Internacional para Sistemas Electorales (sigla en inglés)	INDC	Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (sigla en inglés)
IFF	Foro Intergubernamental sobre Bosques (sigla en inglés)	INDE	Instituto Nacional de Electrificación (Guatemala)
IFOM	Instituto de Fomento Municipal (Guatemala)	Inder	Instituto de Desarrollo Rural (Costa Rica)
Ifpri	Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (sigla en inglés)	Indicasat	Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Panamá)
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Colombia)	INE	Instituto Nacional de Estadística (Guatemala)
IGN	Instituto Geográfico Nacional	INE	Instituto Nacional de Estadística (Honduras)
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censo (CGR, Panamá)

INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica)	IT	Tecnología informática (siglas en inglés)
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Nicaragua)	ITBMS	Impuesto de traslado de bienes materiales y servicios
INEE	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (México)	Iudop	Instituto Universitario de Opinión Pública (UCA, El Salvador)
Ineter	Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales	IVA	Impuesto al valor agregado
Infocoop	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Costa Rica)	IVU	Instituto de Vivienda y Urbanismo (Panamá)
Infop	Instituto Nacional de Formación Profesional	IZA	Instituto para el Estudio del Trabajo (sigla en alemán)
Infotep	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional República Dominicana	J	
Inguat	Instituto Guatemalteco de Turismo	JAAR	Junta administradora de acueductos rurales (Panamá)
Inide	Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Nicaragua)	JICA	Agencia de Cooperación Internacional de Japón (sigla en inglés)
Inifom	Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Nicaragua)	L	
INRA	Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria	LA RED	Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
Insaforp	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional El Salvador	Lacro	Oficina Regional para América Latina y el Caribe (Unfpa, sigla en inglés)
Insami	Instituto Salvadoreño del Migrante	Lapop	Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, sigla en inglés)
Insivumeh	Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Guatemala)	LASA	Latin American Studies Association
INSS	Instituto Nicaragüense de Seguridad Social	LEOP	Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Honduras)
Intal	Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe	LGTBI	Población lesbiana, gay, transgénero y bisexual
Intec	Proyecto Integración Económica Regional Centroamericana	Libre	Partido Libertad y Refundación (Honduras)
Intecap	Instituto Técnico de Capacitación Guatemala	Lider	Partido Libertad Democrática Renovada (Guatemala)
IntegraRSE	Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial	LISA	Indicador Local de Autocorrelación Espacial (siglas en inglés)
Intrapaz	Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz (Universidad Rafael Landívar, Guatemala)	Llece	Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Orealc-Unesco)
INVU	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Costa Rica)	M	
Invur	Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Nicaragua)	MACCIGH	Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA)
Ipade	Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Nicaragua)	MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería (El Salvador)
IPC	Índice de precios al consumidor	MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Guatemala)
IPCC	Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (sigla en inglés)	Magfor	Ministerio Agropecuario y Forestal (Nicaragua)
IPF	Panel Intergubernamental sobre Bosques (sigla en inglés)	MAH	Marco de Acción de Hyogo (EIRD-ONU)
IPG	Índice de potenciación de género	MAO	Movimiento Ambientalista de Olancha (Honduras)
IPH	Índice de pobreza humana	Mapss	Mapped Atmosphere-Plant-Soil System
IPM	Índice de pobreza multidimensional	Marena	Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Nicaragua)
IRR	Índice de reducción de riesgos	MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Guatemala)
ISA	Interconexión Eléctrica S.A. (Colombia)	MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (El Salvador)
Isdem	Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal	Marpol	Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques (OMI-ONU)
Isdemu	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer	MCCA	Mercado Común Centroamericano
ISO	Organización Internacional para la Estandarización (sigla en inglés)	MCMAO	Modelos de circulación general atmósfera-oceano
ISP	Inversión social pública	MDL	Mecanismo de desarrollo limpio
ISR	Impuesto sobre la renta		
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social		

MDPR	Mercado de Deuda Pública Regional	Monusco	Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (sigla en francés)
MEC	Ministerio de Educación y el Deporte (Brasil)	MOP	Ministerio de Obras Públicas (Panamá)
MECD	Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Nicaragua)	MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Mecovi	Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (BID, Banco Mundial y Cepal)	MPP	Migrant Protection Protocols
Mecreg	Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres (SICA)	MRREE-CA	Ministerios de Relaciones Exteriores de Centroamérica
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Costa Rica)	MRS	Movimiento Renovación Sandinista (Nicaragua)
MEM	Ministerio de Energía y Minas (Guatemala)	MSA	Índice de abundancia de especies (sigla en inglés)
MEM	Ministerio de Energía y Minas (Nicaragua)	MSCA	Ministerios de Salud de Centroamérica
Menamig	Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala	MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Guatemala)
MEP	Ministerio de Educación Pública	N	
MER	Mercado eléctrico regional (Siepac)	NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Estados Unidos, sigla en inglés)
MERCOMUN	Mercado Común Centroamericano	NBI	Necesidades básicas insatisfechas
Mercosur	Mercado Común del Sur	NCHS	Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (CDC, Estados Unidos; sigla en inglés)
Mesicic	Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)	NDI	Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (sigla en inglés)
Micit	Ministerio de Ciencia y Tecnología (Costa Rica)	NIIF	Normas internacionales de información financiera
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Costa Rica)	NOAA	Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Estados Unidos, sigla en inglés)
Mific	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Nicaragua)	NOAA	Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
Minae	Ministerio de Ambiente y Energía (Costa Rica)	Novib	Agencia Holandesa para la Cooperación Internacional
Mined	Ministerio de Educación de El Salvador	NWC	Comisión Nacional de las Mujeres (Belice, sigla en inglés)
Minex	Ministerio de Relaciones Exteriores (Guatemala)	O	
Minsa	Ministerio de Salud (Nicaragua)	OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Minsa	Ministerio de Salud (Panamá)	OBPAS	Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad
Minugua	Misión de las Naciones Unidas para Guatemala	Obsan-R	Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SICA)
Minurso	Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental	Ocades	Observatorio Centroamericano del Desarrollo Social (Sisca-SICA)
Minustah	Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (sigla en francés)	OCAM	Comisión Centroamericana de Directores de Migración
MIP	Medición integrada de la pobreza	OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
MIP	Matriz de Insumo Producto	Ocefs	Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores
MIPCA2011	Matriz Insumo Producto de Centroamérica y República Dominicana del 2011	OCHA	Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (ONU)
Mipyme	Micro, pequeñas y medianas empresas	Ocmal	Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
MIRPS	Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones	Ocsas	Organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento
Mivah	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Costa Rica)	ODAC	Oficinas de Denuncia y Atención Ciudadana
MIVI	Ministerio de Vivienda (Panamá)	Odeca	Organización de Estados Centroamericanos
ML	Movimiento Libertario (Costa Rica)	Odetca	Proyecto de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en Centroamérica (GIZ)
MNRE	Ministerio de Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Belice, sigla en inglés)		
MOE-UE	Misión de Observación Electoral de la Unión Europea		
Molirena	Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Panamá)		

ODHAC	Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica	PAC	Partido Acción Ciudadana (Costa Rica)
ODHAG	Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala	PAC	Partido Anticorrupción (Honduras)
ODI	Overseas Development Institute	Pacadirh	Plan para el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en Centroamérica
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU)	Pacagirh	Plan Centroamericano para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (SICA)
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible	PADF	Panamerican Development Foundation
OEA	Organización de Estados Americanos	PAE	Programa de Alimentación Escolar (Chile)
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (siglas en inglés)	PAFT-CA	Plan de Acción Forestal Tropical de Centroamérica
OEI	Organización de Estados Iberoamericanos	PAHO	Pan American Health Organization
OET	Organización para Estudios Tropicales	Pairca	Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (SICA)
OFDA	Office of US Foreign Disaster Assistance (Usaid)	Pamuc	Partido Movimiento de Unidad Costeña (Nicaragua)
OHI	Ocean Health Index	PAN	Partido de Avanzada Nacional (Guatemala)
OIJ	Organismo de Investigación Judicial (Costa Rica)	PAN	Partido Panameñista (Panamá)
OIM	Organización Internacional para las Migraciones	PAN	Programa de Ayuda Nacional (Panamá)
Oirsa	Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria	Papca	Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica (Ospesca-SICA)
OIT	Organización Internacional del Trabajo	Papica	Programa de Apoyo al Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Centroamérica
OJ	Organismo Judicial (Guatemala)	Papric	Programa de Apoyo Jurídico a Pobladores Rurales Indígenas y Campesinos
Olade	Organización Latinoamericana de Energía	Parca	Plan Ambiental de la Región Centroamericana (CCAD-SICA)
OLAV	Oficinas Locales de Atención a Víctimas	Parlacen	Parlamento Centroamericano
OMC	Organización Mundial del Comercio	PBBC	Proyecto Bosques y Cambio Climático en América Central
OMI	Organización Marítima Internacional (ONU)	PC/APRE	Partido Conservador / Alianza por la República (Nicaragua)
OMM	Organización Meteorológica Mundial	PCCBM	Proyecto para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano (CCAD)
OMS	Organización Mundial de la Salud	PCGIR	Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
ONG	Organización no gubernamental	PCN	Partido de Conciliación Nacional (El Salvador)
ONU	Organización de las Naciones Unidas	PDC	Partido Demócrata Cristiano (El Salvador)
Onudd	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	PDC	Partido Demócrata Cristiano (Honduras)
Onudi	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial	PDDH	Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (Nicaragua)
ONU-Habitat	Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos	PEA	Población económicamente activa
Onusida	Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA	PEBI	Programa de Educación Bilingüe Intercultural de Nicaragua
Opalc	Observatorio Político de América Latina y del Caribe	Pebit	Programa de Educación Intercultural Bilingüe de Honduras
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo	PEC	Política Educativa Centroamericana
OPS	Organización Panamericana de la Salud	PEC	Política Educativa Centroamericana
Orealc	Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe	PELA	Proyecto de Élités Parlamentarias Latinoamericanas
ORIT	Organización Regional Interamericana de Trabajadores	PEN	Programa Estado de la Nación (Costa Rica)
ORMA	Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica	PEN-Conare	Programa Estado de la Nación-Consejo Nacional de Rectores
ORMACC	Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (UICN)	PEP	Proyecto Políticas Económicas y Productividad (Honduras)
Orpalc	Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma	PER	Proyecto de Educación Rural (Colombia)
Ospesca	Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (SICA)	PERCBM	Programa Estratégico Regional del Corredor Biológico Mesoamericano (CCAD-SICA)
P			
PA	Partido Arnulfista (Panamá)		

Perfor	Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (CCAD/CAC-SICA)	PRAF	Programa de Asignación Familiar (Honduras)
Petronic	Empresa Nicaragüense de Petróleos	PRAIAA	Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la implementación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
PIB	Producto interno bruto	PRD	Partido Revolucionario Democrático (Panamá)
PIB	Producto Interno Bruto	Preal	Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (Diálogo Interamericano/Cinde)
Pifcard	Plan de Inversión y Financiamiento para Centroamérica y República Dominicana (SICA)	Premaca	Programa de Apoyo al Medio Ambiente en Centroamérica (Danida)
PIN	Partido Integración Nacional (Panamá)	Presanca	Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (SICA)
Pinfor	Programa de Incentivos Forestales (Guatemala)	Presisan	Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SICA)
Pinpep	Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Guatemala)	Prevda	Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (SICA)
PINU	Partido Innovación y Unidad (Honduras)	PRGIR	Política Regional de Gestión Integrada del Riesgo
Piota	Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental (Panamá)	Prias	Programa de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos e in situ (CeNAT-Conare, Costa Rica) Política Regional de Gestión Integrada del Riesgo
PISA	Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (OCDE, sigla en inglés)	Pricco	Plan Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado
PL	Partido Liberal (Honduras)	Prieg	Política Regional de Igualdad y Equidad de Género
Planot	Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (Costa Rica)	Prieg-SICA	Política regional de igualdad y equidad de género- Sistema de la Integración Centroamericana
PLC	Partido Liberal Constitucionalista (Nicaragua)	Priica	Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (IICA)
PLH	Partido Liberal de Honduras	Prisma	Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
PLN	Partido Liberación Nacional (Costa Rica)	Proarca	Programa Ambiental Regional para Centroamérica
PLP	Partido Liberal Progresista (Guatemala)	Procomer	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PM	Plan Mesoamérica	Prodeca	Programa de Desarrollo Energético Centroamericano
PMA	Programa Mundial de Alimentos	Proder	Programa de Apoyo a los Derechos Humanos en Centroamérica (Danida)
PMRML	Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana	ProDUS	Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (UCR)
PN	Partido Nacional (Honduras)	Proesa	Fundación de Pequeños Empresarios Salvadoreños
PNERE	Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (Guatemala)	Projovem	Programa Jóvenes Empresarios (Costa Rica)
PNH	Partido Nacional de Honduras (Honduras)	Promebio	Programa Estratégico Regional de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (CCAD-SICA)
PNODT	Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (El Salvador)	Promefrut	Proyecto Mesoamericano de Fruticultura
PNOT	Política Nacional de Ordenamiento Territorial (Costa Rica)	Promype	Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa Centroamericana
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Pronacom	Programa Nacional de Competitividad (Ministerio de Economía de Guatemala)
Pnuma	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente	Prorural	Programa de Desarrollo Rural (Fonades, Guatemala)
PP	Partido Patriota (Guatemala)	Prosiga	Programa Centroamericano de Modernización de los Sistemas de Gestión Ambiental
PP	Partido Popular (Panamá)	Provel	Proceso de Vacantes en Línea (Panamá)
PPA	Paridad en el poder adquisitivo		
PPME	Países pobres muy endeudados		
PPP	Plan Puebla-Panamá		
PPT	Presidencia pro tempore		
PQD	Plan Quinquenal de Desarrollo (El Salvador)		
Pracams	Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica (SICA)		
PRACAMS	Programa Regional de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica		
Pradic	Programa de Apoyo al Desarrollo y la Integración Centroamericana, BID		

PRRAC	Programa Regional de Reconstrucción para América Central (Comunidad Europea)	Sanaa	Servicio Autónomo Nacional de Aguas y Alcantarillados de Honduras
PRRD	Plan Regional de Reducción de Desastres (Cepredenac-SICA)	SAT	Servicio de Administración Tributaria (Guatemala)
PSA	Pago por servicios ambientales	SEA	Suministro de energía alimentaria
PSMSL	Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar (sigla en inglés)	SE-CAC	Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SICA)
PTC	Programas de transferencias condicionadas	SE-CCAD	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SICA)
PU	Partido Unionista (Guatemala)	SECMCA	Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
PUN	Partido Unión Nacional (Costa Rica)	SE-CMCA	Secretaría Ejecutiva Consejo Monetario Centroamericano
PUSC	Partido Unidad Social Cristiana (Costa Rica)	SE-CMCA	Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
PYME	Pequeña y mediana empresa	SE-Comisca	Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SICA)
R		SE-Cosefin	Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica (SICA)
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte (Nicaragua)	Sedinafroh	Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños (Honduras)
RAAS	Región Autónoma del Atlántico Sur (Nicaragua)	Sefro	Programa Regional de Seguridad Fronteriza en América Central (SG-SICA y Unión Europea)
RAS	Red de Agricultura Sostenible	Segeplan	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Gobierno de Guatemala)
Recauca	Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano	SELA	Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
Red Lacre	Red Latinoamericana de Recicladores	Semarnat	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México)
Red Migrante	Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones	Semtec	Secretaría de Formación Media y Tecnológica (MEC, Brasil)
Redalyc	Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal	Senadis	Secretaría Nacional de Discapacidad (Panamá)
Redca+	Red Centroamericana de Personas con VIH-SIDA	Senapan	Secretaría Nacional de Coordinación y Seguimiento del Plan Alimentario y Nutricional (Panamá)
REDD	Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques	Senara	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Costa Rica)
Redlac	Grupo Regional Interagencial de Riesgo, Emergencia y Desastres de América Latina y el Caribe	SENG	Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales (ONU)
Redmicroh	Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras	Seplan	Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación (Honduras)
Resdal	Red de Seguridad y Defensa de América Latina	SE-PT	Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio
Ricam	Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (Proyecto Mesoamérica)	SE-PT	Secretaría general – Protocolo de Tegucigalpa
RMI	Reservas monetarias internacionales	Serce	Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Unesco)
RNC	Régimen no contributivo de pensiones (CCSS, Costa Rica)	Serna	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Honduras)
RPS	Red de Protección Social (Nicaragua)	Servir	Sistema Regional de Visualización y Monitoreo de Mesoamérica
RRD	Reducción del riesgo de desastres	Sesan	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (El Salvador)
RROCM	Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones	SG	Secretaría General
RSD	Residuo sólido domiciliario	SG-CECC	Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SICA)
RSE	Responsabilidad social empresaria	SGP	Sistema Generalizado de Preferencias de la UE
RSER	Responsabilidad social empresarial regional		
RSU	Residuo sólido urbano		
RUTA	Unidad Regional de Asistencia Técnica (sigla en inglés)		
S			
SAC	Sistema de Atención a Crisis (Nicaragua)		
SAF	Sistemas agroforestales		
SAG	Sistema de Auditoría Gubernamental (Guatemala)		
SAM	Sistema Arrecifal Mesoamericano		
SAN	Seguridad Alimentaria y Nutricional		

SG-SICA	Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana	Sitramss	Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera (Guatemala)	SMIT	Sistema Mesoamericano de Información Territorial
SIAL	Sistema de Información y Análisis Laboral (Panamá)	SMSP	Sistema Mesoamericano de Salud Pública
Sialc	Sistema de Información y Análisis Laboral de América Latina y el Caribe (OIT)	SNET	Servicio Nacional de Estudios Territoriales (El Salvador)
SIB	Instituto de Estadística de Belice (sigla en inglés)	SNV	Servicio Holandés de Cooperación
SICA	Sistema de la Integración Centroamericana	Solidaridad	Partido Solidaridad (Panamá)
Sicap	Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas	SPEI	Standardized Precipitation- EvapoTranspiration Index
SICC	Convención Interamericana contra la Corrupción	SPI	Índice estandarizado de precipitación (siglas en inglés)
SICE	Sistema de Información sobre Comercio Exterior (OEA)	SPNF	Sector público no financiero
Sicor	Sistema de Información de la Cooperación Regional (SICA)	SPSU	Sistema de Protección Social Universal (El Salvador)
Sicta	Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola	SRES	Special Report on Emissions Scenarios (IPCC)
Sieca	Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SICA)	SSB	Servicios sociales básicos
SIEE	Sistema de Información Económica Energética (Olade)	ST-Commca	Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
Siemca	Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Centroamérica	STM-Commca	Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
Siepac	Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central	STMM	Sistema de Transporte Multimodal Mesoamericano
Sifgua	Sistema de Información Forestal de Guatemala	SumaRSE	Sumarse a la Responsabilidad Social Empresarial (Panamá)
SIG	Sistema de información geográfica	T	
Sigap	Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas	TEIb	Televisión Educativa y Cultural de Iberoamérica
Simafir	Sistema de Información Macroeconómica y Financiera de la Región (SECMCA)	Terce	Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Unesco)
Sinac	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Costa Rica)	TIC	Tecnologías de la información y la comunicación
Sinaes	Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Costa Rica)	TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
Sinafol	Sistema Nacional de Formación Laboral	TIM	Procedimiento Mesoamericano de Tránsito Internacional de Mercancías (Proyecto Mesoamérica)
Sinager	Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Honduras)	TLC	Tratado de libre comercio
Sinap	Sistemas nacionales de áreas protegidas	TLC-CA	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana
Sinia	Sistema Nacional de Información Ambiental (Marena, Nicaragua)	TNC	The Nature Conservancy
Sinit	Sistema Nacional de Información Territorial (Honduras)	TPA	Autoridad de Promoción Comercial (Estados Unidos, sigla en inglés)
SIP	Sociedad Interamericana de Prensa	TPS	Estatus de Protección Temporal
Sipri	Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (sigla en inglés)	TSC	Tribunal Superior de Cuentas (Honduras)
Sirpac	Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acuícola Centroamericano (SICA)	TSE	Tribunal Supremo de Elecciones (Costa Rica)
Sisca	Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SICA)	TSE	Tribunal Supremo Electoral (Guatemala)
Siscode	Sistema de Consejos de Desarrollo (Guatemala)	U	
Sitca	Secretaría de Integración Turística Centroamericana (CCT-SICA)	UAC	Unión Aduanera Centroamericana
Siteal	Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (IIPe-Unesco/OEI)	UCA	Universidad Centroamericana (Nicaragua)
		UCA	Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador)
		UCN	Unión de Cambio Nacional (Guatemala)
		UCN	Unión del Centro Nacional (Guatemala)
		UCR	Universidad de Costa Rica

UD	Unión Democrática (Guatemala)	Unmis	Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (sigla en inglés)
UE	Unión Europea	UNO	Unión Nacional Opositora (Nicaragua)
UE-AID	Voluntarios de Ayuda de la UE (Unión Europea)	Unoci	Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (sigla en inglés)
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza	Unodc	Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito
UIP	Unión Interparlamentaria	Unops	United Nations Office for Projects Services
UIS	Instituto de Estadística de la Unesco (sigla en inglés)	Unpan	Red de Administración Pública de Naciones Unidas (sigla en inglés)
UNA	Universidad Nacional (Costa Rica)	UP	Partido Unión Patriótica (Panamá)
UNAH	Universidad Nacional Autónoma de Honduras	UP	Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos)
Uncac	Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (sigla en inglés)	Uraccan	Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua
UNCCC	United Nations Convention on Climate Change	URL	Universidad Rafael Landívar (Guatemala)
Unctad	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (sigla en inglés)	URNG	Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Undesa	United Nations Department of Economic and Social Affairs	USAC	Universidad de San Carlos (Guatemala)
UN-DESA	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas	Usaid	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (sigla en inglés)
UNDRR	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (siglas en inglés)	USCIS	Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (siglas en inglés)
UNE	Unidad Nacional de la Esperanza (Guatemala)	USGS	Servicio Geológico de los Estados Unidos (sigla en inglés)
UNES	Unidad Ecológica Salvadoreña	USITC	Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (sigla en inglés)
Unesco	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	USTR	Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (sigla en inglés)
Unfpa	Fondo de Población de las Naciones Unidas (sigla en inglés)	V	
UNGA	Asamblea General de las Naciones Unidas (siglas en inglés)	VA	Valor agregado
Uniapravi	Unión Interamericana para la Vivienda	VaR	Value at risk/valor en riesgo
Unicef	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (sigla en inglés)	VBP	Valor bruto de la producción
Unimer	Unidad de Investigación y Mercadeo S.A.	VIH	Virus de inmunodeficiencia humana
UnIRSE	Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial	WCPA	World Commission of Protected Areas
UNISDR	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (sigla en inglés)	W	
Unisfa	Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (sigla en inglés)	WCRP	Programa Mundial de Investigación sobre el Clima (sigla en inglés)
Unitec	Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras)	WRI	World Resources Institute
Univas	Universidad José Vasconcelos de Oaxaca	WTI	West Texas Intermediate
Unmil	Misión de las Naciones Unidas en Liberia (sigla en inglés)	WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza (sigla en inglés)
		Z	
		ZFE	Zona franca de exportación

Referencias bibliográficas

CAPÍTULO 0. SINOPSIS

- Alfaro Redondo, R. (2025b). *Gráfico 0.7. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región*. PEN, Conare.
- Barquero, A. 2025. *Mapa 0.2 realizado para el capítulo 1. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región*. PEN, Conare.
- Banco Mundial. (2024). *World Development Indicators: DataBank*. World Bank. <https://bit.ly/4ceLgXF>
- Carrión Mena, F. C. (2024). *La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional*. Flasco Ecuador. <https://bit.ly/4jqEv7J>
- Cascante Segura, C. H. (2024). *Equilibrios y diversidades: Centroamérica y República Dominicana frente a los actores globales (2020-2024)*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/9182>
- Castillo, M. (2024). *Acciones de adaptación al cambio climático implementadas en los países de Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9850>
- Cepal. (2025). *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas: CepalSTAT*. <https://bit.ly/3Rt2eIe>
- Chacón Mendoza, D. (2022). Cuaderno 2. Panorama Político-Institucional de Centroamérica y República Dominicana. En: Zovatto.
- Coppedge, M., Gerring, J., Henrik, C., Lindberg, S., Teorell, J., Marquardt, K., Medzhorsky, J., Pemstein, D., Fox, L., Gastaldi, L., Pernes, J., Rydén, O., von Römer, J., Tzelgov, E., Wang, Y., y Wilson, S. (2024). *V-Dem Methodology v14*. Varieties of Democracy (V-Dem) Project.
- Cortés, M. (2025). *Análisis del estado de la democracia en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- De León, C. R. y Martínez, L. 2025. *Inseguridad y políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Echeverría, R. y Fernández, D. (2025a). *Huella ecológica: Sostenibilidad ambiental en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- . (2025b). *Pobreza y distribución de los ingresos en Centroamérica y República Dominicana*. Nota técnica realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Feldmann, A. y Sturino (2024). *Migraciones internacionales en Centroamérica y República Dominicana: flujos, dinámicas y respuesta de las políticas públicas*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9080>
- Fernández, A. (2025). *Educación y formación técnica profesional y desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana: prioridades para la acción*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Flasco. (2002). *Centroamérica en cifras: 1980-2000*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Giatoc, (2024). *Global Organized Crime Index 2023: A fractured world*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Hidalgo, M. *Gráfico 0.3. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región*. PEN, Conare.
- ICAP-UCR. (2025). *Prioridades de adaptación al cambio climático para Centroamérica y República Dominicana. Un acercamiento a partir de la evidencia científica, información geográfica y los escenarios disponibles para la región*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Johanning, J., Roldán, S., Guzmán, S. y Guzmán, A. (2025). *Integración regional en Centroamérica y República Dominicana: evolución reciente y su dimensión no institucional*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Lapop. (Varios años). *Barómetro de las Américas*. Universidad de Valderbilt. www.vanderbilt.edu/lapop
- Levitsky, S. y Way, L. (2004). Elecciones sin democracia: El surgimiento del autoritarismo competitivo, en *Estudios políticos* 24, 159-176
- Mazariegos Rodas, M. (2024). *La democracia en Guatemala: De un ideal de la transición a un ideal en transición*. En von Bogdandy, et al. (Eds).
- Orozco, R. (2025). *Informe sobre experiencias en adaptación al cambio climático para la región Centroamericana y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- PEN. (2008). *Tercer Informe Estado de la Región en Centroamérica en Desarrollo Humano Sostenible*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/8115>
- . (2016). *Quinto Informe Estado de la Región*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/informes/>
- . (2021). *Sexto Estado de la Región 2021: Versión completa*. PEN. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/8115>
- . (2025). *Séptimo Informe Estado de la Región: Implicaciones de vivir en democracia: regímenes y cultura política en Centroamérica y República Dominicana (volumen II)*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-2025>
- PNUD. (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano: Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XX*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Segura, R. (2025). *Gráficos para el capítulo 0. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región*. PEN, Conare. Segura, 2025 con datos de Unesco

- Von Bogdandy, A., Morales Antoniazzi, M., y Ripplinger, A. M. (Eds.). (2024). *América Central: El derecho ante democracias desafiadas*. Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, Fundación Alemana para la Investigación Científica, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. <https://bit.ly/42maIpM>
- Zovatto, D. (2022) *La encrucijada democrática. Cuadernos sobre Centroamérica y República Dominicana*. IDEA.
- CAPÍTULO 1. PANORAMA REGIONAL**
- Adorno, T., Frenkel Brunswik, E., Levinson, D. y Sanford, N. (1950). *The authoritarian personality*. Harper & Row.
- Alfaro Redondo, R., Chinchilla, V. y Guzmán, J. (2021). *Democracias incompletas en Centroamérica: sobrevivencia de los regímenes en riesgo y sus múltiples regresiones políticas*. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/8118>
- Almanza, C. (24 de octubre de 2021). Promulgan en Gaceta Oficial Código Electoral, en *TVN-2*. <https://bit.ly/3EPkWGU>
- Altemeyer, B. (1996). *The authoritarian specter*. Harvard University Press.
- Alvarez, A. (14 de enero de 2023). Tercer aniversario de Gobierno: APG denuncia persecución a periodistas y medios de comunicación, en *La Hora Guatemala*. <https://bit.ly/4jUHCpv>
- Álvarez, S. y Cielo, C. (2023). Circulations and Solidarities in the Darién, en *Report on the Americas* 55 (4).
- Amerise, A. (14 de junio de 2023). Quién es José Rubén Zamora, el reconocido periodista condenado a 6 años de cárcel en Guatemala tras un polémico juicio, en *BBC Mundo*. <https://bit.ly/4hPA85F>
- Banco Mundial. (2016). *LAC Equity Lab: Mercados de Trabajo - Estado de la Juventud (Ninis)*. World Bank. <http://bit.ly/44aFxAf>
- _____. (2024). *World Development Indicators: Data-Bank*. World Bank. <https://bit.ly/4celgXF>
- BBC Mundo. (29 de noviembre de 2023). Qué se sabe de la guerra de Bukele contra la corrupción en El Salvador para la que construirá una nueva cárcel, en *BBC Mundo*. <https://bit.ly/4hXfyzX>
- _____. (20 de agosto de 2024). El gobierno de Nicaragua ordena el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, en *BBC Mundo*. <https://bit.ly/40Z6SC9>
- BCIE. (2022). *Informe Empleo Juvenil y Emprendimiento en América Latina y el Caribe*. Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), BCIE. <https://bit.ly/41Upftt>
- _____. (2024). *Tópicos Selectos de Economía y Desarrollo 002-2023* (OEJ, 002/2023). Ofician del Economista Jefe. <https://bit.ly/4hUVNIY>
- Beteta, H. E., y Moreno Brid, J. C. (2014). *Cambio estructural y crecimiento en Centroamérica y la República Dominicana: Un balance de dos décadas, 1990-2011*. Cepal. <https://hdl.handle.net/11362/36727>
- Brenes, A. (2025). *Mapeo de posiciones de actores clave de la región en relación con la adaptación al cambio climático*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- CAF. (2024). *Informe Anual 2023*. CAF. <https://bit.ly/3RwNFn2>
- Cascante Segura, C. H. (2024). *Equilibrios y diversidades: Centroamérica y República Dominicana frente a los actores globales (2020-2024)*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/9182>
- Cejil. (2021). *Independencia de los poderes judiciales en Centroamérica: Aproximación a partir del análisis de los procesos de selección de magistraturas de las cortes supremas de justicia*. Centro de la Justicia y el Derecho Internacional. <https://bit.ly/4461KiM>
- Cepal. (2024a). *América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo: Transformaciones indispensables y cómo gestionarlas*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/42bTbQV>
- _____. (2024b). *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas: CepalSTAT*. <https://bit.ly/3Rt2eTe>
- _____. (2024c). *Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/3XFiV6W>
- _____. (2024d). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/446mPtp>
- _____. (2024e). *Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2024: Política fiscal para enfrentar los desafíos del cambio climático*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/43BtU5g>
- _____. (2024f). *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2024*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/3FOTx8N>
- Chacón Mendoza, D. (2022). Cuaderno 2. Panorama Político-Institucional de Centroamérica y República Dominicana. En: Zovatto.
- Cortés, M. (2025). *Análisis del estado de la democracia en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Coppedge, M., Gerring, J., Henrik, C., Lindberg, S., Teorell, J., Marquardt, K., Medzihorsky, J., Pemstein, D., Fox, L., Gastaldi, L., Pernes, J., Rydén, O., von Römer, J., Tzelgov, E., Wang, Y., y Wilson, S. (2024). *V-Dem Methodology v14*. Varieties of Democracy (V-Dem) Project.
- Cuevas, D. (1 de agosto de 2023). TSE es investigado por el Ministerio Público en al menos 13 casos diferentes, en *Prensa Libre*. <https://bit.ly/4aXDwc8>
- De León, C. R. y Martínez, L. 2025. *Inseguridad y políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Delcid, M. (27 de mayo de 2023). Corte de Constitucionalidad de Guatemala deja fuera de la carrera presidencial a Carlos Pineda, en *CNN en Español*. <https://bit.ly/40WLqOj>
- Divergentes. (1 de noviembre de 2023). La sacudida en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. *Divergentes*. 1 de noviembre. <https://bit.ly/40Q3jhK>
- Echeverría, R. y Fernández, D. (2025a). *Biodiversidad amenazada en Centroamérica y República Dominicana: Lista roja de especies en peligro*. Nota técnica realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- _____. (2025b). *Estructura y composición de los hogares en Centroamérica y República Dominicana*. Nota técnica realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- _____. (2025c). *Huella ecológica: Sostenibilidad ambiental en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- _____. (2025d). *Pobreza y distribución de los ingresos en Centroamérica y República Dominicana*. Nota técnica realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- El Heraldo. (21 de febrero de 2024). Honduras entre los países con peor libertad de prensa a nivel global, en *El Heraldo*. <https://bit.ly/3ECok8c>
- Expediente Abierto. (2021). *Élites y crimen organizado en Nicaragua*. Insight Crime.
- Fecajud. (2024). *Resiliencia Judicial: Diagnóstico del Estado de la Independencia Judicial en Centroamérica*. Federación Centroamericana de Jueces y Jueces por la Democracia. <https://bit.ly/3QVe3qF>
- Fernández, A. (2025a). *Caracterización de la Población Económicamente Activa, la creación de empleo y la demanda laboral en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- _____. (2025b). *La percepción sobre la Educación y Formación Técnica Profesional en el imaginario de la región Centroamericana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.

- _____. (2025c). *Los resultados de la Educación y Formación Técnica Profesional en la juventud centroamericana participante en la prueba PISA 2022*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- _____. (2025d). *Tendencias y perspectivas de los mercados laborales globales y su relevancia en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Flores, J. (29 de abril de 2024). Un juez por cada 12,485 habitantes tiene a disposición el Poder Judicial, en *El Heraldito*. <https://bit.ly/432GQAJ>
- France 24. (3 de mayo de 2024). Justicia declara legal la candidatura del favorito para elecciones del domingo en Panamá, en *France 24*. <https://bit.ly/3EMKd4y>
- Fundación para el Debido Proceso. (2024). *Renovación de la Corte Suprema en el Salvador: una Corte a la medida del Ejecutivo*. Fundación para el Debido Proceso. <https://bit.ly/4gBsPwV>
- García, J. (03 de mayo de 2024). APG revela que más de 20 periodistas guatemaltecos salieron al exilio, en *Emisoras Unidas*. <https://bit.ly/4i5FysZ>
- García, J.; Romero, S., Kitroeff, N. (22 de junio de 2023). Elecciones en Guatemala: algunos candidatos perdieron antes de la votación, en *The New York Times*. <https://bit.ly/4b9Zhp1>
- González, F. (2021). *Current Trends Trends on Migration and Human Rights*. Rutgers Int'l L. & Hum. Rts. J., 2, 41.
- Goodman, S., Zhang, S., Malik, A., Parks, B., y Hall, J. (2024). AidData's Geospatial Global Chinese Development Finance Dataset. *Scientific Data*, 11(1), 529. <https://doi.org/10.1038/s41597-024-03341-w>
- Hasbun, J. (30 de enero de 2024). República Dominicana avanza contra la corrupción: Transparencia Internacional, en *CNN en Español*. <https://bit.ly/4hToo1F>
- Hidalgo, M. y Alfaro, R. (2025). *Test de identidades ¿Cuál es la posición de las personas de Centroamérica y República Dominicana sobre la democracia?* Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Hoyos, R. de, Rogers, H., & Székely, M. (2016). *Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en búsqueda de oportunidades*. Banco Mundial. <https://bit.ly/3FQ9USw>
- Human Rights Watch. (19 de julio de 2022). Nicaragua: Embestida contra la sociedad civil, en *Human Rights Watch*. <https://bit.ly/4b10zAQ>
- ICAP-UCR. (2025). *Prioridades de adaptación al cambio climático para Centroamérica y República Dominicana. Un acercamiento a partir de la evidencia científica, información geográfica y los escenarios disponibles para la región*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Icefi. (2023a). *Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios en Centroamérica*. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. <https://bit.ly/3DQnvZx>
- _____. (2023b). *Panorama de las finanzas públicas en Centroamérica-2023*. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. <https://bit.ly/4hXzIJM>
- IEA. (2024). *CO2 Emissions in 2023 – Analysis*. International Energy Agency. <https://bit.ly/3Y924cU>
- IIDH. (2018). *La experiencia de las veedurías sociales en la reducción de la corrupción y en el aumento de la transparencia*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Infosegura. (2023). *Centroamérica, análisis sobre la situación de la violencia homicida*. PNUD-Infosegura. <https://bit.ly/3X17Uwr>
- Irias, G. (2024). *Las redes del tráfico de influencias en el Poder Judicial hondureño y la urgencia de reformas sustantivas*. Cespada. <https://bit.ly/3XIFNT3>
- Izquierdo, A., Robles, E. A., y Troncoso, W. T. (2024). *Repensar la jubilación: Los sistemas de pensiones en América Latina después de COVID-19*. Resumen Ejecutivo. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0012979>
- Johanning, J., Roldán, S., Guzmán, S. y Guzmán, A. (2025). *Integración regional en Centroamérica y República Dominicana: evolución reciente y su dimensión no institucional*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- La Tribuna Honduras. (26 de mayo de 2023). La ONU registra 53 casos de agresiones contra periodistas en Honduras en 2023, en *La Tribuna Honduras*. <https://bit.ly/3EF0uXF>
- Lapop. (Varios años). *Barómetro de las Américas*. Universidad de Valderbilt. www.vanderbilt.edu/lapop
- Madrigal, L. (14 de octubre de 2022). Sala IV: Ejecutivo violentó libertad de prensa al ordenar cierre de Parque Viva, en *Delfino.cr*. <https://bit.ly/3Eyyrei>
- Mariani. R. (Cord.). (2007). *Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina*. PNUD. <https://bit.ly/4hRUX0j>
- Martínez Franzoni, J. y Sánchez Ancochea, D. (2019). *La búsqueda de una política social universal en el Sur: actores, ideas y arquitecturas*. Editorial UCR.
- McMann, K., Seim, B., Teorell, J., y Lindberg, S. (2016). *Why Low Levels of Democracy Promote Corruption and High Levels Diminish It*. <https://bit.ly/4j75KUG>
- Mideplan. (2020). *Cooperación Internacional en Costa Rica 2019*. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. <https://bit.ly/44e8GdI>
- _____. (2022). *Cooperación Internacional en Costa Rica 2021*. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. <https://bit.ly/43uSsNb>
- _____. (2023). *Cooperación Internacional en Costa Rica 2022*. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. <https://bit.ly/3EFBAQ6>
- _____. (2024). *Cooperación Internacional en Costa Rica 2023*. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. <https://bit.ly/3ROGMKK>
- MOE/OEA. (2020). *Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la OEA en República Dominicana*. Organización de los Estados Americanos.
- Monge González, R. (2023). *Análisis de los flujos de comercio de los países centroamericanos según su régimen de producción y destino: Intensidad e importancia relativa del comercio intraindustria en el comercio intrarregional*. Cepal. <https://bit.ly/4iU8eGh>
- Murillo, R. (29 de mayo de 2023). Aprobada reforma para que las votaciones de diputados sean públicas, en *Amelia Rueda*. <https://bit.ly/3CT1WH9>
- Nord, M., Lundstedt, M.; Altman, D., Angiolillo, F., Borella, C., Fernandes, T., Gastaldi, L., Good, A., Natsika, N., Lindberg, S. 2024. *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*. V-Dem Institute.
- O'Donnell, G. 2007. "Hacia un estado de y para la democracia". En: Mariani (cord.).
- _____. 2010. *Democracia, agencia y estado: teoría con intención comparativa*. Prometeo libros.
- OCDE. (2024). *Compendio estadístico*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. <https://www.oecd.org/en/data.html>
- OIM. (2024). *Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024*. Organización Internacional para las Migraciones. <https://bit.ly/4iNFmIJ>
- Olade. (2023). *Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2023*. Organización Latinoamericana de Energía. <https://bit.ly/41VWht>
- OMCT. (2024). *Guatemala: Persecución, criminalización y represión transnacional de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala*. Organización Mundial Contra la Tortura <https://bit.ly/3QVJOQn>
- ONU. (2020). *International Migrant Stock, 2020*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations. <https://bit.ly/4hX2utQ>
- OPS. (2021). *Tendencias de las tasas de mortalidad prematura evitable ajustadas por edad y desglosadas por sexo a nivel regional, subregional y de país, Región de las Américas, 2000 2019*. Organización Panamericana de la Salud. <https://hia.paho.org/es/visualizaciones>

- Organización Mundial Contra la Tortura. (2024). *Guatemala: Persecución, criminalización y represión transnacional de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala*. Organización Mundial Contra la Tortura. <https://bit.ly/3QVJOQn>
- Orozco, R. (2025). *Informe sobre experiencias en adaptación al cambio climático para la región Centroamericana y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Paul, M. (2022). ¿Quiénes desean un líder autoritario en América Latina y el Caribe?, en *Perspectivas* 155. <https://bit.ly/3QqSD4k>
- Paz, J. (5 de noviembre de 2023). El Poder Ejecutivo domina el sistema judicial en Nicaragua, en *CNN en Español*. <https://bit.ly/4aW2lFj>
- PEN. (2008). *Tercer Informe Estado de la Región en Centroamérica en Desarrollo Humano Sostenible*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/8115>
- _____. (2011). *Cuarto Informe Estado de la Región en Centroamérica en Desarrollo Humano Sostenible*. Programa Estado de la Nación-Conare.
- _____. (2016). *Quinto Informe Estado de la Región*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/informes/>
- _____. (2019). *Informe Estado de la Nación 2019*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/informes/>
- _____. (2021). *Sexto Estado de la Región 2021: Versión completa*. PEN. <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/8115>
- _____. (2024a). *Informe Estado de la Nación 2024*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/informes/>
- _____. (2024b). *Séptimo Informe Estado de la Región: Perfil educativo y competencias para impulsar el desarrollo en Centroamérica (volumen I)*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9272>
- _____. (2025). *Séptimo Informe Estado de la Región: Implicaciones de vivir en democracia: regímenes y cultura política en Centroamérica y República Dominicana (volumen II)*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-2025>
- Pérez, P., Quesada, A., Giro, P. (2025). *Indicadores de cambio climático a nivel territorial para los países de Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- PNUD. (2019). *Human Development Report 2019*. United Nations. <https://bit.ly/4hWa0Fm>
- Proyecto Estado de la Nación. (1999). *Primer Informe del Estado de la Región*. Proyecto Estado de la Nación-PNUD.
- Reporteros sin Fronteras. (2024). *Índice de Libertad de Prensa*. Reporteros sin Fronteras. <https://rsf.org/es/clasificacion>
- Rivas Valdivia, J. C., Gilbert, R., González, E., López Cabrera, J. A., Iraheta, J. M., Matos de Oliveira, A. L., Orozco, R., Padilla, R., Romero, I., y Santamaría, J. (2024). *Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2023 y perspectivas para 2024*. Cepal.
- Rodríguez, Y. (2024). “Presentan anteproyecto de modificación a la Ley de Libertad de Expresión”. En: <https://bit.ly/4gLm8nu>
- Rosenberg, M. y Solis, L. G. (2007). *The United States and Central America*. Contemporary Inter-American Relations.
- Salazar, C. (2021). *Análisis del marco jurídico del SICA a 30 años del Protocolo de Tegucigalpa*. SICA. <https://bit.ly/44f4af0>
- Schwartz, Rachel A., y Isaacs, Anita. 2023. How Guatemala Defied the Odds, en *Journal of Democracy* 34 (4).
- Selee, A., Lacarte, V., Ruiz, A. G., Chaves González, D., Mora, M. J., y Tanco, A. (2023). *El Cambio de los Patrones y Políticas Migratorias en las Américas*. Migration Policy Institute. <https://bit.ly/4hZOqjt>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Cambridge University Press
- SICA. (2023). *Gaceta Oficial Digital del SICA N.º 074-2023*. Sistema de Integración Centroamericana. <https://bit.ly/4leyrAI>
- _____. (2024a). *Institucionalidad Regional en cifras*. SICA. <https://bit.ly/3YhNzn9>
- _____. (2024b). *Proyectos del pilar: Seguridad democrática*. <https://bit.ly/4lRs58>
- _____. (2024c). *Proyectos Regionales*. <https://www.sica.int/consulta/proyectos>
- Sides, J., Tausanovitch, C., y Vavreck, L. (2022). *The Bitter End: The 2020 Presidential Campaign and the Challenge to American Democracy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691228914>
- Sieca. (2024). *Sistemas de Estadísticas y Análisis de Mercado de Comercio de Centro América*. Secretaría de Integración Económica Centroamericana. <https://www.sec.sieca.int/>
- Small Arms Survey. (2018). *Annual Report 2018*. Small Arms Survey. <https://www.smallarmssurvey.org/contact>
- Sol, R. (2023). Integración centroamericana, una (re)visión crítica y estratégica, en *Revista Con-Secuencias* 4-62.
- Solís, M. 2024. *¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática*. Editorial UCR. <https://bit.ly/4cgMZMd>
- Satterthwaite, M. (2023). *La promesa del empoderamiento jurídico para avanzar en el acceso a la justicia para todos*. Asamblea General de las Naciones Unidas. <https://bit.ly/3FU20HJ>
- Studdert Kennedy, P. (5 de diciembre de 2019). Investigan otra red de tráfico de órganos en Costa Rica, en *InSight Crime*. <https://bit.ly/4aWEzJp>
- Sustainable Mobility for All. (2022). *Mobility Performance at a Glance: Country Dashboards 2022*. Sustainable Mobility for All. <https://bit.ly/3DSVerF>
- SWI swissinfo.ch (7 de noviembre de 2024). El Gobierno de Nicaragua denuncia y rechaza «usurpación» de la Secretaría General del SICA, en *SWI swissinfo.ch* <https://bit.ly/3XL787f>
- The Economist. (2024). *Democracy Index 2023: Age of conflict*. Economist Intelligence Unit. <https://bit.ly/3Qk3Sf0>
- Torrijano, E. Centeno, S.P. y Arroyo, J. *Panorama energético de Centroamérica y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Tristán, R. (15 de diciembre de 2021). Acoso y derribo a las ONG en Centroamérica, en *El País*. <https://bit.ly/3QiHrqs>
- Ulate, E. N. (2022). Bicentenario centroamericano y Derecho Comunitario: La integración regional como política de Estado, en *Revista de Ciencias Jurídicas* 157, 1-47. <https://doi.org/10.15517/rcj.2022.50530>
- Unece. (2025). *Passenger car rate*. Data Portal. United Nations Economic Commission for Europe. <https://bit.ly/4iQul01>
- Unesco. (2025). *UIS Statistics*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://databrowser.uis.unesco.org/>
- ONUCDD. (2024). *World Drug Report 2024*. United Nations Office on Drugs and Crime <https://bit.ly/40rMUBw>
- Vrush, J. y Martínez, R. (2021). *Why fighting corruption matters in times of COVID-19*. Transparencia Internacional. <https://bit.ly/43F7eBa>
- Wallace, A. (5 de octubre de 2020). El presidente de El Salvador llama ‘héroes’ a policías acusados de ejecutar pandilleros, en *BBC*.
- Walter, K. (2024). *Fuerzas armadas y democracia en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9438>
- WJP. (2024). *Rule of Law Index 2024*. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>
- Yépez García, A., & Mori, R. A. J. (2024). *Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y El Caribe*. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0012971>

- Youngs, Richard. (2022). *Rebuilding European Democracy: Resistance and Renewal in an Illiberal Age*. I.B. Tauris.
- Zovatto, D. (2022) *La encrucijada democrática. Cuadernos sobre Centroamérica y República Dominicana*. IDEA.
- CAPÍTULO 2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA**
- Aguilera, A. y Martínez, R.M. (2025). *Movilidad climática: conceptos, datos y retos para la política pública*. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Artiga, R. (2019). *Gobernanza e Integración Ambiental de la CCAD. Reporte a la CMNUCC*.
- Banco Mundial. (2023a). Informe sobre el desarrollo mundial 2023: Migrantes, refugiados y sociedades, cuadernillo del panorama general. Banco Mundial. <https://bit.ly/42gXTwS>
- _____. (2023b). *Informe sobre clima y desarrollo del país Honduras*. Banco Mundial. <https://bit.ly/42ecDwF>
- BID. (15 de abril de 2023). Reunión de Alcaldes del BID 2023: ¿Cómo financiar el desarrollo sostenible de las ciudades? Ciudades Sostenibles. Blog BID. <https://bit.ly/4hUEW93>
- Batía, K. T., Vecchio, G. A., Knutson, T. R., Murakami, H., Kossin, J., Dixon, K. W., & Whitlock, C. E. (2019). Recent increases in tropical cyclone intensification rates, en *Nature Communications* 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08507-2>
- Black, S., Parry I., Roaf J. y Zhunussova., K. (2021). Not yet on track to net zero: the urgent need for greater ambition and policy action to achieve Paris temperature goals, en *IMF Staff Climate Note* 2021/005.
- Brenes A. (2014). *Perspectivas del deterioro del recurso hídrico en Centroamérica en contextos de cambio: Una lectura desde el desarrollo*. UICN.
- _____. (2024a). *Principales factores de riesgo asociados al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9848>
- _____. (2024b). *Prioridades de política pública y acción regional para la adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9849>
- _____. (2025). *Mapeo de posiciones de actores clave de la región en relación con la adaptación al cambio climático*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Burke, M., S. Hsiang y E. Miguel. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production, en *Nature* (527). <http://dx.doi.org/10.1038/nature15725>
- Castro L, Sova CA, Martinez D, Saravia, D. (2016). *Mapeo de la influencia de los actores sociales de diferente nivel para Centroamérica: cambio climático y agricultura*. Programa de investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).
- Castillo, M. (2024). *Acciones de adaptación al cambio climático implementadas en los países de Centroamérica y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare. <https://hdl.handle.net/20.500.12337/9850>
- CCAD. (2018). *Estrategia Regional de Cambio Climático actualizada. Plan de Acción 2018-2022*. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Sistema de la Integración Centroamericana.
- _____. (2021). *Estrategia Regional Ambiental Marco (ERAM) 2021-2025*. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Sistema de la Integración Centroamericana.
- Cepal. (2013). *Cambio Climático en Centroamérica: Guía de Navegación*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/4jBy6qv>
- _____. (2023). *Criterios para la integración del cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos de inversión*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- _____. (2024a). *Eventos Naturales Extremos y Desastres en América Latina y el Caribe 1990-2022. Una revisión estadística*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/4iIRis1>
- _____. (2024b). *La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2023: necesidades de financiamiento y herramientas de política para la transición hacia economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al cambio climático*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://bit.ly/4j93kok>
- Center For International Earth Science Information Network-CIESIN-Columbia University. (2016). *Global Urban Heat Island (UHI)*. NASA Socio-economic Data and Applications Center (SEDAC). <https://doi.org/10.7927/H4H70CRF>
- Chalise, D. R., Aiyer, A., y Sankarasubramanian, A. (2021). Tropical cyclones contribution to seasonal precipitation and streamflow in the southeastern and southcentral United States, *Geophysical Research Letters* 48(15). <https://doi.org/10.1029/2021GL094738>
- Clement, Viviane; Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Adamo, Susana; Schewe, Jacob; Sadiq, Nian; Shababat, Elham. (2021). *Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/36248>
- CMNUCC. (2011). *Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16° periodo de sesiones*. Naciones Unidas. <https://bit.ly/4iaE6p2>
- _____. (2016). Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 22° periodo de sesiones. Naciones Unidas. <https://bit.ly/4i5qRpx>
- ECLAC. (2014). *Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean: Paradoxes and challenges of sustainable development*. Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- _____. (2022). Repercussions in Latin America and the Caribbean of the war in Ukraine: How should the region face this new crisis?, en *United Nations* (1): 06-06.
- FAO. (1990). *Forest Resources Assessment 1990*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/4/v5695e/v5695e00.htm>
- _____. (2007). *Informes sobre recursos mundiales de suelos: Secuestro de carbono en tierras*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/4/y5738s/y5738s.pdf>
- _____. (2003). *Centroamérica frente al cambio climático*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- _____. (2024). *Adaptación basada en Ecosistemas para aumentar la resiliencia climática en el Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FMI. (2023). *Informe anual del FMI 2023: Compromiso con la colaboración*. Fondo Monetario Internacional. <https://www.imf.org/ar2023>
- GIZ. (2019). *Monitoreo de Financiamiento Climático en Entidades Financieras Supervisadas por SUGEF en Costa Rica: Guía para el reporte de información sobre financiamiento climático en Entidades Financieras supervisadas por SUGEF en Costa Rica*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. <https://bit.ly/3E1akF9>
- Gogoi, Elizabeth, Dupar, Mairi, Jones, Lindsey, Martinez, Catalina, y McNamara, Laura. (2014). Enablers for Delivering Community-Based Adaptation at Scale, en *Climate and Development* 6(4), 368-371.
- Guerdat, P., Masud, S., & Beauchamp, E. (2023). *Reporting on progress in National Adaptation Plan processes: An analysis (NAP Global Network report)*. International Institute for Sustainable Development. <https://bit.ly/3RwKtI7>
- Hart, R. (2024). *Climate change could cut months from life expectancy, research warns*. Forbes. <https://www.forbes.com>
- Hardoy, J. y Romero Lankao, P. (2011). Latin American cities and climate change: challenges and options to mitigation and adaptation responses, en *Current Opinion in Environmental Sustainability* 3(3), 158-163. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.01.004>

- Holmo, S. L. (2021). *Agroforestry project sows seeds of hope in drought-hit Honduras*. Central América. Global Agroforestry.
- ICAP. (2023). *Informe de actividades proyecto INCENTIVA*. Instituto Centroamericano de Administración Pública
- _____. (2025). *Prioridades de adaptación para Centroamérica y República a partir de la evidencia científica y los escenarios de cambio climático para la región*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- IDMC. (2024). *GRID 2024: Global Report on Internal Displacement*. Centro de Monitoreo de Deslizamientos Internos. <https://doi.org/10.55363/IDMC.DAKY2849>
- IICA. (2017). *Planificando para la adaptación al cambio climático en la agricultura. Análisis participativo del estado actual, retos y oportunidades en América Central y Sur*. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects*. Cambridge University Press. <https://bit.ly/3RmAHIN>
- _____. (2019). *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157964.007>
- _____. (2021). *Summary for Policymakers*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009157896.001.
- _____. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009325844.
- Imbach, P., Chou, S. C., Lyra, A., Rodrigues, D., Rodriguez, D., Latinovic, D., Siquiera, G., Silva, A., Gafolo, L., & Georgiou, S. (2018). Future climate change scenarios in Central America at high spatial resolution, en *PLoS ONE* 13(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193570>
- Jobst, A. y Pazarbaşıo lu, C. (2019). *Greater Transparency and Better Policy for Climate Finance*. SRPN.
- Juran, S., Tatem, A. J., y de la Rúa, L. (2024). Evaluación de la exposición de poblaciones y hospitales del aumento del nivel del mar en las zonas costeras bajas de América Latina y el Caribe, *Notas de Población* (119). <https://bit.ly/449gXz2>
- Kahn, M. E., Mohaddes, K., Ng, R. N., Pesaran, M. H., Raissi, M., & Yang, J. C. (2019). *Long-term macroeconomic effects of climate change: a cross-country analysis*. Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER).
- Lastra Landa, Dafne E. & Grados Bueno, Claudia V. (2021). Climate change might have caused our small harvest: Indigenous vulnerability, livelihoods, and environmental changes in lowland and high jungle indigenous communities in Peru, en *Journal of Environmental Studies and Sciences* 12(15/09/2021), 1-16.
- Lizano Araya, M. A., y Lizano-Rodríguez, O. G. (2022). Creación de escenarios ante el aumento del nivel del mar, para las localidades de Moín y Cahuita, Limón, Costa Rica, en *Revista Geográfica de América Central* 1(68), 103-126. <https://doi.org/10.15359/rgac.68-1.4>
- _____. (2023). Escenarios de inundación ante el aumento del nivel del mar por cambio climático, para las playas del Coco, Tamarindo y Sámara, Costa Rica, en *Entorno Geográfico* 25, 1-24. <https://doi.org/10.25100/eg.v0i25.11903>
- López, K. R. (2024). *Guatemala: En Iztapa, el mar se traga lentamente el cementerio del pueblo*. Plaza Pública. <https://bit.ly/43EWnqK>
- Luna, M., Ledwell, C. y Bankole, O. (2023). *Progress on Vertical Integration in National Adaptation Plan Processes. Analysis of strategic linkages between national and sub-national levels*. IISD. <https://bit.ly/43EvIum>
- Marengo, J. A., Lincoln, A., Ambrizzi, T., Andrea, Y., Barreto, N. y Ramos, A. (2020). Trends in extreme rainfall and hydrogeometeorological disasters in the Metropolitan Area of São Paulo, en *Annals of the New York Academy of Sciences* 1472(1), 5-20.
- Masson Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S. Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, M., Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, y B. Zhou (Eds.), (2022). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.013>
- Matul, D. (2019). La evolución de la agenda de adaptación al cambio climático en Costa Rica, en *Boletín del observatorio de la Política Pública Internacional* 72 (Julio-Agosto), 2-10.
- Mesa G., J y Caicedo, S. (2020). *Introducción a la estadística descriptiva*. Editorial Universidad de Nariño.
- Milan, A. y Ruano, S. (2014). Rainfall variability, food insecurity and migration in Cabrican, Guatemala, en *Climate and Development* 6(1), 27-37.
- Myrick, D. R. (2013). A Logical Framework for Monitoring and Evaluation: A Pragmatic Approach to M&E, en *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4(6): 423-428.
- Muñoz, R. (2025). *Mapas elaborados para el Capítulo de adaptación al cambio climático: retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana*. Contribución realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Nap Global Network. (2017). *Financiamiento para procesos de Planes Nacionales de Adaptación (PNAD): Contribuir al logro de los objetivos de adaptación de la contribución nacional (CDN)*. International Institute for Sustainable Development. <https://bit.ly/3Rwae1v>
- Nurse, L., McLean, R., Agard, J., Briguglio, L., Duvat Magnan, V., Pelesikoti, N., Tompkins, E. y Webb, A. (2014). *Small islands*. Cambridge University Press. <https://bit.ly/3XIiwMk>
- OECD. (2023). *Towards Climate Resilience and Neutrality in Latin America and the Caribbean*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/278e52e8-en>
- OIM. (2021). *La movilidad humana derivada de desastres y el cambio climático en América Central*. Organización Internacional para las Migraciones. <https://bit.ly/4lIPBga>
- OMM. (2024). *Estado del clima en América Latina y el Caribe 2023*. Organización Meteorológica Mundial. <https://public.wmo.int/>
- Omukuti, J. (2020). Challenging the Obsession with Local Level Institutions in Country Ownership of Climate Change Adaptation, en *Land Use Policy* 94: 104525.
- Omukuti, J., Barrett, S., White, P. C. L., Marchant, R., y Averchenkova, A. (2022). The green climate fund and its shortcomings in local delivery of adaptation finance, en *Climate Policy* 22(9-10), 1225-1240. <https://bit.ly/42m6UF5>
- Orozco. (2025). *Informe sobre experiencias en adaptación al cambio climático para la región Centroamericana y República Dominicana*. Investigación realizada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.
- Ortez, K. (9 de mayo de 2024). Impacto de cambio climático en Honduras se refleja en aumento de nivel del mar, humo y olas de calor, en *criterio.hn*. <https://bit.ly/3E6KDMw>
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, en *Land Economics* 68(3): 08-1992, 354-357.
- Pelling, M., High, C., Dearing, J. and Smith, D. (2008). Shadow Spaces for Social Learning: A Relational Understanding of Adaptive Capacity to Climate Change within Organizations, en *Environment and Planning A* (40), 867-884. <https://doi.org/10.1068/a39148>
- PEN. (2003). *Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá*. Proyecto Estado de la Región-PNUD.
- _____. (2011). *Cuarto Informe Estado de la Región*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores.
- _____. (2025). *Estadísticas de Centroamérica*. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. <https://estadisticas.estadonacion.or.cr/>
- PNUD. (3 de mayo de 2024). *Panamá impulsa la transversalización del cambio climático en la inversión pública*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. <https://bit.ly/44IdIqAj>
- Pérez, P., Quesada, A. y Girot, P. (2025). *Indicadores de cambio climático a nivel municipal/cantonal, provincial/departamental y nacional para los países de América Central y República Dominicana*. Investigación preparada para el Séptimo Informe Estado de la Región. PEN, Conare.

- Quesada Hernández, L. E., Calvo Solano, O. D., Hidalgo, H. G., Pérez-Briceño, P. M., y Alfaro, E. J. (2019). Dynamical delimitation of the Central American Dry Corridor (CADC) using drought indices and aridity values, en *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 43(5), 627–642. <https://doi.org/10.1177/0309133319860224>
- Resurrección, B.P. (2021). *Gender, Climate Change and Disasters: Vulnerabilities, Responses, and Imagining a More Caring and Better World*. UN-Women. <https://bit.ly/4iV93UI>
- Segura, L., van Zeijl Rozema, A. y Martens, P. (2022). Climate change adaptation in Central America: A review of the national policy efforts. Latin American Policy, en *Wiley Online Library* (6 March 2022), 276-327.
- Seneviratne, S. I., Zhang, X., Adnan, M., Badi, W., Dereczynski, C., Di Luca, A., Ghosh, S., Iskandar, I., Kossin, J., Lewis, S., Otto, F., Pinto, I., Satoh, M., Vicente-Serrano, S. M., Wehner, M., y Zhou, B. (2021). Weather and climate extreme events in a changing climate. En: Masson Delmotte et al. (eds).
- Servicio de Cambio Climático Copernicus. (2025). *Resumen Anual del Clima 2024: Aspectos destacados del clima mundial 2024*. <https://bit.ly/42qvlCp>
- SICA. (2023). *Centro Virtual de Tiempo Atmosférico Severo (CVTAS)*. Sistema de la Integración Centroamericana. <https://bit.ly/4lgAlRm>
- Swiss Re Group. (2021). *Annual Report 2021*. Swiss Re Group.
- UN-Habitat. (2012). *State of Latin American and Caribbean Cities 2012: Towards a New Urban Transition*. Naples. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).
- Van der Borgh, R. y otros (2023). *Los efectos del cambio climático en la actividad económica de América Latina y el Caribe: una perspectiva empírica*. Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/83) Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Virji, H., Padgham, J. y Seipt, C. (2012). Capacity building to support knowledge systems for resilient development — approaches, actions, and needs, en *Current Opinion in Environmental Sustainability* (4), 115–121. 10.1016/j.co-sust.2012.01.005.
- White, E. (28 de octubre de 2022). *What is climate change adaptation and why is it a priority at COP27?* World Economic Forum.
- Woodruff, J., Irish, J. y Camargo, S. (2013). Coastal flooding by tropical cyclones and sea-level rise, en *Nature*. 504: 04-12-2013, 44-52.
- World Bank. (2024). *Dominican Republic: Climate Migrants. Country Report*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/41473>
- Zea, M.T. (6 de agosto de 2024). *Panamá: Reubicación de una población desplazada por el aumento del nivel del mar amenaza importante área protegida*. Mongabay Latam. <https://bit.ly/4lwNxlw>



PROGRAMA
ESTADO DE LA NACIÓN



UN INFORME DESDE Y PARA CENTROAMÉRICA
Y REPÚBLICA DOMINICANA

PREPARADO POR



PROGRAMA
ESTADO DE LA NACIÓN



TEC | Tecnológico
de Costa Rica



UNED



AUSPICIADO POR



Rockefeller
Brothers Fund
Philanthropy for an Interdependent World



@EstadoNacion



EstadoNacion



@EstadoNacion



Programa Estado de la Nación



programaestadonacion